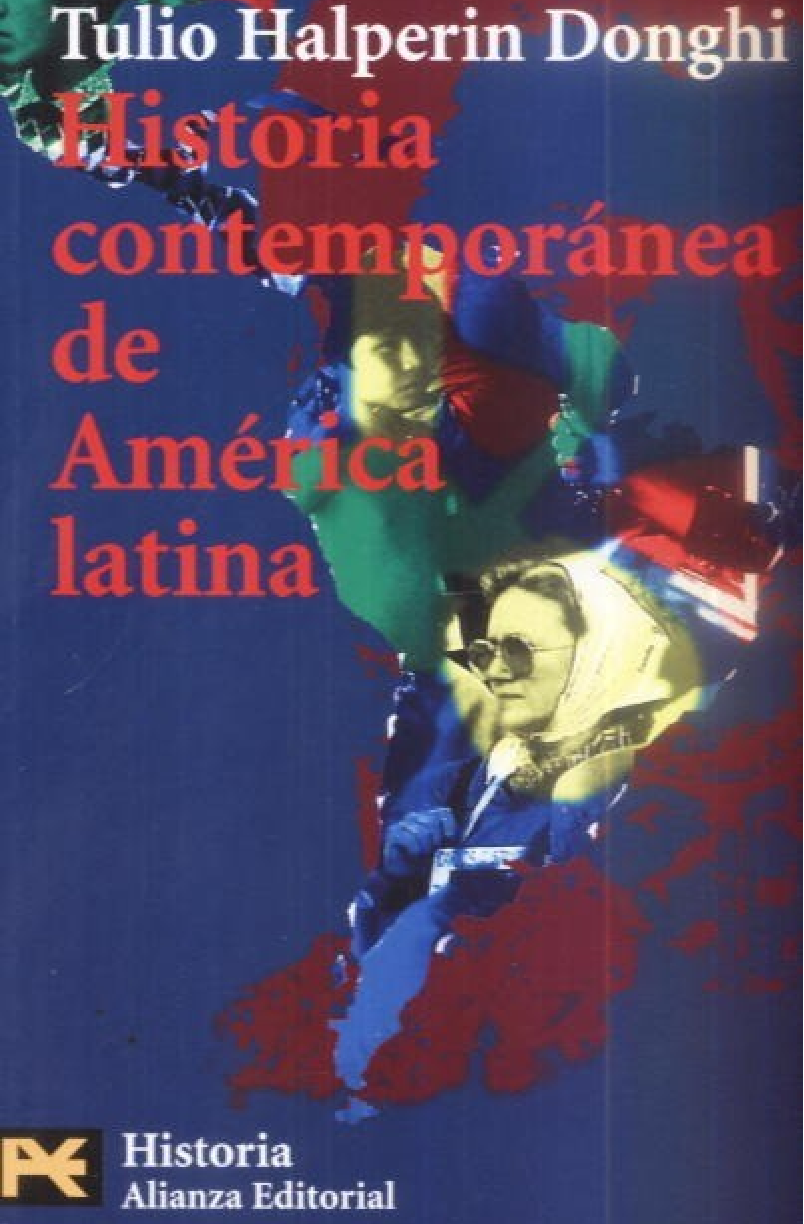

Tulio Halperin Donghi
Historia contemporánea de América latina
Historia
Alianza Editorial

Tulio Halperin Donghi

Historia contemporánea de América latina



El libro de bolsillo
Historia
Alianza Editorial

Humanidades

Primera edición en «El libro de bolsillo»: 1969
Decimotercera edición, revisada y ampliada: 1996
Primera edición en «Área de conocimiento: Humanidades»: 1998
Sexta reimpresión: 2005

Diseño de cubierta: Alianza Editorial

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15;
28027 Madrid; teléfono 91 393 88 88
www.alianzaeditorial.es
ISBN: 84-206-3515-4
Depósito legal: M. 25.540-2005
Fotocomposición e impresión: EFCA, S.A.
Parque Industrial «Las Monjas»
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Printed in Spain

Prólogo a la presente edición

Publicada por primera vez en versión italiana en 1967, esta *Historia contemporánea de América latina* requería ya por esa razón una ampliación destinada a integrar en ella el examen de las dos décadas largas transcurridas desde entonces. Bien pronto se hizo claro que ello no era suficiente, ya que lo ocurrido en los últimos veinte años largos ilumina con una luz distinta las etapas inmediatamente anteriores en la historia latinoamericana. En consecuencia, mientras para los primeros cinco capítulos de la versión original me limité a modificaciones menores, que reflejaban sobre todo los avances de la indagación histórica en algunos temas específicos, me decidí a reemplazar el capítulo VI y final, que cubría la etapa posterior a la crisis de 1929, por otro nuevo, consagrado a las tres décadas entre aquélla y ese otro momento de ruptura que es la Revolución cubana, antes de agregarle otro nuevo sobre la etapa abierta con ésta.

Esa reestructuración parece tanto más necesaria porque, desde una perspectiva histórica –inasequible cuando se observan las cosas demasiado de cerca–, la Latinoamérica de la segunda postguerra aparece hoy dotada de un perfil más nítido de lo que se podía advertir hace dos décadas. Pero hay todavía otras razones que la hacen aconsejable y estas últimas la tornan a la vez problemática. Este libro de 1967 está inevita-

blemente marcado por el *Zeitgeist* de su momento de origen: el problema no es entonces que la imagen que propone del pasado entonces inmediato aparece quizá demasiado borrosa, sino que la que implícitamente hace suya del presente y el futuro resulta hoy insostenible.

Estas dos décadas, en efecto, han disipado el optimismo reinante durante la más avasalladora era de prosperidad conocida por el mundo desarrollado y han hecho en parte inactual la impaciencia que no poder participar plenamente de ella despertaba en su periferia; ambas actitudes subtendían más de lo que entonces se advertía tanto los diagnósticos acerca del pasado como las propuestas para el presente: las teorías del desarrollo y las revolucionarias que por entonces disputaban el terreno se apoyaban unas y otras en anticipaciones del futuro que se les aparecían dotadas de más firme certidumbre que la más escrupulosa reconstrucción histórica y que mostraban cercana la meta a la cual veían encaminarse el proceso histórico, meta cuya conquista vendría a justificar retrospectivamente el telar de desdichas que éste en buena medida había sido. Ni una ni otra de esas fes rivales dominaba sin duda esta tentativa de historia contemporánea de Latinoamérica, pero en la relectura se me hace evidente que los supuestos que ambas compartían sin saberlo, porque eran parte de la atmósfera en que habían surgido, subtendían también un texto demasiado cauteloso para arriesgarse a la profecía.

Aunque ésta fuese cuidadosamente esquivada, no dejaba de hacerse sentir, apenas la narración histórica se acercaba a los tiempos actuales, esa tan curiosa combinación de optimista seguridad en el futuro e impaciencia ante la dificultad para alcanzarlo en la que hoy reconocemos sin dificultad un rasgo de época, y que hacía que aun la más cruda descripción del impacto alcanzado por problemas aparentemente insolubles estuviese como iluminada por la implícita confianza en que la solución llegaría en la próxima vuelta del camino. ¿Es necesario decir que de esa confianza queda muy poco en la versión que aquí se ofrece, que sin duda está a su vez marcada con el

sello de un pasado más reciente, que cuenta entre las etapas más trágicas de una historia que abunda en ellas?

Ese inevitable cambio de perspectiva no ha llevado por cierto a proponer como nueva moraleja para la exploración del pasado latinoamericano a ninguna de las hoy tan prudentes y favorecidas por la desencantada sabiduría que ha heredado de las alucinadas fes de hace veinte años la ambición de guiar la marcha de Latinoamérica hacia el futuro. Por el contrario, la única que quizá alcanzaría a proponer es otra más negativa: a saber, que en Latinoamérica, más aún que en otras regiones que han logrado sedimentar un perfil más preciso a través de una experiencia histórica más prolongada, la noción de que la consumación de los tiempos nos está esperando tras el próximo recodo en su ruta histórica es necesariamente engañosa; si sus peligros como fuente de inspiración política son ya patentes para todos, los que ofrece como guía para la exploración del pasado no son menos reales.

TULIO HALPERIN DONGHI
Berkeley, junio de 1988

Prólogo a la primera edición

Una historia de Latinoamérica independiente: he aquí un tema problemático. Problema es ya la unidad del objeto mismo; el extremo abigarramiento de las realidades latinoamericanas suele ser lo primero que descubre el observador extraño; con cautela acaso recomendable, Lucien Febvre titulaba el volumen que los *Annales* dedicaron al subcontinente *À travers les Amériques latines.* ¿Las Américas latinas, entonces, tantas como las naciones que la fragmentación postrevolucionaria ha creado? He aquí una solución que tiene sobre todo el encanto de la facilidad: son muchos los manuales que la prefieren, y alinean diligentemente una veintena de historias paralelas. ¿Pero la nación ofrece ella misma un seguro marco unitario? Cuando Simpson quiso recoger en un libro el fruto de decenios de exploración admirablemente sagaz de la historia mexicana le puso por título *Many Mexicos;* estos muchos Méxicos no eran tan sólo los que van desde el esplendor indígena hasta la revolución del siglo XX; también son los que una geografía atormentada y una historia compleja hacen subsistir lado a lado sobre el suelo mexicano. La geografía antes que la historia opone entonces a la meseta mexicana, de sombría vegetación, el desierto y la costa tropical; la que en otras naciones está en el punto de partida de diferenciaciones no me-

nos profundas: así como ocurría con las Américas latinas, el plural parece imponerse también, contra toda gramática, para reflejar los desconcertantes contrastes aun de países relativamente pequeños, como el Ecuador o Guatemala...

Problema es también la posibilidad de una consideración propiamente histórica del tema: aun sin seguir el ejemplo de quienes buscando (por caminos acaso demasiado fáciles) subrayar la originalidad latinoamericana, niegan que Latinoamérica tenga en rigor historia, es preciso admitir que, en cuanto a ciertos planos de la realidad social, la historia se mueve acaso más despacio aquí que en otras partes. De allí el avance de los exámenes ahistóricos de la realidad hispanoamericana pasada o presente; ese avance, a ratos excesivo y prepotente, si por una parte complementa las perspectivas de una *histoire événementielle* que en América latina no suele ser menos intelectualmente perezosa que en otras comarcas, no está tampoco exento de aspectos negativos; el geógrafo, el sociólogo, el antropólogo social, al ignorar la dimensión histórica de los problemas que les interesan, corren riesgo de entenderlos muy mal... No reduzcamos, sin embargo, el problema a una querella de especialistas sensibles a las limitaciones ajenas más que a las propias: la gravitación de esas ciencias del hombre que se diferencian de la historia en cuanto ponen el acento en el estudio y descripción de complejas estructuras -examinadas al margen del proceso temporal al que deben su existencia- no se debe tan sólo al contexto cultural en el cual se dan hoy los estudios latinoamericanos; es en parte requerida por el objeto mismo. Si hoy Fernand Braudel puede reivindicar como la conquista acaso más valiosa de la historiografía última el haber descubierto que la historia no es sólo ciencia de lo que cambia, sino también de lo que permanece, ese descubrimiento es para el estudioso de la América latina incomparablemente más fácil; quizá por eso mismo puede también ser a menudo menos fructífero.

Descubrir que la historia es también ciencia de lo cambiante, que tras las anécdotas coloridas o monótonas en que sue-

len perderse con delicia tantos historiadores latinoamericanos, junto con tantos de otras latitudes, existen procesos que puede ser interesante rastrear, es en cambio menos fácil; entre los relatos políticos y patrióticos y las constantes a cuyo examen se consagran otras ciencias humanas, la historia halla difícil en Latinoamérica encontrar su terreno propio.

A esa empresa difícil, orientada hacia un objeto problemático, está consagrado este libro. En él se ha querido, a pesar de todo, ofrecer una historia de la América latina moderna, a partir de la crisis de independencia que la creó. Una historia que procure no ignorar qué servidumbre imponen realidades que se presentan inmóviles no sólo en la perspectiva limitada que ofrece el trayecto temporal de una vida humana, sino también en la más amplia que proporcionan los siglos. Pero que no por eso renuncie a ser historia; es decir, examen de lo que en ese marco se transforma y a la vez lo transforma.

Una historia de América latina que pretende hallar la garantía de su unidad y a la vez de su carácter efectivamente histórico al centrarse en el rasgo que domina la historia latinoamericana desde su incorporación a una unidad mundial, cuyo centro está en Europa: la situación colonial. Son las vicisitudes de esa situación, desde el primer pacto colonial cuyo agotamiento está en el punto de partida de la emancipación, hasta el establecimiento de un nuevo pacto, más adecuado, sin duda, para las nuevas metrópolis, ahora industriales y financieras a la vez que mercantiles, pero más adecuado también para una nueva Latinoamérica más dominada que antes de la Independencia por los señores de la tierra, y una vez abierta la crisis de ese segundo pacto colonial, la búsqueda y el fracaso de nuevas soluciones de equilibrio menos renovadoras de lo que suponían a la vez sus partidarios y sus adversarios; menos renovadoras, sobre todo, de lo que las transformaciones del orden mundial exigen de los países marginales que no quieren sufrir las consecuencias de un deterioro cada vez más rápido. Y finalmente, el desequilibrio y las tensiones de la hora actual, que confluyen en conflictos planteados a escala planetaria.

Dentro de esta perspectiva se ha intentado aquí ordenar una realidad cuya riqueza no quisiera traicionarse. A pesar de todo, las limitaciones son necesarias, y este libro no pretende ser una historia total de la América latina: se buscarán en vano en él los cuadros -frecuentemente demasiado rápidos- que suelen ofrecer, paralelamente a la historia sin adjetivos, la historia literaria e ideológica a través de un puñado de nombres y fechas, y de caracterizaciones escasamente evocadoras para quienes no conocen por experiencias más directas la realidad en ellas aludida. No es ésa la única carencia que el autor se ha resignado a aceptar para su obra; muchas otras que no advierte las descubrirá sin duda el lector, cruelmente evidentes. Aun así este libro, que no se propone ser un comentario de actualidad, pero tampoco rehúye acompañar hasta hoy el avance a menudo atormentado de América latina, no ha de carecer de alguna utilidad si logra ayudar -con la perspectiva que precisamente sólo la historia podría ofrecer- a la comprensión de esta hora latinoamericana, en que los crueles dilemas que tan largamente han venido siendo eludidos se presentan con urgencia bastante como para ganar para este subcontinente, demasiado tiempo contemplado por el resto del mundo con mirada distraída, una atención por primera vez alerta, y a ratos alarmada.

Primera parte
Del orden colonial al neocolonial

Capítulo 1
El legado colonial

Todavía a principios del siglo XIX seguían siendo visibles en Iberoamérica las huellas del proceso de conquista. Las de las vicisitudes de los conquistadores mismos, que iban a fascinar a los historiadores de esa centuria: Lima, Buenos Aires, Asunción, eran el fruto perdurable de la decisión de ciertos hombres... Tras de esa versión heroica de la *histoire événementielle* no es imposible descubrir ciertos acondicionamientos objetivos de esas trayectorias fulgurantes, aparentemente regidas por una caprichosa libertad; es la vigencia perdurable de esos acondicionamientos la que asegura la continuidad entre la conquista y la más lenta colonización.

Como sabían bien quienes en el siglo XVIII se habían inclinado sobre el enigma de ese gigantesco imperio dominado por una de las más arcaicas naciones de Europa, lo que había movido a los conquistadores era la búsqueda de metal precioso. Siguiendo sus huellas, su poco afectuosa heredera la corona de Castilla iba a buscar exactamente lo mismo y organizar sus Indias con este objeto principal. Si hasta 1520 el núcleo de la colonización española estuvo en las Antillas, las dos décadas siguientes fueron de conquista de las zonas continentales de meseta, donde iba a estar por dos siglos y medio el corazón del imperio español, desde México hasta el Alto Perú; ya antes

de mediados de siglo el agotamiento de la población antillana ha puesto fin a la explotación del oro superficial del archipiélago; hacia esa fecha la plata excede ya en volumen al oro en los envíos de metal precioso a la metrópoli, y a fines de esa centuria lo supera también en valor.

Para ese momento las Indias españolas han adquirido una figura geográfica que va a permanecer sustancialmente incambiada hasta la emancipación. Sin duda las Antillas y hasta mediados del siglo XVIII el entero frente atlántico son el flanco débil de ese imperio organizado en torno a la minería andina: desde Jamaica hasta la Colonia de Sacramento en el Río de la Plata, el dominio español ha retrocedido en más de un punto (provisoria o definitivamente) ante la presión de sus rivales. Aun así, el Imperio llega casi intacto hasta 1810, y es precisamente la longevidad de esa caduca estructura la que intriga (y a veces indigna) a los observadores del siglo XVIII.

Ese sistema colonial tan capaz de sobrevivir a sus debilidades tenía -se ha señalado ya- el fin principal de obtener la mayor cantidad posible de metálico con el menor desembolso de recursos metropolitanos. De aquí deriva más de una de las peculiaridades que el pacto colonial tuvo en América española, no sólo en cuanto a las relaciones entre metrópoli y colonias, sino también en las que corrían entre la economía colonial en su conjunto y los sectores mineros dentro de ella. ¿De qué manera podía lograrse, en efecto, que las tierras que producían metálico suficiente para revolucionar la economía europea estuviesen crónicamente desprovistas de moneda? A más de la porción -nada desdeñable- extraída por la Corona por vía de impuesto, era necesario orientar hacia la metrópoli, mediante el intercambio comercial, la mayor parte de ese tesoro metálico. Ello se hacía posible manteniendo altos no sólo los costes de las importaciones metropolitanas, sino también los de comercialización, sea entre España y sus Indias, sea entre los puertos y los centros mineros de éstas. Las consecuencias de este sistema comercial para la economía hispanoamericana eran múltiples y tanto más violentas cuanto más las favorecie-

sen los datos de la geografía. La primera de ellas era la supremacía económica de los emisarios locales de la economía metropolitana: el fisco y los comerciantes que aseguraban el vínculo con la Península. La segunda era el mantenimiento casi total de los demás sectores de la economía colonial –incluso en más de un aspecto los mineros– al margen de la circulación monetaria.

Las ventajas que este sistema aportaba a la metrópoli son evidentes. Más dudoso parece que pudiese deparar algunas a los sectores a los que la conquista había hecho dominantes en las colonias; pero los puntos de vista de éstos (luego de las pruebas de fuerza de las que abundó el siglo XVI) debieron aprender a conciliarse con los de la Corona, organizadora de la economía indiana en su propio beneficio y el de la metrópoli. Esa conciliación –base de un equilibrio siempre inestable y no desprovisto de tensiones– fue posible sobre todo gracias a que (desde una perspectiva americana) el botín de la conquista no incluía sólo metálico, sino también hombres y tierras. Lo que hizo del área de mesetas y montañas de México a Potosí el núcleo de las Indias españolas no fue sólo su riqueza minera, sino también la presencia de poblaciones indígenas, a las que su organización anterior a la conquista hacía utilizables para la economía surgida de ésta.

Para la minería, desde luego, pero también para actividades artesanales y agrícolas. Hacia estas últimas se orientan predominantemente los conquistadores y sus herederos, primero como encomenderos a quienes un lote de indios ha sido otorgado para percibir de ellos el tributo que de todos modos los vasallos indígenas deben a la Corona; luego –de modo cada vez más frecuente en medio del derrumbe demográfico del siglo XVII– como dueños de tierras recibidas por mercedes reales. Sobre la tierra y el trabajo indio se apoya un modo de vida señorial que conserva hasta el siglo XIX rasgos contradictorios de opulencia y miseria. Sin duda, la situación de los nuevos señores de la tierra no ha sido ganada sin lucha, primero abierta (el precio del retorno a la obediencia en el Perú, luego de las

luchas entre conquistadores, a mediados del siglo XVI, fue una mejora en el *status* jurídico de los encomenderos) y luego más discreta contra las exigencias de la Corona y de los sectores mineros y mercantiles que contaban en principio con su apoyo: a medida que el derrumbe de la población indígena se aceleraba, la defensa de la mano de obra (en particular contra esa insaciable devoradora de hombres que era la mina) se hacía más urgente, y antes de llenar –con entera justicia– uno de los pasajes más negros de la llamada leyenda negra, la mita –el servicio obligatorio en las minas y obrajes textiles– había ganado una sólida antipatía entre señores territoriales y administradores laicos y eclesiásticos de las zonas en que los mitayos debían ser reclutados.

Los señores de la tierra tenían así un inequívoco predominio sobre amplias zonas de la sociedad colonial; no habían conquistado situación igualmente predominante en la economía hispanoamericana globalmente considerada. Esta es una de las objeciones sin duda más graves a la imagen que muestra al orden social de la colonia como dominado por rasgos feudales, por otra parte indiscutiblemente presentes en las relaciones socioeconómicas de muy amplios sectores primarios. Pero es que el peso económico de estos sectores es menor de lo que podría hacer esperar su lugar en el conjunto de la población hispanoamericana (y aun éste era desde el siglo XVII menos abrumadoramente dominante de lo que gusta a veces suponerse). Ello es así porque es la organización de la entera economía hispanoamericana la que margina a esos sectores, a la vez que acentúa en ellos los rasgos feudales. Por otra parte, éstos están lejos de aparecer con igual intensidad en el entero sector agrícola. Desde muy pronto surgen al lado de las tierras de agricultura indígena islotes de agricultura española; pese a la exigüidad de éstos, su sola supervivencia está mostrando una de las fallas de la agricultura apoyada en el trabajo indio: debiendo sostener dos estructuras señoriales a la vez (la todavía muy fuerte de origen prehispánico y la española, laica y eclesiástica a la vez) le resulta cada vez menos fácil, mientras

el derrumbe demográfico y la concurrencia de otras actividades arrebatan buena parte de su mano de obra, producir a precios bajos excedentes para el mercado.

La catástrofe demográfica del siglo XVII provocará transformaciones aun más importantes en el sector agrario: reemplazo de la agricultura por la ganadería del ovino, respuesta elaborada desde México hasta Tucumán a la disminución de la población trabajadora; reemplazo parcial de la comunidad agraria indígena, de la que el sector español se limita a extraer una renta señorial en frutos y trabajo, por la hacienda, unidad de explotación del suelo dirigida por españoles. Este último cambio es, sin embargo, muy incompleto; de intensidad y formas jurídicas variables según las comarcas, de algunas estuvo casi totalmente ausente. Es que el estímulo brutal del derrumbe demográfico no bastaba para provocarlo; era necesaria también la presencia de mercados capaces de sostener, mediante la expansión del consumo, una expansión productiva: a diferencia de la comunidad indígena, a la que la conquista ha impuesto un nuevo señor, la hacienda es una organización orientada hacia consumidores ajenos a ella.

Su triunfo es entonces limitado; se da con mayor pureza allí donde el contacto más directo con la economía metropolitana, gracias al cual los sectores mercantiles y mineros defienden mejor su parte del producto de la actividad económica, da a las economías urbanas una mayor capacidad de consumo. Ésa es sin duda la causa del ritmo relativamente más acelerado que el proceso tuvo en México, que pese al papel secundario que al principio le cupo dentro de la producción minera hispanoamericana alcanzó, desde muy pronto, una situación relativamente privilegiada en sus relaciones económicas con la metrópoli. Pero aun en México el avance de la hacienda no dará lugar al surgimiento de un asalariado rural auténtico: los salarios, aunque expresados por lo menos parcialmente en términos monetarios, de hecho son predominantemente en especie, y por otra parte el endeudamiento de los peones hace a veces ilusoria su libertad de romper la relación con el pa-

trón. No ha de olvidarse por añadidura que, entre la explotación directa de toda la tierra y la percepción pura y simple de una renta señorial, existen numerosos estadios intermedios (comparables a los bien conocidos en la metrópoli y la entera Europa) en que si el campesino cultiva para sí un lote, debe trabajar con intensidad localmente variable la tierra señorial... Esta última solución, si facilita la producción de excedentes para mercados externos, no siempre va acompañada de ella; en este punto el panorama hispanoamericano es extremadamente complejo, y estamos por cierto lejos de conocerlo bien.

De todos modos, dentro del orden económico colonial la explotación agrícola forma una suerte de segunda zona, dependiente de la mercantil y minera (en la medida en que a través de ellas recibe los últimos ecos de una economía monetaria de ritmo lento y baja intensidad), pero a la vez capaz de desarrollos propios bajo el signo de una economía de autoconsumo que elabora su propios y desconcertantes signos de riqueza. El repliegue sobre sí misma ofrece solución sólo provisional y siempre frágil al desequilibrio entre ambas zonas: hay en el sector dominante quienes se interesan en mantener entreabierta la comunicación con la que tiende a aislarse; buena parte de los lucros que las Indias ofrecen suelen cosecharse en esa frontera entre sus dos economías. Esos esfuerzos cuentan en general con el apoyo del poder político: la función del sector agrícola es, dentro del orden colonial, proporcionar fuerza de trabajo, alimentos, tejidos y bestias de carga a bajo precio para ciudades y minas; si una incorporación menos limitada del sector rural a los circuitos económicos encarecería acaso sus productos, su aislamiento total tendría la consecuencia aún más grave de hacerlos desaparecer de los mercados mineros y urbanos...

Esa combinación de intereses privados y presiones oficiales tiene acaso su expresión más típica (aunque sin duda no su manifestación más importante) en la institución del repartimiento de efectos. Para evitar que, por ausencia de una espon-

tánea corriente de intercambios, faltase a enteras zonas rurales lo más necesario, se decide inducir esta corriente por acto de imperio: los corregidores, funcionarios ubicados por la Corona al frente de enteros distritos, ofrecerán esos productos al trueque de las poblaciones indígenas sometidas a su mando. Se adivina qué provechos dejó el sistema a funcionarios y comerciantes por ellos favorecidos: las quejas sobre las muchas cosas inútiles que se obliga a los indios a comprar -fondos de almacén que no han encontrado adquirentes en la ciudad- se hacen cada vez más ruidosas a lo largo del siglo XVIII... Pero si estos episodios dicen mucho sobre la situación real de los campesinos indígenas, también echan luz sobre las limitaciones del poder y la riqueza de los señores territoriales: la debilidad de éstos frente a la doble presión de la Corona y de los emisarios de la economía mercantil se hace sentir no sólo cuando examinamos globalmente la economía colonial hispanoamericana, sino aun si se limita el campo de observación a los rincones semiaislados que se supondría destinados a sufrir el inmitigado predominio señorial.

Menos nítida es la situación en lo que toca a las relaciones entre sectores mercantiles y mineros. Como en la explotación de la tierra, y todavía más que en ésta, se impone la diferenciación entre México y el resto del imperio. Mientras en México los mineros constituyen un grupo dotado de capital bastante para encarar a menudo autónomamente la expansión de sus explotaciones (y aun cuando deben buscarlo fuera, la comparativa abundancia hace que no deban sacrificar a cambio de él su autonomía económica real), en Perú los mineros de Potosí dependen cada vez más de los adelantos de los comerciantes, y el ritmo despiadado que a lo largo del siglo XVIII imponen a la explotación de la mano de obra, a medida que se empobrecen los filones, es en parte una tentativa de revertir sobre ésta las consecuencias de la dependencia creciente de la economía minera respecto de la mercantil.

Esta diferencia entre México y el resto del imperio (que hace que, nada sorprendentemente, en México un efectivo ré-

gimen de salariado -y con niveles de salario que observadores europeos encuentran inesperadamente altos- domine la actividad minera y aparezca en algunos sectores privilegiados de la agrícola) se vincula (como se ha observado ya) con la situación privilegiada de esta región, menos duramente golpeada por las consecuencias del pacto colonial.

Este pacto colonial, laboriosamente madurado en los siglos XVI y XVII, comienza a transformarse en el siglo XVIII. Influye en ello más que la estagnación minera -que está lejos de ser el rasgo dominante en el siglo que asiste al *boom* de la plata mexicana- la decisión por parte de la metrópoli de asumir un nuevo papel frente a la economía colonial, cuya expresión legal son las reformas del sistema comercial introducidas en 1778-82, que establecen el comercio libre entre la Península y las Indias.

¿Qué implicaban estas reformas? Por una parte la admisión de que el tesoro metálico no era el solo aporte posible de las colonias a la metrópoli; por otra -en medio de un avance de la economía europea en que España tenía una participación limitada pero real-, el descubrimiento de las posibilidades de las colonias como mercado consumidor. Una y otra innovación debían afectar el delicado equilibrio interregional de las Indias españolas; los nuevos contactos directos entre la metrópoli y las colonias hacen aparecer a aquélla como rival -y rival exitosa- de las que entre éstas habían surgido como núcleos secundarios del anterior sistema mercantil. Es lo que descubren los estudiosos del comercio colonial en el siglo XVIII, desde el Caribe al Plata, desde las grandes Antillas antes ganaderas y orientadas hacia el mercado mexicano, ahora transformadas por la agricultura del tabaco y del azúcar y vueltas hacia la Península, hasta el litoral venezolano, que reorienta sus exportaciones de cacao de México a España, y hasta las pampas rioplatenses en que se expande una ganadería cuyos cueros también encuentran salida en la metrópoli.

En los casos arriba mencionados el contacto directo con la Península comienza la fragmentación del área económica his-

panoamericana en zonas de monocultivo que terminarán por estar mejor comunicadas con su metrópoli ultramarina que con cualquier área vecina. Esa fragmentación es a la larga políticamente peligrosa; si parece fortificar los vínculos entre Hispanoamérica y su metrópoli, rompe los que en el pasado han unido entre sí a las distintas comarcas de las Indias españolas.

La reforma comercial no sólo consolida y promueve esos cambios en la economía indiana; se vincula además –tal como se ha señalado– con otros que se dan en la metrópoli. Esa nueva oleada de conquista mercantil que desde Veracruz a Buenos Aires va dando, a lo largo del siglo XVIII, el dominio de los mercados locales a comerciantes venidos de la Península (que desplazan a los criollos antes dominantes) es denunciada en todas partes como afirmación del monopolio de Cádiz. Pero a su vez, quienes dominan el nudo mercantil andaluz provienen ahora de la España del Norte; Cádiz es esencialmente el emisario de Barcelona. Junto con la hegemonía mercantil de la renaciente España septentrional se afirma también –más ambiguamente– su avance industrial, que las medidas proteccionistas incluidas en el nuevo sistema comercial intentan fortalecer asegurándole facilidades en el mercado colonial. En este sentido la reforma alcanza un éxito muy limitado: el despertar económico de la España del setecientos no tiene vigor bastante para que la metrópoli pueda asumir plenamente el papel de proveedora de productos industriales para su imperio.

Estando así las cosas, los privilegios que el nuevo sistema comercial otorga a la metrópoli benefician menos a su industria que a su comercio: el nuevo pacto colonial fracasa sustancialmente porque mediante él España sólo logra transformarse en onerosa intermediaria entre sus Indias y las nuevas metrópolis económicas de la Europa industrial.

De la Hispanoamérica marcada por las huellas contradictorias de tres siglos de colonización, **México** era la región más pobla-

da, la más rica, la más significativa para la economía europea. Su capital era la ciudad más grande del Nuevo Mundo; no sólo su población, también la magnificencia de casas privadas y palacios públicos hacen de ella una gran ciudad a escala mundial, transformada por la prosperidad traída por la expansión minera del setecientos. En efecto, es la explotación de la plata del México septentrional la que sostiene el crecimiento capitalino: en toda la ceja septentrional de la meseta de Anahuac –en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí–, minas nuevas y mucho más vastas, se alinean junto a las antiguas. Los reales de minas y su nueva fortuna vuelven a poner en primer plano al México del Norte; tras de ellos se expande la ganadería de las provincias interiores, que encuentra en la zona minera su centro de consumo; todavía más allá, muy débilmente pobladas, están las tierras del extremo norte, que deben sobre todo a decisiones políticas sus modestos avances demográficos: los avances rusos e ingleses en el Pacífico están anunciando nuevas amenazas para la frontera septentrional de las tierras españolas, y la Corona no quiere que ésta quede desguarnecida.

Ese México septentrional es menos indio que el central y meridional; ha sido más tocado que éste por la evolución que va desde la comunidad agraria indígena a la hacienda, en parte porque en amplias zonas de él la hacienda ganadera se implantó allí donde nunca se había conocido agricultura (y tampoco instalaciones indígenas sedentarias). Pero aun en tierras cultivadas desde tiempos prehispánicos la presencia de los reales de minas había dado estímulo a la evolución hacia la hacienda (productora para ese exigente mercado). En ese Norte en expansión son los mineros más que los hacendados quienes dominan la sociedad local; unos y otros son, por otra parte, predominantemente blancos, y ocupan las primeras filas de esa alta clase criolla que en la capital rivaliza con la peninsular, ostentando frente a ella títulos de nobleza que en el siglo XVIII no ocultan su origen venal y son como la traducción, en los términos de jerarquías sociales más antiguas, del triunfo obtenido en la lucha por la riqueza; aun en Madrid habrá un

pequeño grupo de criollos mexicanos enriquecidos por la plata, ennoblecidos por su riqueza, cuya vida ociosa y suntuosa será contemplada entre admirada y burlonamente por la nobleza metropolitana...

La inclinación de esa nueva aristocracia a la *conspicuous consumption* ha sido reprochada por ese implacable -y no siempre lúcido- crítico retrospectivo de la elite criolla del México colonial que fue Lucas Alamán. El reproche es a la vez fundado e injusto: el derroche era el desemboque de una riqueza que una vez acumulada no encontraba suficientes modos de invertirse útilmente. La agricultura del Norte era sobre todo de consumo local, la ganadería no exigía inversiones importantes, la artesanía (textil, cobre, cerámica) era el fruto del trabajo de obreros domésticos, crónicamente endeudados con los comerciantes, que encontraban demasiadas ventajas en el sistema vigente para revolucionarlo inyectando en él una parte de sus ganancias bajo la forma de inversiones de capital.

Sin duda la vigencia de este sistema hacía del México del Norte, minero y ganadero, un tributario del México central, y sólo la excepcional prosperidad de la minería mexicana impidió que esa dependencia tuviese las consecuencias que alcanzó -por ejemplo- en el Alto Perú. Ahora bien, la riqueza minera no hallaba fácil volcarse en el México central, dominado rápidamente por los grupos comerciales consolidados gracias a la hegemonía de Veracruz, que fue uno de los resultados locales de la reforma comercial de 1778. Efectivamente, los comerciantes peninsulares que, gracias a ella, conquistaron desde Veracruz el sistema mercantil mexicano, estaban también detrás del avance de una agricultura de mercado, que roía sobre las mejores tierras de maíz de la meseta, y sobre todo de sus bordes. Si la expansión del trigo fue un episodio efímero, clausurado por causa de la competencia norteamericana, que conquistó el Caribe (aun el español) luego de 1795, el avance del azúcar estaba destinado a durar. Estas transformaciones agrícolas de la meseta dejan intactas las tierras bajas de la cos-

ta atlántica, a primera vista más adecuadas para una agricultura tropical de plantación, que permanecen sin embargo despobladas, salvo en sus centros urbanos, y consagradas sólo en mínima medida a una agricultura de subsistencia.

Hay además en el México central una industria artesanal de importancia mayor que en el Norte: es la del centro textil de Puebla, donde la organización en manufacturas es antigua. Su producción se destina sobre todo al mercado interno, al que domina por entero en los sectores populares. Los comercializadores controlan la economía del textil, pero están a su vez subordinados por una red de adelantos, deudas y habilitaciones a los grandes importadores y exportadores de Veracruz, dueños, en último término, de la economía del México central y meridional.

Es el predominio de éstos el que hace que para un observador rápido México aparezca sobre todo como un país predominantemente minero: Humboldt ya observaba que, sin embargo, año más, año menos, la agricultura y la ganadería *producían treinta millones de pesos contra los veintidós* a veinticuatro de las minas. No sólo porque la mayor parte de esa producción era de consumo local su importancia permanecía semiescondida: todavía era la minería la actividad primaria cuyos dominadores alcanzaban a liberarse mejor de la hegemonía de los comercializadores y a ingresar en número más importante en las clases altas del virreinato. De este modo el crecimiento mexicano -muy rápido en la segunda mitad del siglo XVIII- parece hacer crecer las causas del conflicto. En primer lugar, en una clase alta inevitablemente escindida entre señores de la plata -predominantemente criollos- y grandes comerciantes (a menudo transformados en terratenientes) del México central, que son predominantemente peninsulares. Los primeros tienen su expresión corporativa en el Cuerpo de Minería, los segundos en el Consulado de Comercio; en el plano político el Cabildo de México es la fortaleza de la aristocracia criolla, frente a las magistraturas de designación metropolitana.

Toda esa clase alta es escandalosamente rica, y su prosperidad va acompañada de una muy honda miseria popular. Por el momento, este contraste -evidente para observadores extraños- no parece haber hecho temer nuevas tensiones. Lo grave era que en México el progreso tendía a acentuar las oposiciones mismas que estaban ya en su punto de partida. Se daba, en primer lugar, en medio de una rápida expansión demográfica; de menos de tres millones de habitantes a mediados del siglo XVIII, México pasa a algo más del doble medio siglo después. Pese a que la expansión de la capital (más de 130.000 habitantes en 1800) y la de las zonas mineras acrecen los sectores de economía de mercado, la mayor parte de esa expansión se hace en el sector de autoconsumo, cuya participación en el dominio de la tierra es disminuida por el avance de la agricultura comercial. He aquí un problema que va a gravitar con dureza creciente en la vida mexicana: ya es posible adivinarlo detrás de la violencia de los alzamientos de Hidalgo (que afecta al contorno agrícola de la zona minera del Norte) y de Morelos (zona de agricultura subtropical del Sur). Otro problema que afecta a sectores menos numerosos, pero más capaces de hacerse oír permanentemente, es el del desemboque para la población urbana que, en parte a causa de la inmigración forzada de campesinos, en parte por el puro crecimiento vegetativo, aumenta más rápidamente que las posibilidades de trabajo en la ciudad. No se trata ahora tan sólo de una plebe sin ocupación fija (los temibles léperos de la capital, disponibles para todos los tumultos), sino de una clase intermedia incapaz de encontrar lugar suficiente en las filas no bastante amplias de la nueva burocracia y del clero, y particularmente sensible, por eso mismo, a las preferencias que en ellas encuentran los peninsulares.

El progreso mexicano preparaba así las tormentas que lo iban a interrumpir. No por eso dejaba de ser el aspecto más brillante de la evolución hispanoamericana en la etapa ilustrada. Para la Corona, cuyo progresismo está inspirado, en parte, en criterios fiscalistas, México, capaz de proporcionar los dos

tercios de las rentas extraídas de las Indias, es la colonia más importante. Para la economía metropolitana también: la plata mexicana parece encontrar como espontáneamente el camino de la metrópoli. Sin duda, México hace en el imperio español figura de privilegiado, y la riqueza monetaria por habitante es superior a la de la metrópoli; pero no sólo esa riqueza está increíblemente concentrada en pocas manos, es por añadidura *el fruto de la acumulación de una parte mínima* del producto de la minería mexicana; año tras año, el 95 por 100 de la producción de plata toma el camino de Europa; el 50 por 100, sin contraprestación alguna, y el resto como consecuencia –por lo menos parcial– de un sistema comercial sistemáticamente orientado en favor de los productos metropolitanos.

Si México es, a fines del siglo XVIII, la más importante económicamente de las posesiones indianas, no es ya la que crece más rápidamente. **Las Antillas** españolas están recorriendo más tardíamente el camino que desde el siglo XVII fue el de las francesas, inglesas y holandesas: originariamente ganaderas, desde comienzos del siglo XVIII se orientan hacia la agricultura tropical. Es sobre todo Cuba la beneficiaria de esta expansión, acelerada luego por la ruina de Haití (que hace del oriente cubano tierra de refugio para plantadores franceses) y anticipada desde el siglo XVII por la aparición del tabaco como segundo rubro de la economía cubana al lado del ganado. Pero la fortuna del tabaco es variable y el monopolio regio de compra pone –a partir del último tercio del siglo XVIII– un límite a su expansión. La del azúcar es, por el contrario, acelerada por la coyuntura internacional: la guerra de independencia de Estados Unidos abre la economía cubana al contacto de estos aliados de España; luego el ciclo de la revolución francesa y las guerras civiles imperiales le asegura –tras de un breve paréntesis de estancamiento– una nueva y más rápida expansión. Ésta se produce en buena parte al margen del sistema comercial español, y aun en la medida en que se da dentro de éste supone un mercado consumidor más amplio que el me-

tropolitano. La expansión azucarera -que lleva de un promedio de exportaciones de 480.000 arrobas en 1764-69 a uno de 1.100.000 en 1786-90, y alrededor de dos millones y medio para 1805- se produce en medio de una crónica escasez de capitales, en explotaciones pequeñas, que trabajan con esclavos relativamente poco numerosos (sólo en las cercanías de La Habana hay ingenios de más de 100 negros), cuyos propietarios arrastran pesadas deudas frente a los comerciantes habaneros que les han adelantado lo necesario para instalarse. El azúcar tardará en crear en Cuba una clase de plantadores ricos: enriquecerá, en cambio, rápidamente a los comerciantes que los habilitan. Consecuencias indirectas de la situación son cierto arcaísmo técnico, impuesto por la escasez de capital y pequeñez de las unidades de explotación, y la limitación de los cambios en el equilibrio racial (entre 1774 y 1817 la población negra pasó del 43,8 al 55 por 100, mientras que el número de habitantes de la isla subía de alrededor de 170.000 a alrededor de 570.000; La Habana pasaba, por su parte, entre 1791 y 1825, de los 50.000 a los 130.000 habitantes).

Frente al crecimiento de México y Cuba, **América central,** organizada en la Capitanía General de Guatemala, se mostraba más estática. De su millón y medio de habitantes, más de la mitad eran indios, menos del 20 por 100 blancos, el resto castas mezcladas y negros. El mayor predominio indígena se encuentra en el Norte, en lo que será Guatemala, tierra de grandes haciendas y comunidades indígenas orientadas hacia el autoconsumo. El Salvador, en tierras más bajas y cálidas, tiene una población más densa de indios y mestizos y una propiedad más dividida. Son los comerciantes los que dominan la zona y controlan la producción y exportación del principal producto con el que Centroamérica participa en la economía internacional: el índigo. Más al Sur, Honduras y Nicaragua son tierras de ganadería extensiva y escasamente próspera, poblada sobre todo de mestizos y mulatos; en Costa Rica, el rincón más meridional y despoblado de la capitanía, se han

instalado en la segunda mitad del siglo XVIII colonos gallegos, que desarrollan una agricultura dominada por el autoconsumo en el valle central, en torno a Cartago.

Las tierras sudamericanas del Caribe son de nuevo zonas de expansión. **Nueva Granada** tiene su principal producto de exportación en el oro, explotado desde el siglo XVI, pero cuya producción creció rápidamente en el siglo XVIII, y llegó a fines del siglo a superar la del Brasil (por su parte ya en decadencia). Pero Nueva Granada era región extremadamente compleja: integrada por una costa en que Cartagena de Indias, la ciudad-fortaleza, era el centro del poder militar español en la orilla sudamericana del Caribe, y dos valles paralelos, separados por montañas difícilmente transitables, cuyos ejes son ríos sólo navegables por trechos –el Cauca y el Magadalena–, la comarca debía adquirir sólo muy tardíamente alguna cohesión: la capital, Bogotá, ciudad surgida en medio de la meseta ganadera al este del Magdalena, encontraba una significativa dificultad para imponerse sobre sus rivales: Cartagena en la costa, Popayán en el Alto Cauca, Medellín en el Cauca medio. Esa falta de cohesión se traduce en otras formas de heterogeneidad: a la costa de población blanca y mulata se contrapone un interior predominantemente mestizo, pero con población blanca importante (más del 30 por 100 para toda Nueva Granada); por su parte, las zonas de minería, en el Alto Cauca y el Atrato, tenían también una concentración de población negra esclava. La meseta de ganadería y agricultura templada (que iba a ser uno de los núcleos de la futura Colombia) estaba en parte en manos de grandes terratenientes (es el caso de la llanura de Bogotá); en otras zonas la propiedad se halla más dividida; así en las tierras de Antioquía, intermediarias entre la zona aurífera y la costa.

Nueva Granada avanza entonces sobre líneas muy tradicionales, y su contribución a la economía ultramarina es sobre todo la de sus minas de metales preciosos: en 1788 se exportan 1.650.000 pesos en metálico y sólo 250.000 pesos en frutos (un

conjunto de rubros muy variados); el desbarajuste de los años de guerra impide tener cifras igualmente representativas para las décadas que siguen. Al lado del comercio legal está el de contrabando: Jamaica, que lo domina desde el siglo XVII, es cada vez más importante para Nueva Granada. Gracias a los intérlopes el virreinato no queda desprovisto de importaciones europeas en los años de aislamiento. Pero el comercio irregular deprime toda exportación que no sea la de metálico y presiona sobre otras producciones locales: aun el trigo de la meseta halla dificultad para sobrevivir al lado del importado... Esos avances desiguales se reflejan también en la curva demográfica: alrededor de un millón de habitantes hacia 1790, pero ninguna ciudad de más de treinta mil; al lado de ello zonas rurales de población relativamente densa, como la agrícola y artesanal del Socorro, al norte de Bogotá, abrigadas contra las asechanzas de la economía mundial por un volumen de intercambio más reducido aun que en otras áreas hispanoamericanas.

A esta Nueva Granada encerrada en sí misma se contrapone una **Venezuela** volcada, por el contrario, al comercio ultramarino; su estructura interna, si es aún más compleja que la neogranadina, está también mejor integrada. Está en primer término la costa del cacao, continuada en los valles internos a los Andes venezolanos; en las zonas montañosas hay explotación pastoril de ganado menor. Entre la cordillera costeña y el Orinoco se encuentran los Llanos, poblados por marginales de las zonas de más antigua colonización y consagrados a una ganadería de vacas y mulas. Sobre el Orinoco, gracias sobre todo al esfuerzo colonizador de la España borbónica, están surgiendo algunos centros que encuentran dificultad en arraigar. Con una población que es la mitad de la neogranadina, Venezuela exporta por valor dos veces mayor que Nueva Granada. El más importante de sus rubros es el cacao (un tercio del total de las exportaciones, que excede los cuatro millones y medio de pesos); siguen el índigo, con algo más de un millón, el café y el al-

godón. La agricultura costera y de los valles andinos se encuentra en manos de grandes propietarios que usan mano de obra predominantemente esclava; esta aristocracia criolla ha obtenido en 1778-85 su victoria sobre la Compañía Guipuzcoana, que había tenido el monopolio de compra y exportación del cacao venezolano, y lo había impuesto en el mercado metropolitano, haciendo posible un gran aumento de la producción local, pero reservándose lo mejor de los lucros del negocio. Los señores del cacao, los *mantuanos* de Caracas, dominan la economía venezolana, y son lo bastante ricos para que más de uno de ellos pueda permitirse hacer vida ociosa y ostentosa en la corte madrileña (donde los marqueses del chocolate venezolano son recibidos con la misma admiración burlona que los ennoblecidos millonarios de la plata mexicana).

Los Llanos vinculan su economía a circuitos más limitados: mulas y ganado para las Antillas, cueros que alcanzan el mercado europeo (pero sólo por valores anuales de algo más de cien mil pesos) y sobre todo animales para consumo en la costa: Venezuela no pertenece a la Hispanoamérica consumidora de cereales y legumbres (maíz y fríjoles en México, arroz, fríjoles y bananas en las tierras bajas del Caribe, las Antillas y Centroamérica, maíz y trigo en Nueva Granada, maíz y tubérculos en el área andina), sino a la que devora carne, en cantidades increíbles para observadores extraños: como observa Humboldt, cada habitante de Caracas consume anualmente siete veces y media lo que cada habitante de París. Aun así, la ganadería no ofrece las mismas posibilidades de enriquecimiento que la agricultura tropical.

En el Pacífico sudamericano la presidencia de **Quito** presenta, aún más acentuada que el virreinato de Perú, la oposición entre la costa y la sierra. La costa es aquí sobre todo el ancho valle del Guayas, consagrado a la agricultura tropical exportadora para ultramar (Guayaquil produce un cacao que –si es de calidad más baja que el venezolano y sobre todo que el mexicano– es en cambio más barato); lo mismo que en Venezuela, se

desarrolla aquí una agricultura de plantación, con mano de obra esclava. Pero la mayor parte de la población se encuentra en la sierra: en 1781 son casi 400.000 en el término de Quito, y 30.000 en el de Guayaquil; en 1822, según cálculos aproximativos, 550.000 y 90.000. Si la costa es predominantemente negra (en 1781 hay en jurisdicción de Guayaquil 17.000 negros, 9.000 indios y sólo menos de 5.000 blancos), la sierra es de predominio indio (hay allí un 68 por 100 de indígenas y un 26 por 100 de blancos); su capital –Quito, con 30.000 habitantes– es todavía una ciudad inesperadamente blanca. La sierra está mal integrada a una economía de intercambio ultramarino: en algunos rincones abrigados produce algodón, utilizado en artesanías domésticas, que encuentran su camino hasta el Río de la Plata; el trigo de las tierras frías se consume en parte en la costa. Pero esas exportaciones –cuyos provechos hacen posible el lujo de Quito, donde se concentran los señores de la tierra serrana y su abundante servidumbre– no impiden que la economía de la sierra sea en buena parte de autoconsumo. Ese relativo aislamiento tiene su huella en el idioma; en Quito comienza la maciza área serrana de lenguajes prehispánicos, que se extiende hasta el Alto Perú: al revés de lo que ocurre en México, donde el uso de las lenguas indígenas es un hecho importante pero ya marginal, aquí el quechua –y en el Alto Perú el aimara– es la lengua dominante de una zona en la que el español se implanta mal, limitado a una minoría blanca de señores territoriales, corregidores y eclesiásticos, que todavía a fines del siglo XVIII delegan una parte de su poder en una clase alta indígena, a veces más aborrecida que sus mandantes.

Al sur de Quito, el virreinato de **Perú** vive una coyuntura nada fácil. La reorganización imperial de la segunda mitad del siglo XVIII ha hecho en él su primera víctima: la separación del virreinato neogranadino y, sobre todo la del rioplatense, no han afectado tan sólo la importancia administrativa de Lima; complementadas por decisiones de política comercial acaso más graves, arrebatan a Lima el dominio

mercantil de la meseta altoperuana, y –a través de él– el de los circuitos comerciales del interior rioplatense; la ofensiva mercantil de Buenos Aires triunfa también –aunque de modo menos integral– en Chile. Sobre todo la pérdida del comercio altoperuano es importante; la decadencia del gran centro de la plata no le impide ser aún el más importante de la América del Sur española. Esas pérdidas encuentran sin duda compensaciones: hay un aumento muy considerable de la producción de plata en las tierras bajoperuanas que han quedado para el virreinato de Lima, que en conjunto producen alrededor de dos millones y medio de pesos anuales hacia fines de siglo (que de todos modos sólo equivalen a la décima parte de la producción mexicana). La minería (y en ella, junto con la plata, cuenta el oro de la zona de Puno, por valor de cerca de cuatro millones de pesos anuales) seguía estando en la base de la economía y del comercio ultramarino de Perú. La sierra del Norte (un conjunto de valles paralelos a la costa, de ríos encajonados y agricultura de irrigación) es predominantemente mestiza y está mejor incorporada a circuitos comerciales relativamente amplios: sus mulas y textiles domésticos, sus aceitunas y frutas se envían a Quito o al Perú meridional. La costa es una franja de desiertos interrumpidos por breves oasis de irrigación: allí predomina una agricultura orientada hacia el mercado hispanoamericano (todavía no hacia el ultramarino): aguardiente de Pisco, consumido desde Nueva Granada hasta Chile, vino de la misma comarca, que llega hasta América central y México, algodón, que se teje en Quito; azúcar y arroz, que se distribuyen por el Pacífico sudamericano. Al lado de esa agricultura se da una artesanía muy vinculada a ella (predominantemente textil y cerámica). La sierra meridional, más ancha y maciza que la del Norte, es el gran centro de población indígena peruana, con su capital –el Cuzco– que lo fue de los incas. Allí centros agrícolas destinados a atender las zonas mineras, nudos urbanos de un comercio que vive el ritmo mismo de la minería, tienen existencia rica

en altibajos, mientras al margen de ellos una agricultura d subsistencia –basada en el maíz y la patata– y una ganader de la que se obtiene lanas variadas (de oveja, cabra, llam etc.), que se vuelcan sobre todo en la artesanía doméstic son la base de la existencia de las comunidades indígena Éstas predominan, en efecto, en la sierra, mientras la cost tiene una agricultura de haciendas y esclavos. La agricultur serrana vive oprimida por la doble carga de una clase seño rial española y otra indígena, agravada por la del aparato po lítico-eclesiástico, que vive también de la tierra. Las clases al tas locales están supeditadas a las de la capital (Lima, qu con su poco más de cincuenta mil habitantes ha quedado ya detrás de México y de La Habana, y está siendo alcanzada ra pidamente por Buenos Aires y Caracas). La sede virreinal e también la de una aristocracia que une al dominio de la agr cultura costeña el del comercio del conjunto del virreinat Éste, con su poco más de un millón de habitantes (de lo cuales un 60 por 100 son indios, un 24 por 100 mestizos y un 4 por 100 negros esclavos) hace, por otra parte, figura mo desta en el cuadro de la población hispanoamericana.

Sin duda, el marco del virreinato peruano ahoga al come cio limeño, acostumbrado a moverse en uno más ancho, obligado –ahora como antes y acaso más que antes– a dividi muy desigualmente sus lucros con el comercio metropolita no del que es emisario (en Perú, como en toda Hispanoame rica, el metálico encuentra demasiado fácilmente el camin de la metrópoli). Lima conserva aún, sin embargo, algún do minio del mercado chileno, que antes ha controlado po completo. Si en la segunda mitad del siglo XVIII Chile aprend a hacer sus importaciones ultramarinas (por otra parte mu modestas), sea directamente, sea sobre todo por vía de Bue nos Aires, su comercio exportador se orienta aún hacia e Norte (sobre todo en cuanto al trigo, consumido en la cost peruana), y sigue gobernado por los mercaderes limeños dueños de la flota mercantil de El Callao (el puerto de la capi tal peruana) y poco dispuestos a renunciar a las ventajas de

mercantil de la meseta altoperuana, y –a través de él– el de los circuitos comerciales del interior rioplatense; la ofensiva mercantil de Buenos Aires triunfa también –aunque de modo menos integral– en Chile. Sobre todo la pérdida del comercio altoperuano es importante; la decadencia del gran centro de la plata no le impide ser aún el más importante de la América del Sur española. Esas pérdidas encuentran sin duda compensaciones: hay un aumento muy considerable de la producción de plata en las tierras bajoperuanas que han quedado para el virreinato de Lima, que en conjunto producen alrededor de dos millones y medio de pesos anuales hacia fines de siglo (que de todos modos sólo equivalen a la décima parte de la producción mexicana). La minería (y en ella, junto con la plata, cuenta el oro de la zona de Puno, por valor de cerca de cuatro millones de pesos anuales) seguía estando en la base de la economía y del comercio ultramarino de Perú. La sierra del Norte (un conjunto de valles paralelos a la costa, de ríos encajonados y agricultura de irrigación) es predominantemente mestiza y está mejor incorporada a circuitos comerciales relativamente amplios: sus mulas y textiles domésticos, sus aceitunas y frutas se envían a Quito o al Perú meridional. La costa es una franja de desiertos interrumpidos por breves oasis de irrigación: allí predomina una agricultura orientada hacia el mercado hispanoamericano (todavía no hacia el ultramarino): aguardiente de Pisco, consumido desde Nueva Granada hasta Chile, vino de la misma comarca, que llega hasta América central y México, algodón, que se teje en Quito; azúcar y arroz, que se distribuyen por el Pacífico sudamericano. Al lado de esa agricultura se da una artesanía muy vinculada a ella (predominantemente textil y cerámica). La sierra meridional, más ancha y maciza que la del Norte, es el gran centro de población indígena peruana, con su capital –el Cuzco– que lo fue de los incas. Allí centros agrícolas destinados a atender las zonas mineras, nudos urbanos de un comercio que vive el ritmo mismo de la minería, tienen existencia rica

en altibajos, mientras al margen de ellos una agricultura de subsistencia -basada en el maíz y la patata- y una ganadería de la que se obtiene lanas variadas (de oveja, cabra, llama, etc.), que se vuelcan sobre todo en la artesanía doméstica son la base de la existencia de las comunidades indígenas. Éstas predominan, en efecto, en la sierra, mientras la costa tiene una agricultura de haciendas y esclavos. La agricultura serrana vive oprimida por la doble carga de una clase señorial española y otra indígena, agravada por la del aparato político-eclesiástico, que vive también de la tierra. Las clases altas locales están supeditadas a las de la capital (Lima, que con su poco más de cincuenta mil habitantes ha quedado ya detrás de México y de La Habana, y está siendo alcanzada rápidamente por Buenos Aires y Caracas). La sede virreinal es también la de una aristocracia que une al dominio de la agricultura costeña el del comercio del conjunto del virreinato. Éste, con su poco más de un millón de habitantes (de los cuales un 60 por 100 son indios, un 24 por 100 mestizos y un 4 por 100 negros esclavos) hace, por otra parte, figura modesta en el cuadro de la población hispanoamericana.

Sin duda, el marco del virreinato peruano ahoga al comercio limeño, acostumbrado a moverse en uno más ancho, y obligado -ahora como antes y acaso más que antes- a dividir muy desigualmente sus lucros con el comercio metropolitano del que es emisario (en Perú, como en toda Hispanoamérica, el metálico encuentra demasiado fácilmente el camino de la metrópoli). Lima conserva aún, sin embargo, algún dominio del mercado chileno, que antes ha controlado por completo. Si en la segunda mitad del siglo XVIII Chile aprende a hacer sus importaciones ultramarinas (por otra parte muy modestas), sea directamente, sea sobre todo por vía de Buenos Aires, su comercio exportador se orienta aún hacia el Norte (sobre todo en cuanto al trigo, consumido en la costa peruana), y sigue gobernado por los mercaderes limeños, dueños de la flota mercantil de El Callao (el puerto de la capital peruana) y poco dispuestos a renunciar a las ventajas del

monopolio de compras que han organizado en torno al trigo de Chile.

El reino de **Chile,** arrinconado en el extremo sur del Pacífico hispanoamericano, es la más aislada y remota de las tierras españolas. En el siglo XVIII también él crece: la producción (y por tanto la exportación) de metales preciosos está en ascenso y llega hacia fines de siglo a cerca de dos millones de pesos anuales. Pero la economía chilena no dispone de otros rubros fácilmente exportables: si el trigo encuentra su mercado tradicional en Lima, la falta de adquirentes frena una posible expansión ganadera: los cueros de la vertiente atlántica encuentran acceso más fácil a Europa que los de Chile; el sebo tiene en Perú un mercado seguro, pero limitado. La población crece más rápidamente de lo que esa economía en lento avance haría esperar (al parecer se acerca al millón de habitantes hacia 1810) y sigue siendo abrumadoramente rural (Santiago, la capital, no llega a los diez mil habitantes) y formada de blancos y mestizos. Este avance demográfico, vinculado con la expansión del área ocupada (por conquista sobre la muy resistente frontera indígena, acelerada en el siglo XVIII gracias al nuevo interés de la metrópoli por la empresa), se da sin transformaciones notables de la estructura social: el campo es dominado por la gran propiedad, y trabajado cada vez más por labradores que explotan lotes individuales a la vez que cultivan la tierra señorial. En todo caso, la clase terrateniente se renueva en el siglo XVIII, abriéndose a no escasos inmigrantes peninsulares llegados a Chile, como a otras partes, como burócratas o comerciantes. En este último campo se da también la afirmación de un no muy numeroso grupo de mercaderes peninsulares que utilizan, sea la ruta directa a la metrópoli, sea sobre todo la de Buenos Aires.

En Chile, la oposición entre peninsulares y americanos es la dominante: la larga resistencia de los araucanos ha impedido su integración como grupo en la sociedad colonial; si el aporte indígena a la población chilena es sin duda –en la

perspectiva de casi tres siglos de dominio español– el más importante, se ha traducido en la formación de un sector mestizo en que los aportes culturales son abrumadoramente españoles, y que se distingue mal del blanco: es por lo tanto imposible medir la exactitud de los cálculos de comienzos del siglo XIX, que dan un 60 por 100 de mestizos (mientras padrones de 1778 atribuían a ese sector sólo un 10 por 100 del total); es la noción misma de mestizo la que –insuficientemente definida– explica esas oscilaciones. La población negra es escasa (cosa nada sorprendente en una región de riqueza monetaria también comparativamente pequeña); al llegar la revolución los negros y mulatos no pasan en mucho de los diez mil.

Mientras Chile permanece escasamente tocado por las transformaciones de la estructura imperial de la segunda mitad del siglo XVIII, el **Río de la Plata** es, acaso, junto con Venezuela y las Antillas, la comarca hispanoamericana más profundamente afectada por ellas. Por razones ante todo políticas (necesidad de establecer una barrera al avance portugués), la Corona aporta su apoyo decidido a un proceso que ya ha comenzado a insinuarse: la orientación hacia el Atlántico de la economía de Tucumán, de Cuyo, del Alto Perú, de Chile. Es ése un aporte decisivo al crecimiento de Buenos Aires, centro de importación de esclavos para todo el sur del imperio español desde 1714, y desde 1776 cabeza de virreinato (y, por tanto, capital administrativa del Alto Perú), a la que un conjunto de medidas que gobiernan su comercio aseguran algo más que las ventajas derivadas de su situación geográfica y la dotan de un *hinterland* económico que va hasta el Pacífico y el Titicaca. El ascenso de la ciudad es rápido; no sólo crece su población, también su aspecto se transforma desde aldea de casas de barro hasta réplica ultramarina de una ciudad de provincia andaluza.

Este crecimiento refleja el de una administración hecha más frondosa por las reformas borbónicas, pero también el de

una clase mercantil súbitamente ampliada -como en otras partes- gracias a la inmigración de la Península, y enriquecida con igual rapidez. Ese sector mercantil prospera, sobre todo, gracias a su dominio sobre los circuitos que rematan en el Alto Perú: en sus años mejores la capital del nuevo virreinato exporta por valor de algo más de cinco millones de pesos, de los cuales el 80 por 100 es plata altoperuana. Igualmente vinculada con el Norte está la economía del interior rioplatense: la de los distritos comerciales, ganaderos, artesanales de la ruta altoperuana, que envían mulas y lanas, pieles curtidas y carretas hacia el Norte minero, pero también la de los distritos agrícolas subandinos, donde gracias al riego se cultiva el trigo, la vid y la alfalfa. Unos y otros encuentran un mercado alternativo en el litoral y en su rica capital, pero los productos agrícolas han sufrido un golpe muy rudo con la aproximación económica de la metrópoli, luego de 1778: el trigo, el vino del Levante español expulsan de Buenos Aires a los de Cuyo.

Aunque menos rápidamente que su capital, el conjunto del litoral rioplatense crece en la segunda mitad del siglo XVIII a ritmo afiebrado. Más bien que las tierras dominadas desde antiguo (las de Buenos Aires y Santa Fe, que desde el siglo XVI son defendidas contra los indios para asegurar una salida al Atlántico al sur de las Indias españolas, y en que hasta mediados del siglo XVIII ha dominado una ganadería destructiva, que caza y no cría el vacuno) son las más nuevas al este del Paraná y del Río de la Plata las que se desarrollan. Sus ventajas son múltiples: aquí dos siglos de historia no han creado una propiedad ya demasiado dividida para las primeras etapas de ganadería extensiva; aquí está más cerca ese reservorio de mano de obra en que se han transformado las misiones guaraníes, luego de la expulsión de los jesuitas; aquí (al revés que en las tierras de Buenos Aires y Santa Fe) los indios no constituyen una amenaza constante; si no han abandonado su papel de saqueadores, se han constituido a la vez en intermediarios entre las tierras españolas y las portuguesas (y el contrabando de ganado al Brasil es uno de los motores de la expansión ga-

nadera). Una sociedad muy primitiva y muy dinámica se constituye en esas tierras nuevas, laxamente gobernadas desde las jurisdicciones rivales de Buenos Aires y Montevideo. Esta última ciudad, que debía ser la capital del nuevo litoral, está mal integrada a su campaña: surgida demasiado tarde, crecida sobre todo como base de la marina de guerra, le resulta difícil luchar contra el influjo de la más antigua Buenos Aires, para la cual la nueva riqueza mercantil constituye además una decisiva carta de triunfo.

Al norte del litoral ganadero las tierras de Misiones y de **Paraguay** tienen destinos divergentes. Desde la expulsión de los jesuitas Misiones ha entrado en contacto clandestino, pero cada vez más frecuente, con las tierras de colonos españoles; la estructura comunitaria indígena ha sufrido con ello; la población del territorio misionero decrece vertiginosamente (menos por la extinción o reversión al estado salvaje que gustan de suponer historiadores adictos a la memoria de la compañía que por emigración al litoral ganadero). Misiones sigue produciendo algodón (exportado bajo forma de telas rústicas) y sobre todo yerba mate, que se bebe en una infusión que los jesuitas han sabido difundir por toda la zona andina hasta Quito. Pero la producción misionera disminuye y la zona rival de Paraguay, dominada por colonos de remoto origen peninsular, triunfa: no sólo captura los mercados de yerba mate antes dominados por la compañía, también se beneficia con la política de fomento de la producción de tabaco, dirigida por la Corona contra las importaciones brasileñas; por añadidura, la expansión de la ganadería vacuna alcanza también a Paraguay.

El litoral vive dominado por los comerciantes de Buenos Aires; el pequeño comercio local es sólo nominalmente independiente, pues está atado por deudas originadas en adelantos imposibles de saldar; gracias a este predominio mercantil no surge en el litoral, hasta después de la revolución, una clase de hacendados de riqueza comparable a la de los grandes comerciantes de la capital, pese a que desde el comienzo pre-

domina la gran explotación ganadera, que utiliza peones asalariados. Los salarios son en el litoral rioplatense excepcionalmente altos, pero las necesidades de mano de obra tan limitadas que ello no frena la expansión ganadera (perjudica en cambio, cada vez más, a la agricultura cerealista, concentrada en algunos distritos rurales de Buenos Aires). La ganadería litoral tiene por principal rubro exportador a los cueros (que llegarán a enviarse a ultramar por valor de un millón de pesos anuales): la industria de carnes saladas, con destino a Brasil y La Habana, que se desarrolla en la Banda Oriental del Uruguay en los quince años anteriores a la revolución, sólo logra exportar, en los años mejores, por un valor diez veces menor.

Pero el núcleo demográfico y económico del virreinato rioplatense sigue estando en el **Alto Perú** y en sus minas (las decadentes de Potosí, las más nuevas de Oruro). En torno a las minas se expande la agricultura altoperuana, en las zonas más abrigadas del altiplano (la más importante de las cuales es Cochabamba) y una actividad textil artesanal, ya sea doméstica, ya organizada en obrajes colectivos que utilizan el trabajo obligatorio de la población indígena. Al lado de las ciudades mineras, surgen las comerciales: la más importante es La Paz, centro a la vez de una zona densamente poblada de indígenas, y abundante en latifundios y obrajes, que establece el vínculo entre Potosí y el Bajo Perú (y sufre en este aspecto con las transformaciones comerciales de fines del siglo XVIII). El Alto Perú ha sido lo bastante rico como para crear una ciudad de puro consumo: Chuquisaca, donde hallan estancia más grata los más ricos mineros de Potosí y Oruro, es además sede de una Audiencia y de una Universidad. Esa estructura relativamente compleja depende del todo de la minería, y sufre con su decadencia, agravada desde 1802 por la imposibilidad de obtener mercurio suficiente de la metrópoli. La minería consume buena parte de la mano de obra indígena, proporcionada por las tierras de comunidad y defendida por la Corona y los mineros contra las asechanzas de los propietarios blancos.

Pero la condición de los indígenas agrupados en comunidad es acaso más dura que las de los que cultivan tierras de españoles: deben, además de ofrecer en algunos casos su cuota a la mita minera (que sólo desaparecerá en 1808), mantener a caciques, curas y corregidores.

La economía y la sociedad del virreinato rioplatense muestran una complejidad que deriva, en parte, de que sus tierras han sido reunidas por decisión política en fecha reciente, luego de haber seguido trayectorias profundamente distintas. Idéntica situación en cuanto a la población: el Alto Perú es una zona de elevado porcentaje de indígenas y mestizos, con una exigua minoría blanca; por añadidura los indios –y en parte los mestizos urbanos– utilizan aún sus lenguas (quechua y aimara) y fuera de las ciudades suelen no entender español, la población negra es poco numerosa y se halla concentrada en tareas domésticas y artesanales urbanas. En el interior de las provincias rioplatenses (Tucumán y Cuyo), la población indígena era menos importante (salvo en el extremo norte); los mestizos predominaban, las tierras de comunidad eran ya excepcionales, pero el predominio de la gran propiedad no era la única situación conocida en las tierras de españoles. Había, en cambio, núcleos importantes de población negra (ésta, traída a partir del siglo XVII, luego del catástrófico derrumbe de la indígena, era, en su mayor parte, libre a fines del siglo XVIII). En el litoral las ciudades contaban con un 30 por 100 de negros y castas, entre los que predominaban los primeros; para los censos no existen casi indios ni mestizos pero, como en Chile, sus cifras parecen reflejar más bien la preponderancia de las pautas culturales españolas que un predominio de la sangre europea, desmentido por los observadores. En la campaña ganadera los negros eran más escasos, los indios (guaraníes), más frecuentes, y la indiferencia a las fronteras de casta hacía menos fácil alcanzar una imagen clara de su equilibrio. En Misiones una sociedad indígena estaba en rápido derrumbe, en Paraguay y el norte de Corrientes una mestiza (que usaba como lengua el guaraní, pero cuyos usos

culturales eran más españoles que indios) estaba sometida a una clase alta que se proclamaba (no siempre verazmente) blanca.

He aquí un cuadro complejo hasta el abigarramiento: ello no tiene nada de sorprendente si se tiene en cuenta que en él se refleja el destino divergente de las comarcas hispanoamericanas a través de la primera y la segunda colonización española; a fines del siglo XVIII un equilibrio rico en desigualdades tiende a ser reemplazado por otro que, sin eliminarlas, introduce otras nuevas. Es posible –y oportuno– señalar, junto con tantas diferencias, ciertos rasgos comunes a toda la América española. Uno de ellos es el peso económico de la Iglesia y de las órdenes, que se da, aunque con intensidad variable, tanto en México como en Nueva Granada o en el Río de la Plata, y que influye de mil maneras diversas en la vida colonial (como la mayor parte de las consecuencias no son propiamente económicas –en este aspecto la diferencia entre la propiedad civil y eclesiástica no era tan notable como hubiera podido esperarse–, se las examinará, sin embargo, más adelante). Otro es la existencia de líneas de casta cada vez más sensibles, que no se afirman tan sólo allí donde coinciden con diferencias económicas bien marcadas (por ejemplo en sociedades como la serrana de los Andes o la mexicana, donde los indios son –como los definirá luego un pensador peruano– «una raza social»), sino también donde, por el contrario, deben dar nueva fuerza a diferenciaciones que corren peligro de borrarse, sobre todo entre los blancos, los mestizos y mulatos libres. Las tensiones entre estos grupos étnicos envenenan la vida urbana en toda Hispanoamérica, desde Montevideo, una fundación de aire tan moderno en ese Río de la Plata relativamente abierto a los vientos del mundo, en que un funcionario no logra, ni aun mediante una declaración judicial que atestigua la pureza de su sangre española, esquivar una insistente campaña que lo presenta como mestizo, y por lo tanto indigno de ocupar cargos de confianza, hasta Venezuela, en que la nobleza criolla, a través de algunos de sus miembros más ilustrados,

se hace portavoz de resistencias más amplias al protestar contra la largueza con que las autoridades regias distribuyen ejecutorias de hidalguía a quienes tienen con qué pagarlas. Allí donde existe, además, el abismo entre dominadores blancos y pobladores indios, esa resistencia adquiere un tono aún más prepotente y violento, tanto más irritante porque muchos de los que son legalmente blancos sólo pueden pasar por tales porque en los dos siglos anteriores las curiosidades sobre linajes eran menos vivas.

La diferenciación de castas es, sin duda, un elemento de estabilización, destinado a impedir el ascenso de los sectores urbanos más bajos a través de la administración, el ejército y la Iglesia, a la vez que a despojar de consecuencias sociales el difícil ascenso económico obtenido por otras vías, pero su acuidad creciente revela acaso el problema capital de la sociedad hispanoamericana en las últimas etapas coloniales: si todas las fronteras entre las castas se hacen dolorosas es porque la sociedad colonial no tiene lugar para todos sus integrantes; no sólo las tendencias al ascenso, también las mucho más difundidas que empujan a asegurar para los descendientes el nivel social ya conquistado se hacen difíciles de satisfacer, en una Hispanoamérica donde el espacio entre una clase rica en la que es difícil ingresar y el océano de la plebe y las castas sigue ocupado por grupos muy reducidos. Con estas tensiones se vincula la violencia creciente del sentimiento antipeninsular: son los españoles europeos los que, al introducirse arrolladoramente (gracias a las reformas mercantiles y administrativas borbónicas) en un espacio ya tan limitado, hacen desesperada una lucha por la supervivencia social que era ya muy difícil. Por añadidura, el triunfo de los peninsulares no se basa en ninguna de las causas de superioridad reconocidas como legítimas dentro de la escala jerárquica –a la vez social y racial– vigente en Hispanoamérica: por eso mismo resulta menos fácil de tolerar que, por ejemplo, la marginación de los mestizos por los criollos blancos, que no hace sino deducir consecuencias cada vez más duras de una diferenciación jerárquica ya

tradicional. La sociedad colonial crea así, en sus muy reducidos sectores medios, una masa de descontento creciente: es la de los que no logran ocupación, o la logran sólo por debajo del que juzgan su lugar. En México, que comienza a ser arrollado por el crecimiento demográfico, o en las ciudades de la sierra sudamericana con su rígida diferenciación entre castas y españoles, o en Lima, afectada por la decadencia económica, o aun en el litoral rioplatense, en que el crecimiento económico es más rápido que el de la población, esos hijos de familia ociosos comienzan a ser, para los observadores más agudos, un problema político: de ellos no se puede esperar lealtad alguna al sistema. Problema agravado porque en lo más bajo de la escala veremos reproducirse una situación análoga: frente a los léperos de la capital mexicana, Lima, Santiago, y aun Buenos Aires, pueden exhibir también una vasta plebe sin oficio, que sobrevive precariamente gracias –como se dice– a la generosidad del clima y del suelo, gracias, sobre todo, a la modestia de sus exigencias inmediatas. Su tendencia al ocio puede ser reprochada, pero no hay duda de que el sistema mismo la alienta, en la medida en que crea a los sectores artesanales libres la competencia de los esclavos. De nuevo es impresionante volver a descubrir esta constante de la sociedad colonial hispanoamericana en Buenos Aires, que con sus cuarenta mil habitantes cumple funciones económicas y administrativas muy vastas en el sur del imperio español, pero no logra dar ocupación plena a su población relativamente reducida.

Esta característica de la sociedad urbana colonial crea una corriente de malevolencia apenas subterránea, cuyos ecos pueden rastrearse en la vida administrativa y eclesiástica y de modo más indirecto, pero no menos seguro en la literatura. Tiende, por otra parte, a agudizar el conflicto que opone a los peninsulares y el conjunto de la población hispanoamericana (en particular la blanca y la mestiza). Si no en su origen, por lo menos en sus modalidades este conflicto estuvo condicionado por las características de la inmigración desde la metrópoli. Desde el comienzo de la colonización ésta había sido relati-

vamente poco numerosa; iba a seguir siéndolo a lo largo de la expansión del siglo XVIII: en el momento de la emancipación no llegan, sin duda, a doscientos mil los españoles europeos residentes en las Indias; esto cuando la presencia de la metrópoli y sus hijos se hace sentir de modo cada vez más vivo. En la vida administrativa como en la mercantil, los españoles europeos constituyen un sector dirigente bien pronto peligrosamente aislado frente a rivales que tienen (a veces tan sólo creen tener) apoyos más vastos en la población hispanoamericana.

Pero si dejamos de lado tensiones ricas sobre todo en consecuencias futuras, el agolpamiento de la población urbana (que sigue siendo relativamente escasa) en torno a posibilidades de ocupación y ascenso demasiado limitadas para ella, se revela como un aspecto de otro rasgo más general: la desigualdad extrema de la implantación de la sociedad hispanoamericana en el vastísimo territorio bajo dominio español. Se ha visto ya cómo casi la mitad de los trece millones de habitantes de las Indias españolas se concentraban en México: aun aquí la población se agolpaba en el Anahuac, que podía ofrecer en sus zonas nucleares paisajes rurales de tipo europeo, pero estaba orlado de desiertos, algunos naturales –es el caso del Norte–, otros creados por la pura falta de pobladores. Fuera de México, y salvo las zonas de fuerte población indígena, mal soldadas a la economía y la sociedad colonial, el desierto es la regla: antes de los intérpretes románticos de la realidad argentina, un obispo de Córdoba pudo preguntarse, hacia 1780, si la población demasiado tenue de su diócesis no hacía radicalmente imposible la disciplina social, sin la cual ni la lealtad política al soberano ni la religiosa a la Iglesia podrían sobrevivir. Y lo mismo podría repetirse en muchas partes.

Sin duda, contra ciertas críticas demasiado sistemáticas del orden español, es preciso recordar que esta distribución desigual era en parte imposición de la geografía: la violencia de los contrastes de población en Hispanoamérica se debe en parte al abrupto relieve, a las características de los sistemas hidrográficos, a las oposiciones de clima que suelen darse aun en espa-

cios pequeños. Pero las modalidades de la conquista vinieron ya a acentuarlos: al preferir las zonas de meseta (donde la adaptación de los europeos al clima era más fácil, pero sobre todo donde la presencia de poblaciones prehispánicas de agricultores sedentarios hacía posible la organización de una sociedad agraria señorial) condenó a quedar desiertas aun a tierras potencialmente capaces de sostener población densa. Aunque la expansión del siglo XVIII corrigió en algunos aspectos la concentración anterior en las zonas altas mexicanas y andinas (a ella se debe la nueva expansión antillana, la venezolana, la rioplatense) reprodujo en las zonas que valorizaba los mismos contrastes de las de más antigua colonización: a una ciudad de Buenos Aires con población sobrante se contraponía una campaña en que la falta de mano de obra era el obstáculo principal a la expansión económica; y la situación no tendía a corregirse, sino a agravarse con el tiempo (un proceso análogo puede rastrearse en Venezuela). Esos desequilibrios son consecuencia del orden social de la colonia: no sólo en las tierras en que la sociedad rural se divide en señores blancos y labradores indios, también en la de colonización más nueva y estructura más fluida las posibilidades de prosperidad que ofrece la campaña no compensan la extrema rudeza de la vida campesina: no es extraño entonces que aun los indigentes de la ciudad de Buenos Aires sólo participen en las actividades agrícolas cuando son obligados a ello por la fuerza. Aun dentro de la ciudad se reiteran actitudes análogas: la repugnancia por los oficios manuales, que es achacada a veces a perversas características de la psicología colectiva española, o bien a la supervivencia de un sistema de valoraciones propio de una sociedad señorial, se apoya en todo caso en una valoración bastante justa de las posibilidades que ellos abren a quienes tienen que luchar con la concurrencia de un artesanado esclavo, protegido por los influyentes amos en cuyo provecho trabaja. Que esta consideración es la decisiva lo muestra el hecho de que, ignorando tradiciones que también le son hostiles, la actividad mercantil es extremadamente prestigiosa (porque, sin duda, a

diferencia de la artesanal, es lucrativa). El agolpamiento de grupos humanos cada vez más vastos en torno de las limitadas posibilidades que ofrecen los «oficios de república», o las de un sistema mercantil al que contribuyen a hacer cada vez más costoso, se apoya entonces, a la vez que en consideraciones de prestigio, en una noción sustancialmente justa de las posibilidades de prosperar que dejaba abiertas el orden colonial.

Debido a esa desigual implantación, la colonización seguía concentrada –como se ha señalado ya– en núcleos separados por desiertos u obstáculos naturales difícilmente franqueables; antes de alcanzar el vacío demográfico y económico la instalación española se hace, en vastísimas zonas, increíblemente rala. En México, y pese a las tentativas de proteger esas tierras de las asechanzas de potencias rivales, la franja septentrional de las tierras españolas sigue siendo un cuasi vacío; a ambos lados de la ruta del istmo, entre Panamá y Portobelo (que había sido hasta el siglo XVIII uno de los ejes del sistema mercantil español), tierras mal dominadas la separan de Guatemala y Nueva Granada. De nuevo entre ésta y Venezuela, entre Quito y Perú, la barrera formada por los indios de guerra que siguen poblando las tierras bajas hacen preferibles las rutas montañesas. No es extraño entonces que en la monótona epopeya que los textos escolares han hecho de la guerra de independencia, algunos de los momentos culminantes los proporcione la victoria del héroe sobre la montaña y el desierto: es Bolívar irrumpiendo desde los Llanos en Nueva Granada; es San Martín cayendo a través de los Andes sobre el valle central de Chile...

Cada uno de esos núcleos tan mal integrados con sus vecinos suele carecer, además, de coherencia interna: en Nueva Granada o en el Río de la Plata los istmos terrestres (surgidos en torno a rutas esenciales que cruzan tierras nunca enteramente conquistadas) van a durar hasta bien entrado el siglo XIX. Ese escaso dominio de las tierras, sumado a los obstáculos naturales, explica la importancia que conservan los ríos en el sistema de comunicación hispanoamericana: el transpor-

te fluvial permite esquivar las dificultades que una naturaleza apenas transformada impone al terrestre; proporciona además una relativa seguridad cuando se trata de bordear zonas pobladas por indios guerreros: así ocurre con el Orinoco en Venezuela, con el Paraná-Paraguay entre Santa Fe y Asunción, en el Río de la Plata. En estas condiciones, aun atravesar las rutas axiales de una comarca puede exigir (como van a descubrir los viajeros europeos a comienzos del siglo XIX) algún heroísmo.

Un heroísmo que debe multiplicarse ante las dificultades de la geografía. Los ríos pueden ser preferibles a las rutas terrestres; aun así presentan a menudo riesgos muy serios: el Magdalena, que comunica las tierras altas de Bogotá con la costa neogranadina, es rico en saltos traicioneros, y el viajero no puede ver sin inquietud a los enormes saurios tendidos en paciente espera...

Por tierra es, desde luego, lo mismo y peor: donde las favoritas tierras altas se estrechan, la ruta se transforma en un laberinto de breñas salvajemente inhospitalarias: así en el nudo de Pasto, entre Nueva Granada y Quito. Y por otra parte la comunicación entre tierras altas y bajas suele ser mala, y no hay siempre un río que facilite la transición: la salida de la meseta de Anahuac (núcleo del México español) hacia el Atlántico y hacia el Pacífico no se da sin dificultades; aun más laboriosa es la comunicación entre las tierras altas y las bajas del Perú...

Las consecuencias de estas dificultades en cuanto a la cohesión interior de Hispanoamérica eran, sin embargo, menos graves de lo que hubiera podido esperarse. Como pudo advertir C. Lévi-Strauss, en el Brasil aun arcaico que él alcanzó a conocer, la general dificultad de las comunicaciones favorecía comparativamente a las zonas más abruptas; puesto que era preciso vencerlas a la salida misma de las capitales (en las afueras de Buenos Aires un océano de barro constituía uno de los obstáculos más graves al transporte carretero de la pampa; muy pronto, al salir de Lima sólo era posible seguir avanzando con mulas), era posible utilizar esa victoria de todos modos indispensable para alcanzar los rincones más remotos.

Mantener en uso el sumario sistema de comunicaciones internas es en todo caso una victoria extremadamente costosa, a la vez en esfuerzo humano y económico: el transporte de vino de San Juan a Salta –una ruta rioplatense relativamente frecuentada– implicaba para arrieros y mulas cuarenta días de marcha sin encontrar agua. Dejemos de lado la resignación heroica (compartida por los más encumbrados en la sociedad hispanoamericana; por la ruta fluvial del Magdalena, que provoca el mal humor y a ratos el terror de los viajeros ultramarinos del siglo XIX, han llegado a su sede bogotana prelados y virreyes, animados frente a sus riesgos e incomodidades de sentimientos más sobrios, o por lo menos más sobriamente expresados). Pero las consecuencias económicas de esas modalidades del sistema de comunicaciones son muy graves: a principios del siglo XIX, en Mendoza, una próspera pequeña ciudad en la ruta entre Buenos Aires y Santiago, en la que el comercio era menos importante que la agricultura, un 10 por 100 de la población es flotante: está formado por los carreteros... En transportes se agota entonces una parte importante de la fuerza de trabajo, a menudo escasa. Y por otra parte no es éste el único aspecto en que el peso del sistema de transportes se hace sentir. Las mulas de la montaña tienen un rendimiento limitado en el tiempo; aun en el Río de la Plata, en que la llanura facilita excepcionalmente el transporte, las carretas sólo resisten un corto número de travesías pampeanas. De allí la prosperidad de Tucumán, donde una industria artesanal produce carretas empleando cueros y maderas duras locales; de allí (por lo menos en parte) la expansión de la explotación de mulas en Venezuela, en el norte del Perú, en el Río de la Plata. Pero este consumo desenfrenado de los medios de transporte no contribuye por cierto a abaratar las comunicaciones; introduce, por el contrario, uno de los rubros más pesados en el coste total del sistema.

Gracias a él se da una Hispanoamérica a la vez integrada (en ciertos aspectos más que la actual) y extremadamente fragmentada en áreas pequeñas; una Hispanoamérica, en

suma, que recuerda a la Europa del quinientos, atravesada de una red de rutas comerciales que sólo a precio muy alto vencen las distancias y que comunican muy insuficientemente a unidades económicas diminutas. Este sistema de transportes seguía siendo más adecuado a la Hispanoamérica de la primera colonización que a la que comenzaba a esbozarse, dividida en zonas de monoproducción económicamente soldadas a ultramar: la supervivencia misma del esquema de comunicaciones que le es previo muestra hasta qué punto esta transformación sigue siendo incompleta.

Se ha visto ya cómo esta última –por limitados que aparezcan sus alcances– sólo en parte puede atribuirse a la evolución de las fuerzas internas a las Indias españolas; no hay duda de que la Corona de España, si se preocupó de dominar su rumbo, quiso y logró acelerar su ritmo. Las innovaciones dirigidas por la Corona tienen dos aspectos: el comercial y el administrativo. En lo primero lograron comenzar la transformación del comercio interregional hispanoamericano, y favorecieron el surgimiento de núcleos de economía exportadora al margen de la minería. Pero si en el aspecto propiamente comercial la transformación fue muy amplia, el cambio en el equilibrio entre los distintos rubros de producción no hace sino insinuarse: sólo Venezuela, y más tardíamente Cuba, conocen una expansión totalmente desvinculada de la minería tradicional; en México, en Nueva Granada, en el Río de la Plata –las otras regiones en expansión de Hispanoamérica–, el lugar de la minería sigue siendo dominante. La minería, si no es en ninguna parte la que proporciona la mayor parte de la producción regional, sigue dominando las exportaciones hispanoamericanas; la división entre un sector minero que produce para la exportación, y otras actividades primarias, cuyos frutos sólo excepcionalmente cruzan el océano, se mantiene vigente pese a las excepciones nuevas como el tabaco y el azúcar de Cuba, el cacao de Venezuela y Quito, los cueros del Río de la Plata.

La reforma mercantil se muestra más influyente en cuanto a las importaciones. La libertad de comercio en el marco im-

perial acerca a las Indias a la economía europea, abarata localmente los productos importados y hace posible entonces aumentar su volumen. Esta transformación, que corresponde al cambio de las funciones asignadas a las Indias frente a su metrópoli, no sólo está lejos de significar una incorporación plena de los potenciales consumidores hispanoamericanos a un mercado hispánico unificado; aun examinada a la luz de objetivos más modestos se revela muy incompleta: el uso de bienes de consumo importados (telas, algunos comestibles, ferretería) que se limita a las capas sociales más altas, conoce además limitaciones geográficas, y se difunde peor lejos de los puntos de ingreso de la mercadería ultramarina, que se han multiplicado en el siglo XVIII, pero no en la medida que hace teóricamente posible la reforma legal del comercio imperial, y que siguen proveyendo a precio muy alto a los distritos más alejados. A esas limitaciones se suman las que provienen de la escasez de productos exportables fuera de la minería, que sigue haciendo difícil aun a los más ricos incorporarse como consumidores a la economía mundial, o las que derivan de un sistema de comercialización particularmente gravoso para la producción primaria no minera: así en México el Norte minero está mejor provisto que el ganadero, a pesar de que las dificultades de comunicación desde Veracruz son comparables, y en Buenos Aires aun los más ricos de la zona ganadera llevan vida muy sencilla; pese a las censuras de quienes vieron en esa simplicidad un signo de barbarie, no es imposible vincularla con el encarecimiento que el sistema de comercialización imponía a los productos importados, aun a distancia tan corta del puerto de ingreso.

Con todas esas limitaciones las reformas mercantiles parecen introducir un nuevo equilibrio entre importaciones y exportaciones, menos brutalmente orientado en favor de la metrópoli. Esa innovación es balanceada por otras: en primer lugar, la que significa la conquista de los grandes circuitos comerciales hispanoamericanos por comerciantes peninsulares, cuya autonomía frente a las grandes casas de Barcelona y Cá-

diz suele ser ilusoria. En efecto, la victoria de Veracruz sobre México, la de Buenos Aires sobre Lima significan -se ha visto ya- la de una nueva capa de comerciantes peninsulares sobre quienes han dominado a una Hispanoamérica menos vinculada a la metrópoli. Pero no son sólo los comerciantes peninsulares quienes hacen sentir más duramente su presencia: es también la Corona, cuyas tentativas de reforma tienen, sin duda, motivación múltiple, pero están inspiradas por una vocación fiscalista que no se esfuerza por ocultarse. Entre mediados y fines del siglo XVIII las rentas de la Corona se triplican (pasan -muy aproximativamente- de seis a dieciocho millones de pesos); sin duda ese aumento permite la creación de una estructura administrativa y militar más sólida en Indias, pero también hace posibles mayores envíos a la Península. No es casual en este sentido que en los años de mayores transformaciones administrativas se hayan dado sublevaciones que -teniendo en otros aspectos caracteres muy variados- presentaban como rasgo común la protesta contra el peso acrecido del fisco.

Sería, sin embargo, erróneo ver detrás de la reforma administrativa (testimonio de la presencia de una España más vigorosa) tan sólo la intención de extraer mayores rentas fiscales de las Indias. Puede encontrársele también una intención de fortalecimiento político, visto sobre todo en la perspectiva militar que estaba tan presente en el reformismo ilustrado -sobre todo en el de los países marginales- y que hacía, por ejemplo, que en los desvelos por mejorar la agricultura colonial la preocupación por la extensión del cultivo del cáñamo ocupase un lugar desmesurado (porque el cáñamo podía proveer de buenas cuerdas a la marina regia). A la vez que medio para obtener otros fines, la mejora administrativa era para las autoridades españolas un fin en sí mismo: habían llegado a estar tan convencidas como sus más violentos críticos de que las insuficiencias administrativas eran tan graves que en caso de seguir tolerándoselas terminarían por amenazar la existencia misma del vínculo imperial.

Sin duda los defectos del sistema administrativo heredado -frente a las nuevas exigencias de racionalidad que se estaban abriendo paso, por otra parte bastante lentamente, en la metrópoli- eran muy evidentes. Las atribuciones de las distintas magistraturas se superponían, y las dificultades que ello provocaba se acentuaban cuando los conflictos de jurisdicción se daban muy lejos de quienes podían resolverlos, y encontraban modo de perdurar y agravarse. El esquema administrativo de las Indias nos enfrenta con autoridades de designación directa o indirectamente metropolitana (virreyes, audiencias, gobernadores, regidores) y otras de origen local (cabildos de españoles y de indios); unas y otras ejercen funciones complejas -y variables según los casos- en el gobierno de la administración, la hacienda, el ejército y la justicia. Las audiencias unen a sus funciones judiciales otras de control administrativo, y aun ejecutivas; algunas de ellas son, por otra parte, las encargadas de promulgar nuevas normas originadas en la Corona, y para ello se encuentran en comunicación directa con ésta (a través del organismo creado para entender en los asuntos americanos, el Consejo de Indias). Por añadidura, en algunos casos la presidencia de la Audiencia implica el gobierno administrativo de la zona en que ésta tiene jurisdicción (es el caso de Quito o Guatemala) bajo la supervisión a menudo bastante nominal de un virrey de jurisdicción más vasta.

Los virreyes tienen funciones de administración, hacienda y defensa que ejercen sobre territorios demasiado extensos (hasta principios del siglo XVIII hay sólo dos virreinatos en las Indias: el de México y el de Perú) para que puedan cumplirlas eficazmente; la delegación de autoridad es ineludible, pero no se la institucionaliza sino en muy pequeña medida.

Por debajo del virrey, gobernadores y corregidores son administradores de distritos más reducidos, de designación regia en el primer caso, virreinal en el segundo. Si los gobernadores suelen ser funcionarios de carrera, que a lo largo de ella son trasladados de un extremo a otro de las Indias, los corregidores son, por el contrario, figuras de arraigo local,

que no tienen renta por el cargo que ocupan, obtenido a menudo mediante compra, pero que, en cambio, pueden resarcirse mediante el sistema de repartimiento (ventas forzosas a sus gobernados).

Los cabildos de españoles son instituciones municipales organizadas sobre el modelo metropolitano; según una evolución paralela a la europea, dejan bien pronto de surgir de la elección de los vecinos para transformarse en cuerpos que se renuevan por cooptación (es el caso de los cabildos más pobres) o por venta, a veces con garantía de transmisión hereditaria. Los cabildos de españoles tienen jurisdicción administrativa y de baja justicia sobre zonas muy amplias, a menudo escasamente urbanizadas. Los de indios se crean sólo allí donde se da una población indígena densa: su existencia es una de las manifestaciones de la tendencia de los colonizadores a delegar buena parte del control de los indígenas en una elite de origen prehispánico, a la que transforman así en aliada y subordinada. Otra manifestación de la misma tendencia la encontramos en la existencia de los *caciques* (en Perú curacas) que gobiernan a los indígenas reunidos en grupos más pequeños y gozan de privilegios personales (la exención del tributo), a más de las ventajas que logran extraer de sus gobernados.

Los complejos entrelazamientos que el sistema comporta están todavía acrecidos por los medios de control extraordinario: las visitas (protagonizadas por funcionarios extraordinarios enviados desde la metrópoli para examinar y resolver situaciones especiales, surgidas de la conducta de una magistratura local o –mucho más frecuentemente– de los conflictos entre varias) y las residencias, que imponían el juicio de los funcionarios al terminar su actuación, por otros funcionarios designados en cada caso para ese fin. El resultado era desde luego la existencia de conflictos siempre renovados, dentro de cada magistratura colegiada o entre las distintas magistraturas; cada uno de esos conflictos se traducía en un alud de encendidas y contradictorias denuncias; ello llevó a que las autoridades metropolitanas, incapaces de entender qué pasaba

de veras, adoptasen generalmente una extrema prudencia en sus intervenciones directas.

Dentro del cuadro tradicional, el siglo XVIII asistirá a un proceso de creación de nuevas unidades administrativas (se forman dos nuevos virreinatos: el de Nueva Granada, creado en 1717 -suprimido en 1724 volvería a establecerse en 1739- y el del Río de la Plata, creado en 1776; se otorga mayor poder de decisión a autoridades regionales dentro de los virreinatos -es el caso de Venezuela y Quito en el de Nueva Granada; Cuba, Santo Domingo y Guatemala en el de México; Chile en el de Perú-). Pero al lado de esas transformaciones, vinculadas sobre todo a necesidades de defensa (la mayor parte de las nuevas unidades administrativas se crean en zonas amenazadas en el curso de las guerras del siglo XVIII) y destinadas a hacer más eficaz la administración, se da otra modificación de intención más ambiciosa. En la metrópoli y en las Indias se trata de erigir un aparato administrativo más sólidamente controlado por la Corona; esta tentativa, llevada adelante con un respeto formal nunca desmentido por las situaciones establecidas, se expresó en la creación del Ministerio de Indias, destinado a quitar buena parte de su poder efectivo a ese refugio de administradores coloniales retirados que había llegado a ser el Consejo de Indias. En América esa tentativa se centró en la más ambiciosa de las reformas administrativas del siglo XVIII: la creación de los intendentes de ejército y hacienda.

Sin duda ésta no hace sino trasladar a las Indias una innovación previamente introducida en España imitando el modelo francés. Pero en Hispanoamérica la creación de las intendencias (que unifica atribuciones administrativas, financieras y militares antes muy irregularmente distribuidas) significa un paso adelante en la organización de una alta burocracia formada y dirigida desde la metrópoli y constituido en su mayoría por peninsulares. Los intendentes tendrán a su cargo distritos en general más pequeños que los antiguos gobernadores; por otra parte, los requisitos que acompañan su designación son más rigurosos, y los poderes que se les asignan sobre las corpo-

raciones municipales, más amplios. Subordinados a los intendentes están los subdelegados, cuya designación termina por ser reservada por el virrey: estos funcionarios (y con ello el nuevo sistema comienza a mostrar flaquezas que continúan las del que viene a reemplazar) no son rentados, pero tienen derecho a adjudicarse un porcentaje de las tasas que cobran por el fisco: esta fuente de ingresos es juzgada preferible a la del repartimiento, que tiende a ser abolido (aunque no completamente).

¿Cuál es el resultado de esta compleja reforma? Para apreciarlo es posible examinar la historia posterior de Hispanoamérica: se descubrirá que muy pronto ha de darse esa disgregación política que la reforma intentaba esquivar. Pueden también compararse los propósitos y los resultados: se descubrirá que las reformas no logran disminuir los conflictos institucionales (a veces parecen proporcionarles tan sólo nuevos campos); se descubrirá también que los progresos contra la corrupción de la administración colonial son modestos. En uno y otro plano el fracaso parece evidente. Si comparamos la eficacia del sistema administrativo no sólo con la del que lo precedió sino también con la del que lo siguió, el juicio se hace menos negativo: en todas partes el progreso es indudable; en más de una región se necesitarán décadas para recuperar luego de la Independencia la eficiencia administrativa perdida con ella.

Ese fracaso sólo parcial era por otra parte inevitable: la Corona buscaba crear un cuerpo de administradores que fueran realmente sus agentes, y no los de los círculos de intereses locales demasiado abrigados contra la curiosidad metropolitana, pero el cuerpo que organizó era demasiado limitado en número; cada intendente se hallaba sustancialmente solo frente a un sistema de intereses consolidados, ante cuya ofensiva combinada y tenaz no sabía hasta qué punto sus superiores lo sostendrían; no es extraño que aun los más rígidamente honrados hayan buscado –aun pagando un cierto precio– apoyos en grupos locales para combatir a otros; que los más

desprejuiciados (o los más afortunados) se hayan incorporado a la solidaridad sin fisuras de los intereses locales de las zonas que gobernaban, haciendo pagar de muchas maneras su silencio cómplice. Y es difícil reprochárselo demasiado: esos intereses saben buscar alianzas en la estructura administrativa y judicial, hacer oír hasta en la corte su propia versión, tan escandalosamente contradictoria con la del intendente que aun los historiadores actuales no logran decidir si tal o cual de esos funcionarios que ha acrecentado las rentas reales es un espejo de honradez o un monstruo que, exprimiendo los últimos recursos de sus gobernados, logra enriquecerse a sí mismo a la vez que a su soberano; si el coro de alabanzas que rodea a la gestión serena de tal otro es un premio a la rectitud sumada a la habilidad o es la voz de una complicidad universal en un sistema de corrupción, del que el funcionario tan profusamente alabado es parte. Pese a todos los cambios, evitar los conflictos sigue siendo una buena política para quien quiera hacer exitosa carrera burocrática en Indias, y los conflictos se evitan mejor no provocando las iras de los localmente poderosos.

Esas limitaciones impiden entonces que la reforma administrativa haya puesto realmente en manos de la Corona el gobierno de sus Indias; el poder de los agentes del rey sigue limitado, a la vez que por la corrupción, por un margen de indisciplina que, a condición de no traducirse en rebelión abierta, podía ser muy amplio. Pero sería erróneo creer que la reforma se proponía tan sólo controlar mejor las Indias; por lo menos en parte quería colaborar en su progreso. Por eso no son contradictorias las medidas centralistas con las que ponen una parte de esa tarea a cargo de corporaciones locales; desde las que intentaban organizar en gremios a los artesanos (y que tuvieron fortuna muy variada y en general escasa) hasta las que crearon en México el cuerpo de mineros, y en más de un puerto, desde Veracruz a Buenos Aires, consulados de comercio. Órganos de justicia corporativa y representantes de los intereses del grupo que en ellos se reunía, estos cuerpos

disponían además de fondos propios, derivados de impuestos que estaban autorizados a percibir, y los invertían (con eficacia sin duda mayor que la Administración central) en obras de fomento en que el interés del sector que agrupaban era desde luego el dominante: a los mineros de México se debe la Escuela de Minas, y pese a las censuras sistemáticas de Alamán, que veía en su suntuosa sede un monumento a la derrochadora soberbia criolla, otros jueces, acaso menos parciales, juzgaron con menos severidad una institución a la que los trabajos de los Elhuyar pusieron en nivel internacional. Los consulados, por su parte, invirtieron fondos en arreglo y construcción de caminos (el famoso de Perote, entre Veracruz y México, que abría una practicable ruta carretera en el empinado ascenso de la costa a la meseta; las muchas mejoras locales introducidas en las rutas que partían de Buenos Aires), en los puertos y en otras ayudas a la navegación; también financiaban instituciones de enseñanza técnica... Igualmente, reunían los consulados información y crítica sobre la situación económica local; en esto su tarea se complementaba con la de los funcionarios de carrera, también ellos encargados de llevar adelante estas encuestas periódicas. Unos y otros suelen desempeñarse muy bien; sin duda hay algo de la parcialidad del historiador agradecido por contar con esos testigos excepcionalmente capaces de anticiparse a sus curiosidades (que faltarán de modo tan penoso luego de 1810) en la valoración que a partir de esos testimonios suele hacerse de quienes los proporcionan: alguno de los más valiosos parece provenir de funcionarios en otros aspectos extremadamente discutibles. Pero no hay duda que a través de ellos descubrimos lo que es uno de los motores de la reforma administrativa; ese deseo de crear un poder político fuerte que sirviera eficazmente al progreso de las Indias en que por un momento pudo reconocer su propio ideal más de uno de los que luego serían jefes de revoluciones.

La reforma de la administración se extiende a la esfera militar: también aquí encuentra una organización que descansa sobre todo en las fuerzas locales, a la que va a transformar

creando como núcleo de las fuerzas armadas de las Indias un ejército profesional, con soldados enganchados en la Península y ya no reclutados predominantemente entre los criminales. Para los oficiales de este ejército las reformas se preocupan de asegurar una situación social espectable, mediante fueros especiales y una buena situación en la jerarquía de precedencias que conserva algo más que un sentido ceremonial. Se ha buscado en este aspecto de la reforma borbónica el punto de partida del militarismo de los tiempos independientes; si es discutible que lo sea, lo es menos que constituye uno de sus antecedentes necesarios, en cuanto crea algo que antes en rigor no existía en Indias: un ejército. El mismo esfuerzo renovador se da en cuanto a la marina, y no deja de tener importancia, al lado de la supervivencia de los viejos centros del poder naval español (como esa gigantesca fortaleza que es Cartagena de Indias en Nueva Granada), el surgimiento de otros más nuevos: San Juan de Puerto Rico, Montevideo, Talcahuano, donde se agolpa una población de oficiales y marineros de origen metropolitano.

La preocupación por la guerra está muy cerca –en la España borbónica como en otros despotismos más o menos ilustrados– de la inquietud por el progreso técnico; ello no sólo se advierte en las grandes líneas de la política regia, sino también en la acción que en nivel más modesto ejercitan más de uno de los oficiales: en el Río de la Plata son los marinos quienes comienzan la enseñanza sistemática de las matemáticas, mientras los médicos militares inauguran la de su arte...

También la Iglesia iba a ser muy tocada por la oleada de renovación. La organización eclesiástica había estado desde los orígenes de la colonización firmemente en manos del poder real; las órdenes regulares, aunque menos directamente subordinadas, no habían escapado tampoco a un control más discreto. Constituidas en un aspecto esencial de la administración española en Indias, la Iglesia y las órdenes debían a esa situación un patrimonio cuya importancia relativa variaba según las regiones, pero que era muy importante: si contra las

denuncias de los publicistas liberales no parece que la Iglesia haya sido dueña de casi toda la tierra mexicana, no hay duda de que su patrimonio territorial era muy vasto; en Nueva Granada y en Perú se daba una situación comparable; aun en algunas de las tierras nuevas su poder económico era considerable: en Córdoba del Río de la Plata, aun luego de la expulsión de los jesuitas, la mayor parte de los esclavos pertenecían a las órdenes. Esta propiedad eclesiástica suele estar menos mal administrada de lo que proclaman sus críticos; en particular la de las órdenes parece sostener con éxito la comparación con los resultados obtenidos por los propietarios laicos, y por otra parte cuenta frente a ellos con un conjunto de ventajas, que se resumen en último término en la mejor vinculación de esos propietarios colectivos que son las órdenes con la cultura metropolitana y a la vez con la economía monetaria: el predominio local en la propiedad de esclavos -y más aún en el crédito rural- es en este sentido revelador.

A más de dominar tierras diseminadas entre las de españoles, las órdenes siguen al frente de empresas complejas que son a la vez de evangelización y gobierno: misiones y reducciones que, en las fronteras imperiales, desde las del Alto Paraná hasta las de California, cumplen una función política precisa. Sin duda la expulsión de los jesuitas ha eliminado el más importante de esos mundos semicerrados: las misiones de Paraguay están deshaciéndose bajo la égida de sacerdotes incapaces de retomar el lugar de aquellos a quienes remplazan, y de administradores laicos menos honrados que los expulsos. No sólo en este aspecto la orden jesuítica ha mostrado ser la más capaz de encarar las tareas nuevas que la nueva hora mundial e hispanoamericana impone: en el aspecto económico constituye un aparato de producción y comercio cuya eficacia supera de lejos a la de las demás órdenes; en lo cultural, a ella se deben algunos de los aportes esenciales a la ilustración hispanoamericana. Expulsados los jesuitas, es el clero secular el que domina el panorama eclesiástico en las Indias, y la Corona juzga sin duda bueno que sea así. Sin duda el clero secu-

lar no alcanza en ningún aspecto el nivel de los expulsos: en cambio, es más dócil y, en la medida en que se renueva en sus jerarquías por impulso directo de la Corona, podrá ser remodelado conforme a los deseos de ésta.

El clero secular posee también vastas riquezas (aunque muy desigualmente distribuidas según las diócesis); lo mismo que en la metrópoli y aun más que en ella, esas riquezas se vuelcan sobre obispos y cabildos catedralicios (pese a que su personal es en todas partes más reducido que la multitud de prebendados de las catedrales peninsulares) y alcanzan mal la mayor parte del clero parroquial. Éste –sobre todo en tierras de indios, pero no sólo en ellas– se resarce cargando despiadadamente a su grey: en tal rincón de Tucumán, a principios del siglo XIX, de la humilde heredad de una campesina tres lotes sin construcciones se reparten en herencia entre sus hijos: la casa queda en manos del párroco hasta que le sea pagado el servicio funerario... Ejemplos como éste surgen por todas partes; sin embargo, las excepciones existen y se hacen más numerosas a lo largo del siglo XVIII: en la hora de la revolución serán relativamente frecuentes los párrocos que frente a sus fieles no se imponen sólo por el temor al poder demasiado terreno que por mucho tiempo los ha acompañado, ni por el respeto reverencial a su investidura, sino también por una adhesión personal que los transforma sin dificultad en jefes de multitudes revolucionarias o realistas.

Hay entonces un progreso indiscutible en el personal eclesiástico secular. Éste colabora, en algunos casos con entusiasmo, en otros casos con sólo el celo que corresponde a súbditos fieles, con la obra reformadora de la Corona: una forma de Ilustración cristiana, que encuentra su modelo en el párroco de aldea, que es a la vez pastor de almas y vocero de las nuevas ciencias y técnicas; se traduce, por ejemplo, en esas láminas diseminadas desde Guatemala a Buenos Aires, que muestran a un sacerdote llevando solemnemente en sus manos ese nuevo instrumento de salvación terrena, que es la lanceta de la vacuna. La realidad es sin duda más compleja y matizada que

esas imágenes; el clero secular reproduce bastante fielmente virtudes y defectos del cuerpo administrativo del que en cierto sentido forma parte, y los cambios en las orientaciones dominantes no le impiden conservar en los niveles más altos una preocupación muy mundana por hacer carrera, expresada no sólo en la docilidad a las tendencias generales de la política regia, sino en otros signos a veces menos decorosos. En todo caso también él ha sido agitado por los impulsos renovadores que llegan de la Europa del setecientos, y –como saben los hispanoamericanos adictos a la Ilustración– es menos incapaz de transmitir ese impulso a sectores amplios de población que una estructura burocrática, a pesar de todo sumaria y vista en todas partes con una desconfianza inspirada acaso tanto por sus virtudes como por sus defectos. Es decir, que pese a todas sus limitaciones la Iglesia conserva el especialísimo lugar que le viene desde la conquista: instrumento de gobierno y pieza indispensable del poder político colonial, es la única parte de éste que las poblaciones no sienten como totalmente extraña.

El **Brasil** que va a llegar a la independencia ha sido más transformado por el siglo XVIII que Hispanoamérica. Su zona nuclear se ha trasladado del norte azucarero al centro minero; al mismo tiempo la expansión portuguesa ha proseguido hacia el norte y el sur: al norte se ha dado la expansión del Maranhão, la instalación sumaria en la Amazonia; al sur, la apertura de una nueva tierra ganadera en Río Grande.

Hasta fines del siglo XVII es Brasil un núcleo azucarero rodeado de un contorno que lo complementa, proveyéndolo de hombres y ganados. Uno y otro sufren de manera distinta las consecuencias de la decadencia azucarera, unidas a las de una recesión secular que excede el marco brasileño. La decadencia del azúcar en primer término: luego de conquistada por Holanda una parte esencial del norte brasileño, la reconquista portuguesa es llevada adelante por fuerzas locales con escaso apoyo metropolitano (encontramos aquí una primera conse-

cuencia de las modalidades de la restauración de la independencia portuguesa en 1640: Portugal paga un precio muy alto por ella, ya que debe hacer constantes concesiones a las potencias que combaten el poder español por el cual sigue amenazado). En todo caso, reconquistados, en 1654, Recife y los distritos ocupados por los holandeses, la consecuencia es una extensión de la agricultura del azúcar a las Antillas promovida por éstos, que encuentran allí compensación a la pérdida de sus tierras brasileñas. Lo que ha sido un monopolio primero mediterráneo, luego de las islas atlánticas hispanoportuguesas y de Brasil, pasa ahora a ser un rubro de la economía colonial de Holanda, Inglaterra y, por último, Francia, que se tallan un patrimonio territorialmente exiguo, pero económicamente importantísimo en las Antillas menores y Jamaica. Frente a la concurrencia antillana, el azúcar brasileño se defiende mal: se adecúa con dificultad a un mercado mejor provisto y cuya capacidad de consumo sigue siendo limitada. A fines del siglo XVII comienza la decadencia de la economía azucarera; sin duda la palabra adquiere un sentido especial cuando se la aplica a una industria que sobrevivirá a dos siglos y medio de este proceso; en todo caso la industria azucarera brasileña se caracterizará desde ahora por cierto arcaísmo organizativo y técnico, y conocerá nuevos momentos de esplendor sólo cuando la acción conjunta del proteccionismo y la expansión de otros sectores de la economía brasileña le aseguren el dominio de un ampliado mercado interno o -más excepcionalmente- cuando hechos externos, como la catástrofe de la producción azucarera en las Antillas francesas, le devuelvan una parte del mercado mundial.

La recesión, anticipándose a la separación de España, deshace también un circuito que es muy importante para la naciente economía brasileña: el que la vincula a través de Buenos Aires con Perú. La penetración de comerciantes portugueses (sus rivales españoles la llamarán, a menudo con razón, de cristianos nuevos) ha sido muy importante hasta en la capital peruana; un comercio clandestino que amplía enormemente

el volumen del legalmente consentido entre las tierras españolas y portuguesas en América, asegura a Brasil una parte sustancial de la plata potosina; todo ello desaparece en los años inmediatamente anteriores a 1640. Sin duda cuarenta años más tarde una fundación audaz, la de la Colonia del Sacramento en la Banda Oriental del Río de la Plata, frente a Buenos Aires, rehace esa ruta, pero por una parte su importancia decrece con la de la producción potosina, y por otra sus desemboques se hallarán frecuentemente en Europa: Bahía, la capital del azúcar, a la vez que sufre con el estancamiento económico de su zona de influencia, deja de ser punto intermedio en esa ruta alternativa de la plata peruana.

La decadencia del azúcar tiene consecuencias inesperadas sobre las zonas marginales. En ellas sobrevive la que ha sido cronológicamente la primera de las formas de explotación económica de Brasil: la exportación de maderas, algo de oro y piedras preciosas, obtenidas todas por trueque con la población indígena. Pero al lado de esta actividad otras han adquirido importancia creciente: la ganadería en la retaguardia inmediata de la zona azucarera; ésta y la caza de hombres en lo que será luego el Brasil central. Tras de la tierra fértil de la costa bahiana y pernambucana comienza el *sertão*, la seca meseta esteparia donde una población mestiza explota una ganadería que, si provee de carne y bueyes de carga a la tierra del azúcar, es predominantemente de autoconsumo. Hacia el norte, la costa de lo que será Ceará y Maranhão se puebla lentamente de muy escasos colonos; su actividad más importante es la caza de indios para su venta como esclavos en las tierras de azúcar. Pero es en el centro donde esta actividad se desarrolla a ritmo cada vez más rápido: la capitanía de San Pablo se hace inmensa al abarcar el conjunto de las tierras que el centro paulista va vaciando de hombres. La expansión de esa caza del indígena no se da por casualidad en período de recesión secular: es una defensa de la economía azucarera demasiado golpeada, que no podría seguir recibiendo con ritmo creciente esclavos africanos, cuyo comercio estaba integrado en circuitos cuyo instru-

mento de cambio era esa moneda metálica, a la que debido a las crisis de las exportaciones los señores de ingenio tenían acceso cada vez más limitado. De este modo los hombres y el ganado de la retaguardia continental adquieren nueva importancia: luego de 1620, año de la destrucción de las misiones jesuíticas del Guayrá, en tierras dependientes del virreinato del Perú, prosigue hasta comienzos del siglo XVIII la expansión paulista hacia el sur y sobre todo hacia el oeste; al lado de los hombres, ésta busca diamantes y oro de aluvión. Hasta este momento tenemos –en un esquema que necesita ser matizado, pero que corresponde sustancialmente a la realidad– dos Brasiles: en primer lugar está el *sugar-belt* de señores de ingenio, dueños a la vez de la tierra y de los medios de fabricar el azúcar (el ingenio, que es el centro de molienda, no da por casualidad el nombre genérico a las fincas azucareras del Brasil del Norte), que hacen trabajar a una masa esclava africana y secundariamente india: la mezcla de europeos y africanos se produce rápidamente, y la presencia africana en la vida y la cultura brasileña es un rasgo que surge ahora para quedar. Esta tierra de plantaciones cuyo arcaísmo económico da a las relaciones sociales un tono que sus nostálgicos llaman patriarcal –en todo caso menos urgido por una búsqueda racional del provecho que el reinante en las Antillas–, integra a su población negra utilizando para ello lo que ha sobrevivido del cuadro institucional africano, luego de un trasplante brutal: agrupados por naciones, los negros del norte brasileño conservan –y tiñen de color cristiano– tradiciones religiosas y sociales traídas de sus tierras de origen; por eso (y porque la importación duró hasta avanzado el siglo XIX) África sigue siendo, para los negros de Brasil, tan profundamente americanizados (y a través de ellos para toda la cultura popular brasileña), una presencia viva, como no lo es, por ejemplo, para los negros de Estados Unidos o aun de las Antillas que fueron inglesas.

Al margen de las tierras del azúcar surge una población mestiza: los ganaderos del *sertão* nordestino, los cazadores de

indios del Norte y São Pablo han surgido ellos mismos de la unión de portugueses e indios; como en ciertas zonas marginales españolas (por ejemplo, el Río de la Plata o Paraguay) el imperativo de poblar la tierra se ha traducido en una febril reproducción de los conquistadores, creando organizaciones familiares cuya distancia del modelo monógamo europeo horroriza a más de un testigo. Aquí la vida es más sencilla y dura que en las tierras del azúcar; aun en lo más hondo de su crisis los señores de ingenio parecen comparativamente opulentos, y a la vez que envidiados son menospreciados por su blandura por los más rudos ganaderos y jefes de bandas del interior. Una y otra zona brasileñas (el núcleo azucarero y la movible frontera) suman una población escasa, que tiende a expandirse a gran velocidad en un espacio no limitado por obstáculos importantes, salvo la distancia misma. En efecto, si Brasil presenta una costa demasiado regular para ofrecer puertos abundantes, si la existencia (sobre todo en la zona central) de una cordillera costera relativamente alta y de un sistema hidrográfico que se vuelca sobre todo hacia el interior, hacia el Plata y el Amazonas, hacen difícil el abordaje de la meseta, una vez alcanzada ésta la regularidad del suelo, acompañada de la presencia de ríos navegables (aunque no en gran número) facilitan la penetración; falta así en Brasil esa compartimentación que la geografía misma impone a la América española. Los ríos constituyen el vínculo esencial en el interior brasileño: el San Francisco (que desemboca en el Atlántico al sur de Bahía) enlaza el norte y el centro, y tanto la expansión norteña como la paulista siguen las rutas fluviales. De este modo una población que hacia 1700 no excedía sin duda los cuatrocientos mil habitantes, entre los cuales eran los negros más numerosos que los blancos y mulatos, y éstos que los indios sometidos, dominaba laxamente un territorio que era ya de tres millones de kilómetros cuadrados. Fue el descubrimiento del oro (1698), y treinta años después el de los diamantes, el hecho que iba a cambiar el destino de Brasil. Las riquezas minerales surgieron en un rincón de la capitanía de San Pablo, y los pau-

listas trataron (con relativo éxito hasta 1708) de conservar el monopolio de su explotación. Luego de los choques de ese año debieron dejar el camino abierto a los buscadores de oro que llegaban del norte ganadero y azucarero (a veces señores de ingenios pequeños que, con todo su personal esclavo, partían a probar fortuna en la búsqueda del oro fluvial y superficial). Ouro Preto, la primera de las ciudades del oro, fue desde 1720 capital de una nueva capitanía separada de San Pablo: la de Minas Gerais. La minería produjo una nueva riqueza para Brasil, y la importación de esclavos retomó un ritmo rápido. Pero la pequeña empresa de exploración y explotación aurífera (como luego la de diamantes) admitía una multiplicidad de empresarios individuales, y provocó una inmigración metropolitana que no tuvo paralelo en Hispanoamérica; gracias sobre todo a ella, Brasil pudo alcanzar, a fines del siglo XVIII, los tres millones de habitantes. Ya para entonces la explotación minera había cerrado su ciclo de prosperidad; extendida cada vez más al interior, hacia Goiás y Mato Grosso, contribuyó a poblar menos laxamente el Brasil central. Pero éste, tras de su florecimiento minero, que está detrás del esplendor arquitectónico de Ouro Petro, debió refugiarse en una ganadería vacuna que se implantaba mal en los circuitos de comercio ultramarino. En medio de esa zona en disgregación económica, la costa en torno de Río de Janeiro, la nueva capital brasileña, era un oasis de cultivos tropicales, entre los cuales el arroz y el algodón competían con el azúcar. Aun luego de la decadencia de su nuevo núcleo, el Brasil del oro se había ampliado de modo irreversible hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur se da en el siglo XVIII el surgimiento de un Río Grande ganadero, comparable por sus características a las zonas nuevas del Río de la Plata que le eran contiguas: si sus cueros buscaban mercado en Europa, sus mulas y su carne seca lo habían encontrado en el centro minero y lo seguían encontrando en el norte azucarero. En el extremo norte la zona del Marañón –a la que una navegación dependiente del régimen de vientos ponía mucho más cerca de la metrópoli que el resto de Brasil– vivió

dos etapas: en la primera (dominada por las misiones de los Jesuitas), la actividad económica principal era el comercio de trueque con las poblaciones indias de la hoya amazónica; la expulsión de los jesuitas y la organización de compañías comerciales inspiradas en la política de Pombal, el ministro del despotismo ilustrado portugués favoreció –en compensación de la pérdida paulatina del comercio amazónico– una agricultura tropical del arroz y sobre todo del algodón, que, agotados los recursos locales de mano de obra, recurrió ampliamente a la importación africana. Por su parte, la economía azucarera está en muy moderado ascenso hasta 1760, para sufrir un nuevo derrumbe que a fines del siglo la devuelve a los niveles de producción de cien años antes.

Pese a las nuevas importaciones de esclavos, hasta 1770 la minería los iba absorbiendo en cantidades tan grandes que privaba a las tierras azucareras de su mano de obra servil; por otra parte, la expansión de las Antillas francesas y las que se continuaban en las inglesas cerraban cada vez más el mercado europeo para el azúcar de Brasil. La revolución industrial (con su aumento del consumo del algodón), pero sobre todo la guerra, benefició a la economía agrícola brasileña: sólo el azúcar iba a tardar hasta la segunda década del siglo XIX en incorporarse a ese avance. En todo caso la prosperidad de Brasil al comienzo del siglo XIX esconde mal los profundos desequilibrios de un país que ha perdido sucesivamente su núcleo azucarero (que aunque importante, no es ya hegemónico) y su nuevo núcleo minero (mucho más rápidamente borrado a partir de 1770): son la zona de Río de Janeiro, la del Marañón, la del extremo sur, las muy inconexas que encabezan el crecimiento brasileño en ese momento decisivo.

Las alternativas de la prosperidad se vinculan también con las políticas comerciales sucesivamente adoptadas por la Corona. De comienzos del siglo XVIII es la total integración de la economía portuguesa en el área británica: aún más que la plata hispanoamericana, el oro brasileño encuentra en su metrópoli política sobre todo un lugar de paso, y los historiadores

de Brasil, en la huella de Luzio de Azevedo, no dejarán de señalar en él a uno de los estímulos de la revolución industrial inglesa. Al mismo tiempo el acuerdo con Gran Bretaña protege sobre todo el vino metropolitano, pero no defiende la producción agrícola colonial, que tiene difícil acceso al mercado británico; sólo en tiempos de Pombal se dio un intento de organizar la expansión de la agricultura colonial mediante un sistema de compañías comerciales privilegiadas. Éste tuvo éxito en el Marañón, pero fracasó en las tierras del azúcar: la compañía podía favorecer la expansión de rubros productivos para los cuales existía ya un mercado; era incapaz, en cambio, de abrirlo para una producción ya demasiado abundante como era la azucarera. Y por otra parte la aristocracia de señores de ingenio, que a principios del siglo había mantenido en Pernambuco una lucha tenaz contra los mercaderes portugueses de Recife, no entendía ceder el control del mercado local a una compañía ultramarina. Finalmente, también la del Marañón comenzó a sufrir las consecuencias de su propio éxito: la clase de plantadores cuya instalación había suscitado quería ahora independizarse de su pesada tutela, y compartir de modo menos desigual los lucros del comercio ultramarino. En 1789 las compañías privilegiadas fueron suprimidas, y ello fue considerado una victoria de los productores. La guerra iba a traer cambios más tardíos que para Hispanoamérica: incluido en el área británica, el imperio portugués no iba a sufrir en sus comunicaciones internas como el español. En cambio, la incomunicación con Europa continental, y luego la pérdida de la metrópoli, aceleraron una nueva decadencia azucarera, comenzada hacia 1760.

Esas vicisitudes se traducen en las de las exportaciones: a mediados del siglo XVIII se ha dado el apogeo del Brasil del oro, con casi cinco millones de libras como valor total de las exportaciones en 1760; quince años de decadencia conducen a un nivel de tres millones en 1776; luego comienza una recuperación lenta: tres millones y medio en 1810, cuatro en 1814. La recuperación se da gracias a un abanico de exportaciones ya no totalmente

dominado por el azúcar y el oro: en 1800 la primera se exporta por valor de algo más de un millón, el segundo por setecientas mil; en 1814 será por 1.200.000 y 300.000, respectivamente (en cambio, en 1760 un total de exportaciones de 4.800.000 se descompone en 2.400.000 de azúcar y 2.200.000 de oro). El azúcar –se advierte– ni aun en sus horas peores ha dejado de ser el principal artículo de exportación del Brasil portugués, que ni en sus momentos de mayor brillo minero ha conocido la unilateralidad de las exportaciones hispanoamericanas.

Esa importancia del sector azucarero, pese a su eterna decadencia, se manifiesta también en la demografía brasileña: en el nordeste (que en torno a Bahía se ha hecho, a la vez que azucarero, algodonero) se concentra la mayor parte de la población; de ella el 50 por 100 son negros, casi todos esclavos; el 7 por 100, indios; el 23 por 100, blancos, y el resto mestizos y mulatos. La sociedad brasileña estará menos influida por líneas de casta que la española; eso no es extraño si se piensa que la principal de las diferencias de origen estaba defendida por esa frontera legal más abrupta que era la esclavitud; por otra parte, la mayor importancia de la inmigración metropolitana influía para producir un equilibrio distinto del de Hispanoamérica. Por añadidura, en todo el Brasil septentrional y en la zona de Río de Janeiro surge una sociedad señorial íntimamente vinculada al mercado ultramarino, que tampoco tiene paralelo en Hispanoámerica. Este sector, fuerte económicamente, influyente políticamente (todo el orden en las zonas rurales depende en último término de su buena voluntad) ya ha vencido antes de la emancipación las pretensiones hegemónicas de los comerciantes de los puertos del Norte, y se apresta a tener en la vida del Brasil independiente influjo muy vivo. En el centro y el Sur no encontramos nada parecido; pese a que también aquí la gran propiedad es la regla, ésta en la base de fortunas privadas más modestas; por otra parte, la producción sólo parcialmente se dirige hacia el mercado internacional. Es decir que aquí los hacendados son económicamente menos independientes de los mercaderes de las ciuda-

des; en cambio, la vida ganadera les da (como a los del *sertão* nordestino) bases aún más firmes de poder local; en particular en el extremo sur, el orden es custodiado (y a ratos deshecho) por los hacendados y sus pequeños ejércitos privados.

En las ciudades existe una antigua tradición mercantil: Recife y Bahía en el Norte, Río de Janeiro en el centro... En el Norte, en las etapas finales de su lucha, los señores de ingenio han encontrado a su lado a los comerciantes locales: se trataba, en efecto, de eliminar a las compañías privilegiadas, esos instrumentos de conquista de los lucros de la producción colonial por parte de la metrópoli. En Río los tiempos del oro han sido los de mayor desarrollo de los sectores mercantiles locales; luego éstos han logrado sobrevivir exportando una gama de productos más variada que en el Norte, y conservando frente a los productores una posición más sólida que allí.

La diferenciación entre productores y mercaderes tiene entonces en Brasil un sentido diferente que en Hispanoamérica: aquí hay desde el comienzo un amplio sector agrícola que produce para ultramar y tiene a su frente a una muy homogénea clase terrateniente; aquí la metrópoli, menos poderosa, no puede tener una política económica tan definida y sobre todo tan determinante como ha sido la de España. Y por añadidura también la debilidad que en otros aspectos muestra el diminuto Portugal frente a su colonia gigante influye en las relaciones sociales: sólo muy tardíamente tiene Brasil una administración colonial comparable en coherencia a la que tuvo Hispanoamérica ya en la segunda mitad del siglo XVI; ese punto de apoyo a las fuerzas que aseguran la cohesión económica entre la metrópoli y la colonia es por lo tanto menos sólido.

Del mismo modo que en Castilla, en Portugal la Corona no puede llevar adelante por sí sola la exploración y conquista: reservándose la soberanía de los territorios americanos conquistados por portugueses, reconoce muy amplias atribuciones (a la vez políticas, económicas y militares) a quienes ponen el dinero y los hombres necesarios para la empresa. El primer Brasil, el de las capitanías, es entonces un conjunto de

factorías privadas en la costa americana: no sólo su transformación en colonia de la Corona es más lenta que en Hispanoamérica (los últimos derechos privados sobre capitanías son rescatados por la Corona a cambio de dinero durante el siglo XVIII); es además menos completa: la administración regia, que sucede a la de los dueños de concesiones, debe respetar las situaciones locales de poder en medida aún mayor que en Hispanoamérica. Si desde mediados del siglo XVI esta administración comienza a organizarse, con la instalación de la capitanía general en Bahía, falta por entero en Brasil esa segunda conquista, que la corona castellana lleva adelante sobre los conquistadores. Faltan además las razones para una política análoga a la seguida por la corona de Castilla. Brasil es, por el momento –se ha dicho ya–, un conjunto de factorías escasamente rendidoras: no hay en él nada comparable al botín de metálico que la Corona disputa en el siglo XVI a los conquistadores castellanos. Cuando un nuevo Brasil (el del azúcar) surja del primitivo, junto con él surgirá una clase terrateniente cuya mano de obra no depende (como en Hispanoamérica) de las concesiones más o menos gratuitas de la Corona; está compuesta de negros esclavos comprados en el mercado. Del mismo modo en cuanto a la tierra: falta en el Brasil del azúcar esa imprecisión en la posesión jurídica de la tierra por los conquistadores que, en Hispanoamérica, sigue haciendo depender su fortuna inmobiliaria de los favores del poder político. De allí que la aparición de un sistema administrativo derivado de la Corona, que comparte atribuciones con instituciones de origen local sobre un esquema muy semejante al hispanoamericano, tenga, sin embargo, en Brasil sentido muy diferente que en las Indias de Castilla. Sin duda encontramos cámaras municipales semejantes en su estructura y su origen a los cabildos, como éstos fortalezas de oligarquías municipales que se renuevan por cooptación, por herencia o por compra de cargos. Sin duda encontramos capitanes mayores semejantes en cierto modo a los corregidores; y bajo su mando, capitanes de la espesura *(capitãos do mato)* que vigilan el orden de

las zonas rurales (en este caso la diferencia parece darse formalmente en sentido centralista: los alcaldes, que serían su equivalente hispanoamericano, dependen de los cabildos y no del poder central). Pero unos y otros tienen de hecho poderes más vastos: cuando en el siglo XVIII la acuidad creciente de los conflictos con España impulse una militarización de la vida brasileña, las milicias locales dominarán el panorama (salvo en la remota frontera meridional) y asegurarán el predominio de los poderosos locales (oligarquías urbanas, señores de ingenio, hacendados de las tierras ganaderas), dueños de ese nuevo instrumento de poder.

Todas estas diferencias nos devuelven a una esencial: en Hispanoamérica la posesión de la tierra y la de la riqueza no van juntas; en Brasil sí suelen acompañarse, y eso da a las clases dominantes locales un poder que les falta en las Indias castellanas. Por eso la creación de un poder central no puede darse en Brasil en contra de esos poderes locales que encuentran modo de dominar las instituciones creadas para controlarlos. El poder central nace aquí débil y elabora tácticas adecuadas a esa debilidad: la historia del siglo XVIII brasileño abunda en choques armados interregionales (en el Norte entre Olinda y Recife, en el centro entre norteños y paulistas en Minas Gerais) frente a los cuales el poder regio actúa como árbitro algo tímido. Quizá sea ése uno de los secretos de la supervivencia de la unidad brasileña en el siglo XIX (junto con la falta de una crisis profunda del orden administrativo colonial): este orden, en la medida que es menos exigente que el español, sobrevive mejor a la presencia de fuerzas centrífugas que son en Brasil, acaso, tan poderosas como en Hispanoamérica.

En todo caso, los progresos de la estructura administrativa son a la vez lentos e incesantes: durante la época de la unidad con España se organizan en Lisboa, sobre el modelo sevillano, instituciones de gobierno de las Indias. Luego de la restauración, y sobre todo en el siglo XVIII, el proceso avanza sobre todo en Brasil: la complejidad institucional crece; se crean nuevas divisiones administrativas a medida que la expansión

minera va poblando mejor el Brasil central e interior. En 1717, Brasil pasa a ser un reino, gobernado por un virrey, que en 1763 lleva su sede de Bahía a Río de Janeiro, el puerto del oro.

Una situación análoga se da en cuanto a la Iglesia y las órdenes. De éstas es la jesuita la más poderosa: su predominio es aún mayor que en Hispanoamérica. Pero la Compañía de Jesús debe enfrentar la hostilidad de los terratenientes contra los aspectos más originales de su actitud frente al indígena. Sin duda, algo análogo ha ocurrido, desde comienzos del siglo XVII, en algunas zonas hispanoamericanas. Pero en Brasil la compañía sólo encuentra compensación muy limitada para su insegura relación con los colonos en el establecimiento de territorios de misión: aquí éstos sólo adquieren alguna importancia en el siglo XVIII y en el remoto Amazonas. Aunque rica e influyente, también la Compañía, como el poder regio, debe enfrentar a esos sectores tanto más poderosos que en Hispanoamérica; acaso por eso su expulsión en 1759 fue seguida con indiferencia, en tanto que en la América española ella iba a figurar, aun luego de 1810, en más de una de las listas de agravios elevadas por los insurgentes contra el poder regio.

La misma influencia de los localmente poderosos se hace sentir sobre el clero secular; en particular en las tierras del azúcar los curatos eran considerados en los hechos parte del patrimonio de los dueños de tierras e ingenios, y entregados a los segundones de éstos. Aun en la jerarquía del clero regular y secular los hijos de las familias de más alto abolengo de la colonia predominaban de manera desconocida en Hispanoamérica. En esta iglesia demasiado bien integrada en la sociedad colonial, el espíritu militante, aún no extinguido en la hispanoamericana, estaba notablemente ausente. Si la inmoralidad era sin duda menos frecuente de lo que parecía a observadores más llenos de celo que de discernimiento, el espíritu mundano era, en cambio, dominante. Sin duda, la explotación de los fieles por los párrocos era menos habitual que en Hispanoamérica, donde en más de un caso ofrecía el

único medio de supervivencia para un clero de origen social modesto e insuficientemente rentado. Pero también esta superioridad aparente se vincula con el hecho de que el personal eclesiástico era en Brasil parte de esa clase dominante de base local y rural, cuyo poderío no tiene paralelo en Hispanoamérica.

Capítulo 2
La crisis de independencia

Ese edificio colonial que, a juicio de los observadores poco benévolos, había durado demasiado, entró en rápida disolución a principios del siglo XIX; en 1825 Portugal había perdido todas sus tierras americanas, y España sólo conservaba a Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué este desenlace tan rápido? Retrospectivamente se le han buscado (y desde luego encontrado) causas muy remotas, algunas de ellas latentes desde el comienzo de la conquista; al lado de ellas se han subrayado otras cuyos efectos se habrían hecho sentir acumulativamente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

Por lo menos para la América española, para la cual el problema se presenta con mayor agudeza, se han subrayado una y otra vez las consecuencias de la sólo parcialmente exitosa reformulación del pacto colonial: precisamente porque éste abría nuevas posibilidades a la economía indiana, hacía sentir más duramente en las colonias el peso de una metrópoli que entendía reservarse muy altos lucros por un papel que se resolvía en la intermediación con la nueva Europa industrial. La lucha por la independencia sería en este aspecto la lucha por un nuevo pacto colonial, que –asegurando el contacto directo entre los productores hispanoamericanos y la que es cada vez más la nueva metrópoli económica– con-

ceda a esos productores accesos menos limitados al mercado ultramarino y una parte menos reducida del precio allí pagado por sus frutos.

Al lado de la reforma económica estaba la reforma político-administrativa. Se ha visto ya cómo ésta no había resuelto los problemas fundamentales del gobierno de la América española y portuguesa: el reclutamiento de funcionarios dispuestos a defender, con una honradez que las dificultades de su tarea hacían heroica, los intereses de la Corona frente a las demasiado poderosas ligas de intereses locales. Pero no hay duda de que esa reforma aseguró a las colonias una administración más eficaz que la antes existente. Ésta era –según una fórmula incisiva de J. H. Parry– una de las causas profundas de su impopularidad, pues los colonos prefieren tener que enfrentar una admimistración ineficaz, y por eso mismo menos temible. Pero no era la única: al lado de ella estaba la tan invocada de la preferencia de la Corona por los funcionarios metropolitanos. Sin duda las alegaciones sobre la parcialidad regia estaban mejor fundadas en hechos de lo que quieren hacer suponer, por ejemplo, las estadísticas de un Julio Alemparte, y la parcialidad misma no se debía solamente a la mayor sensibilidad de la Administración a las solicitaciones que le llegaban de cerca, sino al temor de dar poder administrativo a figuras aliadas de antemano con las fuerzas localmente poderosas que seguían luchando tenaz y silenciosamente contra la pretensión de la Corona a gobernar de veras sus Indias. Con lo que la protesta contra el peninsular, que debía su carrera a su origen metropolitano, a veces escondía mal la repulsa del testigo molesto llegado de fuera del cerco de complicidades localmente dominante (y que en el mejor de los casos era preciso introducir en él mediante el soborno).

Tanto la enemiga contra los peninsulares favorecidos en la carrera administrativa (y en la militar y eclesiástica) como la oposición contra el creciente centralismo, eran sólo un aspecto de las reacciones despertadas en las colonias por la crecien-

te gravitación de una metrópoli renaciente. La misma resistencia –expresada en idéntica hostilidad hacia los peninsulares– se manifestaba frente a los cambios en la estructura comercial: ese enjambre de mercaderes metropolitanos que en la segunda mitad del siglo XVIII avanzaba sobre los puertos y los nudos comerciales de las Indias, cosechando una parte importante de los frutos de la activación económica, era aborrecido aun por quienes no habían sido afectados directamente por su triunfo.

Convendría no exagerar las tensiones provocadas por este intento de reordenación de las Indias; convendría, sobre todo, advertir más claramente que si ellas autorizaban algunas alarmas sobre el futuro del lazo colonial, de ningún modo hacían esperar un desenlace tan rápido; por el contrario, los conflictos que ellas parecían anticipar sólo hubiesen podido madurar en un futuro remoto: ellas anuncian, más bien que una cercana catástrofe, los delicados y lentos reajustes de una etapa de transición necesariamente larga.

¿En la renovación ideológica que (junto con la cultura hispánica en su conjunto) atravesaba la iberoamericana a lo largo del siglo XVIII, ha de hallarse causa menos discutible del fin del orden colonial? Pero esa renovación –colocada bajo signo ilustrado– no tenía necesariamente contenido políticamente revolucionario. Por el contrario, avanzó durante una muy larga primera etapa en el marco de una escrupulosa fidelidad a la Corona. Ello se fundaba en que, pese a todas sus vacilaciones, era ésta la más poderosa de las fuerzas renovadoras que actuaban en Hispanoamérica. La crítica de la economía o de la sociedad colonial, la de ciertos aspectos de su marco institucional o jurídico no implicaban entonces una discusión del orden monárquico o de la unidad imperial. La implicaban todavía menos por cuanto la Ilustración iberoamericana –del mismo modo que la metropolitana– estaba lejos de postular una ruptura total con el pasado: en ella sobrevivía mucho de la tradición monárquica del siglo anterior, y en más de uno de sus representantes la fe en el papel renovador de la Corona pa-

rece la racionalización de una fe más antigua en el rey como cabeza de ese cuerpo místico que es el reino.

Sin duda, ya desde fines del siglo XVIII, esta fe antigua y nueva tenía -en Iberoamérica como en sus metrópolis- sus descreídos. En este hecho indudable se ha hallado más de una vez la explicación para los movimientos sediciosos que abundan en la segunda mitad del siglo XVIII, y en los que se ve los antecedentes inmediatos de la revolución independiente. Pero ni parece evidente esta última vinculación, ni mucho menos la que se postula entre esas sediciones y la renovación de las ideologías políticas. Es fácil hacer -desde Nueva Granada hasta el Alto Perú- un censo impresionante de esos movimientos; vistos de cerca, ellos presentan una fisonomía escasamente homogénea y a la vez no totalmente nueva. Sin duda, podemos encontrar un elemento desencadenante común en las tensiones creadas por la reforma administrativa, que en manos de burócratas demasiado ávidos significó sobre todo un aumento de la presión impositiva; pero las respuestas son localmente muy variables. El episodio más vistoso es la guerra de castas que azotó en las dos últimas décadas del siglo XVIII al Perú; esta guerra, en que los alzados supieron combinar la nostalgia del pasado prehispánico con la lealtad al rey español, por hipótesis ignorante de las iniquidades que en su nombre se cometían en América, exacerbó las tensiones entre las castas peruanas: indios contra blancos y mestizos en el Bajo Perú; indios y mestizos contra blancos en el Alto Perú. En este sentido, más que ofrecer un antecedente para las luchas de independencia, estos alzamientos parecen proporcionar una de las claves para entender la obstinación con que esta área iba a apegarse a la causa del rey: una parte de su población nativa iba a ver en el mantenimiento del orden colonial la mejor defensa de su propia hegemonía, y en ésta la única garantía contra el exterminio a manos de las más numerosas castas indígenas y mezcladas.

Otros episodios menos vistosos se desarrollan con apoyos, si más limitados en el espacio, más unánimes: es el caso del al-

zamiento comunero del Socorro, en Nueva Granada. Pero su importancia inmediata fue mucho menor, y su fisonomía los acercaba a los movimientos de protesta local que habían abundado desde la conquista; más bien que la presencia de elementos nuevos que anuncian la crisis, lo que ellos ponen de manifiesto es la persistencia de debilidades estructurales cuyas consecuencias iban a advertirse cada vez mejor en la etapa de disolución que se avecinaba.

Menos discutible es la relación entre la revolución de independencia y los signos de descontento manifestados en muy estrechos círculos dentro de algunas ciudades de Latinoamérica desde aproximadamente 1790. Esos signos fueron, sin duda, magnificados primero por sus represores y luego por sus historiadores: es indudable, sin embargo, que desde México a Bogotá, donde en 1794 Antonio Nariño comenzaba su carrera de revolucionario traduciendo la Declaración de los Derechos del Hombre, a Santiago de Chile, donde en 1790 era descubierta una «conspiración de los franceses», a Buenos Aires, donde casi contemporáneamente otros franceses parecen haber logrado despertar en algunos esclavos esperanzas de próxima liberación gracias a una revolución republicana, a Brasil, donde en Minas Gerais una inconfidencia secesionista y republicana es descubierta y reprimida en 1789, en los más variados rincones de Latinoamérica hay signos muy claros de una nueva inquietud. El resultado de esos episodios eran los mártires y los desterrados. Tiradentes, agente de la inconfidencia de Minas Gerais, era el más célebre de los primeros. Por su parte, el más famoso de los segundos fue Francisco de Miranda, el amigo de Jefferson, amante de la gran Catalina, general de la Gironda, en su momento agente de Pitt, quien antes de fracasar como jefe revolucionario en su nativa Venezuela, hizo conocer al mundo la existencia de un problema iberoamericano, incitando a las potencias a recoger las ventajas que la disolución del imperio español proporcionaría a quienes quisieran apresurarla. Tras de esas trayectorias trágicas o brillantes se alinean muchas otras: desterrados en Áfri-

ca, prisioneros en la metrópoli, emigrados que vegetan penosamente gracias a pensiones inglesas o francesas... Y al lado de ellos son más numerosos los que se mantienen en reserva: cuando Bolívar repite en un paisaje de ruinas romanas el juramento de Aníbal no es aún sino un rico muchacho criollo de Caracas que viaja por Europa acompañado de su preceptor; cuando en su Córdoba del Tucumán el deán Funes, futuro patriota argentino, recibe de amigos españoles, junto con entusiastas relaciones acerca de la Francia revolucionaria, la música del himno de los marselleses, es aún un eclesiástico que busca hacer carrera a la sombra del obispo, el intendente y el virrey. No es irrazonable ver en esta inquietud que de pronto lo invade todo el fruto del avance de las nuevas ideas políticas; que éste fue muy real lo advertiremos después de la revolución: burócratas modestos, desde los rincones más perdidos, mostrarán de inmediato una seguridad en el manejo del nuevo vocabulario político que revela que su intimidad con él data de antiguo. Pero este avance mismo es consecuencia de un proceso más amplio: lo nuevo después de 1776 y sobre todo de 1789 no son las ideas, es la existencia misma de una América republicana, de una Francia revolucionaria. Y el curso de los hechos a partir de entonces hace que esa novedad interese cada vez más de cerca a Latinoamérica: Portugal, encerrado en una difícil neutralidad; España, que pasa, a partir de 1795, a aliada de la Francia revolucionaria y napoleónica, muestran cada vez mejor su debilidad en medio de las luchas gigantescas que el ciclo revolucionario ha inaugurado. En estas condiciones aun los más fieles servidores de la Corona no pueden dejar de imaginar la posibilidad de que también esa corona, como otras, desaparezca. En la América española en particular, la crisis de independencia es el desenlace de una degradación del poder español que, comenzada hacia 1795, se hace cada vez más rápida.

El primer aspecto de esa crisis: ese poder se hace ahora más lejano. La guerra con una Gran Bretaña que domina el Atlántico separa progresivamente a España de sus Indias. Hace más difícil mandar allí soldados y gobernantes; hace imposible el

monopolio comercial. En continuidad sólo aparente y en oposición real con las reformas mercantiles de Carlos III, un conjunto de medidas de emergencia autorizan la progresiva apertura del comercio colonial con otras regiones (colonias extranjeras, países neutrales); a la vez conceden a los colonos libertad para participar en la ahora más riesgosa navegación sobre las rutas internas del Imperio.

Esta nueva política, cautamente emprendida por la Corona, es recibida con entusiasmo en las colonias: desde La Habana a Buenos Aires, todo el frente atlántico del imperio español aprecia sus ventajas y aspira a conservarlas en el futuro. Al mismo tiempo, alejada la presión de la metrópoli política y de la económica, esas colonias se sienten enfrentadas con posibilidades inesperadas: un economista ilustrado de Buenos Aires se revela convencido de que su ciudad está en el centro del mundo comercial y que tiene recursos suficientes para utilizar por sí sola las ventajas que su privilegiada situación le confiere. Y, en efecto, el comercio de Buenos Aires se mueve en un horizonte súbitamente ampliado, en que existen Hamburgo y Baltimore, Estambul y las islas azucareras del Índico, del que, en cambio, han desaparecido a la vez España e Inglaterra; en él las fuerzas de la ciudad austral parecen menos diminutas. De allí una conciencia más viva de la divergencia de destinos entre España y sus Indias, una confianza (que los hechos van a desmentir luego cruelmente) en las fuerzas económicas de esas Indias, que se creen capaces de valerse solas en un sistema comercial profundamente perturbado por las guerras europeas.

La transformación es paulatina: sólo Trafalgar, en 1805, da el golpe de gracia a las comunicaciones atlánticas de España. Y por otra parte, si el desorden del sistema comercial prerrevolucionario da posibilidades nuevas a mercaderes-especuladores de los puertos coloniales, no beneficia de la misma manera a la economía colonial en su conjunto. En esa Buenos Aires que cree ser el centro del mundo comercial, se apilan los cueros sin vender; en Montevideo forman túmulos más altos que las modestas casas; en la campana del litoral rioplatense

los ganados, sacrificados a ritmo vertiginoso hasta 1795, vuelven luego de esa fecha a poblar la pampa con ritmo igualmente rápido: las matanzas se interrumpen por falta de exportación regular. Aun en Cuba, donde un conjunto de factores muy complejos impulsa en esta etapa la expansión azucarera y cafetera, las vicisitudes del revolucionado comercio mundial imponen alternativas brutales de precios; a los años buenos de 1790 a 1796 sigue la racha negra de 1796 a 1799; en la década siguiente también los primeros cinco años de altos precios y exportación expedita son seguidos de otros muy duros. Esas alternativas provocan mayor impaciencia que las limitaciones acaso más graves pero más uniformes de etapas anteriores: como los comerciantes especuladores, también los productores a los que las vicisitudes de la política metropolitana privan de sus mercados tienden a ver cada vez más el lazo colonial como una pura desventaja; la libertad que derivaría de una política comercial elaborada por las colonias mismas pasa a ser una aspiración cada vez más viva.

Acaso más que esa aspiración pesa en la marcha a la independencia el espectáculo mismo de una metrópoli que no puede ya gobernar la economía de sus colonias, porque su inferioridad en el mar la aísla progresivamente de ellas. En lo administrativo, el agostamiento de los vínculos entre metrópoli y colonias comenzará a darse más tardíamente que en lo comercial, pero en cambio tendrá un ritmo más rápido. En uno y otro campo los quince años que van de 1795 a 1810 borran los resultados de esa lenta reconquista de su imperio colonial que había sido una de las hazañas de la España borbónica. En medio de las tormentas postrevolucionarias, esa hazaña revela, sin duda, su fragilidad, pero al mismo tiempo ha logrado cambiar demasiado a las Indias para que el puro retorno al pasado sea posible. Por otra parte, la Europa de las guerras napoleónicas –ese bloque continental ávido de productos tropicales, y sobre todo esa Inglaterra necesitada de mercados que remplacen los que se le cierran en el continente– no está tampoco dispuesta a asistir a una marginalización

de las Indias, que sólo le deje abierta, como en el siglo XVII, la puerta del contrabando. Si en el semiaislamiento de ese quinquenio pudo parecer a algunos hispanoamericanos que la ruptura del lazo colonial iba a permitir prolongar los esbozos de autonomía mercantil en curso hasta alcanzar una independencia económica auténtica, este desenlace era en los hechos extremadamente improbable.

Pero para otros (en particular para los productores que conocen en esos años afiebrados alternativas de prosperidad y ruinoso aislamiento) la independencia política no debe ser a la vez económica: debe establecer con las nuevas metrópolis económicas un lazo que sería ilusión creer que será de igualdad... He aquí algunas de las alternativas que la disolución del lazo colonial plantea ya antes de producirse. Esas alternativas no tendrán siquiera tiempo de mostrarse con claridad: en 1806, en el marco de la guerra europea, el dominio español en Indias recibe su primer golpe grave; en 1810, ante lo que parece ser la ruina inevitable de la metrópoli, la revolución estalla desde México a Buenos Aires.

En 1806 la capital del virreinato del Río de la Plata es conquistada por sorpresa por una fuerza británica; la guarnición local (pese a que desde la guerra que llevó a la conquista de la Colonia del Sacramento, Buenos Aires es –en el papel– uno de los centros militares importantes de la América española) fracasa en una breve tentativa de defensa. Los conquistadores capturan rico botín de metálico, que será paseado en triunfo en Londres; comienzan por asombrarse de encontrar tantas adhesiones, desde los funcionarios que juran fidelidad al nuevo señor, hasta los frailes que servicialmente predican sobre el texto paulino acerca del origen divino de todo poder. Las conspiraciones, sin embargo, se suceden y, finalmente, un oficial naval francés al servicio del rey de España conquista Buenos Aires con tropas que ha organizado en Montevideo. Al año siguiente, una expedición británica más numerosa conquista Montevideo, pero fracasa frente a Buenos Aires, donde se han formado milicias de peninsulares y americanos. El vi-

rrey, que en 1806 y 1807 ha huido frente al invasor, es declarado incapaz por la Audiencia; interinamente lo reemplaza Liniers, el jefe francés de la Reconquista. La legalidad no se ha roto; el régimen colonial está, sin embargo, deshecho en Buenos Aires: son las milicias las que hacen la ley, y la Audiencia ha tenido que inclinarse ante su voluntad.

Este anticipo del futuro es seguido bien pronto de una crisis más general, que comienza en la Península. Su punto de partida es muy conocido: se trata de un conjunto de hechos suficientemente dramáticos para haber apasionado a los cultores de la *histoire événementielle*, generalmente condenados a horizontes más grises. Es el estallido de un drama de corte, cuyo ritmo gobierna desde lejos Bonaparte, el paradójico protector de los Borbones de España, que lo utiliza para provocar el cambio de dinastía. Pero las consecuencias que esta secuencia tiene en España son incomprensibles fuera de un marco histórico más vasto: la guerra de Independencia española es parte de un conflicto mundial sin el cual no hubiera sido posible (no sólo importa aquí que la expulsión de los franceses haya sido lograda gracias a la presencia de un ejército expedicionario británico; ya antes de ello, lo que animó la resistencia española fue la que fuera de España encontraba el poder napoleónico, por añadidura, esa resistencia se apoyó en una movilizacion popular que –así fuesen antirrevolucionarias sus consignas– se integra muy bien en el nuevo estilo de guerrear aportado por la revolución).

La guerra de Independencia significa que nuevamente la metrópoli –ahora aliada de Inglaterra– puede entrar en contacto con sus Indias. Significa también que, de un modo o de otro, esa poderosa aliada se abre el acceso al Mercado indiano; parece surgir entonces la posibilidad de un futuro parecido a lo que fue el pasado brasileño... Pero la guerra significa, por añadidura, que la metrópoli (la España antinapoleónica, cada vez más reducida, golpeada por las victorias francesas, y que pasa de la legalidad interina del Consejo de Regencia a una revolución que no quiere decir su nombre, pero se expresa ine-

quívocamente en las Cortes liberales de Cádiz) tiene recursos cada vez menores para influir en sus Indias. En ellas estallan las tensiones acumuladas en las etapas anteriores –la del reformismo ilustrado, la del aislamiento de guerra–, las elites urbanas españolas y criollas desconfían unas de otras, ambas proclaman ser las únicas leales en esa hora de prueba; para los peninsulares, los americanos sólo esperan la ruina militar de la España antinapoleónica para conquistar la independencia; para los americanos, los peninsulares se anticipan a esa ruina preparándose para entregar las Indias a una futura España integrada en el sistema francés. Ambas acusaciones parecen algo artificiosas, y acaso no eran totalmente sinceras. Son en todo caso los peninsulares quienes dan los primeros golpes a la organización administrativa colonial.

En México reaccionan frente a la inclinación del virrey Iturrigaray a apoyarse en el cabildo de la capital, predominantemente criollo, para organizar con su colaboración una junta de gobierno que, como la metropolitana de Sevilla, gobernase en nombre del rey cautivo, Fernando VII. El 15 de septiembre de 1808, un golpe de mano de los peninsulares captura al virrey y lo reemplaza; la Audiencia, predominantemente peninsular, se apresura a reconocer el cambio. En el Río de la Plata, el cambio de alianzas de 1808 coloca a Liniers bajo una luz sospechosa; por lo menos los peninsulares prefieren creerlo así. Una tentativa del cabildo de Buenos Aires –predominantemente europeo– por destituirlo, fracasa, debido a la supremacía local de las milicias criollas. Pero en Montevideo, ciudad de guarnición, los oficiales peninsulares dominan y establecen una junta que desconoce al virrey y pretende gobernar todo el virreinato; si bien la empresa no encuentra eco, la junta disidente domina la entera jurisdicción montevideana.

Estos episodios siguen un esquema que luego ha de repetirse: son ahora fuerzas de raíz local las que se contraponen; los grandes cuerpos administrativos ingresan en el conflicto político para conferir una legitimidad por otra parte bastante dudosa a las soluciones que esas fuerzas han impuesto. Los mo-

vimientos criollos reiterarán sustancialmente el mismo esquema de los dirigidos por peninsulares: en Chile, en 1808, al morir el gobernador Muñoz de Guzmán, apoyan al jefe de la guarnición, coronel García Carrasco, contra el presidente de la Audiencia y logran hacerlo gobernador interino; Juan Martínez de Rosas, jefe intelectual de los criollos chilenos, será por un tiempo su secretario. García Carrasco termina por librarse de sus incómodos asesores, que entre tanto han transformado la estructura del cabildo de Santiago para afirmar a través de él su ascendiente, asegurando el predominio numérico de los criollos. Pero si Martínez de Rosas es confinado en el sur, el golpe recibido por la organización colonial en Chile es irreparable: el gobernador, la Audiencia, el cabildo siguen enfrentándose enconadamente mientras el marco institucional de la monarquía española cae en ruinas... En Buenos Aires, al salvar a Liniers de las asechanzas del cabildo dominado por los peninsulares, los oficiales de las milicias criollas afirman una vez más su poder; el gran rival de Liniers, el comerciante peninsular Martín de Alzaga, que desde el cabildo ha organizado la defensa de la ciudad en 1807, es confinado en el sur...

Estos movimientos criollos se habían mantenido en los límites -cada vez más imprecisos- de la legalidad. En 1809 otros iban a avanzar hasta la rebelión abierta. En el Alto Perú, viejas rivalidades oponían al presidente y los oidores de la Audiencia de Charcas, con jurisdicción sobre la región entera. El conflicto adquirió matices políticos al hacerse sentir -allí como en el resto del virreinato- los efectos de la acción de la infanta Carlota Joaquina, hermana del rey cautivo de España, refugiada desde 1808 con su esposo, el regente de Portugal, en Río de Janeiro. La infanta había comenzado a desarrollar -con no demasiada habilidad y aun menos honradez- una política personal, destinada a convencer a los notables del alborotado Río de la Plata, y aun de otros virreinatos, de las ventajas de reconocerla como soberana interina: para ello se presentaba alternativamente como abanderada del liberalismo y del antiguo régimen, de la hegemonía criolla y de la peninsu-

lar. Había encontrado ya en 1809 infinidad de catecúmenos, acaso tan sinceros como ella: algunos de los futuros jefes de la revolución de independencia no se fatigaban de denunciar ante la infanta a ese peligroso secesionista, ese republicano jacobino que era don Martín de Alzaga; la princesa, por su parte, terminó por actuar como *agent provocateur*, denunciando a las autoridades disidentes de Montevideo a los más comprometedores de sus adherentes criollos... En Charcas la infanta reclutó en sus filas al presidente Pizarro; bastó ello para que los oidores, ante el peligro de ser anticipados por su rival, prohijaran una junta local, destinada a gobernar en nombre del rey cautivo. A esta revolución de criollos blancos sigue la revolución mestiza de La Paz. Ambas son sofocadas por tropas enviadas por los virreyes de Lima y Buenos Aires, y reprimidas con una severidad que antes solía reservarse para rebeldes de más humilde origen.

En la presidencia de Quito, el presidente-intendente fue igualmente depuesto, en agosto de 1809, por una conspiración de aristócratas criollos; un senado, presidido por el marqués de Selva Alegre, pasó a gobernar sobre la entera jurisdicción. Su poder duró poco: un año después, algunos jefes del movimiento, vencidos por tropas enviadas por el virrey de Nueva Granada, eran ejecutados; también ellos habían pretendido gobernar en nombre del rey cautivo, pero no por eso dejaban de ser tenidos por rebeldes.

Esos episodios preparaban la revolución. Mostraban, en primer término, el agotamiento de la organización colonial: en más de una región ésta había entrado en crisis abierta; en otras, las autoridades anteriores a la crisis revelaban, a través de sus vacilaciones, hasta qué punto habían sido debilitadas por ella: así, en Nueva Granada, en 1809, el virrey aceptó ser flanqueado por una junta consultiva. En el naufragio del orden colonial, los puntos reales de disidencia eran las relaciones futuras entre la metrópoli y las Indias y el lugar de los peninsulares en éstas, ya que aun quienes deseaban mantener el predominio de la España europea y el de sus hijos estaban tan

dispuestos como sus adversarios a colocarse fuera de un marco político-administrativo cuya ruina era cada vez menos ocultable. En estas condiciones las fuerzas cohesivas, que en la Península eran tan fuertes, aun en medio de la crisis (porque se apoyaban en una comunidad nacional efectivamente existente), contaban en Hispanoamérica bastante poco; ni la veneración por el rey cautivo –exhibida por todos, y a menudo animada de una sospechosa sinceridad– ni la fe en un nuevo orden español surgido de las cortes constituyentes, podían aglutinar a este subcontinente entregado a tensiones cada vez más insoportables.

Pero de esos dos puntos de disidencia –relaciones con la metrópoli, lugar de los metropolitanos en las colonias– todo llevaba a cargar el acento sobre el segundo. En efecto, la metrópoli misma estaba siendo conquistada por los franceses; si era notorio que el dominio naval británico impediría que esa conquista se extendiera a las Indias, no parecía, en 1809 o 1810, que la incorporación de España al dominio napoleónico fuese un proceso reversible. Por otra parte, esta España resistente, reducida a Andalucía y luego al recinto de Cádiz, parecía dispuesta a revisar el sistema de gobierno de sus Indias, y transformarlas en provincias ultramarinas de un reino renovado por la introducción de instituciones representativas. Esto en cuanto al futuro político de las Indias; en cuanto a la economía, la alianza británica, de la que dependía para su supervivencia la España antinapoleónica, aseguraba que el viejo monopolio estaba muerto: en el Río de la Plata fue el último virrey quien, al autorizar el comercio libre con Inglaterra, puso las bases de lo que sería la economía de la Argentina independiente.

En cambio, el problema del lugar de los peninsulares en Hispanoamérica se hacía cada vez más agudo: las revoluciones comenzaron por ser tentativas de los sectores criollos de las oligarquías urbanas por reemplazarlos en el poder político. La administración colonial, con la cautela adecuada a las circunstancias, puso, sin embargo, todo su peso en favor de

los peninsulares: basta comparar la severidad nueva con que fueron reprimidos los movimientos de Quito y el Alto Perú con la reconciliación entre el virrey Cisneros, que en Buenos Aires sucedió a Liniers, y la junta disidente de Montevideo; sólo el mantenimiento del dominio militar de Buenos Aires por los cuerpos criollos impidió que los antes rebeldes dominaran por entero la vida del virreinato. En los virreyes, los intendentes, las audiencias, se veía ahora sobre todo a los agentes de la supremacía de los españoles de España sobre las altas clases locales: eso simplificó enormemente el sentido de los primeros episodios revolucionarios en la América del Sur española. En cambio, en México y las Antillas otras tensiones gravitan más que las de españoles y elites criollas blancas: en las islas la liquidación de los plantadores franceses de Haití proporcionaba una lección particularmente impresionante sobre los peligros de una escisión dentro de la población blanca. En México fue la protesta india, y mestiza, la que dominó la primera etapa de la revolución, y la condujo al fracaso, al enfrentarla con la oposición conjunta de peninsulares y criollos. Si bien también en la América del Sur española esas fronteras de la sociedad colonial que separaban las castas no dejaron de hacerse sentir variando localmente el ritmo del avance revolucionario, su influjo no bastó para detenerlo. Se permitirá, entonces, que se examine, antes que la emancipación mexicana (ese tardío armisticio entre la revolución y la contrarrevolución locales), el avance de la revolución sudamericana.

En 1810 se dio otra etapa en el que parecía ser irrefrenable derrumbe de la España antinapoleónica: la pérdida de Andalucía reducía el territorio leal a Cádiz y alguna isla de su bahía; en medio de la derrota, la Junta Suprema sevillana, depositaria de la soberanía, era disuelta sangrientamente por la violencia popular, en busca de responsables del desastre: el cuerpo que surgía en Cádiz para reemplazarla se había designado a sí mismo; era titular extremadamente discutible de una soberanía ella misma algo problemática.

Este episodio proporcionaba a la América española la oportunidad de definirse nuevamente frente a la crisis del poder metropolitano: en 1808, una sola oleada de lealtad dinástica y patriotismo español había atravesado las Indias; en todas partes había sido jurado Fernando VII y quienes en su nombre gobernaban. Dos años de experiencia con un trono vacante, y que lo seguiría estando por un futuro indefinido, los ensayos –de signo peninsular o criollo–, por definir de un modo nuevo las relaciones con la revolucionaria metrópoli, parecían anticipar ahora una respuesta más matizada. Así parecieron creerlo las autoridades coloniales que habían gobernado en nombre de Sevilla, y ahora aspiraban a seguir haciéndolo en nombre de Cádiz; por eso intentaron en casi todas partes dorar la difusión de nuevas tan alarmantes.

Esas precauciones no logran su propósito: la caída de Sevilla es seguida en casi todas partes por la revolución colonial; una revolución que ha aprendido ya a presentarse como pacífica y apoyada en la legitimidad. ¿Hasta qué punto era sincera esta imagen que la revolución presentaba de sí misma? Exigir una respuesta clara significa acaso no situarse en la perspectiva de 1810. Sin duda había razones para que un ideario independentista maduro prefiriese ocultarse a exhibirse: junto al vigor de la tradición de lealismo monárquico entre las masas populares (pero este rasgo tiende acaso a exagerarse, puesto que bastaron algunos años de revolución para hacerlo desaparecer) pesaba la coyuntura internacional que obligaba a contar con la benevolencia inglesa (y la nueva aliada de España, si podía mantener una ecuánime simpatía frente a los distintos centros locales que gobernaban en nombre del rey cautivo, no podía, en cambio, extenderla a movimientos abiertamente secesionistas). Pero, en medio de la crisis del sistema político español, el pensamiento de los revolucionarios podía ser sinceramente más fluctuante de lo que la tesis del fingimiento quiere suponer. Sobre todo, ésta tiende a olvidar algo muy importante: los revolucionarios no se sienten rebeldes, sino herederos de un poder caído, probablemente para siem-

pre: no hay razón alguna para que marquen disidencias frente a ese patrimonio político-administrativo que ahora consideran suyo y al que entienden hacer servir para sus fines.

Estas consideraciones parecen necesarias para apreciar el problema del tradicionalismo y la novedad ideológica en el movimiento emancipador: más que las ideas políticas de la antigua España (ellas mismas, por otra parte, reconstruidas no sin deformaciones por la erudición ilustrada) son sus instituciones jurídicas las que convocan en su apoyo unos insurgentes que no quieren serlo. En todas partes, en efecto, el nuevo régimen, si no se cansa de abominar del viejo sistema, aspira a ser heredero legítimo de éste: en los defensores del antiguo régimen le interesa mostrar también a rebeldes contra la autoridad legítima.

Y en casi todas partes las nuevas autoridades pueden exhibir signos –sin duda algo discutibles– de esa legitimidad que tanto les interesa. Las revoluciones, que se dan sin violencia, tienen por centro al Cabildo; esta institución municipal (que ha resistido mal a los avances de las magistraturas delegadas por la Corona en sus Indias, y –renuévese por cooptación o por compra y herencia de cargos– representa tan escasamente a las poblaciones urbanas) tiene por lo menos la ventaja de no ser delegada de la autoridad central en derrumbe; por otra parte, la institución del Cabildo Abierto –reunión de notables convocada por las autoridades municipales en las emergencias más graves– asegura en todos los casos (aun en Buenos Aires, donde el cabildo es predominantemente peninsular) la supremacía de las elites criollas. Son los cabildos abiertos los que establecen las juntas de gobierno que reemplazan a los gobernantes designados desde la metrópoli: el 19 de abril en Caracas, el 25 de mayo en Buenos Aires, el 20 de julio en Bogotá, el 18 de septiembre en Santiago de Chile. Esos gobernantes se inclinan en casi todas partes ante los acontecimientos: la Junta de Buenos Aires no se cansará de exhibir la renuncia –dudosamente espontánea– del último virrey, que previamente ha aprobado las reuniones de las que el cambio

de régimen ha surgido; también sin resistencia en Caracas el capitán general ha entregado una renuncia que es considerada signo de la legitimidad del poder que lo sustituye. En Nueva Granada y en Chile las juntas comienzan por ser presididas por los funcionarios a los que reemplazan: el virrey, en Bogotá; el anciano conde de la Conquista, gobernador interino antes instalado por la Audiencia (ella misma hostil al nuevo orden), en Santiago. Ese prudente cuidado de la legitimidad lleva la huella de lo que fueron esos primeros jefes del movimiento emancipados: abogados, funcionarios, maduros comerciantes trocados en jefes de milicias...

Por ahora la revolución es, en efecto, un drama que se representa en un escenario muy limitado: las elites criollas de las capitales toman su venganza por las demasiadas postergaciones que han sufrido; herederas de sus adversarios, los funcionarios metropolitanos, si bien saben que una de las razones de su triunfo es que su condición de americanas les confiere una representividad que todavía no les ha sido discutida -la de la entera población indiana-, y están dispuestas a abrir a otros sectores una limitada participación en el poder, institucionalizada en reformas liberales, no apoyan (no conciben siquiera) cambios demasiado profundos en las bases reales del poder político. No parecen advertir hasta qué punto su propia acción ha comenzado a destruir el orden colonial, del que piensan heredar; no adivinan que sus acciones futuras completarán esta obra destructiva. Pero ya no pueden detenerse; estos hombres prudentes han emprendido una aventura en que las alternativas, como dice verazmente la retórica de la época, son la victoria o la muerte: los ejecutados de 1809 muestran, en efecto, cuál es el destino que los espera en caso de fracasar.

Y, por mucha que sea su habilidad para envolverse con el manto de la legalidad, saben de antemano que ésta podrá ponerlos en mejor situación para combatir a sus adversarios internos, pero no doblegará la resistencia de éstos. En todas partes, funcionarios, clérigos, militares peninsulares utilizan su poder en contra de un movimiento que saben tramado en su

daño; la defensa de su lugar en las Indias la identifican (sin equivocarse) con la del dominio español. Hay así una guerra civil que surge en los sectores dirigentes; cada uno de los bandos procurará como pueda extenderla, buscar, fuera del círculo estrecho en que la lucha se ha desencadenado, adhesiones que le otorguen la supremacía.

Las primeras formas de expansión de la lucha siguen también cauces nada innovadores: las nuevas autoridades requieren la adhesión de sus subordinados. En Nueva Granada, en Chile, no encuentran, por el momento oposiciones importantes. En el Río de la Plata y en Venezuela sí las hallan: por otra parte, la revolución no ha tocado al virreinato del Perú, donde un virrey particularmente hábil, Abascal, organiza la causa contrarrevolucionaria. De la revolución surge de inmediato la guerra: hasta 1814, España no puede enviar tropas contra sus posesiones sublevadas, y aun entonces ellas sólo actúan eficazmente en Venezuela y Nueva Granada.

En el **Río de la Plata** la Junta revolucionaria envía dos expediciones militares a reclutar adhesiones: una de ellas, dirigida por Belgrano, el abogado de Salamanca y economista ilustrado, del que las circunstancias han hecho un jefe militar, fracasa en el Paraguay. Otra, tras de conquistar Córdoba, donde un foco de resistencia cuenta entre sus jefes al obispo y a Liniers (que es ejecutado), recoge las adhesiones del resto de Tucumán y ocupa casi sin resistencia el Alto Perú. Allí –primer signo de la voluntad de ampliar socialmente la base revolucionaria–, la expedición emancipa a los indios del tributo y declara su total igualdad, en una ceremonia que tiene por teatro las ruinas preincaicas de Tiahuanaco. El éxito de esta tentativa es escaso: los criollos altoperuanos se sienten, gracias a ella, más identificados con la causa del rey, y la movilización política de los indios no parece, por el momento, fácil de lograr. En julio de 1811, en Huaqui, las fuerzas enviadas por el virrey del Perú vencen a las de Buenos Aires; el Alto Perú –y con él la plata de Potosí, que ha sido la base de la economía y las finanzas virrei-

nales– quedan perdidos para la causa revolucionaria. La frontera de la revolución se fijará (luego del avance de los realistas sobre Tucumán y Salta, y de dos contraofensivas revolucionarias de éxito efímero) en la que separaba las audiencias de Buenos Aires y Charcas; en Salta será Martín Güemes, aristocrático jefe de la plebe rural, desconfiada de la lealtad revolucionaria de la aristocracia a la vez comercial y terrateniente, quien defienda con recursos sobre todo locales esa frontera. En el Alto Perú, con la emancipación de los indios y en Salta, con el movimiento plebeyo de Güemes, los revolucionarios de Buenos Aires han mostrado que son capaces de buscar apoyos en sectores que la sociedad colonial (en la que esos mismos revolucionarios tenían lugar elevado) colocaba muy abajo. Acaso esta audacia era más fácil porque el Alto Perú y Salta estaban muy lejos, y esa política no debía tener consecuencias en cuanto a la hegemonía local de los sectores que en Buenos Aires habían comenzado la revolución. Por el contrario, en teatros más cercanos la clase dirigente revolucionaria de Buenos Aires iba a mostrarse mucho más circunspecta.

Así iba a advertirse en la política seguida frente a la Banda Oriental. La revolución de 1810 iba a ser punto de partida de una nueva disidencia de Montevideo, en la que más que las reticencias del puerto rival de Buenos Aires contaba la presión de la estación naval española y sus oficiales peninsulares. Frente a ella, el gobierno revolucionario se decidió, a duras penas, a una acción militar: en 1811 la interrumpió mediante un armisticio que daba a las fuerzas portuguesas (primero llamadas a la Banda Oriental por los disidentes de Montevideo) papel de garantes; junto con Portugal, era Gran Bretaña la que aparecía como árbitro de la situación en esa frontera entre la América española y portuguesa. Al mismo tiempo iba a darse en la Banda Oriental, primero alentado y luego hostilizado por el gobierno revolucionario, un alzamiento rural encabezado por José Artigas: el movimiento rompía más radicalmente con las divisiones sociales heredadas, debilitadas, por otra parte, por la emigración temporaria de la población uru-

guaya a tierras de Entre Ríos, ese «éxodo del pueblo oriental» que fue la respuesta de Artigas a la ocupación de la campaña uruguaya por fuerzas portuguesas, aceptada por Buenos Aires. Retomada la lucha contra el Montevideo realista, una insegura alianza se estableció entre el artiguismo oriental y el gobierno de Buenos Aires. Sin embargo, en el mismo año de 1814 en que una fuerza expedicionaria de ese gobierno, comandada por el general Alvear, conquistaba finalmente Montevideo, el artiguismo, de nuevo en ruptura desde un año antes, se extendía por lo que había sido jurisdicción de la Intendencia de Buenos Aires; las nuevas provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se constituían políticamente bajo la égida de Artigas, proclamado protector de los pueblos libres. En 1815, el influjo de Artigas se afirmaba efímeramente sobre Córdoba, excediendo así los límites del litoral ganadero, que había sido tributario comercial de Buenos Aires durante el régimen colonial. El movimiento artiguista encontró la decidida resistencia del gobierno revolucionario de Buenos Aires, que veía en él no sólo un peligro para la cohesión del movimiento revolucionario, sino también una expresión de protesta social que requería ser inmediatamente sofocada. Esta interpretación, válida hasta cierto punto para la Banda Oriental, lo era bastante menos para las tierras antes dependientes de Buenos Aires, donde todos los sectores sociales, capitaneados por los más grandes propietarios y comerciantes, apoyaban la disidencia artiguista. En todo caso los argumentos sin duda sinceramente esgrimidos desde Buenos Aires contra el artiguismo mostraban hasta qué punto el equipo dirigente revolucionario se mostraba apegado al equilibrio social que sus acciones debían necesariamente comprometer.

Esas coincidencias de objetivos no impidieron que ese equipo dirigente mostrara, desde el comienzo, muy graves fisuras. La junta constituida para reemplazar al virrey estuvo bien pronto dividida entre los influjos opuestos de su presidente, el coronel Saavedra, maduro comerciante altoperuano que era desde 1807 jefe del más numeroso cuerpo de milicias

criollas de Buenos Aires, y en 1809 había salvado a Liniers de las asechanzas de los peninsulares alzados, y de su secretario, el abogado Mariano Moreno, que en aquella oportunidad había figurado entre los adversarios del virrey y ahora revelaba un acerado temple revolucionario. Moreno estaba detrás de las medidas depuradoras que los hechos revelaban ineludibles: expulsión del virrey y la Audiencia, cambio del personal del Cabildo, ejecución de los jefes de la oposición cordobesa, entre ellos Liniers. Su influjo fue creciendo a lo largo de 1810; a fines de ese año, ante una tentativa -por otra parte muy poco digna de ser tomada en serio- de propaganda en favor de la coronación de Saavedra, logró de la Junta medidas que eran una humillación para éste. Su victoria era poco sólida: la política severa que era la suya, si se imponía debido a las exigencias de la hora, tendía a hacerlo impopular en la medida en que se adivinaba detrás de ella, más bien que un conjunto de recursos de excepción, la tentativa de erigir en el Río de la Plata una réplica de la Francia republicana. Por otra parte, a fines de 1810, la Junta, expresión de una revolución municipal, como había sido la de Buenos Aires, debió ampliarse para incluir representantes de los cabildos de las demás ciudades del virreinato. Ahora entraba en ella, con el deán cordobés Funes, un rival para Moreno, quien -ante la evidencia de que su facción estaba derrotada- renunció y aceptó un cargo diplomático en Londres. Nunca iba a ejercerlo; murió en la travesía... Su partido, decapitado, fue objeto, en 1811, de una persecución en regla, con juicios, destierros y proscripciones. El triunfo de los moderados se reveló también efímero; a fines de 1811 debían establecer un gobierno más concentrado -el triunvirato- para enfrentar la difícil situación revolucionaria y aplicar también ellos la política dura: a los saavedristas se debió la erección de horcas en Buenos Aires para la ejecución de Alzaga y otros conspiradores adversarios del movimiento.

Esta severidad nueva no salvó a la facción saavedrista de ser expulsada por una revolución militar en octubre de 1812; ella marcó el fin del predominio de las milicias urbanas, creadas en

1807; ahora eran los oficiales del ejército regular, ampliado por la revolución de 1810, quienes dictaban la ley. Ellos y algunos sobrevivientes de las etapas políticas anteriores formaron en la logia Lautaro, que iba a dirigir de modo apenas secreto la política de Buenos Aires hasta 1819. Entre los miembros de la logia contaban dos oficiales llegados de España en 1812; el mercurial e inquieto Alvear y el más circunspecto –por el momento menos escuchado– San Martín. Alvear era el hombre de la hora: enviado a Montevideo para recoger los laureles de una victoria ya segura, había logrado colocar a un pariente, sacado de la oscuridad de un cargo notarial en el obispado, como director supremo en reemplazo del triunvirato. Luego de la conquista de Montevideo, tomó personalmente el gobierno; en él iba a durar poco: ante la acentuación de la resistencia interna tendió a apoyarse en el ejército como instrumento de represión; al mismo tiempo –frente a lo que le parecía el fracaso de la experiencia revolucionaria– buscaba, sea en el protectorado inglés, sea en una reconciliación con la España en que había sido restaurado el rey legítimo, una salida sin victoria, pero sin derrota. Finalmente, fue la parte del ejército enviada a combatir al artiguismo litoral quien prefirió derrocar a Alvear; con su caída concluía un ciclo de la revolución rioplatense, y parecía concluir la revolución misma; aun muy cercana a su momento más alto, alcanzado en 1813, cuando una Asamblea soberana, reunida en Buenos Aires, aunque había prescindido de declarar la independencia, había dado pasos importantes en la modernización legislativa (supresión de mayorazgos y títulos nobiliarios; supresión del tribunal inquisitorial; libertad para los hijos de esclavas nacidos en el futuro) y afirmado –mediante la oficialización del escudo, la bandera y el himno– los símbolos de la soberanía que no se decidía a proclamar.

Dividida contra sí misma, expulsada nuevamente del Alto Perú, la revolución de Buenos Aires parecía ahora agonizar. La de **Chile** moría en 1814. También aquí las facciones habían deshecho la solidaridad del movimiento de apoyar su he-

gemonía en fuerzas necesariamente menos restringidas: el ejército, la plebe urbana... La propaganda revolucionaria adquirió intensidad mayor; la primera imprenta de Chile (importada por un comerciante norteamericano amigo de la Revolución) iba a ser usada, sobre todo, para difundir el nuevo evangelio político. Pero a principios de 1813, tropas desembarcadas del Perú en el sur de Chile (donde el nuevo régimen nunca había sido reconocido) comenzaban la lucha contra la revolución. Ésta cerraba filas para defenderse, pero fracasaba en el sitio de Chillán, transformada en fortaleza realista; caída Talca, el movimiento chileno redescubría su orientación moderada y pactaba en Lircay la reconciliación con el invasor. José Miguel Carrera logró huir de su prisión realista; en Santiago, mediante un nuevo golpe militar, expulsó al dictador moderado de la Lastra y se preparó para la última resistencia; el primero de octubre de 1814, O'Higgins era vencido en Rancagua por los realistas, mientras Carrera permanecía en la retaguardia. El general realista Osorio entraba en Santiago; los más significados revolucionarios huían a Mendoza, más allá de la cordillera, donde podían proseguir con más calma sus luchas internas: frente a Carrera y sus hermanos, jefes de las tendencias radicales, O'Higgins aparecía a la cabeza de un nuevo sector moderado, ganado ya sin reticencias a la causa revolucionaria, pero dispuesto a controlar firmemente su rumbo. Por el momento no parecía, sin embargo, que esas luchas pudiesen volver a gravitar en el futuro de Chile.

En el norte de Sudamérica las alternativas de la primera etapa revolucionaria eran aún más dramáticas. En **Venezuela** la revolución del Jueves Santo de 1810, que colocaba al frente de la capitanía a una junta de veintitrés miembros, encontraba finalmente una cabeza en Miranda. Recibido sin entusiasmo por los oligarcas, que debían su riqueza a la expansión del cacao en el litoral venezolano y controlaban el movimiento revolucionario, Miranda intentó dotarlo de un aparato militar eficaz, y a la vez radicalizarlo: en julio de 1811 lograba que –no

sin íntima perplejidad– la revolución venezolana proclamara la independencia de España. Esa revolución controlaba el litoral del cacao; el oeste y el interior seguían leales a la causa del rey, y en Coro, base naval al oeste de Caracas, el capitán Monteverde mantenía una resistencia armada, por el momento escasamente alarmante.

El terremoto de Caracas –en el que los realistas vieron un castigo celeste– pareció romper ese equilibrio demasiado apacible: Monteverde avanzó hacia el este, sin encontrar una resistencia suficientemente enérgica de Miranda, que parece haber estado animado desde el comienzo por cierto pesimismo en cuanto al futuro de la revolución venezolana. El 30 de junio la guarnición revolucionaria de Puerto Cabello se pronunciaba por la causa realista: Bolívar, que había actuado hasta el momento entre los secuaces radicales de Miranda, y era oficial en su ejército, fracasó en una tentativa de sofocar el alzamiento. Mientras tanto, el desorden crecía en las plantaciones de los jefes revolucionarios: la revolución comenzaba a alborotar a los negros y pareció llegado el momento de darla por terminada. Un armisticio la concluía: en un episodio oscuro (en el que tuvo participación Bolívar) Miranda fue entregado a los realistas, para terminar en cautiverio su complicada vida; Bolívar, que no entendía por su parte dar por terminada la lucha, se refugiaba en Nueva Granada.

Mientras los *mantuanos*, aristócratas de Caracas, daban por terminada su fútil revolución, otros continuaban la lucha: los pescadores y marineros negros y mulatos de la isla Margarita y la costa de Cumaná. Los jefes eran ahora Piar, mulato jamaicano, Bermúdez y Arizmendi. La guerra en el Este tomó pronto carácter salvaje: los alzados mataban con especial predilección a los colonos canarios, demasiado numerosos y emprendedores; éstos se constituían en columnas del orden realista, cazando revolucionarios y coleccionando los despojos de sus mortales hazañas. La tropa realista se adaptó demasiado bien a ese nuevo tipo de guerra, y los que habían desencadenado el proceso podían ahora comprobar que no era fácil

detenerlo. Mientras Mariño, el jefe del alzamiento de Cumaná, avanzaba desde el Este, Bolívar –tras una breve experiencia en la caótica revolución neogranadina– reaparecía en los Andes venezolanos: también él avanzaba con tropas abigarradas hacia Caracas, también él adoptaba el nuevo estilo de guerrear que la segunda revolución venezolana había introducido, y lo institucionalizaba el 15 de junio de 1813, decretando la guerra a muerte, el exterminio de todos los peninsulares y canarios que pudiesen caer bajo la venganza revolucionaria. En agosto entraba en Caracas, mientras Monteverde se refugiaba en Puerto Cabello.

La resistencia realista iba a encontrar un nuevo jefe en Boves; con él otra región venezolana entraba en la lucha: los Llanos, la estepa ganadera entre la rica montaña costeña del cacao y el Orinoco, límite de las tierras dominadas. Aquí, en torno de una ganadería menos próspera que la rioplatense, había surgido una humanidad mestiza de pastores jinetes, dirigidos por capataces en nombre de propietarios a menudo remotos. Boves –ex marino asturiano de turbio pasado– los iba a conducir, en nombre del rey, contra la rica Caracas. Los andinos de Bolívar, los costeros de Mariño, fueron finalmente derrotados por los llaneros de Boves; Bolívar se refugiaba nuevamente en Nueva Granada, para pasar a Jamaica; desde allí iba a dirigir un fracasado intento contra Caracas, para volver a su refugio en esa colonia británica.

Venezuela se transformaba ahora en fortaleza realista: en 1815 –primer fruto del retorno de Fernando VII al trono de España–, diez mil hombres, mandados por el teniente general Morillo, llegaban de la metrópoli y preparaban, desde Caracas, el golpe de gracia contra la revolución de Nueva Granada. Ésta había tenido una trayectoria menos trágica, pero sin duda más agitada que la venezolana. La hostilidad que en el sur del virreinato Pasto y Popayán mostraban al nuevo régimen no alarmó a sus dirigentes; tampoco parece haberlos inquietado que esas comarcas disidentes fuesen la prolongación del bloque sólidamente contrarrevolucionario que formaban

Quito y el Perú. Más daño iba a recibir la revolución neogranadina de sus propios jefes y de las tendencias dispersivas que en ella iban a dominar. En la región que albergaba a la capital virreinal, Nariño, que hacía la veces de revolucionario extremo, lograba desplazar al más moderado Lozano y erigirse en presidente de la república de Cundinamarca; ésta se resignaba mal a confundirse en las Provincias Unidas de Nueva Granada, de las que terminó por retirarse y con las que llegó a estar en lucha. Sólo en 1814, cuando los realistas del Perú habían avanzado de Popayán a Antioquía y capturado a Nariño, la Confederación neogranadina –utilizando los servicios de Bolívar– lograba, a su vez, conquistar Bogotá y, finalmente, establecer un gobierno central, incapaz, sin embargo, de hacerse obedecer en toda la zona revolucionaria de Nueva Granada. Bolívar, retornado a Nueva Granada luego de la caída de la segunda revolución venezolana, abandonó la lucha cuando se hizo evidente que, aun en su agonía, el movimiento neogranadino se resistía a unificarse. Morillo entraba primero en Cartagena y luego en Bogotá; del alzamiento del norte de Sudamérica parecía no quedar ya nada.

En 1815, entonces, sólo quedaba en revolución la mitad meridional del virreinato del **Río de la Plata;** su situación parecía aún más comprometida porque ya la lucha había dejado de ser una guerra civil americana: la metrópoli devuelta a su legítimo soberano comenzaba a enviar hombres y recursos a quienes durante más de cuatro años habían sabido defender con tanto éxito y con sólo recursos locales su causa. Las cosas, como se sabe, iban a ocurrir muy de otra manera: la razón de este vuelco suele encontrarse en la política extremadamente –y, según se dice, innecesariamente– severa que siguieron los vencedores. Sólo ella habría impedido que Hispanoamérica volviera a entregarse a los blandos encantos del antiguo régimen, mejor apreciados, luego de cuatro años de guerra civil, aun por algunos de los que habían sido revolucionarios. Pero esta explicación deja de lado un hecho de alguna importancia:

por desagradable que hubiera sido la experiencia de la guerra civil, ella y sus consecuencias seguían existiendo; aun una política menos vengativa que la de los realistas vencedores hubiera hallado muy difícil imponer un orden estable a los –sin duda escasos– partidarios irreductibles de la revolución.

Ésta no había cambiado menos a las zonas realistas que a las revolucionarias: en unas y otras sus efectos habían sido semejantes. Los políticos y militares en primer término: ellos eran particularmente intensos en Venezuela y en algunas zonas marginales del Río de la Plata, donde se había asistido a una movilización popular en vasta escala, capaz de desbordar el marco institucional preexistente. Las consecuencias de este proceso eran demasiado evidentes y alarmantes para los dirigentes políticos de uno y otro bando; allí donde alcanzaba sus extremos, la disciplina social parecía en peligro de disolverse, y las persecuciones contra los realistas o contra los patriotas, contra los peninsulares o contra los criollos, corrían riesgo constante de transformarse en una guerra caótica de los pobres contra los ricos.

Pero aun salvando estos extremos, aun los más prudentes jefes realistas y patriotas se veían obligados a entrar por un camino cuyos futuros tramos los llenaban de una alarma no inmotivada. Tenían que formar ejércitos cada vez más numerosos, en los que las clases altas sólo proporcionaban los cuadros de oficiales; eso suponía armar a un número creciente de soldados reclutados entre la plebe y las castas. Tenían que mantenerlos pasablemente satisfechos; ello implicaba una tolerancia nueva en cuanto al ascenso. Ha pasado ya el tiempo en que en el ejército real hacían carrera sobre todo los españoles de España; ahora pasan a primer plano jefes criollos, y aun algunos de los futuros generales mestizos de la Hispanoamérica independiente han alcanzado su grado en las filas realistas: así, Castilla, Santa Cruz, Gamarra en Perú y Bolivia... Tenían además que dotarlos de recursos; y aquí la política toca con la economía. Historiadores llenos de justificada admiración recordarán los sacrificios espontáneos de las elites patriotas

(dejando en segundo plano a los impuestos a los recalcitrantes por gobiernos dispuestos a todo) o la habilidad que en el manejo de recursos cada vez más escasos permitió sobrevivir a tal o cual zona patriota o realista, encerrada en un cerco hostil. Todo ello se resume en una inmensa destrucción de riqueza: de riqueza metálica en primer término; la atesorada por oligarquías urbanas, iglesias y conventos, la empleada en obras de fomento por los consulados de comercio, encuentran ahora su destino en la guerra. De riqueza en frutos y ganados: sobre todo a estos últimos la guerra los consume con desenfreno.

Y estos cambios económicos se suman a otros, en una economía que ha conquistado por fin -y no sólo en las zonas patriotas- las ambiguas bendiciones de la libertad de comercio. En Buenos Aires, en la efímera Venezuela de Miranda, en Santiago de Chile, menos marcadamente en la Nueva Granada, encerrada por la naturaleza en su meseta, el libre comercio significa una vertiginosa conquista de las estructuras mercantiles por emprendedores comerciantes ingleses, que vuelcan sobre Sudamérica el exceso de una producción privada de su mercado continental. Todo es ahora mucho más barato; comienza la lenta ruina de las artesanías de tantas regiones; ésta no debiera hacer olvidar la más rápida -y en lo inmediato más importante- de quienes suelen invocarla en tono inesperadamente sentimental: los grandes comerciantes enriquecidos en la carrera de Cádiz. Éstos -políticamente sospechosos, económicamente perjudicados por el nuevo orden- encabezan la marcha hacia la ruina en otros sectores urbanos antes dominantes, apresurada a la vez por la depuración política, que en las zonas revolucionarias afecta a las magistraturas, y en las realistas a más de un gran propietario amigo de las luces.

En particular, la lucha contra el peninsular va a significar la proscripción sin inmediato reemplazo de una parte importante de las clases altas coloniales; aun en la más apacible Buenos Aires, los españoles peninsulares tienen, desde 1813, legalmente prohibido el comercio menudo, lo que no impide

que todavía por largos años figuren a la cabeza en las contribuciones forzosas para sostener la causa revolucionaria. Toda su vida aparece trabada por limitaciones: les está vedado andar a caballo, salir de su casa por las noches; no pueden ya ser albaceas ni tutores... Sin duda, estas disposiciones se cumplen sólo a medias, pero la benevolencia con que se las aplica no es siempre gratuita. Esta tragedia silenciosa, que encuentra su culminación en la guerra a muerte, ha comenzado ya a transformar la imagen que la sociedad hispanoamericana se hace de sí misma: el peligro que para las clases altas en su conjunto tenía la humillación y el empobrecimiento de los peninsulares era muy lúcidamente advertido por algunos jefes revolucionarios; aun así, no les quedaba otro camino que presidir ese riesgoso proceso. Vencida la revolución, la represión utiliza mecanismos parecidos: en Venezuela, luego de la conquista de Morillo, son bandas de mulatos vengadores del viejo orden las que quiebran la ilusión de una restauración en la concordia. Entre los realistas, como entre los revolucionarios, la plebe y las castas tienen su parte en la victoria y no tienen las mismas razones que las oligarquías locales, o los oficiales metropolitanos amigos del orden, para querer moderar sus consecuencias. Sin duda, la transformación de la revolución en un proceso que interesa a otros grupos al margen de la elite criolla y española ha avanzado de modo variable según las regiones, desde un máximo en Venezuela hasta un mínimo en Nueva Granada, donde las disensiones revolucionarias son las de las oligarquías municipales, cuyo dominio no ha sido aún cuestionado; el Río de la Plata, menos tocado que Venezuela por el proceso, que el poder revolucionario parece aún capaz de controlar, ha sido, sin embargo, más afectado por él que Chile. Pero en todas partes se ha avanzado demasiado en este sentido para que sea posible clausurar todo el episodio como una deplorable rencilla interna a las elites del orden colonial; hay ya demasiados interesados en que esto no suceda. Sería, sin duda, antihistórico ver en estos enemigos de la conciliación adversarios lúcidos del orden social prerrevolucionario; eran

tan sólo gentes escasamente interesadas en la supervivencia de ese orden y directamente interesadas, en cambio, en mantener abiertas las nuevas oportunidades que (al margen si no en contra de ese ordenamiento) la guerra había creado.

No es extraño entonces que la guerra continúe; el fruto de la severidad de los agentes de la restauración fue, más bien que la perpetuación de esa guerra, el aumento en el número de sus adversarios. Por añadidura, la guerra misma va a tomar ahora un nuevo carácter: aunque luego de los envíos de tropas a Perú y Venezuela los auxilios de la metrópoli vuelven a hacerse escasos, de todos modos ésta aparece dirigiendo los esfuerzos de supresión total del movimiento revolucionario, y la transformación de la guerra civil en guerra colonial no deja de causar tensiones entre los realistas: oficiales y soldados metropolitanos y criollos estarían pronto divididos por muy fuertes rivalidades. Pero, por otra parte, la posibilidad de nuevos apoyos metropolitanos parecía asegurar sostén indefinidamente prolongado para la causa del rey. Frente a ella, la de la revolución no iba a estar ya representada por focos aislados entre sí, cuyos dirigentes descubrían con creciente sorpresa (a menudo con creciente alarma), lo que significaba lanzar una revolución, y mostraban una tendencia notable a quedarse en el camino. Las empresas militares de liberación que ahora comenzaban no iban a estar marcadas ni por el zigzagueo entre revolución y lealismo español, que se creía hábil y se había revelado suicida, ni por la inclinación desesperada, y también suicida hacia la solución –como se decía entonces– catilinaria, hacia el alzamiento desordenado de la plebe demasiado tiempo sumisa que, a manera de alud, habría de derribar a los defensores del antiguo régimen. Ahora las soluciones políticas se subordinaban a las militares; a los episodios armados de una compleja revolución los reemplazaba una guerra en regla.

¿Pero precisamente podía la revolución hispanoamericana, al borde de la extinción, realizar lo que no había sabido hacer en la plenitud de sus fuerzas, contra un enemigo acorralado? Aquí la historiografía tradicional en Hispanoamérica, que an-

tes que explicar la victoria revolucionaria prefiere la tarea infinita de cantar la grandeza de semidivinos héroes fundadores, no se equivoca del todo: la figura de los organizadores de la victoria es, en efecto, una de las claves para entender esa victoria misma.

No la única, sin duda. Entre la primera y la segunda etapa de la revolución hispanoamericana se dio la restauración en España y en Europa: de ella derivaban para la revolución peligros, pero también posibilidades nuevas. El gobierno británico, que había mantenido hasta entonces una cuidadosa ambigüedad, si no iba ahora a definirse en favor de la causa revolucionaria, iba a ser menos vigilante en cuanto a la provisión de voluntarios (y, lo que era más importante, de armas) para los ejércitos que combatían contra los realistas. Por su parte, Estados Unidos terminaba con la paz de Gante (1814) su segunda guerra de independencia; si tampoco allí la causa de la revolución hispanoamericana encontró apoyos abiertos del poder público, a partir de ese momento la neutralidad oficial se iba a mostrar más benévola para los patriotas: también allí resultaría cada vez más fácil comprar armas y reclutar corsarios. Esta apertura internacional casi clandestina no alcanzó nunca volumen considerable; que haya sido un elemento importante en el destino de la revolución hispanoamericana, muestra qué limitados medios materiales requería ésta para llevar adelante su causa.

Los que llegaban a los adversarios de la revolución no eran, por otra parte, mucho más curiosos. Las victorias realistas de 1814-15 parecieron ser el anticipo de una intervención creciente de la fuerza militar metropolitana en América. No fue así, sin embargo; la restauración absolutista española enfrentaba demasiados problemas internos para poder consagrar un esfuerzo constante al sometimiento de las colonias aún sublevadas; tenía, además, que contar con la presencia de fuertes tendencias liberales en el ejército al que tocaría la tarea reconquistadora. Por otra parte, la pobreza pública y privada, que era consecuencia de la guerra peninsular, hacía más difícil

una empresa de reconquista necesariamente costosa. Por último, los dirigentes de la España restaurada no parecen haber advertido las dificultades mismas de la tarea que su obstinación les había llevado a emprender: volver a España y sus tierras ultramarinas al orden viejo les parecía un objetivo no sólo justo, sino fácilmente accesible.

Por añadidura, la España absolutista sólo presidió la etapa primera y menos grave del derrumbe de la causa española en América; antes de que pudiese medirse su capacidad de resistencia frente a las últimas extremidades, la revolución liberal de 1820 –proclamada por el ejército destinado a conquistar Buenos Aires– creaba una situación nueva. Sin duda, la España liberal no aspiraba a liquidar alegremente los dominios ultramarinos (por el contrario, mostró esa tendencia a renovar sólo los medios y mantener los objetivos de la España del antiguo régimen, que ya había irritado a tantos americanos en la política de las Cortes de Cádiz). Pero aún el cambio de métodos se hacía riesgoso, cuando se habían producido ya las primeras etapas del retorno ofensivo de la revolución. Salvar lo salvable, reconociendo la independencia de las tierras que se habían revelado inconquistables, manteniendo, en cambio, el dominio de las que se habían mostrado más sumisas; o bien reformar audazmente la relación global entre España y las Indias, creando un conjunto de reinos ligados por una unión personal dinástica o aun por un más flexible pacto de familia; estos proyectos podían ser razonables desde una perspectiva metropolitana. Pero en la resistencia contra la revolución emancipadora, sus adversarios locales habían contribuido más que la metrópoli y no iban a aceptar pasivamente constituirse en víctimas propiciatorias para la reconciliación entre ésta y los insurgentes. La España liberal fue vista desde el comienzo con desconfianza por los hispanoamericanos hostiles a la Revolución: éstos tratarían, en algunos casos, de imponer el mantenimiento de la política más intransigente, que había sido la de la restauración absolutista; en otros más numerosos, de preparar discretamente una reconciliación con el ban-

do opuesto, que en vista de la relación de fuerzas se daría necesariamente bajo el signo de una victoria revolucionaria; ambas reacciones iban a debilitar la capacidad de resistencia realista.

La restauración del absolutismo en 1823 llegaba demasiado tarde para influir en los nuevos equilibrios locales que preparaban el desenlace de la guerra de Independencia. Por otra parte, iba a implicar un nuevo debilitamiento de la gravitación de la metrópoli en la lucha hispanoamericana. La restauración del absolutismo español por la Francia de Luis XVIII marcó un momento importante en la quiebra de la inquieta concordia que había caracterizado a los primeros años de la restauración europea; era el fruto de una victoria diplomática de Francia frente a Inglaterra, pero precisamente por serlo no podían derivarse de ella todas las consecuencias que hubiesen sido en principio pensables. Un nuevo avance de Francia -y de las potencias continentales con las que en este episodio había hecho causa común- no iba a ser ya tolerado por Gran Bretaña. Gracias a la restauración del absolutismo en España, la neutralidad británica se inclinaba más decididamente a favorecer a la revolución hispanoamericana; el auxilio que desde Miranda hasta Bolívar los revolucionarios habían esperado del retorno a la hostilidad angloespañola, se anunciaba ahora, sin duda más tardíamente de lo esperado, pero aún a tiempo para contribuir a un rápido desenlace del conflicto... A la vez, Estados Unidos, perdidas luego de la compra de la Florida española (1822) las últimas razones para guardar alguna consideración a la España fernandina, alineaban ruidosamente su política sobre la británica: la doctrina Monroe, formulada en diciembre de 1823, declaraba, entre otras cosas, la hostilidad norteamericana a una empresa de reconquista de Hispanoamérica por la Europa de la restauración.

En ese momento, la guerra de Independencia había ya avanzado hasta muy cerca de su final exitoso: sólo el Alto Perú, la sierra bajoperuana y algunos rincones insulares del sur de Chile seguían adictos al rey. El avance de la revolución había

sido la obra de San Martín y Bolívar; el primero, con la base que proporcionaban las provincias del Río de la Plata; el segundo, al comienzo sin base ninguna en el continente, habían encabezado dos campañas militares de dimensiones continentales.

José de San Martín, hijo de un funcionario español y de una criolla de Buenos Aires (perteneciente también ella a una familia de funcionarios regios), había comenzado una de esas carreras militares que en el Antiguo Régimen eran preferidas por tantos hijos de familias distinguidas y sin fortuna. Trasladado a la metrópoli desde casi niño, su formación profesional se vio enriquecida por la experiencia de la guerra de Independencia española: de ella iba a sacar enseñanzas que contribuirían a su propio estilo militar. En 1812, por vía de Londres, San Martín regresó a su tierra de origen, junto con otros militares españoles de origen americano. En Buenos Aires, reconocido como coronel y casado con la hija de una de las casas de más rica aristocracia patriota (lo que no impidió que la elite criolla lo tuviese siempre por ajeno a ella y, por tanto, escasamente digno de confianza), se dedicó a organizar un cuerpo, el de Granaderos a Caballo, que debía reunir a la adecuación al teatro americano una disciplina rigurosa y preparación suficiente para servir a una estrategia compleja (cualidades que faltaban, en general, tanto a los cuerpos insurgentes como a los improvisados por los realistas). En 1813, una primera victoria -poco más que una escaramuza- contra una incursión fluvial realista contra San Lorenzo, en la costa del Paraná; en 1814, un efímero comando del ejército del Norte en derrota; en seguida, mientras la estrella política de Alvear ascendía en Buenos Aires, el gobierno de la intendencia de Cuyo, al pie de los Andes. La caída de la Patria Vieja, de la primera revolución chilena, transformó a Mendoza en centro de refugio y consolidó la preferencia de San Martín por un nuevo plan de ataque a la fortaleza realista peruana, ahora a través de Chile y el mar, hasta Lima, que se había revelado inalcanzable por vía de tierra, separada como estaba de las provincias rioplatenses por

todo el espesor del altiplano altoperuano y el laberinto de la sierra bajoperuana. Para llevar adelante este proyecto, San Martín iba a contar bien pronto con el apoyo del sector chileno por el que se inclinó, el que reconocía su jefe en O'Higgins: el argentino y el chileno estaban ambos marcados por el sello de la escuela de honrada seriedad que habían sido, en sus mejores aspectos y en sus mejores momentos, la administración y el ejército de la España resurgente del setecientos. Por los Carrera y su política demasiado brillante, demasiado ambiciosa y personal, San Martín no sentía sino aversión; no trató de integrar a ese linaje de díscolos aristócratas amigos de la plebe entre sus apoyos chilenos; juzgó luego con severidad sus iniciativas, cada vez más abiertamente subversivas y destinadas a rematar trágicamente.

San Martín contaría también con el auxilio del gobierno de Buenos Aires. Éste había resurgido de la crisis de 1815, cuyas dimensiones (a la vez locales e internacionales) la elite criolla de Buenos Aires supo apreciar con admirable lucidez. Un nuevo congreso se reunió en Tucumán en 1816; un nuevo director supremo –Pueyrredón, también él hombre de la logia, cuyo influjo sobrevivía a la crisis– iba a mantener unidas a las más de las tierras rioplatenses durante tres años. Ello fue posible gracias a la alianza entre el sector gobernante de la capital y los dominantes en Tucumán y Cuyo, no tocados por el federalismo artiguista; el centralismo del régimen de Pueyrredón cubría mal una paulatina cesión de poderes efectivos a grupos locales en las cada vez más numerosas provincias creadas por desmembración de las intendencias virreinales. Esos grupos eran marcadamente conservadores, y ahora el tono general de la revolución rioplatense lo era cada vez más (un rasgo externo pero significativo: los diputados que en 1813 habían usado el término de ciudadanos para dirigirse a sus colegas preferían ahora el más tradicional de señores). Ese conservadurismo era además una tentativa de adaptación a la nueva coyuntura internacional; se acompañaba de la constante agitación de proyectos monárquicos que contaban, por otra parte, con la

adhesión de los jefes militares, y tenían por objeto último alcanzar una reconciliación con la Europa de la Restauración. En esa política no todo era oportunismo: tras de ella estaba también la desazón creciente de la elite porteña, cuyas bases económicas parecían cada vez más debilitadas por el avance mercantil británico, y que –luego de sufrir por primera vez, en 1814, las consecuencias locales de una crisis europea, con el derrumbe del precio de los cueros– tendía a hacerse una imagen más sobria de las ventajas e inconvenientes del nuevo orden económico.

El régimen de Pueyrredón seguía teniendo un flanco débil: la irreconciliable disidencia artiguista en el litoral. Contra ella utilizó el más censurado de sus expedientes políticos: otorgar su beneplácito a un avance portugués sobre la Banda Oriental, que desde 1816 mantuvo a Artigas absorbido por la defensa, cada vez más difícil, de su tierra nativa. Sus lugartenientes siguieron, sin embargo, resistiendo con éxito los avances porteños, y en 1819 el régimen de Pueyrredón mostró signos muy claros de descomposición espontánea; ese mismo año, una constitución centralista, que preparaba con nombre republicano un marco institucional para la proyectada monarquía, fue rechazada en casi todas partes. El régimen quiso utilizar al ejército para sobrevivir; San Martín se negó a traer de Chile, ya liberado, su ejército de los Andes, y el del Norte se rebeló en camino hacia Buenos Aires. Fue ese el punto de partida de la disolución del estado central, consumado cuando los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos –secuaces cada vez más independientes de Artigas– se abrieron el camino de Buenos Aires.

Al régimen de Pueyrredón se le dirigieron los más severos reproches póstumos; en medio de ellos tendía a olvidarse que una de las causas de su caída era la seriedad con que había asumido la tarea de proporcionar los medios para la guerra que iba a librarse más allá de los Andes: una parte del aborrecimiento que había ya despertado en 1819 provenía de los prolongados sacrificios que había exigido de sus gobernados. Pero la ayuda de las provincias del Río de la Plata, en su con-

junto, no fue en la empresa chilena de San Martín más importante que la que él logró extraer de la provincia de Cuyo, por él gobernada y orientada por entero en su economía hacia la preparación del ejército. A comienzos de 1817, éste podía comenzar el avance a través de la cordillera, hacia Chile. Eran tres mil hombres los que afrontaban la empresa; el 12 de febrero, la victoria de Chacabuco les abría el camino de Santiago: allí O'Higgins era nombrado Director Supremo de la república chilena; en marzo, la derrota de Cancha Rayada estuvo a punto de terminar con ella, pero la victoria de Maipú, en abril, la salvaba (aunque la resistencia realista en el sur de Chile iba a durar todavía por años). La nueva república, que debía enfrentar la pesada herencia de disidencias legada por la patria vieja, iba a ser marcada por un autoritarismo frío y desapasionado, versión guerrera del arte de gobernar heredado de la ilustración española; para rehacer la cohesión interior, O'Higgins debió presidir la turbia eliminación del héroe guerrillero de la liberación de Chile, Manuel Rodríguez, irreductible en su adhesión a los Carrera. Contra los disidentes, y aún más decididamente contra los realistas, la revolución iba a emplear una política análoga a la de la restauración a la que había vencido: prisiones, confiscaciones, procesos inacabables...

La reconquista de Chile debía ser el primer paso en el avance hacia Lima. Éste era aún más difícil que la etapa anterior. Era preciso, en primer término, crear una marina de guerra; formada a partir de una diminuta flotilla con presas por ella conquistadas, ésta encontró su jefe en un gran señor aventurero, lord Cochrane, que la dirigió primero en expediciones de saqueo y destrucción sobre el litoral peruano; en agosto de 1820 partía para liberar Perú, con algo más de cuatro mil soldados, insuficientes para vencer a los más de veinte mil que formaban allí las fuerzas del rey. San Martín se proponía utilizar a su fuerza como un elemento de disolución del ya sacudido orden realista en el Perú; contaba con las molestias crecientes de una

guerra demasiado cercana y con las derivadas del bloqueo para sacudir la lealtad monárquica de los grandes señores criollos de la costa; luego de que los desesperados realistas habían abierto ese camino, estaba dispuesto también él a emplear el siempre disponible descontento indio de la sierra: también por esa vía la aristocracia peruana habría de ser ganada a la causa patriota, en la medida en que vería en su triunfo el atajo hacia la paz que necesitaría para poner término a la agitación indígena fomentada por ambos bandos.

Las primeras etapas de esta cautelosa conquista fueron exitosas: el desembarco en Pisco fue acompañado de un levantamiento espontáneo de Guayaquil, y seguido del de Trujillo y casi todo el norte peruano, volcado a la revolución por su gobernante, el marqués de Torre Tagle, un rico criollo que había sido designado -gracias a la nueva política adoptada por los realistas- intendente de la región. En el Sur, la campaña de la sierra agitó la retaguardia de Lima; a principios de 1821, el general en jefe realista, La Serna, derrocaba al virrey Pezuela y comenzaba conversaciones con San Martín, en el nuevo clima creado por el triunfo del constitucionalismo en España. Ambos jefes convinieron en la creación de un Perú independiente y monárquico; rechazado el proyecto por los ejércitos realistas, éstos se habían, sin embargo, debilitado con la inacción y el desgaste, y en julio los patriotas podían entrar en la capital peruana. A ello siguió la creación de un gobierno del Perú independiente, con San Martín como protector. El nuevo estado peruano iba a ser el más extremadamente conservador de todos los formados en el clima hostil al radicalismo político que dominaba luego de 1815. Ese conservadurismo no sólo reflejaba las ideas de protector de Perú; se extremaba todavía más para ganar el apoyo de la aristocracia limeña, necesario para consolidar el nuevo orden. Los hechos iban a demostrar cuán necesaria era esa cautela. Con los realistas dominando aún El Callao, Cochrane, insatisfecho con su parte en el botín de la victoria naval, había partido en busca de lucrativas aventuras en el Pacífico tropical. La campaña que proseguía en la

sierra era tan desgastadora para los libertadores como para los realistas; el proyecto originario de liberación de Perú contaba con la insuficiencia militar de los invasores, pero esperaba compensarla con apoyos locales. Si bien se había logrado al comienzo disminuir la capacidad de resistencia realista, esos apoyos habían sido y seguían siendo escasos, y la empresa peruana no tenía, aun en 1822, final visible, si no se contaba con nuevos auxilios externos.

Ellos sólo podían venir del Norte, donde Bolívar había ya realizado lo esencial de su empresa libertadora. Ésta había recomenzado en condiciones aun más desventajosas que las encontradas por San Martín: en 1817 no tenía Bolívar apoyo ninguno en Hispanoamérica, y aun en su refugio haitiano encontraba simpatías cada vez más limitadas, luego de su fracasada tentativa de 1816. La guerra del Norte iba a ser, desde el comienzo, distinta de la del Sur, y Bolívar era particularmente adecuado para ella. Descendiente de una de las familias más antiguas de Caracas, ligado con la aristocracia criolla del cacao, Simón Bolívar iba a mostrar toda esa precocidad de ingenio y temperamento, amenazada en otros casos de volcarse por falta de carriles adecuados en empresas alto irrisorias, que iba a caracterizar a tantos de los jóvenes criollos liberados de la disciplina colonial y no demasiado seguros de qué podían hacer con su libertad. En 1804, cuando tenía veintiún años, había ya hecho tumultuosa vida cortesana junto con los marqueses del cacao en Madrid, se había casado allí con una aristócrata caraqueña, había vuelto con ella a Venezuela para perderla a los pocos meses, víctima de fiebres tropicales en el traicionero paraíso serrano de Aragua. Antes de eso, había recibido sólida educación al lado de un personalísimo secuaz venezolano de Rousseau, Simón Rodríguez, y luego del más moderado y sólido Andrés Bello. Muerta su esposa, Teresa del Toro, volvió Bolívar a Europa, acompañado por su antiguo preceptor; a los veintiún años era ya un hombre íntimamente desesperado y, pese a su aparente movilidad de carácter, este rasgo estaba destinado a durar.

De nuevo en Madrid, en París y en Italia, Bolívar iba a vivir las primeras y más brillantes etapas del ascenso napoleónico; en la sociedad francesa, deseosa de olvidar el pasado demasiado cercano, en el Milán del reino itálico, en la Roma en que el Papa había hecho la paz con el heredero de la revolución, junto con sus renovadas experiencias mundanas iba a adquirir una experiencia más profunda de las realidades postrevolucionarias: la crisis del Antiguo Régimen, que para los más de los americanos era un puro dato teórico, había sido vivida desde dentro por Bolívar. Igualmente la crisis de la revolución republicana: si nunca pudo perdonar a Bonaparte su confiscación de la Revolución para su gloria y provecho, Bolívar advirtió, sin embargo, muy bien hasta qué punto la evolución autoritaria y militar de la Francia republicana estaba en las cosas mismas. Así fue madurando una imagen original de la futura revolución hispanoamericana, a la que se consagró mediante un juramento de sabor prerromántico en el Aventino. Si ni aun en sus horas más sombrías vaciló su fe en la república (en la que San Martín no había creído ni por un momento), esa república estaba destinada a ser autoritaria; la autoridad allí dominante se distinguiría del puro arbitrio porque estaría guiada por la virtud. La vieja justificación del absolutismo español, que en la pluma de los autores del siglo XVII había sido, más que una fórmula, la expresión de una fe apasionada (la que ponía en la conciencia cristiana del monarca un límite seguro a su poder), resurgía ahora con signo nuevo: la conciencia revolucionariamente virtuosa de los gobernantes republicanos aseguraría la libertad de la nueva Hispanoamérica. Tal como iban a reprochar adversarios contemporáneos o póstumos de Bolívar –desde Bogotá hasta Buenos Aires– su revolución no era entonces liberal, o –para ser más justos, pues tampoco las otras revoluciones hispanoamericanas, en cuyo nombre era formulado el reproche, lo eran de veras–, no se mostraba suficientemente penetrada de su deber de serlo, bastante dispuesta a disimular que no lo era, bastante dolorida de la imposibilidad en que se encontraba de construir en

medio de la guerra un orden liberal. En eso se ha encontrado luego la superioridad de la política bolivariana, supuestamente más cercana a la realidad que le tocaba ordenar. Pero esto último es discutible: baste observar que el autoritario reino de la virtud proyectado por Bolívar -tras de contaminarse de elementos cada vez más abundantes de la tradición prerrevolucionaria- se reveló totalmente irrealizable.

Sería, por otra parte, erróneo ver en esta diferencia entre la revolución del Norte y las del Sur tan sólo una consecuencia de la personalidad del libertador norteño. El liberalismo al que se oponía el autoritarismo boliviano retomaba también él una tradición prerrevolucionaria: la fe en el orden legal, desobedecido pero venerado desde los comienzos de la colonia, la fe en un ideal de gobierno impersonal, corporizado en una elite de funcionarios y magistrados, que había sido la del siglo XVIII. Ambas sobrevivirían mejor en las oligarquías urbanas, y éstas, que en Buenos Aires, en Santiago, en Lima o en Bogotá iban, a pesar de todo, a hallar la manera de mantener gravitación política a lo largo de la revolución, habían ya sido marginadas por la revolución venezolana; la causa patriota sólo podría afirmarse allí cortando sus lazos de origen con los mantuanos de Caracas, apoyándose en una plebe cuya organización debía ser esencialmente militar. Y por más que Bolívar iba a extender su República de Colombia hasta Guayaquil, y su hegemonía hasta Potosí, su primera y más segura base de poder estaba en su Venezuela, en sus jefes guerrilleros transformados en generales, a los que perdonó todas las infidelidades, con los que se negó obstinadamente -y muy sensatamente- a romper... Esa Venezuela era irreductible al ideal liberal; el de Bolívar, si no coincidía con la realidad de la revolución venezolana, por lo menos no entraba en conflicto inmediato con ella.

En 1817 ya era Bolívar un veterano de la revolución; a ésta había sacrificado su fortuna privada (que había sido muy grande) y ella lo había dejado como el único jefe de dimensiones nacionales al lado de los regionales en que los alzamientos venezolanos habían abundado; en ruptura con su grupo de

aristócratas capitalinos -que habían sido tan tímidos revolucionarios- ya había mostrado cómo podía encontrar apoyos entre los agricultores y pastores de los Andes; ahora volvería a encontrarlos entre las poblaciones costeras de color de Cumaná y Margarita (ellas mismas veteranas de la revolución); y los encontraría -lo que iba a ser aún más decisivo- entre los llaneros que en 1814 lo habían expulsado del país.

Ya en la incursión de 1816 una audacia nueva se había manifestado en la promesa de liberación de los esclavos, que estaban en la base de la economía de plantación de la costa venezolana. Ahora la clave de la victoria iba a estar dada por la alianza con Páez, el nuevo jefe guerrillero que había surgido en los Llanos, esta vez con bandera patriota. Con sus hombres, los trescientos que Bolívar traía consigo y los que seguirían llegando -en especial la Legión Británica (predominantemente irlandesa), que llegó a contar algunos miles de voluntarios-, se formó la fuerza militar que llegaría al Alto Perú. La alianza con Páez significó una penetración más efectiva en el interior venezolano, pero provocó la ruptura con los caudillos revolucionarios del este costeño, y ésta remató en la ejecución de Piar por orden de Bolívar. Pese a que éste emprendió de nuevo la conquista de Caracas, el litoral había pasado para él a segundo plano, y cuando la resistencia de Morillo le cerró el acceso a la capital retornó al interior llanero y a la Guayana. Desde allí iba a cruzar los Andes con cerca de tres mil hombres: esta hazaña, juzgada imposible, sería seguida por la victoria de Boyacá, que dio a los libertadores el dominio de Bogotá y de todo el norte y centro de Nueva Granada (excepto Panamá). La república de Colombia, que debía abarcar todos los territorios que integraban el virreinato de Nueva Granada (y que en el caso de Venezuela y Quito habían tenido dependencia sólo nominal de Bogotá) comenzaba a tomar forma. El congreso de Angostura le dio sus primeras instituciones provisionales (fines de 1819); en la diminuta capital de la Guayana, al borde del Orinoco, en tierras de frontera que la colonia había ignorado y en las que la revolución había en-

contrado su baluarte, nacía la nación que en la mente de Bolívar debía abarcar el norte de América del Sur y dirigir el resto mediante un sistema de alianzas. Angostura parecía crear un estado federal: cada una de las regiones parcialmente liberadas –Nueva Granada y Venezuela– tendría un vicepresidente, que tomaría a su cargo las tareas administrativas, mientras el Libertador y presidente proseguía la guerra.

Ésta se desarrolló primero en Venezuela, donde retomaba por ambos bandos su carácter de lucha irregular; los mayores esfuerzos de Bolívar debieron encaminarse a mantener la cohesión de las fuerzas patriotas. A lo largo de 1820, también en Venezuela se hicieron sentir las consecuencias de la revolución liberal española: acercamientos y conversaciones entre los jefes en lucha, armisticio temporario, debilitamiento de la cohesión del bando realista, minado por las deserciones. En 1821 la victoria de Carabobo abría a Bolívar la entrada a una Caracas desierta, abandonada por buena parte de su población; en ese mismo año Quito era liberado por Sucre, lugarteniente de Bolívar, que había avanzado desde Guayaquil y vencido a los realistas en Riobamba y Pichincha; simultáneamente Bolívar reducía el foco de resistencia realista de Pasto, nudo montañés cuya población mestiza había sido ganada para la causa del rey por la vehemente predicación de su obispo y las depredaciones de las tropas patriotas.

Colombia quedaba así libre de amenazas, y Bolívar disponible para nuevas acciones contra el núcleo realista de Perú. Mientras este proceso guerrero seguía su curso, avanzaba también la organización política de la nueva república. El congreso de Cúcuta le dio en 1821 una constitución más centralista que las bases de Angostura: Venezuela, Nueva Granada y Quito perdían su individualidad, y los departamentos en que se dividía el vasto territorio colombiano debían ser gobernados por un cuerpo de funcionarios designados desde Bogotá. La tarea de organizar el nuevo estado estuvo a cargo en primer término del vicepresidente Santander, y se reveló desde el comienzo muy difícil. La modernización social debía enfren-

tar por una parte la resistencia de la Iglesia, por otra, la de los grupos favorecidos por el viejo orden, que iban desde los propietarios de esclavos del litoral venezolano, escasamente adictos a la emancipación de los negros que estaba en el programa de la nueva república, hasta los grandes mercaderes y pequeños artesanos unidos en la enemiga contra el comercio libre que los sacrificaba por igual a la preponderancia británica. Pese a la amenaza implícita en la presencia de ese bloque conservador, tanto más poderoso desde que la ruina de la causa del rey lo engrosó con los más entre sus antiguos partidarios, la república vacilaba en privarlo de sus bases de poder; temía demasiado abrir así el camino a una evolución comparable a la que en Haití llevó a la hegemonía negra, que constituía una imagen obsesiva para los dirigentes colombianos (y no sólo colombianos) en esos años revueltos.

El nuevo orden buscaba entonces retomar la tradición de moderado reformismo administrativo, que había caracterizado a las mejores etapas coloniales. Pero le resultaba difícil hacerlo: no sólo las ruinas del pasado cercano y la necesidad de seguir costeando la guerra limitaban sus recursos; era acaso más grave que no tuviese –como lo habían tenido los funcionarios progresistas de la Corona– una base de poder ajena a sus gobernados; en estas condiciones la empresa de imponer un avance sobre líneas no aceptadas por los más influyentes de entre éstos estaba condenada necesariamente al fracaso. Las tensiones creadas por ese estilo de gobierno encontraron bien pronto expresión tanto en la aparición de tendencias localistas cuanto en la apelación a Bolívar. La primera tendencia era bastante esperable; la autoridad del gobierno de Bogotá sobre Venezuela fue siempre limitada: Páez, que tenía allí autoridad puramente militar, era de hecho el árbitro de la situación local. Más grave era que también en Nueva Granada esas resistencias se hiciesen sentir, y que fueran particularmente vivas en la capital.

En Bogotá, Colombia aparecía como una continuación agravada de esas Provincias Unidas de Nueva Granada, que

sólo por conquista habían podido dominar en la vieja capital virreinal. Santander, el presidente colombiano, no era bogotano; había formado en las filas hostiles a Cundinamarca durante la Patria Vieja, y después de Boyacá había emergido como figura dominante, luego de años de guerrilla en los llanos de Nueva Granada, que parecían haberlo alejado cada vez más del clima político capitalino. Frente a él, el veterano Narino (liberado por los constitucionales de su prisión en la Península) pasaba a ser el jefe de un localismo opuesto a la vez a las tendencias innovadoras y a los grupos avanzados de las distintas ciudades del interior neogranadino en que se apoyaba al nuevo régimen. La presencia de Bolívar contribuía, por añadidura, a marcar con el sello de la provisionalidad al orden político colombiano. Era muy natural que los jefes venezolanos lo tomasen como intermediario y árbitro frente al gobierno de Bogotá; era más grave que también los opositores neogranadinos a Santander afectasen esperar una rectificación para cuando –terminada la guerra– Bolívar ejerciese de veras su autoridad presidencial. Más grave aún era que Bolívar, sin romper con su vicepresidente, dejase en pie esa esperanza. Así la república de Colombia parecía tener desde su origen un desenlace fijado el golpe de estado autoritario que iba a unir, tras el Libertador y presidente, a los inquietos militares venezolanos y a la oposición conservadora neogranadina.

Ya antes de ese desenlace, por otra parte, zonas enteras de la república estaban sometidas, no a la administración civil de Bogotá, sino a la militar ejercida directamente por el Libertador. Era el caso del sur de Nueva Granada y toda la antigua presidencia de Quito, declaradas zona de guerra aun cuando ésta había cesado de librarse allí. Y, por otra parte, la autoridad de Bolívar iba a extenderse bien pronto más allá de las fronteras de Colombia; esa iba a ser precisamente la consecuencia del pedido de apoyo que le llegaba de San Martín. El resultado inmediato de éste fue una entrevista entre ambos libertadores en Guayaquil, en julio de 1822; el hecho de que San

Martín fuese recibido como huésped del presidente colombiano en una ciudad que Perú consideraba suya, señalaba ya de qué modo estaba dada la relación de fuerzas. El contenido de las conferencias no es conocido, salvo por versiones retrospectivas de parte interesada; el resultado es un cambio muy claro. San Martín, tras de manifestarse dispuesto a seguir la lucha bajo el mando de Bolívar, debió anunciar su retiro de Perú; éste era el precio que ponía Bolívar a su auxilio, y ahora la situación había cambiado por entero desde 1817: era Bolívar y no San Martín quien tenía tras de sí a los recursos de un estado organizado.

Pero algunas de las razones invocadas por Bolívar para no correr en auxilio de Perú eran demasiado reales: Pasto, mal sometido, iba a alzarse nuevamente y exigir una más costosa y sangrienta pacificación, con deportaciones en masa; sólo después de ella pudo Bolívar pasar a Perú, a mediados de 1823. Allí encontró a la revolución en derrumbe: la constituyente de 1822 se había apresurado a aceptar la dimisión de San Martín y a reemplazarlo por un débil triunvirato. En diciembre se declaraba por la república, repudiando las negociaciones emprendidas en Europa por emisarios de San Martín para buscar un rey para el Perú. En el manejo de la guerra no se advirtió una energía comparable, y en febrero la alarmada guarnición de Lima obligaba a designar presidente de la república a José de la Riva Agüero, aristócrata limeño pasado desde muy pronto a la causa de la revolución. Riva Agüero organizó la lucha con más tenacidad, pero no con más éxito que sus predecesores; el congreso, aprovechando una nueva oleada de derrotas, que llevaron a un momentáneo abandono de Lima, y además la presencia de Sucre al frente de tropas colombianas, lo derrocó; el jefe limeño –transformado en mariscal durante su breve permanencia en el gobierno– se refugió en Trujlllo, en el sólido norte revolucionario. En la constantemente amenazada Lima, el congreso hizo presidente al marqués de Torre Tagle, y solicitó con más urgencia la presencia personal de Bolívar en Perú: ahora éste llegaba a

Lima para recibir el título de libertador y poderes militares y civiles hasta la terminación de la guerra. El congreso que tales atribuciones le había acordado siguió consagrado a la redacción de una constitución extremadamente liberal: proclamada en noviembre de 1823, no iba a ser nunca aplicada.

Bolívar encontró en Perú una situación aún más grave de lo que el puro equilibrio militar anticipaba: era la endeble revolución limeña, tardíamente nacida bajo el estímulo brutal de la invasión argentino-chilena, la que vacilaba sobre su destino futuro. Desde Trujillo, Riva Agüero trataba a la vez con Bolívar y con los realistas; proponía a estos últimos un Perú independiente, bajo un rey de la casa de los Borbones de España; en lo inmediato proyectaba una acción concertada para expulsar a Bolívar de Perú. Revelada la escandalosa negociación, Riva Agüero pudo ser apresado y deportado. Pero Torre Tagle, encargado por Bolívar de entablar negociaciones con los realistas para un armisticio, las entabla simultáneamente por su cuenta con objetivos idénticos a los de su derrocado rival; a comienzos de 1824, luego de que un motín de la guarnición argentina entregó El Callao a los realistas, el presidente de Perú pasó al campo de éstos, con su vicepresidente y numerosos diputados y funcionarios; en ninguna parte como en Lima la elite criolla debió enfrentar opciones cuyos términos le resultaban todos repulsivos, y a comienzos de 1824 el menos desagradable parecía ser de nuevo el debilitado antiguo régimen, que esperaba más blando que la hegemonía militar colombiana que reemplazaba a la chileno-argentina.

Sólo una serie de victorias militares, logradas gracias a los recursos traídos del Norte, permitió a Bolívar sobrevivir: en agosto de 1824 la victoria de Junín le abría el acceso a la sierra; el 9 de diciembre de ese año, en Ayacucho, Sucre, al frente de un ejército de colombianos, chilenos, argentinos y peruanos vencía al virrey La Serna y lo tomaba prisionero. La capitulación de La Serna ponía fin a la resistencia realista peruana, salvo en El Callao, que sería tomado en 1826. En el Alto Perú, Olañeta, un jefe realista que había sabido hallar apoyos loca-

les, que le habían dado independencia de hecho respecto de ambos bandos, y acumular una cuantiosa fortuna privada, siguió unos meses la lucha; en 1825, Sucre vencía las últimas resistencias y, solicitado por los criollos de Charcas y Potosí, patrocinaba la creación de una república que llevaría el nombre de Bolívar; de ese modo, el Alto Perú escapaba tanto a la unión con el Río de la Plata, establecida por el virreinato en 1776, cuanto a la integración con Perú, que, heredada de tiempos prehispánicos, parecía nuevamente posible como consecuencia de las vicisitudes de la guerra.

Los últimos rincones de Sudamérica escapaban así al dominio español. Desde Caracas hasta Buenos Aires, cañones y campanas anunciaban el fin de la guerra. Ésta había terminado ya en el Norte: desde 1821, México era independiente.

Era ése el desenlace de una revolución muy distinta de las sudamericanas. Mientras en el Sur la iniciativa había correspondido a las elites urbanas criollas, y éstas, pese a las inesperadas miserias que la revolución les había traído, conservaban en casi todas partes en 1825 el control del proceso que habían iniciado, en **México** la revolución comenzó por ser una protesta mestiza e india en la que la nación independiente tardaría decenios en reconocer su propio origen.

Se ha visto ya cómo en 1808 se dio en México una primera prueba de fuerza entre elites criollas y peninsulares; vencedoras las segundas, la nueva oportunidad de 1810 iba a ser aprovechada por un inesperado protagonista. El cura de Dolores, rica parroquia en el centro-norte minero, era Miguel Hidalgo, hasta entonces un representante de ese conjunto demasiado escaso de sacerdotes ilustrados que habían secundado las iniciativas innovadoras de prelados y gobernantes. La imagen que de él tenemos está dada por estos últimos, que alentaron sin excesivo entusiasmo sus proyectos (que incluían desde la explotación de la seda hasta la presentación de obras de Molière por actores reclutados entre sus parroquianos indígenas); esta imagen es por lo menos incompleta; si como jefe re-

volucionario, Hidalgo reveló muy grandes limitaciones, es evidente que logró contar con la adhesión de multitudes fervorosas que no se advierte cómo hubiesen podido orientarse hacia ese supuesto precursor mexicano de Bouvard y Pécuchet. En septiembre de 1810, Hidalgo proclamaba su revolución: por la independencia, por el rey, por la religión, por la Virgen india de Guadalupe, contra los peninsulares. Peones rurales, y luego los de las minas, se unieron a las fuerzas revolucionarias, que tomaron Guanajuato, donde la masacre de la Alhóndiga (el granero público en que se habían refugiado, junto con los soldados del rey, los notables peninsulares y criollos de la ciudad) y el saqueo hicieron mucho por separar del movimiento a los criollos ricos. Más allá de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Guadalajara, cayeron ante el avance de los ejércitos rebeldes, inmensas multitudes mal armadas de composición perpetuamente variable: en octubre, la ola se acercaba a la ciudad de México; en Monte de las Cruces, los 80.000 hombres que seguían a Hidalgo fueron vencidos por los siete mil del general Trujillo; pero el vencedor, deshecho y diezmado, logró a duras penas refugiarse en la capital, cuya conquista era todavía posible. Hidalgo no se decidió a intentarla; prefirió retirarse para reorganizar sus fuerzas. La retirada le fue fatal; para sus seguidores anunciaba que (según, sin duda, habían temido siempre) el viejo orden, en cuyo derrumbe habían creído por un momento, seguía siendo el más fuerte.

La revolución se derrumbó; después de una retirada que terminó en fuga, Hidalgo fue capturado en Chihuahua y ejecutado tras de dejar un apasionado testimonio de su arrepentimiento; quien había sido hasta los cincuenta años apacible cura rural, tras de unos meses de ejercer una sangrienta jefatura revolucionaria, declaraba que en la prisión sus ojos habían visto por fin la realidad, e invitaba a sus compatriotas a no seguirlo en el camino que había llevado a su propia ruina y la del país. No iba a ser escuchado, y la revolución iba a encontrar un nuevo jefe en otro eclesiástico, José María Morelos.

A la vez encontraría un nuevo centro: no ya el noroeste de la plata y el maíz, sino el Sur, en que la meseta baja hacia el Pacífico. Lentamente, Morelos va a ganar el predominio sobre los demás jefes de pequeños grupos revolucionarios sobrevivientes, y contrarrestar las tendencias a la transacción con los realistas que comienzan a aparecer entre ellos. En 1812 domina el Sur; organiza fuerzas mejor disciplinadas que las de Hidalgo, elabora un programa que incluye la abolición de las diferencias de casta y la división de la gran propiedad en manos de enemigos, que en la tierra del azúcar, en que el cultivo de la caña margina lentamente los de subsistencia, satisface una exigencia colectivamente sentida. Deseoso de institucionalizar la revolución, convoca un congreso en Chilpancingo: en él resurgen las oposiciones que previamente había logrado vencer en el plano militar. Morelos –revelando un escrupuloso, pero por el momento suicida, respeto por el orden institucional– se inclinó ante las voluntades, dificultosamente elaboradas y algo incoherentes, del Congreso. No sólo por esta inesperada vocación parlamentaria se derrumbó la segunda revolución mexicana: a Morelos, que a partir de un movimiento indígena quería lograr una revolución nacional, moderada en su estilo pero radical en su programa, los realistas oponían un frente en que los criollos tenían lugar cada vez más importante. Una vez eliminada la herencia de rencores del pasado, atenuados por el común terror ante la revolución de Hidalgo, la unión de peninsulares y ricos criollos en defensa del orden establecido era un programa más factible que el de la revolución. También Morelos iba a ser vencido y ejecutado en 1815. Quedaban aún algunos focos de revolución: Vicente Guerrero resistía en el Sur; Félix Fernández, que había cambiado su nombre por el de Guadalupe Victoria, en Veracruz. Sofocado en lo esencial el alzamiento rural, en los años siguientes un cierto espíritu de disidencia parecía resurgir lentamente entre los criollos de la capital. No tuvo tiempo de madurar: la revolución liberal en España desencadenó súbitamente la independencia de México.

Aquí, como en América del Sur, la guerra de Independencia había abierto las filas del ejército, más aún que las de la administración y las dignidades eclesiásticas, a criollos en proporción antes desconocida: esto creaba las bases de un partido local más hostil a la revolución que adicto a la metrópoli. Por otra parte, los peninsulares tenían en México mayor gravitación que en cualquier otra comarca de las antiguas Indias; parecía inconcebible que cualquier cambio político que no incluyera una revolución social afectase seriamente a los dominadores de todo el comercio mexicano. Porque se creían dotados de suficiente fuerza local, también los peninsulares podían encarar una separación política de España. Ésta se produjo cuando el vuelco liberal de la política española pareció afectar por una parte la situación de la Iglesia, por otra la intransigencia en la lucha contra las revoluciones hispanoamericanas.

Sin duda, tanto el alzamiento de Hidalgo como el de Morelos -dirigidos ambos por eclesiásticos- habían llevado a su frente imágenes religiosas. Pero al mismo tiempo, sus revoluciones amenazaban la estructura eclesiástica y la riqueza de congregaciones y sedes episcopales; Morelos incluía explícitamente las tierras eclesiásticas entre las que habrían de ser divididas. No es extraño que la jerarquía eclesiástica se haya constituido en aliada del orden realista, que éste buscase justificación nueva en la defensa de la religión amenazada por turbas que proclamaba sin Dios ni ley. Ahora, en España, medidas semejantes a las propuestas por Morelos eran anunciadas públicamente por los grupos dominantes. Éstos mostraban además peligrosas inclinaciones a buscar un arreglo con las revoluciones hispanoamericanas: ante esa perspectiva, los defensores mexicanos de la causa del rey temían verse transformados en víctimas de la reconciliación universal: a cambio de un reconocimiento de la soberanía española en Indias, otorgar el poder local a los revolucionarios podía, en efecto, parecer desde Madrid un sacrificio escaso; un sacrificio tanto menos costoso si esos revolucionarios eran compañeros de

ideología y los leales significaban, con su adhesión al absolutismo, un peligro para la causa liberal en España y sus Indias.

He aquí, sin duda, causas muy razonables de desconfianza. Alentado por ellas, un oficial criollo, que había hecho rápida carrera por sus victorias en la lucha contra Morelos, Agustín Iturbide, se pronunció y pactó con Guerrero el plan de Iguala, que consagraba las tres garantías (independencia, unidad en la fe católica, igualdad para los peninsulares respecto de los criollos) y preveía la creación de un México independiente gobernado por un infante español cuya elección se dejaba a Fernando VII. Al pronunciamiento siguió un paseo militar: en el vasto país, Iturbide no recibió sino adhesiones, y con ellas tras de sí entraba en la capital. Como era esperable, Fernando VII se rehusaba a designar un soberano para su propio reino rebelado, pero sólo San Juan de Ulúa, la fortaleza que guardaba la entrada de Veracruz, seguía fiel al rey de España, y la independencia de México encontraba eco en la Capitanía General de Guatemala, que tras de haber permanecido bajo el dominio regio seguía ahora el destino de su vecino del Norte, de cuyo virrey había estado en tiempos coloniales en dependencia nominal.

Terminaba así la guerra de Independencia, que dejaba una Hispanoamérica muy distinta de la que había encontrado, y distinta también de la que se había esperado ver surgir una vez disipados el ruido y la furia de las batallas. La guerra misma, su inesperada duración, la transformación que había obrado en el rumbo de la revolución, que en casi todas partes había debido ampliar sus bases (al mismo tiempo que las ampliaba el sector contrarrevolucionario), parecía la causa más evidente de esa escandalosa diferencia entre el futuro entrevisto en 1810 y la sombría realidad de 1825. Pero no era la única: **Brasil** ofrece en este sentido un término de comparación adecuadísimo; allí la independencia se alcanzó sin una lucha que mereciese ese nombre, y –con todas las diferencias que de ello derivaron, y con las que desde tiempos prerre-

volucionarios separaban a la América portuguesa de la española– la historia del Brasil independiente está agitada (a ratos muy violentamente agitada) por los mismos problemas esenciales que van a dominar las de los estados surgidos en la América española.

En las diferencias entre la independencia de Brasil y la de Hispanoamérica remata un proceso de diferenciación que viene de antiguo; desde la restauración de su independencia, Portugal había renunciado a cumplir plenamente su función de metrópoli económica respecto de sus tierras americanas, pronto integradas junto con la madre patria en la órbita británica; aun los esfuerzos muy reales del despotismo ilustrado portugués por aumentar la participación metropolitana en la vida brasileña habían sido necesariamente menos ambiciosos que los de la España de Carlos III; esta segunda conquista contra la cual se había erigido, acaso más que contra la primera, la revolución emancipadora hispanoamericana, era en Brasil menos significativa (aunque en algunos aspectos, por ejemplo, en las migraciones de la metrópoli a la colonia, la intensidad del acercamiento fuese mayor que en Hispanoamérica, era aquí menos completa la imposición de una nueva elite administrativa y mercantil de origen peninsular, por sobre las jerarquías locales surgidas de etapas anteriores).

Diferente en el marco local, la situación de Brasil era también profundamente diferente en la perspectiva proporcionada por la política internacional, que adquirió importancia creciente a partir de las guerras revolucionarias y napoleónicas. Portugal, luego de una primera etapa que lo mostró integrando muy en segundo plano el bloque contrarrevolucionario, se había acogido a una neutralidad fundada en el doble temor a la potencia naval británica y a la potencia terrestre francesa, que la alianza de Francia y España transformaba en amenaza directa. Cuando el bloqueo continental impidió al reino portugués seguir eludiendo la opción, quiso, a pesar de todo, seguir manteniendo su neutralidad sin sacrificar por ello sus comunicaciones ultramarinas; pese a que nunca iba a

abandonar su cautela frente a la presion francoespanola, la opcion esencial estaba desde ese momento hecha Portugal debia mantenerse en el bloque britanico, solo dentro de el podia seguir manteniendo las lineas dominantes de su circulacion economica Ante las graves consecuencias de esa decision, la Corona portuguesa siguio, sin embargo, vacilando la fuga de la corte a Rio de Janeiro fue un casi secuestro perpetrado por la fuerza naval britanica que protegia a Lisboa

La perdida de la metropoli significo un cambio profundo en la vida brasilena, ahora Rio de Janeiro, capital aun reciente de una colonia de unidad mal consolidada, se transformaba en corte regia Por otra parte, y aun mas radicalmente que en Hispanoamerica, el alineamiento al lado de Inglaterra llevaba a un cambio en el ordenamiento mercantil, por los tratados de 1810, Gran Bretaña pasaba a ser en la vasta colonia la nacion mas favorecida (sus productos pagaban tasas aduaneras menores que los metropolitanos y sus comerciantes eran liberados de la jurisdiccion de los tribunales comunes, para gozar, a la manera de los mercaderes europeos en Levante, de las ventajas de un tribunal especial)

Todo ello no se daba sin tensiones, pero la relacion de fuerzas (unida a la actitud de una Corona a la que las experiencias de los ultimos veinte anos de historia europea no incitaban a la altivez) hacia imposible que estas encontrasen manera de expresarse en cualquier resistencia, por moderada que fuese, a la inclusion directa de Brasil en la orbita britanica Todo ello habia debilitado los ya fragiles lazos entre Brasil y su metropoli politica, prueba de lo delicado de la situacion fue que, a pesar de que desde 1813 Lisboa se hallaba ya despejada de franceses y el poder de estos se derrumbaba en Espana, y desde 1815 el orden restaurado se instalaba solidamente en Europa, la corte portuguesa vacilaba en retornar a su sede originaria, era en efecto muy dudoso que Brasil aceptase volver a ser gobernado desde ella en 1817, una revolucion republicana –anticipo de las que iba a conocer el Brasil independiente– estallo en el Norte, y no fue trabajo escaso someterla Pero en

1820, la revolucion liberal estallo a su vez en Portugal el rey se decidio entonces a retornar a su reino, dejando a su hijo Pedro como regente del Brasil, una tradicion no probada, pero verosimil, quiere que al partir le haya aconsejado ponerse al frente del movimiento de independencia de todos modos inevitable

La ruptura fue acelerada por la difusion de tendencias republicanas en Brasil, y por la tendencia dominante en las cortes liberales portuguesas a devolver a la colonia a una situacion de veras colonial, mal disfrazada de union estrecha entre las provincias europeas y americanas, estas ultimas insuficientemente representadas en el gobierno central Mientras el regente don Pedro ensayaba una politica intermedia, la guerra de Independencia se libraba ya de modo informal en el sitio de las fuerzas portuguesas, encerradas en Bahia, por tropas brasilenas Finalmente, ante las exigencias de las cortes liberales, que conminaban al infante a volver a una estricta obediencia a sus directivas centralizadoras, don Pedro proclamo la independencia en Ipiranga (7 de septiembre de 1822)

El reconocimiento de este cambio no fue demasiado dificultoso, en 1825, un mediador britanico lo obtenia –no sin ejercer alguna presion– de la corte de Lisboa El imperio de Brasil, surgido casi sin lucha y en armonia con un nuevo clima mundial poco adicto a las formas republicanas, iba a ser reiteradamente propuesto como modelo para la turbulenta America espanola la corona imperial iba a ser vista como el fundamento de la salvada unidad politica de la America portuguesa, frente a la disgregacion creciente de aquella En todo caso, si la unidad iba a ser salvada, lo iba a ser dificultosamente en 1824, de nuevo el Norte estaba alzado en una confederacion republicana, y poco despues ardia la guerra en el Sur, en la Banda Oriental, donde Brasil heredaba de Portugal una nueva y discola provincia, la Cisplatina, formada por tierras antes españolas En la capital una constituyente (en las que las voces de los amigos de los rebeldes encontraban eco insolitamente franco) debia ser disuelta por el emperador, que en 1824 daria

su *carte octroyée*, prometida en el momento mismo de la disolución: pese a estas tormentas, el imperio sería liberal y parlamentario. Aunque la ausencia de una honda crisis de independencia aseguraba que el poder político seguiría en manos de los grupos dirigentes surgidos en la etapa colonial, había entre éstos bastantes tensiones para asegurar al imperio brasileño una existencia rica en tormentas. En ellas encontraremos un eco más apacible de las que conmovían a la América española; unas y otras nacían de la dificultad de encontrar un nuevo equilibrio interno, que absorbiese las consecuencias del cambio en las relaciones entre Latinoamérica y el mundo que la independencia había traído consigo.

Capítulo 3
La larga espera: 1825-1850

En 1825 terminaba la guerra de Independencia; dejaba en toda América española un legado nada liviano: ruptura de las estructuras coloniales, consecuencia a la vez de una transformación profunda de los sistemas mercantiles, de la persecución de los grupos más vinculados a la antigua metrópoli, que habían dominado esos sistemas, de la militarización que obligaba a compartir el poder con grupos antes ajenos a él... En Brasil una transición más apacible parecía haber esquivado esos cambios catastróficos; en todo caso, la independencia consagraba allí también el agotamiento del orden colonial.

De sus ruinas se esperaba que surgiera un orden nuevo, cuyos rasgos esenciales habían sido previstos desde el comienzo de la lucha por la independencia. Pero éste se demoraba en nacer. La primera explicación, la más optimista, buscaba en la herencia de la guerra la causa de esa desconcertante demora: concluida la lucha, no desaparecía la gravitación del poder militar, en el que se veía el responsable de las tendencias centrífugas y la inestabilidad política destinadas, al parecer, a perpetuarse. La explicación era sin duda insuficiente, y además tendía a dar una imagen engañosa del problema: puesto que no se habían producido los cambios esperados, suponía que la guerra de Independencia había cambiado demasiado poco,

que no había provocado una ruptura suficientemente honda con el antiguo orden, cuyos herederos eran ahora los responsables de cuanto de negativo seguía dominando el panorama hispanoamericano. La noción, al parecer impuesta por la realidad misma, de que se habían producido en Hispanoamérica cambios sin duda diferentes, pero no menos decisivos que los previstos, si está muy presente en los que deben vivir y sufrir cotidianamente el nuevo orden hispanoamericano, no logra, sin embargo, penetrar en los esquemas ideológicos vigentes (salvo en figuras cuya creciente adhesión a un orden colonial imposible de resucitar condena a la marginalidad).

Sin embargo, los cambios ocurridos son impresionantes: no hay sector de la vida hispanoamericana que no haya sido tocado por la revolución. La más visible de las novedades es la violencia: como se ha visto ya, en la medida en que la revolución de las elites criollas urbanas no logra éxito inmediato, debe ampliarse progresivamente, mientras idéntico esfuerzo deben realizar quienes buscan aplastarla. En el Río de la Plata, en Venezuela, en México, y más limitadamente en Chile o Colombia, la movilización militar implica una previa movilización política, que se hace en condiciones demasiado angustiosas para disciplinar rigurosamente a los que convoca a la lucha. La guerra de Independencia, transformada en un complejo haz de guerras en las que hallan expresión tensiones raciales, regionales, grupales demasiado tiempo reprimidas, se transforma en el relato de «sangre y horror» del que los cronistas patriotas y realistas nos dan dos imágenes simétricamente mutiladas: la violencia popular anónima e incontrolable es invocada por unos y otros como responsable única de los errores, más caritativamente juzgados, de su propio bando. La explicación es incompleta; al lado de la violencia plebeya surge (en parte como imitación, más frecuentemente como reacción frente a ella) un nuevo estilo de acción de la elite criolla que en quince años de guerra saca de sí todo un cuerpo de oficiales: éstos, obligados a menudo a vivir y hacer vivir a sus soldados

del país –realista o patriota– que ocupan, terminan poseídos de un espíritu de cuerpo rápidamente consolidado y son a la vez un íncubo y un instrumento de poder para el sector que ha desencadenado la revolución y entiende seguir gobernándola. La altanería de los nuevos oficiales da lugar a quejumbrosos relatos desde Caracas hasta Buenos Aires: no sólo son periodistas juzgados insolentes los golpeados de modo afrentoso, *sino a veces magistrados y eclesiásticos quienes sufren con* la resignación necesaria ese mismo destino... Pero quienes sufren esas ofensas no dejan de utilizar a esos mismos jefes en la represión de las disidencias, sea las de signo realista (y en Pasto es la salvaje violencia patriótica la que mantiene en vida la guerrilla de los montañeses realistas), sea las que se dan en el frente revolucionario (y los ejércitos de Buenos Aires dejarán un recuerdo imborrable en la vecina y artiguista Santa Fe, donde incendian todo a su paso y donde altos oficiales porteños no juzgan por debajo de su dignidad arrebatar a golpes a los más ricos santafesinos un miserable botín de joyas devotas).

Esa violencia llega a dominar la vida cotidiana, y los que recuerdan los tiempos coloniales en que era posible recorrer sin peligro una Hispanoamérica casi vacía de hombres armados, tienden a tributar a los gobernantes españoles una admiración que renuncia de antemano a entender el secreto de su sabio régimen. El hecho es que eso no es ya posible: luego de la guerra es necesario difundir las armas por todas partes para mantener un orden interno tolerable; así la militarización sobrevive a la lucha.

Pero la militarización es un remedio a la vez costoso e inseguro: desde los generales que, como Monsieur Prudhomme, consagran su espada a defender la república o, si es necesario, a derrocarla, hasta los oficiales de guardias rurales –que no siempre dejan pasar la oportunidad de transformarse en bandidos, si la posibilidad de lucro es grande–, los jefes de grupos armados se independizan bien pronto de quienes los han invocado y organizado. Para conservar su favor, éstos deben tenerlos satisfechos: esto significa gastar en armas (y más aún en

el pago de quienes las llevan) lo mejor de las rentas del Estado. Las nuevas repúblicas llegan a la independencia con demasiado nutridos cuerpos de oficiales y no siempre se atreven a deshacerse de ellos. Pero para pagarlos tienen que recurrir a más violencia, como medio de obtener recursos de países a menudo arruinados, y con ello dependen cada vez más del exigente apoyo militar. Al lado de ese ejército, en los países que han hecho la guerra fuera de sus fronteras (es el caso de Argentina, y en parte de Venezuela, Nueva Granada, Chile) pesan más las milicias rústicas movilizadas para guardar el orden local; éstas, más cercanas a las estructuras regionales de poder y también menos costosas, comienzan a veces su ingreso en la lucha política expresando la protesta de las poblaciones agobiadas por el paso del ejército regular; a medida que se internan en esa lucha se hacen también ellas más costosas; ése es el precio de una organización más regular, sin la cual no podrían rivalizar con el ejército.

Los nuevos estados suelen entonces gastar más de lo que sus recursos permiten, y ello sobre todo porque es excepcional que el ejército consuma menos de la mitad de esos gastos. Lo que la situación tiene de anómalo es muy generalmente advertido; lo que tiene de inevitable, también. La imagen de una Hispanoamérica prisionera de los guardianes del orden (y a menudo causantes del desorden) comienza a difundirse; aunque no inexacta, requeriría ser matizada. Sólo en parte puede explicarse la hegemonía militar como un proceso que se alimenta a sí mismo, y su perduración como una consecuencia de la imposibilidad de que los inermes desarmen a los que tienen las armas. La gravitación de los cuerpos armados, surgida en el momento mismo en que se da una democratización, sin duda limitada pero real, de la vida política y social hispanoamericana, comienza sin duda por ser un aspecto de esa democratización, pero bien pronto se transforma en una garantía contra una extensión excesiva de ese proceso: por eso (y no sólo porque parece inevitable) aun quienes deploran algunas de las modalidades de la militarización hacen a veces poco por ponerle fin.

Esa democratización es otro de los cambios que la revolución ha traído consigo. Pero la palabra misma lo caracteriza muy inadecuadamente, y sólo se apreciará con justeza su alcance si se tiene constantemente presente, junto con la situación postrevolucionaria, la anterior al comienzo del proceso. Adecuado o no el término elegido para designarlos, basta, en efecto, un examen cuidadoso para advertir que los cambios ocurridos en este aspecto han sido importantes.

Ha cambiado la significación de la esclavitud: si bien los nuevos estados se muestran remisos a abolirla (prefieren soluciones de compromiso que incluyen la prohibición de la trata y la libertad de los futuros hijos de esclavas, innovaciones ambas de alcances inmediatos más limitados de lo que podría juzgarse), la guerra los obliga a manumisiones cada vez más amplias; las guerras civiles serán luego ocasión de otras... Esas manumisiones tienen por objeto conseguir soldados: aparte su objetivo inmediato, buscan en algún caso muy explícitamente salvar el equilibrio racial, asegurando que también los negros darán su cuota de muertos a la lucha: es el argumento dado alguna vez por Bolívar en favor de la medida, que encuentra la hostilidad de los dueños de esclavos. La esclavitud doméstica pierde importancia, la agrícola se defiende mejor en las zonas de plantaciones que dependen de ella: todavía en 1827 es lo bastante importante en Venezuela para suscitar la obstinada defensa de los terratenientes. Pero aun donde sobrevive la institución, la disciplina de la mano de obra esclava parece haber perdido buena parte de su eficacia: en Venezuela, como en la costa peruana, la productividad baja (en la segunda región catastróficamente); lo mismo ocurre en las zonas mineras de Nueva Granada, que habían utilizado mano de obra africana. Por otra parte, la reposición plantea problemas delicados: a largo plazo la esclavitud no puede en Hispanoamérica sobrevivir a la trata, y con las trabas puestas a ésta, el precio de los esclavos –allí donde se los utiliza en actividades productivas– sube rápidamente (en la costa peruana parece triplicar en el decenio posterior a la re-

volución). Antes de ser abolida (en casi toda Hispanoamérica hacia mediados del siglo) la institución de la esclavitud se vacía de su anterior importancia. Sin duda, los negros emancipados no serán reconocidos como iguales por la población blanca, ni aun por la mezclada, pero tienen un lugar profundamente cambiado en una sociedad que, si no es igualitaria, organiza sus desigualdades de manera diferente que la colonial.

La revolución ha cambiado también el sentido de la división en castas. Sin duda, apenas si ha tocado la situación de las masas indias de México, Guatemala y el macizo andino; en las zonas de densa población indígena, el estatuto particular de ésta tarda en desaparecer aún de los textos legales, y resiste aún mejor en los hechos. Ese conservatismo de la etapa inmediatamente posterior a la revolución implica también que las zonas indias donde sobrevive la comunidad agraria (que, todavía extensas en México, lo son mucho más en las tierras andinas) no son sustancialmente disminuidas por el avance de los hacendados, de los comerciantes y letrados urbanos que aspiran a conquistar tierras. Más bien que cualquier intención tutelar de las nuevas autoridades (que, por el contrario, en la mayor parte de los casos son por principio hostiles a la organización comunitaria) es la coyuntura la que defiende esa arcaica organización rural: el debilitamiento de los sectores altos urbanos, la falta –en las nuevas naciones de población indígena numerosa– de una expansión del consumo interno y, sobre todo, de la exportación agrícola, que haga inmediatamente codiciables las tierras indias, explican que éstas sigan en manos de comunidades labriegas atrozmente pobres, incapaces de defenderse contra fuertes presiones expropiadoras y además carentes a menudo de títulos escritos sobre sus tierras.

Frente al mantenimiento del estatuto real (y a menudo también del legal) de la población indígena, son los mestizos, los mulatos libres, en general los legalmente postergados en las sociedades urbanas o en las rurales de trabajo libre los que aprovechan mejor la transformación revolucionaria: aun cuando los censos de la primera etapa independiente siguen

registrando la división en castas, la disminución a veces vertiginosa de los registrados como de sangre mezclada nos muestra de qué modo se reordena en este aspecto la sociedad postrevolucionaria.

Simultáneamente se ha dado otro cambio, facilitado por el debilitamiento del sistema de castas, pero no identificable con éste: ha variado la relación entre las elites urbanas prerrevolucionarias y los sectores, no sólo de castas (mulatos o mestizos urbanos) sino también de blancos pobres, desde los cuales había sido muy difícil el acceso a ellas. Ya la guerra, como se ha visto, creaba posibilidades nuevas, en las filas realistas aún más que en las revolucionarias: Iturbide, nacido en una familia de elite provinciana en México, y en Perú Santa Cruz, Castilla o Gamarra pudieron así alcanzar situaciones que antes les hubieran sido inaccesibles. Este proceso se da también allí donde la fuerza militar es expresión directa de los poderosos en la región (así, en Venezuela después de 1830, y en el Río de la Plata luego de 1820), pero aquí el cambio se vincula más bien que con la ampliación de los sectores dirigentes a partir de las viejas elites urbanas con otro desarrollo igualmente inducido por la revolución: la pérdida de poder de éstas frente a los sectores rurales.

La revolución, porque armaba vastas masas humanas, introducía un nuevo equilibrio de poder en que la fuerza del número contaba más que antes: necesariamente éste debía favorecer (antes que a la muy reducida población urbana) a la rural, en casi todas partes abrumadoramente mayoritaria. Y como consecuencia de ello, a los dirigentes prerrevolucionarios de la sociedad rural: al respecto, la atención concedida a los episodios revolucionarios más radicales puede llamar a error en la medida en que haga suponer que en el campo ocurrieron en esta etapa cambios radicales y duraderos del ordenamiento social. Por el contrario, en casi todas partes no había habido movimientos rurales espontáneos, y la jefatura seguía, por tanto, correspondiendo (en el nuevo orden políti-

co como en el viejo) a los propietarios o a sus agentes instalados al frente de las explotaciones; unos y otros solían dominar las milicias organizadas para asegurar el orden rural. Aun en algunas de las zonas que han conocido una radicalización marcada en la etapa revolucionaria esa hegemonía no desaparece: se mantiene, por ejemplo, en algunas del litoral argentino que siguen a Artigas. Lo que es más importante: los resultados de la radicalización revolucionaria son efímeros, en la medida en que ésta sólo preside la organización para la guerra; la reconversión a una economía de paz obliga a devolver poder a los terratenientes. En su Banda Oriental, deshecha por la guerra, Artigas (cuya preocupación por dar mejor lugar en el nuevo orden a los postergados del antiguo no puede discutirse) impone a todos los habitantes no propietarios de la campaña la obligación de llevar prueba de estar asalariados por un propietario, y pone así en manos de éstos la clave del nuevo orden rural. Sin duda, no puede hacer otra cosa si quiere que la economía de su provincia vuelva a ofrecer rápidamente saldos exportables, pero su decisión muestra muy bien de qué modo aun los jefes de los más radicales movimientos rurales debieron colaborar en la destrucción de su propia obra. Otros lo hicieron con celo aún más vivo desde que descubrieron las ventajas personales que podían derivar de dirigir la reconstrucción del orden social: en Venezuela los antiguos guerrilleros transformados en hacendados proporcionan el personal dirigente a la república conservadora.

Sin duda, la revolución no había pasado por esas tierras sin provocar bajas y nuevos ingresos en el grupo terrateniente; las ha provocado también en otras regiones de historia político-social menos agitada. Pero ha tenido otra consecuencia acaso más importante: es el entero sector terrateniente, al que el orden colonial había mantenido en posición subordinada, el que asciende en la sociedad postrevolucionaria. Frente a él las elites urbanas no sólo deben adaptarse a las consecuencias de ese ascenso: el curso del proceso revolucionario las ha perjudicado de modo más directo al hacerles sufrir los primeros emba-

tes de la represión revolucionaria o realista. Además la ha empobrecido: la guerra devora en primer término las fortunas muebles, tanto las privadas como las de las instituciones cuya riqueza, en principio colectiva, es gozada sobre todo por los hijos de la elite urbana: la Iglesia, los conventos, las corporaciones de comerciantes o mineros, donde las hay. Los consulados de comercio, por ejemplo, se transforman en intermediarios entre los comerciantes y un poder político de exigencias cada vez más exorbitantes, cuya agresiva mendicidad es temida por encima de todo. Sin duda, la guerra consume desenfrenadamente los ganados y frutos de las tierras que cruza; cuando se instala en una comarca puede dejar reducidos a sus habitantes al hambre crónica, que en algunos casos dura por años luego de la pacificación. Pero aun así deja intacta la semilla de una riqueza que podrá ser reconstituida: es la tierra, a partir de la cual las clases terratenientes podrán rehacer su fortuna tanto más fácilmente porque su peso político se ha hecho mayor.

Pero la revolución no priva solamente a las elites urbanas de una parte, por otra parte muy desigualmente distribuida, de su riqueza. Acaso sea más grave que despoje de poder y prestigio al sistema institucional con el que sus elites se identificaban, y que hubieran querido dominar solas, sin tener que compartirlo con los intrusos peninsulares favorecidos por la Corona. La victoria criolla tiene aquí un resultado paradójico: la lucha ha destruido lo que debía ser el premio de los vencedores. Los poderes revolucionarios no sólo han debido reemplazar el personal de las altas magistraturas, colocando en ellas a quienes les son leales; las ha privado de modo más permanente de poder y prestigio, transformándolas en agentes escasamente autónomos del centro de poder político. En las vacancias de éste, luego de 1825 no se verá ya a magistraturas municipales o judiciales llenar el primer plano como en el período 1808-10; la revolución ha traído para ellas una decadencia irremediable.

Un proceso análogo se da en la Iglesia: la colonial estaba muy vinculada a la Corona, y no se salva de la politización re-

volucionaria. Un jefe de la revolución de Buenos Aires señala las nuevas tareas del cuerpo eclesiástico: liberado de la opresión del antiguo régimen, debe poner su elocuencia al servicio del nuevo; quien no lo haga se revelará indigno de la libertad, y será privado de ella. No son amenazas vacías: la depuración de obispos y párrocos, expulsados, apresados, reemplazados por sacerdotes patriotas designados por el poder civil, transforma no sólo la composición del clero hispanoamericano, sino la relación entre éste y el poder político. Este cambio es espontáneo a la vez que inducido; los nuevos dirigentes de la Iglesia son a menudo apasionados patriotas, y no son sólo las consideraciones debidas al poder político del cual dependen las que los hacen figurar en primer término en las donaciones para los ejércitos revolucionarios, ofreciendo ornamentos preciosos y vasos sagrados, esclavos conventuales y ganados de las tierras eclesiásticas.

Así, la Iglesia se empobrece y se subordina al poder político; en algunas zonas el cambio es limitado y compensado por el nacimiento de un prestigio popular muy grande (así en México, en Guatemala, en Nueva Granada, en la sierra ecuatoriana). En otras partes esto no ocurre, y el proceso es agravado por las deserciones de curas y frailes; es el caso del Río de la Plata, donde sacerdotes conventuales, tras de laicizaciones que las autoridades eclesiásticas suelen conceder abundantemente, sobresalen desde Buenos Aires hasta el fondo de las provincias, en la política y en el ejército. En todo caso, el proceso no es frenado desde fuera: si la Iglesia colonial ha dividido sus lealtades entre Roma y Madrid, la revolucionaria ha quedado aislada a la vez de ambos centros. El Papa no reconoce otro soberano legítimo que el rey de España; los nuevos estados se proclaman herederos de las prerrogativas de éste en cuanto al gobierno de la Iglesia en Indias; el resultado es que administradores de sedes episcopales (ni el Vaticano ni los nuevos Gobiernos se atreven a nombrar obispos) y párrocos son designados –y a menudo removidos– por las autoridades políticas y con criterios políticos. Lo mismo que las dignidades

civiles, las eclesiásticas han perdido buena parte de las ventajas materiales que solían traer consigo; han perdido aún más en prestigio.

Debilitadas las bases económicas de su poder por el coste de la guerra (y por la rivalidad triunfante de los comerciantes extranjeros), despojados de las bases institucionales de su prestigio social, las elites urbanas deben aceptar ser integradas en posición muy subordinada en un nuevo orden político, cuyo núcleo es militar. Los más pobres dentro de esas elites hallan en esa adhesión rencorosa un camino para la supervivencia, poniendo las técnicas administrativas a menudo sumarias que son su único patrimonio supérstite al servicio del nuevo poder político; los que han salvado parte importante de su riqueza aprecian en la hegemonía militar su capacidad para mantener el orden interno, que aunque limitada y costosa es por el momento insustituible; se unen entonces en apoyo del orden establecido a los que han sabido prosperar en medio del cambio revolucionario: comerciantes extranjeros, generales transformados en terratenientes... La impopularidad que las nuevas modalidades políticas encuentran en la elite urbana, haya sido ésta realista o patriota, no impiden una cierta división de funciones en la que ésta acepta resignadamente la suya.

Esta división de funciones sigue imponiéndose todavía por otra razón. La revolución no ha suprimido un rasgo esencial de la realidad hispanoamericana, aunque ha cambiado algunos de los modos en que solía manifestarse; también luego de ella sigue siendo imprescindible el apoyo del poder político-administrativo para alcanzar y conservar la riqueza. En los sectores rurales se da una continuidad muy marcada: ahora como antes, la tierra se obtiene, no principalmente por dinero, sino por el favor del poder político, que es necesario conservar. En los urbanos la continuidad no excluye cambios más importantes: si en tiempos coloniales el favor por excelencia que se buscaba era la posibilidad de comerciar con ultramar, ésta ya no plantea serios problemas en tiempos postrevolucio-

narios. En cambio, la miseria del Estado crea en todas partes una nube de prestamistas a corto término, los agiotistas execrados de México a Buenos Aires, pero en todas partes utilizados: aparte los subidos intereses, las garantías increíbles (en medio de la guerra civil un Gobierno de Montevideo cedía desde las rentas de aduana hasta la propiedad de las plazas públicas de su capital para ganar la supervivencia, y a la vez la interesada adhesion de esos financistas aldeanos a su causa política), era la voluntaria ceguera del Gobierno frente a las hazañas de esos reyes del mercado lo que esos préstamos garantizaban. En uno y otro caso, la relación entre el poder político y los económicamente poderosos ha variado: el poderío social, expresable en términos de poder militar, de algunos hacendados, la relativa superioridad económica de los agiotistas los coloca en posición nueva frente a un estado al que no solicitan favores, sino imponen concesiones.

Esos cambios derivan, en parte, de que en Hispanoamérica hubo un ciclo de quince años de guerra revolucionaria. No fue ése, sin embargo, el único hecho importante de esos tres lustros: desde 1810 toda Hispanoamérica se abrió plenamente al comercio extranjero; la guerra se acompaña entonces de una brutal transformación de las estructuras mercantiles, que se da tanto en las zonas realistas como en las dominadas por los patriotas: si éstos han inscrito la libertad de comercio en sus banderas revolucionarias, sus adversarios dependen demasiado del favor inglés para poder hacer una política sustancialmente distinta, y terminan por abrir sus puertas al comercio extranjero, sea mediante concesiones abiertas, sea mediante autorizaciones limitadas multiplicadas en sus efectos por la indulgencia con que se las aplica.

He aquí un cambio esencial en la relación entre Hispanoamérica y el mundo; el contexto en que se dio explica en parte sus resultados: en la primera mitad del siglo XIX (salvo en los dos años afiebrados que precedieron al derrumbe de la bolsa de Londres en 1825), ni Inglaterra ni país europeo alguno rea-

lizaron apreciables inversiones de capitales en Hispanoamérica. La negativa a emprender esa aventura solía justificarse con altivas censuras al desorden postrevolucionario; esta explicación encontraba en Hispanoamérica un amplio eco, que mostraba cómo las relaciones con las nuevas metrópolis se apoyaban en una dependencia ideológica más sólida que la de la última etapa colonial. Pero si las insuficiencias del nuevo orden hispanoamericano eran tristemente evidentes, aun así la causa primera de esa negativa a intervenir a fondo en la reordenación de la economía hispanoamericana debía buscarse en la economía metropolitana misma. Aun los economistas más amigos de lo nuevo, al llegar al umbral de lo que debía ser un nuevo pacto colonial para Hispanoamérica, habían abundado en reservas frente a la temible fuerza -a la vez destructora y creadora- de la Europa que comenzaba su revolución industrial. Lo que esas reservas no habían previsto eran los desfallecimientos de esa fuerza, y eran precisamente éstos los decisivos: durante toda la primera mitad del siglo XIX Hispanoamérica entra en contacto con una Inglaterra, y secundariamente con una Europa, que sólo puede cubrir con dificultad los requerimientos de capital de la primera edad ferroviaria en el continente y en Estados Unidos.

Esa Inglaterra, esa Europa que quieren arriesgar poco en Hispanoamérica, sin duda porque el riesgo es grande, pero sobre todo porque les queda poco que arriesgar, buscan, en cambio, cosas muy precisas de la nueva relación que se ha abierto. Hasta mediados del siglo, salvo la excepción de las tierras atlánticas del azúcar, no son los frutos de la agricultura y la ganadería hispanoamericana los que interesan a los nuevos dueños del mercado; los de la minería, si más atractivos, no lo son tanto como para provocar las inversiones de capital necesarias para devolver su antigua productividad a las fuentes de metal precioso. Lo que se busca en Latinoamérica son sobre todo desemboques a la exportación metropolitana, y junto con ellos un dominio de los circuitos mercantiles locales que acentúe la situación favorable para la metrópoli. Hasta 1815, Inglaterra

vuelca sobre Latinoamérica un abigarrado desborde de su producción industrial; ya en ese año los mercados latinoamericanos están abarrotados, y el comienzo de la concurrencia continental y el agudizarse de la estadounidense invitan a los intereses británicos a un balance -muy pesimista- de esa primera etapa. Para los nuevos países que habían entrado en contacto directo con la Europa industrial en esos años decisivos, ese balance hubiera sido más matizado, pero tampoco le hubiese faltado una impresionante columna de pérdidas.

Pérdidas sobre todo para los que habían dominado las estructuras mercantiles coloniales. Éstos habían sido debilitados por la división entre un sector peninsular y uno criollo; el segundo, que había esperado prosperar con la ruina de su rival, se vio en cambio arrastrado por ella; era demasiado débil para resistir sólo a los conquistadores ultramarinos del mercado. Lo debilitaba aún más su vulnerabilidad a las presiones de un Estado indigente (los extranjeros -sobre todo los ingleses- estaban mejor protegidos por la necesidad de contar con la benevolencia de su Gobierno y por el temor a las represalias del poder naval). Pero lo debilitaba sobre todo el derrumbe de los circuitos comerciales en los que había prosperado: la ruta de Cádiz es cortada por la guerra y la revolución; a partir de 1814, el retorno de Europa continental al comercio mundial hace desaparecer las oportunidades ocasionalmente proporcionadas por economías coloniales antes aisladas de sus proveedores habituales. Y la nueva ruta dominante, la de Londres (luego de 1820, de Liverpool), concede todas las ventajas al rival ultramarino de los comerciantes criollos. Lo mismo en cuanto al transporte oceánico: la reconciliación con Inglaterra, si no eliminaba a los más aguerridos competidores de la marina mercante británica (es el caso de la norteamericana) aplastaba los esbozos de marinas locales que habían comenzado a darse en algunos puertos hispanoamericanos.

También en los circuitos internos de Hispanoamérica la guerra de Independencia introdujo innovaciones a las cuales

los debilitados grandes mercaderes locales no pudieron siempre adaptarse eficazmente: en toda la costa atlántica y en el Sur de la del Pacífico significó un paso más en la apertura directa al comercio ultramarino que había comenzado la reforma de 1778: Valparaíso, los puertos del sur de Perú y los del norte de México se transforman en centros de ese comercio; en ellos los agentes avanzados de la penetración mercantil británica triunfan con tanta mayor facilidad de posibles rivales locales por cuanto también para éstos el ambiente es extraño: derrotados en Buenos Aires, en Lima o en Veracruz, los comerciantes criollos de esos puertos encontrarían difícil desquitarse en Valparaíso, en Ilo o en Tampico... Esa derrota tiene efectos irreversibles: en toda Hispanoamérica, desde México a Buenos Aires, la parte más rica, la más prestigiosa, del comercio local quedará en manos extranjeras; luego de cincuenta años en Buenos Aires o Valparaíso, los apellidos ingleses abundarán en la aristocracia local. Aun fuera de los puertos la situación de los comerciantes extranjeros es privilegiada; en su viaje a México, al comienzo de la década del cuarenta, Fanny Calderón de la Barca podía notar cómo en todas partes las casas más ricas de los pueblos habían pasado a manos de comerciantes ingleses. Así la ruta de Liverpool reemplaza a la de Cádiz, y sus emisarios pasan a dominar el mercado como lo habían hecho los del puerto español. El cambio sin duda no se detiene aquí: el comercio de la nueva metrópoli es en muchos aspectos distinto del español. Nunca aparece más diferente que en sus comienzos: entre 1810 y 1815, los comerciantes ingleses buscan a la vez conquistar los mercados y colocar un excedente industrial cada vez más amplio. Son los años de las acciones audaces, cuando los mercaderes-aventureros rivalizan en la carrera hacia las comarcas que la guerra va abriendo, en las que quieren recoger «la crema del mercado». En esos años es destruida la estructura mercantil heredada; no serán siempre los productores quienes la añoren, pues los nuevos dueños del comercio introducen en los circuitos un circulante monetario que sus predecesores se

habían cuidado de difundir: de este modo la economía confirma a la política impulsando a la emancipación del productor rural frente al mercader y prestamista urbano.

Este proceso no va, sin embargo, muy lejos: luego de 1815 la relación así esbozada entra en crisis. Por una parte, la depresión metropolitana obliga a cuidar los precios a que se compran los frutos locales; por otra, la capacidad de consumo hispanoamericana, calculada con exceso de optimismo en los años pasados, ha sido colmada. Pero a la vez han aparecido competidores a los nuevos señores del mercado, y frente a la rivalidad norteamericana los ingleses comienzan a advertir qué debilidades se escondían bajo sus aparentes cartas de triunfo. Emisarios de una economía industrial que en parte ha financiado sus aventuras de conquista mercantil, su deber primero es volcar cantidades relativamente constantes de productos industriales (sobre todo textiles) en un mercado de capacidad de consumo muy variable. Abrumados por vastos *stocks*, se defienden mal de los navieros-comerciantes norteamericanos, que en barcos más pequeños trasladan *stocks* cuya composición pueden variar de acuerdo con las exigencias del mercado, puesto que sólo en mínima parte actúan como representantes de una industria necesitada de desemboques fijos. Frente a esos rivales, los británicos, tienden cada vez más a continuar las actitudes de los antiguos dominadores del mercado colonial latinoamericano; no es casual que, luego de 1825, se hagan abundantes las tomas de posición británicas sobre Hispanoamérica en que se hace amplia justicia al antiguo régimen.

En muchos aspectos Inglaterra es, en efecto, la heredera de España, beneficiaria de una situación de monopolio que puede ser sostenida ahora por medios más económicos que jurídicos, pero que se contenta de nuevo demasiado fácilmente con reservarse los mejores lucros de un tráfico mantenido dentro de niveles relativamente fijos. La Hispanoamérica que emerge en 1825 no es, sin embargo, igual a la anterior a 1810: en medio de la expansión del comercio ultramarino, ha aprendido a consumir más, en parte porque la manufactura

extranjera la provee mejor que la artesanía local (esos sarapes hechos en Glasgow al gusto mexicano, que son más baratos que los de Saltillo en el mismo Saltillo; esos ponchos hechos en Manchester al modo de la pampa, malos pero también baratos; la cuchillería «toledana» de Sheffield; el algodón ordinario de la Nueva Inglaterra que, antes que el británico, triunfa en los puertos sobre el de los obrajes del macizo andino). Pero al lado de esta conquista del mercado existente, estaba la creación de un mercado nuevo: los años de oferta superabundante llevaban a ventas de liquidación que si podían arruinar a toda una oleada de invasores comerciales, preparaban una clientela para quienes los seguirían. Sin duda, esa ampliación encontraba un límite en la escasa capacidad de consumo popular (un límite tanto más significativo por cuanto -contra lo que quieren tenaces prejuicios retrospectivos- buena parte de las nuevas importaciones son, en efecto, de consumo popular); la expansión de las de tejidos de algodón, que explica el mantenimiento del nivel total de las importaciones, se debe sobre todo al descenso secular del precio de esos tejidos.

Esa ofensiva industrial superó la resistencia de las artesanías locales, y toda una literatura nostálgica no se fatiga de evocar esa derrota, que fue, sin embargo, menos total y menos inmediata de lo que ella supone. Pero quizá su consecuencia más grave no fue ésa; el aumento de las importaciones, al parecer imposible de frenar (una política de prohibición no sólo era impopular, sino que privaba a los nuevos estados de las rentas aduaneras que, por presión de los terratenientes, se concentraban casi siempre en la importación y constituían la mayor parte de los ingresos públicos), significaba un peso muy grave para la economía en su conjunto, sobre todo cuando no se daba un aumento paralelo e igualmente rápido de las exportaciones. Las dificultades se presentaron aún más dramáticamente porque el interés principal de los nuevos dueños del mercado, como el de los anteriores, era obtener metálico y no frutos; ahora la fragmentación del antiguo imperio había separado a zonas enteras de sus fuentes de metal precioso (es el

caso del Río de la Plata, despojado en quince años de casi todo su circulante); aun en zonas que las habían conservado, el ritmo de la exportación, más rápido que el de producción, podía llevar al mismo resultado: así ocurría en Chile luego de la independencia; productor de plata y oro, el nuevo país no podía conservar la masa de moneda, sin embargo tan reducida, necesaria para los cambios internos.

Pero aun la exportación del circulante era insuficiente para equilibrar los déficits de la balanza comercial. En 1825, a propósito de Guayaquil, un cónsul británico se preguntaba cómo era posible un sistema por el cual, año tras año, el país importaba más de lo que exportaba. Aunque una parte del problema resulta de las valuaciones de aduana, en casi todas partes sistemáticamente bajas para los productos locales, éste está lejos de ser totalmente imaginario. Antes de la época de grandes inversiones, que fue la segunda mitad del siglo XIX, Hispanoamérica parece haber conocido una inversión extranjera menos fácilmente visible, la de una parte de las ganancias comerciales, que se traducía, por ejemplo, en algunas regiones en la compra de tierras por parte de comerciantes extranjeros. Pero esas inversiones no podían ser sino modestas, y por eso mismo el déficit comercial no podía exceder ciertos límites. Eso explica la lentitud con que crecen las importaciones, luego de que en los años revolucionarios se establece su nuevo nivel. Así la economía nos muestra una Hispanoamérica detenida, en la que la victoria (relativa) del productor -en términos sociales esto quiere decir en casi todos los casos del terrateniente- sobre el mercader se debe, sobre todo, a la decadencia de éste y no basta (salvo en ciertas situaciones estrictamente locales) para inducir un aumento de producción que el contacto más íntimo con la economía mundial no estimula en el grado que se había esperado hacia 1810; Hispanoamérica aparece entonces encerrada en un nuevo equilibrio, acaso más resueltamente estático que el colonial.

La parte que por acción y sobre todo por omisión tenía en el establecimiento de ese equilibrio la economía de las nuevas

metrópolis parece muy grande. Pero al lado de ella es preciso tomar en cuenta la que tuvo la política de las naciones que en Iberoamérica llenaban en parte el vacío dejado también en este aspecto por las viejas metrópolis. Desde el comienzo de su vida independiente, esta parte del planeta parecía ofrecer un campo privilegiado para la lucha entre nuevos aspirantes a la hegemonía. Esa lucha iba a darse, en efecto, pero -pese a las alarmas de algunos de sus agentes locales- la victoria siempre estuvo muy seguramente en manos británicas. Las más decididas tentativas de enfrentar esa hegemonía iban a estar a cargo de Estados Unidos -aproximadamente entre 1815 y 1830- y a partir de esa última fecha, de Francia.

El avance norteamericano se apoyaba en una penetración comercial que comenzó por ser exitosa: desde México a Lima y Buenos Aires, los informes consulares británicos recogidos por Humphreys denuncian, para años muy cercanos a 1825, la magnitud del peligro. Se apoyaba también en una orientación política aún más favorable que la de Gran Bretaña a la causa de los revolucionarios hispanoamericanos; intentó expresarse en el sostén a ciertas facciones revolucionarias (en general las menos moderadas): en Chile como en México, apoyando en un caso a los hermanos Carrera, en el otro a los yorkinos, los agentes consulares de la Unión enfrentaban a los sectores más conservadores, que contaban con el beneplácito británico. En su aspecto político la amenaza norteamericana se desvaneció bien pronto: los bandos que contaron con su simpatía enfrentaron rápidos fracasos; en todas partes -notaban con amargura los agentes norteamericanos- los favores de la diplomacia británica eran buscados ansiosamente y recibidos con agradecimiento, mientras que los de Estados Unidos encontraban una cortés indiferencia. En lo económico, la presencia norteamericana se desvaneció más lentamente: sostenida en un sistema mercantil extremadamente ágil, iba a perder buena parte de sus razones de superioridad cuando se rehiciera sólidamente una red de tráficos regulares; fue, sin embargo, el abaratamiento progresivo de los algodones de

Lancashire el que –al desalojar del mercado latinoamericano a los de Nueva Inglaterra, tanto más rústicos– hizo perder importancia al comercio norteamericano con Hispanoamérica.

La presencia francesa nunca significó un riesgo para el comercio británico: más que concurrente, el comercio francés era complementario del inglés, orientado como estaba hacia los productos de consumo de lujo y semilujo, y secundariamente hacia los de alimentación de origen mediterráneo, en los que Francia tendía a reemplazar a España. Pero el solo hecho de que una gran potencia continental tuviese relaciones más estrechas con Latinoamérica representaba un peligro. Fue la política francesa la que contribuyó a disiparlo: deseosa de afirmar su gravitación, la monarquía de Julio se hizo presente sobre todo a través de conflictos basados en reclamaciones en extremo discutibles; en México pudo salir con la suya en 1838; en el Río de la Plata iba a obtener, con mucho más esfuerzo, un éxito más limitado, pero tanto el éxito como el fracaso le enajenaban posibles simpatías hispanoamericanas; esa política agresiva y a la vez vacilante no ofrecía una alternativa válida a la más discreta hegemonía británica.

Éste es, en efecto, el dato dominante en la constelación internacional en que se mueve Latinoamérica. Afirmada vigorosamente durante la guerra de la Independencia (sobre todo en los años iniciales, en que el aislamiento respecto de la antigua metrópoli y de la entera Europa napoleónica –y junto con él la guerra anglonorteamericana– hacen de la Gran Bretaña el único poder externo que puede gravitar en la revolucionada Hispanoamérica, a la vez que la metrópoli efectiva de Brasil en que la corte portuguesa ha encontrado refugio) esa hegemonía se ha de consolidar en los años posteriores a 1815, en los que, sin embargo, no faltan tentativas de reconciliación de la Hispanoamérica revolucionaria y la Europa restaurada (ése es uno de los sentidos de los proyectos monárquicos). La intransigencia de España y la debilidad de las monarquías continentales los frustran; Gran Bretaña tiene ahora, como integrante

de pleno derecho de la Europa de la restauración, una situación envidiable; más que nunca los revolucionarios se disputan su buena voluntad, de la que depende su propia supervivencia. La diplomacia británica se deja adular y utiliza su posición para consolidar los intereses de sus súbditos, amenazados, luego de 1815, por una ola de impopularidad creciente. En la década siguiente va a consolidar aún más esa situación privilegiada, haciendo pagar el reconocimiento de la independencia de los muchos estados con tratados de amistad, comercio y navegación que recogen por entero sus aspiraciones. En ese momento la hegemonía de Inglaterra se apoya en su predominio comercial, en su poder naval, en tratados internacionales. Pero se apoya también en un uso muy discreto de esas ventajas: la potencia dominante, que protege mediante su poderío político una vinculación sobre todo mercantil y que no desea participar más profundamente en la economía latinoamericana, arriesgando capitales de los que no dispone en abundancia, se fija objetivos políticos adecuados a esa situación.

En primer lugar no aspira a una dominación política directa, que implicaría gastos administrativos y la comprometería en violentas luchas de facciones locales. Por el contrario, se propone dejar en manos hispanoamericanas, junto con la producción y buena parte del comercio interno, el costoso honor de gobernar esas vastas tierras. No quiere decir eso que no tenga también en este aspecto puntos de vista muy firmes, ni que se inhiba de hacer sentir su poder para imponerlos. Pero en cuanto a esto, hay que tener en cuenta ante todo que los esfuerzos británicos por imponer determinadas políticas serán siempre limitados: a falta de un rápido éxito suelen ser abandonados, dejando en situación a menudo incómoda a quienes creyeron contar incondicionalmente con el apoyo de Gran Bretaña. No hay que olvidar tampoco que las aspiraciones políticas de Gran Bretaña en Latinoamérica están definidas por el tipo de interés económico que la vincula con estas tierras. Su política es sólo muy ocasionalmente (en

algunos grandes conflictos) la de su cancillería de Londres; más frecuentemente es la de sus agentes, identificados con grupos de comerciantes que aspiran sobre todo a mantener expeditos los circuitos mercantiles que utilizan; en términos más generales, a mantener el *statu quo* si éste asegura razonablemente la paz y el orden interno. Salvo excepciones (cada vez más contadas a medida que se avanza en el tiempo), una extrema cautela es el rasgo dominante de una política así concebida.

Esta cautela explica la preferencia inglesa por el mantenimiento de la fragmentación política heredada de la revolución, que suele atribuirse al deseo de debilitar a los nuevos estados. Por el contrario, cada vez que una reorganización política en unidades más vastas pareció posible, ésta contó con el beneplácito británico, que no faltó ni a los proyectos de Bolívar ni a los menos ambiciosos protagonizados por Santa Cruz. Sin duda, frente al conflicto argentino-brasileño Inglaterra impuso en 1828 una solución que se apartaba de esta línea, creando un estado-tapón, y sus dirigentes no dejaron entonces de tomar en cuenta las ventajas que derivarían para sus intereses en el Río de la Plata, imposible desde entonces de clausurar por voluntad unilateral de una potencia. Pero al lado de estas consideraciones estaba la de que esa solución era la única que podía devolver rápidamente la paz y un comercio no perturbado al Atlántico sudamericano. Esta última consideración parecía ser, en todos los casos, la decisiva: si, contra lo que quieren reconstrucciones históricas demasiado fantasiosas, Inglaterra no tenía motivo para temer la creación de unidades políticas más vastas, que ofrecieran a su penetración comercial áreas más sólidamente pacificadas (y el ejemplo de Brasil muestra suficientemente que, en efecto, la relación de fuerzas le permitía encarar con serenidad las veleidades de política autónoma que podrían surgir en esas supuestas grandes potencias), tenía en cambio motivos sobrados para temer que esos proyectos fuesen irrealizables, que su último fruto fuese la anulación de los esfuerzos por imponer algún orden a

las unidades más pequeñas en que espontáneamente se había organizado la Hispanoamérica postrevolucionaria.

Esa política prudente explica que la hegemonía inglesa haya podido seguir consolidándose cuando algunas de sus bases comenzaban a flaquear: si a mediados de siglo el comercio y la navegación británicos siguen ocupando el primer lugar en Latinoamérica, están ya muy lejos de gozar del cuasi monopolio de los años posteriores a la revolución. Pero, pese a la multiplicación de conflictos locales, el influjo inglés, que en líneas generales no combate, sino apoya a los sectores a los que las muy variadas evoluciones locales han ido dando el predominio, es a la vez favorecido por éstos. Es en este sentido muy característica la diferencia que un gobernante gustoso de identificarse con la causa de América frente a las agresiones europeas, el argentino Juan Manuel de Rosas, establece entre las francesas –a las que responde con una resistencia obstinada, seguro de que la victoria será el premio de su paciencia– y las británicas, frente a las cuales busca discretamente soluciones conciliatorias, convencido como está de que a la postre Gran Bretaña descubrirá dónde están sus intereses en el Río de la Plata, y de que, por otra parte, no bastaría la resistencia más tenaz para borrar el influjo británico de esa comarca. El mismo deseo de esquivar una ruptura total se manifiesta en Brasil, cuyos dirigentes resistieron, sin embargo, con tenacidad sin igual las pretensiones británicas en torno a la supresión de la trata de negros: a lo largo de conflictos que se prolongaron durante decenios y que llevaron en algún momento a la interrupción de relaciones diplomáticas, el abandono de la órbita británica seguía siendo, para los dirigentes brasileños, un proyecto imposible.

Su fuerza y el uso moderado que de ella hace contribuyen a hacer de Inglaterra la potencia dominante; a mediados del siglo XIX parece surgir en el horizonte latinoamericano el influjo de otra: es de nuevo Estados Unidos, cuya huella queda inscrita en la guerra mexicano-norteamericana, y más discretamente en el breve florecer del anexionismo cubano, y cuyo

nuevo papel parece reconocido por Gran Bretaña (por lo menos para la América Central) en el tratado de 1850, que prevé una solución concertada para el problema del canal interoceánico. Pero el sentido de la presencia norteamericana es doble. Hay, por un lado, la voluntad de expansión territorial de regiones consagradas a una economía agraria, divididas entre sí por el problema del trabajo servil; en particular, el sur esclavista debe expandirse o perecer, y la guerra de México es su triunfo, como la anexión de Cuba es su proyecto. En ese aspecto la presencia norteamericana se traduce pura y simplemente en un avance sobre la frontera de las tierras iberoamericanas. Hay también el esbozo de una relación nueva, que no por casualidad se da en esa América Central, a la que el descubrimiento del oro californiano transforma en eje de las comunicaciones de la ampliada área económica; en este aspecto la presión estadounidense (destinada a disminuir temporariamente al completarse la red ferroviaria entre el Atlántico y el Pacífico) anuncia, pero todavía de lejos, un futuro que sólo ha de madurar a comienzos del siglo XX, en un marco muy distinto del que encierra a Latinoamérica entre la emancipación y los años centrales del siglo XIX.

Este marco es, por el momento, muy rígido; los datos de la realidad hispanoamericana y los de la economía metropolitana coinciden en provocar una estabilidad en la penuria, muy distinta de las renovaciones esperadas en la aurora de la revolución; la nueva potencia dominante, al tomar en cuenta esa situación e introducirla como postulado esencial de su política, contribuye a consolidarla. Mientras tanto Hispanoamérica espera, cada vez con menores esperanzas, el cambio que no llega. Hacia la década del cuarenta, definitivamente alejada la posibilidad de una restauración del antiguo orden, la nostalgia de sus blandas excelencias puede ser reconocida por conservadores e innovadores a la vez como un sentimiento muy arraigado en la opinión hispanoamericana. Es que entre los cambios traídos por la independencia es fácil sobre todo advertir los negativos: degradación de la vida administrativa,

desorden y militarización, un despotismo más pesado de soportar porque debe ejercerse sobre poblaciones que la revolución ha despertado a la vida política, y que sólo deja la alternativa, a la vez temible e ilusoria, de la guerra civil, incapaz de fundar sistemas de convivencia menos brutales. En lo económico, desde una perspectiva general hispanoamericana, se da un estancamiento al parecer invencible: en casi todas partes los niveles de comercio internacional de 1850 no exceden demasiado a los de 1810; este indicador, particularmente sensible a cambios inducidos a partir del contacto con el resto del mundo, lo dice casi todo. Pero esa situación general conoce variaciones locales muy importantes, que se relacionan, más bien que con la diferente intensidad del desorden intenso, con las características –esbozadas ya antes de 1810– de las distintas economías regionales. Venezuela, que ha combatido reiterada y ferozmente su guerra de Independencia en su propio territorio, o el Río de la Plata, que la ha combatido fuera de él, pero ha conocido luego guerras civiles, bloqueos internacionales y largas etapas de desorden, logran retomar y superar los niveles de los más prósperos años coloniales; Venezuela en su agricultura, y el Río de la Plata en su ganadería tienen, desde antes de 1810, el germen de una estructura económica orientada a ultramar, que compensará las desventajas del nuevo clima político-social con las ventajas que le aporta la nueva organización comercial, y así podrá afirmarse. En cambio Bolivia, Perú y sobre todo México, cuya economía minera ha sufrido de muchas maneras el impacto de la crisis revolucionaria, y requeriría aportes de capitales ultramarinos para ser rehabilitada, no logran reconquistar su nivel de tiempos coloniales: la producción mexicana de plata desciende a la mitad de la cifra alcanzada en las últimas décadas coloniales; en 1810 el virreinato de México exportaba por valor cinco veces mayor que el del Río de la Plata, y a mediados de siglo ambas exportaciones se han nivelado, aunque ya no salen de Buenos Aires los retornos de plata altoperuana; comparación todavía más impresionante: en cuarenta años la riqueza ganadera de

la pampa rioplatense, que antes de 1810 había sostenido exportaciones por valor del 4 por 100 de las de plata mexicana, está cerca de igualarse con ellas: ha decuplicado su valor, mientras el de ésta –como se ha señalado– se ha reducido a la mitad.

Entre estos casos extremos se sitúa la mayor parte de las regiones hispanoamericanas, cuya evolución es menos rica en altibajos. En algunas de ellas hemos de ver reproducirse, en escala reducida, los contrastes que se acaban de descubrir para Hispanoamérica. Así, en América Central ese admirable observador que fue Stephens pudo encontrar en casi todas partes una economía a la que la falta de desemboques para su producción y la falta de capitales para acrecerla hacían estática: en Honduras, en Nicaragua, en el litoral costarricense del Pacífico, hacendados dueños de tierras vastas como provincias europeas vivían en la escasez sobre esas riquezas ilusorias, que era imposible explotar adecuadamente. Pero en la meseta central de Costa Rica pudo ver el comienzo de la expansión del café; propietarios a los que sus vecinos vaticinaban próxima ruina utilizaban las ganancias de cosechas anteriores, instaladas en Europa, para plantar más y más cafetales, y lejos de arruinarse se encontraban cada vez más ricos: ese diminuto rincón centroamericano había encontrado –como el Río de la Plata o Venezuela– la nueva fórmula de prosperidad, en una economía exportadora ligada al mercado ultramarino. En otras partes el mismo proceso se da de modo más lento: es el caso de Nueva Granada, donde el aumento de las exportaciones de cueros (fruto de la ganadería de la sabana) llena, en parte, la brecha abierta por la crisis de la minería; es más acentuadamente el caso de Chile, que –habiendo obtenido en el reajuste del comercio hispanoamericano acceso directo al mercado metropolitano– también completa con exportaciones de cueros las derivadas de una minería que, desde 1830, retoma su ritmo ascendente y que ha agregado a los metales preciosos el cobre (que ya desde mediados de la década del veinte supera en valor a plata y oro sumados y sólo será devuelto a segun-

do plano por la expansión de la plata de la década siguiente). Es entonces la Hispanoamérica marginal, la que en tiempos coloniales estaba en segundo plano, y sólo comenzaba a despertar luego de 1780, la que resiste mejor las crisis brutales del período de emancipación; junto con el Río de la Plata, Venezuela, Chile, Costa Rica, también las islas antillanas, que han permanecido bajo dominio español, prosiguen su avance económico; sobre todo Cuba, beneficiada por la crisis que la emancipación de los esclavos produce en la economía azucarera de las Antillas inglesas (y por el liberalismo comercial que España aplica a lo que resta de su imperio, para salvarlo de la agresividad de las potencias económicamente dominantes), expande su producción de azúcar; entre 1815 y 1850 el volumen de las exportaciones azucareras cubanas más que cuadruplica (pasando de algo más de 40.000 toneladas a las 200.000) y su valor más que duplica.

Junto con esa Hispanoamérica dinámica, que se superpone casi totalmente con que ha comenzado a expandirse en la segunda mitad del siglo XVIII, también Brasil supera sin dificultades económicas inmediatas la crisis de independencia: del mismo modo que en Cuba también aquí la crisis azucarera de las West Indies significa un estimulo inmediato: el nordeste azucarero conoce un retorno de prosperidad; al mismo tiempo, el extremo sur ganadero repite, en tono menor, la expansión de su vecino meridional, el Río de la Plata. Ese crecimiento en los extremos crea desequilibrios que han de repercutir en la vida política brasileña; si el imperio logra sobrevivir, el Brasil independiente sólo adquirirá una cierta cohesión cuando el café vuelva a colocar al centro del país en el núcleo de su economía. Esos desequilibrios están agravados porque el renacido nordeste azucarero conserva todo su arcaísmo: como antes, depende para sobrevivir de una mano de obra esclava que sólo la importación puede mantener en nivel adecuado (puesto que, al revés de lo que ocurre en el Sur norteamericano, el Brasil del azúcar no es capaz de producir internamente los esclavos que llenen los huecos creados por la muerte en la

fuerza de trabajo disponible). Bajo el predominio del norte azucarero, Brasil debe sostener una lucha tenaz, pero de resultado necesariamente negativo, con una Inglaterra dispuesta a abolir la trata: aunque en la primera mitad del siglo XIX las importaciones de esclavos africanos son mayores que en cualquier época anterior, la crisis del sistema se avecina inexorablemente. Al mismo tiempo, absorbido en la defensa de su economía esclavista, Brasil cede paulatinamente en los otros puntos de conflicto con la potencia hegemónica: el tratado de 1827 reiteraba sustancialmente los términos del arrancado a Portugal en 1810; apertura del mercado brasileño a la importación británica, sin defensa para ningún rubro de producción local; mantenimiento de jurisdicciones especiales para los británicos residentes en Brasil... Pese a todo ello, a partir de 1845 Gran Bretaña pasa a reprimir la trata por la violencia; sólo cuando se resigna a eliminarla, Brasil recupera la posibilidad de una política en otros aspectos más independiente de la tutela británica. Entretanto, se ha constituido en el principal mercado latinoamericano para Gran Bretaña; sus importaciones alcanzan bien pronto el nivel de los cuatro millones de libras anuales (cuatro veces las del Río de la Plata). Los resultados son los esperables: déficit comercial, desaparición del circulante metálico, penuria de las finanzas (agravada porque tampoco en el Brasil imperial, pese a la levedad de la crisis de independencia, mantener el orden interno es empresa sencilla).

Para esa situación inesperadamente dura, América latina fue elaborando soluciones (de política económico-financiera; de política general) que sólo lentamente iban a madurar. Allí donde la crisis fue, a pesar de todo, menos honda, las soluciones fueron halladas más pronto, y significaron transformaciones menos profundas. Ninguna adaptación al nuevo orden de cosas fue en ambos aspectos más exitosa que la brasileña; y el imperio terminó por ser, para la republicana América española, un algo escandaloso término de comparación sobre el

cual podía medir su propio fracaso. Ese éxito tenía algunos secretos: el viejo orden era en **Brasil** más parecido al nuevo que en Hispanoamérica; una metrópoli menos vigorosa, y por lo tanto menos capaz de hacer sentir su gravitación; un contacto ya entonces directo con la nueva metrópoli económica, un peso menor de los agentes de la Corona respecto de poderes económico-sociales de raíz local acostumbrados a imponerse, eran todos rasgos que en el Brasil colonial anticipaban el orden independiente. Las transformaciones eran sin embargo, indudables, y la transición difícil. La creación de un parlamento tenía, de modo menos violento, consecuencias comparables a la militarización de Hispanoamérica: en él las clases terratenientes de un país abrumadoramente rural debían predominar, y para evitarlo, la Corona debía emplear de modo muy discutible sus poderes. Un liberalismo brasileño, vocero sobre todo de las distintas aristocracias locales (la azucarera del norte, las ganaderas del centro y del extremo sur) choca con un conservadurismo urbano, comprometido por la presencia en sus filas de los portugueses que dominan el pequeño y mediano comercio de los puertos y representado sobre todo por funcionarios herederos de la mentalidad –a menudo más esclarecida que la de sus rivales los grandes señores liberales– del antiguo régimen. Sin duda, entre esos adversarios el equilibrio era posible: misión de la Corona era asegurar con su influjo algún poder al sector conservador y, a la vez, arbitrar entre ambos. Para ello contaba básicamente con el apoyo del ejército, sólo lentamente nacionalizado y mezclado –no por casualidad– de cuerpos mercenarios europeos.

Aun así, su tarea no era fácil: el emperador Pedro I iba a fracasar sustancialmente en ella; terminó por quedar identificado con los sectores que en el nuevo Brasil mantenían la nostalgia del absolutismo y de la unión con Portugal. Antes había tenido tiempo de lanzar al imperio a la primera de sus aventuras internacionales: la guerra del Río de la Plata por la posesión de la Banda Oriental, rebautizada Provincia Cisplatina e incorporada como tal al imperio brasileño, luego de haber

sido ocupada, a partir de 1816, por tropas portuguesas. La guerra –fruto de una rebelión de la población local, que obligó al Gobierno de Buenos Aires a apoyarla luego de ganar el control de la mayor parte del territorio disputado– provocó una alineación de fuerzas sólo aparentemente paradójica. Si la Corona, apoyada en el ejército y mal arraigada en el país, deseosa por lo tanto de evitar una humillación internacional que podía serle fatal, quería una lucha conducida hasta la victoria, su belicismo encontraba eco muy limitado en los sectores conservadores; en cambio los liberales (sobre todo los del Sur) adoptaban con entusiasmo una política que satisfacía sus intereses regionales (representados muy concretamente por los hacendados riograndenses que estaban haciéndose dueños de tanta parte de la campaña del Uruguay). He aquí una secuencia que aún ha de repetirse: la Corona tenderá a encontrar un terreno de acuerdo con fracciones liberales, en una política exterior más aventurera que la deseada por los sectores urbanos, que apoyan habitualmente a los conservadores.

En todo caso la guerra no es un éxito; derrotado por tierra, Brasil ahoga económicamente a su enemigo mediante el bloqueo de Buenos Aires; debe finalmente aceptar la mediación inglesa y la solución que Gran Bretaña ha propuesto desde el comienzo: la independencia de la Banda Oriental, que desde 1828 se constituye en nuevo estado republicano. Entretanto, Brasil, necesitado de la buena voluntad británica, ha hecho concesiones sustanciales en los tratados de 1825 y 1827, sobre trata negrera y comercio y navegación. Entretanto, también, la guerra le ha permitido descubrir un instrumento financiero que, censurado enérgicamente por todos, y contrario a las buenas doctrinas económicas, se revela, sin embargo, indispensable: el papel moneda. En la inflación se descubre la solución conjunta para los problemas de un estado en perpetua miseria y los de una economía en perpetuo déficit de intercambio: entre 1822 y 1846 el milreis pierde la mitad de su valor, pasando de 61,50 a 27 peniques; las consecuencias del proceso se agravan porque se da en clima caótico, con multi-

plicación de bancos de emisión, creación de nuevas monedas metálicas de valor inferior al declarado, y clandestinamente empobrecidas aun más por el Gobierno que las acuna, falsificaciones frecuentes... Pese a todo ello, la inflación permite eludir crisis aun más graves. En otro aspecto, su adopción es significativa: marca el triunfo de los intereses rurales sobre los urbanos; entre los primeros son, sobre todo, los terratenientes del Norte y del Sur, dependientes del mercado internacional, los más favorecidos; entre los segundos es aún más perjudicada que los comerciantes la masa de asalariados (la clase media, que en el imperio esclavista es más nutrida que la clase baja libre). El descontento urbano, que enfrenta el duro orden conservador mantenido por el imperio, adquiere signo liberal; capaz de buscar salida subversiva, será un nuevo instrumento de extorsión en manos del liberalismo más moderado de base rural.

Así las cosas, no es extraño que la vida política del imperio haya sido agitada. En 1831 don Pedro I decide trasladarse a Portugal, a luchar contra la rebelión absolutista de don Miguel y asegurar la sucesión para su hija María de la Gloria. Su retiro es una implícita confesión de fracaso, y marca el comienzo del imperio parlamentario. Los alcances de la innovación son limitados por el hecho de que si el gabinete requiere el apoyo de la mayoría parlamentaria, es a la vez capaz -contando con el apoyo de la Corona- de conquistar esa mayoría en elecciones suficientemente dirigidas. Pero es indiscutible que el nuevo orden da lugar más importante al liberalismo; la reforma de la carta daba en 1832 mayor autonomía a las provincias, y ese esbozo de federalismo era aún más favorable al partido antes opositor que el parlamentarismo. Entre 1831 y 1840 la regencia iba a intentar frenar el proceso centrífugo, mientras enfrentaba alzamientos disidentes en el Norte y el Sur (desde 1835 Río Grande do Sul está en guerra civil, conmovido por un alzamiento republicano). Pero -rasgo muy notable del orden político brasileño- el liberalismo puede ser alternativamente revolucionario y constitucional; sus adver-

sarios prefieren no obligarlo a renunciar a sus ambigüedades, temerosos de terminar con la unidad brasileña. En 1840, la declaración de mayoría de don Pedro I, entonces de quince años, significó un triunfo liberal, bien pronto anulado por la voluntad del monarca de asegurarse un papel de árbitro en el ritmo de alternancia de los partidos.

En 1845 era vencida la revolución riograndense, y sus jefes entraban a ocupar lugares importantes en el orden imperial restaurado; en 1848 una revolución nordestina, esencialmente urbana, era fácilmente sofocada. Desde entonces la fuerza de las cosas mismas, y la acción tenaz de la Corona, iban a destruir la rivalidad (y junto con ella la cohesión interna) de los partidos: vocero de fuerzas locales, que una vez tutelados sus intereses inmediatos eran indiferentes a la gran política, el parlamento iba a proporcionar apoyo a una elite de políticos formados en él, pero deudores del poder a la Corona y al ejército, al que las guerras civiles de la década del cuarenta habían dado una fuerza nueva en el panorama interno.

Esa atenuación de los conflictos políticos, si no significaba necesariamente un triunfo del liberalismo, implicaba, en cambio, el de los sectores sociales que habían comenzado por identificarse con éste. Había sido facilitada porque, en las décadas agitadas de 1830 y 1840, esos sectores y sus rivales habían encontrado un terreno de unión en la resistencia a la supresión de la trata. El mantenimiento de ésta era esencial para la economía azucarera del norte y del litoral del centro; el comienzo de la expansión del café (que se insinuaba en Río de Janeiro antes de encontrar su tierra de elección en San Pablo) también se apoyaba en el trabajo esclavo. Al mismo tiempo, el comercio de esclavos, al que la persecución británica hacía a la vez más azaroso y más lucrativo, ofrecía un oportuno desquite a los comerciantes portugueses de las ciudades litorales, marginados del gran comercio europeo por los británicos. Pero hacia fines de la década del cuarenta, esta comunidad de intereses comenzó a quebrarse: si la persecución creciente de la trata hacía al comercio de esclavos aún más lucrativo, ponía

a la vez en crisis a la agricultura que utilizaba esa mano de obra cada vez más costosa; esa creciente divergencia de destinos e intereses puso fin a la mansa rebelión de los parlamentarios contra sus líderes que -conservadores o liberales- coincidían en pedir medidas eficaces contra la trata; éstas llegaron finalmente en 1851. En 1840 el senador paulista Vergueiro había comenzado a explotar tierras de café utilizando colonos libres, a los que reconocía la mitad del fruto de la cosecha; el centro de Brasil comenzaba así a explorar un nuevo camino, y aun el norte azucarero debía buscarlo para sobrevivir, puesto que la agricultura esclavista se estaba haciendo económicamente imposible.

El núcleo de Brasil comienza a apartarse de nuevo del nordeste azucarero; la reconciliación en una síntesis política en que el liberalismo es cada vez más el elemento dominante, se traduce en una nueva concesión a las fuerzas regionales del Sur. Vuelto desde 1845 al escenario rioplatense, gracias al fin de la secesión riograndense, Brasil intenta orientar el dinamismo de los dirigentes del extremo sur hacia metas de expansión y no de secesión. Desde 1851, en alianza con el Gobierno uruguayo encerrado en Montevideo y con los gobernadores disidentes de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes, organiza una campaña que, a comienzos de 1852, logra derribar a Rosas, gobernador de Buenos Aires y figura dominante del panorama rioplatense. Desde entonces hasta 1870, el imperio volverá a tener participación muy activa en los asuntos de los vecinos del Sur; si a la postre los frutos de su acción se revelarán muy magros, haberla emprendido revela ya el vigor alcanzado por el Brasil imperial a mediados del siglo XIX; aunque la expansión de su economía ha sido relativamente lenta (las exportaciones han pasado, entre la tercera y la quinta década del siglo, de un promedio anual de casi cuatro millones de esterlinas a uno de casi cinco millones y medio; en el mismo plazo las importaciones han subido de algo más de cuatro millones a seis millones), más lenta por cierto que la de la población (casi cuatro millones, de los cua-

les algo más de un millón de esclavos, en 1825; ocho millones, de los cuales dos millones y medio de esclavos, en 1850), hay, sin embargo, en ella ciertos avances que, junto con la estabilidad política, explican el prestigio que el Brasil imperial conquista en Hispanoamérica. Ese Brasil ha sido la base primera de la penetración comercial europea hacia el Río de la Plata y Chile; se esboza a partir de 1810 el surgimiento de una metrópoli secundaria, destinada sin embargo a no madurar; en todo caso, hasta veinte años después de 1810 Río de Janeiro hace, frente a Buenos Aires y Valparaíso, papel de mercado de distribución. Junto con el mayor volumen comercial se da alguna mayor madurez en la estructura financiera: Brasil tiene un sistema bancario antes de que sus vecinos hispánicos lo puedan tener de modo estable; y luego de 1851, junto con los hacendados riograndenses, es el mayor banquero de Río de Janeiro, el barón y luego vizconde de Mauá, quien extiende sus actividades (sólo nominalmente independientes respecto del centro financiero de Londres) hacia Uruguay y Argentina. Esos avances, como los de la política brasileña, serán efímeros, pero por el momento parecen confirmar la superioridad de la solución neoportuguesa frente a la neoespañola, luego de la crisis de la emancipación. Frente al éxito imperial –por limitado que se quiera– Hispanoamérica parece no poder exhibir sino un balance en que los fracasos predominan abrumadoramente.

El inventario de esos fracasos se ha hecho muchas veces; la primera consecuencia de ellos suele buscarse en la fragmentación política de Hispanoamérica, que se contrapone a la unión de la América portuguesa, salvada a pesar de la crisis que abundaron en el siglo XIX brasileño. Pero esta conclusión es muy discutible: baste observar que la estructura colonial portuguesa había creado un Brasil unido, y la española había ya dividido a las Indias en muy variadas jurisdicciones administrativas. Esa diferente organización colonial refleja a su modo datos que le son previos: Brasil era gobernado todo él por un solo virrey porque podía serlo, pese a la sumaria orga-

nización administrativa portuguesa; gobernar desde un sólo centro las tierras que van desde California a Buenos Aires era demasiado evidentemente imposible. La guerra de Independencia había confirmado las divisiones internas de la Hispanoamérica colonial, y había creado otras: fueron sus vicisitudes las que hicieron estallar la unidad -por otra parte tan reciente- del virreinato del Río de la Plata. Sólo en América Central el proceso de fragmentación iba a proseguir luego de 1825, con la disolución de las Provincias Unidas de Centroamérica en 1841 y con la separación de Panamá de Colombia, producida en un contexto muy diferente y ya en el siglo XX. Más que de la fragmentación de Hispanoamérica habría entonces que hablar, para el período posterior a la independencia, de la incapacidad de superarla. Esta incapacidad se pone de manifiesto a través del fracaso de las tentativas de reorganización que intentan evadirse del marco estrecho de los nuevos estados, herederos del marco territorial de los viejos virreinatos, presidencias y capitanías: la más importante es, desde luego, la de Bolívar.

Pero ésta implica algo más que un intento de agrupar en un sistema político coherente a Hispanoamérica en torno de Colombia; es a la vez una tentativa de equilibrar los aportes revolucionarios y los del viejo orden, en la que se refleja el pensamiento de Bolívar frente a la realidad postrevolucionaria. El Libertador seguía siendo hostil a la monarquía; a la aversión de principio se agregaba ahora, luego del derrumbe del poder napoleónico, la seguridad de que -como decía con vocabulario maquiavélico- «no hay poder más difícil de mantener que el de un príncipe nuevo». El fracaso de Napoleón le interesaba, además, porque veía en la «liga de los republicanos y los aristócratas» que lo había enfrentado una prefiguración de las resistencias que él debía enfrentar desde Caracas hasta Potosí. En particular por los que llamaba jacobinos (secuaces demasiado consecuentes de ideologías a menudo más moderadas que las de la montaña) iba a profesar una aversión destinada a no desarmarse, que recordaba la de su reticentemente admira-

do modelo por los ideólogos: a las tendencias utópicas de éstos contraponía Bolívar su propio realismo, duramente aprendido a lo largo de su carrera de revolucionario. Pero si ese realismo se manifestaba en diagnósticos muy precisos y lúcidos de los problemas hispanoamericanos, las soluciones, buscadas a tientas, no siempre parecían mucho más practicables que la de los republicanos intransigentes; también las repúblicas que Bolívar organizó podrían llamarse, como él llamó burlonamente a las sonadas por sus rivales, «repúblicas aéreas».

En lo político, la solución la encontraba Bolívar en la república autoritaria, con presidente vitalicio y cuerpo electoral reducido; al asegurar un estable predominio a las elites de raíz prerrevolucionaria, ese régimen encontraría, según Bolívar, modo de arraigar en Hispanoamérica. Sobre esas líneas organizó a la república de Bolivia, que le rogó se transformase en su Licurgo; la constitución boliviana fue introducida en 1826 en Perú, en reemplazo de la excesivamente liberal de 1823; como ya era esperable, fue Bolívar el primer presidente vitalicio de Perú. Ese mismo año volvía a Colombia, en la que Páez había levantado a la sección venezolana. Reconciliado con el caudillo llanero, se halló cada vez más distante de Santander, que en su ausencia había intentado sofocar el alzamiento venezolano. Por otra parte, la constitución de Cúcuta, vestigio de una etapa remota de la revolución hispanoamericana, ya no le satisfacía; la convención de Ocaña, convocada para reformarla, incluía, sin embargo, demasiados adversarios del autoritarismo bolivariano, y sus adictos prefirieron retirarse de ella. Entretanto la ruptura entre Bolívar y Santander se había tornado total; el primero achacaba al segundo participar en conspiraciones, el segundo adoptaba progresivamente la posición de defensor intransigente de la legalidad republicana, que en el pasado lo había encontrado menos entusiasta. Finalmente, un pronunciamiento de altos funcionarios y militares dio todos los poderes en Colombia a Bolívar, que los aceptó; unos meses después salvó casi milagrosamente la vida de un atentado organizado por la oposición bogotana.

Mientras tanto su predominio en el Sur se derrumbaba; en Bolivia y en Perú se le identificaba con la presencia de las tropas colombianas, que por su parte estaban fatigadas de su papel de guardianes del orden nuevo en tierras tan remotas. Fueron éstas las que, alzándose en Lima, pusieron fin al régimen vitalicio en Perú; una comisión de vecinos declaró restaurada la constitución de 1823, meses después una constituyente haría presidente de Perú al general Lamar, militar de carrera y realista hasta 1821, que estaba destinado a ser el ejecutor dócil de las voluntades de la mayoría parlamentaria, en que volvían a encontrarse los sobrevivientes de la elite limeña. En Bolivia la posición de Sucre –presidente vitalicio– se debilitó inmediatamente; una revolución que recibió incitaciones de Perú, y en la que participaron algunos de sus subordinados, lo eliminó del poder; un ejército peruano, al mando del general Gamarra (otro antiguo jefe realista), se introdujo en Bolivia para consolidar la victoria sobre el influjo colombiano.

El desenlace fue una guerra entre Perú y Colombia; uno y otro de los adversarios estaban debilitados por la discordia interna (que socavó la organización del ejercito peruano). Luego de unos meses de guerra, y algunas victorias escasamente decisivas de los colombianos, Lamar era derrocado y reemplazado por Gamarra, que contaba con el apoyo del presidente de Bolivia, Santa Cruz, otro de los militares mestizos que, formados en las filas realistas, habían pasado luego a las revolucionarias. Gamarra hizo la paz con Colombia, renunciando a toda pretensión peruana sobre Guayaquil; el sistema bolivariano había perdido así su entero sector meridional. La misma Colombia no sobrevivió al esfuerzo exigido por la guerra peruana: en 1830 Venezuela y Quito volvían a separarse, la primera bajo el comando de Páez, la segunda bajo el de Flores, hasta entonces general leal a Bolívar. El Libertador abandonó el poder, para morir meses después en Santa Marta, de tuberculosis y desesperación. Según su desolada conclusión, querer construir algo en Hispanoamérica había sido como arar en el mar. Sucre, el más fiel de sus secuaces, que un año antes ha-

bía sido asesinado en una celada, había dicho ya lo mismo cuando aún su jefe seguía planeando nuevas construcciones políticas: todas ellas estaban condenadas de antemano, porque los cimientos eran necesariamente de arena y barro...

Esas conclusiones amargas coronan un esfuerzo a la vez grandioso y muy atento a las limitaciones de la realidad. En efecto, Bolívar se había ya desengañado de la posibilidad de cambiar sustancialmente el orden hispanoamericano; aún más que en lo político, en lo económico y social volvió deliberadamente a las prácticas del viejo orden; en Colombia restauró el sistema impositivo colonial, en Perú proclamó, pero no aplicó, la abolición del tributo indígena. Igualmente era Bolívar sensible al nuevo equilibrio mundial de fuerzas en cuyo marco Hispanoamérica llegaba a la independencia, y –contra las tendencias aventureras que llevaban a otros a buscar el apoyo de poderes secundarios y remotos– se manifestaba dispuesto a ganar el apoyo del dominante: con una sinceridad que a otros iba a faltar proclamó una vez y otra que entre las naciones hispanoamericanas y Gran Bretaña se había establecido una relación peculiar, y con el apoyo británico contaba para consolidar ese nuevo orden republicano, que deseaba cada vez más parecido al viejo.

Ese apoyo –muy discretamente otorgado– no iba a faltar a los ambiciosos planes de organización americana de Bolívar; de ellos el más grandioso fue el congreso de Panamá; a este comienzo de liga de los nuevos países americanos –en la que sólo iban a estar presentes los delegados de Colombia, Perú, México y Centroamérica– no iba a seguir, sin embargo, nada; la iniciativa contó desde el comienzo con la hostilidad abierta de Brasil y la apenas disimulada de Buenos Aires y Chile, poco deseosos de incorporarse al sistema bolivariano. Que éste haya contado con la simpatía británica no tiene nada de sorprendente: luego de haber esperado mucho de la ruptura del orden colonial, los intereses británicos tenían motivos para temer que ésta hubiese ido demasiado lejos; una restauración de sus rasgos esenciales no podía disgustarlos. Tampoco les disgusta-

ba el signo republicano que el sistema conservaba: la monarquía, teóricamente preferible, era una aventura aún más riesgosa, que implicaba un acercamiento a las potencias continentales. Nada dañaba a esa simpatía el hecho de que Bolívar se propusiese unificar bajo un influjo a un área muy vasta del antiguo imperio español; se ha visto ya cómo la creencia de que la nueva potencia hegemónica favoreció sistemáticamente la disgregación hispanoamericana carece de fundamento.

Este apoyo no fue bastante para salvar el proyecto bolivariano. ¿Pero por qué fracasaban las tentativas destinadas a romper la fragmentación heredada a la vez de la colonia y la revolución? ¿Por qué fracasó la de Bolívar, que comenzó contando con recursos que nunca volvería a tener ninguno de sus imitadores más tardíos? Retrospectivamente Bolívar iba a declarar imposible su éxito, y junto con él el de toda otra empresa de organización política en Hispanoamérica. Pero no sólo el proyecto bolivariano era -pese a todo su realismo- excesivamente ambicioso: ese realismo era, por añadidura, discutible, en la medida en que se apoyaba en una imagen no totalmente exacta de la realidad postrevolucionaria. En ella impresionaba a Bolívar sobre todo el peso de las supervivencias del antiguo régimen; su realismo consistía en respetarlas para asegurar al nuevo orden base suficiente en comarcas sólo superficialmente tocadas por la revolución. Pero esas supervivencias no se daban únicamente del modo en que las concebía el Libertador: las elites urbanas, a las que buscó ganar entregándoles una parte del poder en las asambleas censitarias, estaban debilitadas por las crisis revolucionarias; las rurales, tocadas por ella en su composición, pero con su poder intacto y aun acrecido, tendían a buscar apoyo en los poderes militares locales, a los que la revolución daba peso decisivo. Bolívar, sin duda, no ignoraba que el orden postrevolucionario era sustancialmente militar; para él, sin embargo, esta característica era efímera, y un orden durable sólo surgiría sobre bases necesariamente aristocráticas cuando, disipada la tormenta, volviesen a aflorar los rasgos esenciales del prerrevolucionario.

El fracaso de Bolívar puede vincularse entonces a este pronóstico errado: contra lo que él creía, las innovaciones aportadas por la guerra de Independencia habían venido para quedarse. Pero se vincula también con una dificultad de orden táctico que no pudo superar: cualquiera fuese su intención a largo plazo, Bolívar se presentaba en Bogotá, en Lima o en Chuquisaca como el representante de ese orden militar con el que no quería identificarse y, por ello mismo, encontraba el recelo de los sectores con los que se proponía compartir el poder; éstos se obstinaban en una oposición a menudo solapada, que encontraba su expresión en ese republicanismo juzgado utópico y, que siéndolo en sus manifestaciones teóricas, era a la vez expresión de fuerzas demasiado bien arraigadas en la realidad. Y los militares en los que Bolívar debía apoyarse se satisfacían cada vez menos con su papel de instrumentos de gobierno destinados a ser mediatizados en el futuro; por otra parte, mantenerse en ese papel les exigía sacrificios demasiado prolongados: significaba, por ejemplo, que las tropas colombianas debían permanecer indefinidamente guardando el orden en comarcas distantes algunos miles de kilómetros de su tierra de origen. No es extraño entonces que en casi todas partes los adversarios y los sostenes de Bolívar se hayan entendido para librarse de la tutela del Libertador; en Perú es la unión de la oposición, a la vez oligárquica y principista, y unos cuantos generales dispuestos a fructuosas transacciones lo que pone fin al ensayo boliviano; en Colombia el legalista Santander y el personalista Páez se reconcilian luego de ese derrumbe que han contribuido por igual a provocar: ese vasto sector de la Hispanoamérica postrevolucionaria, que va desde Caracas hasta Potosí, está comenzando un duro aprendizaje: el de la reconciliación consigo mismo, a partir de la cual podrá ir descubriendo los rasgos todavía secretos del orden postrevolucionario, distinto a la vez del antiguo y del imaginado en los días esperanzados de 1810.

También en el marco más estrecho proporcionado por los nuevos estados la ilusión (que se juzgaba desengañada, pero a

menudo implicaba un infundado optimismo) de que el retorno a un orden parecido al viejo era posible iba a revelarse falaz. Si en casi todas partes estos ensayos de restauración se tradujeron en rápidos fracasos, a los cuales siguió su abandono definitivo, fue en **México** donde, por el contrario, ocuparon buena parte de la primera etapa independiente. Esto no es extraño: en México los últimos tiempos coloniales habían sido aún más prósperos que en el resto de Hispanoamérica, y por otra parte la independencia se había logrado sin que perdieran la supremacía local los que a lo largo de la lucha por ella habían sido sostenes del orden colonial. El conservadurismo mexicano se transforma en el refugio de todos cuantos han sufrido resignadamente la disolución del viejo sistema. Sin duda, el imperio de Iturbide, solución demasiado personalizada a los problemas de la transición a la independencia, se derrumba sin contar con más vivo apoyo de los que serán conservadores que de los futuros liberales. La caída del régimen imperial es fruto de la acción del ejército, convocado por el pronunciamiento de un todavía oscuro jefe veracruzano, Antonio López de Santa Anna, seguido bien pronto no sólo por los oficiales surgidos de los movimientos insurgentes, sino también por muchos de los antiguos realistas, descontentos por la indiferencia con que el emperador, decidido a tomar distancias frente a sus antiguos colegas y limitado en su generosidad por la ruina del fisco, atiende a sus requerimientos. La gravitación del ejército, al que las guerras de independencia han dejado en herencia un demasiado nutrido cuerpo de oficiales y una función inexcusable de guardián del orden interno, se revela decisiva. A la caída del primer imperio sigue la convocación de una constituyente y la elección como presidente de Guadalupe Victoria, que pese a sus inclinaciones liberales intentará guardar un cierto equilibrio frente a las facciones cuya hostilidad crece progresivamente.

En la constituyente y fuera de ella, dos partidos se dibujan: los que ahora se llaman escoceses y los yorkinos. Los primeros, conservadores, tienen su organización apenas secreta en

la logia masónica escocesa, que cuenta con el patrocinio del ministro británico; los segundos, liberales y federalistas, la tienen en la que se ha establecido como filial de la de Nueva York bajo los auspicios del cónsul de Estados Unidos.

Gracias al flujo de capitales de que México aprovechará con preferencia a cualquier otro país hispanoamericano, y que vitaliza con un flujo de libras esterlinas no sólo al insaciable fisco postrevolucionario, que se transforma en deudor de inversionistas de Londres, sino también la minería deshecha por la guerra, los escoceses creen posible una reconstrucción político-social en que Gran Bretaña ocupe el papel análogo al de España, y la aristocracia minera y terrateniente criolla y la mercantil española se reconcilien para apoyar en todo vigor el nuevo orden.

Sin duda, ese orden nuevo será en algunos aspectos distinto del viejo: el ministro británico Ward, que está muy cerca de ese partido, señala que el México independiente deberá seguir importando más que el colonial, puesto que su producción artesanal textil no puede competir con la importada; encuentra la solución en una expansión de la agricultura en tierras calientes, que cree nuevos rubros exportables a ultramar y permita equilibrar la balanza comercial. Pero también para él lo primero en orden de urgencia es restaurar la minería y ordenar las finanzas públicas: sólo la primera, una vez devuelta a la prosperidad, puede ofrecer capitales para la expansión agrícola, y esos capitales buscarán más seguramente ese camino cuando un estado indigente no le ofrezca otro más lucrativo en lo inmediato en la forma del agio, que florece en México como en otras comarcas hispanoamericanas.

Los aliados mexicanos del agudo diplomático no dejaban de tomar en cuenta otros cambios. Eran en primer lugar más sensibles a los derrumbes provocados por la guerra en los sectores dirigentes: para ellos la emigración de los más ricos mercaderes españoles, luego de 1821, no era sólo importante por los más de cien millones de pesos en metálico que según era común creencia se habían llevado consigo: significaba, por

añadidura, un grave debilitamiento de una clase alta ya excesivamente minoritaria. Eran igualmente sensibles a la mayor autonomía de acción de que la experiencia revolucionaria había hecho capaces a los sectores populares; frente a esta innovación, en la que se advertía sobre todo el peligro siempre posible de un violento desborde plebeyo, los escoceses tendían a contemplar con indulgencia el peso creciente del ejército en las finanzas mexicanas. En cambio, eran menos comprensivos frente a las apetencias de esos sectores medios que, en la capital y en las ciudades de provincia, esperaban ubicarse en las estructuras administrativas del nuevo estado. Ward, que como ellos veía en esas apetencias el sentido último del federalismo, aconsejaba recogerlas; el precio que con ello se pagaría por la paz era en suma moderado. Los escoceses no estaban tan seguros; en la proliferación de políticos de clase media veían no sólo una carga para el fisco, sino aún más un riesgo de radicalización política.

Y no se equivocaban; el liberalismo terminó por hacer suya una exigencia a la vez más popular y disruptiva que la federal: era la expulsión de los españoles peninsulares. Sin duda –tal como objetaban sus adversarios– los más ricos se habían marchado ya; quedaban sobre todo pequeños hacendados y comerciantes de aldea en los que era imposible ver un peligro político. Pero precisamente eran esos españoles menos prósperos los más aborrecidos por la plebe, que tenía contacto directo y cotidiano con ellos. La agitación en favor de la expulsión de los españoles devolvía a la escena mexicana a esa plebe que los herederos de la independencia habían mantenido cuidadosamente al margen; la convocaba a la acción en favor de un proyecto que significaba el despojo de algunos relativamente ricos en favor de otros más pobres; el retorno a un desorden generalizado, animado por un recrudecimiento de las tensiones entre los que tenían y los que no tenían, parecía el desenlace esperable de esa campaña iniciada por los liberales. Pese a que éstos logran imponer la expulsión (que estará lejos de cumplirse por entero) enfrentan desde entonces una opo-

sición tenaz de los escoceses transformados –nota complacido Ward– de una pura facción política en la unión de todos los que tenían algo que perder.

Fruto de esa unión fue el conservadurismo mexicano, surgido de una ampliación de la facción escocesa. Nostálgico del pasado, de esa época de oro en que la prosa persuasiva de Lucas Alamán –el más lúcido jefe del conservadurismo mexicano, y el más desconsolado historiador de esta catástrofe que fue la revolución– transforma a la era de las reformas borbónicas, el conservadurismo había aceptado ya –y no sólo al resignarse a la hegemonía militar– algunas de las consecuencias de esa revolución aborrecida. Consciente de la democratización producida, temeroso de sus consecuencias, busca en la Iglesia apoyo contra ellas, pues ve en esa institución la única capaz de disputar la orientación de la plebe mestiza e india a los agitadores liberales. El resultado es que el conservadurismo es mucho menos ilustrado que su modelo colonial: se opone tenazmente a los avances de la tolerancia religiosa y a los de la desamortización que amenaza a la propiedad eclesiástica, no tocada hasta entonces por la revolución.

El partido conservador cree llegada su hora en el momento de designarse reemplazante para Guadalupe Victoria; en el colegio electoral lograr imponer contra el candidato liberal Vicente Guerrero a su oscuro candidato. En vano: Santa Anna se pronuncia y es rápidamente imitado; Guerrero es, a pesar de todo, presidente. Le toca enfrentar una tentativa –pronto fracasada– de reconquista española; en 1830 su vicepresidente, Bustamante, persuade al ejército de que destituya al presidente liberal, que será ejecutado ante el horror de una opinión pública que no podía dejar de respetar en la víctima a uno de los paladines de la lucha por la independencia. Durante dos años gobierna Bustamante, asesorado por Lucas Alamán, y ambos, luchando como luchan por la supervivencia, deben dejar que el ejército consuma lo que el fisco tiene y lo que no tiene. De nuevo es en vano: en 1832 se pronuncia finalmente, desde su finca de Manga de Clavo en Veracruz, el general San-

ta Anna. Al año siguiente es presidente; en su nombre gobiernan el vicepresidente Gómez Farias y un congreso liberal, que se lanza primero sobre los privilegios del clero y luego sobre los del ejército. Santa Anna reaparece entonces; este *Deus ex machina* de la política mexicana expulsa a los liberales y se constituye en garante del orden conservador, que restaura. Con un precio, desde luego: los conservadores deben respetar el lugar del ejército en la vida mexicana (un lugar que, entre otras cosas, le otorga más de la mitad de las rentas del Estado).

En 1836, guerra de Texas: los colonos del sur de Estados Unidos que allí se han instalado y han sido bien recibidos por las autoridades mexicanas, no aceptan el retorno al centralismo que está en el programa conservador. Santa Anna corre a someterlos: tras de vencer la resistencia del Alamo es deshecho en San Jacinto. La independencia de Texas es un hecho, pero no es reconocida por México, contra el consejo de Alamán, que deseaba ver surgir allí un estado independiente y protegido por Gran Bretaña, capaz de hacer barrera al avance expansivo de Estados Unidos.

En 1838 Santa Anna, retirado a Manga de Clavo, reconquista su prestigio en otra guerra -igualmente perdida- contra Francia, que exige indemnización cuantiosa por daños sufridos por su súbditos con motivo de las luchas civiles mexicanas. La obtendrá, pero Santa Anna, a quien una bala de cañón naval francés ha arrancado una pierna, se transforma en símbolo de una resistencia tan inútil como heroica. Así, devuelto a su papel de garante del orden conservador, siguió gravitando hasta que la guerra con Estados Unidos, estallada en 1845, le devolvió a su papel alternativo de jefe militar, llamado ahora por los liberales moderados, a los que la coyuntura acababa de devolver el poder. La guerra era el desenlace de toda una etapa de la política estadounidense; si se produjo tan tarde fue porque el Norte no deseaba fortalecer al bloque esclavista con un nuevo estado, incorporando a Texas; ahora el avance hacia el Oeste anticipaba la posibilidad de equilibrar la anexión de Texas ampliando la masa de botín con otros terri-

torios destinados a quedar libres de la institución peculiar del sur norteamericano.

La guerra fue demasiado fácilmente ganada por Estados Unidos; esa victoria se explica, en parte, porque el ejército mexicano no había sido organizado como instrumento de combate en guerras internacionales, en parte porque en México las disensiones dejadas por decenios de lucha facciosa estaban lejos de haberse apagado. En todo caso, la derrota -que tuvo, pese al heroísmo de los defensores de la capital, su punto culminante en la toma de ésta- pareció despertar las tensiones mal acalladas por el orden conservador: levantamientos indios en el Norte, guerra de castas en el Yucatán, donde la ampliación de los cultivos de azúcar estaba privando de tierras a los indios mayas mal pacificados. La paz parecía aún peor que la guerra: México perdía en 1848 la mitad de su territorio en beneficio de su vencedor. A pesar de tanta ruina, los conservadores lograban conservar el poder; su jefe intelectual, Alamán, que por esos años estaba trazando su negro cuadro del México postrevolucionario, en que distribuía generosamente culpas a todos menos a su propia facción (que lo había gobernado durante casi toda esa etapa), soñaba una regeneración definitiva en la religión y la monarquía. Mientras ésta se alcanzaba, una mano fuerte era necesaria para frenar el inquietante despertar liberal: era, muy previsiblemente, la de Santa Anna. Vuelto del destierro, éste resolvió temporariamente sus problemas financieros vendiendo nuevo territorio a Estados Unidos por diez millones de dólares. Inútilmente: al año siguiente estallaba una nueva rebelión liberal, muy distinta de los episodios militares que habían llenado la historia reciente. Con ella moría el México de Alamán y Santa Anna, el de los conservadores amigos del orden en alianza con el organizador del desorden.

La historia de esa etapa mexicana ha sido narrada una vez y otra: deliciosamente incongruente, llena de salvaje colorido (su episodio más brillante es el entierro solemne de la pierna de Santa Anna, con el ilustre héroe presidiendo el duelo), puede servir para hacer de ella un relato brioso. Menos fácil es en-

tenderla. Santa Anna es un aventurero que no engañó mejor a sus contemporáneos que a los historiadores dispuestos a divertirse con él; Alamán y Gómez Farias, que se disputaron su favor, que al hacer de él el interlocutor favorito de los políticos dentro del ejército confirmaron su predominio sobre éste, eran, por el contrario, reflexivos observadores de la situación mexicana, y políticos consecuentes con sus ideas. Quizá era precisamente esa integridad ideológica la que los obligaba a transacciones tan chocantes con la realidad; ni en el programa conservador ni en el liberal el ejército, tal como lo había creado la guerra revolucionaria, tenía lugar legítimo; por lo tanto, los acuerdos con él se hacían en un plano en el cual el voluble Santa Anna se movía mejor que nadie. ¿Pero por qué el acuerdo con el ejército era necesario? Sin duda porque conservaba un inmenso poder, herencia de la guerra. Pero también porque ese poder seguía siendo necesario para mantener el orden interno. Por añadidura, porque lo mantenía demasiado bien, y para los liberales el camino al gobierno parecía ser un acuerdo con el ejército y no la rebelión popular, cada vez más difícil a medida que las convulsiones de la segunda década del siglo se alejaban y el orden se afirmaba mejor en México.

El orden conservador había logrado entonces el más inmediato de sus objetivos: durar. Pero ése era también el único que había alcanzado: en 1850 México no había logrado retornar a los niveles de su economía colonial; las finanzas públicas, afectadas por una contracción económica al parecer insuperable y por las exigencias de un ejército nunca saciado, hacían del Estado el deudor eterno de agiotistas locales, antes de comenzar a serlo en gran escala de acreedores internacionales. La vuelta al antiguo régimen, remozado por el contacto con las nuevas metrópolis, era imposible, y hacia 1850 la restauración conservadora no había logrado eliminar uno solo de los males contra los cuales sus voceros se habían elevado elocuentemente desde un cuarto de siglo antes.

En suma, el México conservador fracasaba por falta de una dirección homogénea; porque además eran demasiadas las

dificultades de esta zona, antes tan próspera para adaptarse al nuevo orden abierto con la independencia, que le era desfavorable. En efecto, la guerra había destruido el sistema de explotación minera; si los hombres que le había arrebatado podían ser devueltos o reemplazados, no ocurría lo mismo con las destrucciones materiales, que eran considerables. La guerra había producido un daño aun mayor, aunque indirecto, al hacer desaparecer los capitales cuya relativa abundancia era uno de los secretos de la expansión minera mexicana en la segunda mitad del siglo XVIII. Esos capitales, en parte consumidos por la guerra, en parte retirados a España a partir de 1821, hubieran sido imprescindibles para que la producción minera mexicana retomara su ritmo; en la restauración parcial que siguió a 1823, el papel del capital británico –sin embargo de volumen tan insuficiente– fue decisivo. La necesidad de ese aporte de capital es peculiar de la minería (la agricultura o la ganadería lo requieren en menor escala) y explica que México haya tardado tanto –por falta de él– en reconstruir su economía; explica también que los conservadores mexicanos, conscientes desde muy pronto de la necesidad del aporte de capital ultramarino, hayan mostrado una apertura hacia el extranjero que era excepcional entre los hispanoamericanos de esa tendencia y, que por otra parte, no siempre se compaginaba bien el misoneísmo y el intolerante tradicionalismo religioso que gustaban de ostentar. Pero esa apertura a la colonización económica de las nuevas metrópolis iba también ella a fracasar, y su fracaso es una de las causas del derrumbe conservador en México.

Desarrollos análogos, marcados por el estancamiento económico y la incapacidad de hallar un estable ordenamiento político, encontramos en las otras tierras hispanoamericanas de la plata, ahora divididas entre la república de **Perú** y la de **Bolivia.** Aquí el cuadro es aún más complicado, porque las elites sobrevivientes están necesariamente desunidas: los herederos de la Lima comercial y burocrática, los de los centros mineros

del Alto Perú, los hacendados ricos sólo en tierras que dominan la sierra desde el Ecuador hasta la raya de Argentina, los hacendados de la costa peruana, muy ligados a la fortuna comercial de Lima y golpeados por la quiebra de una agricultura de regadío y de mano de obra esclava... Y frente a ellos un personal militar que sirve alternativamente en el ejército de Perú y el de Bolivia, y está destinado a tener decisivo papel.

Mientras tanto Perú no sale de su marasmo. La crisis de la minería no termina con la guerra; la del comercio limeño es agravada por la aparición de núcleos rivales desde Valparaíso hasta Guayaquil. La agricultura de la sierra y el altiplano prosigue su desarrollo aislado; los cambios económicos de la revolución la tocan poco, los político-jurídicos también, desde que ha fracasado -en Perú como en Bolivia- la abolición del tributo y la división de las tierras indígenas de comunidad. Sin duda éstas comienzan a ser más velozmente roídas por los avances de la propiedad privada -de caciques hacendados que amplían sus tierras- pero sustancialmente resisten a esos avances. La perduración del tributo, la de los servicios personales, no pueden extrañar: debido a la crisis de la minería, cerca del 80 por 100 de los ingresos fiscales de Bolivia provienen -entre 1835 y 1865- de la capitación de los indígenas; en comarcas en que la parte de la economía de mercado ha disminuido resulta imposible utilizar el trabajo libre donde antes se recurría al forzado.

Esa región, que parece condenada a la decadencia, se presta mal a recibir un orden estable. En Perú, caído Lamar, gobierna Gamarra, y junto con él su esposa, una mestiza nacida en una aldea cuzqueña, extremadamente impopular entre la aristocracia limeña, capaz, en cambio, de evocar con éxito, ante una tropa rebelada, la solidaridad que esos soldados de sangre mezclada deben a un presidente también mestizo. Pero las divisiones del ejército perduran, la hostilidad de una oposición a la vez aristocrática y republicana no desarma. Caído Gamarra, la lucha por la sucesión permite reaparecer en la escena peruana a Andrés Santa Cruz, presidente de Bolivia,

que no ha dejado de interesarse en la política del Estado vecino, ha utilizado a Gamarra contra Lamar y ahora lo cuenta de nuevo entre sus agentes. Santa Cruz impone la unión de Perú y Bolivia; en 1836 nace la Confederación peruano-boliviana, en la que los poderes se concentran en el protector. Santa Cruz intenta ejercer, en ese marco más amplio, el mismo autoritarismo renovador que lo caracterizó en Bolivia: su dictadura reforma la administración y la justicia, reorganiza el sistema de rentas... Por un momento parece encarnar el modelo del gobernante hispanoamericano preferido por los poderes europeos; el papa, la monarquía de Julio, la diplomacia británica coinciden en otorgar su aplauso a esa experiencia. Esos remotos apoyos se revelan muy insuficientes: Santa Cruz tiene contra sí a Lima, a la que ha despojado de toda esperanza de predominio. Tiene contra sí a los que ha perjudicado con sus reformas, desde los magistrados a los funcionarios y comerciantes que se consagraban al fraude a la aduana. No tiene en su favor a los sectores populares, menos tocados que en México por la movilización revolucionaria, y perjudicados por una política que aumenta en lo inmediato el peso del fisco, y a largo plazo revela la intención de deshacer la comunidad de tierras indígenas en favor de propietarios individuales, que no se reclutarían precisamente entre los comuneros. Hacer en Perú y Bolivia un Estado moderno es, en suma, una operación demasiado onerosa, que deja indiferentes a los de arriba como a los de abajo. Esa empresa se identifica, además, con una glorificación personal del Protector, que si encuentra la burla despiadada de las elites urbanas (que no pueden olvidar que éste es hijo de una cacica india) agudiza rivalidades aún más peligrosas entre los jefes militares.

Por último, la tentativa de Santa Cruz enfrenta la oposición de sus vecinos. En la Confederación Argentina, salida a duras penas de la guerra civil, y también en Chile, Santa Cruz fomenta la acción de los opositores; frente a ambos países toma medidas destinadas a devolver a los territorios reunidos en la Confederación su viejo predominio; en particular es la hege-

monía comercial de Valparaíso en el Pacífico sudamericano la que se ve amenazada. Chile se lanza a la guerra en 1837; una primera expedición contra Perú fracasa, pero le sigue en 1839 otra, que tiene éxito. En las filas de los invasores son numerosos los peruanos desafectos: a más de un sector de jóvenes aristócratas de Lima, que buscan lo que llaman la regeneración, es decir, un poder no compartido con los rudos generales de la sierra, más de uno de éstos se les ha unido contra el más poderoso de todos. Con decepción de los regeneradores limeños, Chile no se inclina por ellos, sino por Gamarra, que vuelto así al poder en 1841, lleva la guerra a Bolivia y es derrotado. En el vacío que crea su derrota los regenadores hacen finalmente su tentativa de alcanzar el poder; en Vivanco, el general aristócrata, satisfactoriamente blanco, encuentran su paladín, para fracasar junto con él: Ramón Castilla, hijo de un ínfimo burócrata peninsular y de una india, será quien logre la reconciliación de las facciones peruanas, pero si tiene éxito donde otros fracasaron es porque algo ha cambiado en Perú; ha quedado atrás el período de la penuria de Lima y la indigencia del Estado, que para sobrevivir depende de la capitación indígena que los jefes de guarniciones de la sierra pueden retener a su capricho: el guano, y más generalmente el cambio de la coyuntura económica mundial introducen a Perú, a mediados de siglo, en una nueva época, en que las elites urbanas podrán desquitarse de sus pasadas postergaciones y recomenzar la conquista del Estado.

Esa época no ha de llegar para Bolivia hasta mucho más tarde. Caído Santa Cruz, es su antiguo auxiliar, el general Ballivián, que lo abandonó en la undécima hora, quien –tras de vencer a Gamarra y asegurar la independencia boliviana– continúa su obra de modernización administrativa. En 1848 el resultado de un sucederse de revoluciones fue el ascenso a la presidencia del general Belzú, que por primera vez empleó en Bolivia la apelación a las clases populares como recurso político; aunque en la acción el nuevo presidente no se muestra muy lejos de sus predecesores, ese rasgo significa una innovación

importante en la vida política boliviana: el ingreso en ella, por lo menos como masa de espectadores impacientes, de la plebe mestiza de las ciudades (en particular de La Paz, donde funcionaba el Gobierno y donde la vuelta de la economía altoperuana a su orientación hacia el Pacífico había colocado el núcleo mercantil del altiplano). Pero, como viene ocurriendo desde 1825, la economía boliviana vive un estado de marasmo: el recurso empleado por un fisco en quiebra al acudir a una disminución del tenor de la moneda de plata (que será ahora mal recibida en tierras vecinas) hace aún más difícil a este país, al que le están faltando productos exportables, mantener las corrientes de comercio internacional. A mediados del siglo la quina parece ofrecer algún alivio, y su exportación -monopolio del Estado- beneficia a éste y a la casa concesionaria, perteneciente a una familia de vieja aristocracia paceña; no basta, sin embargo, para cambiar los datos esenciales de la economía boliviana.

No es extraño que el nuevo orden político arraigue mal en tierras que no han podido encontrar su lugar en la Latinoamérica deshecha por la revolución y lentamente vuelta a rehacer en medio de una coyuntura desfavorable. En otras partes, soluciones políticas más adecuadas a esa nueva coyuntura logran imponerse de modo más sólido.

Aun en ellas, sin embargo, la conquista de un orden estable se revela extremadamente difícil. La dificultad deriva, en parte -se ha visto ya-, de la vigencia de un nuevo clima económico, que no favorece a quienes dominaron economía y sociedad antes de 1810. Pero surge también de que el elemento que actúa como árbitro entre esos dirigentes urbanos y mineros, los de las zonas rurales de economía semiaislada, la plebe urbana que comienza a hacerse escuchar (mientras la rural no ha sido despertada en tierras peruanas por la revolución, y en las mexicanas ha sido brutalmente devuelta a la sumisión), es un ejército también él no suficientemente arraigado en el nuevo orden: sólo paulatinamente los jefes veteranos de la revolución, a los que a veces el azar de su último destino ha dado

influencia en una región a la que no pertenecen por origen, establecen vinculaciones con sectores cuyo poderío local ha sido favorecido por el cambio de coyuntura, y llegan a identificarse con ellos. Hasta entonces la intervención de los generales -y de sus tropas, a menudo ajenas también ellas a la región- se da al azar de las coincidencias entre las oposiciones que se dan dentro de la sociedad civil y las rivalidades entre jefes militares. Esa situación es consecuencia del modo particular en que México y Perú han vivido la lucha de independencia: en México ésta fracasó hasta que sus adversarios retomaron sus banderas políticas para mejor combatir sus aspiraciones en otros órdenes; en Perú se resolvió en la conquista del país por ejércitos venidos del Sur y del Norte. En otras regiones hispanoamericanas el orden nuevo iba a surgir, sobre todo, del juego de las fuerzas internas; si esto no era garantía de una evolución invariablemente pacífica, sí era condición favorable para que en algunos casos ésta se diera.

Entre los estados sucesores de la Gran Colombia, encontramos en uno de ellos una situación comparable a la peruano-boliviana: es **Ecuador,** que recoge con nombre nuevo el patrimonio territorial de la antigua presidencia de Quito. En este marco, más pequeño que el del vasto Perú, la línea de desarrollo es más sencilla: los que hacen de árbitros en la vieja y siempre vigente oposición entre la elite costeña -plantadora y comerciante- y la aristocracia de la sierra (dominante sobre una masa indígena vinculada sobre todo por el peso de las deudas heredadas de padres a hijos, y apenas tocada por los cambios revolucionarios) son militares que permanecen extranjeros a Ecuador: los venezolanos de Flores, que constituyen un cuerpo extraño hasta que sus jefes principales comienzan a tallarse dominios territoriales en la Sierra. Flores es presidente en 1830; enfrenta la oposición de la costa, encarnada en Vicente Rocafuerte, un patricio de Guayaquil, con el que se reconcilia misteriosamente, luego de una lucha civil, en 1834. Rocafuerte y Flores comparten el poder y se suceden en la presidencia;

lo que los ha unido es, al parecer, el temor de que la lucha interna haga estallar la unidad política ecuatoriana: ni Guayaquil, que, incorporado a Perú, vería sacrificados sus intereses a los de Lima, ni los militares venezolanos -que, anexada la sierra a Colombia, perderían su preeminencia en ella- pueden favorecer un desenlace que sólo es visto con favor por algunos magnates serranos, fatigados de sufrir el gobierno de los «jenízaros negros» llegados desde Venezuela para quedarse.

A esa alianza la costa imprime su actitud más abierta e innovadora; Rocafuerte, un veterano del liberalismo mexicano a quien el derrumbe de éste ha devuelto a su tierra nativa, durante su presidencia y luego de ella, anima un esfuerzo de modernización administrativa que hace de Ecuador, visto a distancia, uno de los países que enfrentan con éxito las exigencias de la hora nueva. Desde más cerca, esa modernización se revela extremadamente superficial; si la economía de la costa, cuyas posibilidades de exportar no han disminuido, se recupera con relativa rapidez de los trastornos -por otra parte escasos- que la revolución aportó, en la sierra un orden de herencia colonial no es sustancialmente tocado; al irse apagando las tensiones entre viejos y nuevos señores de la tierra serrana, la gravitación de ésta se hará sentir progresivamente, en la década del cuarenta la solución descubierta en 1834 agota sus posibilidades, y no deja en herencia a Ecuador las bases de un orden sólido.

Nueva Granada y **Venezuela,** al revés de Ecuador, ya desde 1830 se liberan de la influencia de elementos de origen extraño. La disolución de la Gran Colombia devuelve a Santander el poder en Bogotá; ya entonces se afirma el influjo militar del general Mosquera, que será dominante durante esta entera etapa, marcada por el avance paulatino del conservadurismo neogranadino. En sus comienzos el régimen, que tiene rasgos de duro autoritarismo, retoma frente a la Iglesia la tradición colonial; la quiere gobernada por el poder civil. Esta exigencia es abandonada a medida que la normalización de las relaciones con Roma hace sentir sus efectos en la Iglesia colombiana;

a mediados de la década del cuarenta ésta entra a integrar el sistema conservador en sus propios términos. Colabora así en una empresa de modernización cautamente llevada adelante; en particular domina el nuevo sistema de enseñanza elemental y los ensayos de enseñanza media y superior.

El orden conservador se apoya sobre todo en ciertas regiones neogranadinas: la franja montañosa del sur, que ha resistido tenazmente a la revolución, pero también al valle del Cauca, en cuyo curso medio e inferior los comerciantes y terratenientes de Antioquía no muestran aún el dinamismo económico que los caracterizará luego, pero ya sí un conservadurismo político y tradicionalismo religioso igualmente marcados. Frente al bloque conservador, la costa atlántica es hostil al orden establecido, que ha perjudicado a sus clases mercantiles. En Bogotá hay también una tenaz oposición liberal; esa ciudad, crecida gracias a sus funciones políticas, reúne una turba de empleados mal pagados y una elite cuyos hijos quieren vivir al ritmo del mundo, y se preguntan si la solución política adoptada por Nueva Granada sería juzgada suficientemente moderna en París, con un sector de artesanos capaces de capitanear en momentos confusos a turbas de plebe descontentas, y descontentos ellos mismos con los avances del comercio externo, que aunque esencial es para asegurar la salida de los frutos de los terratenientes ganaderos de la sabana (los cueros, que comienzan por dominar las exportaciones de la Nueva Granada independiente) e igualmente para la prosperidad de la agricultura de exportación, condena, en cambio, a lenta ruina a las artesanías locales. Esos descontentos, basados en razones a menudo contradictorias, se unen en una oposición que, pese a llamarse liberal, acepta mucho de las tendencias del orden conservador: sólo le reprocha su adhesión a un catolicismo cada vez más militante en la oposición al espíritu del siglo y a la vez la timidez con que emprende el camino de la modernización. Pero de la etapa conservadora son las primeras tentativas de navegación a vapor en los ríos neogranadinos y de construcción de ferrocarriles, y el ritmo a

menudo lento de los desarrollos futuros mostrará que el éxito limitado de esos ensayos no puede achacarse solamente a la timidez del régimen conservador.

Nueva Granada presenta por esos años, como se ve, un modelo político para tierras más agitadas. ¿Cuál es el secreto de este éxito, relativo pero indudable? Notemos en primer término el papel relativamente secundario del ejército neogranadino; en segundo lugar, la existencia de fuertes diferenciaciones regionales, que está lejos de ser tan sólo un factor de inestabilidad, puesto que gracias a ella se da una fragmentación de esa clase alta –que tiene un cuasi monopolio del poder político– en grupos locales relativamente indiferentes a la marcha de la política nacional mientras ésta no afecte ni su preeminencia local ni sus intereses concretos. Esas divisiones regionales son todavía de otra manera un factor de cohesión: crean vínculos entre las aristocracias y los demás sectores sociales de las distintas regiones, particularmente importantes en Nueva Granada porque la población rural mestiza no es tan pasiva ni está tan sometida como en las tierras andinas más meridionales. La ferocidad de las guerras civiles que Nueva Granada conocerá a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las cifras insólitamente altas de caídos en ellas, revelarán de nuevo a su modo esa solidez mayor del cuerpo político, en la medida en que éste está dispuesto a movilizarse para esas luchas con una amplitud que sería impensable, por ejemplo, en Perú.

En 1830 el pronóstico sobre el futuro político venezolano habría debido ser acaso más pesimista que respecto del neogranadino. Arrasada por la guerra, que fue allí particularmente feroz, con sus aristocracias costeñas arruinadas y entregadas al dominio de ejércitos formados por mestizos llaneros y mulatos isleños, Venezuela parece condenada a una extrema inestabilidad. El rumbo es otro: bajo la égida de Páez, presidente durante largas etapas, y de otros jefes militares de la independencia, lo que se da es una reconstrucción económica y social sobre líneas muy cercanas a las del orden prerrevolu-

cionario. La posibilidad de exportar a un mercado ampliado permite la expansión productiva en la costa: en 1836 se sobrepasan los niveles de exportaciones inmediatamente anteriores a 1810, y desde entonces el proceso ascendente prosigue por unos años; la economía venezolana, apoyada ahora en el café antes que el cacao o el azúcar, sufre, sin embargo, con la crisis de precios en la década siguiente.

El orden conservador comienza entonces a mostrar sus quiebras. En primer lugar, el retorno a un orden semejante al colonial hace nacer tensiones muy duras: los beneficiarios del sistema son grandes comerciantes que se reservan lo mejor del negocio cafetero y grandes propietarios, que en el litoral intentan rehacer una economía de plantación devolviendo a la esclavitud a los negros emancipados a todo pasto durante las guerras de independencia, y en los Llanos buscan imponer una más estricta disciplina de trabajo para utilizar en pleno las posibilidades abiertas a la exportación de cueros. Sin duda, la revolución ha introducido nuevos miembros en los sectores privilegiados: son los jefes militares que ahora gobiernan a Venezuela; Páez, antes capataz en una hacienda llanera, es ahora gran propietario de tierras, y no es el único... En cambio, los soldados veteranos no ven facilitado el acceso a la tierra que le fue prometido; las que se les distribuyen suelen venderlas (Páez las compró en abundancia a sus soldados, a precio muy bajo) o perderlas cuando el legalismo retrospectivo de la república conservadora anule las confiscaciones que perjudicaron en el pasado a los realistas.

A mediados de la década del cuarenta, los descontentos se acumulan; el que primero se hace sentir es el de algunos de los beneficiarios del sistema; algunos grandes señores de Caracas, devueltos a la prosperidad, se fatigan de ocupar políticamente el segundo lugar tras de los rudos generales de la revolución, y organizan una oposición liberal, a la que un periodista de talento, Antonio Leocadio Guzmán, hace extremadamente popular entre la plebe caraqueña. Pero la protesta liberal no se limitará, finalmente, como en otras partes de

Hispanoamérica, a la ciudad: la campaña, con sus ex soldados fugitivos o mal adaptados a una disciplina de trabajo cada vez más rígida, con sus cultivadores que tienden a ver en la aristocracia mercantil a la causante única de su ruina (en verdad ésta se ha limitado a descargar el peso de la crisis sobre los agricultores), presenta tensiones aún más serias que las de la ciudad, y en una y otra se anuncia a través de múltiples signos un futuro menos sereno que los años de consolidación del orden postrevolucionario.

En **América Central** las dificultades hubieran debido ser acaso menores: esta tierra no conoció revolución ni resistencia realista; pasada en 1821, junto con México, de la lealtad a Fernando VII a la independencia, se separó de su vecino del Norte a la caída de Iturbide, a quien seguían fieles los jefes de las guarniciones del antiguo ejército regio acantonadas en la capitanía de Guatemala. Surgen así las Provincias Unidas de América Central: destinadas a vida breve y azarosa, son desgarradas por la lucha entre liberales y conservadores, que se superpone a la oposición entre Guatemala –tierra de economía semiaislada y población india, dominada por una minoría española de estilo señorial– y El Salvador, rincón que proporciona la mayor parte de las exportaciones ultramarinas de Centroamérica (el primer rubro de ellas sigue siendo el índigo), de propiedad más dividida y población mestiza. Los liberales, acusados de querer gobernar la vida eclesiástica, se han propuesto crear un obispado en San Salvador, y quieren llevar allí la capital... Bajo la jefatura de Morazán dominan la política centroamericana; en 1837 una rebelión en la sierra guatemalteca revela la presencia de un jefe temible, Rafael Carrera; los aristócratas de la ciudad de Guatemala llaman contra él al aborrecido Morazán, que fracasa. Carrera conquista Guatemala, la separa de la unión centroamericana y la gobierna en alianza con los conservadores; el jefe de la plebe rural de color se transforma en columna del orden, y a cambio de ello recibe el gobierno vitalicio de la República de Guatemala, salvada

por él para la fe verdadera. En algunos puntos el caudillo mestizo se muestra más dúctil que sus aliados de la aristocracia terrateniente: recibe con cordialidad a los extranjeros, aun a los heréticos ingleses y estadounidenses. La pérdida de Guatemala deshace a la confederación: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se constituyen en diminutos estados republicanos; por el momento -salvo en Costa Rica, donde, como se ha dicho, está comenzando la expansión del café- poco ha cambiado en esos despoblados rincones del imperio español. En Guatemala -donde Carrera domina hasta su muerte la escena- la alianza entre aristocracia tradicional y poder militar adquiere matiz original porque este poder es el de una milicia improvisada, desvinculada de las tradiciones militares coloniales o revolucionarias, y su jefe proporciona acaso el ejemplo más extremo de *homo novus* llevado al poder por la militarización postrevolucionaria.

En el extremo sur de Hispanoamérica el **Río de la Plata** sufre una evolución compleja, por el momento más rica en fracasos que en éxitos duraderos. El **Paraguay** comienza su vida independiente en una experiencia cuyos rasgos extremos le gana la atención curiosa de observadores europeos: luego de ser gobernado por un efímero triunvirato, el país cae en 1812 bajo el dominio del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia; este abogado de la universidad de Córdoba, hijo de un comerciante portugués, impone una férrea dictadura y aísla Paraguay de sus vecinos, cuyas turbulencias juzga un ejemplo peligroso. Ese aislamiento se extiende a la economía: los pocos contactos que quedan a Paraguay con el resto del mundo se hacen mediante comerciantes brasileños autorizados a título individual por Francia. Las consecuencias están lejos de ser únicamente negativas; esa sociedad mestiza, de necesidades sumarias, puede renunciar sin excesivo sacrificio a consumos ultramarinos; la disminución de las actividades vinculadas con la exportación (yerba y sobre todo tabaco) asegura una abundancia de los productos de consumo local que hace a la época de Francia

un período de bienestar popular. Por otra parte, el dictador gusta de apoyarse en la plebe mestiza contra la poco numerosa aristocracia blanca; si ésta no es despojada de sus tierras, es junto con los comerciantes víctima de un sistema que hace desaparecer casi por entero los cultivos destinados a mercados externos.

Frente a los críticos de su sistema de riguroso aislamiento, Francia hubiera podido invocar las devastaciones que una actitud más abierta había producido en el resto del Río de la Plata. Allí, luego de la disolución del estado revolucionario heredero de la administración virreinal, que se había producido en 1820, la búsqueda de un nuevo orden estable fracasó, pese a que tuvo a su servicio la energía indomable y los múltiples talentos de Juan Manuel de Rosas.

La disolución del estado unitario en 1820 había estado lejos de constituir una calamidad sin mezcla: sirvió para liquidar bruscamente una situación ya insostenible. Pero en esa liquidación no sólo salía destrozado el centralismo de Buenos Aires, sino también el federalismo del resto del litoral, que había tenido en Artigas su paladín. La política de **Buenos Aires** alcanzaba un éxito póstumo cuando los portugueses concluían la conquista de la Banda Oriental y convertían el antiguo Protector de los Pueblos Libres en un fugitivo cada vez menos respetado por sus secuaces del litoral argentino; éstos obligaron a Artigas a buscar en Paraguay un refugio que Francia convirtió en cautiverio; luego emprendieron luchas por la supremacía, que permitieron a Buenos Aires, derrotada en 1820 y transformada en una provincia más de una vaga federación sin instituciones centrales, alcanzar en el litoral argentino una hegemonía indiscutida. Armada de ella, la provincia de Buenos Aires se opuso a la tentativa de reorganización del país, que en nombre de las de Tucumán y Cuyo (convertidas casi póstumamente al federalismo, luego de haber sido columnas del régimen centralizado, y gobernadas muy frecuentemente por quienes habían sido antes agentes del desaparecido Gobierno central) dirigió el gobernador de Córdoba, Bustos.

Este apego al sistema de disolución nacional se explica: gracias a él la provincia de Buenos Aires, dueña de las comunicaciones con ultramar, y por lo tanto de las rentas de aduana, ya no debe emplearlas en mantener un aparato administrativo y militar que excede sus límites. Por otra parte, la disolución del Estado ha puesto fin, de hecho, a la participación argentina en la guerra de Independencia. La nueva provincia se encuentra rica y libre de compromisos externos; puede consagrarse a mejorar su economía y su organización interior. Este programa encuentra el apoyo de una clase nueva de hacendados (entre los que ha encontrado refugio buena parte de la riqueza mercantil expulsada de su campo tradicional por la competencia británica). Frente a la ruina de las tierras ganaderas del resto del litoral, las de Buenos Aires prosperan gracias a la paz interna. Comienza «la admirable experiencia de Buenos Aires»; bajo la égida de Martín Rodríguez, un general que ha consagrado las etapas más recientes de su carrera a combatir contra los indios en acciones muy cercanas a las de policía rural, los hombres más ilustrados del que se llama a sí mismo partido del orden improvisan un brillante régimen parlamentario: reducen el cuerpo de oficiales, reforman el sistema aduanero disminuyendo las tasas y aumentando los ingresos del Estado, ordenan el crédito público y crean un banco destinado a combatir las tasas de interés demasiado altas. Al mismo tiempo llevan adelante una reforma eclesiástica, clausuran conventos y muestran una simpatía por la libertad de cultos que -si encuentran escaso apoyo en buena parte de las clases ricas- no bastan para enajenar al gobierno el favor de éstas. Detrás de esas reformas se encuentra Bernardino Rivadavia, hijo de un rico comerciante peninsular, que ha gustado de actuar como influyente de segunda fila desde 1810: ahora, como ministro, su figura es por el contrario abiertamente dominante.

Pero la experiencia de Buenos Aires tiene éxito sólo porque un conjunto de problemas han sido dejados de lado; éstos no han sido eliminados. Uno de ellos es el de la organización del país; otro, el de la **Banda Oriental**, donde el dominio de los

portugueses, y luego brasileños, es una ofensa al orgullo nacional. Esos problemas son actualizados por la necesidad de dar al país una personalidad internacional, y por el interés efímero que despierta en los inversores británicos, que algo anacrónicamente se orientan más bien que hacia las nuevas riquezas del litoral hacia las bastante míticas minas de plata del interior.

Un alzamiento nacional exitoso en la Banda Oriental pone al Gobierno de Buenos Aires, apasionadamente adicto a la paz, ante el incómodo presente de un territorio liberado de portugueses, que pide ser incorporado a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya en ese momento, Buenos Aires ha convocado un congreso constituyente, que sus diputados dominan pero con el que no saben muy bien qué hacer. En ese congreso, más de un representante del interior intenta hacer del proyectado poder nacional un instrumento de transformación de situaciones provinciales: los diputados, elegidos de entre la clase letrada por los caudillos militares que dominan esas provincias, esperan, en efecto, que el congreso les abra el camino para una reconquista del poder local. Los diputados de Buenos Aires vacilan en tomar ese camino: finalmente entran en él porque las divisiones de su propio partido local los obligan a contar con sólido apoyo mayoritario en el congreso; desde entonces son prisioneros en él de la corriente hostil a los gobernantes del interior. A la vez, y por razones parecidas, empujan a la guerra con Brasil. En Buenos Aires el Gobierno del partido del orden había contado con la oposición constante de la plebe urbana. Dirigida por algunos oficiales del ejército revolucionario, esa oposición popular usaba argumentos patriótico-belicistas que ahora encontraban eco entre algunos notables que, habiendo gravitado sobre el gobernador Rodríguez, eran menos escuchados por Las Heras, su sucesor desde 1824, pero dominaban la diputación de Buenos Aires al congreso constituyente.

La guerra con Brasil llevó a anular muchos de los cambios que había traído 1820: de nuevo era preciso costear un ejérci-

to, devolver gravitación a los oficiales veteranos de la Independencia y arruinar al fisco. La guerra trajo además el bloqueo y –como en el país adversario– la inflación, también aquí a base del recién inventado papel moneda inconvertible. Declarada a fines de 1825, la guerra culminaba en 1827 con la victoria argentina de Ituzaingó, que el vencedor no era ya capaz de aprovechar en pleno.

Recibida con general beneplácito cuando no se habían adivinado las penurias que traería consigo, la guerra era cada vez más impopular entre los ricos de Buenos Aires, y era ahora la primera causa de desconfianza frente al nuevo espíritu aventurero de los dirigentes del antiguo partido del orden que dominaban el congreso constituyente. Éstos iban bien pronto a dar nuevos motivos de alarma a la opinión: harían presidente de la república a Rivadavia, y excediendo descaradamente sus atribuciones pondrían a la entera provincia de Buenos Aires bajo la autoridad del Gobierno nacional; esa maniobra, que los libraba de Las Heras y sus antiguos aliados, y ahora rivales, les ganaba la aversión definitiva de las clases altas de Buenos Aires. Mientras tanto, la redacción de una constitución unitaria terminó de enajenar al congreso la buena voluntad de los gobernantes del interior, ya comprometida por episodios como la aprobación del tratado de comercio y amistad con Gran Bretaña, que imponía la libertad de cultos aun en las provincias interiores, y por otros más turbios, vinculados con las rivalidades entre compañías mineras organizadas en Londres con el auspicio de Rivadavia y otras igualmente lanzadas al mercado de la City con el de hombres influyentes del interior.

La guerra civil estalló primero en el Norte y luego en el centro del país; Facundo Quiroga, jefe de las milicias de los Llanos de la Rioja, terminó por dominar allí. Finalmente, tras de una resistencia cuya obstinación irritó a lord Ponsonby, enviado como mediador por el Gobierno de Londres, Rivadavia se avino a tratar la paz con Brasil; el tratado firmado por su agente y émulo García, que devolvía a Brasil la provincia

oriental, fue rechazado por el presidente y el congreso. Pero el régimen presidencial estaba muerto; a la renuncia de Rivadavia siguió la restauración de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el jefe del antiguo partido de oposición, el coronel Dorrego. Por detrás de él eran los antiguos sostenes sociales del partido del orden los que volvían a gravitar, obligando a Dorrego -personalmente adicto a una guerra a ultranza- a seguir las negociaciones de paz. Éstas culminaban en 1828 en un tratado que creaba un nuevo estado independiente: la República Oriental del Uruguay, en cuya viabilidad por el momento nadie creía demasiado. Vuelto de la Banda Oriental, el ejército argentino se apresuró a derrocar y ejecutar a Dorrego (diciembre de 1828): el general Lavalle, jefe del movimiento, asumió la responsabilidad de la decisión que le había sido aconsejada por algunos prohombres del antiguo partido del orden, ahora rebautizado unitario. La ejecución de Dorrego, seguida de un gobierno militar que gravitaba duramente sobre la campaña fatigada de guerra, provocó un alzamiento rural que reconoció como jefe a Juan Manuel de Rosas, un próspero estanciero del sur que había organizado una eficaz milicia regional en su rincón de frontera. En seis meses el régimen militar se derrumbó en Buenos Aires, y el camino al poder quedó abierto para Rosas. Mientras tanto, el movimiento antifederal era más exitoso en el interior, donde un jefe cordobés, el general Paz, se apoderaba de su provincia y luego vencía a Facundo Quiroga, obligándole a refugiarse en Buenos Aires. Nueve provincias caían bajo su dominio, mientras las cuatro litorales le eran adversas. Capturado Paz por sorpresa en 1831, Quiroga reconquista el interior, y Argentina es de nuevo una laxa unión de provincias, dominada por Rosas, López (gobernador de Santa Fe) y Quiroga.

Entre ellos es Rosas la figura dominante, no sólo porque -del mismo modo que en 1820- Buenos Aires, momentáneamente disminuida por su adhesión a una causa perdida, recupera muy pronto su ascendiente, sino también porque su gobernador es el único jefe federal que ha asimilado la

experiencia de la crisis pasada para deducir de ella un arte de gobierno. Este miembro de las clases económicamente dominantes de Buenos Aires ha entrado en política por reacción frente a los errores de la clase política en la que había confiado; al viejo partido del orden le reprocha haber traicionado minuciosamente su programa. Pero ya no es posible volver a él: la politización masiva, la faccionalización son hechos irrevocables. El orden sólo puede reconquistarse por la victoria total de un partido sobre otro. Pero en Argentina los partidos carecen de cohesión: eficientes para deshacer la paz interna, no bastan para apoyarla. Rosas quiere armar uno que sirva también para esto, mediante una propaganda masiva que termina por obligar hasta a los caballos a llevar escarapela roja en signo de adhesión al federalismo, pero que utiliza también medios más sutiles, como una prensa no siempre burda en sus argumentos... Será la plebe fanáticamente federal la que discipline por el terror a los colaboradores necesarios pero inseguros que proporcionan las clases ilustradas. En la provincia de Buenos Aires esta política tiene éxito, y Rosas, gobernador entre 1829 y 1832, lo es de nuevo a partir de 1835 con la suma del poder público. Pero tiene menos éxito en el interior, donde ha faltado una politización igualmente intensa, y donde es sobre todo el temor a la intervención porteña el que acalla a los jefes provinciales, poco adictos a una estricta disciplina de partido. Además esa política obliga a Rosas a satisfacer el extremismo, por él alimentado, de una opinión pública de la que depende: apresado dentro de un esquema en el que ha comenzado por creer sólo a medias, Rosas debe llevar adelante una eterna guerra santa contra sus adversarios, a los que presenta abusivamente como herederos de los unitarios de 1825 y 1828. El clima de la Argentina rosista es la guerra civil, con complicaciones internacionales, sobre todo surgidas del turbulento Estado Oriental.

Éste ha estado sometido a la acción contrastante de dos caudillos rurales, Lavalleja y Rivera. Ambos son hacendados; el primero se presenta como el portavoz de su grupo; el segun-

do y más opulento usa su popularidad entre los peones, campesinos sin tierra, mínimos hacendados en tierra ajena, en suma entre los gauchos que treinta años de inestabilidad habían hecho aún más díscolos en la campaña uruguaya. Rivera terminó por triunfar; luego de gobernar el nuevo Estado con soberbia indiferencia por los preceptos de la ciencia financiera, dejó en 1835 el mando a un sucesor elegido por su influjo. Éste, Manuel Oribe, era un hombre de la elite urbana de Montevideo, demasiado largamente oprimida por los caudillos de la campaña, dispuesta a buscar apoyo contra ellos fuera de Uruguay, ya fuese en Buenos Aires, ya en Brasil. Oribe se había inclinado a la primera solución, y había transferido sólo lentamente su lealtad del unitarismo de Rivadavia al neofederalismo de Rosas; como presidente mostró frente a Rivera veleidades de independencia, juzgadas insultantes por éste, que se lanzó a la revuelta. Apoyado por los antirrosistas desterrados, por algunos de los revolucionarios de Río Grande, por la plebe rural, Rivera gana finalmente también el apoyo de la diplomacia francesa, que ya ha entrado en conflicto con Rosas. Toma Montevideo y Oribe se refugia en Buenos Aires; Rosas, que lo ha juzgado sospechoso de debilidad con los unitarios, adopta casi póstumamente su causa y no dejará ya de luchar por la restauración del que llama presidente legal de Uruguay.

Mientras tanto debe enfrentar el bloqueo establecido en 1837 sobre Buenos Aires en defensa de las exigencias discutibles (y en todo caso insignificantes) de algunos súbditos franceses. Las penurias traídas por el bloqueo le enajenan simpatías en el litoral, mientras las de la guerra con la confederación peruboliviana crean una corriente antirrosista en el norte argentino. Las rebeliones se suceden: en 1839 el sur ganadero de Buenos Aires se levanta también, y un millar de gauchos de esa cuna del federalismo rosista emigran, luego de la derrota, a servir en el ejército que organiza Lavalle. Éste, con apoyo francés, avanza sobre Buenos Aires; en agosto de 1840 se retira, en octubre una matanza oficiosa de desafectos –atribuida por el Gobierno a la anónima cólera popular, pero interrum-

pida en un instante, y sin incidentes, luego de la protesta del agente británico– marca el comienzo del desquite rosista. Éste se inaugura con un tratado con Francia: la crisis de Siria obliga a la monarquía de Julio a abandonar sus agresiones hispanoamericanas, dejando sobriamente entregados a su destino a sus aliados locales. Rosas cede en casi todos los puntos en litigio, pero luego de que Francia se ha lanzado en vano a una campaña abierta para derribarlo se considera –sin equivocarse– el triunfador en el conflicto. La victoria sobre sus adversarios internos es más fácil: un ejército cuyas tropas comanda Oribe conquista el interior, hasta la frontera de Bolivia y la de Chile, e impone en todas partes gobernadores adictos a Rosas; desde 1842 éste tiene un poder que ningún anterior gobernante había alcanzado sobre el conjunto del territorio argentino.

La guerra prosigue en la Banda Oriental. Vencido Rivera, Oribe domina la campaña, mientras tropas argentinas sitian a Montevideo; los comerciantes de la ciudad sitiada logran que una fuerza naval británica levante el bloqueo puesto por la escuadra de Buenos Aires.

Es el comienzo de un nuevo conflicto internacional, que sirve de campo de prueba del acercamiento anglofrancés esbozado por el gabinete conservador de Londres. Buenos Aires volverá a ser bloqueada en 1845, y una expedición guerrero-comercial penetrará en el Paraná, que Rosas mantiene –como todos sus predecesores– cerrado a la navegación extranjera. Estos éxitos no bastan para derribar a Rosas; los agresores, fatigados de una operación cada vez más costosa (para su propio comercio), retoman el camino de las negociaciones, que Rosas encara sin ansiedad. Montevideo sobrevive gracias a subsidios franceses; en 1849-50 los acuerdos angloargentinos parecen entregar a su destino a la Nueva Troya. Surge entonces una nueva coalición antirrosista: terminada la rebelión riograndense, Brasil vuelve a gravitar en el Plata; Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, Brasil y el Gobierno de Montevideo se unen, y Urquiza, tras de expulsar a Oribe de Uruguay, invade Santa Fe para se-

guir sobre Buenos Aires. En Caseros, cerca de cincuenta mil soldados se enfrentan; el ejército rosista (cuya marcialidad había impresionado al representante británico en Buenos Aires, que aun en la víspera tuvo tiempo de comunicar a Londres su pronóstico de segura victoria para las fuerzas del orden) se desbandó luego de un brevísimo combate, y el gobernador, tras dimitir el cargo, marchó al destierro inglés.

Termina así la época de Rosas; durante ella, pese a todas las vicisitudes, Argentina prosperó. Esa prosperidad es sobre todo la de la provincia de Buenos Aires, que si tiene que dar tropas para los ejércitos rosistas, por lo menos no conoce invasiones ni luchas en su territorio, salvo el paso fugaz de Lavalle en 1840. Es la más tardía del litoral ganadero: en la década del cuarenta, Entre Ríos y Corrientes –concienzudamente arrasados por las guerras civiles– comienzan a adquirir importancia nueva; en particular en la primera de esas provincias una clase terrateniente muy poco numerosa y muy rica comienza –algo prematuramente– a sentirse rival de la de Buenos Aires; acepta en pleno el programa de libre navegación de los ríos que, según cree, la emancipará de esos rapaces intermediarios que son los comerciantes de la capital de Rosas; es ese programa el que gana también la voluntad de Brasil, ansioso de asegurarse contacto fluvial con sus tierras interiores. (Los emigrados de Buenos Aires, que lo proponían tan persuasivamente, no ignoraban, por su parte, que los grandes comerciantes porteños ya no necesitaban apoyos políticos para retener su predominio...) Pero la prosperidad comenzaba también a ser la del interior: a partir de 1840 las provincias centrales y andinas comienzan a recibir un eco de la que se afirma más allá de los Andes; la misma dureza del dominio político porteño, al disciplinar la vida política local, favorece el proceso: las elites locales comienzan a reconciliarse discretamente en una adhesión unánime pero dudosamente sincera a la política de Rosas; las legislaturas provinciales de San Juan, La Rioja o Tucumán tienen entre sus miembros a desterrados políticos recientes; otros vuelven a jefaturas de milicias desde sus refugios transandinos o desde la

tierra de indios. «San Juan», dice el desterrado sanjuanino Sarmiento, «es más afortunada que otras provincias»; «Tucumán», dice el desterrado tucumano Alberdi, «conoce una tolerancia excepcional». Casi todas las provincias han terminado por ser las más afortunadas, y las elites urbanas, que en 1825-1830 han fracasado en su intento de reconquistar el poder, lo están ahora sitiando pacífica y victoriosamente.

Las administraciones de orden reflejan pálidamente en la Argentina rosista el que es en la primera mitad del siglo XIX el éxito más considerable de la Hispanoamérica independiente: el de la república conservadora de **Chile.** En la década del veinte muy poco parecía anunciar ese éxito: Chile había enfrentado experiencias extremadamente agitadas. O'Higgins había intentado organizar un autoritarismo progresista de raíz borbónica: había fracasado bien pronto, acusado de despotismo luego de chocar con los terratenientes por su reforma del sistema de herencia, con la Iglesia por su tolerancia con los disidentes, con la plebe por su pretensión de limitar sus festejos tradicionalmente tumultuosos. Refugiado en Lima, dejó el camino abierto a una experiencia liberal y federal que no fue capaz de fundar un orden estable. Reaccionando frente a ella, Diego Portales puso las bases del orden conservador. Este hombre de modesto origen, efímeramente enriquecido en el comercio de Valparaíso, se lanzó a la política en representación de un grupo -el de los agiotistas- al que la penuria pública había hecho surgir en Chile como en otras partes, y en cuyo nombre exigía una atención mayor a las necesidades de un orden más estable; en su apoyo Portales convocaba el descontento plebeyo, a la vez que el de los terratenientes, que añoraban tiempos más serenos.

La victoria del general conservador Prieto sobre el liberal Freire hizo al vencedor presidente y a Portales ministro todopoderoso: desde el gobierno impuso un orden muy rígido en lo político y en lo social, combatiendo el endémico bandidaje rural. El sistema conservador -católico, autoritario, enemigo

de novedades– se expresó en la constitución de 1833; bajo su égida Chile conoció un orden que fue despersonalizándose, luego de superar las pruebas del asesinato de Portales (1837) y la guerra con la confederación peruboliviana. Ese orden fue presentado a la opinión pública hispanoamericana en términos muy idealizados por los jóvenes emigrados argentinos antirrosistas (Sarmiento, López, Alberdi) que, acusados en su patria de ser agentes de ideas disolventes, eran recibidos sin alarma por el Chile conservador que les abría sus periódicos, sus cátedras y, a veces, sus magistraturas.

Esa idealización disimula algunos rasgos de la realidad chilena, pero subraya otros muy reales: es real, por ejemplo, la institucionalización, acompañada de una liberalización lenta del régimen, sobre todo a partir de 1841 y 1851 (presidencia de Manuel Montt, que tuvo que enfrentar a los sectores más cerradamente conservadores). Esa liberalización se vinculaba además con cambios más generales en la vida chilena: de 1831 es el comienzo de un período de expansión minera del Norte Chico, que crea, al lado de la clase terrateniente del valle central que es la dominante en la república conservadora, un grupo de riqueza más nueva que introduce también en la capital un estilo de vida menos sencillo y tradicional. Por otra parte, una aristocracia que vivía de la exportación, como la chilena, había debido limitar espontáneamente, en atención a sus intereses económicos, la preferencia, basada en criterios ideológicos y religiosos, por el aislamiento; las más tenaces resistencias no impiden los progresos hacia la libertad de culto disidente, que es el de los ingleses que dominan el comercio de Valparaíso. Notemos, por último, que la preocupación conservadora por ampliar la enseñanza crea grupos de origen a veces humilde dotados de nueva capacidad de articular sus puntos de vista, y poco satisfechos del lugar muy marginal que, salvo excepciones, el orden conservador les reserva. A mediados de siglo, como los otros países hispanoamericanos que conocen menos gloriosos regímenes conservadores (Colombia o Venezuela), Chile aparece trabajado por un descon-

tento muy vasto: aún más que en aquellos países, en Chile, tras de los voceros más ruidosos de ese descontento, se dibujan nuevos sectores altos (los mineros) que aspiran a compartir el poder y combaten por él desde posiciones de fuerza económica ya muy considerable.

Segunda parte
El orden neocolonial

Capítulo 4

Surgimiento del orden neocolonial

A mediados del siglo XIX, los frutos de la emancipación no han comenzado a cosecharse; la conquista de la estabilidad, sin embargo, se ha consumado sólo en las tierras antes marginales del imperio español y en Brasil (aun para la turbulenta Argentina un emigrado antirrosista de la generación romántica, J. B. Alberdi, podía trazar, en 1847, un cuadro demasiado sistemáticamente positivo, pero de ningún modo falso). Menos éxito habían logrado las tierras de minería colonial -México, Perú, Bolivia-; particularmente la primera parecía hundida en un marasmo, una de cuyas causas eran las obstinadas tentativas conservadoras de sacarlo de él por vías impracticables.

Estos rasgos positivos -limitados en su significación por la aparición de signos de futuras tormentas- no autorizaban a esperar una consolidación rápida del nuevo orden latinoamericano. Ésta comenzó a producirse sobre todo desde que la relación con las zonas económicas metropolitanas comenzó a cambiar; este cambio es un aspecto del que a partir de mediados del siglo afecta a la entera economía metropolitana. Gracias a él pudo ésta cumplir las funciones que desde la emancipación se habían esperado vanamente de ella: no sólo iba a proporcionar un mercado para la producción tradicional latinoamericana, ofrecerlo para un conjunto de producciones

nuevas; por añadidura, iba a ofrecer los capitales que -junto con la ampliación de los mercados consumidores- eran necesarios para una modernización de la economía latinoamericana.

La eficacia que el cambio de la coyuntura económica mundial tuvo para Latinoamérica fue acrecida por el modo en que se produjo. Una explicación hoy impopular lo hace partir del descubrimiento del oro californiano; justa o no, ella tiene, en todo caso, el mérito de recordar que el cambio de coyuntura comenzado hacia 1850 no sólo abre una fase de alza destinada a durar hasta 1873, sino también se acompaña de una ampliación del espacio económico, de una unificación creciente del que estaba organizado en torno de la metrópoli gracias a un sistema de intercambios hasta entonces relativamente poco voluminosos. Esa unificación es facilitada por la renovación de los transportes, dejada, sin embargo, en segundo plano por una intensificación del empleo de los tradicionales, sobre todo en las rutas oceánicas; en las fluviales latinoamericanas y en el cabotaje costero (por ejemplo en el Pacífico peruano y chileno) el vapor, ensayado desde la década del veinte en el Magdalena y el Plata, ha hecho su aparición masiva en la del cuarenta; en cambio, la navegación de la costa oriental a la occidental de Estados Unidos por la ruta del cabo de Hornos sigue siendo la hazaña de los *clippers* de Nueva Inglaterra. Son esos medios los que, ya antes de los descubrimientos de metales preciosos, han permitido una expansión hacia el Pacífico insular que se ha traducido en conflictos anglofranceses; es sólo el descubrimiento del metal californiano, sin embargo, el que provoca una aproximación firme entre el área del Pacífico y la economía metropolitana. Las consecuencias inmediatas para los países hispanoamericanos que bordean ese océano son considerables; súbitamente instalados sobre una ruta que adquiere importancia creciente, esa nueva situación les ofrece medios más fáciles para exportar sus frutos. No es esa la única consecuencia del descubrimiento californiano: la economía desenfrenadamente consumidora que surge en torno de los

centros auríferos activa directamente la de los países del Pacífico: en California habrá barrios de chilenos; en 1849, en Mendoza, rincón andino de Argentina, ha entrado también la fiebre emigratoria. Más importantes son otras innovaciones: California es un estímulo para la agricultura chilena, y Sarmiento pudo describir cómo la prosperidad surgida de las ventas de trigo se tradujo en pocos años en la expansión de la construcción urbana en Santiago; de nuevo en Mendoza una transformación de menor alcance se produce cuando la fruta seca local halla el camino de las tierras del oro.

Otros cambios de ámbito más limitado: los puertos de la nueva ruta tienen ahora vida más intensa, derivada del puro tránsito, y entre Panamá y el Atlántico una ruta muy cercana a la que en el siglo XVII seguían las mercancías destinadas a las tierras españolas del mar del Sur es ahora la que siguen inmigrantes ansiosos de llegar rápidamente a California; entre 1850 y 1855 se completaría allí, a muy alto coste, un ferrocarril que a través de la selva comunicaba los océanos; era uno de los primeros de América latina, y sus dueños eran capitalistas de Nueva York.

De esas transformaciones la más importante era, sin embargo, indirecta: gracias al cambio que en el mapa económico del planeta introducía California, la Iberoamérica del Atlántico y la del Pacífico entraban juntas en su nueva etapa histórica.

Las innovaciones de ésta eran anunciadas por cambios sin duda más superficiales, pero ya visibles a mediados de siglo. El tono de la vida urbana se hace más europeo; si el proceso es muy parcial (a fines de la década del cincuenta un viajero pudo ver, en torno a la Bolsa de Buenos Aires, a una muchedumbre de caballos que esperaban al sol que sus amos terminaran sus especulaciones) es innegable, y sus raíces parecen ser dobles. La normalización relativa lleva a un aumento de la *conspicuous consumption,* sea de las clases altas tradicionales (en México notaban los observadores extranjeros, las damas de la aristocracia habían adoptado la moda europea sólo para complicarla con una profusión de adornos costosos), sea de

las medias urbanas, que ahora volvían a gozar de alguna prosperidad, sea, por fin, del estado, finalmente aliviado en las zonas prósperas del peso de su miseria postrevolucionaria: en Buenos Aires, luego de la caída de Rosas, como en Santiago y Valparaíso al afirmarse la prosperidad minera y cerealera se construyen de nuevo teatros y se pavimentan calles. Por otra parte, hay un conjunto de progresos técnicos que irrumpen para cambiar el aspecto de las ciudades: el gas en la década del cincuenta reemplaza al aceite y a la maloliente grasa vacuna o equina como medio de iluminación en Buenos Aires, en Valparaíso, en Lima, después de haberse impuesto en Río de Janeiro. Al mismo tiempo los nuevos medios de transporte acercan a las ciudades de Europa; si bien la mayor parte de la navegación oceánica seguirá haciéndose por varios decenios a vela, a comienzos de la década del cincuenta el buque-correo inglés comienza a transportar pasajeros en vapores por las grandes rutas americanas: en un mes se llega de Portsmouth a Buenos Aires; terminan las inseguridades y los naufragios frecuentes en la anterior navegación a vela.

Esas oportunidades nuevas son utilizadas con entusiasmo: los nuevos teatros se pueblan, gracias a los nuevos vapores, de compañías de ópera italianas, primero deplorables, que mejoran rápidamente cuando se descubren las posibilidades de lucro que ofrece un público inculto pero generoso. La nueva riqueza y los nuevos contactos culturales se traducen en innovaciones arquitectónicas juzgadas entonces admirables: la costa del Río de la Plata, en los alrededores de Buenos Aires, se cubre de chalets dudosamente normandos, mientras –escribe gravemente Sarmiento– el estilo dórico conquista el predominio en Zárate (una aldea de la campaña de Buenos Aires). El diagnóstico no es siempre tan seguro: en Santa Fe (Argentina) se ha construido una casa que llaman chinesca; un admirado cronista opina que es «más bien de estilo hindú». En Santiago de Chile las nuevas casas señoriales no se organizan ya en torno a un patio y un aljibe: ahora tienen escaleras de honor, de madera tallada importada de Europa, y

salones de techo decorado, y abundantes mármoles igualmente importados... Así la América latina exhíbe ya los signos externos de un progreso que sólo está comenzando a llegar a ella.

Y para el cual se prepara también de manera menos superficial: a mediados del siglo XIX comienza en casi todas partes el asalto a las tierras indias (sumado en algunas regiones al que *se libra contra las eclesiásticas); ese proceso, que en algunos* casos avanza junto con la expansión de cultivos para el mercado mundial, en otros se da perfectamente separado de ésta. Su primer motor parece ser entonces la mayor agresividad de sectores a menudo situados a nivel más bajo que los tradicionalmente dirigentes (aristocracia rural provincial, comerciantes, a menudo mestizos, de las ciudades pequeñas; también lo que se llama ahora «indios ricos», sea que éstos hayan prosperado dentro o fuera de la estructura comunitaria, y en el primer caso sobre todo mediante un juicioso uso económico de su preeminencia político-social); junto con ella, lo que hace más atractiva la conquista de las tierras indias parece ser, en una primera etapa, la expansión de los mercados locales proporcionados por ciudades y pueblos; ese signo de un cambio en el equilibrio entre sectores urbanos y campesinos –que la revolución había orientado en casi todas partes en favor de los segundos– comienza a darse en rigor antes de que otras transformaciones vinculen de modo nuevo a Latinoamérica con la economía mundial, aunque está destinado a intensificarse con ellas.

¿Cuáles son esas innovaciones? Se ha señalado que son básicamente dos: mayor disponibilidad de capitales y mayor capacidad por parte de las metrópolis para absorber exportaciones hispanoamericanas. La primera se vuelca en inversiones y créditos a gobiernos; éstos tienen una importancia política considerable, ya que permiten, en algunos casos, apresurar la emancipación de los gobiernos respecto de sus normales fuentes de ingresos fiscales situadas en las zonas rurales (complementando así la expansión del comercio y de industrias ex-

tractivas que hará posible en algunos países –por ejemplo Perú– reemplazar el sistema impositivo basado en las contribuciones de las zonas de agricultura de subsistencia por otro basado en esos sectores en expansión) y en todos los casos disponer de recursos más vastos. Esta innovación es rica en consecuencias políticas, y contribuye a producir la consolidación del Estado, que es uno de los hechos dominantes en esta etapa: en Argentina, donde los ingresos del Gobierno central provenían tradicionalmente de rentas aduaneras dependientes del comercio ultramarino, fueron los préstamos europeos los que hicieron más fácil el triunfo de ese Gobierno contra las resistencias provinciales: el monto de esos préstamos, observaba un ministro de Hacienda a fines de la década del setenta, cubría exactamente el coste de las guerras civiles y de la de Paraguay, que había cumplido también ella una función esencial en la afirmación del poder central.

Los préstamos a gobiernos, que cada vez más frecuentemente adoptan fórmulas de amortización a largo plazo (colocados por banqueros en las bolsas europeas –en particular la de Londres– suelen ser de redención progresiva), se apoyan en una visión del futuro latinoamericano (a la que contribuyen a fortificar) según la cual la expansión constante de la economía resolverá el problema del endeudamiento. De hecho es la del crédito externo la que lo resuelve a su modo (se toman nuevos préstamos, entre otras cosas, para pagar los intereses de los viejos), y esa expansión está lejos de ser constante. Las crisis comerciales (la de 1857 es demasiado temprana para revelar ese nuevo aspecto, pero la de 1873 lo muestra con cruel claridad) se doblan de crisis financieras: junto con la contracción de las importaciones metropolitanas se da la del crédito y las demás formas de inversión; a esa nueva dimensión financiera se debe una gravedad que de otro modo las crisis no hubiesen tenido: hasta 1890 la evolución de los términos de intercambio favorece en general a los productos primarios, y las crisis aceleran esa evolución favorable, pero la caída de los precios de esos productos, aunque menos fuerte que la de los industriales, ad-

quiere consecuencias catastróficas debido a la obligación de pagar deudas en metálico. No importa: las crisis se superan y el sistema vuelve a funcionar: los estados necesitan ya de él para atender una parte de sus gastos ordinarios.

Las inversiones por su parte actualizan un esquema de distribución de tareas que viene de atrás: la comercialización y el transporte interoceánico quedan a cargo de sectores extranjeros; los localmente dominantes se reservan las actividades primarias. Este esquema comienza, sin embargo, a ser superado lentamente, y siempre en el sentido de una penetración mayor de los sectores extranjeros: la minería, y aun algunas formas de explotación sumaria de las riquezas superficiales (es el caso del guano), son objeto de una transferencia progresiva en beneficio de éstos; la red ferroviaria es también controlada a menudo por intereses extranjeros. Aún se insinúa -muy cautamente- una intervención extranjera en la agricultura y ganadería, bajo la forma, sobre todo, de empresas de especulación inmobiliaria, que no logran, sin embargo, quebrar el predominio que sobre este sector tienen las clases altas. ¿Esa distribución de funciones era necesaria? Los historiadores latinoamericanos, muy conscientes de lo que significó como peso negativo para la evolución posterior, suelen plantear el problema de modo más anecdótico, e indignarse de la generosidad no siempre desinteresada con que fueron abiertos al capital extranjero sectores en que mínimos aportes de capital aseguraban ganancias cuantiosas. Sin duda, no se equivocan al demorarse en algunos casos particularmente escandalosos (el más extremo es quizá el del guano peruano) y al señalar en el avance de la corrupción política el correlato necesario de esa actitud.

Pero esa corrupción, a menudo muy real, no basta para explicar todo: tras ella hay una aceptación de la distribución de tareas ya mencionada por parte de las clases altas locales, que es fácilmente comprensible: en lo inmediato las inversiones de capitales, beneficiando a veces desmesuradamente a quienes las hacían (aunque hubo también inversiones desdicha-

das y otras sólo mediocremente rendidoras), beneficiaban aún más a las clases propietarias locales, que aumentaban a la vez sus rentas (gracias a una expansión de la producción facilitada por el nuevo clima económico) y su capital, multiplicado –sin necesitar ninguna inversión sustancial– por el proceso de valorización de la tierra. En esas condiciones es ocioso preguntarse si acaso no había disponibilidades de capitales para las inversiones a las que fueron convocados los extranjeros; lo que contaba era la decisión de los dueños de esos capitales de no invertirlos de ese modo. Al dejar de lado este aspecto del problema, el estudioso actual tiende a disminuir la importancia del papel de las clases dirigentes locales en la etapa de afirmación del orden neocolonial.

Pues es éste precisamente el proceso que llena la etapa iberoamericana comenzada a mediados del siglo XIX: la fijación de un nuevo pacto colonial que, como hemos visto, había sido para algunos de sus protagonistas el contenido concreto de la emancipación de España y Portugal, demorada hasta ahora, va finalmente a producirse. Ese nuevo pacto transforma a Latinoamérica en productora de materias primas para los centros de la nueva economía industrial, a la vez que de artículos de consumo alimentario en las áreas metropolitanas; la hace consumidora de la producción industrial de esas áreas, e insinúa al respecto una transformación, vinculada en parte con la de la estructura productiva metropolitana: no son ya los artículos de consumo perecedero (textiles, seguidos de lejos por los de menaje doméstico) los absolutamente dominantes: las inversiones aseguran un flujo variable de bienes de capital, productos de la renovada metalurgia, y también uno más constante de combustibles (el carbón, victorioso con la modernización que hace abandonar las fuentes locales de luz y calor, y confirmado luego en su predominio por la expansión de las redes ferroviarias) y de repuestos y otros productos complementarios. Esa evolución de la composición del comercio importador es, sin embargo, lenta, y no madurará sino en tiempos posteriores.

Las nuevas funciones de América latina en la economía mundial son facilitadas por la adopción de políticas librecambistas, que viene en rigor de antes pero se afirma ahora en casi todas partes. El librecambio (rodeado de prestigio excepcional no sólo porque ofrece a las áreas metropolitanas, como gustan de recordar amargamente los estudiosos de las marginales, un admirable instrumento ideológico de penetración económica en estas últimas, sino también porque promete cumplir dentro de aquéllas una función de reconciliación social en el marco del orden capitalista) es la fe común de dirigentes políticos y sectores altos locales, a la que, sin embargo, son capaces de imponer en defensa de muy concretos intereses limitaciones desconcertantes para quienes ven en ellos a las víctimas de una fascinación exclusivamente intelectual por ciertas doctrinas. En todo caso el librecambio es un factor de aceleración del proceso que comienza para Latinoamérica, y esa es, sin duda, la causa última de su popularidad local, que se amplía también gracias a los nuevos hábitos de consumo de sectores urbanos en expansión, que hace depender de la importación a masas humanas cada vez más amplias.

Estos sectores urbanos pueden a menudo impacientarse ante el monopolio político de las oligarquías exportadoras, y en etapas más tardías llegarán a amenazarlo. Sin embargo, coinciden con ellas en apoyar las líneas fundamentales de la transformación que ahora comienza: esto hace posible una continuidad política más marcada de lo que podía suponerse dada la frecuencia de conflictos a menudo violentos, pero que no afectan la presencia de coincidencias fundamentales, que antes no se daban en el mismo grado: América latina parece haber encontrado, finalmente, su camino, y en cuanto a ello las disidencias se hacen cada vez menos significativas.

La coincidencia que se ha apuntado no excluye que los beneficios derivados del nuevo orden se hayan distribuido muy desigualmente dentro de las sociedades latinoamericanas. Ya se han señalado los que de él extraen las clases terratenientes, en cuanto propietarias de la tierra, cuya valorización es una

consecuencia inmediata del orden nuevo, pero también en cuanto dotadas de influencia política que les permite beneficios adicionales. Estas clases, más ricas en tierras que en dinero, frecuentemente endeudadas, constituyen, junto con los políticos reclutados en las elites urbanas, lo mejor de la clientela de los nuevos bancos nacionales que van surgiendo en Latinoamérica; aun los bancos extranjeros deben abandonar su preferencia por los deudores solventes para comprar mediante créditos generosos la buena voluntad de quienes ejercen el poder local. Dejando de lado las facilidades que la situación ofrece para la corrupción, las peculiaridades de los sectores dominantes explican que la política monetaria de los estados latinoamericanos haya sido frecuentemente aun menos ortodoxa que su política aduanera: el culto por la moneda con respaldo metálico, que en doctrina no se abandona nunca, es durante largas etapas excesivamente platónico, y los sistemas de moneda de papel florecen, sea como consecuencia de una legislación bancaria demasiado incauta, que orienta el crédito hacia los sectores altos y lo hace pagar luego por el conjunto de la población mediante la emisión, sea como resultado de las crisis financieras de los estados que se han lanzado con demasiada avidez sobre el crédito internacional, y deben echar mano del respaldo metálico de su circulante interno para atender obligaciones exteriores en horas de crisis, renunciando momentáneamente a la convertibilidad.

En los conflictos monetarios pueden hallarse los más sonados episodios de resistencia de los sectores altos locales a las fuerzas que desde fuera dirigen la economía hispanoamericana, y que mantienen por la moneda con respaldo metálico una devoción sin desfallecimientos. Si bien la finanza internacional se maneja casi exclusivamente en metálico (sólo excepcionalmente Argentina logró la hazaña de instalar sus cédulas hipotecarias, cotizadas en papel moneda, en las bolsas europeas, haciendo así pagar por los inversores ultramarinos una parte del coste de la creación de la gran estancia moderna, cuyos beneficios quedan reservados a la clase terrateniente lo-

cal), el comercio de exportación europeo hacia América latina se dirige en último término a compradores a crédito que usan los distintos circulantes internos, y debe absorber una parte de las pérdidas de las desvalorizaciones.

La parte principal, sin embargo, debe ser soportada por los sectores medios y populares urbanos latinoamericanos (los rurales, menos vinculados en sus consumos esenciales a una economía de mercado, los sufren menos). La adhesión que estos sectores, sometidos a oscilaciones brutales de prosperidad y penuria, otorgan a un orden incapaz de asegurarles un bienestar estable, no es demasiado incomprensible si se tiene en cuenta la experiencia anterior de esos grupos. Fue el nuevo orden el que, al dar más dinero al Estado, le ha permitido pagar mejor a sus empleados y sobre todo multiplicar su número; al aumentar de este modo (y mediante la nueva riqueza que proporciona a los terratenientes) la capacidad de consumo urbano ha permitido una expansión del pequeño y mediano comercio; está comenzando a hacer posibles algunas actividades industriales orientadas hacia ese mercado local. Todo este sector nuevo, sin duda, sufre más que los ubicados en niveles sociales más altos con las alternativas de prosperidad y depresión, pero –aún más que esos sectores –debe su existencia misma al nuevo orden económico y no conoce alternativa válida para él; sus protestas suelen entonces volcarse sobre ciertos aspectos o ciertas consecuencias enfadosas de ese orden, cuyos rasgos esenciales acepta a la vez sin reservas.

Las víctimas de ese orden nuevo se encuentran sobre todo en los sectores rurales. Ya se ha señalado que uno de los elementos precursores de su aparición fue el comienzo de la expropiación de las comunidades indias, en las zonas en que éstas habían logrado sobrevivir hasta mediados del siglo XIX. Sin duda, esa expropiación no lleva necesariamente a la incorporación de los ex comuneros a nuevas clases de asalariados rurales; para ello sería necesaria una incorporación plena de las áreas rurales a una economía de mercado, que está lejos de darse. El resultado acaso más frecuente es, por el contrario, su

mantenimiento en tierras que ahora son de grandes propietarios individuales, una parte de las cuales utilizan los labradores para cultivos de subsistencia, a cambio de prestaciones de trabajo en aquellas cuyos frutos corresponden al propietario. Esa solución predomina en el macizo andino sudamericano: en México es la evolución hacia la hacienda trabajada por peones la que predomina.

La incorporación a un proletariado rural proporciona muy escasos beneficios a quienes las sufren: los sectores que dirigen la modernización agraria, escasos de capitales, no encaran sino cuando no les queda otra salida la constitución de una mano de obra realmente pagada en dinero; encuentran que los peones asalariados son no sólo demasiado costosos, sino también demasiado independientes: un campesino con dinero suele, en efecto, creerse más libre de lo que efectivamente está, y abandonar la hacienda. El sistema de endeudamiento, facilitado porque el hacendado ha heredado del antiguo corregidor un derecho no escrito de repartimiento que le permite fijar precios y cantidades de artículos consumidos por sus peones, se revela más eficaz para disciplinar a la mano de obra; lo es aun cuando el hacendado tiene el poder político, administrativo y militar a su servicio: en efecto, la función de hacer producir al campesino y la tierra se ha transformado, en un régimen económico que se apoya en la constante expansión de las exportaciones, en una suerte de servicio público.

Lo necesita: la modernización económica impone a la fuerza de trabajo rural cargas que ésta no aceptaría espontáneamente. Si las relaciones de trabajo se han modernizado en los hechos mucho menos que en la letra de la ley, y aun ésta sigue consagrando regímenes muy poco modernos, el estilo de trabajo que se espera de los campesinos latinoamericanos concede en cambio muy poco a tradiciones consolidadas en etapas en que la rigidez de los mercados de consumo no empujaba a aumentar la producción. Ahora, por el contrario, el ritmo de trabajo debe cambiar radicalmente para aumentar la productividad de la mano de obra; las quejas sobre la invencible pe-

reza del campesino hispanoamericano, en que coinciden observadores extranjeros y doctos voceros locales del nuevo orden, son testimonio de la presencia de un problema insoluble: se trata de hacer de ese campesino una suerte de híbrido que reúna las ventajas del proletario moderno (rapidez, eficacia surgidas no sólo de una voluntad genérica de trabajar, sino también de una actitud racional frente al trabajo) y las del trabajador rural tradicional en América latina (escasas exigencias en cuanto a salarios y otras recompensas, mansedumbre para aceptar una disciplina que, insuficientemente racionalizada ella misma, Incluye vastos márgenes de arbitrariedad). Son demasiadas exigencias a la vez, y no es extraño que no todas se alcancen de modo completo. Mientras tanto, el sistema se apoya en la aceptación sólo forzada de la plebe rural, que es la gran derrotada sin haber casi ofrecido lucha.

Este cuadro conoce, sin duda, no sólo diferencias de matiz sino también excepciones locales: en el litoral rioplatense hay una expansión agrícola mediante inmigrantes arrendatarios cuyo nivel de vida es más alto que el tradicional; en Chile, al lado del *inquilino* (labrador en tierra ajena) de estatuto tradicional, ciertos arrendatarios que pagan en moneda alcanzan una autonomía más real frente al propietario. Pero en casi todas partes los territorios comunitarios, y más generalmente los de agricultura tradicional, ofrecían a la vez tierras y mano de obra para una explotación más moderna, y la presión del poder público hacía que esa mano de obra -relativamente abundante para las nuevas necesidades- pudiese muy poco en cuanto a la fijación de su nuevo estatuto; aun en tierras de población local escasa el recurso a la inmigración no siempre asegura una mejora en la situación del trabajador de la tierra: en la costa peruana, en Panamá o en Cuba los *coolies* chinos parecen ser una respuesta a la clausura definitiva de la fuente africana; jurídicamente libres, son vendidos, sin embargo, a hacendados (o a compañías de obras públicas) por los importadores a quienes deben el monto del pasaje; sistemas análogos se practican, aunque más limitadamente, en el Río de la

Plata por empresarios franceses y españoles respecto de inmigrantes vascos y gallegos, en los años entre 1850 y 1870, y en Brasil se conocerán aún en fecha más tardía para inmigrantes portugueses y sobre todo italianos.

La inmigración es, pues, otro aspecto del proceso que comienza. Desde 1810 ha tendido a colocársela cada vez más en primer plano en cualquier proyecto de transformación económica y social: esta tendencia se acentuó hacia mediados de siglo, cuando Estados Unidos comenzó a dar un ejemplo impresionante de cómo ella podía contribuir a cambiar el ritmo de crecimiento de un país. Sin embargo, la inmigración fue en Latinoamérica de importancia muy variable. En todas partes continuó y se acentuó la integración de extranjeros en los niveles altos de las sociedades urbanas; las nuevas funciones que iba asumiendo la economía metropolitana aseguraban, en efecto, el mantenimiento de este proceso. Inmigración masiva sólo se dio en algunas tierras atlánticas: Argentina, Uruguay, Brasil central y meridional; y en la época que nos interesa aun en esas regiones sólo comenzaba a hacer sentir sus consecuencias. En el resto de Latinoamérica, ni la expansión de la población global ni el crecimiento de las ciudades se apoyaron de modo numéricamente importante en los aportes inmigratorios.

Ese crecimiento demográfico comienza a hacerse en casi todas partes muy rápido: aunque más moderado, se había dado también en la etapa anterior. Ni el peso de las guerras, ni el de la modernización a menudo brutal gravitaron con intensidad comparable a los factores que en la etapa colonial habían provocado derrumbes demográficos vertiginosos: esto era así ya antes de que el progreso sanitario introdujese en los cambios de población un factor no vinculado con las condiciones generales de vida (de él sólo se conocía, hacia 1870, y muy desigualmente difundido, el uso de la vacuna contra la viruela, introducido en el siglo anterior por la monarquía ilustrada); es preciso admitir entonces que nunca volvieron a conocerse en la Hispanoamérica independiente condiciones comparables a las de los siglos XVI y XVII. En todo caso los tes-

timonios que poseemos, aunque muy defectuosos, se confirman recíprocamente. Hacia 1865-75 las provincias argentinas, con 1.800.000 habitantes, han triplicado su población de comienzos de la centuria. Brasil ha crecido con ritmo comparable, y tiene 10.000.000. Chile la ha duplicado (2.000.000 en 1869), como Perú (2.600.000 en 1876), Nueva Granada (2.900.000 en 1871), y Venezuela (1.800.000 en 1873); Bolivia la ha acrecido en un 70 por 100, y México en un 50 por 100.

El crecimiento del comercio internacional (que da la medida más precisa del ritmo del proceso que incorpora a América latina, como región productora de materias primas, al comercio mundial) es aún más rápido: en 1880 la República Argentina ha decuplicado las exportaciones del virreinato del Río de la Plata a comienzos del siglo y multiplicado por cincuenta el valor de las del litoral ganadero que constituyen ahora el núcleo de su comercio exportador: Chile también ha multiplicado cincuenta veces las suyas de comienzos del siglo. El crecimiento es, sin duda, en otras partes más moderado: Brasil decuplica el valor de sus exportaciones de comienzos de siglo; Nueva Granada las ha multiplicado siete veces; Venezuela, en proporción comparable; Perú las ha quintuplicado; Ecuador sólo las ha triplicado, mientras Bolivia las ha acrecido en un 75 por 100, y México sólo en un 20 por 100. El aumento se concentra entonces en las zonas marginales del antiguo imperio; no es extraño que se acompañe de una caída de la importancia relativa de las exportaciones de metales preciosos que se da aún en los tradicionales exportadores de oro y plata: en Chile sólo cubren éstas menos del 2 por 100 del total de las exportaciones; en el conjunto del antiguo virreinato del Río de la Plata sólo el 5 por 100 (era el 80 por 100 en 1800): en Brasil ha desaparecido de las exportaciones (a las que aportaban alrededor del 20 por 100 en 1800); en Nueva Granada constituyen el 16 por 100 del total, cuando habían cubierto más del 80 por 100 durante la última etapa colonial.

La expansión, que no se da ya predominantemente en torno a la minería, es el fruto de un conjunto de *booms* producti-

vos, algunos de los cuales son de incidencia sólo local, mientras otros afectan a más de una región latinoamericana. Así, si en esta época el cobre y el trigo son episodios chilenos, la lana es rioplatense y el guano peruano, el café se expande en Brasil, Venezuela, Nueva Granada y Centro América, y el azúcar atraviesa una expansión menor en las Antillas, México y Perú. Esos procesos tienen en común requerir inversiones directas de capital relativamente reducidas (aun en las primeras etapas de la expansión de la minería del cobre en Chile, los capitales locales resultaron suficientes para asegurarla). Sin duda, otras inversiones son necesarias para acelerar el proceso: las que se vinculan con la instalación de redes ferroviarias y telegráficas. La República Argentina tiene en 1878 2.200 kilómetros de ferrocarriles y más de 7.000 de telégrafos; Chile, 1.500 y más de 4.000, respectivamente; Brasil, más de 2.000 de vías férreas y cerca de 7.000 de telégrafos; Nueva Granada, 100 y más de 2.000; Venezuela, algo más de 100 de ferrocarriles; México 600 de ferrocarriles y algo más de 11.000 de líneas telegráficas. El avance es, como se ve, muy desigual y, por otra parte, sólo en algunos países –Argentina, Chile, México, Uruguay– conduce a la creación de sistemas ferroviarios nacionales; en otras zonas sólo vincula algunos centros productores del interior con sus puertos de exportación ultramarina: el sistema ferroviario de Brasil, el de Perú, se organizan de esta manera.

Por otra parte, la construcción de ferrocarriles, si escapa casi a la inversión privada local, tampoco corre por entero a cargo de la extranjera. En esta etapa el papel de las inversiones públicas es muy grande: el Estado construye la mayor parte de los ferrocarriles peruanos y chilenos y una porción importante de los argentinos. Aun cuando así no ocurre, las garantías que ofrece a los inversores extranjeros resultan onerosas: la tasa mínima de ganancias, calculada sobre capitales a menudo muy generosamente apreciados, es alcanzada con dificultad por las compañías, y la diferencia debe ser cubierta, año tras año, por el fisco. Esta solución es preferida por un conjunto de razones, algunas difícilmente confesables (las concesiones de interés

garantizado permiten un margen de provechosa corrupción mayor que la gestión directa); otras más objetivas: un fisco que tiene márgenes escasos para gastos extraordinarios puede preferir retardar su colaboración financiera hacia un futuro en el cual la línea ferroviaria, aunque puede ser de rendimiento bajo, habrá contribuido a provocar una expansión económica que repercutirá a su vez en los ingresos del Estado.

En todo caso, el aporte de las inversiones extranjeras es menor de lo que suele suponerse; en parte debido al bajo rendimiento de las ferroviarias. Otros elementos contrarrestan el estímulo negativo de éste: el tendido de la red asegura un mercado para la industria metalúrgica y las exportaciones de combustibles del país inversor. Pero esos resultados positivos se obtienen también mediante inversiones garantizadas y no es extraño, entonces, que ésta haya sido la fórmula favorita en los países metropolitanos. Por el momento, el monopolio británico en la expansión ferroviaria latinoamericana no es seriamente amenazado en parte alguna y constituye un nuevo elemento de sostén de la hegemonía británica, a la que otros aspectos del proceso parecen amenazar.

La expansión latinoamericana se acompaña, en efecto, de una ampliación del comercio, que se orienta ahora en parte hacia regiones nuevas. Si Gran Bretaña es la principal compradora en Chile, Perú, Brasil y Uruguay, no lo es en Argentina, Nueva Granada, Venezuela ni México; más ilustrativo es señalar que un conjunto de exportaciones nuevas, desde la lana (del Río de la Plata) hasta el café suave de los países del Caribe no encuentra desemboque en el mercado inglés. Sin embargo, esta aparición de otros mercados para las exportaciones es limitada en sus efectos porque no siempre tiene su equivalente en el comercio de importación: así la República Argentina, que exporta ahora a Francia, Bélgica y España por valores muy considerables, sigue concentrando sus compras en Gran Bretaña; en Venezuela y México la posición de las importaciones desde Gran Bretaña, si no es tan predominante, lo es en todo caso más que la de las exportaciones a ella. Por

añadidura, Gran Bretaña retiene un predominio no disputado de los mecanismos bancarios y financieros: los bancos ingleses, que desde la década del sesenta se van instalando en América latina, son los intermediarios casi exclusivos en el intercambio de metálico con Europa; la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos usan a banqueros de Londres como sus principales agentes financieros.

Gracias a todo ello, la influencia británica se mantiene dominante, pese a que otros países aumentan con ritmo más rápido sus relaciones comerciales con Latinoamérica; en particular Francia las estrecha durante la época del Segundo Imperio (que es también la de una expansión industrial que le permite competir en algunos aspectos con Inglaterra en la venta de productos terminados y la de un crecimiento urbano latinoamericano que acrece los consumos de productos franceses de exportación más tradicional, desde los textiles y domésticos de lujo y semilujo hasta las bebidas); entre 1848 y 1860 las exportaciones francesas a Latinoamérica pasan de treinta a más de ciento veinte millones de pesos plata (seiscientos millones de francos). Esta expansión no basta para hacer de Francia un factor decisivo en el comercio exterior latinoamericano; las posibles ventajas políticas que de ella derivan las pierde Francia por intentar de nuevo extremarlas.

La tentativa francesa de afirmar su hegemonía sobre el norte de América latina se apoya en la efímera ausencia de Estados Unidos como factor importante en el equilibrio de poderes extraños que gravitan sobre Latinoamérica. Esta ausencia se hace sentir desde antes de la guerra de Secesión, como consecuencia del difícil equilibrio entre estados libres y de esclavitud. Pero terminada la guerra civil, Estados Unidos recupera una política latinoamericana coherente, que con el tiempo se hará cada vez más decidida; al mismo tiempo, la estrella de Francia palidece y la política británica toma cada vez más en cuenta el avance norteamericano, que sólo intenta discretamente frenar en las zonas en que el predominio económico inglés se está consolidando.

De nuevo es Gran Bretaña la que maneja con más prudencia su enorme influjo; sus objetivos parecen modestos si se los compara con los grandiosos de la Francia imperial (elevar una barrera latina y católica a la expansión de la América inglesa y protestante) y los más tardíamente propuestos por Estados Unidos (incorporar las tierras españolas hasta Panamá en unos Estados Unidos transformados en dueños de todo el subcontinente norteamericano). De nuevo para Inglaterra se trata, sobre todo, de custodiar (con presiones discretas) intereses privados que conocen ya admirablemente de qué modo es posible asegurarse apoyos locales. Esa política probablemente sólo parece lúcida gracias a su prudencia: en pleno triunfo del liberalismo progresista es sólo ella la que impide a Gran Bretaña emprender acciones insensatas a partir de juicios frecuentemente erróneos (así, por ejemplo, en la Argentina de Mitre, tan favorable a los intereses a largo plazo de Inglaterra, la diplomacia británica sigue añorando a los gobiernos autoritarios sobre modelo rosista, que juzga los únicos capaces de asegurar el orden interno). Pero gracias a esa prudencia, en las tierras sometidas a la hegemonía económica británica ésta sólo será discutida muy ocasionalmente por políticos cuyos previos fracasos los inducen a una sinceridad muy poco apreciada por un público que los juzga guiados sobre todo por el resentimiento, y permanece indiferente al fondo del problema. Sólo cuando –luego de 1929– la decadencia del poder económico de la metrópoli haga imposible mantener la relación que se consolida en esta etapa, descubrirán Argentina o Brasil que han tenido que soportar un imperialismo británico.

La moderación de éste es entonces sólo aparente: a falta de un *grand dessein* político le sobran objetivos concretos que defender, y una vez asegurados éstos Gran Bretaña tiene predominio de hecho sobre buena parte de Latinoamérica. Para asegurar la defensa de los intereses británicos se dan instrumentos que no necesitan ser blandidos amenazadoramente: así, países endeudados que necesitan de nuevos créditos de la

plaza de Londres se muestran espontáneamente sensibles a los puntos de vista de la metrópoli financiera. Esta necesidad objetiva es aceptada sin demasiada resistencia por la opinión pública latinoamericana; los gobernantes que son elogiados en el *Economist*, los más importantes que marchan a Londres a recibir el agasajo de comités de homenaje en que dominan los banqueros de la City, no sólo buscan cultivar a los prestamistas de los que dependen; ganan al mismo tiempo prestigio frente a los más influyentes entre sus gobernados, mientras el resto encuentra objetivos más inmediatos para su rencor que la discreta presencia británica.

La renuncia a ambiciosos objetivos políticos era una de las razones de fuerza de la potencia hegemónica: si, por ejemplo, la Francia del segundo imperio sólo era guía aceptada por quienes se inclinaban a soluciones marcadamente autoritarias y por lo menos parcialmente tradicionalistas, la Inglaterra victoriana, que se presentaba a Latinoamérica despojada de cualquier actitud misionera, contaba con la adhesión de todos cuantos aceptaban los rasgos esenciales de la modernización en curso; y éstos –como puede deducirse del cuadro de fuerzas sociales que la apoyaban– cubrían el entero espectro político, desde los generales dispuestos a compensar con rápidos progresos materiales la desaparición de la libertad política de la que han despojado a sus gobernados, hasta las oligarquías que prosperan con las exportaciones, y los sectores medios urbanos que creen estar colaborando en la construcción de un remedo latinoamericano de la Europa burguesa.

Esta coincidencia de los grupos dirigentes en torno a algunos puntos esenciales no se ha alcanzado sin lucha: guerras causadas por rivalidades en torno a zonas que revelan bruscamente su riqueza (como la segunda del Pacífico); guerras civiles que se transforman en internacionales (como el ciclo de luchas argentinas y uruguayas que desemboca en la guerra de Paraguay); otras guerras civiles que llevan a intervenciones de potencias ultramarinas (la mexicana de la Reforma, que se continúa en la lucha contra la intervención francesa).

No es extraño que en esta primera etapa de afirmación de un orden nuevo abunden las luchas; hay sobradas causas internas para ello. Hay también algunas exteriores: la actitud que lleva a Francia a intervenir en los asuntos latinoamericanos no es sino un aspecto de la reaparición de fuerzas ultramarinas, que no por ser tradicionales dejan de participar en la expansión general de Europa. Así, junto con Francia reaparece España, que en nivel más modesto está buscando también ella reconciliar sus oposiciones internas en una política activa hacia fuera. Las tentativas españolas –más débiles y también más incoherentes que las francesas– son de consecuencias más limitadas. Pero, en 1845-46, la reaparición del general Flores en el Pacífico meridional, al frente de una expedición organizada desde la ex metrópoli, sirve para enconar una guerra civil en Ecuador y hacer más tenso el clima político desde Chile a América Central. Resultados aún más amplios tiene la desconcertante política de ataques e incursiones llevada adelante en el mismo teatro en 1864-65 por la flota española de Pareja y Méndez Núñez: si el régimen político chileno, que estaba atravesando una delicada transición, salió indemne del conflicto, en Perú éste contribuyó a provocar un cambio de gobierno.

Más importante gravitación que la de España tiene otra presencia vieja y nueva, con la que la Francia imperial espera contar como aliada: la de la Iglesia. La emancipación y la etapa de aislamiento respecto de Roma que ella significó para la Iglesia hispanoamericana retardó el comienzo de un proceso que al mismo tiempo contribuyó a hacer más brusco: el triunfo del ultramontanismo, que a la vez que colocaba a la Iglesia católica más firmemente en manos romanas la ponía incondicionalmente al servicio de la lucha contra las novedades del siglo. Esta doble innovación está destinada a ser muy escasamente apreciada en Latinoamérica, donde las ideologías liberales están ganando prestigio creciente y los sectores tradicionalistas están educados en un regalismo más extremo que en cualquiera de sus modalidades europeas; y donde el

clero siempre vivió sometido a una tutela del poder civil que la revolución, si no siempre intensificó, por lo menos hizo sentir de manera nueva, al cargar de sentido político un nexo que antes era sobre todo administrativo. Pero las iglesias locales habían salido en casi todas partes muy debilitadas de la etapa revolucionaria; la reconstrucción del organismo eclesiástico se hacía frecuentemente apelando a sacerdotes europeos, muy poco sensibles a las tradiciones locales. De este modo la Iglesia muestra una audacia nueva en momentos en que la actitud dominante en Hispanoamérica hacia ella es cada vez más reticente: la consecuencia es que aun gobiernos muy moderamente reformadores –y a veces junto con ellos otros sólo culpables de mantenerse apegados a una concepción de las relaciones entre Iglesia y Estado que ya no es aceptada por sus interlocutores eclesiásticos– deben enfrentar resistencias que adquieren las modalidades verbales (a veces no sólo verbales) de la guerra santa. La nueva Iglesia, si tiene organización más vigorosa, no siempre conserva esa adhesión popular (que desde su origen era localmente muy variable) en la que reside lo esencial de su fuerza política.

Las modalidades de la nueva situación se manifiestan muy claramente en México: allí la revolución liberal conquista una base popular frente a una oposición eclesiástica ahora masiva (y no limitada a las jerarquías altas); al mismo tiempo la Iglesia cumple mejor que antes su papel de núcleo de la resistencia conservadora, y por añadidura es un nexo esencial entre ésta y las fuerzas políticas y financieras europeas, que contribuyeron a ampliar el conflicto. Al lado de este ejemplo impresionante se dan otros más modestos pero no menos significativos; muchos de ellos provienen del ciclo de luchas en torno a la masonería, que en el pasado había contado en sus filas no sólo a católicos liberales, sino en algunos casos a quienes no simpatizaban en absoluto con las ideas modernas (masón era, por ejemplo, desde su juventud, el uruguayo general Oribe, cuyo catolicismo era muy escasamente liberal). Ahora la opción brutal entre la Iglesia y la masonería era hallada injusta por

muchos adherentes sinceros a ambas instituciones; la energía con que era impuesta por el episcopado era vista con malos ojos por un poder político acostumbrado a un clero más sumiso.

Los cambios en la composición del cuerpo eclesiástico influían en el mismo sentido; los refugiados ante el triunfo del liberalismo español, como luego los del Kulturkampf, o los de las leyes de laicización en Francia, podían ser, en algunos casos, más ilustrados que el clero local, sumariamente formado en seminarios que frecuentemente habían ido perdiendo en los años turbios dejados atrás la necesaria disciplina de estudios. Pero –castigados por una experiencia que los había traído de Europa, a lo que juzgaban a menudo rincones de barbarie– no eran por eso más tolerantes; la posibilidad de que el liberalismo los persiguiera aun en sus refugios hispanoamericanos les causaba horror, y se disponían a enfrentarla con una tenacidad fanática que coincidía demasiado bien con las tendencias generales de una Iglesia que se sentía acorralada por el espíritu del siglo. La figura del obispo Schumacher, que a fines del siglo XIX se embelesa ante el caso que su grey ecuatoriana hace aún de las excomuniones y las prodiga para afrontar el avance de la revolución liberal (que, por su parte, el criollo arzobispo de Quito, ilustre letrado y gran señor, contempla más serenamente; pese a las condenaciones de principio de que tampoco es avaro, sabe demasiado bien que la Iglesia ecuatoriana sobrevivirá al triunfo de esos liberales que se proclaman también sus hijos), la figura de este belicoso prusiano, que termina por dirigir acciones de guerra, si es excepcional, es indicativa de una tendencia.

Sería, sin embargo, formarse una idea incompleta del problema suponer que todas las innovaciones que crearon una tensión nueva entre Iglesia y Estado fueron aportadas por la Iglesia. Había en la sociedad hispanoamericana fuerzas cada vez más vigorosas que se disponían, por su parte, a atacar el estatuto de la Iglesia y las órdenes, tal como había sido elaborado en tiempos coloniales.

Esas fuerzas tenían en algunas regiones un objetivo inmediato: la riqueza eclesiástica, sobre todo la inmueble. Ello ocurría así precisamente donde la Iglesia había acumulado, en tiempos coloniales, patrimonios inmobiliarios muy vastos y los había conservado sustancialmente incólumes durante la guerra revolucionaria: es el caso de México, Nueva Granada o Guatemala; en buena parte la oposición a las órdenes puede aquí explicarse por la codicia que sus tierras despiertan, y la expropiación de éstas es un proceso irreversible (así, en Nueva Granada la restauración de la primacía católica va acompañada de indemnizaciones monetarias a las órdenes, pero los nuevos propietarios laicos no son molestados en el disfrute de su patrimonio territorial). Pero las tendencias hostiles a la situación tradicional de la Iglesia se dan también allí donde su riqueza –relativamente escasa desde tiempos coloniales– ha sido mal defendida de las tormentas revolucionarias y no ofrece ya un atractivo botín. En este punto no se equivocaban los eclesiásticos que combatían el espíritu del siglo: era el contacto creciente con la nueva cultura metropolitana el que comenzaba a mostrar a las elites criollas que era posible dejar de ser cristiano. Este descubrimiento no fue acompañado necesariamente de la adopción de un anticlericalismo militante; significó, sin embargo, una independencia nueva de los sectores gobernantes frente a la Iglesia, de la que se tomaba en cuenta cada vez más exclusivamente su influencia política. La Iglesia dejaba de ser entonces una organización dotada acaso de escasa autonomía frente al poder político pero identificada con la fe religiosa de la entera sociedad y de sus gobernantes: era la organización militante del sector no descristianizado de la sociedad. Sin duda, éste era abrumadoramente mayoritario, pero las defecciones todavía poco numerosas eran importantes en la medida en que se daban sobre todo en los sectores gobernantes y en las elites intelectuales que estaban muy cerca de ellos.

Cada vez menos segura del apoyo del poder político y, en general, de las elites sociales e intelectuales, la Iglesia adopta-

ba una actitud más combativa; pero gracias a ella podía ir descubriendo otros aspectos negativos -hasta entonces no muy tomados en cuenta- de la herencia colonial. En el orden colonial la Iglesia tenía una situación privilegiada, en cuanto -siendo uno de los elementos esenciales del sistema de gobierno- era el único con el cual los amplios sectores postergados por ese sistema sentían alguna identificación. Esta posición tan favorable no excluía que fuese muy difícil transformar el tibio apoyo pasivo de las masas populares en una actitud más militante; aún resultaba ello menos fácil a una institución que debía presentar lucha cuando sólo comenzaba a recuperar una estructura sólida luego de las tormentas revolucionarias. Si la religiosidad de las masas mexicanas guatemaltecas o neogranadinas era indudable, si pese a los elementos precristianos que conservaba en mayor o menor medida ésta se identificaba con la fe en que la Iglesia las había adoctrinado, no era menos evidente que esa religiosidad no impedía a los partidos liberales hacerse de un séquito popular a pesar de todas las vehementes condenas eclesiásticas.

La cristianización popular, cuya superficialidad no había implicado un riesgo mientras la Iglesia había conservado un estatuto no discutido por los sectores gobernantes, revelaba ahora todas sus limitaciones, y la adhesión a la Iglesia -intercesora en nombre de las masas frente al orden tradicional, pero intercesora eficaz en la medida en que era parte de ese orden- se revelaba fundada en sentimientos muy complejos y ambiguos, entre los cuales los de temor (temor reverencial al sacerdote como agente de un orden sobrenatural, pero también temor a las influencias terrenas de que el sacerdote dispone, y que no necesariamente se manifiestan en modos de conducta benévolos) aparecen dominantes: la Iglesia, desde que se proclama perseguida, pierde una parte de su prestigio frente a esas masas de cuya religiosidad escasamente ilustrada espera obtener el desquite frente al despego de los sectores gobernantes. No es extraño entonces que la resistencia eclesiástica sea sólo un episodio relativamente pasajero en

la adaptación de la institución al nuevo orden; en algunos decenios la Iglesia latinoamericana aprende a vivir dentro de él, y para volver a usar su influjo sobre los sectores altos, que está lejos de haber desaparecido, debe presentarse como dispuesta a aceptar lo esencial del cambio ocurrido y a desempeñar dentro del orden nuevo papel análogo al que fue el suyo en el viejo.

De este modo, la Iglesia ha tomado en cuenta uno de los rasgos más notables del cambio ocurrido en Hispanoamérica: la ampliación de la vida política por participación de sectores nuevos es muy limitada: en casi todas partes los que dominan la economía conservan hasta 1880, y aun más allá, el monopolio del poder político o, en todo caso, lo comparten con fuerzas que han entrado a gravitar desde antes de la renovación de mediados del siglo (la más importante de las cuales es, en todas partes, el ejército). La renovación política termina entonces por reducirse a un proceso interno a los sectores dirigentes, ellos mismos escasamente renovados en su reclutamiento. Este desenlace tiene algo de inesperado, si se toma en cuenta las resistencias que en sus comienzos la renovación encontró, demasiado violentas para que sea explicación suficiente la presencia de una generación de dirigentes políticos que en casi todas partes se resigna mal a su ocaso.

Esas resistencias se explican más bien por el modo en que el programa comienza a difundirse: sus primeros adeptos los ganó en sectores muy marginales dentro de las elites urbanas; no tiene nada de incomprensible entonces que su pretensión de conquistar el poder y dirigir la etapa que se avecina sea recibida al comienzo con alarma por los dueños del poder económico y social. En casi todas partes, a mediados del siglo XIX, un orden sustancialmente conservador, más o menos firmemente arraigado, está amenazado por el crecimiento de una oposición que se nutre sobre todo de las ciudades en crecimiento; esta oposición no expresa sólo el descontento siempre disponible de la plebe urbana, sino sobre todo el de muchos jóvenes de las clases instruidas pero no necesariamente

ricas, a los que la sociedad hispanoamericana no es más capaz en 1850 que en 1800 de dar el lugar que juzgan suyo en derecho, y a quienes el conservadurismo intelectual dominante resulta particularmente insoportable; a menudo esa oposición recoge también la pretensión de clases medias urbanas a recibir trato más respetuoso de sus gobernantes.

El poderío económico y social que sostiene estas protestas es insignificante; si consolidan sus avances es porque logran evocar en su apoyo a elementos mas poderosos, pero esto sólo lo alcanzan cuando ya han obtenido una supremacía política que ha comenzado por ser muy frágil. En su vejez, el argentino Sarmiento evocaba -para condenarla- su indignación porque luego de derribar a Rosas, Urquiza no le había dado el poder político a él y sus amigos: Urquiza, dictaminaba un Sarmiento al que la edad había aportado un más sereno conocimiento del mundo, había hecho bien en no fiarse de unos escritores sin prestigio ni dinero, en apoyarse, en cambio, en los hacendados, en los ricos comerciantes, en los letrados que habían sido antes sostenes de la federación rosista. Esta sabiduría desengañada nos propone una conclusión muy dudosa: los escritores sin dinero vencieron a Urquiza, porque los hacendados, los ricos comerciantes, los letrados, les otorgaron finalmente su confianza. Esta historia se repite desde Buenos Aires hasta México: el credo liberal es demasiado satisfactorio a los intereses dominantes para que los recelos que inspiran sus primeros abanderados sean un obstáculo decisivo. Pero la conversión de los poderosos al nuevo orden sólo llegará cuando sus ventajas se hayan hecho evidentes, cuando su viabilidad se haya revelado por lo menos probable. Hasta entonces las fuerzas renovadoras tienen que llevar adelante en más de uno de los nuevos países latinoamericanos una lucha a menudo extremadamente difícil. En otros países, sin duda, la transición se da sin combate: se trata aquí de una más superficial evolución de actitudes dentro de los sectores ya antes dominantes: ese triunfo más fácil del orden nuevo se revelará, a menudo, también menos duradero.

Estos procesos requieren ser examinados dentro del marco nacional; y en cada nación su ritmo varía. Los límites cronológicos de los desarrollos que van a examinarse no podrían ser coincidentes, puesto que los que separan la etapa en que se combate aún por el nuevo orden y aquélla en que éste se consolida no son los mismos en los diferentes países. Por otra parte, esta separación entre dos etapas de un único proceso implica una elección de ciertos signos juzgados más importantes que otros para marcar la transición, y ésta tiene necesariamente algo de arbitrario. Por último, es preciso recordar que ciertos rincones latinoamericanos demasiado bien protegidos contra el cambio viven dentro de los límites cronológicos de la etapa que en otras partes aporta tan graves innovaciones sin atravesar ninguna sustancial. Sólo queda entonces explicitar los criterios –necesariamente discutibles– utilizados para establecer la separación entre la primera y la segunda etapa de afirmación del orden neocolonial: los elementos decisivos han sido dos; por una parte, una disminución en la resistencia que los avances de ese orden encuentran; por otra, la identificación con ese orden de los sectores económica y socialmente dominantes; esta identificación, que trae consigo un parcial abandono de los aspectos propiamente políticos del programa renovador de mediados del siglo, reorienta la ideología dominante del liberalismo al progresismo, y va acompañada a menudo –pero no siempre– de una simpatía renovada por las soluciones políticas autoritarias.

Quizá en ninguna parte este esquema de desarrollo se dé más claramente que en **México.** Aquí el punto de partida es la revolución liberal de 1854, que lleva a primer plano, junto con el general Álvarez, un veterano insurgente que ha combatido al lado de Morelos, a figuras desconocidas en la capital pero influyentes dentro del liberalismo provinciano: Melchor Ocampo, ex gobernador de Michoacán, Benito Juárez, abogado y también ex gobernador de Oaxaca, indio zapoteca casado con

la hija del comerciante genovés que, tras de tenerlo en su casa como criado, había costeado sus estudios.

Estos revolucionarios encuentran un eco en la capital, donde el liberalismo y el romanticismo triunfan juntos entre la juventud letrada. Lucas Alamán ha muerto en 1853; su fe desesperada en una restauración católico-monárquica no es demasiado compartida: Santa Anna ve con aparente indiferencia el derrumbe conservador, y abandona bien pronto la presidencia y el país. Los liberales triunfantes pueden hacer presidente a Álvarez y aplicar el plan de Ayutla, lanzado al comenzar su alzamiento; precisamente la aplicación de ese plan es lo que en la historia mexicana se llama por antonomasia la Reforma. La Reforma golpea sobre todo a la Iglesia y sus propiedades; la Ley Juárez despoja a los eclesiásticos de su fuero privilegiado, la Ley Lerdo prohíbe el mantenimiento de la propiedad inmueble en manos de comunidades (lo que perjudica a la Iglesia y las órdenes, pero también –resultado inesperado pero no mal recibido– a las comunidades indígenas). La resistencia es temible; Álvarez se aleja de la presidencia, y otro general liberal más conciliador, Comonfort, lo reemplaza. Su tentativa de acercamiento con los conservadores sólo sirve para causar su caída. La oposición conservadora se apodera de la capital, la guerra civil durará tres años; también los conservadores, puesto que el apoyo del ejército profesional no basta para vencer, arman a la plebe indígena y mestiza, ahora en defensa de la fe amenazada. Los liberales dictan la constitución de 1857, que incorpora a su texto las disposiciones de las leyes de reforma; dan sustancia a las alegaciones de sus adversarios cuando sus ejércitos saquean iglesias y conventos; en esa tierra de inquebrantable devoción que es México, estas actitudes no los privan, sin embargo, de firmes apoyos populares. Desde 1857 Juárez es presidente, y su bando domina a Veracruz y el Norte, y por tanto las comunicaciones ultramarinas y las rentas aduaneras. En 1861 los liberales conquistan la capital; la resistencia conservadora prolonga, sin embargo, la guerra civil en las provincias.

Y juega lo que cree su carta de triunfo: la intervención europea. El gobierno conservador ha acumulado deudas en casas bancarias de Francia y Suiza; durante la guerra civil, liberales y conservadores por igual han echado mano del dinero y las mercaderías de comerciantes ingleses y españoles. Ahora las potencias urgen a Juárez que liquide esas cuentas a menudo dudosas. Juárez alega con verdad que no puede hacerlo; el Estado mexicano está arruinado para muchos años. Las potencias intervienen: los anglofrancoespañoles ocupan Veracruz a comienzos de 1862. Francia se propone algo más que cobrar sus deudas (y las de banqueros suizos cuyos reclamos ha tomado a su cargo): en los conservadores cree haber encontrado apoyos locales para la afirmación de su hegemonía sobre México. Bien pronto las demás potencias interventoras dejan que continúe sola su riesgosa aventura; los fracasos iniciales (derrota de Puebla) agregan razones de prestigio a esa política de presencia: en junio de 1863 los franceses conquistan la capital, cuyo clero los recibe en delirio; el gobierno de Juárez comienza su retirada hacia el Norte. La estabilidad llegará al México conservador a través de la instalación de una monarquía: en esa solución coinciden veleidades ya antiguas de los conservadores mexicanos y las preferencias de su nuevo protector, el emperador francés.

En 1864 México también tiene emperador: es Maximiliano de Habsburgo, aceptado como tal mediante un plebiscito que el beneficiario parece haber creído expresión sincera de la opinión pública mexicana. El imperio había sido creado por los conservadores para deshacer la obra de la Reforma; se iba a cuidar muy bien de tanta imprudencia. La Reforma había creado ya sus propios beneficiarios: hacendados, pero sobre todo comerciantes de la capital y de las ciudades de provincias que se habían hecho propietarios de bienes antes eclesiásticos. Entre ellos –como notaban malignamente los desencantados conservadores– abundaban los franceses; era acaso más decisivo que abundaran sobre todo los mexicanos.

La causa conservadora había dejado ya de ser la de todos los que tenían algo que perder; era cada vez más la de una institución que defendía privilegios muy discutibles. Con esa causa las clases altas mexicanas se sentían cada vez menos identificadas a medida que se hacía evidente que el imperio -pese a todas las victorias de los ejércitos franceses- no podía pacificar al país. Terminada la guerra civil en Estados Unidos, agravada la crisis del equilibrio europeo por la guerra de 1866, los franceses se retiraron finalmente de México, dejando una vez más entregados a su destino a los elementos locales que habían confiado en su apoyo. Maximiliano, que no quiso seguirlos, presidió una resistencia sin esperanzas; fue capturado y fusilado por decisión de Juárez, que -devoto de la ley con la misma fe segura que los grandes fundadores de la tradición jurídica en las Indias españolas- consolidó, a través de la ejecución del hermano del emperador de Austria, juzgado como rebelde a la autoridad legítima, la nueva legalidad republicana de México.

La Reforma había así triunfado, pero heredaba, una vez más, un México en ruinas. La segunda guerra de Independencia, desemboque de la previa guerra de tres años, dejaba una herencia explosiva. México tenía ahora un ejército libertador, que amenazaba ser tan gravoso como el ejército trigarante, de cuya herencia, conservada a través de infinitas transformaciones políticas, sólo se había librado a través de la victoria liberal. Juárez redujo drásticamente las fuerzas armadas; ello provocó tormentas que fue capaz de superar. Redujo los gastos del Estado, salvo en la rama de educación, donde comenzó un vasto esfuerzo de difusión de la elemental; tampoco esta política austera iba a ganarle simpatías. Sobre todo porque los resultados eran lentos en manifestarse: México no superaba su estancamiento económico; la expansión de los cultivos de algodón había sido sólo consecuencia momentánea de la guerra civil de Estados Unidos, luego de su liberación, México debía contar para sus exportaciones sobre todo con su producción de plata, que no aumentaba. En 1873 esas exportaciones están

en el mismo nivel que diez años antes (y de hecho también que setenta años antes): veinticinco millones de pesos; el retorno a los niveles previos a 1810 se ha logrado ya en la década del cincuenta, pero no parece posible exceder esa modesta hazaña. Y los generales liberales de la guerra antifrancesa no eran oficiales de carrera atrincherados en el presupuesto del Estado, como los más entre los del ejército trigarante; eran caudillos de prestigio regional, que por otra parte podían capitalizar el descontento de sus ex soldados, desmovilizados sin indemnización. La larvada oposición militar se hizo sentir cuando, en 1871, Juárez fue reelegido por el congreso luego de que, en una elección triangular, el sufragio popular dio una respuesta dividida. Uno de los candidatos derrotados era el general Porfirio Díaz, fuerte en Oaxaca y prestigioso por sus victorias sobre los franceses. Díaz se alzó; su plan exigía «sufragio efectivo y no reelección»; por falta de apoyo, el movimiento por él encabezado fracasó, y tuvo que marchar al destierro. En 1872 moría Juárez; su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, pertenecía al grupo de letrados liberales que habían acompañado desde el comienzo a la Reforma. Contra el nuevo presidente volvió a levantarse Díaz, desde Tuxtepec, en 1875, y en nombre de la victoriosa revolución tuxtepecana iba a ser gobernado México hasta 1910.

El triunfo de Díaz quería ser el punto de partida para una continuación de la Reforma; el jefe triunfante juraba por sus principios y acusaba al vencido de haberlos traicionado: en particular condenaba la política de amistad con Estados Unidos que Lerdo, luego de Juárez, practicaba: surgida en medio de la segunda guerra de Independencia bajo el estímulo del auxilio recibido del gobierno de Lincoln, se apoyaba ésta en la convicción de que las anteriores agresiones contra México eran consecuencia de una política dirigida por el Sur, que el Norte vencedor no retomaría, pero los desarrollos posteriores a la victoria del Norte justificaban cada vez menos esa esperanza.

Pese a su lealtad, acaso sincera, a la tradición de la Reforma, el triunfo de Díaz significaba una etapa importante en su

transformación: luego de su triunfo, sus partidarios se encargaron de mostrar en él el fin de la tradición jurídico-liberal de la Reforma, un progresismo autoritario, una «tiranía honrada» que se diferenciaría sustancialmente de la de Santa Anna porque ahora tendría objetivos que iban más allá de su mera supervivencia, que se encargaría de dirigir la modernización económica tan demorada, era la exigencia de la nueva hora mexicana. En este cambio ideológico el influjo de la modernización cultural es evidente: el teórico favorito de Juárez había sido el venezolano Roscio, que había justificado la revolución hispanoamericana en nombre de la tradición jusnaturalista del siglo XVIII; ahora el positivismo enseña a examinar de modo que se creía más amplio los problemas mexicanos. Pero a la vez, el cambio estaba dictado por lo que la Reforma ya era antes de Díaz; un movimiento que había enriquecido aún más a los que ya eran ricos y a sólo unos pocos que no lo eran, entregándoles las tierras de comunidades eclesiásticas y abriendo a su voracidad el medio legal de conquistar luego las indígenas. *Ahora ha llegado el* momento *de* que *la tiranía* honrada haga fructificar esa riqueza por el momento sólo potencial: de que organice un orden estable y un sistema de comunicaciones, de que discipline rigurosamente la fuerza de trabajo... Todo eso lo puede hacer mejor Díaz que el escrupuloso jurista que es el presidente Lerdo. La reconciliación del caudillo de Oaxaca con los grupos locales e internacionales a los que sus primeras proclamas habían alarmado, fue fácil y rápida; pero si el evangelio del progreso ordenado, cuyo artífice debía ser un dictador benévolo y cuyos beneficiarios primeros serían los integrantes de las clases propietarias mexicanas, pudo reemplazar sin obstáculos al de una revolución destinada a hacer legalmente iguales y libres a todos los mexicanos, fue porque el segundo era el heredero necesario del primero.

Un desarrollo menos lineal encontraremos en el **Río de la Plata.** Allí la caída de Rosas está lejos de haber resuelto los problemas que éste había enfrentado sin éxito. En **Uruguay** la pa-

cificación impuesta por Urquiza se resuelve en el triunfo paulatino de los blancos, antes aliados de Rosas. Aunque las oposiciones que han dado sentido a la Guerra Grande parecen perder vigencia, lo que hacen es más bien sumarse a otras que tornan aún más complejo el panorama. En el partido blanco, como en el colorado, surgen sectores que abominan tanto de la división pasada como del peso que los caudillos rurales (Rivera) o militares (Oribe, Flores) tienen en ellos; una reconciliación de los «elementos sanos» de ambos partidos daría el poder finalmente a la oligarquía urbana montevideana, ampliada durante la guerra con toda clase de mercaderes aventureros. Brasil gobierna los hilos de esa complicada madeja: en 1851 el gobierno de Montevideo, para comprar su apoyo, ha firmado promesas exorbitantes, y ahora Brasil cambia presidentes en busca de quien se decida a cumplirlas, arrostrando la ira de sus gobernados. Mientras tanto, hacendados riograndenses prosiguen la conquista de tierras uruguayas, de las que el banco del brasileño Mauá domina la vida financiera.

En **Argentina** los conflictos son aún más violentos. Urquiza quiere organizar constitucionalmente al país apoyándose en los gobernadores antes adictos a Rosas, que, por su parte, no se obstinan en una lealtad que los hechos han tornado anacrónica. La provincia de Buenos Aires, ocupada por fuerzas entrerrianas y correntinas, se opone al plan, en el que los políticos vueltos del destierro ven el comienzo de una restauración del sistema rosista en beneficio del vencedor. Urquiza disuelve la díscola legislatura porteña; termina por tomar a su cargo el gobierno de la provincia; pero su presencia en Buenos Aires no puede eternizarse. La de su ejército tampoco: termina por rebelarse. A esa rebelión sigue la de la entera provincia de Buenos Aires, teatro de una reconciliación solemne entre los violentos periodistas antirrosistas vueltos de Montevideo y los aún más volcánicos voceros de Rosas en la legislatura porteña: ambos coinciden en condenar en Urquiza a un tirano en ciernes y a un enemigo del nombre de Buenos Aires. La

revolución porteña busca extenderse al interior; en más de una provincia los sectores de oligarquía urbana comenzaban a fatigarse de la tutela caudillesca y a organizarse en oposición liberal; en otras son caudillos de estilo muy tradicional los que por razones muy variables se orientan hacia el nuevo evangelio liberal. Pero estas adhesiones son insuficientes: el fracaso de la revolución en el plano nacional provoca un alzamiento de las guarniciones de campaña de Buenos Aires, que se han unido a la secesión en busca de la paz (que la campaña, fatigada de veinte años de levas rosistas, ansía) y ven con horror abrirse un nuevo ciclo de guerras civiles. Los alzados ponen sitio a Buenos Aires; la defensa pone en primer plano a la guardia nacional de la ciudad, que la domina y la salva. Urquiza termina por auxiliar a los sitiadores; los sitiados vencen, sin embargo, comprando al jefe de la escuadra urquicista bloqueadora y a un discreto número de jefes sitiadores.

El país está separado en dos. El estado de Buenos Aires es muy popular en su capital, donde el celeste de la tradición unitaria reemplaza al rojo de tiempos rosistas; los avances de un liberalismo que echa raíces en las clases medias urbanas se consolidan al identificarse con el orgullo local, que ilustrados publicistas alimentan en tono desvergonzadamente demagógico. La campaña es, en cambio, más fría, aunque sus grandes propietarios apoyan la secesión porteña (temen, en efecto, las consecuencias de la creación de un estado nacional no colocado bajo el control de su provincia), y la hostilidad de la plebe rural cuenta mucho menos que en los años revueltos de 1827-29: veinte años de orden rosista la han devuelto a la disciplina. El estado de Buenos Aires prospera gracias al *boom* de precios de la lana y de los cueros, pese a que las cantidades exportadas no crecen. La ciudad se moderniza rápidamente y exhibe insolentemente esa riqueza que en 1852 le ganó la salvación. La política está hecha por una incómoda coalición de hacendados que prefieren discretamente los segundos planos y políticos–en parte originarios de otras provincias– que cuentan con el apoyo de la plebe y las clases medias urbanas; los pri-

meros son partidarios de una secesión pacífica, o de un ingreso en la unión argentina contra garantías muy precisas para los intereses de su provincia; los segundos, de una política más violenta, que consolide la independencia de Buenos Aires sobre una victoria decisiva o vuelva a poner sobre sus hombros la carga de conducir a las provincias del interior.

Esas opciones no se resolverán por la sola decisión de Buenos Aires. La Confederación Argentina se organiza sin ella; se da en 1853 su constitución federal que –como quiere su ideólogo Alberdi, un hombre de la generación de 1837 que está ya de vuelta de lo que juzga ilusiones de juventud– organiza un poder autoritario destinado a asegurar el orden en que las fuerzas del capital y el trabajo europeo podrán poblar y civilizar el desierto argentino.

Esa entrega confiada a la invasión pacífica de la economía metropolitana no corresponde sólo a ideas arraigadas: la necesidad de contar con la benevolencia de las grandes potencias en el conflicto con Buenos Aires, dueña de las comunicaciones entre Argentina y el mundo, explica que se la proclame con entusiasmo a ratos un tanto delirante. En todo caso las potencias –Francia, pero sobre todo Inglaterra y Brasil– comienzan por apoyar a la Confederación, que ha proclamado la libre navegación de los ríos y presenta –muy mentirosamente– a su rival como hostil a esa innovación; en ese apoyo cuenta, sin embargo, más que la política de la Confederación, la seguridad de que en una Argentina de tradición autoritaria el autoritario Urquiza tiene más posibilidades de triunfar que los ideólogos liberales de Buenos Aires.

El cálculo se revela errado, en parte porque la imagen de los antagonistas está deformada: Urquiza, sinceramente deseoso de adaptarse a un nuevo estilo político, renuncia a las ventajas del tradicional sin perder su reputación negativa de antiguo caudillo; los dirigentes de Buenos Aires, en medio de vibrantes proclamas de fe liberal y constitucional, practican un arte político capaz de las más inesperadas adecuaciones a la realidad. Pero, sobre todo, el cálculo toma insuficientemente en

cuenta la relación de las fuerzas en lucha. Si Buenos Aires es insolentemente rica, la Confederación es desesperantemente pobre; vive de los créditos de nuevos agiotistas capaces de las más monstruosas exigencias. Y luego el autoritario Urquiza la gobierna muy poco; la gobiernan en su nombre el vicepresidente del Carril –un antiguo unitario– y el ministro del Interior Derqui, antiguo secretario de Paz; ambos rivalizan por la sucesión presidencial y el segundo prepara con vistas a ella el choque con Buenos Aires. Éste es anticipado por una guerra de tarifas urdida por Derqui. En 1859 Buenos Aires es vencida en Cepeda, y se incorpora a la Confederación; logra, sin embargo, proteger sus intereses mediante una reforma constitucional. En 1860 Derqui es presidente, y la concordia dura poco. Los porteños apoyan primero al nuevo gobernante, ansioso de sacudir la tutela de su predecesor; rompen luego con éste, que necesita de nuevo el apoyo de Urquiza. El caudillo entrerriano sólo se lo otorga a medias; se retira con sus huestes de la decisiva batalla de Pavón, cuando ésta aún no está totalmente perdida; ya en 1861 el general Mitre, jefe de la Guardia Nacional de Buenos Aires y gobernador de la provincia, es el dueño de la situación.

En el interior la mayor parte de los gobiernos provinciales se derrumba espontáneamente, o toma el color de la nueva solución nacional. Sólo en La Rioja una desesperada resistencia urquicista culmina con la ejecución de su jefe, ante la indiferencia de Urquiza, que, por su parte, parece dispuesto a adaptarse al nuevo orden, en el que Mitre le reconoce hegemonía sobre Entre Ríos y Corrientes. A comienzos de 1862 Mitre es elegido, por unanimidad del colegio electoral, presidente de la nación: Buenos Aires ha triunfado. Ese triunfo es costoso e inseguro. Urquiza está sólo neutralizado; en Uruguay siguen gobernando los blancos, y Mitre tiene vinculaciones con los emigrados colorados, a los que no puede abandonar luego de la victoria, cuando un sector porteño le reprocha ya haberla frustrado al no proseguir luego de Pavón una lucha hasta el fin contra los herederos del federalismo en el interior.

La política argentina no puede ser sino vacilante y escasamente sincera; si el gobierno de Buenos Aires no arma la expedición del uruguayo general Flores, que con gran derroche de cruces en sus emblemas emprende una cruzada libertadora contra la tiranía de los «impíos» blancos en el estado oriental, es indudable que lo deja armarse en su territorio. Al mismo tiempo varía la política brasileña en Uruguay; hasta 1863 los brasileños creen posible hacerse de un gobierno blanco que cumpla los acuerdos de 1851: con esa esperanza han apoyado las etapas más sombrías del dominio blanco que culminó en la matanza de los colorados vencidos en Quinteros, en 1858. Ahora su posición cambia, todavía por otro motivo: en la política brasileña se da, en 1864, un ascenso liberal. Esto significa de nuevo un ascenso de los dirigentes de Río Grande do Sul, más agresivos que los de Río de Janeiro: frente a un gobierno que ni vence a Flores ni se deja derribar por él, eternizando con su ineficaz resistencia el desorden rural, la impaciencia brasileña crece. Los gobernantes de Montevideo no se hacen más prudentes ante su situación cada vez más difícil: domina allí un sector extremo del partido blanco que -en actitud semejante a la de sus adversarios irreconciliables de Buenos Aires- quiere borrar a sangre y fuego la herencia caudillesca, que ve representada en Flores. Para ello, con frivolidad que va a ser duramente castigada, se dedica a jugar a la política de equilibrio rioplatense; contra la hostilidad de Brasil y de la Argentina de Mitre, llama en su apoyo a Paraguay.

Paraguay busca, desde hace tiempo, un modo de insertarse en la política rioplatense. Muerto Francia en 1840, su sucesor, Carlos Antonio López, presidente también él hasta su muerte, organiza la apertura de la economía paraguaya, que sólo podrá darse plenamente luego de la caída de Rosas. El tabaco y la yerba mate vuelven a ser exportados por un monopolio de Estado, mientras al lado de las estancias privadas las fiscales son organizadas con vistas a esa exportación. López se interesa en los progresos técnicos, crea una flota mercantil de vapores fluvia-

les, organiza una fundición de hierro presentada por alguno de sus tardíos admiradores como el Ruhr paraguayo y una de cuyas obras maestras puede aún admirarse: es una artística escalera de hierro en una casa de Asunción. Esos avances modestos, pero reales, eran el premio de un orden político rigurosamente autoritario, que a los ojos de algunos diplomáticos europeos podía compararse con ventaja a la libertad demasiado desordenada de la Buenos Aires postrosista.

Muerto Carlos Antonio López lo sucedió su hijo Francisco Solano, que tenía para su país ambiciones más vastas, aunque acaso insuficientemente precisas. Paraguay arrastraba un eterno conflicto de límites con Brasil; no era raro que buscase aliados en el Río de la Plata. Pero los buscó con escasa fortuna; López contaba con una rebelión de Urquiza que paralizara a Mitre; contaba también con una resistencia prolongada de los blancos uruguayos. Contando con todo ello, conminó a los brasileños a abandonar la ocupación militar, ya comenzada, del territorio oriental. Los brasileños, cuyo feroz bombardeo de Paysandú había ganado la ciudad para Flores, prosiguieron el avance hacia Montevideo, donde el Gobierno blanco se obstinaba en no tratar con el jefe colorado. López respondió invadiendo con éxito el Mato Grosso brasileño: luego de esta victoria encontró que ya no tenía dónde luchar con sus enemigos. Solicitó a Argentina autorización de paso, que le fue denegada; entonces invadió Corrientes. Esta invasión facilitaba las cosas a Mitre; le daba la adhesión de Urquiza, que en prosa elocuente declaraba su apoyo al jefe supremo de la nación frente al invasor extranjero; decidía el ingreso de Argentina en la guerra, ante el cual Mitre, colocado entre los extremistas de Buenos Aires y la oposición federal del interior, había vacilado hasta entonces.

Frente a Paraguay se levantaba la Triple Alianza del Imperio, Argentina y Uruguay; la guerra se declaraba contra López y no contra el pueblo paraguayo, pero en un tratado secreto Argentina y Brasil se distribuían territorios en litigio que abarcaban más de la mitad de la superficie del país enemigo (es ver-

dad que despoblados). La conquista iba a ser menos fácil que la distribución de los despojos; el heroísmo paraguayo asombró al mundo: a través de cinco años de guerra el país perdió casi toda su población adulta masculina. Si la guerra duró tanto, ello no se debió tan sólo a la resistencia paraguaya: los aliados estaban lejos de ser los colosos que el espacio geográfico por ellos cubierto en el mapa de Sudamérica sugería a observadores remotos: Argentina mantenía una apariencia de unidad interna sólo gracias al arte político de Mitre, pero si éste había logrado neutralizar a Urquiza no había podido impedir la rebelión de los reclutas entrerrianos, ni, luego de las primeras dificultades en la lucha, un alzamiento federal que conmovió a todo el interior (1866-67); el Imperio, si no enfrentaba conflictos igualmente agudos, encerraba fuerzas disruptivas a las que un esfuerzo de guerra demasiado severo corría riesgo de exacerbar. A la escasez de medios de combate acompañó, de parte de los aliados, una marcada prudencia en su empleo. La resistencia paraguaya fue en cambio desesperadamente resuelta; expulsados en la primera etapa de la guerra de las tierras conquistadas en Argentina y el Río Grande brasileño, los ejércitos paraguayos iban a defender tenazmente Humaitá, la fortaleza levantada por los López al borde del río Paraguay: aun la caída de ese Sebastopol tropical (precedida de ataques fracasados y mortíferos) no terminó la guerra; tampoco la conquista de Asunción le puso fin; sólo la muerte de López, defendido por sus últimas tropas en el norte del país, pudo concluir con ella en 1870. Para entonces era Paraguay un país deshecho, que iba, sin embargo, a utilizar para limitar las consecuencias de la derrota las divisiones entre sus vencedores.

Argentina protegía en Paraguay a los antiguos desterrados; Brasil, tras de hacerse ceder los territorios en disputa, avaló a un gobierno dominado por antiguos generales de López, al que sostuvo en su oposición contra las exigencias territoriales argentinas. Así se afirmó la hegemonía brasileña, mientras los nuevos gobernantes presidían una alegre liquidación de las tierras del Estado, la reconstrucción de Paraguay se hace bajo

el signo de la gran propiedad privada, y es por otra parte muy lenta; el país esta destinado a mantener su principal vinculación económica con Argentina, a donde se dirigen la mayor parte de sus exportaciones, y de cuyo sistema de navegación fluvial depende en su comunicación con ultramar.

De esa guerra -que le obligó a organizar un ejército de varias decenas de miles de hombres, reiteradamente diezmado por bajas en combate y epidemias- **Argentina** salió deshecha y rehecha. Mientras Mitre dirigía las operaciones en Paraguay, su partido se dividía en Buenos Aires; en el interior el ejército salvaba la situación amenazada por la rebelión federal, y ese ejército imponía, contra Urquiza pero también contra el candidato favorito de Mitre, el sucesor presidencial: el provinciano Sarmiento, sin un partido propio, iba a seguir utilizando para gobernar la fuerza de ese ejército nacional, que en 1870 debía vengar la muerte de Urquiza, sacrificado por una revolución del federalismo entrerriano, que lo juzgaba ya una suerte de agente clandestino del Gobierno central. Con la muerte de Urquiza la oposición federal, que no ha desarmado en el interior, y que abomina por igual del recuerdo de la hegemonía porteña impuesta por Rosas y de la impuesta por Mitre, pierde las esperanzas -que habían sido siempre ilusorias- de una victoria frontal: se incorpora al orden nuevo, y gana dentro de él provincia tras provincia.

El sucesor de Sarmiento, el tucumano Nicolás Avellaneda, que ha subido a la presidencia contra la rebelión de su rival derrotado Mitre, intenta una reconciliación nacional que, tomada cuenta de la debilidad creciente de las facciones opuestas, debía transformar al presidente de la república en jefe y árbitro de todas las fuerzas políticas del país. Su intento prematuro fracasa; al terminar su período debe vencer la resistencia armada de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador ha sido vencido en las elecciones presidenciales, y que está amenazada de perder su capital, que lo es a la vez de la nación y que las provincias del interior quieren federalizar. El vencedor en

las elecciones es el general Julio Roca, otro tucumano que acaba de conquistar el desierto, los territorios indios del Sur; admirable político, Roca ha organizado en liga a la mayor parte de las situaciones políticas dominantes en las provincias, que olvidando sus anteriores conflictos, coinciden en querer controlar el poderío militar y financiero del Gobierno central.

Con Roca madura una evolución comparable en algunos aspectos a la mexicana; sin duda ya desde mediados del siglo Alberdi había fijado como objetivo para la nueva Argentina darse una organización autoritaria que asegurase el orden necesario para el progreso económico; pero la consecuencia que había deducido de estas premisas –el apoyo a Urquiza contra Buenos Aires– lo había volcado a la causa perdedora; y los vencedores hablaban sobre todo de derechos conculcados y de progreso de las instituciones representativas; ese progreso había sido muy modesto, y en 1880 Roca triunfaba en nombre de un programa de paz y administración, que reiteraba el de Alberdi. Sin duda la solución argentina era en muchos aspectos distinta de la mexicana: si el régimen de Roca iba a sustituirse a la voluntad popular en las elecciones –organizando y perfeccionando el sistema de fraude más caóticamente aplicado en la etapa anterior–, iba a respetar en cambio, ciertos principios (por ejemplo, la no reelección presidencial) y garantías constitucionales (por ejemplo, la libertad de prensa). Pero esos límites fueron aceptados y utilizados con admirable virtuosismo por Roca para afirmar su poder supremo, y su triunfo obligó a las personalidades que habían gravitado en la política argentina a una disciplina nueva: Sarmiento no se resignó a ella y fue barrido de la escena; Mitre, más prudentemente, se acogió al papel de patriarca de la nacionalidad que el nuevo dueño de la nación le había asignado; pasó a ser el jefe, por todos venerado, de una oposición impotente, en quien los dominadores cultivaban al adversario al que preferían tener por interlocutor en horas de crisis.

El tránsito de Rosas a Roca fue mucho más que una transformación política: como decían orgullosamente aun los disi-

dentes frente al orden político dominante, en la Argentina de 1880 no era posible reconocer la de 1850. La alternancia de etapas prósperas y crisis no lograba disimular una expansión que lo dominaba todo; en la provincia de Buenos Aires los ferrocarriles decuplicaban el valor de la tierra, y al mismo tiempo contribuían a hacer posible una quintuplicación de los valores de las exportaciones. En el sur de Santa Fe y Córdoba, en torno a esa franja demasiado estrecha que entre dos territorios indios había comunicado al litoral y el interior, pequeños propietarios, y sobre todo arrendatarios en primer término italianos, comenzaban a crear la pampa cerealera, haciendo la riqueza de los comerciantes de Rosario, el puerto del trigo. Las ciudades crecían; Buenos Aires tenía hacia 1880 medio millón de habitantes (menos de cien mil en 1850); más de la mitad eran -lo mismo que en la pampa cerealera- extranjeros. Sin duda, lo principal de esa prosperidad recaía en las clases altas mercantiles y sobre todo terratenientes; pero su amplitud permitía el surgimiento de una clase media urbana y más limitadamente rural en el litoral argentino. En el interior, los resultados del cambio no eran tan felices: el ferrocarril lo incorporaba como consumidor al mercado mundial, cuando como productor tenía muy poco que ofrecer; sólo en Tucumán surge un oasis de economía moderna: se apoya en la expansión del azúcar, que beneficia a la aristocracia local, a la que su influencia política sobre Avellaneda y Roca concede crédito bancario y protección aduanera.

La prosperidad es el clima que se cree permanente de Argentina; mientras ésta dura, el orden político permanece estable; sus altibajos provocan tensiones que, sin embargo, la coyuntura acalla luego de haberlas provocado. En torno a los rasgos esenciales del orden nuevo existe, si no unanimidad, un consenso lo bastante amplio como para garantizar su estabilidad.

Este progreso económico ha sido acompañado de otros avances, limitados porque el Estado es el menos beneficiado por la nueva prosperidad: la opinión de hacendados y agricul-

tores exportadores, comerciantes con ultramar y clases medias consumidoras de productos importados, es hostil a los impuestos inmobiliarios, a los aduaneros, a los de consumo; prefiere que el Estado se endeude, o acuda a la siempre condenada y no siempre eliminada emisión de papel moneda. Dentro de estas limitaciones, y las que impone el costoso mantenimiento del orden interno, el Estado gasta en empresas de fomento y sobre todo en instrucción pública: Sarmiento, el «presidente maestro», su sucesor Avellaneda, inauguran una política que Roca continuará con medios más amplios. Argentina dice tener más maestros que soldados; si esto no es literalmente cierto, marca muy bien una tendencia. En otros aspectos el Estado ha intervenido más intermitentemente: en tiempos de Avellaneda, cuando la crisis de 1873 interrumpe las inversiones extranjeras, toma a su cargo proseguir la construcción de la red ferroviaria, que en el litoral está predominantemente en manos británicas (pero aun allí el primer ferrocarril argentino, el del Oeste, es propiedad de la provincia de Buenos Aires). Al lado de la inversión extranjera, alguna está a cargo del capital local, desde la construcción urbana en Buenos Aires hasta el mejoramiento de la explotación ganadera (mejora de las razas ovinas y vacunas, alambrado de los campos). Heredero y beneficiario político de ese proceso, Roca, que ha conquistado para los hacendados veinte mil leguas cuadradas de tierras indias, no vacila en presentarse como el jefe de una empresa cuyos aspectos esenciales son económicos.

Uruguay vive más aceleradamente un proceso comparable al argentino. En el punto de partida encontramos esa crisis política perpetua que desde 1811 ha desolado la campaña: entre sus consecuencias, la despoblación ganadera se suma a la abundancia de ocupantes ilegales de tierras y la inseguridad permanente del orden rural. La Guerra Grande, las incursiones riograndenses, los alzamientos colorados, la cruzada de Flores han marcado de modo difícil de borrar a la campaña

uruguaya. Terminada la Guerra Grande, los agiotistas del Montevideo sitiado se lanzan a la conquista de esa tierra empobrecida, pero potencialmente próspera. Sus previsiones comienzan por revelarse falsas: la paz no vuelve, el desorden continúa, y la riqueza rústica aumenta sólo lentamente. Mientras tanto, la política uruguaya sigue devanando sus viejas alternativas; entre blancos y colorados, entre caudillos rurales y doctores urbanos; estos últimos dominan luego del asesinato de Flores; la reconciliación en la búsqueda común del progreso institucional, que los blancos y colorados de la capital consuman a medias, no devuelve la paz a la campaña; un régimen parlamentario algo verboso se impone sólo para sucumbir frente a las consecuencias locales de la crisis económica de 1873. Lo reemplaza algo nuevo en la historia de Uruguay: la dictadura no de un caudillo rural sino de un militar profesional, que gobierna en nombre del ejército. Lorenzo Latorre impone a la campaña un orden estricto; realiza en Uruguay las tareas que en Argentina comenzó Rosas y coronó Roca; apoyado en los hacendados reunidos en la Asociación Rural, en los comerciantes exportadores, ofrece la fuerza del Estado para vencer la resistencia de la población campesina al alambrado de los campos, a lo que es, de hecho, sistema de trabajo obligatorio en las estancias. Al mismo tiempo promueve otras reformas inesperadas: gracias a su apoyo, José Pedro Varela, que es su opositor político, puede organizar un sistema de enseñanza elemental del Estado superando la oposición de la Iglesia y la indiferencia de la clase letrada y liberal de Montevideo, en el fondo satisfecha de su monopolio de hecho de la instrucción. Mientras tanto, las exportaciones uruguayas -cueros y lanas- crecen vertiginosamente; Montevideo tiene más de cien mil habitantes; el país en su conjunto medio millón, del que el 30 por 100 son extranjeros. El régimen de Latorre no es, sin embargo, popular, y el ejército le ofrece un apoyo cada vez más perplejo; bajo su gobierno -a pesar de que Latorre ha sido y sigue proclamándose colorado- no existe en rigor vida política, y en medio del progreso creciente la desa-

parición de la desordenada y a ratos riesgosa libertad de los orientales es, a pesar de todo, lamentada. Finalmente, Latorre abandona en 1880 el Gobierno, desde el cual ha tomado medidas severas contra la oposición política. El Uruguay que deja, muy distinto del que había encontrado, parece haber sido disciplinado por cuatro años de dictadura para nuevos gobiernos militares, que dominarán, en efecto, en la etapa siguiente; esa tierra de la indómita libertad parece momentáneamente convertida a una versión peculiar del nuevo credo a la vez autoritario y progresista.

En México, en Argentina, en Uruguay, donde la disidencia armada había sido un rasgo constante, donde dirigentes políticos que habían llegado a ser conocidos y respetados en toda América latina, habían comenzado a mediados del siglo una regeneración en el credo del liberalismo constitucional, el progresismo se coloreaba, en mayor o menor grado, de matices autoritarios y militares. Se podrían esperar desarrollos análogos en tierras en que el esfuerzo de renovación había sido menos hondo en que las tendencias autoritarias habían arraigado en el pasado encontrando menores resistencias. Y, sin duda, éstos no han de faltar; no van a ser, sin embargo, los más frecuentes; lo más frecuente es en cambio que el progresismo sea el nuevo credo de oligarquías políticas que, a la vez que se amplían, se consolidan en el poder (es el caso de Chile, el de Colombia), lo defienden tenazmente de las amenazas de un autoritarismo militar en que ostentan ver un heredero de la arcaica tradición caudillesca (es el caso de Perú) o ceden sólo una parte de su gravitación a fuerzas que les son ajenas, y a las cuales de ningún modo se subordinan (es el caso de Brasil). También hay, sin embargo (se ha dicho ya), soluciones progresistas decididamente autoritarias: las hallaremos en Venezuela, en Guatemala, en Ecuador.

En **Venezuela** al promediar el siglo se derrumba, en medio de una crisis provocada por la caída de precios del café, la hegemonía conservadora. Monagas, elegido presidente en 1846,

hace vicepresidente al popularísimo opositor Guzmán; elegido por el favor de Páez, utiliza su orientación hacia el liberalismo para emanciparse del anciano hombre fuerte, que se ve empujado a la rebelión, y, tras de fracasar, se refugia en Estados Unidos. Monagas entendía la aproximación al liberalismo como una operación de corrupción política en gran escala; en buena medida tuvo éxito en ella, y al satisfacer las muy precisas ambiciones de la descontenta juventud letrada de Caracas, eliminó uno de los elementos de irritación más visibles, si no más importantes. Monagas fue, por otra parte, jefe de clan: su hermano lo reemplazó en la presidencia. Sólo en 1858, doce años de gobierno familiar concluyeron bajo los golpes concertados de liberales y conservadores; la lucha recomenzaba, y en 1861 Páez volvía, para dirigir la resistencia azul (conservadora), a los avances amarillos (del liberalismo convertido ahora en federalismo); no logró, sin embargo, imponer su vieja garra sobre una Venezuela que había vuelto a apreciar los encantos de la guerra civil. La revolución amarilla fue la de la plebe rural, que encontró un inesperado empresario en Antonio Guzmán Blanco, hijo del reputado periodista liberal, y dispuesto como él a hacerse vocero de la protesta popular. En su prédica, Guzmán Blanco había unido al liberalismo intransigente una hostilidad constante a los ricos, a los hacendados del azúcar y de las haciendas ganaderas, a los grandes comerciantes del café, sin olvidar a los banqueros de Caracas, representantes locales de la fuerza misteriosa de la coyuntura y responsabilizados de las devastaciones que ella provocaba. Desde el gobierno iba a hacer, sin embargo, la política de esos sectores altos, apoyándose en un ejército en que la victoria liberal había cambiado sustancialmente el cuerpo de oficiales. Su progresismo era indudable: preocupación por los progresos de los transportes, codificación y reforma del derecho privado, laicización del matrimonio y los cementerios, supresión de órdenes religiosas, avances en la organización de la enseñanza elemental. Su autoritarismo también; no sólo la Venezuela federal era gobernada sin oposición tolera-

da por Guzmán Blanco: la situación se revelaba descaradamente en las estatuas colosales del gobernante, que comenzaban a adornar las plazas de la capital y las ciudades venezolanas. La vida de esos monumentos era breve; Guzmán Blanco solía alternar el gobierno con períodos de delegación que ocupaba en fructuosos viajes a Europa (donde se ocupaba de promover empresas de explotación económica de Venezuela); partido el gobernante, las estatuas eran derribadas por encolerizadas muchedumbres, para ser vueltas a erigir resignadamente a su retorno. En 1889 fueron derribadas definitivamente: el sistema político armado por Guzmán Blanco era ya tan perfecto que podía funcionar en manos del mediocre reemplazante interino que se había elegido. Bajo Guzmán Blanco avanzó la penetración comercial extranjera sobre una Venezuela que ampliaba sus exportaciones; las clases altas se acostumbraron a aceptar que el supremo poder político no estaba en sus manos, sino en las de jefes militares que habían ganado el derecho a gobernar en combates cuyo desenlace les era, en el fondo, indiferente; las populares habían sido disciplinadas para el silencio y la obediencia. En lugar del ejército popular que había hecho la revolución federal, era un ejército atrincherado en el presupuesto el verdadero dueño de la política venezolana, y los dueños del ejército eran oficiales reclutados entre las clases altas de las zonas más pobres y arcaicas de Venezuela; entre las distintas *cliques* regionales se daba la lucha por el poder efectivo, mientras el nominal podía estar ocasionalmente en manos de letrados de Caracas, y el orden económico-social permanecía inmutable por debajo de tantos cambios, dentro de las líneas fijadas por el heredero infiel de la revolución amarilla.

En **Guatemala,** el dominio de Carrera duró hasta su muerte; la alianza del jefe mestizo y la aristocracia terrateniente se mantuvo también hasta entonces. En 1865 moría Carrera, y ya entonces Guatemala había comenzado a cambiar, aunque todavía lentamente; sobre el país de economía cerrada sobre sí

misma, cuyo único rubro importante de exportación era la cochinilla, comenzaba a surgir la Guatemala del café; en 1880 éste cubrirá el 92 por 100 de las exportaciones guatemaltecas. La expansión cafetera se acompaña del nacimiento de la Guatemala liberal; un jefe mestizo, Justo Rufino Barrios, llegó al poder en 1873, confiscó iglesias, expulsó congregaciones y promovió la educación popular y laica. El reemplazo de la cochinilla por el café como rubro dominante de la economía exportadora sólo afectó a una parte de las tierras de comunidades; se dio sobre todo en las franjas templadas en declive hacia el Pacífico, hasta entonces relativamente despobladas. Allí el régimen liberal se esforzó por crear una más nutrida clase de propietarios medios, a menudo ladinos (mestizos e indios hispanizados), mientras en las zonas altas, donde se daban condiciones adecuadas para ello, grandes propietarios blancos o tenidos por tales se orientaban hacia el nuevo y más rendidor cultivo. Todos ellos necesitaban mano de obra que sólo las comunidades podían proporcionar; para asegurarla, la Guatemala liberal reinventó con el nombre nuevo de mandamiento el repartimiento colonial, que obligaba a esas comunidades a proporcionar un número fijo de trabajadores estacionales, distribuidos por vía administrativa entre las fincas cafeteras. Los avances de la prosperidad privada, que todo ello hizo posible explican la resignación de las clases altas frente al duro estilo político de Barrios. Finalmente, el liberalismo guatemalteco se lanzó a reconstruir la unidad centroamericana y fracasó en el intento. En 1885 Barrios moría y dejaba una herencia completa: un liberalismo en cuyos principios económicos coincidían las enteras clases propietarias, fortalecido por el éxito de la secularización tan enérgicamente llevada adelante; un autoritarismo de base militar que marginaba por igual de la política a las elites urbanas (reducidas a decorosas comparsas destinadas a ofrecer una fachada institucional correcta para un régimen sustancialmente despótico) y a la plebe rural que había sido empujada de las comunidades a las fincas de café por la fuerza desnuda ejercida por el estado liberal, pero

pronto atraída también a ellas por el juego de las fuerzas económicas. Porque en esta etapa, aunque de modo más oneroso que en la de la cochinilla, las comunidades encontraron modo de sobrevivir en parte gracias, y no a pesar, de la afirmación de la economía exportadora; el ingreso adicional derivado del trabajo en las fincas de café iba a permitirles mantener integradas en sus arcaicas estructuras una población acrecentada por una rápida expansión demográfica. Para los terratenientes viejos y nuevos el avance cafetero ofrecía un balance igualmente ambiguo: sin recursos financieros para afrontar los bruscos altibajos de bonanza y crisis, buena parte de ellos perdieron sus tierras en beneficio de los comerciantes y financiadores de la agricultura cafetera, en su mayor parte inmigrantes alemanes, que a comienzos del siglo XX son ya propietarios de las mejores fincas.

Una evolución de rasgos menos extremos, pero sustancialmente similar, se daba en casi toda **Centroamérica.** Esa evolución era menos extremosa por razones en parte políticas (en ninguna parte el dominio conservador había sido tan marcado como en Guatemala), en parte económico-sociales (en ninguna parte el modelo de una economía señorial cerrada dominaba como allí, ni la oposición entre aristocracia blanca y plebe indígena se daba tan vigorosamente; por añadidura, la evolución a partir de la economía agrícola-mercantil del índigo en El Salvador, de la ganadera en Honduras y Nicaragua, fue más lenta que la creación de la Guatemala del café). En todo caso, la lucha entre liberales y conservadores (clericales) llena la historia centroamericana en la segunda mitad del siglo; de ella emerge lentamente la solución militar, que –utilizando para reclutar su clientela política el nexo, a menudo tenue, del dictador con alguno de los partidos tradicionales– inaugura de hecho un régimen nuevo. Pero el progresismo de estas soluciones autoritarias está a menudo limitado a la esfera de las intenciones por la lentitud del cambio económico. Notemos una excepción a este proceso: en Costa Rica una cla-

se de propietarios medios prospera con el café, y -pese a que tampoco es inmune a los conflictos político-religiosos de la época- se defiende mejor contra las tentativas de despojarla del poder político en beneficio de dictaduras militares, progresivas o no. Se ponen así en ese país de medio millón de habitantes las bases de una «democracia ejemplar», cuyos rasgos fundamentales perdurarían; el pequeño país reduce su fuerza armada a su mínima expresión, y puede jactarse más verazmente que Argentina de tener más maestros que soldados. Otra excepción parece por un tiempo darse en El Salvador; cuando llegue allí la plena prosperidad cafetera ese diminuto rincón sobrepoblado que fue la fortaleza del liberalismo centroamericano seguirá, sin embargo, el camino político de sus vecinos.

La política centroamericana comienza a ser afectada en esta etapa por la importancia estratégica de la región: Gran Bretaña y Estados Unidos, adversarios mal reconciliados en cuanto aspiran ambos al dominio de la ruta del Istmo, se dedican a jugar apuestas en las complejas rivalidades políticas centroamericanas. En la década del cincuenta, un aventurero norteamericano, Walker, con un ejército internacional financiado por Vanderbilt, logró dominar por un tiempo la situación nicaragüense, con alarma de Gran Bretaña, que alegaba derechos algo discutibles a la despoblada costa atlántica de ese país -la Costa de Mosquitos- y no renunciaba a controlar un futuro canal interoceánico que utilizase el sistema de ríos y lagos de Nicaragua. Pero estas veleidades de intervención sólo remotamente anuncian los desarrollos que en el siglo XX harán de América Central una zona sólo nominalmente independiente de Estados Unidos.

Cautamente en Argentina, más decididamente en Uruguay, México, Venezuela y América Central, el avance del liberalismo había desembocado en una lucha para limitar el papel de la Iglesia en la vida latinoamericana. En **Ecuador** hallaremos una solución más original, aunque efímera: allí una dictadura progresista se afirmará con signo intransigen-

temente católico, bajo la dirección de Gabriel García Moreno. Este guayalquileño, hijo de un comerciante peninsular, liberal en la primera parte de su carrera política, casa con una rica heredera de Quito y se identifica progresivamente con la aristocracia conservadora de la Sierra. Lucha contra Flores, que en 1846 vuelve en empresa reconquistadora con apoyo español; lucha también contra los regímenes militares liberales que se suceden desde entonces. En 1859-60, en medio de una guerra causada por problemas de límites con Perú, logra hacerse del poder en Quito, y (apoyando y luego combatiendo a los peruanos) se impone a la entera nación. Comienza entonces la construcción de una dictadura conservadora, que espera consolidar mediante la incorporación de Ecuador al imperio francés; la Francia napoleónica es menos atraída por esa perspectiva que por la aventura mexicana...

García Moreno, apoyándose primero en la aristocracia quiteña, y luego en un maduro estado policiaco, que usa con habilidad el terror, se consagra a civilizar a un país de indios y mestizos, al que desprecia: clérigos franceses dirigen la educación en todos los niveles, y reemplazan paulatinamente al clero local aun en la vida eclesiástica; el ejército ecuatoriano se moderniza, se inicia la construcción del que será el gran proyecto de García Moreno: el ferrocarril de Guayaquil a Quito, destinado a terminar con el aislamiento de la sierra. La oposición, inspirada por la protesta de un admirado escritor tan tradicionalista en su estilo como en sus ideas –Juan Montalvo– no desarma; en 1875 García Moreno es asesinado, y lentamente el predominio conservador renuncia a sus aristas más duras; está destinado a durar aún veinte años. Muy generalmente aborrecido, García Moreno es admirado aun por sus enemigos por su honradez sin mancha en lo económico, por la modestia de su vida, por un saber científico que ha adquirido en un año de estudios en París y que es a la vez sumario y pedantesco, pero que en Quito es considerado inmenso. Pero los esfuerzos de García Moreno no tienen éxito durable: en Ecuador las fuerzas de renovación siguen estando en la costa

plantadora y comerciante, que es tradicionalmente liberal, y en la oposición ruidosa e ineficaz de algunos sectores marginales de Quito a la oligarquía serrana. García Moreno había logrado destruir la gravitación del ejército, que había influido en el equilibrio anterior entre sierra y costa; pero sólo para dejar en herencia el poder a la oligarquía conservadora serrana, dispuesta a ejercerlo menos despóticamente pero también totalmente ajena a los pujos renovadores de García Moreno; la continuación del aspecto renovador de su obra quedará a cargo del Ecuador liberal.

En otros países, se ha dicho ya, la evolución se da entre alternativas menos extremas. En Chile, en Nueva Granada (desde 1860 rebautizada **Colombia**) se pasa del predominio conservador al liberal sin que las tendencias autoritarias aparezcan sino tardíamente (y en el caso chileno para ser derrotadas). En Perú se da una reconquista del poder por la oligarquía costeña, capaz de dirigir y utilizar a los sectores urbanos descontentos del predominio militar; allí una historia a menudo trágica, mantiene, a través de cambios sorpresivos y aparentemente radicales, esta orientación fundamental.

En Nueva Granada la revolución europea de 1848 devolvió virulencia, como ya se ha señalado, a la oposición liberal, transformada en gobierno por el sucesor del presidente conservador Mosquera, José Hilario López; Mosquera, que no lo había apoyado como candidato, puso ahora toda su gravitación al servicio de la causa liberal, que utilizó el poder para libertar a los esclavos, imponer un programa librecambista, expulsar a los jesuitas, establecer la libertad religiosa e introducir el federalismo. Los liberales bien pronto se dividieron; los más extremos (llamados gólgotas) eran fuertes sobre todo en el norte costero; los moderados (draconianos) eran populares entre la plebe de la capital, a la que convocaban a luchar contra el librecambismo. Luego de una dictadura militar draconiana, los gólgotas triunfaron; en 1861 instalaban en la presidencia a su hombre fuerte (el mismo general Mosquera que había sido

en el pasado columna del orden conservador) y adoptaban un federalismo muy laxo. Mientras Colombia comenzaba su propia expansión cafetera, el orden interno era cada vez menos seguro: los gobiernos provinciales luchaban entre sí y eran sacudidos por violentas luchas locales. Presidente desde 1880, el liberal Rafael Núñez (uno de los ideólogos del grupo gólgota) lanzó lo que llamó la regeneración: en busca del progreso económico la Colombia liberal y federal debía renunciar a su liberalismo (devolviendo a la Iglesia posición dominante en la enseñanza pública) y a su federalismo, excesivamente costoso y responsable del desorden crónico de la campaña; debía también hacer concesiones al autoritarismo aumentando los poderes del presidente. Estas innovaciones no eran presentadas como un retorno liso y llano al conservadurismo, sino como una consecuencia de la muerte de las ideologías tradicionales y de la adopción de un progresismo atento a intereses y no a ideales. Esta política no se impuso sin lucha; como era esperable, los liberales vieron con indignación cómo la que juzgaban apostasía de su jefe era institucionalizada en la constitución de 1886 y el concordato de 1883. Pero la solución impuesta por Núñez estaba destinada a durar, no sólo porque en el delicado equilibrio de una elite política que seguía siendo excesivamente reducida la defección de sus seguidores liberales fue decisiva, sino también porque sus reformas consolidaban un orden que las clases propietarias y mercantiles de Colombia apreciaban unánimemente. Eran estas clases las que compartían el poder bajo la égida de Núñez; las que se afirmarían en él luego de su muerte, en 1894 (hasta ese momento, directamente o por persona interpuesta, fue Núñez el arbitro de la política colombiana).

Los desarrollos en **Chile** y **Perú**, aunque profundamente divergentes, están íntimamente entrelazados. En Perú el general Castilla organiza, desde 1845, un régimen que se apoya en una riqueza nueva: el guano; este fertilizante, concentrado en islas desérticas de la costa, comienza a ser introducido en Eu-

ropa por casas exportadoras inglesas, que pagan derechos al Estado peruano; en 1847, los ingresos que éstos proporcionan al fisco comienzan a ser cuantiosos, y ello permite, a partir de ese año, consolidar la deuda interna, y en 1848 liquidar la externa. Lima tiene en 1850 su primer ferrocarril, poco después el alumbrado a gas. Las reformas del derecho privado culminan en el Código civil de 1852; como en otras partes, éste favorece la liquidación de la comunidad de tierras, defensa de los labriegos indios contra la avidez de hacendados y mercaderes. En esos años comienza también la inmigración de *coolies* chinos a las haciendas de la costa; los propietarios quieren devolver a las tierras del azúcar y el algodón a su plena producción. En medio de esos cambios vertiginosos, Castilla pudo imponer como sucesor al general Echenique, contra muy variadas oposiciones. Echenique presidió una etapa marcada por la continuación de la prosperidad guanera; bien pronto fue acusado de organizar la corrupción, y encontró entre sus críticos a su predecesor, que se lanzó a la guerra civil. En medio de ellas Castilla suprimió la esclavitud y el tributo indígena; ambas medidas, que tenían la finalidad inmediata de facilitar el reclutamiento de negros e indios, reflejaban de todos modos las consecuencias de cambios ya ocurridos: la agricultura de la costa se estaba reconstruyendo sin apelar a mano de obra esclava; el fisco peruano, gracias a los ingresos del guano, necesita ya menos de la capitación indígena.

La victoria de Castilla no interrumpe un proceso comenzado durante el gobierno de Echenique, y uno de cuyos aspectos era precisamente la corrupción: la difusión entre ciertos sectores privados capitalinos de la riqueza guanera. Ésta ingresaba en la economía peruana bajo forma de pagos al fisco por parte de los comerciantes extranjeros que exportaban el guano de las islas costeras a Europa, ya había encontrado modo de pasar de manos públicas a privadas mediante la consolidación de la deuda pública: personas ricas o influyentes de Lima habían comprado, a precio vil, viejos créditos contra el Estado, y ganado rápidos lucros al ser éstos redimidos por esa

consolidación. Ahora se daba un paso más: la riqueza limeña, desde 1860, participa en la explotación del guano, cuya exportación queda a cargo de consignatarios nacionales, mientras que su venta en Europa corre por cuenta de un conjunto de casas comerciales ultramarinas. La solución, provechosa para los consignatarios, les asigna un papel comparable al de los agiotistas de etapas anteriores; organizan su propia insolvencia, sitian financieramente al Estado, lo auxilian con préstamos de plazo angustioso y condiciones exorbitantes... De este modo se reconstituye en Lima una riqueza privada, y mientras algunas grandes familias redoran sus blasones y otras nuevas surgen a la opulencia, el mal humor de los ricos arruinados, de los que no participan en la alegre conquista de las ganancias guaneras, de una plebe curiosa y maldiciente, crecen... No bastan, por el momento, para quebrar el predominio político de Castilla, que en 1862 puede dejar el gobierno a un sucesor por él elegido. Pero éste muere, la guerra civil vuelve, y se complica de un conflicto con España, cuya flota, por razones difíciles de entender, se dedica a atacar las costas peruanas, utilizando un incidente en verdad insignificante protagonizado por marineros españoles en El Callao. Ante el peligro de lo que puede ser tentativa de reconquista española, se produce una efímera unión nacional, y una igualmente efímera alianza con Chile, Bolivia y Ecuador, igualmente amenazados por la desconcertante acción española (que culminará en un devastador bombardeo naval de Valparaíso y uno menos exitoso de El Callao). Finalmente las naves españolas se retiran, sin esperar las reparaciones que han exigido.

La unión sagrada se quiebra: en medio de rebeliones indígenas estalla de nuevo la guerra civil. En 1868 emerge de ella como presidente, y heredero de la «revolución conservadora», el coronel Balta; su gobierno abre un nuevo capítulo en la historia del guano: por iniciativa del joven ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, elimina a los concesionarios múltiples para otorgar una concesión única a la casa francesa de Dreyfus (1869); la nueva beneficiaria otorga a su vez un prés-

tamo que saca al gobierno de sus aprietos inmediatos, en los que lo creían irremediablemente encerrado los consignatarios. El contrato inauguró la apelación al capital europeo, que hace posible empréstitos y construcciones de ferrocarriles, en las que sobresale un emprendedor yankee, ya enriquecido y arruinado antes de llegar a Perú, Henry Meiggs. Esa nueva oleada de dinero fácil acreció nuevamente la corrupción política, ahora condenada con lenguaje austero por el círculo de los antiguos consignatarios.

De entre ellos salió el fundador del partido civilista, Manuel Pardo, de linajuda familia de Lima, que logró movilizar el descontento no sólo de su clase, sino también de la entera capital organizando el partido civilista, y ganar en 1872 la presidencia. Desde ella no sólo dirigió una campaña de moralización -muy parecida a venganza- contra los responsables y beneficiarios de la política de su predecesor; también encaró con seriedad los problemas que la crisis de 1873 creaba a la economía peruana, que se había tornado extremadamente dependiente del crédito y del comercio ultramarino. El clima de penuria económica no favorecía al arraigo del civilismo, y Pardo debió aceptar la candidatura del general Prado, que sin ser su adversario no podía considerarse un adicto del civilismo; desde el gobierno se mostraría aún más alejado del partido que quería someterlo a su tutela y que en 1878 perdía a su jefe, asesinado en oscuras circunstancias. El Perú del guano entraba en agonía; pero más al Sur, el salitre ofrecía una nueva riqueza exportable, y el Gobierno buscaba -inútilmente- fondos para rescatar de manos privadas las tierras salitreras, en el desierto en torno a Iquique. La bancarrota parecía cercana: desde la presidencia de Pardo comenzó a recurrirse a la moneda de papel, luego fue necesario autorizar a Meiggs a hacer emisiones privadas, desde 1874 el Gobierno de Perú y la casa de Dreyfus se consideraban recíprocamente deudores morosos, y arrastraban largos pleitos; Lima, que había derribado -por iniciativa de Meiggs-sus murallas coloniales, era una gran ciudad, que no podía sobrevivir sin el lujo de sus ricos y los sueldos de

su clase media empleada. A esa crisis, particularmente grave dadas las modalidades que tuvo esta etapa de la modernización peruana, la hubiese terminado quizá un cambio en la coyuntura económica mundial. En cambio, la prolongó y agravó la guerra.

En 1879, en efecto, Perú entraba en guerra con Chile, que desde hacía tiempo ambicionaba la nueva riqueza salitrera que en territorio de sus vecinos septentrionales -Perú y Bolivia- explotaban obreros chilenos y (en el caso de Bolivia) empresarios a menudo también chilenos. Si la ambición chilena se dirigía sobre todo a los territorios bolivianos, y no afectaba directamente a los peruanos, el Gobierno de Perú se había decidido a hacer causa común con el de Bolivia para eludir una alternativa que juzgaba ruinosa: la alianza de Bolivia y Chile, en la que la primera recibiría del segundo, a cambio de sus territorios salitreros, los del sur peruano, y junto con ellos los puertos a través de los cuales se comunicaba ya con ultramar. La guerra (y la derrota a la que no quiso resignarse) significó para Perú un derrumbe de proporciones vastísimas; condenó retrospectivamente una etapa que no podría, sin embargo, reducirse a la efímera y corruptora prosperidad guanera y salitrera; durante ella había comenzado, en efecto, la rehabilitación de la agricultura costeña de regadío: en 1878 el azúcar contaba tanto como el salitre en las exportaciones peruanas a Gran Bretaña (ambos se situaban en el nivel de 1.200.000 libras); durante ella también la expansión de la red ferroviaria (en particular el comienzo de la línea de Lima al Cerro de Pasco) puso las bases del renacimiento minero que vendría más tarde.

Para **Bolivia** la derrota iba a significar menos que para su vecino del Norte, precisamente porque en la etapa anterior a ella el *boom* salitrero no había logrado transformar los datos esenciales de la realidad boliviana. Si más tarde Bolivia iba a ver en el despojo del litoral oceánico que siguió a esa derrota una de las causas de su aislamiento y su arcaísmo económico, el he-

cho de que la posesión de ese litoral tampoco había servido para acercar a Bolivia a la economía mundial parecía disminuir las consecuencias inmediatas de su pérdida. El problema central de Bolivia no era, en efecto, la dificultad de comunicarse con el mercado mundial, sino la de hallar excedentes que instalar en ese mercado: la crisis de la plata continuaba, y la quina la reemplazaba sólo muy insuficientemente.

A mediados del siglo reemplaza efímeramente al sucesor de Belzú un gobernante civil, en el que las clases altas comienzan por reconocerse, para participar bien pronto en las protestas contra su riguroso estilo político. A Linares se debe el saneamiento de la moneda, que facilita el comercio con el extranjero, la reducción del cuerpo de oficiales y una moralización de la administración que le ganó una sólida impopularidad, pero le permitió duplicar los ingresos fiscales. Llegado al poder en 1857, Linares fue derribado en 1861 por un golpe de estado: desde entonces iban a sucederse gobernantes militares, la base de cuya popularidad iba a estar más centrada en el ejército que la de Belzú. A Achá reemplazó en 1864 Melgarejo, impulsado a la rebelión por la oligarquía adicta a Linares, que se creía capaz de manejarlo; ya bajo su gobierno, el poder político era en Bolivia más codiciado, porque abría posibilidades nuevas de provechosa corrupción: en la costa había comenzado la explotación del salitre, que dio lugar a concesiones excesivamente generosas a casas inglesas y chilenas; Bolivia tenía, por otra parte, territorios en litigio que se habían tornado también más atractivos: tras de ceder territorios a Chile y pactar en 1866 la explotación conjunta del litoral salitrero, en 1867 cedía a Brasil trescientos mil kilómetros cuadrados de selva amazónica; en lo interno, ante la invencible miseria fiscal, Melgarejo echó mano de las tierras de comunidades, de las que los indígenas eran considerados meros ocupantes, y organizó su venta, menos provechosa para el erario que para los compradores. En 1870 es derribado Melgarejo, y parece posible por un instante el retorno a la tutela política de las oligarquías urbanas, a las que la muerte del general Adolfo Balli-

vián priva de su dirigente más adecuado a un equilibrio político dominado por el ejército. En 1876 hay un nuevo dictador militar plebeyo, el general Daza, cuyo origen espurio (es hijo ilegítimo de un saltimbanqui italiano) y turbulenta adolescencia son recordados malignamente por la desplazada aristocracia. Daza, ante la constante penuria del fisco, decide obtener algo más de los concesionarios que explotan el salitre litoral; limita los derechos de algunos y declara caducos los de otros. Las compañías afectadas –en su mayor parte inglesas por su capital y en algún caso bolivianas por su lugar de constitución– se proclaman chilenas y reclaman el auxilio del Gobierno de Santiago. Éste –que se considera parte en el conflicto debido a los derechos adquiridos por el tratado de 1866– se apresura a proporcionarlo. Si la guerra del Pacífico es la primera en que los capitalistas europeos (y en este caso en menor grado norteamericanos) toman abiertamente partido –en favor de Chile y contra la alianza peruboliviana– la alegación de que el Gobierno de Santiago es sólo el agente de sus intereses parece por lo menos exagerada: la conquista del norte salitrero significa una ventaja muy importante para los sectores dominantes de la vida chilena.

En Perú se ha dado la reconstitución de una aristocracia urbana de la costa, y sobre todo de Lima; esa reconstitución tiene su origen primero en las larguezas del fisco, pero frente a él la elite que vuelve a ser rica guarda sus distancias; arraigada en parte en el pasado limeño, puede utilizar contra el Gobierno tanto un moralismo intermitentemente esgrimido contra las políticas que no la favorecen cuanto la fidelidad de las clases medias y de la plebe urbana, dispuestas a colaborar en la conquista del poder político demasiado tiempo monopolizado por los generales mestizos de la sierra. En Bolivia no se ha dado nada de eso: una economía estancada ha socavado la superioridad de las elites tradicionales, ha erigido frente a ellas un nuevo grupo gobernante, formado por un cuerpo de oficiales cuyo plebeyismo inculto, cuya alegre corrupción pueden ser enérgicamente denunciados, pero no parecen tener

consecuencias más duras que el gobierno de los representantes de la antigua elite, obligados a disgustar a todos exigiendo sacrificio en aras de objetivos (saneamiento monetario, depuración administrativa) cuyos beneficios son difíciles de advertir. Frente a los gobernantes militares la antigua elite puede mantener, como grupo, sus aspiraciones a reemplazarlos; no por eso deja de cooperar con esos gobernantes, a los que desprecia, proporcionándoles un decoroso séquito de legisladores y diplomáticos; tampoco renuncia a beneficiarse con esa cooperación (por ejemplo, participando en la compra de tierras indias).

En **Chile** la situación ha sido y sigue siendo distinta de la peruana y aún más de la boliviana. El orden conservador ha comenzado por limitar la fuerza del ejército; con la primera guerra del Pacífico las fuerzas armadas chilenas adquirieron un prestigio interno sin par en América latina; las ventajas de ser la expresión armada de la nación y sólo muy discretamente y en segundo plano la guardia del orden interno se hicieron evidentes para los oficiales del ejército chileno, que aceptaron de buen grado la misión supuestamente apolítica que el nuevo orden les asignaba, compatible con la presencia de presidentes militares durante los primeros veinte años de dominio conservador. Que en Chile el ejército fuese la expresión de la nación a la vez que de la facción dominante era para los observadores benévolos otro signo de la excepcionalidad de una experiencia más europea que latinoamericana; en todo caso explica en parte las características peculiares de la evolución chilena.

Ya durante el primer veintenio conservador, bajo la égida de los generales Prieto y Bulnes, la minería había comenzado –se ha señalado antes– a introducir un nuevo elemento en una sociedad dominada hasta entonces por los hacendados del Valle Central. El cambio de coyuntura a partir de 1848 aceleró el proceso: la modernización de Santiago, lo que parecía la quiebra vertiginosa de un estilo de vida cotidiana que

la emancipación política hacía afectado mucho menos, se acompañaba de una agitación ideológica que -se ha visto también- buscó expresiones deliberadamente desafiantes contra el catolicismo conservador, que era un aspecto del orden político dominante. Ahora bien, ese catolicismo era algo incongruente dentro del sistema: las dificultades de una clase dominante agraria muy tradicionalista y a la vez muy abierta al mercado ultramarino se reflejaban cotidianamente en los avances hacia la tolerancia de cultos, y en la fe en la posibilidad de un progreso cultural y técnico que se gustaba de suponer independiente pero no hostil a la fe recibida y al conjunto de nociones que tradicionalmente -pero a menudo abusivamente- se consideraban como formando cuerpo con ella. En la década del cuarenta hubo entonces un progresismo conservador, que retenía el rigor autoritario pero le fijaba objetivos en parte renovados: modernización económica y cultural antes que defensa de un orden que ya no se juzga tan amenazado. Ese progresismo tiene su figura dominante en Manuel Montt, ministro de modesto origen que bien pronto domina el gobierno de Bulnes.

En 1851 Montt será elegido presidente a costa de una escisión de los conservadores extremos y de un alzamiento liberal. Durante su decenio de gobierno (la reelección en mitad de él es canónica, como lo fue la de sus predecesores) se amplió la red ferroviaria desde el norte minero al centro agrícola-ganadero, con el ferrocarril de la capital a Valparaíso; se reformó el derecho privado, se suprimieron diezmos y mayorazgos, se reformó la Hacienda y se creó un banco oficial. Estas reformas aumentaron la resistencia del sector conservador extremo (exacerbada por un conflicto entre Gobierno y clero), sin desarmar al liberal, que seguía sufriendo las consecuencias del estilo autoritario del gobernante.

La sucesión de Montt creó de nuevo tensiones que debían desembocar en una guerra civil, en que liberales y conservadores extremos se aliaron contra el Gobierno Finalmente, éste se resignó a aceptar un candidato que, escogido en sus filas,

era a la vez grato a la oposición liberal. La transición del Chile conservador al liberal comenzaba así; iba a culminar en 1871 con la instalación en el poder del presidente Errázuriz Zañartu, el primero de extracción liberal.

Esa transición llevó a la adopción de principios esgrimidos desde antiguo por la oposición al conservadurismo: la enseñanza pública se expandió, creándose un sistema de institutos medios y ampliando la Universidad; aunque más cautelosamente, se acentuó la política laica, llegándose a proclamar la libertad de cultos. Pero era acaso más significativa la atenuación –o mejor la dispersión– del poder autoritario del Estado. Desde 1871 los presidentes no podían ya ser reelectos, y en un panorama político al que las divisiones del conservadurismo y las del liberalismo hacía más complicado, los gobernantes debían buscar el apoyo de núcleos políticos muy variados. A la enérgica conducción conservadora, que había devuelto el orden a Chile y luego inducido la modernización venciendo a veces resistencias de su propio bando, seguía ahora un estilo de gobierno deliberadamente menos activo: si la expansión del comercio y la minería habían ampliado a las clases altas chilenas y las habían dotado de actitudes más complejas y a menudo contrastantes, a la vez las habían hecho aún más poderosas; la liberalización no significaba una democratización, puesto que la ampliación del poder no excedía la de la clase económica y socialmente dirigente, que se limitaba a extender al campo político; la clase alta es, por el contrario, más sólidamente dueña del poder que antes. Esta solución –momentáneamente exitosa– se apoya en una coincidencia notable de intereses entre los viejos y nuevos sectores ricos: unos y otros son beneficiarios de la apertura creciente al mercado internacional; unos y otros dirigen, con tenacidad y confianza, al país hacia la victoria militar que sorprenderá a América latina y transformará durante algunos decenios a Chile, a los ojos de sus vecinos, en una respetada y también temida Prusia iberoamericana.

Chile sigue entonces ofreciendo en esta etapa el modelo de una política oligárquica exitosa; nada podría Hispanoaméri-

ca alinear al lado de él que pudiera compararsele. Aun el imperio brasileño pierde durante ella algo de su prestigio anterior: se da allí un deterioro progresivo del equilibrio político, ya en la etapa anterior menos perfecto de lo que hacían suponer versiones idealizadas.

La guerra de Paraguay –esfuerzo inesperadamente vasto exigido al imperio liberal en **Brasil**– inauguró la crisis de éste. La ruptura entre el mariscal Caxias, jefe de las fuerzas brasileñas combatientes en Paraguay, y el gabinete liberal, dio por resultado la caída de éste y (ante la solidaridad del partido con los caídos) el retorno al Gobierno del conservadurismo. Este resultado era consecuencia del arbitraje de la Corona, y explica la desafección creciente de los liberales por ésta: a las tentativas de limitar los poderes imperiales, acentuando los rasgos parlamentarios y federales del régimen, que no son nuevas entre los liberales, se acompañan ahora ataques todavía discretos a la institución misma.

Pero el apoyo decisivo que la Corona proporciona al jefe del ejército no le gana el reconocimiento durable de la fuerza armada. Caxias pertenece a una generación militar que en la guerra paraguaya domina por última vez el panorama; lo que deja tras de sí es un ejército más consciente de su fuerza (la guerra de Paraguay, aunque la conducción militar brasileña estuvo lejos de ser irreprochable, significó un esfuerzo del que pocos hubieran creído capaz al aparato militar del imperio), cada vez más exigente frente a una Corona poco sensible a sus presiones, a la vez que más distante de la clase política –escasamente renovada– que gobierna al país. Algunos sectores militares –los más jóvenes de entre su cuerpo de oficiales– hallan en el positivismo la ideología adecuada a su actitud: en él encuentran justificación para su rechazo de un equipo político al que reprochan a la vez su reclutamiento social demasiado estrecho (también en Brasil la oficialidad del ejército se recluta a menudo, por su parte, entre las clases altas y medias de las zonas más pobres y marginales) y su apego a una cultura

política anticuada y libresca, cuyo núcleo está en la jurisprudencia y no en las nuevas ciencias exactas y sociales. En el positivismo encuentran también esos oficiales los instrumentos para articular la exigencia de un nuevo tipo de autoritarismo progresista, más sensible, por otra parte, que en Hispanoamérica a motivos humanitarios y que tiene posición firme en favor de la abolición de la esclavitud. Se configura así un republicanismo militar, que se difunde en la medida en que logra identificarse con la defensa corporativa del cuerpo de oficiales: en 1885 éstos se colocan abiertamente tras de un colega amenazado de castigo por haber censurado periodísticamente al ministro de Guerra...

No son ésos los únicos golpes que el régimen debe afrontar. En Brasil el conflicto en torno a los avances del ultramontanismo afecta de modo muy directo a la Corona: las disposiciones de algunos obispos para asegurar una incompatibilidad real entre la pertenencia a la Iglesia y a la masonería (ocasionadas por la aparición pública de sacerdotes en ceremonias masónicas, en 1871), si fueron disciplinadamente obedecidos por los eclesiásticos, a los que impusieron el abandono de las logias, no tuvieron tanta fortuna con los dirigentes de congregaciones devotas laicas: algunas debieron ser disueltas por decisión episcopal. El Gobierno juzgó que los obispos habían excedido sus poderes: exigió que retractaran la medida y concluyó por apresarlos; esa política, sólo parcialmente inspirada por la masonería, era sobre todo continuación -en una clima nuevo- del regalismo primero portugués y luego imperial. Pero encontró un clero menos dócil que el de tiempos coloniales, y una corte romana acostumbrada a proclamarse perseguida; dentro de la Iglesia las posiciones conciliatorias fueron desechadas; la política de ruptura abierta se reveló fructuosa, porque en 1875 el Gobierno imperial debía liberar a los obispos sin haber obtenido en cambio concesión alguna de sus contrincantes eclesiásticos. El personal político conservador ocupó la vanguardia en este conflicto,

pero contó con el apoyo explícito del emperador, que fue el principal derrotado en él.

De este modo la organización política imperial se debilitaba desde dentro (por marginalización de ese partido liberal que era, desde hacía decenios, su sector más importante) y a la vez perdía el apoyo seguro -decisivo en Brasil- del ejército, y junto con él el menos importante de la Iglesia. Esa deterioración creciente se daba en un clima de transformación económica y social muy rápida, de la cual, por el momento, se advertía sobre todo la rápida destrucción del antiguo orden. Entre 1870 y 1885, la estructura de las exportaciones brasileñas varió completamente: en esa primera fecha los artículos que la dominaban eran el algodón y el azúcar, productos ambos del Nordeste, con extensiones de sus cultivos hacia el litoral central; en 1885 el café cubría el 62,2 por 100 de las exportaciones, el azúcar sólo el 11,34 por 100 y el algodón (cuya expansión había sido consecuencia de la guerra civil norteamericana y sufría ahora con la reconstrucción del sur de Estados Unidos) había perdido toda importancia. Es decir, que el Nordeste volvía a ser dejado atrás en la economía brasileña; el crecimiento del centro apenas bastaba, por otra parte, para compensar esta crisis de las zonas de agricultura tradicional (el valor total de las exportaciones permanece sustancialmente constante a lo largo de estos quince años). Al mismo tiempo, la crisis de 1875 tuvo consecuencias muy graves para la estructura financiera brasileña; como se ha visto ya, ésta era técnicamente más avanzada que la de los países hispanoamericanos, pero sus bases no eran excesivamente sólidas. La crisis del crédito europeo, al caer sobre un país que durante la guerra paraguaya había acrecido su deuda externa, provocó una crisis bancaria de la que fue víctima principal el vizconde de Mauá, cuyo banco había dominado la vida financiera brasileña durante el tercer cuarto del siglo XIX. Sin duda, la independencia de Mauá respecto de la finanza británica era más aparente que real; en todo caso, su caída reveló que Brasil no podía mantener ni aun esa parcialmente ficticia autonomía financiera.

La ruina del orden tradicional era aquí también evidente. En ese clima en que la decadencia parecía dar el tono general a la vida brasileña, el debilitado régimen imperial debió liquidar el más pesado de los legados de la pasada prosperidad: el problema de la esclavitud. Sin duda ésta perdía importancia con el transcurso del tiempo: la trata había sido eficazmente suprimida desde mediados del siglo, y la economía esclavista no era más capaz que antes de organizar el reemplazo de la mano de obra sin acudir a la importación. La libertad de los hijos de esclavos, decretada en 1871, debía acelerar la desaparición de una institución ya en ruinas: los esclavos eran dos millones y medio en 1850, un millón en 1874, setecientos mil en 1887. Pero la decadencia de la esclavitud aparecía como un aspecto de la decadencia de la economía agrícola esclavista, y las reformas ya introducidas a la institución transformaban al Estado en uno de los responsables de ese deterioro. Sin duda, los gabinetes conservadores se obstinaron en la oposición a la emancipación general, en la que sectores cada vez más amplios de la opinión pública brasileña veían la única salida para una situación que parecía cada vez más aberrante; el emperador, si se manifestó adicto a la solución emancipadora (hasta el punto de inquietar a sus ministros), se abstuvo durante mucho tiempo de imponer un gobierno que compartiese en ese punto sus ideas. Un problema colateral, pero muy importante, era el de la indemnización de los propietarios de esclavos: por una parte, las finanzas brasileñas no estaban en condiciones de afrontarlo; por otra, la importancia creciente de sectores agrícolas que utilizaban mano de obra no esclava, que se oponía ardientemente a participar en los costes de cualquier indemnización, aumentaba las dificultades políticas de la operación. Finalmente, la emancipación llegó –y sin indemnización– en 1888; luego de ella, los sectores de agricultura esclavista (que, habiendo formado a veces en la primera mitad del siglo en las filas liberales, se identificaron luego con el antiabolicionismo conservador) se sintieron desligados de cualquier lealtad por la institución monárquica, por la que se consideraban traicionados.

El republicanismo, cada vez más popular en el ejército, había echado raíces además en la provincia que estaba al frente de la expansión cafetera, San Pablo; en Minas Gerais, que seguía siendo la más poblada de Brasil, el liberalismo (que tenía allí uno de sus focos principales) se alejaba, por su parte, cada vez más del marco monárquico. Finalmente, el republicanismo ganó un adepto de excepcional importancia: el mariscal Deodoro da Fonseca, que mantenía el orden en el ejército para los conservadores. Un golpe militar que no encontró resistencia derribó en 1889 la monarquía: el ejército y las elites políticas del Brasil central, donde se estaba elaborando la expansión del café, eran los beneficiarios principales del cambio institucional.

La república brasileña -que inscribió en su bandera el lema positivista de «Orden y progreso»- significó la alineación de Brasil sobre el modelo de regímenes progresistas, en que el influjo de la oligarquía terrateniente era integrado en proporciones variables con el del ejército, del que hemos visto ya variados ejemplos en la América española. Ese nuevo orden se apoyaba en raíces más vigorosas de lo que podría hacer suponer la evolución algo lánguida de los últimos veinte años de régimen imperial. El Brasil del café no iba a necesitar de la esclavitud; la inmigración europea iba a cubrir sus necesidades de mano de obra a plazo más largo era la expansión demográfica brasileña, que comenzaba a tomar ritmo sostenido (la población había pasado entre 1872 y 1888 de diez a catorce millones de habitantes) la que aseguraría la disponibilidad de una mano de obra abundante y barata. Liberado del lastre de su institución peculiar, Brasil iba a entrar en la etapa de crecimiento febril y crisis devastadoras, en la cual estaba ingresando, por otra parte, toda Latinoamérica a medida que se consolidaba en ella el orden neocolonial.

Éste se afirmaba también en las **Antillas** de colonización española, en particular en Cuba, mientras Puerto Rico conocía una expansión azucarera y, sobre todo, cafetera de ritmo más lento y consecuencias sociales más limitadas, y **Santo Domingo**,

permanecía apegada a una economía muy escasamente renovada desde tiempos coloniales. Ocupada por fuerzas haitianas hasta 1844, iba a ser liberada por un alzamiento dirigido por la elite criolla de la capital, que en 1861 organizó la reincorporación a España, esperando encontrar en la vieja y nueva metrópoli un punto de apoyo externo para su amenazada supremacía. España cumplió esa función muy insuficientemente; *si hizo capitán general al ex presidente Santana*, se desinteresó de su recuperada colonia, y en 1865 se resignó sin esfuerzo a verla optar nuevamente por la independencia; ésta marcaba a la vez el fin del predominio de los reducidos sectores blancos; los presidentes mulatos de la etapa siguiente aceptaron los rasgos esenciales del orden dominante, y –como por otra parte venía ocurriendo en más de una región hispanoamericana– se limitaron a modificarlo para introducir entre los sectores privilegiados a su séquito militar, a menudo de origen social modesto.

Pero **Cuba**, todavía dependiente de España, conocía en cambio transformaciones agitadas y complejas. La expansión azucarera seguía su curso: si en 1820 se exportaban 50.000 toneladas, y en 1850, 200.000, en 1870 la producción llegaba a más de 700.000 toneladas, casi en su totalidad destinadas a esa exportación. Esos avances mantenían al azúcar como producto dominante en el cuadro de las exportaciones cubanas, de las que cubría el 80 por 100 en 1820 y el 75 por 100 en 1865, y conservaban su ritmo sostenido pese a un descenso paulatino de los precios internacionales. Éste era lo bastante lento como para que la técnica de producción azucarera cubana –relativamente rudimentaria– y la multiplicidad de centros elaboradores de volumen pequeño pudiesen mantenerse a lo largo de esta etapa.

El problema principal de la economía azucarera era el de la mano de obra: la utilización de los negros esclavos era dificultada por la resistencia británica a la trata; el gobierno español, por su parte, sostenía discretamente una continuación del comercio de negros, nominalmente ilegal. Aun así, los esclavos se hacían cada vez más caros; a mediados del siglo se buscaron

soluciones alternativas, recurriendo aún a la importación de mayas cautivos luego de su derrota en la guerra de castas del Yucatán; como en Perú, la inmigración china pareció, sin embargo, ofrecer la mejor alternativa a la cada vez menos fácil importación de negros. Un problema adicional significaba para Cuba la importancia creciente del mercado consumidor norteamericano, defendido por tasas de importación destinadas a proteger el azúcar de Luisiana; esta importancia se afirmaba cada vez más a medida que en Europa el azúcar de remolacha desplazaba al de caña. Una solución conjunta a ambos problemas parecía ofrecerla el anexionismo, popular entre algunos hacendados y azucareros en la década del cincuenta, al que la guerra de Secesión hizo luego perder vigencia.

Mientras tanto, maduraba en Cuba una crisis del régimen colonial. En la década del cincuenta la metrópoli adoptó una actitud más matizada frente al problema de la trata; su valor como garantía del mantenimiento de la esclavitud se revelaba cada vez más limitado. Por otra parte se daba en Cuba -de modo sin duda más marcado que cincuenta años antes en el continente- una oposición entre peninsulares y criollos que -apoyada, por ejemplo, en conflictos entre productores nativos y comercializadores españoles del tabaco- se intensificaba en la medida en que el régimen colonial veía en los peninsulares residentes en Cuba a su más sólido apoyo, y adquiría intensidad nueva desde que los grandes propietarios cubanos de esclavos comenzaron a desconfiar de que el Gobierno de Madrid siguiese apoyándolos indefinidamente. La arbitrariedad de un régimen marcado por el predominio de los elementos militares agudizó este conflicto latente; en 1868 comenzaba la primera guerra de Independencia de Cuba, que iba a durar diez años. Los insurgentes formaban una coalición muy incómoda; la sociedad criolla estaba cruzada de tensiones, y la revolución no quería definirse frente a sus causas; la cautela con que encaró el problema de la esclavitud (no se atrevió ni siquiera, como lo habían hecho a menudo los revolucionarios en el continente hispanoamericano, a emancipar a los negros

que tomasen las armas en su apoyo) es una muestra de esta actitud. En 1875 la restaurada monarquía española obtuvo la paz con los rebeldes a los que no había logrado derrotar: otorgaba a la isla autonomía política y una representación en el parlamento metropolitano. La guerra prosiguió todavía tres años contra los elementos más radicales, capitaneados por el general negro Antonio Maceo, dispuesto a rechazar toda paz que no reconociese la independencia de la isla y la abolición de la esclavitud. Derrotado Maceo, la paz española volvió a implantarse sobre Cuba en 1878. La guerra había destruido buena parte de la riqueza rural, y sobre las ruinas de las fortunas criollas y españolas se insinuaba un nuevo aspirante al dominio de la tierra cubana: el inversor norteamericano, que al mismo tiempo imponía su predominio sobre el comercio de exportación (para lo cual se organizaba en compañías monopolísticas en 1880). El cambio fue facilitado por una crisis profunda de precios, que obligaba a la industria cubana a transformarse para sobrevivir: surgieron luego de la guerra las primeras *centrales*, ingenios modernos que comenzaron a comprar tierras en gran escala, pero dominaron también muy pronto a los productores pequeños y medianos, trabajasen o no en tierra propia: los colonos, que explotan tierras a menudo relativamente vastas y tienen asalariados que pueden ser numerosos pero que están atados por deudas a una central a la que se comprometen a vender el total de su caña, pasan a ser un elemento social característico de las tierras del azúcar.

Se da así en Cuba un nuevo tipo de participación extranjera en la economía: el influjo de la nueva metrópoli norteamericana no se limita a la comercialización o a los transportes: se extiende a las transformaciones industriales y avanza hacia una conquista de la tierra. De este modo, la colonia que aún no ha logrado emanciparse de la tutela española se adelanta a otras zonas hispanoamericanas para ubicarse bajo una tutela de nuevo tipo; en el destino que comenzaba a prepararse para Cuba al terminar la guerra de diez años, más de una nación hispanoamericana hubiese podido reconocer los rasgos esenciales de su propio futuro.

Capítulo 5
Madurez del orden neocolonial

En 1880 -años más, años menos- el avance en casi toda Hispanoamérica de una economía primaria y exportadora significa la sustitución finalmente consumada del pacto colonial impuesto por las metrópolis ibéricas por uno nuevo. A partir de entonces se va a continuar la marcha por el camino ya decididamente tomado. El crecimiento sera aun más rápido que antes, pero estará acompañado de crisis de intensidad creciente: desde las primeras etapas de su afirmación, el orden neocolonial parece revelar a través de ellas los límites de sus logros; si no puede decirse que nace viejo -por el contrario, el vigor de su avance no tiene par en el pasado latinoamericano-, nace por lo menos con los signos ya visibles de un agotamiento que llegará muy pronto. Este avance por explosiones, que no siempre logran dejar otra huella permanente en la tierra por ellas tocada que una devastación comparable a la de una catástrofe natural, debe, sin duda, en parte -pero sólo en parte- sus turbulencias a la vinculación creciente con unas metrópolis que viven ellas mismas una coyuntura económica más sacudida.

Al mismo tiempo que se afirma, el nuevo pacto colonial comienza a modificarse en favor de las metrópolis. La distribución de tareas entre ellas y las clases altas locales (que había

comenzado por asignar a estas últimas en casi todos los casos la producción primaria y a las primeras la comercialización) aun allí donde se mantiene adquiere un sentido nuevo gracias a la organización cada vez menos libre de los mercados, facilitada por las transformaciones técnicas pero vinculada sobre todo con la de las estructuras financieras. Pero esa misma distribución de tareas no siempre se mantiene: algunas actividades primarias (sobre todo la minería) que exigen desde el comienzo aportes considerables de capital, pasan precozmente bajo el dominio de las economías metropolitanas. La misma complejidad creciente de las actividades vinculadas con transporte y comercialización multiplica la presencia de esa economía en el área latinoamericana: no sólo los ferrocarriles, también frigoríficos, silos de cereales e ingenios de azúcar pasan a ser, en medida variable según las regiones, enclaves de la economía metropolitana en tierras marginales; en particular son las metrópolis de presencia más reciente las que se lanzan más agresivamente a la conquista de las economías dependientes, que culmina en la de la tierra: en ciertas áreas, ya hacia 1910, la alianza entre intereses metropolitanos y clases altas locales ha sido reemplazada por una hegemonía no compartida de los primeros: es el caso de Guatemala, donde capitalistas alemanes se han apoderado ya del comercio del café y han conquistado las mejores tierras productoras, es –todavía más caracterizadamente– el de Cuba, primero española y luego independiente, y en ambas etapas abierta a la conquista de la tierra azucarera por compañías norteamericanas; comienza a ser el de Puerto Rico, el de Haití y Santo Domingo, el de las tierras bajas de América Central, donde va a erigirse el imperio del banano, gobernado desde Boston...

Estos ejemplos, sin duda extremos, revelan, sin embargo, una tendencia más general: el debilitamiento de las clases altas terratenientes, pese a sus apoyos en las estructuras políticas, comerciales y financieras locales, frente a los emisarios de las economías metropolitanas. Ese debilitamiento va acompañado de otro proceso, de intensidad variable según las re-

giones, por el cual las clases altas ven surgir a su lado clases medias –predominantemente urbanas– cada vez más exigentes, y en algunas zonas más limitadas deben enfrentar también las exigencias de sectores de trabajadores incorporados a formas de actividad económica modernizadas. Este último proceso –que se da sobre todo allí donde la economía local es más vigorosa y, por tanto, las clases altas se defienden mejor contra las presiones metropolitanas– tiene su correlato político en un comienzo de democratización: mientras en México ésta se da revolucionariamente, en Argentina, Uruguay y Chile se manifiesta a través del acceso al poder de nuevos sectores mediante el sufragio universal.

Este último se da dentro del marco del orden neocolonial y las tendencias que lleva al triunfo no se oponen de modo militante a la persistencia de ese orden; acaso por eso mismo las experiencias democráticas son tan afectadas como las oligárquicas por la crisis de 1930, que revela bruscamente el agotamiento del nuevo pacto colonial.

No son sólo los signos anunciadores de ese agotamiento los que dan a la etapa de expansión febril en examen sus demasiado brutales altibajos: influye también el hecho de que América latina pasa cada vez más decididamente, de ser zona reservada a la influencia británica, a constituirse en teatro de la lucha entre influencias viejas y nuevas, que con estilos propios intentan repetir la conquista económica con tanto éxito llevada adelante por Inglaterra luego de 1810. Esa lucha se da sobre una Latinoamérica que ha agregado a su dependencia mercantil una cada vez más estricta dependencia financiera y, debido a ello, va a ser teatro de múltiples conflictos desiguales con sus poderosos acreedores; como en Egipto, el vínculo financiero servirá en algunos casos de punto de partida para un esbozo de dependencia política y militar directa, que –tras de ensayos reiterados y frustrados de potencias continentales europeas, a las que se une a comienzos del siglo XX la habitualmente cautelosa Inglaterra– es finalmente retomado por Estados Unidos en el área del Caribe, donde

pasa a ejercer durante largos períodos funciones que van desde la percepción de impuestos aduaneros y la protección militar del orden interno hasta el ejercicio liso y llano del gobierno de estados que, sin embargo, retienen nominalmente su independencia.

El tránsito del intervencionismo europeo a la tutela norteamericana se consuma en el conflicto venezolano; parece, por tanto, necesario examinar ese conflicto con cierto detenimiento. A principios del siglo XX, el Estado y los particulares venezolanos son deudores insolventes de poderosos acreedores ingleses y alemanes. Como medio siglo antes Inglaterra y Francia en el Río de la Plata, ahora Inglaterra y Alemania buscan atenuar sus tensiones mediante una acción conjunta contra sus inermes deudores sudamericanos: Italia se agrega a la alianza, y una fuerza naval tripartita bloquea en 1902 los puertos venezolanos. El presidente norteamericano Teodoro Roosevelt había dado su aprobación anticipada a la iniciativa, necesaria a su juicio para devolver alguna seriedad a los responsables de las finanzas sudamericanas. Pero la opinión pública latinoamericana vio con alarma e indignación el retorno a los usos internacionales de hacía medio siglo; el agresivo nacionalismo dominante en Estados Unidos veía, por su parte, con preocupación la reaparición de las potencias europeas en un área que se había acostumbrado a considerar suya. Expresión de ambas reacciones fue, por una parte, la doctrina Drago, en la que el canciller argentino proclamaba que el uso de la fuerza militar era inaplicable a las relaciones entre deudores y acreedores, aun cuando éstos o aquéllos fuesen Estados, y el llamado corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, a través del cual Estados Unidos (persistiendo en su actitud de fijar por pronunciamientos unilaterales las bases del orden internacional americano) sostenía que en caso de que la escasa voluntad de ordenar sus finanzas hiciese a un Estado latinoamericano deudor crónico, correspondía a Estados Unidos, y sólo a ellos, persuadirlo mediante el uso de la fuerza a adoptar las refor-

mas necesarias, así fuese en beneficio de acreedores europeos y no estadounidenses.

De este modo Estados Unidos asumía el papel de gendarme al servicio de las relaciones financieras establecidas en la etapa de madurez del neocolonialismo; los hechos iban a demostrar con cuánta seriedad estaba dispuesto a encarar sus nuevos deberes en los treinta años que iban a seguir. No era ésta, sin embargo, la única innovación en las relaciones de Latinoamérica con su cada vez más poderoso vecino, ni la única causa de las intervenciones de éste. En algunas ocasiones éstas aparecieron inspiradas en el deseo de devolver a prácticas políticas más sanas a algunas naciones hispanoamericanas; estas intervenciones algo erráticas, apoyadas en una suerte de puritanismo político desmentido en otros casos, solían ser recibidas con una mezcla de indignación e incredulidad en Latinoamérica, y –como en el caso de la actuación contra el mexicano Huerta, dispuesta por Wilson en 1914– tenían a menudo la consecuencia de comprometer la causa que se proponían apoyar.

Esta forma de justificar la intervención solía ser interpretada al sur del río Grande como pura hipocresía; con ello los latinoamericanos demostraban entender muy mal las tendencias dominantes en la nueva potencia hegemónica, y ser incapaces de reconocer en el horror *yankee* por el estilo demasiado autoindulgente practicado por los sectores dirigentes latinoamericanos en política y finanzas un eco del horror por el viejo Adán, que ni aun la revolución puritana ha matado del todo en ellos mismos. Pero si el contrapunto sutil de dos tradiciones culturales, que permite hoy a Richard Morse descubrir, tras de la oposición entre la tradición de Locke, Smith y Bentham y la más revolucionaria de Marx, la huella de una oposición más vieja entre Calvino y Santo Tomás, escapaba por completo a la comprensión de los latinoamericanos, éstos, en cambio, parecían advertir con cruel claridad que estas imperiosas exigencias de pureza política sólo eran llevadas adelante sin desfallecimientos cuando servían de justificativo para la conquista de muy concretas ventajas para intereses

norteamericanos, y que en otros casos esos intereses se imponían utilizando procedimientos que aun los menos estrictos latinoamericanos encontraban chocantes.

En todo caso, esa supuesta hipocresía estadounidense era el modo con que los latinoamericanos percibían ciertos rasgos de la nueva potencia dominante que iban a hacer particularmente pesada su hegemonía: en el pasado, frente a las fallidas cruzadas por la libertad o por la tradición católico-autoritaria emprendidas por Francia, la más exitosa Inglaterra había prescindido de dar a su hegemonía cualquier sentido militante; sin duda, ello no nacía de respeto alguno por las peculiaridades hispanoamericanas, sino de que aun Gran Bretaña no había identificado su función imperial con la de suplir las carencias de los *lesser breeds without the Law*, entre los que incluía, sin duda, a los latinoamericanos. En todo caso, una consecuencia benéfica de esa despectiva indiferencia era que las comarcas sometidas al predominio británico no sufrían en general más inconvenientes que los destinados a asegurar ventajas concretas a los intereses dominantes, y se ahorraban la necesidad de escuchar respetuosamente las exhortaciones y reprimendas que, en cambio, iba a prodigarles la nueva metrópoli en ascenso.

Sería peligroso, sin embargo, buscar a esa diferencia entre la vieja y la nueva metrópoli causas exclusivamente histórico-culturales. Ella se da en medio de una acentuación de la dependencia latinoamericana que se vincula con transformaciones muy precisas de la estructura económico-financiera mundial. En este marco, la vocación pedagógica estadounidense se transforma en un mecanismo más de dominación; se identifica con el esfuerzo por imponer una imagen de la relación entre Estados Unidos y su área de influencia americana que –elaborada por la metrópoli– refleja sin duda sus tradiciones ideológicas pero a la vez tiene como feliz consecuencia práctica que –una vez aceptada en el área dominada– la ruptura del vínculo de dominación se hace impensable.

Este interés (aparte de otras ambiciones aún más vastas) explica la tenacidad con que Estados Unidos terminó por reto-

mar luego de algunas intermitencias la institucionalización de sus relaciones con Latinoamérica, que culminaría sólo en la segunda postguerra en la formación de la Organización de Estados Americanos con carácter de pacto regional en el marco de las Naciones Unidas. La gradualidad del avance, la vaguedad de los primeros compromisos asumidos por los miembros del naciente sistema interamericano explican en parte que hayan colaborado en su creación –así fuese con constantes reservas– países que estaban aún lejos de sufrir el predominio norteamericano y mantenían frente a sus avances una hostilidad no disimulada. Por otra parte –hasta la segunda guerra mundial– el progreso de la organización interamericana, que no era aún puesta al servicio de la política estadounidense frente al Viejo Mundo, parecía ofrecer acaso una alternativa más bien que una base legal a las formas más directas de expansión norteamericana; el establecimiento de un más estricto orden internacional americano parecía, en efecto, incompatible con las agresiones abiertas que no escasearon en esas décadas. Parecía confirmar esa impresión el hecho de que (luego de las primeras tentativas orientadas a lograr la incorporación económica de Latinoamérica al área norteamericana) los progresos de la idea panamericana entre los dirigentes de la política de Estados Unidos se hacían más rápidos precisamente cuando las tentativas de tutela directa eran momentáneamente abandonadas. Estas ventajas inmediatas explicaban los avances de un sistema internacional que desfiguraba meticulosamente las relaciones efectivas de poder: suponía, en efecto, la igualdad de todos los estados que lo integraban y, por añadidura, la indefectible coincidencia de sus intereses.

El movimiento panamericano en sus primeras etapas ocupa frecuentemente lugar muy marginal en la efectiva política latinoamericana de Estados Unidos. Ésta se desarrolla bajo la doble inspiración de las necesidades estratégicas y del acrecido potencial económico estadounidense que, decisiva en el lanzamiento del movimiento panamericano, pasa en éste bien pronto a segundo plano. El movimiento, difundido en Esta-

dos Unidos en pleno triunfo de la política proteccionista con que se identifica el partido republicano, tiene por primer inspirador a Blaine: en ese fin de siglo el proyecto de unificación aduanera de las Américas y el de ferrocarril panamericano tenían un decidido aire de época; eran la réplica, en el clima de afirmación de los imperialismos, de proyectos como el Berlín-Bagdad y El Cairo-Capetown. Pero por varias razones se revelaba menos capaz que esos modelos de arraigar en la realidad: el ascendiente de la economía norteamericana se daba sólo en zonas restringidas de Latinoamérica; en éstas (y aún más decididamente en las restantes) el influjo de las nuevas y viejas metrópolis económicas europeas era demasiado grande para que fuese fácil barrerlo en beneficio de un indisputado predominio estadounidense; por otra parte, la posición de las naciones latinoamericanas en el ordenamiento jurídico internacional se había fijado en la etapa anterior bajo el signo de la tanto menos exigente hegemonía mercantil británica; por muchas que fuesen las insuficiencias políticas y financieras de más de uno de los nuevos estados, su plena soberanía internacional era formalmente ineliminable, en este sentido Latinoamérica se prestaba menos que las zonas en colonización del Viejo Mundo para empresas de abierta conquista.

El proyecto panamericano iba a encontrar, por otra parte, una resistencia abierta y eficaz capitaneada por Argentina, cuya expansión, extremadamente rápida, se acompañaba de un estrechamiento de la dependencia comercial y sobre todo financiera de Gran Bretaña. En la Conferencia panamericana de Washington, en 1889-90, un miembro de la delegación argentina, Roque Sáenz Peña, opuso a la fórmula estadounidense de América para los americanos, la de América para la humanidad, que reflejaba a la vez la decisión de algunos países de mantener sus vínculos desiguales con metrópolis europeas y la de los sectores que dentro de otros se oponían al avance ya amenazante de la hegemonía norteamericana.

De todos modos, aún Argentina iba a participar en la creación de la Oficina Internacional de las Repúblicas America-

nas, una institución que, primero destinada a recoger información económica, fue adquiriendo gravitación creciente a lo largo de las sucesivas reuniones panamericanas: en México (1901-1902) el organismo recibió un cuerpo de gobierno integrado por todos los embajadores latinoamericanos en Washington y presidido por el secretario de Estado de Estados Unidos; en 1910, en Buenos Aires, esa Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas se transformó en Unión Panamericana. Sin embargo, las tendencias a crear un ordenamiento regional se debilitaron progresivamente en América latina: la búsqueda de un sistema de normas internacionales capaz de limitar, por lo menos en sus aspectos políticos, las tendencias expansivas de Estados Unidos se orientaba cada vez más hacia los organismos mundiales en embrión, en especial el tribunal internacional de La Haya; junto a ellos se esperaba contar con la influencia equilibradora de las grandes potencias europeas. La disgregación del concierto europeo, anticipada desde 1911 y producida en 1914, tendió a debilitar esta orientación; aun quienes mantenían reservas frente a la hegemonía norteamericana redescubrían ahora la importancia de tender una barrera entre Latinoamérica y los conflictos europeos; agotada la eficacia (por otra parte muy variable) que en este aspecto había tenido el poder naval británico, no parecía imposible reemplazarlo con una organización regional interamericana apoyada en el poderío de Estados Unidos.

La tentativa de construirla dominó la reunión de Santiago de Chile (1923), en la que Uruguay (que en el Sur del continente había mantenido posiciones excepcionalmente filoestadounidenses) propició lo que llamaba la internacionalización de la doctrina Monroe; Estados Unidos, vuelto al aislacionismo, se rehusó a apoyar la propuesta garantía multilateral de la independencia e integridad de todos los Estados americanos, dirigida en el proyecto no sólo contra amenazas extracontinentales. Con ello confirmaba los temores que su política americana hacía surgir; en 1928, en la conferencia de La Habana, ésta despertaba resistencias muy vivas referidas tanto al

«derecho de intervención» reivindicado por Estados Unidos en las naciones latinoamericanas, cuanto al proteccionismo aduanero norteamericano, que gravitaba duramente sobre algunas economías latinoamericanas. Esas resistencias, vivaces pero desorganizadas, no tuvieron consecuencias, salvo en la medida en que hicieron evidente al gobierno de Estados Unidos la necesidad de presentar su política latinoamericana desde perspectivas menos irritantes para sus interlocutores. Aún en 1928 se mantenía la tendencia norteamericana a limitar el marco en el cual debía moverse la Unión Panamericana, mientras eran frecuentes entre los latinoamericanos las veleidades de transformarla en punto de partida de un orden regional que reemplazara en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica a las iniciativas unilaterales de la gran potencia del Norte.

Esa tendencia sólo iba a invertirse más adelante, cuando a las consecuencias de las olas de inversiones norteamericanas de la década del veinte se sumaran las de la crisis mundial de la década siguiente para dejar en pie sólo ruinas aisladas del anterior orden económico centrado en Europa y aumentar la dependencia latinoamericana respecto de Estados Unidos; cuando éste –en medio de las tensiones que llevarían a la segunda guerra mundial– creyese oportuno agregar a su propia gravitación internacional la del sistema interamericano, vocero de un entero continente. Sólo entonces ese sistema volvería a ser, como cuando Blaine lo proyectó, uno de los instrumentos esenciales de la política latinoamericana de Estados Unidos.

Hasta entonces esa política había preferido cauces más directos que el que podía proporcionar el organismo interamericano. Ella tenía –se ha dicho ya– a la vez raíces estratégicas y económicas. La estrategia impulsaba la expansión en el área del Caribe y América Central, que desde mediados del siglo XIX estaba atravesada por una de las líneas más importantes de comunicación interna de Estados Unidos. La expansión política tuvo su comienzo en la guerra hispanoamericana en que desembocó en 1898 la segunda guerra de Independencia de

Cuba, comenzada en 1895. Su increíblemente fácil victoria no sólo alentó a Estados Unidos a nuevas aventuras; le dejó un conjunto de posesiones ultramarinas y le permitió adquirir una experiencia nueva en la administración colonial de tierras antes españolas.

El tratado de París dejó a Estados Unidos dueño de Puerto Rico y dominante en la nueva Cuba independiente; ese resultado fue recibido con sentimientos mezclados por la opinión hispanoamericana, en la cual la causa de la independencia cubana tenía amplia popularidad. El paso siguiente –la creación de Panamá sobre el territorio ístmico perteneciente a Colombia– causó más inmediata alarma. En el istmo existía, desde mediados del siglo XIX, un ferrocarril de propiedad norteamericana, cuya prosperidad, vinculada con la del oeste de Estados Unidos, había disminuido desde que se completó el sistema ferroviario metropolitano, vinculando la costa atlántica y la del Pacífico. Algo más tardíamente Ferdinand de Lesseps planeó construir, con autorización colombiana, un canal interoceánico paralelo a la línea ferroviaria; entre 1878 y 1889 llevó adelante obras que resultaron más costosas de lo esperado; en esa última fecha su compañía cayó en medio de un escándalo político-financiero que para muchos de los adversarios del régimen anunciaba el fin de la tercera república francesa. Los restos de maquinarias y excavaciones, junto con la concesión colombiana, eran lo único que los acreedores de Lesseps lograron salvar del desastre; se constituyeron en Nueva Compañía del Canal de Panamá con la esperanza de vender todo ello a precio alto.

Luego de la guerra con España, Estados Unidos se mostró dispuesto a comprar; en 1903 un tratado con Colombia consagraba el acuerdo previamente logrado con la Nueva Compañía y entregaba en arriendo a la potencia que construiría el canal una franja territorial de diez millas de ancho de océano a océano. El Congreso colombiano se negó a ratificar el tratado; el 3 de noviembre un alzamiento dirigido por agentes locales de la Nueva Compañía proclamaba la república independien-

te de Panamá, el 6 Estados Unidos reconocía esa independencia y el 18 Hay firmaba con Bunau Varilla, que había pasado de ingeniero-jefe de la Nueva Compañía a agente panameño en Washington, un acuerdo que repetía en lo esencial el rechazado por el Parlamento colombiano. A cambio de la concesión perpetua de una zona de diez millas entre la capital de la nación y su principal puerto atlántico, Estados Unidos concedía a Panamá un subsidio anual y garantizaba su independencia (esta función la venía cumpliendo ya, por otra parte, con intenso celo: desde el comienzo del alzamiento panameño, buques de guerra norteamericanos habían protegido a éste de cualquier eventual expedición colombiana).

La creación en Panamá de un estado protegido provocó reacciones ineficaces, pero muy amplias, en toda Latinoamérica; aun en Estados Unidos no fueron pocos quienes dudaban de la prudencia de una política que sacrificaba a ventajas inmediatas, sin duda importantes, el respeto formal a las normas de convivencia internacional. El presidente Teodoro Roosevelt parecía, por el contrario, hallar en la brutal sinceridad de su política su mérito principal: fue él quien -de acuerdo con el gusto de la época de madurez de los conflictos imperialistas había desarrollado lo que llamaba realismo político-, la bautizó política del garrote: a su juicio, Estados Unidos no debía vacilar en utilizar el «garrote» *(big stick)* para imponer su disciplina a las veleidosas repúblicas del Sur.

De este modo, mientras en las organizaciones panamericanas Estados Unidos contribuía a erigir la ficción de una comunidad de naciones libres e iguales, llevaba adelante una política que se justificaba por una abierta polémica frente a esa igualdad ficticia. Esa política encontraba sus límites en los del poderío y los intereses norteamericanos: militarmente tenía su núcleo en el Caribe y Centroamérica; el área de intereses e inversiones norteamericanas, si era algo más amplia, tenía también allí su centro principal. Esa concentración en un área aún reducida de Latinoamérica iba a ser justificada igualmente por Teodoro Roosevelt, una vez abandonada la

presidencia: sólo en el Caribe y en Centroamérica el desarrollo real de las naciones latinoamericanas era tan lento que éstas seguían necesitando tutela. Los grandes países del Sur –Brasil, Argentina, Chile– estaban, en cambio, en condiciones de ejercer en los hechos su soberanía, y nada tenían que temer de los avances norteamericanos. Esta justificación tranquilizadora se dirigía a naciones cada vez más conscientes de su importancia acrecida y de su responsabilidad en el mantenimiento del orden latinoamericano: si en el siglo XIX las tensiones entre Brasil y Argentina habían sido muy fuertes, si entre Argentina y Chile la guerra estuvo cercana en la década del ochenta y de nuevo en 1902, desde comienzos del siglo XX el acercamiento reemplazó progresivamente a la hostilidad e iba a llevar a la formación de una suerte de alianza informal (el grupo llamado, por las iniciales de las naciones integrantes, ABC), que iba a ampliar su esfera de acción a través de la tentativa de mediación entre Estados Unidos y México, en 1914. Estados Unidos, que bajo la dirección de Wilson encaraba de modo nuevo su función de tutela sobre sus vecinos del Sur, no recibió con hostilidad la iniciativa de los países australes; la primera guerra mundial, sin embargo, al poner en crisis la totalidad del orden internacional en que el ABC quería integrarse, puso fin a la tentativa, que en el clima de la entreguerra, agitado sobre todo por conflictos sociopolíticos dentro de cada nación latinoamericana, y menos rico en cambio en tensiones entre las naciones herederas de España y Portugal, cuyas derivaciones quería prevenir por su gravitación la alianza austral, no hubo de resurgir.

Hacia 1914, entonces, la influencia norteamericana se afirmaba sobre todo sobre el área del Caribe y Centroamérica. Entre la guerra y la depresión el avance de esa influencia iba a ser muy rápido: los países del Pacífico serían totalmente ganados por ella; Brasil y aun Uruguay y Argentina iban a sufrir también su impacto. El fin de la era del ferrocarril (más de una pequeña nación latinoamericana no la habría conocido nunca) significaba la pérdida para Inglaterra de un instrumento de

dominación mercantil y financiera muy valioso. Estados Unidos se beneficiaba ahora con los triunfos del transporte automotor, que sin necesidad de inversiones de capital comparables a las que habían marcado el comienzo de la red ferroviaria, le aseguraban nuevos mercados. Al mismo tiempo, las inversiones norteamericanas –innecesarias para ampliar el consumo de productos de la nueva metrópoli– iban a dirigirse no sólo hacia industrias extractivas o de mínima elaboración orientadas hacia el mercado metropolitano, sino también hacia otras dirigidas al mercado local o, en todo caso, no al estadounidense. Gracias a este proceso iba a crecer también en otros planos la gravitación de Estados Unidos (muy característicamente en la tercera década del siglo XX, mientras Argentina seguía buscando asesoramiento de expertos en economía en Gran Bretaña, las misiones técnico-financieras norteamericanas eran ya visitantes habituales en los países del Pacífico).

Pero esos nuevos avances no se apoyaban en la intervención político-militar, que siguió limitada aún en esta etapa al área en que ya era tradicional. A la vez las modalidades de la expansión norteamericana (que no siempre se acompañaba de la apertura del mercado metropolitano a los productos de las áreas dominadas y tendía a avanzar sobre sectores de actividad económica que en la etapa anterior habían permanecido reservados a los sectores dominantes locales) crearon una resistencia que continuaba con temas nuevos la despertada por la intromisión política tan frecuente ya en la preguerra.

Frente a Estados Unidos las viejas naciones hegemónicas emprenden una cautelosa retirada; la más importante de todas, Gran Bretaña, no está más dispuesta en su ocaso que en su apogeo a trocarse en inspiradora de vastos designios políticos con los cuales se identifique su hegemonía; la habilidad con que –ahora como antes– defiende sus concretos intereses sólo sirve para hacer más lento el ritmo de su descenso. Alemania, una presencia ascendente hasta 1914 –sobre todo en las tierras que bordean el Caribe– no se ha de recuperar hasta 1929 del golpe que para su influjo implica la primera guerra mundial, y

luego la derrota. Las reducidas inversiones francesas colocan a este país, aspirante en su momento a la tutela de vastas zonas latinoamericanas, en un irremisible segundo plano.

Otras son las influencias externas evocadas contra el avance norteamericano. Frente a él, la conciencia de la originalidad hispánica y católica de Latinoamérica se hace más viva: con notable ignorancia de la realidad de las cosas, ya a comienzos del siglo XX Rubén Darío, abandonando ocasionalmente su tarea de modernizador del lenguaje y la poesía hispánica para investir la representación de la entera Latinoamérica, había invocado desafiantemente frente a la otra América encarnada en Roosevelt una superioridad apoyada en el mantenimiento de la fe religiosa; por su parte, el uruguayo José Enrique Rodó había expresado en términos menos vinculados a la tradición cristiana una convicción análoga en su *Ariel;* frente al puro espíritu aéreo y desinteresado de una latinoamérica simbolizada en la figura de Ariel, el materialismo de la América inglesa encuentra un símbolo en Calibán. Que un poeta de fe tan oscilante e insegura como Darío, que un ensayista admirador de Renan y empapado de cultura francesa como Rodó, invitaran a una peregrinación a las fuentes hispanocristianas de Latinoamérica era significativo de una tendencia. No era, sin embargo, la reacción frente a un imperialismo más agresivo que el inglés la única -ni acaso la principal- causa de esa tendencia nueva; sus raíces han de buscarse sobre todo en el aumento de las tensiones internas, debido al cual las elites que a mediados del siglo XIX habían comenzado a verse como innovadoras, sentían perplejidades crecientes frente a las consecuencias de algunas de esas innovaciones.

Pero ese retorno afectuoso hacia el pasado español, si está en la base de una reconciliación cada vez más sincera con la antigua metrópoli, no puede servir de punto de partida para un alineamiento internacional políticamente eficaz; devuelta por la derrota de 1898 a una noción más justa de sus propias fuerzas, España nada quiere menos que utilizar la vaga oleada de

benevolencia que se esfuerza por suscitar en las antiguas colonias para una aventura antiestadounidense que excede sus posibilidades. Aun así, el prestigio creciente de las tradiciones prerrevolucionarias despoja a la nueva potencia dominante de la posibilidad de ganar sobre la vida y la cultura latinoamericana un influjo comparable al alcanzado por Europa occidental en la segunda mitad del siglo XIX; al avance cultural norteamericano se opondrá no sólo una resistencia revolucionaria, sino también una conservadora, defensora en los hechos de los lazos establecidos con otras potencias hegemónicas a lo largo del siglo XIX y en cuanto a ideas y cultura adicta al antes menospreciado legado colonial; sólo las brutales opciones que la guerra fría impone luego de la segunda guerra mundial transformarán esta oposición conservadora en apoyo fervoroso.

Aun antes de ello, esa oposición –orientada contra los aspectos culturales e ideológicos del avance norteamericano– no enfrenta sino ocasionalmente la penetración económica que luego de la primera guerra mundial pasa a ser más importante que la política. Por otra parte –salvo en México, donde la fe tradicional, atacada por los gobiernos revolucionarios, encuentra defensores entre los sectores populares–, las tendencias culturales conservadoras sólo hallan eco significativo entre las elites tradicionales, cuya evolución, a partir del progresismo de la segunda mitad del siglo XIX, expresan en parte.

Se ha señalado ya cómo esta evolución está guiada, antes que por las transformaciones de la constelación internacional en que se sitúa Latinoamérica, por cambios internos que comienzan a juzgarse inquietantes. La tutela que las elites (oligarquías urbanas, aristocracias terratenientes, sectores militares a los que éstas han reconocido hegemonía política) habían mantenido en la etapa primera del orden neocolonial era cada vez más impacientemente soportada a medida que ese orden desplegaba sus consecuencias. De la última década del siglo XIX es la aparición de un movimiento obrero urbano en México, Buenos Aires, Santiago de Chile; de esa misma dé-

cada la formación de los primeros movimientos políticos que recusan la dirección de la elite tradicional (aunque a menudo reclutan en ella sus dirigentes); es el caso del radicalismo argentino y el partido demócrata peruano; y también la mutación profunda que José Batlle y Ordónez introduce en el partido colorado de Uruguay. Esas corrientes que disputan la hegemonía política a las elites progresistas tienen a veces ellas mismas posiciones que están lejos de ser innovadoras (si el batllismo uruguayo acentúa el anticlericalismo e inaugura una política social, el partido demócrata peruano y el radical argentino se consideran aliados de hecho de la reacción católica contra el anticlericalismo aristocrático de la etapa anterior y no innovan profundamente respecto de la política económica y social de sus adversarios); sin embargo, su sola presencia es una amenaza para los grupos cuyo predominio combaten.

Esa presencia, signo de una ampliación de los sectores políticamente activos, anuncia otras que sólo llegarán más tarde. Durante esta etapa la movilización política de sectores populares sólo se dará de modo masivo en México durante ciertas etapas de la revolución comenzada en 1910. En otras partes queda reducida a sectores predominantemente urbanos de economía modernizada; la consecuencia es que los movimientos políticos que quieren ser expresión de sectores populares cuentan a menudo con una base numéricamente más reducida que los de clase media (y que, por añadidura, su condición objetiva de voceros de sectores reducidos y relativamente privilegiados de la clase trabajadora no deja de influir en sus orientaciones, acercándolas a las de esos más vastos movimientos de sectores sociales intermedios).

Unos y otros –se ha dicho ya– se oponen, antes que al lazo colonial de nuevo estilo que está en la base del orden latinoamericano, a la situación privilegiada que dentro de ese orden se ha reservado lo que se llama la oligarquía. La lucha contra esa oligarquía admite motivaciones en cada caso variables, que van desde el tradicionalismo católico hasta posiciones re-

volucionarias de inspiración socialista (sin que sea imposible que coexistan unas con otras dentro de una misma organización). Si dejamos de lado esas enunciaciones y examinamos lo realizado por los movimientos antioligárquicos en las ocasiones en que contaron con el poder político, veremos que su acción es más coherente que su ideología: aumentar la gravitación en el sistema político de los sectores que lo apoyan en su objetivo primero; mejorar mediante esbozos de legislación socia y previsional la situación de esos sectores, su finalidad complementaria; en los rasgos básicos de la estructura económico-social que hallan no introducen, en cambio, modificaciones importantes.

Esa distancia entre una renovación ideológica, a la vez muy ambiciosa y muy imprecisa, y objetivos concretos modestos, pero claros, se manifiesta en grado extremo en un movimiento que es acaso el más característico de la corriente antioligárquica: el de reforma universitaria, que en la primera posguerra se difunde por Latinoamérica a partir de Argentina. El movimiento reformista confiesa la doble inspiración de la revolución rusa y la mexicana; esos ejemplos le animan a luchar por una modificación de los estatutos universitarios que elimine el todo poder de los profesores (reclutados demasiado frecuentemente dentro de *cliques* que son, a su vez, parte de los sectores oligárquicos) obligándolos a compartir el gobierno con los estudiantes (provenientes en parte creciente de sectores sociales más modestos, aunque sólo excepcionalmente populares). Sin duda, el movimiento de reforma universitaria no agota su eficacia dentro de la Universidad, conduce a una politización permanente del cuerpo estudiantil, que –ante la sólo incipiente movilización política de los sectores populares– se constituye en más de un país en vocero de los que aún permanecen mudos. El movimiento estudiantil es entonces una escuela política en la que se han formado muchos futuros líderes revolucionarios o reformistas latinoamericanos, desde Víctor Raúl Haya de la Torre hasta Fidel Castro; en ella han hecho también sus primeras experiencias

(aunque se complazcan menos en recordarlo) figuras que en su madurez se iban a situar en el centro y la derecha del abanico político.

El eclecticismo ideológico y la ambigüedad política del movimiento de reforma universitaria reflejan muy bien el clima -esperanzado y desorientado a la vez- de la década que se extiende del fin de la primera guerra mundial al inicio de la devastadora depresión económica de 1929. Ese clima responde a cambios en el orden mundial derivados sobre todo de la crisis de Europa como centro de poder y modelo de civilización, que en el primer aspecto se refleja en la afirmación de la hegemonía económica y financiera de los Estados Unidos sobre América latina (y no ya tan sólo sobre las comarcas centroamericanas y caribeñas) y en el segundo consagra el fin del monopolio de legitimidad ideológica de que había gozado desde la independencia el constitucionalismo liberal; primero el comunismo y bien pronto el fascismo (menos como adhesión literal al modelo italiano que como apertura a las soluciones autoritarias que desde la Península Ibérica hasta la Europa centro-oriental invocaban su ejemplo sin seguirlo al pie de la letra) son propuestos como alternativas para esa solución liberal-constitucional que tan mal se había aclimatado en América latina.

Ese fermento ideológico iba sin duda a encontrar expresión articulada y madura en la obra del peruano José Carlos Mariátegui, quien logró como ninguno integrar sus grandes temas en un sólido canon interpretativo de la realidad hispanoamericana, bajo la inspiración de un marxismo que debe tanto a Sorel como a Lenin. Pero es revelador que la eficacia política de la acción de Mariátegui no se hiciese sentir sino décadas después de su muerte; sus contemporáneos reconocían en él a un más exitoso agitador cultural que político. Y en efecto, si la renovación ideológica de esa década inquieta introduce motivos destinados a quedar (los del anti-imperialismo, los de la concepción cerradamente clasista y revolucionaria del marxismo que el movimiento comunista sostenía por entonces de

modo particularmente desafiante, junto con los de un juvenilismo que pasa decididamente de la esfera cultural a la política) logra menos bien encarnarse en movimientos de peso significativo; es reveladora la endeblez que en casi todas partes caracteriza precisamente a ese movimiento comunista que más que ninguno se identifica con lo que la nueva coyuntura tenía de más radicalmente innovador.

Es que en América latina el derrumbe del orden de preguerra se refleja no tanto a través de la afirmación de fuerzas nuevas como del agotamiento cada vez más evidente de las soluciones que han dominado hasta la víspera. Los éxitos y los fracasos de la economía exportadora se suman para plasmar realidades sociales demasiado complejas para que sea fácil contenerlas en el marco político heredado de la preguerra, ya sea éste el de la república oligárquica o el de la dictadura progresista. La ampliación de las bases sociales del estado aparece como una necesidad urgente; mientras la democratización, que promete satisfacerla en el marco liberal-constitucional avanza en Uruguay y Argentina, en Perú y Chile esa misma ampliación es intentada en un marco autoritario y en México en uno revolucionario.

Pero esas nuevas fórmulas políticas no adquirirán el mismo vigor que en el pasado ostentaron el liberalismo constitucional o el progresismo autoritario; no sólo están marcadas por la desorientación que se ha señalado como rasgo más característico del clima mundial de esa postguerra de rumbo incierto; sufren todavía las consecuencias de la menor seguridad en el rumbo de avance económico-social que caracteriza también a Latinoamérica durante esos años. En 1930, cuando los ecos del gran derrumbe económico de 1929 alcanzan al subcontinente, ese agudísimo observador que es André Siegfried no hallará ya diferencias profundas entre lo que encuentra en países de más avanzado desarrollo e instituciones más estables y en otros de economía rudimentaria y despotismo militar: aun los países que se habían gloriado de ofrecer excepción al autoritarismo y al primitivismo político hispanoamerica-

nos iban a exhibir luego de 1930 un paisaje político tan cargado de ruinas como el de su economía.

La crisis de 1930 impondrá, en efecto, un brusco anticlímax a medio siglo de expansión; pero éste ha estado hecho de ciclos locales, simultáneos o sucesivos, que en más de un caso se habían clausurado ya antes de finalizar la etapa. Estos episodios expansivos se relacionan con el avance de la división intercontinental del trabajo en cuanto a producción de alimentos (vinculado, a su vez, con la mejora del nivel de consumo popular en los países nucleares) que acelera la expansión de la ganadería y la agricultura templada y la de ciertos cultivos tropicales. Se relacionan, por añadidura, con avances industriales y técnicos (es el caso de la minería andina del cobre y el estaño; es también -en un marco más reducido- el de la expansión del henequén en Yucatán, que encuentra estímulo en el uso de la fibra por las cosechadoras mecánicas de cereales que en Estados Unidos reemplazan a la labor humana). Se relacionan, por último, con la difusión del motor a explosión y el transporte automotor, que da lugar al efímero ciclo del caucho y al desarrollo creciente de la explotación petrolera, acelerado además por el reemplazo más general del carbón como fuente de energía.

Entre los ciclos agrícolas, el del café transforma, a partir del último tercio del siglo XIX, las zonas intertropicales de mediana altura, desde San Pablo de Brasil hasta Colombia, Venezuela, América Central y México. Frente a la producción de esas tierras nuevas, la de las zonas tradicionalmente productoras de las Antillas se defiende mal; a principios del siglo XX Brasil cubre el 70 por 100 de las exportaciones ofrecidas en el mercado mundial, ellas mismas muy acrecidas. El café brasileño está en la base de la expansión de San Pablo (de la capital, vieja ciudad académica y devota, que pasa de 65.000 habitantes en 1890 a 350.000 quince años más tarde, pero también del entero estado). En Brasil el café avanza constantemente sobre tierras nuevas, cuya fertilidad agota; la zona cafetera es una

franja en movimiento, que deja a su paso tierras semidevastadas, ya en el momento inicial de la expansión paulista, zonas enteras del Estado de Río de Janeiro llevan la huella de una prosperidad pasada para siempre, junto con el vigor de la tierra que la explotación cafetera agota sin piedad. Es ése el precio de una economía agrícola que dispone de tierras más abundantes que los hombres y los capitales; en el esfuerzo por explotar esa riqueza inmensa, los terratenientes brasileños deben recurrir al trabajo semiasalariado de inmigrantes (en su mayoría italianos) que, pese a su número –casi dos millones llegan hasta 1914–, resultan escasos para modos de cultivo que no sigan siendo extensivos.

En las tierras hispanoamericanas del café la expansión es menos dramática, pero conoce también menos altibajos. Las tierras disponibles no dan lugar –al revés de cuanto ocurría en Brasil– a una expansión geográfica cuyas posibilidades parezcan, por comparación con los recursos disponibles, ilimitadas; por otra parte, los recursos humanos derivados, sea de un crecimiento vegetativo excepcionalmente alto (es el caso de la población mestiza colombiana o salvadoreña), sea de las reservas de mano de obra proporcionadas por comunidades indígenas hasta entonces más aisladas de una economía de mercado (es el caso de Guatemala), configuran una oferta de trabajo capaz de adecuarse constantemente a las necesidades de una demanda más limitada que la brasileña.

He aquí un rasgo común a la expansión cafetera hispanoamericana; junto con él no faltarán diferenciaciones locales, vinculadas sobre todo con el régimen de la tierra: explotaciones medias a cargo de propietarios en parte de Colombia y más limitadamente en Venezuela y El Salvador grandes haciendas de café en Guatemala y México. Ambos regímenes se diferencian a su vez de la gran propiedad explotada utilizando trabajadores no propietarios, que reciben, junto con el salario, una parte de los frutos, que es la forma dominante en Brasil. Pero en situaciones tan variadas encontramos todavía otro rasgo común: la debilidad de los productores frente a los

sectores que intervienen en la comercialización, y realizan lucrativas especulaciones utilizando las oscilaciones del precio del café, desde las estacionales hasta las más irregulares y violentas que un mercado en expansión, tanto de la oferta como de la demanda, presenta constantemente. Los comercializadores realizan avances decisivos durante las crisis de superproducción: los precios en los centros productores caen vertiginosamente; en los de consumo son mejor defendidos gracias a una contención en las ventas que sólo la disponibilidad de vastos recursos financieros por los comercializadores hace posible: de este modo, detrás de las grandes empresas de comercialización y transporte, es la banca metropolitana la que recibe una parte inesperadamente alta de los lucros cafeteros. Las crisis se suceden: la de 1896, la de 1906, la de 1913... A lo largo de ellas, los comercializadores alemanes del café de Guatemala se apoderan del 60 por 100 de las tierras cafeteras, que organizan en haciendas más productivas que las conservadas en manos de terratenientes locales. Sólo en Brasil éstos logran, gracias a su dominio del aparato político (gracias también a que su mayor experiencia política y administrativa les permite elaborar proyectos sin duda demasiado complejos para la comprensión de la mayor parte de los plantadores hispanoamericanos), crear un sistema de defensa contra las amenazas de sobreproducción; también en él, sin embargo, comercializadores y bancas obtendrán mayores ventajas que los productores.

El sistema, adoptado en 1906, consiste esencialmente en financiar compras destinadas a constituir *stocks* que sólo gradualmente serán lanzados al mercado; aunque la emergencia pasa en 1910, la primera guerra mundial sorprenderá a una parte de esas reservas aún acumulada en Alemania... Si la operación salva a los productores de un derrumbe vertical de precios, logra la estabilización de esos precios sólo a nivel bajo; los *stocks* acumulados se venderán, por tanto, con altas ganancias, que irán a los banqueros que han dado apoyo financiero al sistema (entre los cuales predominan los alemanes;

como es ya habitual, las alternativas de la coyuntura abren el terreno para batallas entre grupos financieros de las metrópolis rivales).

Aun con tales limitaciones, la estabilización de 1906 es sustancialmente exitosa (y salva, por añadidura, de la crisis de sobreprodución a las zonas cafeteras de Hispanoamérica, que gozan de las ventajas derivadas de la limitación de la oferta brasileña). Lo es porque está destinada a salvar una pasajera crisis coyuntural; mucho más riesgosa es la ambiciosa estabilización comenzada en 1924. Ésta, en efecto, intenta eliminar las consecuencias de una sobreproducción permanente y que se hace cada vez más grave. El Instituto del Café, creado en São Paulo, organiza la compra de la totalidad de la producción brasileña; mantiene los precios altos sólo a costa de acumular reservas crecientes, condenadas a crecer porque esos mismos precios estimulan la expansión de cultivos; por otra parte, los rivales de Brasil utilizan la limitación de su oferta para aumentar sus ventas a un mercado de precios protegidos.

La experiencia brasileña del café es en más de un aspecto un anticipo del futuro: un sector terrateniente se dedica aquí a la organización del mercado para sus productos, dejando de lado en este punto la fe en el liberalismo económico del que por otra parte no abjura formalmente. Pero esta experiencia está lejos de ser típica; la concentración de poder que en el Brasil republicano beneficia a los dueños de las tierras del café es excepcional; también lo es su dependencia de un único fruto (por el momento no hay alternativa al monocultivo cafetero que no implique la ruina por lo menos provisional de esa poderosa clase); no es extraño que el grupo esté dispuesto a ir muy lejos en defensa de una prosperidad de la que ve depender su supervivencia.

En las tierras templadas del Sur las exportaciones primarias para alimentos tienen un desarrollo algo menos agitado: la expansión argentina y la uruguaya, apoyadas en la lana, la carne y el cereal, son tan rápidas como la del Brasil cafetero; en 1898

las exportaciones argentinas se sitúan al mismo nivel que las brasileñas (en torno a los veinticinco millones de libras esterlinas); su crecimiento a partir de los niveles de 1880 es aún más rápido que el brasileño, y seguirá creciendo de modo sostenido pese a sus altibajos, hasta decuplicar, en 1928, las cifras de treinta años antes. Este crecimiento es, en primer término, consecuencia de la expansión del cereal, comenzada en la década del setenta y proseguida en la siguiente, que se hace vertiginosa luego de la crisis de 1890: en medio de la baja de precios internacionales y frente a la interrupción de las inversiones extranjeras, Argentina rehace su economía ampliando sus tierras de trigo y maíz. Santa Fe y el sur de Córdoba, tierras a las que la falta de comunicaciones había condenado a una ganadería escasa y pobre, son ahora el teatro de la expansión cerealera, hecha posible gracias al flujo inmigratorio que, sin duda, se interrumpe con la crisis, pero que ha acumulado en la etapa anterior una fuerza de trabajo que ya no encuentra empleo en las ciudades. Los refugiados de la crisis urbana tienen exigencias modestas, y se adaptan a un régimen de la tierra en que triunfa el arrendamiento para dejar luego paso a la mediería, que avanza hasta 1914 porque el dinero circula poco en esa pampa cerealera de donde provienen buena parte de las exportaciones argentinas.

En el sur cordobés, y sobre todo en Santa Fe, los viejos terratenientes comparten el predominio con nuevos propietarios, en parte de origen inmigratorio, que han conquistado la tierra a partir de posiciones dominantes en el comercio local. Éstos serán siempre menos poderosos que los que dominan la pampa ganadera de Buenos Aires; por una parte necesitan mano de obra más abundante, por otra surgen en una etapa de mercados internacionales más estrictamente regulados por las empresas comercializadoras; por último, sufren las consecuencias de una vinculación menos directa con los centros de de cisión política nacional. Ya en la primera década del siglo XX el comercio cerealero es dominado por un oligopolio formado por muy escasas firmas exportadoras; su

predominio se hace sentir duramente en las etapas de coyuntura desfavorable (como la de 1912), y son al cabo los terratenientes quienes deben sacrificar una parte -modesta- de sus lucros para mantener el ritmo de producción, accediendo a las demandas de arrendatarios y medieros. Todavía más marcadamente que en el Brasil entero- porque en la Pampa del cereal el sector terrateniente es más débil-, la hegemonía de los comercializadores vinculados a las finanzas metropolitanas se consolida a lo largo de la expansión cerealera.

Esa misma hegemonía será alcanzada sólo más lenta y menos completamente en la pampa ganadera, cuyo núcleo sólido se encuentra en la provincia de Buenos Aires, firmemente dominada por una clase terrateniente acostumbrada a mantener celosamente sus vínculos con el poder político nacional (conservados pese al percance que significó en 1880 la federalización de la ciudad que había sido a la vez capital de la nación y de la provincia). Desde 1895 el crecimiento de la provincia de Buenos Aires se hace más rápido que el de Santa Fe; en 1914, la gran provincia ganadera será también la primera productora de cereales de Argentina; junto con la expansión del cereal (mediante la difusión del régimen de arrendamiento que no afecta el monopolio de la tierra por los grandes propietarios de la etapa de predominio ganadero) se da la transformación de la explotación de ganado, inducida por la disminución de la demanda externa de lana y la difusión del frigorífico.

La revancha del vacuno, su mestización sistemática para crear animales cuya carne satisfaga las exigencias del mercado europeo del producto congelado (y a partir de los años inmediatamente anteriores a 1910 las aún más estrictas del enfriado) llenan la historia de la ganadería argentina hasta la primera guerra mundial; estos cambios son posibles gracias a inversiones ahora más considerables de los sectores terratenientes: el alambrado de los campos, comenzado en rigor en la década de 1870, prosigue a ritmo más rápido; del mismo modo se acentúa la importación de reproductores... Pero

–como antes– las inversiones más importantes corren a cargo del Estado y del capital extranjero: la red de ferrocarriles se hace más densa, hasta alcanzar los treinta y tres mil kilómetros en 1914 (habían sido dos mil quinientos en 1880); se construyen a muy alto coste el puerto artificial de Buenos Aires y el de La Plata-Ensenada; un sistema de canales hace más utilizable la vasta zona pantanosa del centro de la provincia de Buenos Aires. Los frigoríficos, salvo algunos de los primeros y más pequeños, son propiedad de empresas extranjeras: las inglesas, primero dueñas del campo compiten desde 1905 con las norteamericanas.

La consecuencia es también aquí una posición de predominio para transportistas y comercializadores, que son emisarios locales de las economías metropolitanas; sin embargo, la ganadería sentirá sólo más tardíamente que la agricultura la incidencia negativa de esta situación: hasta la primera guerra mundial la competencia entre frigoríficos ingleses y americanos garantiza una etapa de altos precios; la guerra misma, creando escasez y dificultad en el transporte marítimo, fomenta la exportación ganadera a la vez que pone en crisis a la de cereal: los precios de la carne suben aún más. Sólo la primera etapa de la posguerra enfrenta a amplios sectores ganaderos con las consecuencias de la entrega de la comercialización y el transporte a intereses metropolitanos: los norteamericanos victoriosos dictan su ley al mercado, y los precios bajan...

Uruguay vive, en escala reducida, experiencias análogas a las argentinas; aquí la expansión del cereal es, sin embargo, menos significativa que en la orilla opuesta del Plata, y el retorno al vacuno igualmente menos marcado. Pero como en Argentina se dan aumento de la producción, mestización y difusión más tardía del frigorífico, junto con progresos en el transporte ferroviario; las exportaciones, que alcanzan el nivel de los seis millones de libras anuales al comenzar el siglo XX, en 1919 serán veintisiete millones, con muy neto predominio de los productos ganaderos. Como en Argentina, una clase terrateniente ante cuyo predominio en las zonas

rurales se detiene el proceso de democratización que vive el Uruguay urbano, se defiende mal de su paulatina mediatización por los dueños del comercio y los transportes.

El Brasil central, Argentina y Uruguay cuentan entre los relativos éxitos en la tentativa de modernización emprendida por toda Latinoamérica. Las limitaciones de esos éxitos no necesitan ser subrayadas: en la Argentina del cereal y aún más marcadamente en el Brasil del café se crean sociedades rurales caracterizadas por la extrema inestabilidad; la hegemonía de los terratenientes sólo se conserva al precio de la inseguridad de los labradores, sobre los cuales el sistema se esfuerza en volcar el peso mayor de las etapas negativas de la coyuntura: la inmigración italiana que cultiva el café como el trigo (en Santa Fe, en 1914, hay casi cuatro agricultores italianos por cada argentino) tiene una altísima proporción de retornos; en la primera década del siglo XX Argentina conocerá además una inmigración estacional ultramarina: los cosechadores del trigo y el maíz argentino viven ahora el resto del año en aldeas de Emilia y la Baja Lombardía.

Ese sistema no hubiera, sin embargo, podido surgir sin alicientes económicos cuya existencia suele hoy ignorar una literatura demasiado sistemáticamente pesimista; pero esos alicientes iban a desaparecer progresivamente a medida que la falta de nuevas tierras disponibles y el crecimiento de la oferta local de mano de obra los hiciesen innecesarios: a lo largo de esta etapa la situación de los trabajadores en tierra ajena va, en efecto, a deteriorarse.

Aun así es superior a cuanto se conoce en el resto de América latina. Los *booms* agrícolas y mineros se dan en otras partes utilizando una mano de obra que no es necesario atraer mediante alicientes económicos (o, alternativamente, la emplean en número tan escaso que sus progresos pierden significación dentro del conjunto de la economía y la sociedad). Esos *booms* implantan –mucho más nítidamente que en los casos ya examinados– islotes económicos mejor vinculados a la metrópoli que al resto del país; en el caso excepcional de afectar a

una nación entera le imponen una dependencia aún más estricta que la vigente en los ejemplos anteriores.

Es el caso de la agricultura tropical: las tierras del azúcar en Puerto Rico, Cuba y Perú dan lugar a una concentración de propiedad en manos de las empresas industrializadoras que –aun avanzando muy rápidamente– va más despacio que la conquista del control del mercado productor por éstas. En Cuba y Puerto Rico el sistema realiza al máximo sus posibilidades: los ferrocarriles privados de las grandes centrales azucareras –que son ya casi todas norteamericanas– les aseguran el monopolio de compra en áreas productivas cuya propiedad no les es entonces necesaria; por el contrario, el cultivador ha perdido toda autonomía, y debe resolver como puede los problemas que le plantea una producción con ganancias decrecientes. En Puerto Rico el proceso es aún más dramático, por cuanto el monocultivo azucarero se introduce bruscamente en su etapa madura, cambiando el paisaje mismo de la isla luego de su conquista por Estados Unidos. En Perú la industria costeña del azúcar –originaria de tiempos coloniales, víctima de la crisis del comercio libre (1780), y de la mano de obra esclava en tiempos postrevolucionarios, resurgida en la segunda mitad del siglo XIX, capaz de proporcionar hacia 1880 saldos exportables tan importantes como los del salitre– es ahora preferida por las inversiones británicas y norteamericanas: su expansión en el norte del país se hace en parte gracias a ellas, pero un proceso que también aquí se acelera en tiempos de crisis concentra en manos de las compañías industrializadoras buena parte de la tierra azucarera.

Las crisis de demanda están constantemente presentes en la historia del azúcar latinoamericano: en desventaja en el mercado continental europeo frente al de remolacha, limitado en el británico por la presencia del de las West Indies, el azúcar latinoamericano tenía su desemboque principal en Estados Unidos. Allí mismo una legislación proteccionista lo condenaba a compensar el aumento del volumen absorbido con una caída de precios: la velocidad con que la concentración de

producción y comercialización se dio, por ejemplo, en Cuba fue, sin duda, estimulada por la reducción constante de los márgenes de ganancia posible.

La expansión azucarera tiene entonces algo de devastador: ha cambiado a Cuba y a Puerto Rico hasta tornarlos irreconocibles para quien los había conocido antes de esa transformación. Otros cultivos tropicales tienen capacidad de transformación más limitada: así el henequén, localizado en las tierras secas del Yucatán, en México, que en 1898 contribuía, sin embargo, con el 15 por 100 a las exportaciones mexicanas, o más tardíamente la banana, típica de las zonas bajas y húmedas del litoral caribeño y de algún rincón de la costa del Pacífico, en Costa Rica y el Ecuador. El cultivo del banano es ampliado por iniciativa de un conjunto de empresas estadounidenses que a principios del siglo se fusionan en la United Fruit Company. En la costa atlántica de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, se tallan vastos dominios territoriales; en Panamá, por ejemplo, la compañía posee una red ferroviaria privada casi tres veces más extensa que la pública (sin duda muy exigua). A veces estos dominios están vacíos de hombres, y la compañía induce las migraciones que salvarán esa carencia: en Costa Rica transforma el equilibrio étnico al crear, frente al altiplano blanco, una costa de población negra y mulata (a menudo originaria de las West Indies). La banana se transforma en exportación dominante de varios países centroamericanos, cuyo mercado consumidor se encuentra en Estados Unidos, que absorbe proporciones elevadísimas de sus exportaciones (en Nicaragua, en 1918, es más del 90 por 100 de éstas el que encuentra ese desemboque).

La solidez del imperio del banano, y sus avances, que son los del consumo de la fruta en Estados Unidos, se contraponen a la fragilidad del episodio cauchero, que introduce una efímera y tormentosa prosperidad en la cuenca amazónica. La expansión del consumo del caucho, obtenido de la savia de un árbol silvestre en la región, acelera el ritmo de explotación. En

la Amazonia brasileña son campesinos fugitivos de la superpoblación y las sequías periódicas del *sertão* nordestino quienes se transforman en *siringueiros*, en recolectores del caucho silvestre; sus avances en la cuenca tropical, sólo poblada –salvo en las principales rutas fluviales– por tribus de indios insumisos, se traducen en avances de la frontera brasileña, en particular sobre la Amazonia boliviana (compra del territorio de Acre en 1902). El caucho empieza a contar en las exportaciones brasileñas; en 1899 cubre el 19 por 100 de ellas, en 1910 más del 25 por 100, con diecinueve millones de libras esterlinas. La riqueza cauchera no podría ser absorbida por ningún sector terrateniente, puesto que surge de tierras sin dueño; los *siringueiros* sólo participan en ella en medida mínima: han comenzado su actividad gracias a los anticipos de los comerciantes locales, y nunca se librarán de su condición de deudores de éstos, muy cercana en sus consecuencias a la servidumbre. Son los comerciantes los únicos beneficiarios locales del *boom* cauchero, cuyos lucros se orientan sobre todo hacia la metrópoli; con lo que queda en la Amazonia basta, sin embargo, para hacer surgir en el centro de la cuenca un esbozo de ciudad monumental: Manaus, con sus temporadas de ópera italiana al borde de la selva, sus cien mil habitantes y sus hoteles de lujo, es el símbolo de la alocada prosperidad cauchera.

En la Amazonia colombiana, ecuatoriana, peruana y venezolana, la explotación es aún más primitiva y destructiva; a falta de las reservas de mano de obra que el Nordeste ofrecía en Brasil, debe disciplinar mediante violencia y crueldad aún mayores la más escasa efectivamente disponible; en la búsqueda de rápidos provechos se destruyen los árboles mismos, que en Brasil son sólo sangrados periódicamente, pues el mantenimiento del *stock* está en el interés del *siringueiro*, que no puede cosechar sino en la zona que le ha sido asignada y sería la primera victima de la desaparición de los árboles. La ola de explotación destructiva avanza así sobre la Amazonia peruana, destruyendo las plantaciones naturales y también el modo de vida de poblaciones neolíticas, arrojadas a participar

en la economía del siglo XX mediante el doble estímulo del alcohol y el terror.

Gracias al caucho, entonces, en el corazón geográfico de América latina se repiten los horrores que contemporáneamente están haciendo célebre al Africa Central. Por poco tiempo; con su esplendor y su miseria el *boom* cauchero se disipa cuando las plantaciones cultivadas de Malaya y las Indias holandesas logran ofrecer un producto más barato y abundante que el silvestre. Desde entonces, ni aun los esfuerzos de los intereses norteamericanos, deseosos de liberarse del monopolio angloholandés, logran resucitar el episodio cauchero amazónico cerrado en la segunda década del siglo XX: ciudades semifantasmagóricas quedan como único monumento de ese pasado, perdidas en la selva.

Menos súbitas son las transiciones en las explotaciones mineras: en perspectiva larga éstas se muestran también, sin embargo, sometidas a altibajos significativos. La última etapa del siglo XIX es de recuperación de la explotación de metales preciosos: desde Bolivia hasta México la de la plata supera por fin –y holgadamente– los más altos volúmenes de producción de la etapa colonial. En todas partes ello es posible gracias al progreso de las técnicas extractivas y al de las comunicaciones, que reduce los costos de transporte hasta puertos y mercados; ambos requieren fuertes inversiones de capital, que en México y Perú se traducen en el control de la producción por empresas británicas y norteamericanas, pero en Bolivia se refleja en el de los «patriarcas de la plata», sostenidos por financistas anglo-chilenos y protagonistas de la regularización de la vida política boliviana bajo signo conservador en las dos últimas décadas del siglo XIX. El renacimiento de la plata es muy vigoroso: las exportaciones de metal precioso cubren en 1898 el 60 por 100 del valor total de las mexicanas y alcanzan a siete millones y medio de libras esterlinas, casi duplicando las de las etapas más brillantes del apogeo minero del setecientos; las bolivianas cubren el 70 por 100 de las exportaciones nacionales de 1897, con un millón y medio de libras esterlinas; las pe-

ruanas alcanzan el millón. Pero esos avances están destinados a no continuar: los frena la caída progresiva del valor del metal blanco, consecuencia de su desmonetarización, que avanza en la segunda mitad del siglo XIX y se consuma en la primera década del nuestro. Hacia 1910 las exportaciones mexicanas conservan el nivel de diez años antes; las peruanas y bolivianas quedan decididamente rezagadas. En 1920 aún en México la plata habrá dejado de dominar la estructura de las exportaciones... Son otros metales los que ahora triunfan, gracias a la demanda creciente que de ellos hace la industria: el cobre, cuyo consumo se vincula sobre todo a la expansión de la electricidad; el estaño, relacionado sobre todo con la industria de conservas.

La expansión del cobre –cuya explotación es muy antigua en toda la zona andina y que ha tenido ya un *boom* más modesto en Chile en el siglo XIX– llena las primeras décadas del siglo XX. En Perú es la *Cerro de Pasco Copper Corporation* –norteamericana– la que comienza la explotación en gran escala, utilizando para el transporte una de las empresas de ingeniería más audaces del mundo, la línea férrea que, a través de los Andes, comunica El Callao con el Cerro de Pasco, donde surge, a más de cuatro mil metros de altura, un complejo industrial y minero ultramoderno, rodeado de las muy primitivas poblaciones de los obreros serranos; frente a él André Siegfried evocará a la vez al Tíbet y a las anticipaciones del futuro en que se complacía el cinema de la década del veinte... En Chile la explotación del cobre avanza aún más rápidamente, también allí progresivamente dominada por capitales norteamericanos.

El cobre chileno no logra desplazar el salitre, que sigue, hasta 1930, dominando las exportaciones chilenas. El salitre, botín principal de la victoria sobre los vecinos del Norte, que hace surgir en el desierto costeño de Atacama Tarapacá ciudades de decenas de miles de habitantes –Antofagasta, Iquique–, cuya población minera recibe de lejos los alimentos y aun el agua, comienza por sufrir las consecuencias de la pri-

mera guerra mundial, que separa a Chile de su mejor mercado, el proporcionado por la agricultura centroeuropea; herencia permanente del bloqueo que sufre Alemania en 1914-19, será una producción de fertilizante sintético que entrará en competencia cada vez más dura con el producto natural: aun los años de estancamiento que siguen hasta 1930 no son, sin embargo, sino una débil anticipación de la crisis final del salitre, que alcanza toda su gravedad luego de esa fecha.

Más tardía es la expansión petrolera que, anticipada desde comienzos del siglo por explotaciones dispersas por todo el continente, se localiza progresivamente en grandes centros productores. Hasta la década del veinte va a la cabeza México, seguido de lejos por Venezuela, Colombia y Perú. En medio de la guerra civil, que destroza el orden rural, el petróleo ofrece en México el principal rubro de exportación y se expande con un movimiento uniformemente ascendente que contrasta con el de la economía general. Las compañías inglesas, y sobre todo norteamericanas que explotan el petróleo mexicano, construyen en medio del desorden general su orden propio: desde su puerto de Tampico forman un sistema de transportes y comunicaciones que logra superar las perturbaciones de esos años revueltos. En Venezuela, en medio del orden férreo impuesto por Gómez, las compañías petroleras aceleran aún más el ritmo de la explotación; la cuenca de Maracaibo comenzará a poblarse de torres petroleras, mientras en Curaçao, tierra de la Corona holandesa frente a la costa venezolana, la compañía angloholandesa Royal Dutch Shell instala refinerías destinadas a sucesivas ampliaciones (las norteamericanas, de las cuales la más importante es la Standard Oil, refinan, por su parte, en Estados Unidos). En Colombia y Perú el ritmo de la explotación es menos dinámico, luego de comienzos muy prometedores; en Argentina la explotación –compartida entre una empresa estatal y las que dominan la actividad petrolera mundial– avanza también lentamente.

Las explotaciones agrícolas o mineras que alcanzan su expansión en la etapa de madurez del neocolonialismo tienen

así más de un rasgo común: la tendencia al monopolio o al oligopolio crea empresas insólitamente poderosas; la comparación entre los presupuestos de más de un estado latinoamericano y más de una de esas empresas gigantes ha sido reiteradamente hecha, y es en verdad impresionante; éstas pueden mover con mayor libertad que cualquier estado un poderío financiero a menudo mayor que el de éstos. Ese poder no es, sin embargo, el único que las nuevas protagonistas de la economía latinoamericana pueden esgrimir: se continúa en el de corrupción, que está lejos de ser desdeñable y que va desde la compra lisa y llana de influencias en emergencias graves hasta la mediatización de sectores altos locales empobrecidos, en los que reclutan abogados y asesores más apreciados por su ascendiente político que por su competencia técnica. Menos fácil de determinar es su influjo indirecto sobre las crisis políticas internas, pese a que suele serles asignado uno muy vasto.

No terminan aquí los resortes de los nuevos conquistadores de la economía latinoamericana: sus intereses son reconocidos como propios por una potencia metropolitana o aspirante a tal; de allí, en los casos extremos, abiertas intervenciones políticas, y en la vida cotidiana otras más directas, que ya cesan de sorprender: desde la guerra del Pacífico -en que inversores ingleses, franceses y norteamericanos intentan hacer pesar el prestigio de sus naciones en favor de sus intereses- hasta episodios de alcance más limitado (por ejemplo, el celo nuevo con que agentes franceses, en el Río de la Plata siguen los avances del consumo de alambre francés y buscan acelerarlos) nos muestran las consecuencias que tienen en las áreas marginales la identificación entre los intereses políticos de los países metropolitanos y los económicos del sector cada vez más concentrado que dirige su expansión comercial y financiera.

Hay todavía otra causa de fuerza para esos dominadores del orden neocolonial: si las innovaciones que éste directamente introduce suelen crear islas económicamente mal soldadas con el conjunto de la nación, sus efectos indirectos al-

canzan a sectores mucho más amplios. Más de un estado no podría sobrevivir sin los aportes de impuestos y regalías, que pueden ser a veces insignificantes comparados con los lucros privados de las grandes industrias extractivas, pero que hacen la diferencia entre el equilibrio presupuestario y una indigencia que lo expondría al descontento popular y a la cólera acaso más inmediatamente peligrosa de las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, los ingresos de las exportaciones, pese a la parte a veces importante que se destina a ganancias de la inversión extranjera, sirven, sin embargo, para mantener un nivel de importaciones para consumo que sería también peligroso deprimir.

Tanto más peligroso porque esta etapa es a la vez de crecimiento continuado de la población urbana; la ciudad de México triplica su población entre 1895 y 1910, y alcanza para esta fecha el millón con los suburbios; Buenos Aires también triplica entre 1898 y 1918, y llega al millón seiscientos mil; La Habana, Lima, Santiago, Bogotá, Montevideo, crecen muy rápidamente. Ahora bien, si sólo en muy contadas regiones (entre ellas la más significativa es el litoral rioplatense) existe un fuerte consumo rural de productos importados, en todas partes la expansión urbana implica una ampliación de esos consumos, que es preciso pagar con exportaciones. Hacerlo es cada vez menos fácil: la nueva estructura institucional del comercio y las finanzas internacionales consolida una tendencia vinculada por otra parte con la incorporación creciente al mercado mundial de nuevas áreas productoras de materias primas; al revés de lo que había ocurrido durante casi todo el siglo XIX, los términos de intercambio se mueven en el siglo XX en sentido predominantemente desfavorable a los productos primarios; el hecho de que ascienda al papel de primera potencia industrial Estados Unidos, que necesita mucho menos de mercados extranjeros para colocar su producción, y está por lo tanto más dispuesto a acudir al proteccionismo, contribuye también a acelerar este deterioro. A él responden las economías latinoamericanas aumentando el ritmo de producción, y sólo en algu-

nos casos extremos intentando controlar el volumen de oferta: el lado de lo ensayado en este sentido con el café brasileño sólo cabe alinear lo llevado a cabo en Chile sobre las mismas líneas para defender el precio internacional del salitre, y las veleidades de emprender un camino análogo que a fines de la década de 1920 afloraron en Cuba respecto del azúcar.

Si en el medio siglo anterior a la gran crisis de 1929 los avances de la economía exportadora, a través de los del petróleo, el banano o el caucho, se han extendido a zonas antes no afectadas por él, esta innovación no introduce cambios tan abarcadores en el paisaje humano y social del subcontinente como los que se han producido ya, y siguen produciéndose, en las áreas tocadas de más antiguo por la expansión de los cultivos de exportación y serán aún más insuficientes que aquéllos para eliminar a una vasta zona campesina, agrícola y pastoril, mal integrada al mercado, aunque cada vez más sometida a la presión expropiadora en beneficio de haciendas no siempre mejor integradas a él. En México el avance de la hacienda contribuye a suscitar una explosión revolucionaria que no tiene par por su violencia y duración en el siglo XX latinoamericano; en las tierras andinas ese avance provoca en cambio alzamientos más localizados y tan violentos como efímeros. Salvo en México, entonces, las tensiones sociales que alcanzan intensidad bastante para afectar el conflicto político son sobre todo las de las ciudades de expansión y sólo excepcionalmente las de algunas zonas particularmente afectadas por el cambio económico, como las cuencas cerealeras argentinas o los distritos mineros de Chile. Pero esa politización limitada a sólo una parte de las áreas modernizadas refleja a su modo el impacto de procesos que se hacen sentir también más allá de los límites de éstas y cuyo rumbo gobierna en buena medida el de esa politización en avance.

La evolución política –se ha señalado ya– presenta en esta etapa tres aspectos distintos: revolucionaria en México y marcada en los países australes (Chile, Argentina, Uruguay) por la

democratización pacífica de la vida política, acompañada del triunfo de partidos populares, en el resto de Latinoamérica vive sustancialmente encerrada en las alternativas de oligarquía y autoritarismo militar, sin que falten situaciones intermedias.

México elabora en las últimas décadas del siglo XIX el ejemplo más maduro de dictadura progresista que se conocerá en Latinoamérica. Heredero muy libre de la Reforma, Porfirio Díaz es, ante todo, el restaurador del orden deshecho en el campo por la herencia demasiado pesada de las guerras; es también el «tirano honrado» que pone su poder al servicio de la causa del progreso. Bajo su gobierno se tiende lo principal de la red ferroviaria mexicana, se restaura la minería de la plata, se expande en el Yucatán árido el henequén y retorna a sus viejos rincones del declive del Anahuac hacia el Pacífico la prosperidad azucarera. Para el más talentoso de los ideólogos del régimen, Justo Sierra, el México de Díaz es el México mestizo, síntesis final del pasado indio y el español. Para el régimen mismo, es cada vez más un México europeo, a la vez proyecto y ficción; en las grandes ocasiones las gentes de aspecto indígena son alejadas por la policía de las calles centrales de la capital: darían a los ilustres visitantes extranjeros una idea tendenciosa del país en que se hallan... Esta actitud no es, por cierto, nueva (aunque lo es la fundamentación racista que suele justificarla); junto con ella avanza la reconciliación con los apoyos sociales de la anterior hegemonía conservadora: el gobierno de Díaz, que es el de los terratenientes, comienza a ser cada vez más el amigo secreto de la Iglesia que ha luchado tenazmente contra la Reforma. Pero su conservadurismo no es sino la otra cara de su progresismo: el avance de los ferrocarriles y cultivos va acompañado de otro más rápido, el de la gran propiedad de viejos y nuevos terratenientes, que avanza sobre tierras de comunidades indígenas y campos despoblados y es beneficiaria principal del sometimiento del territorio antes en manos de indios de guerra.

Esos avances van acompañados de una afirmación sólo paulatina del autoritarismo político. Aun en 1880 Díaz había creído oportuno atenerse a su lema revolucionario de no reelección y darse por cuatro años un sucesor dócil a su influjo. Pero a partir de 1884 iba a mantenerse ininterrumpidamente en la presidencia hasta 1911. Al mismo tiempo iba a formar una máquina política cada vez más sólida; la necesidad de contar con numerosos incondicionales llevó a un deterioro progresivo del personal político; hacia el final de su gobierno Díaz llamaría a su Parlamento *la caballada*. El avance hacia la dictadura vitalicia fue lo bastante lento como para poder vencer paulatinamente las resistencias que encontraba, que no fueron nunca demasiado amplias; Díaz prefiere, por otra parte, la generosidad al rigor para tratar con sus adversarios; si este método es costoso para el erario mexicano, no cabe duda de que es eficaz.

En 1910 el centenario del grito de Dolores es pretexto para que el régimen ofrezca un postrer homenaje a sí mismo; todavía entonces Díaz hace en Europa y Estados Unidos figura de gobernante ejemplar. Sin embargo, el problema de la sucesión está ya abierto; en 1908 el propio Díaz parece recogerlo cuando en una célebre entrevista a un periodista estadounidense declara que ha llegado la hora en que México vuelva a tener una fuerza de oposición. Ésta surge demasiado rápidamente; en sus primeras etapas los grupos opositores buscan sobre todo el favor del gobernante que parece haberlos convocado. Francisco Madero, un hacendado del Norte, cuenta entre las figuras a las que el ambiguo llamado de Díaz ha sacado del silencio: aspirante primero a acompañar como vicepresidente opositor al inevitable don Porfirio, se transforma finalmente en su rival desafortunado (la máquina electoral demasiado perfecta montada en un treintenio de gobierno da a Díaz millones de votos, y a su rival poco más de un centenar). Arrojado a la cárcel y luego al destierro, Madero agrega a sus lemas electorales de sufragio electivo y no reelección otros más novedosos: en el plan de San Luis Potosí, que lanza la revolución maderista, se

reclama el retorno de las tierras de las que los campesinos han sido ilegalmente despojados. Se trata aún de una reivindicación muy limitada, ya que propone rectificar abusos antes que modificar las bases jurídicas del régimen de la tierra; es suficiente, sin embargo, para que confluya en el movimiento revolucionario de los campesinos ya alzados bajo la jefatura de Emiliano Zapata en el estado de Morelos, contiguo a la capital, en cuyas ricas tierras azucareras la ofensiva de los hacendados contra las tierras comunitarias ha sido llevada muy adelante.

Pero la base principal de la revolución se encuentra en el Norte, que en décadas recientes ha crecido más que el resto de México, sin que su mayor peso económico y social le haya dado un lugar menos marginal en la estructura de poder del régimen porfirista, y donde grupos sociales muy variados (desde trabajadores en empresas mineras hasta agricultores y ganaderos para el mercado norteamericano) sufren con particular dureza las consecuencias del lazo demasiado estrecho con la economía del poderoso vecino desde que la crisis de 1907 pone fin a una larga etapa ascendente; allí el movimiento tiene una base más amplia y heterogénea, cuyo temple revolucionario no ha de ser sometido a prueba demasiado dura en esta primera etapa gracias al derrumbe casi inmediato del régimen porfirista.

Éste abrió el camino a la presidencia de Madero, desde cuyos inicios se desencadenaron choques entre los distintos sectores revolucionarios (ampliados ahora por el grueso de los adherentes al viejo régimen). Para vencer la insurgencia de Zapata en Morelos, Madero usó a un general del viejo ejército, Huerta; con menos éxito lo empleó luego para oponerse a las tentativas restauradoras del general Félix Díaz, sobrino de don Porfirio; después de algunos días de aparatosa batalla en el centro de la capital, Huerta y Félix Díaz hicieron público su acuerdo, inspirado por el ministro de Estados Unidos. Madero, apresado por sus supuestos defensores, fue asesinado.

La reacción fue lenta en desencadenarse y sólo gradualmente vino a hacer de la Revolución la ola de fondo que termi-

nó por sacudir a la sociedad mexicana con intensidad sólo comparable a la de la desencadenada en 1810. En el Norte el estado de Sonora desconocía la usurpación de Huerta y mientras en la vecina Chihuahua un afortunado jefe de bandas maderistas, Pancho Villa, se perfilaba -gracias a su instintivo talento militar y a su experiencia de marginal- como el más temible de los adversarios del ejército regular que, tras sobrevivir a la caída del Porfiriato, se había constituido en la única base real del poder de Huerta, desde Guadalupe Venustiano Carranza, senador porfirista y gobernador maderista de Coahuila, lanzaba el plan de la Revolución Constitucionalista, cuya jefatura suprema (por largas etapas bastante nominal) ocupó con la aquiescencia de los caudillos que defendían su causa en el campo de lucha, y cuyos objetivos circunscribió a la restauración del orden constitucional.

En ese conflicto un nuevo elemento fue introducido por el presidente Wilson, que miraba con reprobación al gobernante del que la diplomacia de su país había contribuido a dotar a México. Se negó a reconocer el gobierno de Huerta; cuando éste se mostró poco dispuesto a abandonar el campo en favor de una solución constitucional, Wilson buscó sin éxito apoyo a sus planes en la ascendente revolución constitucionalista; finalmente, a partir de algunos incidentes entre fuerzas huertistas y otras norteamericanas que guardaban el área petrolífera de Tampico, dispuso a comienzos de 1914 la ocupación de Veracruz. La medida fue recibida con indignación por huertistas y constitucionalistas, y de la *impasse* en que lo dejó la persistencia de Huerta en el poder, Wilson buscó salir gracias a la mediación conjunta de Argentina, Brasil y Chile, que dio lugar a una morosa conferencia que desde Niagara Falls trató de imponer un gobierno provisional a México. Mientras tanto la impopular ocupación de Veracruz privaba a Huerta de las rentas aduaneras; el 14 de julio de 1914 el presidente huía, y el 20 de agosto los constitucionalistas conquistaban la capital, para dividirse de inmediato.

En las peripecias que habían llevado a la caída de Huerta habían sido decisivas la acción de Pancho Villa y su legenda-

ria División del Norte y la amenaza que a las puertas mismas de la capital significaba el irreductible foco zapatista de Morelos. Luego de la victoria ni Villa ni Zapata estaban dispuestos a aceptar la ambición de Carranza de dotar a su Jefatura Suprema de una gravitación que le había faltado hasta entonces; en noviembre lo expulsaban de la capital, forzándolo a refugiarse en Veracruz, junto a la más importante fuente de ingresos fiscales.

Fue el apoyo que los revolucionarios de Sonora, bajo el liderazgo de Álvaro Obregón, siguieron otorgando a Carranza, el que le hizo posible reconquistar un poder supremo que había estado tan cerca de perder definitivamente. Sin nada en su opaco pasado de figura de segunda fila en la elite sonorense que permitiera anticiparlo, Obregón se iba a perfilar paulatinamente como el caudillo capaz de rastrear en el caos sangriento que era la Revolución el rumbo que permitiría llevarla adelante: ya en Veracruz había obtenido de Carranza la inclusión de la reforma agraria y el derecho de huelga y sindicalización entre los objetivos del constitucionalismo. Si retomar el control de la capital no fue difícil (la ciudad había terminado por constituir una carga para Villa y Zapata, que no habían logrado ganar adhesiones en sector alguno de ella), menos fácil parecía revertir la situación militar en el centro-norte. Obregón lo lograría gracias a la decisiva victoria que sobre Villa alcanzó en 1915 en Celaya, donde este general autodidacta supo aplicar con resultados deslumbradores las lecciones de la guerra mundial entonces en curso. Desde entonces las fuerzas de Villa y Zapata entraban en menguante y el problema central pasaba a ser el de la institucionalización y consolidación del nuevo orden, corporizado en la constitución de 1917, que retomaba el anticlericalismo de la de 1857 pero lo integraba con motivos nuevos, como los recogidos en el artículo 27, que nacionalizaba las riquezas del subsuelo y recogía la exigencia de reforma agraria, y en el 123, que imponía al estado la protección de los trabajadores y reconocía la personalidad moral de los sindicatos.

Esa definición del nuevo régimen como nacionalista y sensible a las reivindicaciones obreras y campesinas debía más a la inspiración de la izquierda constitucionalista, cercana a Obregón, que a la de los amigos del Jefe Supremo, que en 1920 buscó sin éxito cerrarle la sucesión presidencial. Obregón sólo pudo alcanzarla gracias a un movimiento revolucionario en cuyo curso el Jefe Supremo pereció asesinado durante su fuga de su capital.

Concluía así la revolución, en cuyo curso México había perdido un millón de habitantes y su economía había vivido diez años en perpetuo marasmo. El desenlace aseguraba la hegemonía política de la Dinastía de Sonora, que había sobrevivido a sus rivales (Zapata había sido muerto a traición por los carrancistas en 1919; Villa, tras de hacer sus paces con Obregón, lo sería en un oscuro episodio, en 1923) y ahora arbitraba entre un movimiento obrero que englobaba a una fracción muy reducida de los trabajadores industriales y mineros y estaba, por otra parte, corroído por la corrupción, y un campesinado que, si en Morelos veía realizadas las reivindicaciones del zapatismo, carecía del empuje necesario para proyectarlas a escala nacional y se revelaba un agente más dócil y pasivo de los nuevos dueños del poder que la nueva fuerza sindical.

Obregón y Calles –su sucesor desde 1924– mostraron escaso entusiasmo por difundir los ejidos, que restauraban las tierras de comunidad atacadas por la revolución liberal; prefirieron repartir a título individual una parte de las tierras de las haciendas (entre las perdidas por los hacendados prerrevolucionarios, que estaban lejos de ser todas, no pocas pasaron por otra parte a engrosar el patrimonio de los triunfadores y sus allegados). Esa limitada reforma agraria, como el avance igualmente limitado de la sindicalización obrera, estaban destinadas a dar al nuevo poder una base en el núcleo territorial de la nación, que había ganado por conquista; pero si ambas se mantuvieron limitadas, ello no se debió tan sólo a las ambigüedades ideológicas y políticas de los nuevos dirigentes, sino a que el México revolucionario necesitaba urgentemente re-

hacer su sector exportador para escapar a la penuria y el retorno ineludible a las recetas económicas del porfirismo ponía límites estrechos a cualquier transformación social, a la vez que hacía necesario un entendimiento con la potencia que seguía siendo económica y políticamente dominante.

Gracias a los esfuerzos de Obregón, proseguidos más intensamente por Calles, finalmente el régimen revolucionario logró establecer con los Estados Unidos relaciones más estrechas que las mantenidas por el de Díaz. El contencioso entre los vecinos desiguales fue en buena medida despejado en 1927, cuando la Corte Suprema de México, al negar carácter retroactivo al artículo 27 de la constitución, pareció eliminar la amenaza que en él habían reconocido las empresas extranjeras de tierras y minas.

Los enemigos del nuevo orden eran los tradicionales del liberalismo mexicano; si el régimen no podía contar, contra la hostilidad de la elite económico-social prerrevolucionaria, con el apoyo de los sectores de clase media urbana que habían formado en las filas liberales y que apreciaban poco a sus dominadores llegados del Norte, que junto con su séquito de dirigentes políticos y sindicales se entregaban a una alegre y ostentosa corrupción, tampoco debía temer mucho de los primeros, ya amargamente convencidos de que su derrota era definitiva y dispuestos a establecer, a través de esa misma corrupción, lazos cada vez más estrechos con sus vencedores.

Mientras las ciudades quedaban así neutralizadas, las tensiones eran más vivas fuera de ellas; aquí la minoría de *agraristas* (beneficiarios de la parcial reforma agraria), herederos de las haciendas, heredaba también los conflictos entre éstas y las vecinas comunidades, que confluían con el conflicto ideológico, destinado a intensificarse cuando Calles se propuso llevar a sus últimas consecuencias el programa anticlerical que la Revolución había heredado de la Reforma y extendió a todo el territorio nacional la empresa de descristianización comenzada más espontáneamente en los estados del Sudeste. En el arco noroccidental del Anahuac, desde el Bajío hasta Mi-

choacán, la respuesta fue en 1926 la guerra de los Cristeros. La rebelión pronto cobró sus víctimas entre agraristas y esos maestros elementales que la revolución había constituido en misioneros de su credo; la represión iba a cobrarlos aún más numerosos entre rancheros y campesinos; el conflicto sólo cesó cuando, gracias a la gestión del representante diplomático de Estados Unidos en México, un entendimiento entre Calles y el Vaticano comprometió al primero a renunciar a su desaforada ambición de eliminar toda huella de catolicismo de la vida mexicana, aunque no a seguir aplicando con máximo rigor las leyes secularizadoras.

La sucesión de Calles pareció abrir para la revolución una trayectoria política cercana a la del Porfiriato: en 1928 el principio de no-reelección era derogado para hacer posible la de Obregón. El asesinato de éste iba a imponerle un rumbo distinto; para afrontar la crisis gravísima que él desencadenaba en la dirigencia revolucionaria, Calles emprendió la despersonalización del orden político mediante la creación del Partido Nacional Revolucionario, que al englobar a todas las fuerzas políticas identificadas con el nuevo orden integraba en él a los caudillos militares y regionales a quienes esas fuerzas respondían, que a su vez reconocían en Calles, jefe máximo del partido unificado, al primero entre ellos, mientras la jefatura del Estado era ocupada por figuras cada vez más desvaídas.

De este modo parecía consolidarse un régimen que tras de diez años de lucha y otros diez de ejercicio del poder revolucionario, en que no había cesado de agitar consignas radicales y socialistas, mientras una pléyade de pintores de deslumbrador talento ofrecía a las masas mexicanas y a las elites del mundo una imagen épica de la revolución y de la historia mexicana que en ella venía a culminar, parecía por fin capaz de devolver a México una paz no demasiado distinta de la porfiriana.

Veinte años de revolución parecían entonces desembocar en una restauración cada vez más dispuesta a decir su nombre, en la que sólo la lucha antirreligiosa -agudizada nuevamente- mantenía vivas las tensiones del pasado. La crisis

mundial y sus consecuencias iban a devolver una nueva juventud a la revolución mexicana; pero ya antes de ella la presencia de organizaciones políticas y sindicales (por escasa que fuese su autonomía frente a un poder político que era sustancialmente militar) reflejaba los cambios irreversibles que diez años de guerra civil habían arrojado sobre México.

La democratización de la base política se dio en el extremo austral de Latinoamérica de modo menos violento. En **Uruguay** fue el desenlace de una compleja evolución interna dentro del partido colorado. La significación de los partidos había parecido desdibujarse luego de 1851 en la búsqueda de una alianza de las fuerzas políticas de la oligarquía urbana que las liberase de la tutela de los caudillos de base rural; se borró aún más durante el régimen militarista de Latorre y Santos; si ambos se proclamaban colorados (y el primero era, en efecto, un veterano de la Defensa de Montevideo) eran sobre todo personeros del ejército profesional. El retorno al gobierno civil pareció marcar la vuelta al predominio del sector colorado de la oligarquía urbana; con ello la división de partidos volvió a adquirir relevancia. Pero esta solución era necesariamente endeble: Uruguay se había transformado desde 1873; Montevideo era a fines del siglo XIX una ciudad tres veces mayor que cuarenta años antes; la campiña había sido por otra parte sometida a un orden férreo que favorecía a los terratenientes y hacía posible una expansión económica muy rápida. La restauración civil se tradujo en la instauración de un difícil equilibrio con el partido blanco, representado por los últimos grandes caudillos rurales: los gobiernos colorados solían pactar con la oposición la entrega de varias jefaturas políticas de departamentos rurales a jefes blancos; Uruguay se aproximaba así a una de esas escisiones que habían sido frecuentes en su pasado, y frente al gobierno de Montevideo comenzaba a erigirse un poder rival en la campaña.

De esa peligrosa pendiente el país fue sacado por la renovación del partido colorado, que fue obra de José Batlle y Ordó-

nez; este hijo del patriciado montevideano armó tenazmente una máquina política de base popular, con raíces en Montevideo y los departamentos rurales que la expansión montevideana había transformado en granjeros; sobre esa parte de Uruguay, en que se agolpaba más de la mitad de la población del país, se asentó la nueva hegemonía colorada. Presidente en 1903, Batlle libró la batalla decisiva contra la resistencia blanca en la última y más sangrienta de las guerras civiles; al mismo tiempo llevó adelante un plan de reformas por vía legislativa que transformó a Uruguay en un estado moderno; a la vez dio fuerte impulso a las obras públicas e introdujo una intervención estatal en la economía que hizo la originalidad de la experiencia uruguaya: monopolios de comercialización y seguros iban a surgir para completar una legislación aduanera sistemáticamente proteccionista; a partir de 1920 la construcción de carreteras iba a intentar liberar al país del monopolio del transporte por los ferrocarriles británicos. Todo esto lo realizarían los gobiernos colorados solicitando contra la influencia inglesa el apoyo de Estados Unidos (en cuyo mercado financiero el Uruguay colorado iba a encontrar mayores facilidades para instalar sus empréstitos que en el de Londres).

Esas transformaciones dejaban de lado, deliberadamente, a la zona rural ganadera y latifundista, que proveía los saldos exportables gracias a los cuales la experiencia colorada era posible: mientras la democracia política arraigaba en el resto de Uruguay y se proclamaba la necesidad de continuarla con la democracia social (que iba a ganar impulso a partir de la segunda presidencia de Batlle en 1911, con un sistema de retiros y pensiones y la benevolencia oficial ante el avance del sindicalismo), en los departamentos ganaderos la política seguía también ella marcada por la huella de la hegemonía de los señores de la tierra. Uruguay seguía más escindido de lo que podía advertirse a primera vista, y Batlle buscó legitimar esa escisión en la estructura política del país, y con ello mismo privarla de su peligrosidad: esa es acaso la justificación más auténtica de su tentativa de introducir un poder ejecutivo co-

legiado, que permitiera a la minoría blanca compartir desde posición subordinada el poder. El proyecto fue recogido sólo a medias por la constituyente de 1916 (que daba al Consejo de Gobierno funciones de administración y reservaba las políticas y militares al presidente de la República). La constituyente marcó la quiebra de la unidad colorada; los notables del partido, hostiles por igual al autoritarismo y al radicalismo de Batlle (que haría consagrar por la Constitución su anticlericalismo creciente) crearon un grupo disidente. La división de la oposición blanca salvó, sin embargo, la hegemonía política del jefe colorado.

Pero las bases del Uruguay batllista, que había pasado en quince años de la guerra de montonera y lanza al *welfare state*, eran frágiles. Lo eran en lo político: ese moderno partido de ideas y de masas que quería ser el batllismo se apoyaba sobre todo en la figura de su creador; el vencedor de los caudillos era él mismo un caudillo, y su prestigio era hasta tal punto personal que luego de su muerte el problema de la sucesión se planteó como problema dinástico; aun en la década del cincuenta, la querella entre la *branche ainée y* la *branche cadette* (en la que se había refugiado el talento político heredado) iba a contribuir a la inestabilidad política. La muerte de Batlle debía entonces afectar gravemente la solidez del sistema, que aun en sus momentos más brillantes había vivido atravesando crisis casi permanentes. Por otra parte, el batllismo no tenía programa sino para tiempos de prosperidad; sólo reinando ésta era posible financiar la modernización política del Uruguay mercantil, granjero y burocrático utilizando las ganancias de las exportaciones y sin afectar no sólo la viabilidad económica de la producción primaria sino todavía la prosperidad de las clases terratenientes, a las que hubiese sido políticamente muy peligroso lanzar a la desesperación. La expansión de la primera década del siglo, el largo verano de la guerra y la posguerra –cuyas posibilidades Uruguay supo utilizar mejor que la vecina Argentina, más apegada a la hegemonía británica– fueron el clima económico en que floreció el Uruguay batllista, cuya

confianza optimista en las posibilidades nacionales pasó a ser algo más que una fe política y se transformó en un rasgo de la conciencia nacional, tan distinta en este aspecto de la que a lo largo del siglo XIX se había atormentado ante el espectáculo de un país que no se decidía a reconciliarse consigo mismo.

La crisis iba a traer un desengaño sólo paulatino, hasta ella, sin embargo, Uruguay ofreció el ejemplo más feliz de democratización política y modernización social que se dio en esta etapa latinoamericana. Por comparación, las experiencias argentina y chilena parecen menos logradas.

La marcha hacia la democratización fue en **Argentina** mucho más rica en incidentes. En 1880 el general Roca logró armar un régimen político en que se conjugaban los intereses de las clases terratenientes del litoral, beneficiarias principales de la modernización económica, y los de los amos extranjeros del comercio y el transporte; serían las clases altas de las zonas menos modernizadas del interior las que tomarían a su cargo lo principal de la tarea política, encontrando así a menudo una vía indirecta para compartir individualmente la prosperidad que se expandía en otras zonas. Los sectores populares urbanos y rurales del litoral, socios menores del proceso, perdían gravitación política en la medida en que en su composición entraban en número creciente los extranjeros; los del interior -totalmente excluidos de los beneficios del cambio- no tenían aún ninguna tradición política independiente de los sectores altos locales.

En el decenio que comenzaba en 1880, la prosperidad argentina creció rápidamente; el país cambió más en esos diez años que en toda su historia anterior. Ello fue posible gracias a un aumento vertiginoso de la inmigración y de la inversión extranjera; la primera era predominantemente italiana, la segunda británica. El Estado nacional debió competir en la Bolsa de Londres con los provinciales, y bien pronto con los municipios, lanzados a una onerosa carrera de progreso edilicio. Al comienzo, el régimen roquista buscó poner un límite a esa

conquista financiera del país (trató por ejemplo de reservar la expansión ferroviaria para las líneas del Estado). Bien pronto debió abandonar esas reticencias: el capital local se volcaba en la especulación en tierras, más rendidora que cualquier otra; el Estado necesitaba fondos crecientes para financiar una estructura que el progreso demográfico y económico hacía más compleja, y que necesidades de patronazgo político recargaban aún más. Finalmente, el crédito extranjero debió financiar aún parte del coste normal de la administración; el sucesor de Roca, su cuñado Juárez Celman, siguió preservando ese ritmo de alocada prosperidad, que era la única garantía de estabilidad política; para ello debió sacrificar la estabilidad monetaria, lanzándose a una inflación del papel moneda mediante la multiplicación de bancos emisores privados.

En esa década de cambio vertiginoso también Argentina encaro -más prudentemente que en otros países- la laicización de la vida pública; para este aspecto de su programa, que dio al Estado el registro de nacimientos, casamientos y defunciones, creó el matrimonio civil y limitó la influencia eclesiástica en la escuela, Roca contó con el apoyo de sus grandes opositores -Mitre, Sarmiento- que, por su parte, habían aplicado en el pasado políticas secularizadoras aún más cautas.

El reemplazo de la lucha política por la administración de las cosas, encarada con criterios técnicos, que constataba en 1886 el presidente Juárez Celman, se reveló una innovación efímera. Los esfuerzos desesperados por postergar la crisis económica no impidieron que ésta estallase en 1890; junto con ella se dio un despertar político de inesperada amplitud. Fracasada una revolución cívico-militar, Juárez debió renunciar; su sucesor fue el vicepresidente Pellegrini, que unía a la confianza de los financistas europeos la del ex presidente Roca (lanzado a la oposición solapada por las veleidades de independencia de su cuñado y sucesor). El frente revolucionario se dividió frente a esta rectificación de la línea oficial; el general Mitre se manifestó dispuesto a participar en una reconciliación de los sectores dirigentes devueltos al sentido de

la moralidad política y administrativa por la dura experiencia de 1890. Pero la agitación había dejado como herencia una movilización más amplia de la habitual y poco dispuesta a desaparecer espontáneamente. De la coalición política que había respaldado la revolución se separó la Unión Cívica Radical que, en ruptura total con el orden conservador, proclamaba la necesidad de volver al imperio de la verdad constitucional y electoral.

Si el programa del radicalismo no tenía nada de revolucionario, la salida revolucionaria era la única que le quedaba abierta; el régimen conservador, tras de desembarazarse en 1892, gracias a la habilidad de Roca, del «candidato nacional» a la presidencia que parecía ser Mitre, se mostró poco dispuesto a arriesgar su supervivencia en confrontaciones electorales honradas. El radicalismo iba a ensayar inútilmente la revolución en 1893 y 1904, pero sus fracasos no le iban a quitar vigor; su amenaza siempre presente gravitaba sobre el orden conservador, que a partir de 1904 se disgregaba al desvanecerse la hegemonía del general Roca sobre esa laxa alianza de grupos provinciales que era el conservadurismo argentino. En 1912 el nuevo presidente conservador, Roque Sáenz Peña, creyó llegada la hora de hacer realidad el sufragio universal, sólo nominalmente practicado en Argentina hasta entonces. Con ello se abría al radicalismo el camino del poder: en 1916 el jefe de un cuarto de siglo de conspiraciones radicales, Hipólito Yrigoyen, llegaba a la presidencia de la república por muy ajustada mayoría.

Ese radicalismo triunfante se apoyaba en las clases medias urbanas del litoral y en muy amplios sectores populares dentro de las ciudades; en casi toda la clase media rural de la zona del cereal, en una parte sustancial de los hacendados menores en la zona ganadera; en grupos marginales dentro de las clases altas del interior. Con esos apoyos se comprende que no pudiese practicar una política ni muy innovadora ni muy coherente. A partir de 1916 Yrigoyen consagraría su capacidad administrativa –que iba a revelarse limitada– a la eliminación de

las huellas de un pasado que proclamaba oprobioso en el cuerpo de funcionarios; con ello, a la vez que entendía cumplir un deber moral impostergable, consolidaba una máquina electoral que sólo se hizo invencible en el gobierno. En lo económico el radicalismo innovó poco, en lo social buscó superar el enfrentamiento heredado entre un régimen que se juzgaba defensor del orden social amenazado y un movimiento sindical de raíz urbana (y a menudo extranjera) que, pese a su predominante moderación, era presentado como extremadamente peligroso. Para ello alentó a los sectores más moderados del sindicalismo, y sobre todo a los que (por no estar vinculados al minoritario partido socialista, fundado en 1896) podían ser discretamente utilizados por la máquina electoral del radicalismo. En el campo recogió, con las primeras leyes de arrendamiento, las muy moderadas exigencias de los arrendatarios de la zona del cereal, a cuya organización -la Federación Agraria Argentina- otorgó apoyo también discreto pero decisivo. Igual discreción mostró para apoyar el movimiento de reforma universitaria, pese al vocabulario extremo que algunos de sus dirigentes empleaban: esperaba de él que pusiera fin al predominio que miembros de la aristocracia conservadora retenían en la Universidad.

A la vez que alentaba a las tendencias renovadoras moderadas (de cuyo avance esperaba una disminución de la gravitación de los sectores conservadores en la vida del país) el radicalismo combatió con energía a menudo brutal a las que, directa o indirectamente, parecían significar una amenaza revolucionaria para el orden social. En 1919 una intervención del ejército fue la culminación de la Semana Trágica, en cuyo comienzo algunos jefes sindicalistas y sobre todo muchos de sus adversarios habían creído posible la instalación del poder soviético en Buenos Aires; a ello siguió una represión que causó centenares de víctimas obreras y contó con la colaboración voluntaria de organizaciones de orientación conservadora; aún más innecesariamente salvaje fue la represión de la huelga de peones rurales patagónicos en 1921.

Esa combinación de halago y rigor es menos incoherente de lo que los adversarios del radicalismo querían suponer; la clave de su coherencia no había de encontrarse, sin embargo, en las tomas de posición doctrinarias de los dirigentes, que se rehusaban a admitir la existencia misma de problemas sociales; para Yrigoyen la política se agotaba en sí misma; estrictamente político era ese austero ideal de regeneración a cuyo servicio el jefe radical ponía un arte maniobrero capaz de convivir con su elevada (si bien algo vacía) conciencia moral. Como el batllismo, el radicalismo era difícilmente separable de ese jefe, un extraño y admirable jefe político que sin haber hablado casi jamás en público logró gozar de una popularidad incomparable en Argentina tanto por su amplitud como por su hondura.

La Constitución impedía a Yrigoyen mantenerse en la presidencia luego de 1922; para sucederle eligió a Marcelo Torcuato de Alvear, un aristócrata que había sido ornato de París durante la agonía de la *belle époque* y que Yrigoyen juzgaba demasiado frívolo e insignificante para disputarle la jefatura real del partido y del gobierno. Pero si el nuevo presidente no logró socavar el predominio de su predecesor sobre la máquina partidaria, su estilo de gobierno neoconservador lo apartó del jefe de su partido; en 1924 una escisión daba lugar a una larga prueba de fuerza, cuyo desenlace fue la elección presidencial de 1928. Contra el sector radical antipersonalista (apoyado por el presidente Alvear y los grupos conservadores) Yrigoyen logró hacerse reelegir por una mayoría sin precedentes en el país; ese «plebiscito» en favor de un partido que sólo conservaba tras de su anciano jefe a dirigentes de relativo prestigio significaba el advenimiento de un radicalismo despojado de buena parte de los contactos con las clases altas y medias superiores que había sabido conservar en 1916 y 1922; significaba también el rompimiento del radicalismo con casi todo el personal político activo del país.

Era una situación peligrosa, aun en ese año de 1928 que marcó el punto más alto de la prosperidad argentina, con exportaciones de doscientos millones de esterlinas oro (dos veces las de

1913). Al año siguiente la crisis mundial comenzaría a devastar las estructuras de una Argentina demasiado abierta a los vientos del mundo. El radicalismo no había modificado un sistema impositivo que, para no golpear a los intereses terratenientes, castigaba sobre todo las importaciones; la crisis comercial que las redujo drásticamente trajo la indigencia del Estado (junto con la desaparición del respaldo áureo para la moneda). Mientras la economía y las finanzas del país se derrumbaban, Yrigoyen preparaba la última de sus hazañas políticas: la conquista del Senado, que durante toda la etapa radical había sido fortaleza conservadora. Esta suprema victoria nunca sería alcanzada; las elecciones de comienzos de 1930 revelaban una fuerte pérdida de popularidad del radicalismo yrigoyenista; en septiembre de ese año un golpe militar ponía fin al gobierno de Yrigoyen; junto con él parecía condenada la experiencia democrática que Argentina había comenzado en 1912.

Surgido de un país de más complejo equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, el radicalismo se mostró menos innovador que el batllismo uruguayo; las grandes líneas del orden dado al país por los conservadores fueron mejor respetadas; la prosperidad -que en la etapa radical fue muy grande- no era sino la del último tramo de un proceso ascendente cuyo impulso venía de atrás, y la perplejidad frente al propio país que en la década del veinte domina en Buenos Aires, mientras Montevideo celebra el éxito de una fórmula político-social que se ha encarnado en una empresa nacional, muestra muy bien las consecuencias de esa diferencia. A pesar de ella, aquí como en Uruguay, el movimiento popular se revela muy ligado por una parte a un caudillo (y en este sentido la decadencia de Yrigoyen resultó más inmediatamente catastrófica que la muerte de Batlle) y por otra a la prosperidad económica, indispensable para llevar adelante sin tormentas una moderada redistribución de los ingresos.

En **Chile,** ni aun en etapa de prosperidad pudo darse una ampliación de la base política sin tormenta. La afirmación liberal

había sido en 1871 el reflejo en el equilibrio político de la complejidad nueva que alcanzaban los sectores dirigentes chilenos gracias al auge minero y comercial. La guerra del Pacífico iba a confirmar y acentuar las transformaciones que habían llevado al triunfo liberal; en el intercambio internacional Chile era cada vez menos el país del trigo y los cueros; pasaba a ser cada vez más el del salitre y luego el del cobre. Y a la vez era el protagonista de una victoria militar que cambiaba en su favor todo el equilibrio sudamericano: ese éxito daba al liberalismo un arraigo aún mayor. Bajo signo liberal el presidente Santa María, entre 1881 y 1886, obtuvo para Chile los máximos provechos territoriales sobre Perú y Bolivia, comenzó una política de ampliación de las funciones del Estado y de obras públicas (posible gracias a la abundancia traída al fisco por las rentas del salitre), llevó adelante la laicización de cementerios y estableció el Registro Civil. La sucesión de Santa María provocó la quiebra de la unidad liberal; si los tres partidos –liberal, radical, nacional– que formaban a la izquierda del conservadurismo aceptaron el candidato presidencial Balmaceda, ministro y favorito de Santa María, dentro de cada uno de ellos las disidencias se multiplicaron. La victoria de Balmaceda fue asegurada gracias a los vastos recursos que la prosperidad chilena concedía al gobierno; el nuevo presidente prosiguió la obra innovadora de su predecesor pero para poder continuarla debió recurrir al crédito extranjero de modo cada vez más frecuente. En 1890 llegaba a Chile la crisis y con ella la reacción contra la afirmación del poder presidencial que había sido posible gracias a la prosperidad de la década anterior. La mayoría liberal se dividió en el parlamento en torno al problema de la sucesión de Balmaceda; éste intentó gobernar sin contar ya con ella y al comenzar 1891 promulgó por decreto el presupuesto nacional que el Congreso se negaba a aprobar.

Era la guerra civil: la mayoría parlamentaria, con apoyo de la marina y una parte del ejército, se hizo fuerte en el Norte y pasó a controlar así la fuente de las exportaciones chilenas; a mediados del año sus fuerzas invadían el Chile central y tras

dos sangrientas batallas tomaban Santiago, donde Balmaceda se suicidaba. Esta peripecia ponía fin al avance del poder presidencial en Chile. ¿También frustraba una tentativa de la burguesía nacional chilena para tomar el poder? Así se ha sugerido recientemente; pero esta hipótesis no parece demasiado plausible: en la política de Balmaceda sólo algunas iniciativas aisladas parecen adecuarse a los intereses de esa burguesía nacional; por añadidura, el desarrollo mismo de la crisis no permite descubrir en ningún momento de ella la presencia de ese sector-clave, cuya existencia misma es sólo postulada y no demostrada. Tampoco la trayectoria posterior del grupo político adicto a Balmaceda –que se adaptó muy bien al sistema parlamentario y se caracterizó tan sólo por su extremo oportunismo hace adivinar tras de él la presencia de un sector social importante, postergado por la solución dominante en Chile.

En todo caso el parlamentarismo, que provocó la fragmentación progresiva de los partidos chilenos, fue acompañado de un inmovilismo político sólo quebrado frente a las agitaciones sociales, reprimidas violentamente en Santiago y Valparaíso y aun más duramente en el norte minero y salitrero. Las consecuencias de la paulatina ampliación del sufragio no eran ya limitadas primordialmente por la acción del Gobierno, sino por la de una corrupción electoral que requería movilizar sumas demasiado grandes para que fuera posible hacer política sin contar con mucho dinero. Como en la Inglaterra anterior a 1832, los partidos buscaban ante todo candidatos capaces de financiar su victoria.

Dos coaliciones inseguras dominaban la política chilena: la Unión Liberal y la Alianza Liberal-Conservadora. En 1920, con motivo de la renovación presidencial, en un clima social más agitado, la oposición entre ambas se cargó de un contenido más preciso. A la unión conservadora se oponía la candidatura del liberal Arturo Alessandri. Defensor de dirigentes obreros del norte salitrero, Alessandri supo presentarse como el candidato de la renovación y de las clases populares; en algún momento iba a denunciar a la «chusma dorada» que go-

bernaba a Chile e invitar a sus seguidores a atacar sus suntuosas residencias. La victoria de Alessandri fue ajustada, pero tuvo consecuencias decisivas. El movimiento obrero creció; mientras un sector, de extracción sindicalista, organizaba el Partido Comunista, la clase obrera en su conjunto otorgaba adhesión al nuevo presidente. Éste encontró frente a sí la resistencia parlamentaria, mal equilibrada por la minoría que le era adicta, formada ella también en la escuela de un parlamentarismo poco amigo de la disciplina. El conflicto entre los poderes transformó la elección de renovación parlamentaria de 1924 en un plebiscito, que el presidente ganó holgadamente (no sin volcar en su favor los recursos del Estado). La mayoría favorable no se mostró, sin embargo, más eficaz. Ante el marasmo legislativo, el 8 de septiembre Alessandri debía alejarse del país y dejar el poder a una Junta militar; ésta pareció orientarse hacia una salida favorable a la Alianza conservadora; por esta razón fue barrida por otro sector militar, que devolvió el poder a Alessandri e impulsó la reforma constitucional. La Constitución de 1925 separaba la Iglesia del Estado, establecía el régimen presidencialista e incluía principios juzgados socialistas por algunos (función social de la propiedad, protección al trabajador y a la salud popular). Resultado de la revolución de enero que devolvió a Alessandri a la presidencia fue también la afirmación como árbitro entre los poderes del Estado del ejército, que trataba ahora de imprimir un ritmo acelerado al proceso renovador. Jefe de la tendencia militar que había dominado en enero era el coronel Ibáñez, candidato a la sucesión presidencial a la vez que ministro de Guerra de Alessandri. La renuncia del restaurado presidente, algo fatigado de soportar la tutela de su dinámico ministro, obligó a éste a renunciar por el momento a sus ambiciones presidenciales; en su lugar era elegido como candidato único Emiliano Figueroa Larraín, político moderadísimo; a su lado seguiría gravitando como ministro de Guerra el coronel Ibáñez, que en 1927, tras de la renuncia de Figueroa, era por fin ungido presidente en una elección en que fue candidato único.

El gobierno de Ibáñez se caracterizó por una actividad febril: obras públicas (carreteras y puertos, edificios escolares, reforma escolar y de la sanidad); al mismo tiempo se transformó progresivamente en una dictadura legalizada gracias al apoyo del amedrentado Parlamento. Esa dictadura progresista (y no necesariamente hostil a las aspiraciones de los sectores populares) se apoyaba en la prosperidad de los años 1925-29; a lo largo de ellos acudió sistemáticamente al crédito, en especial el norteamericano, para financiar sus ambiciosos programas. La depresión la transformó en un régimen más duro y represivo, a la vez que la privaba del apoyo popular; a mediados de 1931, tras de unos días agitados en Santiago, el presidente Ibáñez cruzaba la frontera hacia el destierro. Dejaba tras de sí un país arruinado -por él, según sus adversarios; sobre todo por una crisis que golpeaba los mercados extranjeros y privaba a la moneda chilena de casi todo su valor (el peso chileno parecía, en efecto, encontrarse en caída libre).

En Chile, entre las minorías tradicionalmente gobernantes y las aspiraciones modernizadoras, el ejército había ocupado la escena como árbitro más capaz de interpretar a estas últimas que los sectores de la clase política tradicional que se proclamaban innovadores y populares. Pero las soluciones que aportaba no estaban menos ligadas a la prosperidad que las de los partidos civiles de más allá de los Andes; el militarismo progresista chileno, víctima también él del fin de los años buenos, fue tan gravemente afectado por la crisis como aquéllos.

En el resto de Hispanoamérica las tendencias a la ampliación de la participación política se hicieron sentir de modo aún más saltuario, y con consecuencias más limitadas. En los países andinos del Pacífico -Perú y Ecuador- hallamos desarrollos tras de los cuales gravita la división no superada entre su sector moderno y la masa rural indígena mal incorporada a la nación.

En **Perú** la herencia de la guerra de 1879-83 fue el resurgimiento del caudillismo militar, al cual se opuso el civil de Ni-

colás de Piérola; al adversario del civilismo, el discutido moralizador de las finanzas que estableció el nexo entre la economía peruana y la casa mercantil de Dreyfus, se transformó durante la guerra en uno de los jefes de la resistencia contra el avance chileno; aunque esa resistencia se reveló fútil bastó para hacer de Piérola un caudillo popular capaz de resurgir con acrecido prestigio en la posguerra.

Como tal capitaneó en 1895 la revolución contra el predominio militar (que buscaba consolidarse conservando en la presidencia al general Cáceres); una guerra civil extendida y sangrienta le dio el poder. Obtenido éste, y apoyado en una popularidad muy vasta entre las clases populares de Lima, Piérola se mostró cada vez menos el adversario y cada vez más el continuador de los civilistas; en particular la reforma monetaria, que introdujo en Perú el patrón oro, si dio más regularidad a la vida económica, significó también acrecida penuria para los sectores populares. La acción de Piérola se tradujo también en una reforma de la estructura impositiva; la recaudación quedó ahora a cargo de una sociedad mixta (ya los gobiernos militares que siguieron a la derrota habían entregado ferrocarriles, minas, puertos y guaneras a los acreedores extranjeros de Perú, librándose de ese modo expeditivo de la deuda externa). Piérola comenzó a erigir una estructura administrativa adecuada para el Perú en reconstrucción económica; la expansión agrícola en la costa y la de la minería y la ganadería serrana permitieron el retorno a la prosperidad del país mutilado por la derrota; esa prosperidad se distribuía según líneas comparables a las de la preguerra: en primer término la gozaban las clases altas de Lima; luego, los terratenientes de la costa y los sectores medios y populares urbanos; por último (en medida muy escasa), los sectores populares rurales que participaban en la expansión costera. La vasta población indígena serrana permanecía, en cambio, al margen del proceso; su única participación en él se daba a través de la incipiente emigración a la costa, en parte para proporcionar mano de obra a la agricultura de regadío en expansión.

Los gobiernos que sucedieron al de Piérola continuaron su orientación; en la ola de progreso desigualmente distribuido las consecuencias de la movilización popular que significó la guerra civil de 1895 fueron atenuándose progresivamente; de ellas sólo sobrevivió la popularidad plebeya de Piérola en la capital (el *califa* de los verdaderos creyentes, según lo caracterizaban quienes no compartían su algo nebuloso credo) y la tensión entre este singular caudillo civil y urbano y los sectores oligárquicos cuya política hacía. Pero todo esto importaba cada vez menos mientras Perú se orientaba hacia la dictadura progresista, que culminó en el gobierno de Augusto B. Leguía; durante once años, entre 1919 y 1930, el antiguo presidente constitucional y experto ministro de Hacienda se transformó en líder de la *Patria Nueva, y* en titular de una dictadura cada vez más severa, mientras el alud de inversiones y préstamos norteamericanos aceleraba el proceso de expansión de la economía y las obras públicas hasta darle un ritmo frenético.

La dictadura de Leguía debía hallar resistencias en sectores de la oligarquía limeña, cuyo poderío político mediatizaba y cuyas rivalidades internas explotaba para mejor someterla, distribuyendo arbitrariamente las ventajas económicas que en Perú, y no sólo en Perú, derivan del favor político. Pero esas resistencias no impidieron que en lo esencial la política económico-financiera de la Patria Nueva fuese muy escasamente nueva; aun en la búsqueda de apoyos políticos populares el régimen se detenía, por otra parte, en la plebe de Lima. Aunque Leguía había advertido muy bien la gravitación potencial de la sierra india y buscado canalizarla en su provecho (con iniciativas aparatosas como la adopción por el presidente del título de Viracocha, pero también con otras más sustanciales, que reflejaban en influjo fugaz de algunos ideólogos del indigenismo en las primeras etapas de su administración, entre ellos el reconocimiento legal de las comunidades, que tuvo por consecuencia sólo aparentemente paradójica una intensificación de la dependencia india, al establecer lazos más estrechos –y necesariamente desiguales– entre la burocracia cen-

tral y comunidades que habían sobrevivido pese a la ausencia de ese reconocimiento) la más importante de esas iniciativas -la conscripción vial, que comenzaba a incorporar a la sierra a la red de caminos que marcaba el ingreso de Perú en la era del automotor, pero recurría para lograrlo al trabajo forzado de sus habitantes- estuvo lejos de conquistarle el agradecimiento de éstos.

Desde que, en 1923, el gobierno de Leguía tomó un rumbo más decididamente conservador vio sumarse a sus enemigos de las filas oligárquicas los de sectores antes menos articulados, que encontraban su punta de lanza en el movimiento estudiantil y tuvieron ocasión de manifestarse en la resistencia despertada por la iniciativa del presidente que consagraba al país al Sagrado Corazón de Jesús, en la que alcanzó por primera vez celebridad nacional Víctor Raúl Haya de la Torre, dirigente estudiantil que ya se había distinguido en el apoyo al movimiento obrero limeño de 1919.

Esa celebridad fue el motivo de su destierro, desde el cual, si logró mantener contactos con el futuro elenco dirigente del partido de masas que organizaría a su retorno a Perú, no pudo extender sus esfuerzos organizadores a sectores más amplios. Era la organización y la acción de éstos lo que Leguía buscaba sobre todo evitar; desde 1923 reprimió con mano dura la acción sindical en las ciudades y más aún en las plantaciones de la costa, y frente a José Carlos Mariátegui, el incomparable agitador político y cultural, su tolerancia -inagotable frente a sus audacias ideológicas- cesó súbitamente cuando lo descubrió interesado en la reactivación del movimiento sindical limeño.

Esa alarma era quizá excesiva; mientras duró la prosperidad la Patria Nueva no tenía mucho que temer de sus enemigos: gracias a esa prosperidad le era posible sobrevivir entre una oligarquía aún más poderosa que en los países australes y sectores populares más débiles y sobre todo más heterogéneos que en éstos. El fin de la bonanza, que fue también el del poder de Leguía, devolvió a primer plano al ejército, que lue-

go de 1895 sólo fugazmente había reaparecido en él; en 1930 el coronel Sánchez Cerro, tenaz organizador de conspiraciones militares contra la Patria Nueva, la derriba finalmente sin encontrar casi resistencia.

En el origen de **Ecuador** moderno hay también una guerra civil: la del caudillo liberal Eloy Alfaro contra la hegemonía conservadora de las grandes familias terratenientes de Quito. Contra ellas contaba Alfaro con el apoyo de Guayaquil y la costa, de donde salía el cacao que seguía siendo, como un siglo antes, el principal aporte ecuatoriano al comercio mundial. Vencedor en 1895, Alfaro impulsó las constituciones de 1895 y 1908, que marcaron la transformación progresiva de Ecuador en un estado laico; prosiguió la obra del ferrocarril de Quito a Guayaquil, cuya inauguración en 1908 anunciaba, a juicio del gobierno liberal, el nacimiento de un nuevo Ecuador mejor unido al mundo exterior. Ese anuncio era en parte ilusorio; el problema de las comunicaciones no era, sin duda, el único que pesaba sobre la economía serrana, que tenía, por el momento, muy poco que ofrecer al mercado externo; tampoco en los aspectos sociales el predominio liberal introdujo allí innovaciones sustanciales; el resultado fue que la aristocracia terrateniente, hostil al dominio liberal, seguía allí dominando. Por su parte, el liberalismo se dividió bien pronto, entre el impaciente autoritarismo y el tono popular de Alfaro y el estilo más circunspecto de los notables del partido. El retorno del caudillo a la presidencia no se dio sin tormentas y, abandonada ésta, terminaría su carrera linchado por la multitud mestiza de Quito, nunca ganada del todo por un liberalismo identificado con el triunfo de la costa.

Pese al recuerdo de Alfaro, transformado en bandera del liberalismo (las casas liberales de clase media comenzaron a colocar el busto de yeso del gran caudillo allí donde antes se habían entronizado imágenes devotas), luego de su muerte su partido se transformó cada vez más en expresión de la oligarquía costeña, ahora ampliada con algunos profesionales de

clase alta vinculados con el comercio internacional (que comenzaban ya a reclutarse también en la aristocracia serrana). Esa trayectoria era acaso inevitable dada la pasividad del Ecuador indígena, que sólo salía de su apatía para apoyar ocasionalmente a la resistencia conservadora; en 1927 el predominio del liberalismo, cada vez más fragmentado, fue quebrado por un golpe militar que puso en el poder al doctor Eusebio Ayora; su dictadura, seguida con expectante simpatía por sectores muy amplios, se lanzó a una renovación vertiginosa de la estructura financiera y administrativa del Estado; esa modernización indispensable fue encarada con energía, pero también con extrema volubilidad en cuanto a la elección de las soluciones, y bien pronto pudo advertirse que su eficacia era limitada. Fue, con todo, la crisis de 1930 la que también aquí marcó un agravamiento de las tensiones sociales y políticas, que puso fin a la experiencia comenzada tres años antes.

En el resto de Latinoamérica seguía dándose, de modo más puro, la alternativa entre predominio oligárquico y hegemonía militar. Notemos, sin embargo, la excepción constituida por **Costa Rica,** donde la continuidad institucional sólo fue quebrada en la segunda década del siglo por una tentativa dictatorial cuyo desenlace fue la marginación del ejército; allí el gobierno seguía en manos de la clase media rural del valle central, vinculada al cultivo del café. Y otra excepción de más bulto, la de Cuba, donde el tardío acceso a la independencia creó situaciones que, comenzando por ser excepcionales, se fueron acercando cada vez más al cuadro latinoamericano.

Cuba comienza su vida política independiente dotada de un esquema de organización partidaria totalmente ortodoxo: un partido liberal se opone también allí a uno conservador. De hecho, las cosas son más complejas: en las filas liberales se agolpan casi todos los que han hecho la guerra de Independencia; el conservador es un partido de intereses en que abundan quienes han sido hasta el fin partidarios del dominio español. Y además Estados Unidos, libertador y conquistador

de Cuba, mantiene su tutela e intenta evitar el triunfo de los liberales, a los que teme por igual por sus virtudes como por sus defectos. La Constitución de 1900, surgida de una asamblea dominada por los liberales, incluye, contra los deseos de la potencia protectora, el sufragio universal; incluye también, por presión de esa potencia, garantías para la representación de las minorías en el Parlamento, que serán burladas mediante la invención de partidos opositores títeres, en la cual los sucesivos gobernantes cubanos mostrarán una infatigable maestría.

Pero, finalmente, Estados Unidos logra algo más sustancial: el primer presidente cubano, Tomás Estrada Palma, liberal moderado, es elegido bajo su auspicio por una coalición de liberales y conservadores y se inclina cada vez más a estos últimos, mientras los primeros se vuelven en busca de protección a Estados Unidos, que por la enmienda Platt (incorporada bajo presión de la potencia beneficiaria a la Constitución cubana) tiene derecho a intervenir en Cuba para asegurar la vida, propiedad y libertad individual. En 1906 Estados Unidos, llamado por los liberales, coloca a Cuba bajo administración militar; en 1908, con una nueva ley electoral, que los ocupantes proclaman candorosamente *fraud-proof*, triunfa el liberalismo, para dividirse en 1912 y dejar el poder al conservador García Menocal, que logra la reelección en 1916, contra un alzamiento liberal, contemplado esta vez con indiferencia por Estados Unidos, con cuya política internacional Menocal se ha apresurado a alinearse. La segunda presidencia de Menocal estuvo acompañada de una enloquecida prosperidad azucarera, causada por los altos precios de guerra; la clase política cubana participó con entusiasmo en la danza de los millones, abandonando sus últimas reticencias frente al avance de la corrupción. El anticlímax vino en 1920, con una crisis de precios que repercutió en el conjunto de la vida cubana y que debió enfrentar el presidente Zayas, liberal disidente, impuesto por Menocal contra la resistencia de sus antiguos correligionarios. Zayas buscó asesoramiento para salir de la crisis en

el Gobierno de Estados Unidos, que envió en misión de consejero al general Crowder; el resultado fue un nuevo avance en la conquista de la tierra azucarera de Cuba por parte de las compañías norteamericanas y un nuevo crédito de la banca Morgan para el Estado cubano.

En 1924 logró ser elegido presidente el general Gerardo Machado, candidato liberal primero combatido y luego apoyado por Zayas. Ese antiguo gerente de la sucursal habanera de la General Electric Company pudo aprovechar el retorno de la prosperidad financiera internacional (mientras la economía cubana seguía golpeada por los bajos precios del azúcar). Si la corrupción se mantuvo, fue acompañada (como no lo había sido en época de Zayas) de la ejecución de un ambicioso plan de obras públicas, que incluía la carretera central de Cuba y muy numerosas obras de sanidad. En 1928 Machado lograba postergar la elección presidencial hasta 1930, mientras la crisis del precio del azúcar se agudizaba, al triunfar en Estados Unidos un proteccionismo cada vez más cerrado. Las tentativas de disminuir las ventas creando un ente público destinado a comprar y almacenar azúcar no lograron cambiar sustancialmente la situación. Desde 1928, por otra parte, la resistencia contra el gobierno de Machado, transformado en dictadura abierta, se hizo más violenta: en particular los estudiantes universitarios se lanzaron a una agitación a menudo terrorista, que no pudo ser sofocada pese a la brutalidad de los medios elegidos para ello. En 1933 un nuevo gobierno de Estados Unidos, el de F. Delano Roosevelt, buscó poner fin a la crisis permanente en que había desembocado el régimen de Machado; a mediados de año una revolución militar expulsaba al dictador, y ponía fin no sólo a un gobierno sino a una etapa en la historia de Cuba.

Ya en 1933, en efecto, la vinculación entre las insuficiencias de la vida política cubana y la dependencia de Cuba respecto de su metrópoli, era universalmente advertida; las consecuencias negativas que derivaban de la dependencia total de la economía cubana respecto a la estadounidense también lo eran.

En 1927, en un estudio destinado a hacerse célebre, *Azúcar y población en las Antillas,* Ramiro Guerra y Sánchez profetizaba para Cuba un futuro comparable al de las West Indies; colonia de plantación de una metrópoli que producía ella misma el azúcar que era la única riqueza cubana, un futuro de miseria creciente parecía ser la prolongación verosímil de los desarrollos que ya se estaban viviendo en la gran isla antillana.

Las consecuencias políticas de la afirmación de la hegemonía norteamericana se hacían sentir simultáneamente en un marco más amplio. En primer lugar, en **Puerto Rico**, transformada por la paz de París en posesión de Estados Unidos, y arrasada en su economía por el impacto de la nueva metrópoli, que significó el triunfo del azúcar sobre el café, transformada en su estructura demográfica por una explosión provocada en parte por las enérgicas campañas sanitarias de la administración norteamericana, sometida a una política educativa y cultural que combatía el analfabetismo creando un aparato enseñante que usaba como lengua propia el inglés.

Frente a esta situación colonial las respuestas abarcaron desde el estadismo (partidario de la incorporación de Puerto Rico a Estados Unidos) pasando por el autonomismo hasta el independentismo. Pero por el momento esos movimientos conmovían tan sólo a sectores de clase alta y media urbana, que por otra parte dependían en muy alta medida de la metrópoli (que enfrentó, por su parte, las disidencias con medidas represivas); la eficacia de estos movimientos fue entonces muy restringida; más exitosa fue, en cambio, la resistencia contra las pautas culturales del país dominante; pese a las transformaciones impuestas al modo de vida portorriqueño desde 1898, Puerto Rico seguiría siendo un país hispánico.

Mientras Cuba y Puerto Rico son sometidos a la tutela directa de Estados Unidos, el resto del Caribe y Centroamérica continental comienzan a vivir más plenamente las consecuencias políticas de la hegemonía económica y militar norteamericana. En particular **Nicaragua** y Santo Domingo pudieron sen-

tirlas. En Nicaragua el interés de Estados Unidos se vinculaba con la posibilidad de abrir allí un canal alternativo al de Panamá; en 1907 contribuyeron a expulsar al dictador liberal Zelaya y desde 1912 una guardia de la legación norteamericana, constituida por infantes de marina, sirvió de apoyo al predominio del partido conservador nicaragüense, que en 1916 concedía a Estados Unidos la autorización necesaria para construir, cuando lo creyera oportuno, el nuevo canal, a cambio de tres millones de dólares, destinados sobre todo a pagar las deudas internacionales de Nicaragua. En 1924 se retiró la guardia de la legación y estalló la guerra civil, concluida instalando en el poder a un nuevo presidente conservador, mantenido en él, ante el hostigamiento de la oposición, por fuerzas militares norteamericanas.

En esa guerra se hizo célebre un jefe de guerrilleros, el general Sandino, capaz de jaquear tanto a la guardia nicaragüense como a las tropas de ocupación; ante su resistencia, y a fin de liquidar el episodio nicaragüense, Estados Unidos se resignó finalmente a admitir a un presidente liberal en 1928. En 1933 Sandino era asesinado; aun más importante era que la guardia nacional hubiese sido armada y reorganizada durante la lucha por el ocupante; gracias a la superioridad militar de ese cuerpo, su comandante, el general Anastasio Somoza, responsable de ese asesinato, iba a conservar hasta su muerte un papel dominante en la política nicaragüense, y la hegemonía norteamericana pudo perpetuarse por ese medio más indirecto y apenas menos escandaloso.

En **Santo Domingo,** la intervención directa norteamericana comenzó en 1916, cuando un presidente dominicano llamó a tropas estadounidenses para preservar la paz interior; bajo la égida de los ocupantes fue reemplazado por el doctor Henríquez y Carvajal, que por su parte se negó a ratificar un tratado que ponía en manos de los Estados Unidos la percepción de las rentas aduaneras, y bajo su asesoramiento las finanzas y la defensa nacional dominicana. Los ocupantes respondieron confiscando esas rentas y poniendo sitio financiero al go-

bierno por ellos instalado. Como no lograran vencer la resistencia de éste, lo reemplazaron por una administración militar directa, concluida en 1922. También aquí la herencia de la ocupación fue la creación de una guardia nacional más poderosa y mejor organizada de lo que había sido habitual en América Central; en 1930 el general Rafael Leónidas Trujillo, con la adhesión de ese cuerpo, logró hacerse presidente de la República Dominicana.

En el resto de Centroamérica la presencia norteamericana no iba a hacerse sentir del mismo modo; allí contribuyó, a lo sumo, a favorecer lo que llamaba la estabilidad política, que en palabras más pobres se traducía en la estabilidad de regímenes autoritarios; esta misma tendencia, por otra parte, era también favorecida por el desarrollo de la economía y la sociedad centroamericanas. En **Guatemala,** la dictadura de Manuel Estrada Cabrera duró desde 1898 hasta 1920; sus vencedores atenuaron los rasgos tiránicos que el estilo político guatemalteco había adquirido durante su largo reinado; pero *en 1930 iba a comenzar una nueva y larga dictadura, la del* general Ubico... En **Honduras** la inestabilidad era la norma; sólo en 1932 iba a instalarse, sobre la ruina de más efímeras hegemonías militares, la dictadura del general Carias; en **El Salvador,** del mismo modo la evolución hacia dictaduras estables sólo maduró luego de 1930; tampoco aquí la anterior inestabilidad había significado necesariamente una atenuación de los rasgos dictatoriales.

Más sólidamente enraizado estaba el autoritarismo en **Venezuela;** luego de las alternativas que siguieron a la caída de Guzmán Blanco, entre las que no faltó un efímero triunfo legalista, en 1899 se impuso, en breve guerra civil el general Cipriano Castro; con él triunfaba un nuevo grupo depositario del poder político y militar: el de los oficiales andinos, que habían seguido al nuevo gobernante en una verdadera conquista del país por sus milicias de pastores. Así el oeste andino ganaba la hegemonía, para no perderla por casi medio siglo. Cas-

tro –recibido con el entusiasmo algo forzado que la elite caraqueña mostraba a sus sucesivos dominadores– se mostró dispuesto a proseguir, a su manera algo errática, la modernización de Venezuela; el culto por el progreso y la orientación laica continuaban en las primeras etapas de la Venezuela andina las tendencias de la época anterior. Al mismo tiempo el nuevo gobernante, surgido de las aisladas tierras montañesas, advertía menos bien que sus predecesores la importancia del lazo con las nuevas metrópolis; se dejó llevar sin alarma excesiva al conflicto con Gran Bretaña, Alemania e Italia; salvado de sus peores consecuencias por la mediación algo tardía de Estados Unidos, no vaciló en enfrentar otro conflicto, esta vez con Holanda, a la que acusaba de tolerar que su posesión de Curazao se transformarse en base para los adversarios del Gobierno venezolano. Holanda no era, sin duda, una gran potencia; respondió, sin embargo, con ataques navales y bloqueo de las costas. En pleno conflicto, Castro debió alejarse de Venezuela a buscar en Alemania cura para sus males; el menudo montañés resistía mal las consecuencias de nueve años de residencia en su Capua caraqueña. Dejó en custodia el poder a su fidelísimo y algo limitado vicepresidente, el general Gómez; éste, que esperaba su momento, hizo sus paces con los acreedores y las potencias alarmadas por los excesos de temperamento de Castro; en 1909 se instalaba en el gobierno, para mantenerse en él hasta su muerte.

El régimen de Gómez iba a llegar a ser, en la primera posguerra, algo así como el *ideal-typus* de la dictadura latinoamericana. Nada faltaba en él, ni el respeto a las formas legales (Gómez abandonaba periódicamente la presidencia en manos de hombres sabiamente elegidos, y vigilados de cerca) ni la extrema ferocidad frente a los disidentes, ni una ferocidad análoga para custodiar el orden interno y la disciplina de trabajo, ni el espíritu servicial frente a potencias e inversores extranjeros, ni la corrupción del elenco gobernante, ni la fiebre de progreso traducida en carreteras y plantas de mejoramiento sanitario. Durante la época de Gómez avanzó en Venezuela

la extracción de petróleo, que pasó de un millón de barriles en 1920 a más de ciento cincuenta quince años más tarde. El petróleo estaba comenzando a cambiar la vida de Venezuela según líneas que no eran nuevas en Latinoamérica: la prosperidad afectaba directamente a sectores urbanos de actividad secundaria y terciaria; la producción primaria iba, por el contrario, a perder importancia, salvo en el rubro que pasaba a ser dominante (y que en este caso absorbía sólo una parte pequeña de la mano de obra disponible). Aun un cambio tan limitado debía tener consecuencias en el equilibrio político de una Venezuela dominada por la envejecida *clique* de oficiales andinos; sólo los alcanzaría, sin embargo, luego de la muerte de Gómez, ocurrida en 1935 y acompañada de una explosión de salvaje alegría popular.

Las tierras centroamericanas y Venezuela, dominadas por soluciones dictatoriales de base militar, muestran, sin duda, en esta etapa grandes diferencias. Notemos, sin embargo, un elemento común: la abundancia de las crisis productivas, la aparición tardía de los rubros de producción que se hacen dominantes, a veces la conquista de una parte de la tierra fértil por inversores extranjeros confluyen para provocar un debilitamiento de los grupos oligárquicos tradicionales; Cuba, en rigor no los tiene ya hacia 1930; en Santo Domingo, en Venezuela, en parte de Centroamérica continental estos grupos sobreviven a la pérdida de la mayor parte de su poder.

En otras comarcas latinoamericanas las oligarquías se defienden mejor; aquí el modelo de la república nominalmente democrática y de hecho aristocrática se conserva también mejor.

Es en primer término el caso de **Brasil.** Sin duda la instauración de la república había significado un aumento de poder del ejército, protagonista de la revolución triunfante, y su gravitación se hizo sentir durante toda la historia republicana de Brasil. Pero hasta 1930 ésta se dio en el marco de una política dominada por los sectores influyentes en los distintos esta-

dos, que formaban ahora en el Partido Republicano, el único con gravitación real en la vida política brasileña; las clientelas rústicas de los *coroneles*, dominaban más aun que las de las oligarquías urbanas la elección de los cuerpos representativos. Entre 1891 y 1894 gobernaron sucesivamente los jefes militares de la revolución, Deodoro da Fonseca y Floriano Peixoto; luego del fracaso de esta experiencia de gestión directa, en medio de la guerra civil fue elegido presidente el político paulista Prudente de Moraes, reemplazado en 1898 por otro político del mismo estado, Campos Salles; en 1902 era un tercer político del estado hegemónico, Rodrigues Alves, quien sucedía a Campos Salles... Fue necesaria una coalición de clientelas políticas de los demás estados para poner en el Gobierno federal, en 1906, a Affonso Penna, oriundo de Minas Gerais. Muerto Penna, la lucha por la sucesión fue por primera vez acompañada de alguna participación popular: Ruy Barbosa, el tribuno que había preparado el triunfo de la república para quedar excluido en sus elencos gobernantes, alzaba ahora su candidatura contra la del mariscal Hermes de Fonseca, sobrino del fundador militar del régimen y heredero de su predicamento en el ejército. La victoria del candidato militar, a cuyo servicio obró el poder del Estado, dejó una secuela de tensiones allanadas, sin embargo, cuando Barbosa y sus adictos apoyaron, en 1914, a un candidato de unión nacional, Braz, seguido cuatro años después por otro, el veterano Rodrigues Alves. Al morir éste, Barbosa intentó de nuevo oponer su nombre al del candidato oficial; de nuevo fue vencido por la implacable máquina oficial...

En 1922 fue elegido presidente Artur Bernardes, un político de Minas Geraes que debió enfrentar una suerte de veto militar, pronunciado por Hermes da Fonseca. Su gobierno fue agitado por la oposición de los dirigentes veteranos del ejército; lo fue aún más por una rebelión de oficiales jóvenes, los *tenentes*, que en 1924 se levantaron en favor de una ampliación del régimen, incapaz de superar espontáneamente su marco oligárquico. El movimiento pudo ser sofocado; entre sus diri-

gentes se encontraba Luis Carlos Prestes, futuro jefe del comunismo brasileño; se encontraban también otros oficiales que tendrían trayectorias menos insólitas y que alcanzarían a gravitar sobre el ejército y la política brasileña en las décadas siguientes.

En 1926 alcanzó la presidencia, por el procedimiento habitual, el paulista Washington Luis Pereira da Souza. Para su sucesor intentó imponer al también paulista Julio Prestes; ello alentó a elementos de los estados marginales del Norte y del Sur a utilizar el descontento que en los políticos de Minas Gerais provocaba el retorno al monopolio paulista de la presidencia para romper la continuidad de la hegemonía del Brasil central. La Alianza Liberal presentó por candidato a la presidencia a Getulio Vargas, político que había sido ya gobernador de Río Grande do Sul y hombre de confianza de uno de los grandes electores de la república oligárquica, el también riograndense Borges de Medeiros. Prestes venció; una revolución fue la respuesta de los derrotados; luego de quince días de desganada resistencia las fuerzas militares invitaron al presidente saliente a abandonar el país y colocaron en su lugar, como presidente provisional, a Getulio Vargas.

El desenlace fue, como todas las etapas anteriores en la historia de la república oligárquica brasileña, un drama interno a los sectores gobernantes. El triunfo de Vargas no debía significar necesariamente el fin del sistema. Si lo trajo fue porque éste había agotado ya sus posibilidades y porque, por añadidura, el jefe de la revolución lo advertía muy bien y adivinaba también qué posibilidades nuevas le ofrecía la nueva situación brasileña.

Por otra parte, aun en sus momentos más exitosos, la república brasileña no había conocido la relativa solidez de la argentina. Un federalismo más arraigado condenaba a la penuria crónica al poder central; las consecuencias negativas de la dependencia de un rubro de exportación casi único –el café– se hicieron sentir, por añadidura, en Brasil ya mucho antes de la crisis de 1930. La democratización era, además, una posibi-

lidad sólo a medias practicable en Brasil: el predominio de una población rural que sólo a través de cambios sociales, por el momento impensables, hubiese podido liberarse de la tutela política de las clases terratenientes hacía que las consecuencias previsibles de la democratización del sufragio fuese la confirmación de la hegemonía de las oligarquías rurales. Luego de la crisis, que agravaba las dificultades de la economía brasileña, la búsqueda de una nueva base política, iniciada más tardíamente que en los países australes, debía buscar también canales distintos, capaces de dar a los sectores dispuestos a buscar una salida para la *impasse* de la economía nacional una gravitación mayor no sólo que la que habían alcanzado bajo la república oligárquica, sino también que la que hubiese derivado del empleo sincero del sufragio universal.

En la América española la república oligárquica conservó toda su pureza en **Colombia** y arraigó en esta etapa con inesperado vigor allí donde antes se había implantado mal: en las naciones mediterráneas sudamericanas, en Bolivia y Paraguay. En Colombia la conversión de Núñez había dado un jefe y un programa al conservadurismo; le había devuelto además el poder político, que iba a conservar hasta 1930; entre 1899 y 1903 ese poder le fue disputado en una salvaje guerra civil, la de los mil días, que causó millares de víctimas y deshizo además la economía y las finanzas colombianas. Los partidos oligárquicos revelaban de nuevo que podían en Colombia movilizar en su séquito masas populares muy amplias, sin por ello perder su carácter. Esa calamidad y la secesión de Panamá que iba a seguirle, hicieron nacer por un momento fugaz en las elites colombianas la duda sobre la validez de las tradiciones políticas a la vez belicosas y refinadas de las que se sentían habitualmente orgullosas; el general Rafael Reyes, un conservador partidario de la reconciliación de los partidos que, con la colaboración de Uribe Uribe, el gran caudillo de la revolución liberal, estaba creando un ejército a la vez nacional y profesional, instalado en la presidencia en 1904, se propuso remodelar la vida política sobre el modelo del

México porfiriano. En 1909 su permanencia en el poder, que una reforma constitucional había hecho posible, se vio impedida por protestas que tuvieron por teatro a la capital y por protagonistas a jóvenes universitarios reclutados en las familias dominantes en ambos partidos; como ya había ocurrido medio siglo antes y volvería a ocurrir medio siglo después, la inflexión autoritaria provocada por los desvaríos de los refinados *gentlemen and scholars* que capitaneaban los partidos colombianos se veía frustrada por la reconciliación de éstos en un esfuerzo común por salvar las instituciones.

El desenlace fue la inmediata dimisión y alejamiento de Reyes y un implícito armisticio entre los partidos: por veinte años los conservadores no iban a ver seriamente disputado su control de la presidencia y lo esencial del poder estatal, mientras el liberalismo dejaba de sufrir persecuciones facciosas y ganaba acceso a posiciones políticas de influjo limitado. El predominio de un partido conservador que quiere ser, ante todo, la expresión política del catolicismo se adecua muy bien al temple colectivo reinante en una etapa de perezoso cambio económico y social.

A partir de la primera postguerra el clima económico social comienza a cambiar: en 1921 un tratado con Washington cierra el contencioso abierto por la secesión de Panamá por iniciativa norteamericana, y Colombia se lanza con avidez al mercado financiero de Nueva York, que le había estado vedado hasta entonces. En particular desde 1926, durante la gestión presidencial de Miguel Abadía Méndez, la política fiscal estimula la aceleración de la expansión económica con un ambicioso plan de obras públicas que ofrece un eco atenuado de los implementados en Perú y Chile, con recursos también aquí obtenidos del crédito y las inversiones norteamericanas. El impacto de la expansión económica, que se apoya también en el del café, que gana terreno en los mercados ultramarinos gracias a la política de protección de precios mediante retención de ventas adoptada por Brasil, tiene efectos ambiguos: suben los salarios y crece la participación de sectores popula-

res en el consumo de productos industriales e importados, pero la mayor demanda y la diversión de recursos de la agricultura que produce alimentos básicos pone fin a la estabilidad de precios. Más que ésta, es la de la sociedad colombiana la que buena parte de la opinión conservadora ve amenazada por el activismo del gobierno de su partido; el desencadenarse de la crisis económica acrece la oposición a éste, tanto en filas conservadoras como liberales.

Ante un conservadurismo profundamente dividido, el arzobispo de Bogotá, a quien la costumbre concede voz decisiva en la elección del candidato a la sucesión presidencial, prepara la de 1930 con pulso tan inseguro que viene a hacer inevitable la postulación de dos candidatos rivales, que ha buscado precisamente evitar. El liberalismo considera llegada la hora de salir de su consentida marginación del poder y postula al embajador en Washington, Olaya Herrera, un moderadísimo liberal que gracias al apoyo que otorgan a su candidatura algunas grandes figuras conservadoras puede presentarse al electorado como candidato nacional y suprapartidario.

La entrega pacífica del poder al partido rival fue celebrada como un signo de la ya consumada consolidación de las instituciones colombianas; ella no importó por cierto el acceso al poder de sectores sociales nuevos; si bien el liberalismo parecía cada vez más sensible a la presencia creciente de éstos, seguía tan dominado como su rival por las alianzas y rivalidades de las grandes dinastías bogotanas y provinciales, y la estabilidad de ese dato esencial se vinculaba con la supervivencia de ciertos rasgos arcaicos en la estructura nacional de Colombia, que la reciente era de cambios que no había logrado afectar más que superficialmente. Entre ellos seguían contando la compartimentación regional, el predominio rural, la multiplicidad de centros urbanos que sólo lentamente eran dejados atrás por el crecimiento de la capital y, sobre todo, la vinculación desigual de las distintas regiones con el mercado mundial. Pero –aunque lentamente– esos rasgos estaban perdiendo relieve y los días de vigencia indisputada de la repú-

blica oligárquica estaban sin duda contados también en Colombia.

En **Paraguay** la afirmación de una clase terrateniente poderosa (si tiene raíces coloniales y postcoloniales que los historiadores paraguayos prefieren a menudo ignorar) se da sobre todo luego de la derrota de 1870; a partir de ella Paraguay se orienta hacia el mercado exterior: cueros destinados a Europa; tabaco y yerba para el más cercano mercado rioplatense. Esto sin contar con los productos del Chaco paraguayo (maderas, tanino), sólo nominalmente incorporados a la economía nacional, pues son explotados por compañías extranjeras (inglesas y argentinas) con vistas a mercados extranjeros, usando puertos privados y una flota fluvial también extranjera. La política paraguaya comenzó por estar dirigida por jefes militares veteranos de la guerra contra la Triple Alianza, ahora al servicio de la política brasileña; entre ellos se destacó el general Caballero, fundador del partido colorado, que iba a gobernar Paraguay durante un tercio de siglo; el triunfo de un partido de oposición –el liberal– es un hecho del siglo XX.

Ni el coloradismo ni el liberalismo (llegado al poder por vía revolucionaria) estaban dispuestos a convivir ordenadamente con fuerzas opositoras; tampoco hubieran podido hacerlo sin grave riesgo para su poderío: ni uno ni otro sector contaban con participación popular, sino en condición de séquito de dirigentes de elite; la vida partidaria, concentrada en éstos, se acompañaba de las disensiones y desgarramientos propios de organizaciones que conservaban en parte el carácter de *clique*. El liberalismo se presentó con un programa modernizador y cautamente antimilitarista; de hecho, su triunfo fue el de la influencia argentina sobre la brasileña; bajo su égida los progresos políticos fueron en extremo modestos, y el estado de sitio fue tan empedernidamente aplicado como bajo los gobiernos colorados.

En **Bolivia** el surgimiento de un sistema de partidos es tardío, ya que avanza en la estela del renacimiento minero; a partir de

la guerra del Pacífico el de la plata tiene reflejo político directo en la instalación en el poder de una oligarquía que se proclama conservadora, encabezada por los grandes empresarios bolivianos de explotaciones hechas posibles por la inversión y el crédito chilenos.

La transición al liberalismo se da en el marco de la decadencia de la plata y el ascenso del estaño, cuyos grandes empresarios (el mayor de ellos, Simón Patiño, es un mestizo oriundo de la cuenca minera misma) no ocuparán en la cumbre del estado las posiciones de sus predecesores, los patriarcas de la plata. Ellas las llenarán primero los jefes militares de la rebelión que en 1900 expulsa a los conservadores, movilizando el descontento indio ante las amenazas crecientes a las comunidades y el de la ciudad de La Paz, este principal centro urbano del país que tolera cada vez peor su subordinación política a Sucre. Luego de su victoria, las grandes espadas del liberalismo utilizarán el poder para satisfacer los reclamos paceños, pero también para aplastar la protesta india contra la liquidación de las tierras comunitarias, de la que son a la vez entusiastas propulsores y principales beneficiarios y serán sólo paulatinamente reemplazados al frente del Estado por una oligarquía urbana negociante y terrateniente que pronto se divide contra sí misma, disputándose la adhesión del país legal, ese quinto de la población que habla español y está incorporado al mercado internacional. Para el sector de la nación que vive en el ritmo del mundo, el estaño adquiere importancia creciente; el estaño son las grandes compañías que dominan la minería y la exportación; éstas –de origen boliviano– se han integrado en el aparato financiero metropolitano y controlan también las refinerías instaladas en ultramar. El estaño son también los distritos mineros, donde trabajadores indígenas se han concentrado por decenas de miles y se hacen recomendables por el momento por su sumisa disciplina. En Bolivia, como en pocas otras comarcas latinoamericanas, se hace sentir el predominio económico, social, político de los que dominan el único rubro exportable realmente significativo: la

rehabilitación de las elites urbanas se paga al precio de una extrema docilidad frente a esos intereses, y el aparato institucional más refinado que la Bolivia del siglo XX opone a la tosquedad de la vida política en la centuria anterior es un velo excesivamente transparente para esa situación básica.

La solución política que se da en Bolivia es posible sólo gracias a la división radical del país, la mayor parte del cual vive –como se dice– al margen de la historia, gracias también a que a lo largo del siglo XIX las elites urbanas han aprendido, a través de muy duras experiencias, a ser modestas en sus pretensiones. En todo caso, el orden de la Bolivia del estaño, por injusto que aparezca, puede mantenerse, por el momento, sin enfrentar oposiciones temibles y hace, por lo tanto, innecesaria una gravitación militar demasiado intensa.

Como Venezuela ofrecía un ejemplo de manual de la dictadura militar, Bolivia lo ofrece de la república oligárquica en la época de madurez del sistema neocolonial. Estos ejemplos son, como suele ocurrir, menos frecuentes que los casos más complejos y de menos fácil reducción a esquema. Uno y otro (y también los más numerosos casos intermedios) llevan en común, pese a todas las oposiciones y diferencias, la huella de un cambio que afecta a la entera Latinoamérica en esta etapa: dictaduras y oligarquías son cada vez más las emisarias políticas de las fuerzas que gobiernan a Latinoamérica, y que cada vez la gobiernan más desde fuera. Se ha señalado ya cómo la continuación del crecimiento latinoamericano tuvo como precio una redistribución del poder entre los sectores dominantes locales y extranjeros, en beneficio de estos últimos. Pero esa redistribución no era sino un aspecto de una transformación más amplia: a medida que Latinoamérica se incorporaba como área dependiente al sistema económico que se estaba haciendo mundial, se hacía más vulnerable a las crisis generales de ese sistema. En 1929 comenzó la más devastadora de todas esas crisis; de ella y sus consecuencias el lazo neocolonial no iba a recuperarse nunca; agotado en sus posibilidades, no por eso ha sido reemplazado por un nuevo modo de inserción de Latinoamérica en el mundo.

Tercera parte
Agotamiento del orden neocolonial

Capítulo 6
La búsqueda de un nuevo equilibrio (1930-1960)

1. Avances en un mundo en tormenta (1930-1945)

La crisis mundial abierta en 1929 alcanzó de inmediato un impacto devastador sobre América latina, cuyo signo más clamoroso fue el derrumbe, entre 1930 y 1933, de la mayor parte de las situaciones políticas que habían alcanzado a consolidarse durante la pasada bonanza. Lo que no fue de inmediato evidente es que esa crisis no se distinguía de anteriores accidentes en el camino tan sólo por su intensidad sin precedentes; que por el contrario inauguraba una nueva época en que las soluciones que con tanta dificultad habían permitido a Latinoamérica incorporarse a una economía que se estaba haciendo mundial habían perdido eficacia. Sólo paulatinamente iban a descubrir también los latinoamericanos que el retorno a la normalidad no estaba a la vuelta de la esquina, y que por el contrario les sería preciso avanzar, durante una etapa de duración imprevisible, por mares nunca antes navegados.

Si para quienes vivieron la catástrofe, ésta se había originado en un accidente en el centro mismo de la economía mundial, que le impedía seguir desempeñando el papel de polo industrial y financiero en la relación que había permitido la

expansión de la economía primario-exportadora, retrospectivamente aparece claro también que ese accidente venía a anticiparse a un agotamiento paulatino de las posibilidades de esa línea de avance, cuyos signos premonitorios podían descubrirse ya en el decenio anterior a la crisis.

Apenas se revisa desde esa perspectiva póstuma el curso de la economía latinoamericana a partir de la primera postguerra se descubre cómo más de uno de los rubros que dieron vigor a la economía exportadora parece haberlo perdido por entero (es el caso del azúcar desde Cuba a Perú), o haber por lo menos abandonado su claro rumbo ascendente (es el de la ganadería y agricultura rioplatenses, que sin duda alcanzan sus más altos niveles históricos, pero en medio de oscilaciones más erráticas que en el pasado), o aún deber su supervivencia a los subsidios que le prodiga el Estado (es, se recordará, el del café brasileño o el salitre chileno).

Mientras los cimientos del orden económico latinoamericano se tornaban más endebles, él adquiría una complejidad nueva; en los países mayores la industrialización realiza avances significativos, gracias a la ampliación de la demanda local sostenida por el previo avance de la economía exportadora, y hacia ella se vuelca una parte de la inversión extranjera que antes se atenía al crédito al Estado y al sector primario y de servicios. El contraste entre la debilidad del viejo núcleo de la economía y la tendencia de ésta a expandirse más allá de él se traduce en un desequilibrio que sólo puede ser salvado gracias a créditos e inversiones provenientes de la nueva capital financiera, Nueva York; son ellos los que mantienen una pátina (y no sólo una pátina) de prosperidad para economías íntimamente corroídas como la brasileña, la cubana, la peruana o la chilena y hacen posible en el marco de otras menos afectadas, como la argentina, la uruguaya o la colombiana, introducir pautas de gasto y consumo de todos modos insostenibles con sus recursos ordinarios; y gracias a todo ello consolida por igual soluciones políticas de signo muy variado, que presiden a la distribución de los frutos de esa efímera prosperi-

dad, y serán casi siempre incapaces de sobrevivir apenas ésta se disipe.

Si todo esto es cierto, la reacción de los contemporáneos que asignaba el papel decisivo a la crisis mundial no parece por ello errada: esa crisis redefinió radicalmente los términos en que esos problemas que venían ya madurando debieron ser encarados. Sus consecuencias fueron –se recordará– el derrumbe del sistema financiero mundial, que vino a consumarse sólo en 1931, y una contracción brutal de la producción y el comercio, que se reflejó en sólo los tres años que siguieron a 1929 en una disminución del valor de los tráficos internacionales a menos de la mitad.

El derrumbe del sistema financiero significa desde luego la desaparición de la fuente de recursos que, a falta de otras, ha mantenido boyante a más de una economía latinoamericana durante la década anterior. Pero precisamente la amplitud de la catástrofe crea también consecuencias inéditas, que la hacen en otros aspectos menos grave que otras menos intensas. Ahora no es sólo Latinoamérica la que se descubre deudora morosa y arruinada; en la Europa devastada por la primera guerra mundial, y efímeramente reconstruida por el flujo poderoso de crédito norteamericano, la insolvencia es también un peligro muy real, y a veces más que un peligro, y la consecuencia es que el problema es contemplado desde los centros del sacudido orden económico mundial con espíritu más comprensivo que cuando sólo afectaba a países que no era seguro que fuese preciso tomar en serio.

Y aunque no hubiese sido así, la crisis del comercio internacional alejaba el peligro de que la desaprobación despertada por cualquier caída en la insolvencia financiera se expresase en sanciones concretas contra la nación culpable (la más obvia de ellas, la suspensión de nuevos préstamos, había sido privada de todo contenido por una situación en que éstos eran de todos modos inasequibles). En efecto, la caída de la economía productiva en los países centrales impulsaba a una búsqueda febril de mercados externos capaces de salvarla del colapso,

que obligaba a prescindir de las exclusivas fundadas en los deslices financieros de las naciones que podían proporcionarlo.

Pero si ello permitía eliminar de entre los problemas urgentes a los creados por la deuda pública acumulada en la década anterior a la crisis, esos problemas no dejaban por eso de ser angustiosos. Por la mera desaparición del crédito extranjero, el desequilibrio financiero se ha agravado dramáticamente, y paralelamente ha surgido uno comercial potencialmente aún más peligroso. Gobiernos que han perdido una parte importante de sus recursos previos al derrumbe económico se transforman así en espectadores de un cataclismo cuya magnitud misma exige de ellos una participación activa en la búsqueda de modos de paliarlo. Las líneas de acción que esos gobiernos irán desarrollando van a reflejar muy bien las múltiples dimensiones de la crisis que se ha desencadenado.

Ésta no sólo ha provocado una disminución brutal del volumen del comercio mundial; como consecuencia de ella puede dudarse además de que la noción misma de mercado mundial conserve sentido; con economías nacionales en constante riesgo de ser ahogadas por el colapso de sus mercados externos, los Estados Unidos terminan por ser la única gran potencia económica que (salvo para algunos contados rubros) maneja su comercio internacional en ese marco que parece súbitamente obsoleto (aunque adoptando normas tan extremadamente proteccionistas que no dejan de acelerar la contracción comercial); mientras las europeas continentales se orientan una tras otra hacia acuerdos bilaterales que les permiten asegurar mejor la reciprocidad en el intercambio comercial, la inconvertibilidad de la esterlina, tiene desde 1931 consecuencias análogas en cuanto al área de influencia británica.

Ese nuevo orden mercantil hace del Estado el agente comercial de cada economía nacional, pero bien pronto la coyuntura le impone funciones aún más vastas. Por feliz que sea la gestión del comercio exterior, ésta sólo podrá hacer asequibles importaciones que serán una fracción de las que antes de la crisis habían sido normales; la demanda se adapta mal a esa

nueva situación, y tocará al Estado racionar esos recursos demasiado escasos, no sólo para evitar la agudización de conflictos entre empresas y sectores económicos, sino para asegurarse de que esos recursos se volcaran de la manera económicamente más provechosa, objetivo particularmente urgente en una economía que por otra parte permanece al borde del colapso.

Así el Estado para insensiblemente de administrar arbitrios financieros de urgencia (para lo cual debe ya adoptar políticas monetarias inéditas, que le dan también en este campo atribuciones inimaginables hasta la víspera) a encarar, utilizando esas atribuciones nuevas, políticas destinadas a atacar las dimensiones económicas de la crisis, por ejemplo, canalizando las importaciones hacia sectores de la economía que al utilizarlas ampliarán el empleo (para lo cual impondrá desde tipos de cambio múltiples para los distintos rubros de exportación e importación hasta un racionamiento de divisas mediante permiso previo para cada transacción individual). Con ello no hará sino reaccionar ante una peculiaridad de la reacción de los precios ante la crisis, que es decisiva para América latina: todos ellos sin duda bajan, pero esa baja es menor en los de productos industriales que en los de la minería, y sobre todo que en los de la agricultura; esa discrepancia es la contracara de la que se da en cuanto a los volúmenes de producción; mientras la industrial se contrae salvajemente, la minera le sigue a distancia y en la agricultura no faltan casos de productores desesperados que intentan contrarrestar las consecuencias que para ellos tiene el derrumbe de precios buscando aumentar la producción.

El resultado es un nuevo deterioro en los términos de intercambio para países que, como los latinoamericanos, se han especializado en la provisión de productos primarios; las ventajas comparativas que en el pasado han hecho atractiva esa especialización están siendo borradas por esa nueva relación de precios, y ello mismo invita a reorientar a una actividad industrial antes menos prometedora los abundantes recursos

humanos y los mucho más escasos de capital que encuentran ahora menos hospitalario al sector primario.

Pero esta alternativa tardará en diseñarse con claridad; el primer resultado de la crisis en un colapso del mercado interno para los bienes de consumo que ya no será posible seguir importando, y mientras ese mercado no presente signos de reactivación la industrialización por sustitución de importaciones, que aparecerá retrospectivamente como la respuesta a la crisis, no tendrá ocasión de implantarse. Mientras ello no ocurra, queda una tarea más urgente para el Estado: evitar que las reacciones instintivas de los productores primarios ante la catástrofe venga a agravarla, al agravar la plétora de bienes exportables. Para ello le será preciso intervenir por vía autoritaria, fijando precios oficiales y cupos máximos de producción, y organizando la destrucción de lo cosechado en exceso, no siempre previa indemnización a los productores.

En los estados de organización más madura esas funciones nuevas se traducen en un más complejo aparato económico y financiero, que abarca desde juntas reguladoras para cada una de las grandes ramas de producción primaria hasta bancos centrales o su equivalente, que concentran el contralor de los contactos comerciales y monetarios con el mundo exterior; aun en los de estructura más rudimentaria, la ausencia de esos órganos específicos no impide que el Estado asuma las mismas funciones cada vez que ello se hace ineludible. Esta desaforada expansión de las funciones del Estado, en abandono de los principios que habían guiado hasta la víspera su acción económica, se dio en un clima en el cual, si la controversia en torno a las medidas tomadas desde el poder en uso de esas nuevas atribuciones fue a menudo agria, la expansión del poder estatal a esas áreas nuevas fue aceptada con una ecuanimidad que reflejaba muy bien la conciencia ya universal de la gravedad de la emergencia que se estaba viviendo.

Eran la hondura de la catástrofe y la inseguridad profunda acerca del rumbo de la economía mundial las que hacían que los sectores de intereses no sólo estuviesen dispuestos a aco-

ger sin protesta la intervención del Estado en áreas de las que en el pasado habían preferido verlo ausente, sino también a admitir que ese Estado carecía ya de los recursos que en el pasado le habían permitido usar la subvención como recurso de gobierno preferible al acto de imperio. Es ilustrativo comparar la reacción de los plantadores brasileños frente a la política de fomento en la década del veinte y en la siguiente; mientras en la primera utilizaron al máximo los beneficios de un sistema de subsidios cuya ruina aceleraron con su propia avidez, y su indignación no conoció límites cuando el Estado se declaró impotente para seguir costeándolo, ahora sabían inclinarse ante la necesidad de limitar la producción y agradecer y admirar la eficacia con que el gobierno brasileño jugaba en el nuevo tablero del comercio internacional, para encontrar todavía desemboques para sus cosechas a precios que antes de 1929 hubiesen considerado insultantes.

Si el impacto negativo de la crisis de 1929 afectó a toda Latinoamérica (la única excepción significativa la ofreció Venezuela, donde ella introdujo sólo una mínima inflexión en el ritmo ascendente de la producción petrolera que ahora dominaba su sector exportador), la rehabilitación que se hizo evidente a partir de 1935 marginó en cambio a los países más pequeños.

La razón para ello se encuentra en que la industrialización, elemento ahora esencial de la reactivación económica, requiere para ser viable que el mercado nacional haya alcanzado una cierta dimensión, por debajo de la cual sería simplemente incapaz de sostenerla; así, para más de un país centroamericano y aun otros, como Ecuador, cuya población más numerosa mantenía niveles de consumo muy bajos o estaba mal integrada al mercado, el impacto de la caída de los volúmenes y precios de sus exportaciones no iba a encontrar atenuantes. Pero los países grandes (México, Brasil, Argentina) y medios (Chile Perú, Colombia) y aun alguno pequeño pero de nivel de vida excepcionalmente alto, como Uruguay, iban a vivir en la segunda parte de la década de 1930 una rehabilitación que in-

cluiría avances significativos en la diversificación de su estructura económica (las excepciones son aquí el ya evocado oasis de prosperidad exportadora que era Venezuela, y Cuba, que sólo logró salvar el acceso al mercado norteamericano para su azúcar eliminando todas las barreras a las importaciones de su gran vecino).

Esas rehabilitaciones alcanzan éxito variable, pero en casi todos esos países el impacto de la depresión es más breve y ligero que en los del centro industrial del mundo, y en particular Brasil y Argentina se ofrecen hacia 1937 como brillantes excepciones en un cuadro mundial todavía sombrío (será esta quizá la última vez en que la gestión económica de un gobierno argentino reciba el espaldarazo de un economista de la talla de Keynes, para quien ese éxito se debe a la aplicación de soluciones cercanas a las que él preconiza para sacar a la economía mundial de su marasmo).

La industrialización comienza, como tantas otras, en el sector de bienes de consumo: alimentos y bebidas, textiles, algunos rubros de modestos requerimientos tecnológicos en la rama química y farmacéutica, y comienza a extenderse hacia la industria eléctrica liviana; en los primeros campos ella avanza sobre una base ya consolidada antes de la crisis, y por lo menos al comienzo utilizando la capacidad ociosa de fábricas establecidas durante la pasada prosperidad gracias a la inversión o al crédito extranjeros. En casi ninguna parte el avance industrial anterior a la segunda guerra alcanza a sustituir del todo las importaciones aun en esos rubros; la necesidad de los países periféricos de importar sobre todo bienes de capital y materias primas está limitada por la lentitud del crecimiento del parque industrial y contrarrestada por la tenacidad con que los países industriales buscan distribuir las ventajas derivadas del acceso a mercados externos entre todos los rubros de su economía, con preferencia por los más deprimidos; esta consideración se torna decisiva porque la política comercial de los países periféricos reconoce una más alta prioridad a la rehabilitación de sus exportaciones que a la expansión de su

sector industrial, y el éxito paulatinamente alcanzado en el primer aspecto conspira contra el ritmo de avance en la sustitución de importaciones industriales.

Esa industrialización todavía parcial tiende a acentuar antes de atenuar las desigualdades en el crecimiento económico de las distintas regiones surgidas durante la expansión de exportaciones (que en el futuro seguirán acentuándose con cada nuevo avance del proceso industrializador). Se entiende por qué: la industrialización avanza allí donde se encuentran no sólo sus potenciales consumidores, sino su mano de obra disponible y sus futuros dirigentes, y todo ello lo ha de encontrar en las concentraciones urbanas más ligadas a la expansión del comercio interno e internacional, y en algunas que tienen además funciones administrativas; son entonces las áreas que en el pasado se han constituido en emisarias de las metrópolis ultramarinas las que (sin abandonar esa función) comienzan a esbozar una nueva como áreas metropolitanas de esa economía más cerrada en sí misma que la crisis está creando.

La segunda guerra mundial va a introducir de nuevo un cambio radical en el contexto externo en que deben avanzar las economías latinoamericanas, que en poco más de dos años (de septiembre de 1939 a fines de 1941) van quedando aisladas de la mayor parte de los mercados de Europa continental y Asia oriental, y deben afrontar la contracción progresiva del trasporte marítimo accesible al comercio ultramarino de América latina. Esta nueva situación va a ampliar aun más el papel del Estado en la orientación y control de la economía; a ello obliga entre otras circunstancias el nuevo régimen de comercio internacional, que se perfecciona luego de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, y que agrega al racionamiento administrativo de los fletes aun disponibles para el comercio latinoamericano, por organismos dependientes en algunos casos del Gobierno norteamericano y en otros del británico, pero actuantes en nombre de ambos, la introducción de un monopolio de compras de todos los productos de interés para las Naciones Unidas en guerra (único interlocu-

tor comercial ahora accesible para América latina), cuya administración era confiada a otros organismos similares.

Es entonces comprensible que la segunda guerra mundial haya introducido en el comercio exterior de Latinoamérica perturbaciones aún más pronunciadas que la primera. Ella reaviva la demanda externa, que no se ha recuperado totalmente de las consecuencias de la crisis, pero ese efecto se hace sentir de modo muy desigual, y afecta más bien los volúmenes exportados que los precios (ya que, para eludir las consecuencias de la acrecida demanda y las del monopolio de ventas que la pérdida de otras áreas productoras había conferido para ciertos rubros a algunas naciones de América latina, las Naciones Unidas habían organizado un aun más rígido monopolio de compras). La situación es muy distinta en cuanto a la importación: ella satisface cada vez peor las necesidades de las economías latinoamericanas, afectada como está por la escasez de transporte y por la reorientación de la economía de los países industriales hacia la producción de guerra.

Ello crea en lo inmediato dificultades cuya seriedad varía de un país al otro: aquellos que no alcanzan –o apenas alcanzan– a producir los alimentos necesarios a su población, desde México a Chile, las sufren con particular intensidad. Para todos la combinación de un retorno a la prosperidad de por lo menos algunas ramas de la exportación (que les permite acumular reservas monetarias importantes, pero inmovilizadas hasta el fin de la guerra en Gran Bretaña y Estados Unidos) y aumenta el empleo y el ingreso, y el déficit de importaciones ofrece un estímulo más poderoso a la industrialización que el aportado diez años antes por la crisis; su avance ahora vertiginoso va acompañado del agravamiento en los rasgos negativos que el proceso había mostrado desde el comienzo: a las insuficiencias de una infraestructura que no se amplía se suman las fallas técnicas de las industrias mismas, creadas o ampliadas con medios de fortuna cuando es imposible importar maquinarias o herramientas de los países metropolitanos, y la ausencia de otras importaciones de éstos permite por otra

parte ignorar la incidencia de ese primitivismo tecnológico sobre el costo de producción.

Mientras dura la guerra, en efecto, éste último no impide que las industrias de los países mayores de América latina no sólo conquisten el mercado interno, sino avancen sobre el de exportación; en particular la brasileña no sólo encontró nuevos mercados en Hispanoamérica sino aun en las colonias africanas que sus metrópolis europeas eran ya incapaces de surtir. Para hacer esto posible esos países mayores (y aun algunos que no lo eran) buscaban suplir la escasez de fletes creando flotas nacionales (casi siempre por requisa de los barcos enemigos a los que la guerra había sorprendido en sus puertos); de nuevo, el transporte así asegurado no hubiera podido competir en volumen, precio y calidad de servicio con los ofrecidos en tiempos normales por las grandes potencias navieras, pero precisamente los tiempos eran todo menos normales.

El fin de la guerra encuentra así a una América latina cuya economía, salvo en algunos de los estados menores, no sólo ha borrado las consecuencias de la crisis, sino ha crecido en volumen y complejidad. A la vez se trata de una economía más radicalmente desequilibrada que en cualquier etapa del pasado, y ese desequilibrio no requiere para ser descubierto ningún análisis sutil de realidades económicas subyacentes y tendencias de avance sólo descifrables por analistas expertos; puede vérselo y tocárselo a través de la experiencia de vivir en ciudades en que el crecimiento demográfico e industrial ha creado un déficit energético que pronto las obligará, cuando las de Europa vuelvan a recobrar su brillo, a opacarlo a través de racionamientos cada vez más severos, y donde la concentración de los recursos en la lucrativa expansión industrial, en medio de un avance ahora más rápido de la urbanización, tiene su signo más clamoroso en la proliferación de barrios de barracas sin agua corriente ni electricidad, pero es sufrida también en sus consecuencias por una clase media acrecida en número y recursos por la industrialización, que halla difícil

mantener los niveles de vida a los que su ubicación en la sociedad le permite aspirar, como consecuencia de la carestía creciente de la vivienda y la escasez de servicios que considera esenciales.

En 1945, entonces, ha madurado universalmente una conciencia muy viva de que las economías latinoamericanas afrontan una encrucijada decisiva, que sus problemas viejos y nuevos se han agravado hasta un punto que hace impostergable una reestructuración profunda; a la vez no se deja de advertir que en medio de todos esos problemas las naciones latinoamericanas se han constituido por primera vez en su historia en acreedoras netas no sólo frente a una Europa en ruinas sino aun frente a unos Estados Unidos cuya gigantesca economía ha respondido al estímulo de la guerra con un gigantesco salto hacia adelante; esa situación inédita y la guía (que no se advertía hasta qué punto era engañosa) que la experiencia pasada ofrecía sobre el curso esperable de la economía mundial en la segunda postguerra hicieron ver en esa coyuntura excepcional la ocasión de escapar a la situación marginal en la economía mundial que había sido hasta entonces la suya.

Pero si ese desenlace aparecía prometedor, y ya antes de él el impacto de la crisis en América latina había sido comparativamente leve, esta presentación necesariamente lineal del avance económico que se da en la estela de la crisis y la guerra corre riesgo de hacer olvidar no sólo que todo él fue vivido en el subcontinente bajo el signo de la incertidumbre, sino que esa incertidumbre misma vino pronto a sumarse a la que iba a inspirar la gravitación creciente de las consecuencias de la crisis más allá de la esfera económica, creando así un clima colectivo muy distinto del que podría esperarse en una etapa de superación comparativamente poco trabajosa de una catástrofe que por una vez (y salvo localizadas excepciones) había golpeado a Latinoamérica con menos dureza que a otras regiones del planeta.

Entre las razones de incertidumbre que brotan fuera de la esfera económica ninguna es quizá más poderosa que la inmi-

nencia cada vez menos dudosa de una crisis quizá mortal del orden mundial que en el momento en que los estados latinoamericanos habían surgido a la independencia había tenido por núcleo a lo que se gustaba de llamar el concierto de Europa. Ese orden, que había sufrido ya, con la primera guerra mundial, un golpe del que no se había nunca recuperado del todo, parecía derivar a una conflagración aún más devastadora, originada en ese mismo núcleo europeo, y ello como consecuencia de la agudización de los conflictos entre las mayores potencias, en la que era posible reconocer una consecuencia por lo menos indirecta de la crisis.

Ese derrumbe de otro de los segmentos centrales del orden mundial en que América latina se había integrado en el siglo XIX, hizo que las consecuencias de la crisis sobre el nexo entre Latinoamérica y la potencia que sólo recientemente había completado su ascenso hacia una clara hegemonía continental fuese más ambiguo que si esa crisis se hubiese limitado a la sola esfera económica.

En lo referente a ésta la década anterior a 1929 había asistido a un enorme avance del influjo de los Estados Unidos en América latina, acentuado en la costa del Pacífico por la apertura del canal de Panamá, facilitado en todas partes por el traslado del centro financiero de la economía mundial de Londres a Nueva York, en una etapa de plétora de capitales, y favorecido también por la entrada en su ocaso de la era del ferrocarril y el carbón. Sólo esta última innovación no iba a ser afectada por la crisis; por lo demás, mientras el colapso financiero eliminaba por el momento un instrumento capital del avance de los Estados Unidos, la política comercial de ese país, hostil en general a los acuerdos bilaterales (la gran excepción, pero también la única de alguna importancia, era en este aspecto Cuba), le impedía utilizar su condición de mayor mercado externo para la mayor parte del resto del continente con la eficacia con que las mayores naciones europeas lograban extraer ventajas económicas y aun políticas de vínculos mercantiles a menudo menos significativos; por su parte el

proteccionismo norteamericano que –acentuado en víspera de la crisis– se constituyó en el instrumento por excelencia para adaptar la política comercial de los Estados Unidos a la situación creada por ésta, no dejó de pesar negativamente en las relaciones con aquellos países más duramente perjudicados por él.

Fue el agravamiento progresivo de la crisis política internacional, que pronto la lanzó sobre un plano inclinado que conducía ineluctablemente a la guerra, el que vino a contrarrestar en buena medida las consecuencias negativas que la crisis económico-financiera amenazaba alcanzar sobre el ritmo de avance de la hegemonía de los Estados Unidos en Latinoamérica; la alarma suscitada por el ingreso de la política internacional en una zona de tormenta disminuyó las reservas latinoamericanas ante la dimensión política de ese vínculo necesariamente desigual con la gran potencia del norte; esa reorientación menos desfavorable fue facilitada además al eliminar Washington las aristas más ofensivas a la opinión pública latinoamericana de su política continental. Esa sensibilidad nueva a los recelos dominantes entre sus vecinos del sur, revelada a través de algunos signos parciales ya antes de la crisis por la administración republicana de Hoover, iba a inspirar, bajo la de su sucesor demócrata Roosevelt, una política de buena vecindad hemisférica que –en el clima osadamente innovador del *New Deal*– parecía más nueva de lo que en efecto era.

Esta política renunciaba a la intervención directa y unilateral, y buscaba en cambio vigorizar los organismos panamericanos, que con ampliadas atribuciones debían transformarse en instrumentos principales de la política hemisférica de los Estados Unidos. El abandono de la intervención armada no suponía por cierto la renuncia al ascendiente ya ganado mediante ella en América Central y las Antillas. En los países que habían sufrido la ocupación militar norteamericana, la potencia interventora, utilizando experiencias acumuladas en Filipinas y Cuba, había creado fuerzas armadas locales que le conservaban fidelidad; el influjo de éstas iba a asegurar –más

eficazmente en Nicaragua y en la República Dominicana que en Haití– la consolidación de regímenes dictatoriales a la vez estables y devotos a los intereses norteamericanos. Esto no significaba por cierto que la presión política directa deje de emplearse: se ejerce por el contrario muy abiertamente en Cuba y a partir de 1941 sobre aquellos países renuentes a alinearse en apoyo de la participación norteamericana en el nuevo conflicto mundial. Pero el hecho de que en el duro conflicto creado a fines de la década de 1930 por la nacionalización del petróleo mexicano la intervención militar ya no fuese seriamente considerada como un posible instrumento de la política norteamericana, muestra que por lo menos en este aspecto el cambio de orientación iba más allá de la adopción de nuevas modalidades de lenguaje.

La introducción de la política de buena vecindad elimina el obstáculo más vistoso a la aceptación del panamericanismo en Latinoamérica, pero es el derrumbe de esa última versión del orden internacional centrado en el concierto de Europa, que había encontrado tardío marco institucional en la Liga de las Naciones (en la que no pocos latinoamericanos habían reconocido una alternativa válida a un panamericanismo condenado a reflejar la hegemonía de los Estados Unidos) el que influye más activamente para restar eficacia a reticencias que están por cierto lejos de desaparecer del todo, y logra que –como ya había ocurrido fugazmente durante la primera guerra mundial– la posibilidad de organizar un orden panamericano abrigado contra las tormentas del viejo mundo por el prestigio y la fuerza de los Estados Unidos sea vista por la opinión latinoamericana con ánimo más abierto.

En esa actitud menos negativa participaban también a menudo aun quienes, frente a los mortales conflictos político-ideológicos subyacentes a la guerra que se avecinaba, no ocultaban sus simpatías por las corrientes fascistas que inspiraban la ofensiva desestabilizadora del orden internacional. En efecto, aun aquellos gobernantes oligárquicos o dictatoriales que creían encontrar en el fascismo la justificación teórica que has-

ta entonces les había faltado para sus prácticas de gobierno, o aquellos movimientos renovadores que con menos frecuencia buscaban en él lecciones útiles para la destrucción de un equilibrio político-social demasiado estable, nada deseaban menos que incorporar a sus países a la danza de la muerte que el fascismo se preparada a desencadenar nuevamente sobre el planeta, y no eran sus simpatías por él las que habrían de impedirles ofrecer su apoyo, en las conferencias panamericanas, al credo de paz internacional basada en el respeto mutuo que Roosevelt oponía al espíritu agresivo de las potencias fascistas.

La guerra de España, que tradujo los dilemas que pronto iban a destrozar a Europa a una clave que los hacía inmediatamente inteligibles a la opinión latinoamericana, mientras contribuyó a agudizar en ella las tensiones ideológico-políticas, ofreció una lección escalofriante sobre las consecuencias de entregarse por entero a sus sugestiones; en 1939, luego de la victoria de Franco, un oficial del ejército argentino que era por entonces fervoroso admirador del fascismo, el mayor Perón, concluía ante el espectáculo del Madrid devastado que ni aun el triunfo de la más meritoria de las causas políticas podía compensar tanta destrucción...

Las dificultades para la consolidación del panamericanismo no vinieron entonces del eco de las nuevas experiencias políticas en curso en el viejo mundo (sólo luego de desencadenada la segunda guerra ese eco se haría sentir, pero de modo escasamente efectivo). Tampoco provinieron de que, aun corregidas las intervenciones más escandalosas, la acción estadounidense seguía siendo la de una potencia hegemónica de mano nada blanda, o de que su política económica se desentendía de la búsqueda de cualquier reciprocidad de ventajas con los países con los que establecía contacto: todo esto contaba menos desde que la consolidación del panamericanismo parecía ofrecer ventajas directas a los países latinoamericanos. Por el contrario, los obstáculos al panamericanismo siguieron proviniendo sobre todo de los países más ligados a metrópolis europeas; en este aspecto Argentina mantuvo el

papel que se había asignado desde 1889; y la debilidad creciente de su resistencia reflejaba demasiado bien la decadencia inexorable del influjo británico, incapaz ya de rivalizar abiertamente con el estadounidense.

La conferencia panamericana de Montevideo -1933- dejó como fruto un tratado de no agresión y conciliación, de iniciativa argentina, que recibió el apoyo inesperado de los Estados Unidos; a cambio de él, el secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, logró evitar una condena masiva del proteccionismo aduanero de su país; la conferencia se pronunció, en cambio, en favor de acuerdos bilaterales de liberalización aduanera recíproca.

En 1936 se reunía en Buenos Aires una conferencia panamericana por el mantenimiento de la paz, que reafirmó el principio de no intervención recogido en el pacto de Montevideo de 1933; el propósito que había llevado a Estados Unidos a propiciar la conferencia, y el presidente Roosevelt a visitar la capital argentina (que era ya el de transformar la organización panamericana en un organismo capaz de hacer sentir su gravitación en la arena política internacional) no pudo alcanzarse entonces, y sólo a medias iba a ser logrado en la conferencia panamericana de Lima, de 1938; allí Argentina se opuso tenazmente, y finalmente con éxito, a la creación de un Comité consultivo interamericano, de carácter permanente, propuesta por Estados Unidos; la solución transaccional finalmente recogida en la Declaración de Lima incluyó una recomendación que si propiciaba las consultas entre los estados americanos, de ningún modo las hacía obligatorias.

Se llegaba así a la segunda guerra mundial; desencadenada ésta, la conferencia panamericana de Panamá creaba una vasta zona oceánica en torno a Estados Unidos y Latinoamérica, dentro de la cual reclamaba que los países beligerantes se abstuvieran de actos de guerra. Aunque el valor jurídico de esta declaración era más que dudoso, y la voluntad de imponerla por la fuerza a los países en guerra faltaba por completo (tres meses después de la declaración la batalla naval angloalema-

na de Punta del Este iba a desarrollarse a la vista de las costas del Uruguay), la conferencia de Panamá no dejó de tener consecuencias significativas; el movimiento panamericano tomaba por primera vez posición política unánime frente a una emergencia internacional, y parecía esbozar su transformación en una liga de neutrales, como las que Europa había conocido en el pasado.

Pero esa transformación estaba destinada a no madurar; la neutralidad no era la política definitiva de los Estados Unidos frente al conflicto mundial. Sus dirigentes enfrentaban ahora una tarea más delicada: impulsar al movimiento panamericano al mismo avance gradual hacia la intervención que efectuaría su país en 1940 y 1941. La conferencia de La Habana, reunida a fines de 1940, estaba dominada por las consecuencias de los triunfos alemanes en Europa; ante la posibilidad de una victoria del Eje en el conflicto, ante la resistencia vigorosa de Gran Bretaña y los signos crecientes de apoyo que ésta encontraba en los Estados Unidos, la mayor parte de los países latinoamericanos creían necesario mantener una extremada prudencia; la conferencia se limitó a proclamar la decisión de intervenir conjuntamente para evitar transferencias de territorios coloniales enclavados en América a otras potencias europeas; por lo demás, autorizaba a los estados miembros a actuar en casos de urgencia sin someterse al lento proceso de consulta previsto, naturalmente, esta autorización era una concesión a los Estados Unidos, otorgada tanto más fácilmente por cuanto los países latinoamericanos no deseaban por el momento tomar posición frente a la política de cada vez más abierta intervención en el conflicto adoptada por la administración Roosevelt.

En efecto, los Estados Unidos manejaron su política internacional sin recurrir nuevamente al mecanismo panamericano; arrendaron así unilateralmente bases navales en posesiones británicas, y ocuparon juntamente con Brasil la Guayana holandesa... Sólo después de producido el ingreso de los Estados Unidos en la guerra, el mecanismo panamericano volvería a ser puesto en movimiento: en enero de 1942 se reunía en

Río de Janeiro una nueva conferencia panamericana, que (por la resistencia de Argentina y Chile a resoluciones más estrictas) se limitó a recomendar la ruptura de relaciones con las potencias del Eje; Chile iba a tardar un año, y Argentina dos, antes de recoger esa recomendación.

En cambio, la nueva política norteamericana encontraba apoyos entusiastas en otros países latinoamericanos; si las declaraciones de guerra de los países centroamericanos y del Caribe -producidas en noviembre de 1941- no tenían nada de inesperado, las de México (mayo de 1942) y sobre todo Brasil (agosto de ese año) eran más significativas. México aprovechaba la coyuntura guerrera para retornar sin humillantes retractaciones a una política amistosa con su poderoso vecino; Brasil la utilizaba para acrecer su importancia militar y política en Latinoamérica; su presidente Vargas, que -adivinando por un instante en la conquista de Francia por Alemania el fin de la democracia liberal- se había apresurado a pronunciar sobre su supuesta tumba un responso algo prematuro, se alineó sólo meses después en la cruzada democrática que Estados Unidos encabezaba, y en la que no era el recluta más desconcertante, acompañado como estaba de un nutrido pelotón de dictadores centroamericanos.

Frente al entusiasmo brasileño, la reticencia argentina no sólo se apoyaba -como querían los adversarios de su política- en el prestigio alcanzado por el Eje entre muchos políticos conservadores y jefes militares; se vinculaba también con la perduración del ascendiente británico, opuesto entonces como antes a la inclusión total de Argentina en el área de predominio norteamericano. La guerra iba a devolver a los Estados Unidos a una política de más abierta intervención en Latinoamérica; en especial contra Argentina, regida desde 1943 por un gobierno militar, iba a ejercer presiones cada vez más violentas; a comienzos de 1944, agregando a las pruebas de que algunos agentes consulares argentinos eran a la vez agentes secretos de Alemania amenazas de intervención muy precisas, pudo Estados Unidos imponer, finalmente, a su reluc-

tante candidata a aliada la ruptura de relaciones con Alemania y Japón; cuando esa prueba de debilidad del presidente Ramírez provocó su derrocamiento, Estados Unidos organizó una cuarentena diplomática contra el gobierno de su sucesor, el general Farrell; la conferencia panamericana de México (febrero de 1945) abría, sin embargo, la puerta para el retorno de Argentina a la comunidad americana, facilitado cuando los mismos jefes militares que habían expulsado a Ramírez declaraban la guerra a Alemania (marzo de 1945).

Al reintegrar a Argentina a los organismos panamericanos, la conferencia de México aseguraba una unanimidad por lo menos formal en el apoyo a una profunda transformación de éste, que reflejaba ya el impacto que sobre él tenía el desenlace de la segunda guerra mundial que había hecho de los Estados Unidos la primera potencia económica y militar del planeta, y hacía posible la reorganización de éste sobre líneas que recogían las consecuencias del predominio regional ganado por las potencias vencedoras, que se esperaba serían capaces de mantenerse en razonable concordia luego de aniquilados los adversarios que las habían forzado a aliarse. En el hemisferio americano, ello se reflejó en la transformación de la Unión Panamericana en un organismo regional definido según las líneas de la carta de las Naciones Unidas, que entre otras tareas recibía la de dirigir la resistencia a cualquier agresión externa contra el área americana; todavía sin embargo esa ampliación de atribuciones no fue acompañada de la creación de los mecanismos que harían posible ejercerlas, y probablemente no todos los participantes en el simposio mexicano advirtieron que lo resuelto en él introducía una novedad decisiva en el desarrollo del movimiento panamericano.

Así, aunque desde la perspectiva de 1945 Latinoamérica parecía haber capeado la crisis sin sufrir daños sustanciales en su economía ni haber debido afrontar las pruebas que la segunda guerra mundial impuso a casi todo el resto del planeta, no por ello es menos cierto que la crisis logró corroer mortalmente, tanto en su dimensión económica como en la político-inter-

nacional, el orden mundial en el que Latinoamérica había largamente buscado, y finalmente encontrado, su lugar; no es sorprendente que ese ocaso de un mundo debilitara también el sistema de creencias y convicciones que había sostenido esa búsqueda de más de un siglo; y se ha visto ya cómo la confianza en los principios de un liberalismo económico que hasta la víspera había sido una básica verdad de sentido común figuró entre las primeras víctimas del cataclismo. Junto con la incitación al escepticismo que provenía del espectáculo de una economía mundial a la deriva, influía para ello, en una Latinoamérica ansiosa como siempre de seguir el rumbo fijado por el consenso vigente en las naciones más avanzadas, la disolución de ese consenso, que no iba tampoco a rehacerse cuando las más serias consecuencias de la crisis comenzaran gradualmente a estabilizarse.

Las razones sobraban para ello: no sólo la recuperación de los países centrales era desesperantemente lenta y contrastada; allí donde ella se constituía en objetivo central de la acción del Estado (en la Alemania hitleriana, o en los Estados Unidos del *New Deal*) su búsqueda -no totalmente exitosa ni en Alemania, que realizó avances espectaculares pero frágiles, ni en los Estados Unidos, donde éstos fueran más sólidos pero extremadamente lentos- incitó a la adopción de soluciones económicas que se ubicaban al margen de la anterior ortodoxia; un signo aun más llamativo de la pérdida de legitimidad de esa ortodoxia puede encontrarse en el interés que la introducción de la planificación centralizada en la economía soviética despertó en influyentes sectores sociales que no por ello entendían renunciar a su hostilidad contra el régimen revolucionario ruso: la esperanza de obtener de ese ensayo apenas incipiente lecciones útiles para la rehabilitación de la economía capitalista da la medida del desconcierto que reinaba en cuanto a la viabilidad misma de esa economía, que se reflejaba en la desesperada resolución de afrontar reestructuraciones tan radicales como fuese necesario para asegurar su supervivencia.

Ese desconcierto, que restrospectivamente puede parecer excesivo, contribuyó por su parte a facilitar el proceso por el cual la crisis económica vino a desembocar en una crisis global del sistema político, al agudizar la crisis de las ideologías, y agravar su impacto sobre los conflictos políticos internos a cada país. En efecto, la crisis económica por una parte vino a dotar de atractivo nuevo a una revolución socialista que en la década anterior había sido en vano propuesta como modelo para Europa y el mundo, y por otra parte popularizó otras soluciones que proponían reformar radicalmente la estructura del Estado para permitirle tomar a su cargo la rehabilitación de la economía productiva en el marco de un capitalismo sin duda modificado (fue ésta la promesa que hizo que en esa década terminasen por identificarse con el fascismo influyentes figuras que desde las filas de la socialdemocracia continental y el laborismo británico habían advertido la urgencia de afrontar esa rehabilitación, y la necesidad de experimentar para ello con soluciones tan alejadas de las preconizadas por el socialismo como de las de la pasada ortodoxia). Como consecuencia de ello, el nuevo conflicto mundial no tendrá por tema exclusivo los conflictos entre ciertas grandes potencias, sino incluirá, como el ciclo revolucionario y napoleónico, una importante dimensión ideológico-política; he aquí un signo particularmente clamoroso de que otro segmento esencial del consenso ideológico de los países más avanzados, en el que Latinoamérica se había acostumbrado a buscar guía e inspiración, había dejado paso a la más cruel discordia.

Esa situación nueva encontrará eco en una ampliación de las alternativas ideológicas frente a las cuales deben optar los actores del drama político latinoamericano. Sin duda, esa innovación está lejos de ser total; así, en más de un país han surgido desde fines del siglo anterior corrientes anarquistas (que conservan muy escasa significación) y por su parte la socialdemocracia de inspiración marxista ha ganado ya antes de la primera guerra mundial en Argentina y Chile un séquito modesto pero no insignificante. Pero mientras en el primero de

esos países apenas logra ampliarlo, en el segundo el inspirador de esa corriente socialdemócrata, José Emilio Recabarren, la reorienta hacia el modelo revolucionario ofrecido por la Rusia bolchevique; el partido comunista que así nace, aunque será el más exitoso entre los organizados en Latinoamérica en la década de 1920, no conquista por entonces sino un lugar marginal en el espectro político, que perderá casi del todo como consecuencia de la persecución a que lo someterá el régimen de Ibáñez.

En la década de 1930, en cambio, el movimiento comunista intentará organizarse en casi todos los países hispanoamericanos, y a lo largo de ella alcanzará una presencia significativa en la vida política del Brasil, Chile y Cuba y una más reducida pero no por eso desdeñable en otros países que van de Argentina y Uruguay hasta Colombia y Venezuela. Sus avances no se deben tan sólo a la agudización de conflictos sociales preexistentes (que por el contrario pueden tener consecuencias catastróficas para el naciente movimiento; así en El Salvador, donde el éxito con que los organizadores comunistas movilizan y dirigen la protesta campesina encuentra por respuesta la salvaje matanza de 1932, que pone brusco fin a comienzos tan prometedores), ni tampoco exclusivamente a los cambios en el equilibrio social suscitados por la crisis y las respuestas a ella; es sobre todo la inseguridad sobre el rumbo que tomará un mundo económicamente en ruinas la que crea para las propuestas políticas del comunismo una audiencia que va considerablemente más allá del séquito que es capaz de reclutar entre las clases populares.

Los avances del comunismo no alcanzaron con todo en nación alguna el impacto ideológico-político que en México iba a tener la segunda oleada revolucionaria desencadenada durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, o el que alcanzó en Perú el movimiento aprista, que reivindicaba para sí la condición de alternativa revolucionaria al comunismo. Haciendo gala de un eclecticismo ideológico muy latinoamericano, el aprismo lograba recoger mejor que su rival la riqueza de te-

mas y motivos innovadores agitados desde la primera post-guerra, y los integraba en una formulación más coherente desde una perspectiva política que como estructura de ideas. En suma, el movimiento que tuvo por fundador e ideólogo a Víctor Raúl Haya de la Torre, el agitador estudiantil desterrado por Leguía, propugnaba la instauración en el poder de un régimen revolucionario, apoyado en la clase obrera y el campesinado, unidos bajo la tutela política e ideológica de las clases medias; la tarea de ese «estado antiimperialista» sería redefinir el vínculo desigual con los países hegemónicos para asegurar que en América latina el imperialismo se constituiría en la primera fase de un desarrollo capitalista vernáculo. La fórmula política así inventada por el aprismo estaba destinada a alcanzar un amplio eco latinoamericano luego de la segunda guerra; si ello no se advierte fácilmente es porque en sus formulaciones ideológicas había quedado indeleblemente marcado por la problemática vigente durante la entreguerra; y sus términos de referencia -el leninismo y en ciertos aspectos el fascismo- no iban a ser ya los preferidos por movimientos de orientación comparable luego de 1945.

Ese eclecticismo ideológico latinoamericano que hallamos reflejado en las formulaciones apristas domina también las tentativas de renovar el bagaje de ideas de la derecha latinoamericana, bajo signo fascista o católico, que por otra parte se reflejaron sobre todo en la incipiente reorientación de corrientes políticas preexistentes, y sólo lograron inspirar dos movimientos nuevos, el integralismo brasileño y el sinarquismo mexicano, que se revelaron capaces por un momento de desplegar inesperado vigor.

La nueva incertidumbre ideológica se tradujo entonces menos en el surgimiento de corrientes y figuras dispuestas a definirse en cerrada oposición al consenso ideológico-político previo, que en una apertura hacia nuevas perspectivas y una disposición a explorar todos los horizontes, por parte de un elenco político apenas renovado en su composición y poco más en sus procedimientos, pero más innovador en las justi-

ficaciones que invoca para éstos. Lejos de agregar nitidez a los conflictos sociales que pugnan por encontrar expresión política, el impacto de la crisis hace más difícil descifrar el impacto que ellos alcanzan sobre una vida política cuyos actores deben avanzar a tientas en un mundo que no comprenden, guiados por convicciones ideológicas que no saben cómo reemplazar, pero en las cuales no pueden depositar la misma fe que en el pasado. Sería ocioso buscar una dirección única para todos los procesos políticos latinoamericanos que avanzan bajo esos ambiguos auspicios, y ello hace necesario entonces examinarlos en el marco nacional que es el suyo.

Esos procesos presentan casi todos ellos un rasgo común: la crisis y sus consecuencias directas e indirectas originan tensiones que la mayor parte de las situaciones políticas hallan difícil afrontar. En aquellos países en que la ampliación de la base política se había traducido en una democratización del régimen en un marco liberal-constitucional tanto aquélla como éste se ven afectados; en Argentina en 1930 el gobierno constitucional es derrocado por el primer alzamiento militar exitoso desde la unificación nacional lograda en 1861; en Uruguay un derrumbe de modalidades distintas pero igualmente ajeno al orden constitucional se produce en 1933.

En **Argentina**, la revolución militar que, a sólo dos años de la aplastante victoria electoral de Yrigoyen, lo expulsa del poder, tras de vacilar ante la tentación de un corporativismo de inspiración fascista, terminó por eliminar los riesgos del sufragio universal por un medio más oblicuo pero no menos eficaz: la restauración formal del régimen constitucional corregida por el fraude en los comicios (que iba a hacerse sistemático sólo después del retorno a la arena electoral del radicalismo, reunificado bajo la jefatura de Alvear, que se produjo en 1934). De este modo una coalición de conservadores, radicales irreductiblemente antiyrigoyenistas y socialistas disidentes (organizada bajo la égida del general Agustín, P. Justo, presidente desde 1932 cuya influencia era dominante en el ejército

desde su gestión como ministro de Guerra del presidente Alvear, con cuya fracción radical simpatizaba) introdujo un dirigismo orientado a asegurar ante todo la rehabilitación de la economía agropecuaria, y secundariamente la expansión industrial, y en lo inmediato a paliar el impacto de la crisis mediante un plan de obras públicas que, a la vez que aliviaba la desocupación, comenzaba a corregir algunas de las carencias que estaban amenazando la competitividad de la agricultura argentina, mediante la construcción de caminos y elevadores de granos.

Esa gestión económica, tan hábil como exitosa, al hacer del Estado el árbitro entre los distintos sectores productivos y de intereses, no podía sino perjudicar a algunos en beneficio de otros, y ello impidió que ganase entonces, aun entre las clases propietarias, apoyos tan amplios como quizá sus inspiradores habían esperado. En particular en la ganadería sectores que se consideraban postergados llevaron adelante una tenaz campaña que unía a la defensa de sus intereses sectoriales la del interés nacional, que proclamaban perjudicado por el tratado Roca-Runciman (1933) mediante el cual, para asegurar su acceso al mercado británico de carnes y con ello la prosperidad del grupo ganadero rival, Argentina vino de hecho a incorporarse a la zona económica que el año anterior Gran Bretaña había estructurado con sus colonias y dominios en la conferencia de Ottawa.

Pero lo que limitó sobre todo el eco positivo de ese éxito económico fue la ilegitimidad evidente del régimen, cuya fachada constitucional se transformaba en una ficción cada vez más trasparente; la tentación de una alternativa abiertamente autoritaria (peligro que el general Justo comenzó por exagerar para mantener en la disciplina a los partidos opositores) se tornaba así cada vez mas intensa. Si tardó tanto en llegar fue acaso por la escasa resistencia que el régimen neoconservador afrontaba: el radicalismo, arrinconado en una oposición ineficaz, terminó por deponerla en circunstancias escandalosas, al ofrecer sus representantes en el Congreso y el concejo municipal

de Buenos Aires apoyo no siempre gratuito a muy discutidas concesiones gubernativas a empresas de transporte y servicios públicos; por su parte el socialismo, cada vez más moderado, y el comunismo, desde 1936 proscrito pero de hecho tolerado, se dedicaron con notable éxito a colonizar el movimiento sindical que (tras de un paréntesis causado por la represión militar y la depresión) resurgía con vigor inesperado; contaban para ello con un margen de tolerancia que no ansiaban eliminar acentuando su actitud opositora. Mientras la oposición, siempre mayoritaria, perdía así fervor y vigor, el gobierno buscaba bases más sólidas utilizando políticamente un renacimiento católico que no estaba exento de contaminaciones fascistas, intensificadas todavía gracias a la guerra civil española.

Así pudo el general Justo concluir su período presidencial, y trasferir en 1938 la presidencia al doctor Roberto M. Ortiz, un radical antiyrigoyenista cuya presencia en la primera magistratura se esperaba que disminuyese aun más la combatividad del primer partido opositor, al que había derrotado en las elecciones de 1937 gracias a una orgía de violencia electoral sin precedentes. Ortiz fue más lejos en busca de la distensión de lo que había esperado su gran elector; en 1940 abría al radicalismo el camino a la victoria electoral en la provincia de Buenos Aires, con sólo asegurarse de que los votos serían honradamente contados.

Esta transferencia pacífica de la mayor fortaleza política del régimen anticipaba la del poder nacional a la mayor fuerza opositora; la opción por un gobierno de veras representativo se complementaba con una nítida toma de posición ideológica en favor de las democracias, en el marco de la neutralidad que Argentina había proclamado frente al conflicto mundial. Esta última era recibida con frialdad por influyentes sectores de la coalición conservadora aún en el poder, mientras otros más amplios dentro de ella reaccionaban con indignación y alarma ante la nueva política electoral del presidente Ortiz.

La enfermedad y luego la muerte de éste vino a ponerle brusco fin; su sucesor el ultraconservador vicepresidente Ra-

món S. Castillo retornó de inmediato a las prácticas electorales a las que debía el poder, y en su gestión hizo sala de un autoritarismo más abierto y arbitrario que el de otros gobernantes más avezados. Pronto encontró en las filas de la coalición gobernante y de su propio partido conservador una oposición que le reprochaba, a más de su estilo autoritario, su tendencia a interpretar la neutralidad argentina en el conflicto mundial en una clave favorable a las potencias del Eje. El ingreso de los Estados Unidos en la guerra socavó el apoyo hasta entonces unánime a la neutralidad; el general Justo se hizo defensor fervoroso de un apoyo activo de Argentina a las democracias en lucha y se perfiló también como el único posible guía de una restauración democrática alcanzada mediante el consenso de fuerzas políticas opositoras y sectores importantes del oficialismo.

Su sorpresiva muerte, ocurrida en 1943, no sólo eliminó esa posibilidad; Castillo pudo además utilizarla para crear un nuevo alineamiento en el ejército (hasta entonces dominado por la influencia de Justo) en favor de la neutralidad y de su propia gestión presidencial. A la vez, convencido ya de que Alemania no ganaría la guerra, el presidente decidió imponer un sucesor –el doctor Robustiano Patrón Costas– dispuesto a cambiar de política exterior. El ejército no se creyó obligado a brindar apoyo pasivo pero decisivo a un candidato que –tras de ser elegido mediante un fraude que se esperaba más extremo que nunca– se disponía a liquidar la política en cuyo nombre su gran elector había solicitado con éxito apoyo militar.

La revolución del 4 de junio de 1943 llevó a la presidencia al ministro de Guerra de Castillo, general Pedro Pablo Ramírez, quien debió afrontar de inmediato los mismos dilemas que habían llevado al derrumbe de la restauración conservadora, entre los cuales los de la política exterior se planteaban con particular urgencia. Los nuevos dirigentes advertían muy bien que el curso de la guerra, con Alemania en baja y Brasil, en el que reconocían a su gran rival continental, creciendo en poder e influencia gracias a su apoyo a la causa de las Nacio-

nes Unidas, creaba para la tradicional gravitación argentina en América del Sur amenazas que requerían ser afrontadas de inmediato; algunos de ellos propugnaban un acercamiento con los Estados Unidos, pero le fijaban condiciones que Washington juzgó excesivas. Su fracaso llevó al encumbramiento de sus adversarios, cuyo inepto manejo (se recordará) originó la situación que forzó al presidente Ramírez a romper relaciones con Alemania.

Su ya recordado reemplazo por el general Edelmiro J. Farrell se debió a la acción de una logia de oficiales neutralistas ya para entonces controlada, como el nuevo presidente, por el coronel Juan Domingo Perón. Este comenzó de inmediato una gradual y cauta reorientación política; si a lo largo de 1944, en un aislamiento diplomático casi completo, Argentina parecía evolucionar hacia una dictadura clerical-fascista, a comienzos de 1945 el gobierno de Farrell declaraba la guerra a lo que quedaba del Eje, negociaba con Estados Unidos su reincorporación al sistema panamericano y se disponía a convocar a comicios generales para elegir autoridades constitucionales.

El coronel Perón se reservaba por su parte la posición dominante en el nuevo régimen constitucional, para lo cual contaba con las simpatías que había ganado entre los sectores obreros por su activa gestión al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión; esperaba además negociar el apoyo de partidos tradicionales, ansiosos sin duda de acercarse al poder con beneplácito militar. Pero las memorias dejadas por la reciente etapa semifascista entre las fuerzas políticas y vastos sectores de opinión pública creaban un clima inadecuado para una transición negociada y pacífica; aun más la dificultaba la reorientación hostil a ella de la política norteamericana, y sobre todo la interpretación extrema de esa nueva línea por el embajador Spruille Braden, que desde su llegada a Buenos Aires en 1945 se constituyó en el más elocuente de los voceros opositores. En este clima incierto de vísperas no se sabía si de elecciones generales o de guerra civil, Argentina comenzaba a

afrontar las redefiniciones políticas impuestas por su ingreso en el mundo de la segunda postguerra.

En el vecino **Uruguay** el presidente Gabriel Terra, colorado batllista, que con atribuciones severamente limitadas por la constitución de 1917 debe convivir con un Consejo de Administración que le es hostil, y sufre el hostigamiento de los hijos y herederos de Batlle, utiliza la emergencia económica creada por la crisis para denunciar la incapacidad del sistema colegiado para afrontarla y proponer una política más sensible a los intereses de las clases propietarias. Con el beneplácito de éstas y el apoyo de la fracción mayoritaria del partido blanco y varias minoritarias del colorado, se transforma en dictador en 1933. En 1934 una nueva constitución crea un senado repartido por mitades entre colorados y blancos mayoritarios (o declarados tales) y por la llamada Ley de Lemas impone alianzas forzosas entre las distintas fracciones de los partidos tradicionales, que benefician a la más numerosa; a ello sigue una mejora de la economía que reflejaba también la incidencia comparativamente leve de la crisis, y que contribuye a restar intensidad a la oposición mayoritaria que afronta el nuevo régimen.

En 1938 Terra deja la presidencia a su cuñado el general Alfredo Baldomir, que ante la incapacidad del nuevo régimen de reclutar apoyo suficiente en la opinión pública emprende una reconciliación con el batllismo que la coyuntura internacional torna aún más urgente: la fracción mayoritaria del partido blanco, tradicionalmente anglófilo, adopta ante la segunda guerra una posición intransigentemente neutralista, con la que se identifica apasionadamente su caudillo Luis Alberto de Herrera, y sólo la unidad colorada puede asegurar el mantenimiento de la política exterior uruguaya, tradicionalmente inclinada a las democracias europeas y cada vez más a los Estados Unidos. En 1942 un acuerdo colorado rehace la unidad del partido tras un candidato –Juan José Amézaga– ajeno pero no hostil al batllismo, y permite a éste alcanzar una maciza victoria en las elecciones legislativas, en un clima de unión

sagrada al que sólo se sustrae la fracción herrerista. La restauración democrática pone en sordina los motivos renovadores del batllismo originario, y no vuelve sobre todas las innovaciones introducidas en 1933; así la Ley de Lemas, inventada para asegurar la estabilidad del régimen de ambición autoritaria establecido en ese año, iba a ser conservada y perfeccionada para asegurar contra sorpresas electorales a los beneficiarios de la reorientación democrática que le puso fin.

Pero esas precauciones están lejos de ser imprescindibles; la solidez del régimen uruguayo debe mucho más al apoyo fiel de un electorado que, pese a la diversificación social creciente y a la consolidación de un movimiento sindical ajeno a los partidos tradicionales, mantiene abrumadora preferencia por éstos; el esfuerzo exitoso de Batlle y sus rivales blancos por arraigar en una sociedad urbana y moderna los partidos nacidos en un pasado agreste continúa así gobernando los datos básicos de la vida política nacional.

Como se recordará, en países como Chile y Perú, en que la incorporación a la vida política de sectores sociales marginados por la república oligárquica, había comenzado ya antes de la crisis bajo signo dictatorial, el impacto de ésta no fue menos nefasto para los regímenes autoritarios que encontró en el poder. Pero mientras en Chile, a través de una agitadísima década, esa ampliación sería retomada en el marco constitucional, en el Perú iba a llevar a una confrontación permanente entre el aprismo, cuyo avance parecía imposible contener en el marco de la república electiva, y las fuerzas armadas y los sectores conservadores, decididos por igual a impedirlo.

En **Chile** la crisis alcanzó una intensidad sin par entre los países mayores de Latinoamérica; en particular la economía exportadora, salvada hasta entonces del colapso gracias a subsidios costeados con crédito extranjero, sufre un derrumbe que para algunos rubros (en primer lugar el salitre) es ya irrevocable. Ello se refleja en una caída dramática del valor inter-

nacional de la moneda chilena, y un retorno a la inflación (cuyos avances, comenzados en 1876, sólo se habían interrumpido a partir de 1925 gracias de nuevo a la disponibilidad de crédito extranjero); éste a su vez hacía inaplicables en Chile las políticas que buscaban reactivar la economía mediante nuevas devaluaciones y creación de circulante; ello prolonga la depresión económica con consecuencias que se hacen sentir en la vida política.

Caído Ibáñez, la unión de los partidos constitucionales no parece respuesta adecuada a la gravísima emergencia; en junio de 1932 una revolución militar, protagonizada por la fuerza aérea, instauraba una república que su jefe, el coronel Marmaduke Grove, veterano conspirador contra el ibañismo, proclamó socialista; unas semanas después Grove fue apartado del poder y en octubre derrotado en elecciones presidenciales por Arturo Alessandri; el antiguo tribuno de la plebe retornaba así a la cúspide de la política chilena al frente de una coalición de derecha y centro, pero el resultado reflejaba también el surgimiento de una corriente de izquierda capaz de atraer un séquito nada desdeñable en un electorado fuertemente minoritario; el año siguiente nacía el Partido Socialista, heredero de la fracasada república, que reunía simpatías en sectores populares pero también en las clases medias.

El gobierno de Alessandri, bajo la inspiración de su ministro Gustavo Ross, adoptó una política económica rígidamente conservadora que –en parte por las circunstancias antes evocadas– sólo logró revertir el avance de la desocupación más lentamente que en otros países, mientras se mantenía la caída brutal del nivel de vida de las clases populares respecto de los niveles sin duda excepcionalmente altos de la artificial prosperidad ibañista. Esa política y las resistencias que encontró acentuaron la confrontación político-social, que Alessandri, decidido a dotar a su papel de salvador del orden del mismo dramatismo que los que antes había desempeñado en el escenario chileno, hizo muy poco por aliviar.

El surgimiento de una alternativa de izquierda debió sin embargo menos a esa tensión creciente que a iniciativas surgidas en la izquierda misma. El Partido Comunista, resurgido luego de la caída de Ibáñez, adaptando la política de frentes populares a la circunstancia chilena, propuso la formación de uno que incluiría a comunistas, socialistas y radicales. Para el radicalismo, partido de burócratas, maestros y pequeña clase media, que había acompañado en parte la gestión de Alessandri y tenía muy poco en común con los llamados partidos obreros, la propuesta era demasiado tentadora para rechazarla, sobre todo cuando fue completada con la de la candidatura presidencial al candidato del ala derecha del partido, cercano a Alessandri y desde luego hostil al frentismo. De este modo llegó a la presidencia de Chile don Pedro Aguirre Cerda, pero la campaña que lo encumbró, y el inesperado despertar de las masas chilenas, que se volvían hacia él con confiada esperanza, iban a cambiar a ese prestigioso profesional y terrateniente, de convicciones ilustradamente conservadoras en materia social, en un servidor fervoroso de las aspiraciones populares de las que había recibido tantos testimonios conmovedores.

Su apasionada sinceridad, y su temprana muerte en 1941, hicieron que su memoria no fuese empañada por lo que sólo cabe llamar fracaso del Frente Popular. Sin duda aun luego de su victoria éste no controlaba el congreso, y por otra parte conservaba en sus filas a la derecha radical, tan cercana a los intereses terratenientes como los partidos ahora opositores, lo que limitaba aun más la eficacia de su acción legislativa. Más que a través de ésta, su acceso al poder se hizo sentir mediante el estímulo que brindó al movimiento obrero, pero éste disminuyó su cohesión interna, en cuanto abrió un nuevo campo de disputas a socialistas y comunistas, lanzados en esfuerzos paralelos y rivales a organizar un sector tras otro de trabajadores; a partir del pacto germano-soviético (agosto de 1939) esa rivalidad adquirió una dimensión ideológica más marcada al poner el comunismo sordina a un antifascismo

que los socialistas consideraban más que nunca el cemento de la solidaridad de las izquierdas. Ese esfuerzo organizativo no se extendió al campo, y ello reflejaba la cautela con que éstas se manejaban frente a ciertos datos básicos de la realidad política y social chilena.

La ajustadísima victoria del Frente Popular (sólo conquistada por añadidura gracias al apoyo de último momento del reducido movimiento nazi chileno y el más influyente de Ibáñez) hacía imposible, en efecto, desafiar la posición de los terratenientes en la sociedad rural, a la que debían conservadores y liberales buena parte de la fuerza electoral que les daba un efectivo poder de veto sobre iniciativas demasiado audaces. La coalición triunfante prefirió entonces atender a los sectores de clase media y a las minorías militantes de la clase trabajadora industrial, minera y de servicios que constituían su clientela dentro de un universo político escasamente ampliado, pero pronto halló limites aun a lo que le era posible hacer por satisfacerlos, sobre todo luego de que la guerra introdujo perturbaciones profundas en la economía y el devastador terremoto de 1939 obligó a orientar hacia las tareas de reconstrucción los limitados recursos del Estado.

Estos contratiempos también disminuyeron la eficacia de los esfuerzos del gobierno de izquierda por reactivar la economía, que ya había comenzado a expandirse bajo la cautelosa guía de Alessandri y su ministro Ross. Con todo, la creación de la Corporación Chilena de Fomento (CORFO), que canalizaba el crédito público hacia la economía productiva, con clara preferencia por la industrial, definía una nueva línea de acción del estado que iba a ser proseguida e intensificada por los gobiernos de muy diverso signo político que gobernaron a Chile hasta 1973.

Como había ocurrido con el impacto político de la irrupción del Frente Popular, el de esas innovaciones económicas no alcanzó a desplazar a los sectores ya arraigados, y se limitó a consolidar a otros que lo estaban menos. Sin duda, el fomento por medio del crédito canalizado por el Estado apenas al-

canzó a la agricultura, pero los intereses de ésta y de la clase terrateniente que la controlaba no quedaban por eso desamparados; su dominio del mercado interno, protegido contra la concurrencia externa por la devaluación monetaria, recibía cada vez que era necesario la protección de otras medidas oficiales, y aun en las ocasiones en que el déficit de la producción, consecuencia del arcaísmo de la agricultura chilena, hacía necesarias las importaciones, el volumen de éstas era cuidadosamente controlado, tanto para evitar la crisis del sector agrícola nacional cuanto para disminuir el desequilibrio del comercio exterior; esa limitada protección, suficiente para salvar los intereses de la agricultura, no lo era para devolverle ningún dinamismo; y en general el flanco débil de una política que, como la de las izquierdas mal afirmadas en el gobierno, cuidaba sobre todo de mantener el equilibrio entre los sectores viejos y nuevos, era su incapacidad de generar a partir de la industrialización una expansión más general de la economía, capaz de sostenerse en el futuro.

Si ése era un problema para el porvenir, ya en lo inmediato podía advertirse que la reactivación económica era demasiado limitada para redituar beneficios políticos significativos a sus promotores; en 1942, al producirse la elección de sucesor para Aguirre Cerda, la opción frentista parecía agotada. Ello no había revitalizado a la derecha tradicional, que prefirió dar su apoyo a la candidatura de Ibáñez, de nuevo popular gracias al contraste entre la penuria creciente en esta primera etapa de la guerra y la prosperidad de los años iniciales de su administración. Contra Ibáñez, el radicalismo levantó la candidatura de José Antonio Ríos, en ese momento identificado con la derecha del partido, y sostenido también por el partido comunista, al que satisfacía el apoyo ofrecido por el candidato radical a los Estados Unidos, aliados con la Unión Soviética, y alarmaba el tenaz neutralismo de Ibáñez (se recordará que los gobiernos de Chile y Argentina, ignorando la recomendación que habían apoyado en Río de Janeiro, mantenían aún relaciones diplomáticas con las potencias del Eje).

La victoria de Ríos fue más bien un voto contra la incertidumbre interna e internacional que se temía como consecuencia de la de su contrincante, que un triunfo de la izquierda, y su administración (que gracias a su reorientación favorable a los Estados Unidos pudo obtener créditos que le permitieron continuar el avance industrial) tuvo un tono claramente conservador. A su muerte esa orientación conservadora se acentuó en la gestión interina de Duhalde, de la extrema derecha radical, y provocó el paso del comunismo a la oposición, desde la cual buscó con éxito rehacer su alianza con la izquierda radical, ahora mayoritaria en el partido, mientras el socialismo acentuaba su posición oficialista en la esperanza de que la benevolencia gubernativa le permitiría afrontar con más éxito los avances de sus rivales comunistas en el mundo del trabajo.

Como se ve, ni los contratiempos sufridos por la gestión del Frente Popular, ni la ausencia de una ampliación masiva del universo electoral o de cambios dramáticos en la relación de fuerzas dentro de ese universo fueron obstáculo para que el peso político de los partidos obreros creciese constantemente; la preparación para la postguerra era encarada por todas las fuerzas políticas chilenas en un marco que advertían muy bien hasta qué punto se había transformado como consecuencia de ello. De este modo Chile parecía, luego del turbulento paréntesis abierto en 1920, volver con un ampliado elenco de actores a su estilo político tan peculiar, que hacía posible la incorporación, más lenta pero también menos disruptiva que en otras partes, de nuevos sectores sociales en un marco de continuidad institucional en el cual aun los más fervorosos revolucionarios de izquierda comenzaban ya a reconocer un timbre de legítimo orgullo patriótico.

Nada de eso, se ha anticipado ya, se hallará en **Perú**. Aquí los once años de Leguía habían socavado la escasa vitalidad de los partidos constituidos en el marco de la república oligárquica, y mal preparados para la irrupción en escena de sectores so-

ciales más vastos. La lealtad de estos sectores iba a ser disputada entre el aprismo, febrilmente organizado como partido de masas en los meses que siguieron a la caída de Leguía, y el séquito personal ganado por el coronel Sánchez Cerro, el oficial de modesto origen mestizo que había dirigido el alzamiento que puso fin a la dictadura civil de aquél, en cuya vasta popularidad las fuerzas tradicionales buscaron cobijarse contra la ofensiva del APRA. Su cálculo resultó acertado: el aprismo, dominante en el norte, de donde era oriundo su núcleo dirigente originario, fue vencido en Lima por una coincidencia de las clases altas e ínfimas en favor de Sánchez Cerro, y no logró avances significativos en el sur; en particular la sierra, de fuerte componente indígena y poco tocada aún por los cambios que hacían posible la irrupción de las masas en la vida política, siguió férreamente controlada por *gamonales* que si –contra lo que quiere la imagen convencional– estaban lejos de ser siempre grandes terratenientes, mantenían una firme hostilidad contra las innovaciones propuestas por el aprismo.

Éste se rehusó a admitir su derrota, que declaró fraudulenta, y en 1932 se lanzó a la insurrección en su fortaleza política de Trujillo; más decisivo que el fracaso de ésta fue la ejecución por los alzados de un número considerable de oficiales de la guarnición local. La reacción del ejército, traducida luego de su victoria en una matanza cuyas víctimas se contaron por millares, dejó como legado más permanentemente un veto militar a la participación del aprismo en el gobierno, que iba a condicionar por décadas la vida política peruana, mientras en 1933 el asesinato de Sánchez Cerro por un simpatizante aprista eliminaba la figura que había ofrecido la única barrera eficaz contra la conquista de una mayoría electoral por el APRA.

El Congreso designó para completar el período del presidente asesinado al mariscal Oscar Benavides, aliado militar del civilismo durante la república oligárquica; pese a una tímida apertura política ensayada por el nuevo presidente el aprismo fue mantenido en la ilegalidad; aun así, el candidato independiente al que había apoyado venció gracias a ese apo-

yo en la elección presidencial de 1936. Ante esa confirmación del predominio que el aprismo había conquistado sobre un electorado sin embargo restringido, y sin haber ganado acceso a vastas zonas del país, las elecciones fueron anuladas y el mandato presidencial de Benavides prorrogado hasta 1939. Para el ejército y las fuerzas políticas tradicionales la peripecia confirmaba la incompatibilidad entre la democracia electoral y el orden vigente en el Perú; ello acentuó un giro ideológico que llevó al mariscal Benavides a declarar inesperadas simpatías fascistas, pero también el avance de un derechismo de más sólidas raíces vernáculas, que contraponía al indigenismo ideológicamente dominante en la década anterior una adhesión nostálgica a la España imperial, que vino a dar ahora su tono dominante a la vida cultural peruana.

Ese pasatismo militante nacía en parte de la aterrorizada aversión que los sectores tradicionales habían desarrollado frente al APRA, que si aparecía escasamente justificada por las posiciones programáticas del movimiento proscrito, se fortificaba ante las manifestaciones multitudinarias con que sus secuaces invadían los recintos tradicionales de la vida política oligárquica, para celebrar en ellos sus cuidadosamente orquestadas ceremonias de adoración al Jefe Máximo y execración de la oligarquía, y aun más decisivamente cada vez que algún secuaz del acorralado aprismo cedía a la tentación del atentado personal.

El primer plano de la vida pública peruana aparece así cubierto por un exasperado conflicto político, y por sus correlatos ideológicos, reflejados en el avance de una derecha cercana o por lo menos no hostil al fascismo pero también en la centralidad nueva, en la práctica del movimiento perseguido, de motivos que, como la lealtad disciplinaria y obediente al Jefe, debían también algo al modelo fascista, y que esperaba lo ayudarían a conservar su cohesión en medio de esa prueba durísima. Pero esa suerte de congelada guerra civil impedía advertir hasta qué punto la administración de Benavides continuaba las tendencias cuatelosamente reformistas de los mejores momentos de la

república oligárquica, y aún -aunque menos deliberadamente- se abría al impacto de los cambios sociales que primero había intentado expresar políticamente el aborrecido Leguía. No se trataba tan sólo de que, en odio al APRA, esa dictadura derechista embotara sus aristas represivas frente al Partido Comunista, que -muerto Mariátegui- se constituyó en un disciplinado pero escasamente eficaz instrumento de las orientaciones de la Tercera Internacional, capaz de realizar con todo modestos avances en la sierra meridional; su esfuerzo por ampliar la legislación laboral y las obras publicas, si buscaba innegablemente socavar la influencia aprista, respondía también a una aspiración sincera al progreso social, sin duda restringido a sectores urbanos y sólo en mucho menor medida costeños.

Cuando fue preciso hallar salida a la dictadura de Benavides, éste buscó su sucesor en las filas de lo que quedaba de la oligarquía esclarecida: Manuel Prado, un próspero banquero cuyas nostalgias se orientaban más bien hacia el París de la *belle époque* que hacia El Escorial de Felipe II, fue elegido en 1939 sin el apoyo pero también sin la oposición militante del siempre proscrito aprismo. De él se esperaba que promoviese una distensión política, facilitada por otra parte por el impacto favorable que la guerra alcanzó sobre la economía peruana, en cuanto benefició las exportaciones mineras y la ya comenzada industrialización. La victoria obtenida por las armas peruanas en 1942, en una guerra no declarada con Ecuador, aumentó el prestigio del gobierno de Prado, y consolidó el clima de inesperado consenso político en que buscaron acuciosamente integrarse tanto el aprismo, que había depuesto sus últimas reservas frente a la influencia norteamericana en el altar de la unidad antifascista, y el comunismo, que en su entusiasmo llegó a proclamar a Prado el Stalin del Perú; ambos partidos esperaban que su coincidencia con una parte de las corrientes tradicionales en apoyo a la política externa del presidente les abriría finalmente el acceso a la plena legitimidad política.

En ese clima inesperadamente concorde Perú debió encarar su adaptación al que se esperaba sería el clima dominante

en la postguerra, que parecía requerir una democratización política muy abierta a motivos sociales. En 1945 los apristas (reconstituidos legalmente como Partido del Pueblo) lograron formar un Frente Democrático que llevó a la presidencia al doctor José Luis Bustamante y Rivero, jurisconsulto arequipeño de orientación socialcristiana; las elecciones parlamentarias no sólo revelaron que en esa coalición la fuerza dominante era el APRA, sino dieron a ésta control decisivo del Congreso. Esos resultados pusieron fin a la breve era de buena voluntad; tanto el ejército como las fuerzas políticas tradicionales conservaban intactas sus reservas frente a un enemigo que parecía ahora cercano a la victoria decisiva. He aquí una situación que no auguraba un curso tranquilo para el experimento de democratización que comenzaba.

Las repúblicas oligárquicas no permanecen tampoco inmunes al vendaval que, surgido en la economía, se extendió a la sociedad y la política. En **Ecuador** el predominio del modelo oligárquico, desafiado en ciertos aspectos por la revolución liberal de Alfaro, terminó consolidado cuando ésta fue heredada por los dominadores de la economía costera, más dinámica que la serrana, pero ya en 1925 se dio un intento, de inspiración muy distinta, por vencer el inmovilismo del estado oligárquico: fue –se recordará– la dictadura civil de Eusebio Ayora, quien con apoyo del ejército se lanzó a una frenética carrera de reformas. La depresión, que puso fin a ese experimento ya antes de ella clamorosamente fracasado, iba a hacer estragos muy duros en la economía ecuatoriana; el cacao, principal producto exportable, no iba a recuperar nunca la modesta prosperidad anterior a 1929, y hasta después de la segunda guerra no encontraría reemplazante en el sector primario-exportador, mientras en esa economía reducida y mal integrada al mercado la penuria de importaciones se revelaba menos capaz que en otras partes de suscitar una expansión industrial.

La base política serrana de las fuerzas conservadoras, marginadas a partir de la conquista revolucionaria del poder por

los liberales, parece sobrevivir mejor que la de éstos a ese aclimatamiento del país en la adversidad. La transformación del liberalismo en expresión política de las oligarquías costeras lo prepara mal para capear una crisis económica que afectaba sobre todo a estas últimas, y exasperaba los conflictos sociales en la costa, donde desde fines de la década anterior un movimiento obrero cuyos dirigentes más exitosos militan en el comunismo se ha afirmado sobre todo en el sector de servicios, y el crecimiento urbano de Guayaquil se traduce en la presencia de una masa popular poco dispuesta a encolumnarse tras de los oligárquicos dirigentes del liberalismo tradicional.

De Guayaquil surge el caudillo que por treinta años será a la vez el más eficaz de los agitadores políticos y el más reiteradamente fracasado de los gobernantes latinoamericanos. José María Velasco Ibarra, de extracción liberal, aspiró con éxito a un liderazgo estrictamente personal, y capaz por eso de superar los límites regionales del séquito político del liberalismo. Inclinado a un estilo de gobierno autoritario muy tradicional, y dispuesto a la vez a hacerse vocero eficaz de las nuevas inquietudes sociales cuyo eco estaba llegando a Ecuador, una vez llevado al poder en 1930 afrontó las discordantes protestas de sus heterógenos seguidores, insatisfechos porque su presencia en el gobierno parecía no cambiar demasiado de la situación cuyas insuficiencias les había hecho medir mejor con sus elocuentes denuncias, evolucionando hacia una dictadura para la cual no contaba con el apoyo indispensable del ejército. Esa secuencia, que Velasco Ibarra iba todavía a protagonizar más de una vez en el futuro, dio paso a través de una intervención militar a la restauración del régimen liberal-oligárquico. Pero la derrota en la guerra no declarada con Perú, en 1941, a la vez que afectó el prestigio del cuerpo de oficiales, acentuó el descontento de éstos frente a un régimen que no les había dado los instrumentos de una victoria, y se había inclinado ante el fallo de Río de Janeiro, que resolvía el conflicto de límites que había llevado al choque armado en sentido generalmente favorable a las aspiraciones peruanas; en 1944 el

ejército se abstuvo de reprimir un alzamiento popular, apoyado por liberales disidentes, socialistas y comunistas, que se dispuso a confiar el poder al inevitable Velasco Ibarra; bajo esa guía nada prometedora Ecuador emprendía, en el clima democratizador de esa aurora de la postguerra, un nuevo intento por superar el marco oligárquico en que su vida política había venido desenvolviéndose.

En **Colombia** ese marco oligárquico no había impedido que arraigasen lealtades partidarias capaces de movilizar a vastas masas humanas para la guerra civil, pero en el nuevo siglo un entendimiento entre los partidos parecía haber eliminado a esta última de los usos políticos colombianos; por él el liberalismo venía a aceptar una situación minoritaria que le abría acceso a ciertas esferas de poder político. En 1930 la escisión conservadora, y el impacto de la crisis financiera en un país que sólo en la década anterior había comenzado a acudir sistemáticamente al crédito externo, facilitaron el traspaso del poder al partido liberal en un marco pacífico, que en 1934 una segunda victoria electoral del liberalismo vino a completar. Ella instaló en la presidencia a Alfonso López Pumarejo, el exitoso banquero y organizador político que había promovido entre sus correligionarios la idea de disputar el poder al partido rival. Desde la presidencia López se preocupó por crear para el liberalismo, hasta ese momento muy dudosamente mayoritario, una base popular más sólida utilizando el crecimiento urbano, que le daba oportunidad de acercarse a sectores de población que en su anterior marco rural se habían mostrado insensibles a su prédica. Organizadores liberales y comunistas promovieron la expansión del movimiento obrero con el beneplácito del presidente, que por otra parte, frente a las tensiones creadas en el campo por el agotamiento de la expansión hacia nuevas tierras que había ofrecido hasta entonces desemboque a una población en rápido ascenso, introducía medidas que, si no eran tan claramente favorables a los campesinos necesitados de tierras como el gobierno liberal

afirmaba, crearon una mayor certidumbre en la tenencia de tierras tanto para éstos como para los mayores terratenientes, y alcanzaron así el buscado efecto distensivo.

Esa prudente ampliación de las bases sociales de la política colombiana se acompañó de la eliminación del contencioso entre el liberalismo y la Iglesia católica, hasta entonces identificada en Colombia con su rival, que pudo lograrse, para irritación del conservadurismo, en negociaciones directas con el Vaticano, dispuesto –como en Chile en 1925– a aceptar una separación entre la Iglesia y Estado ofrecida en términos en extremo favorables a los intereses eclesiásticos. Lo que se presentaba a la opinión pública a la vez como un avance hacia la izquierda, una consagración de los principios tradicionales del partido liberal y un eco colombiano del *New Deal* norteamericano parecía resolverse entonces, más bien que en el proclamado nacimiento de una Segunda República, en una exitosa reestructuración del mapa político de Colombia, destinada a asegurar al liberalismo el lugar dominante.

Pero esa política hábil era juzgada demasiado audaz por los dirigentes tradicionales del liberalismo, que le reprochaban entre otras cosas favorecer el crecimiento del ala izquierda de ese partido, que había encontrado en Jorge Eliécer Gaitán un caudillo cuya creciente popularidad personal y escaso apego a la disciplina partidaria esos dirigentes hallaban cada vez más alarmante. En 1938 uno de ellos, Eduardo Santos, era elegido para suceder a López; muy poco después se hizo evidente que la coyuntura económica creada en Colombia por la depresión, que tanto había ayudado al éxito de la política de López, se estaba desvaneciendo. La guerra no favoreció nuevos avances en el nivel de vida urbano, y aunque su impacto de largo plazo estuvo lejos de ser negativo, creó en lo inmediato conflictos y tensiones que minaron la frágil unidad de un partido que, como el liberal, quería seguir siendo el de los más sólidos sectores de intereses y constituirse a la vez en el promotor de la movilización política y social de grupos populares.

En 1942 el liberalismo pudo aún unirse para sostener la reelección de Alfonso López; ahora su bandera era la adhesión a la causa de las Naciones Unidas, frente a un conservadurismo en el que abundaban las reticencias y aun la franca hostilidad a ella. Si la popularidad de López se reflejó de nuevo en las vastas movilizaciones que hicieron abortar en 1943 un alzamiento militar, no fue capaz de salvar la unidad liberal: en 1946 a la candidatura de Gaitán, de popularidad ya incontenible en las filas del partido, la dirigencia tradicional oponía la de Gabriel Turbay.

Se abría así para los conservadores la oportunidad de alcanzar el desquite de 1930 en una maniobra simétrica a la propuesta entonces por Alfonso López; en Eduardo Ospina Pérez, veterano dirigente de los empresarios cafetaleros colombianos, y hombre de reconocida moderación política, encontraron al candidato capaz de no distraer a los liberales de sus querellas internas, pero no pareció seguro que su encumbramiento a la presidencia abriese el camino a la hegemonía conservadora, frente a un liberalismo que luego de su derrota rehízo su unidad tras de Gaitán, a cuya prédica populista las masas conservadoras estaban lejos de mostrarse insensibles. De este modo Colombia entraba en la postguerra con una doble transición -del predominio conservador al liberal, de la república oligárquica a un régimen ampliado en su base política- interrumpida en su momento crítico; aun así muy pocos eran capaces de avizorar el vendaval político y social que iba a resolver a su modo los dilemas que estaban recuperando toda su urgencia.

Tanto esos dilemas colombianos como la desorientación de un Ecuador que parece encerrado en un callejón sin salida se dan en un marco que en comparación con el de la más vasta de las repúblicas oligárquicas no deja de parecer sencillo. No es sólo la vastedad y la heterogeneidad social y política de ese gigante sudamericano que es **Brasil** la que explica la extrema complejidad de los desarrollos que en él se abren en 1930; la

justifican también dos circunstancias específicas a la experiencia brasileña. La primera es que la república oligárquica sigue imponiendo su marco a realidades socioeconómicas que aparecen asfixiarse en él, y esa contradicción es dolorasamente percibida no sólo por aquellos a quienes la solución oligárquica margina, sino también por sus beneficiarios, que no dejan de advertir que un estado de base tan estrecha y estructura tan laxa es demasiado débil para afrontar con éxito los dilemas que la hora plantea. La segunda es la crisis del café, ya incontenible desde 1927, que no sólo produce un derrumbe catastrófico en el que ha sido por casi un siglo núcleo dinámico de la economía brasileña, sino se traduce en un derrumbe análogo en el sistema político también dominado por el centro de la economía cafetalera en San Pablo. La caída de la primera república fue ya confirmación clamorosa de la desintegración de ese viejo orden, y la segunda será por sobre todo un intento de edificar sobre sus ruinas otro orden político más firme.

Se ha visto que la revolución de 1930 comenzó por ser el desquite frente a las manipulaciones que habían despojado de la victoria electoral a la Alianza Liberal, y que tanto esa coalición de facciones regionales descontentas como su candidato presidencial, Getulio Vargas, tenían sus raíces en la república oligárquica. Pero ya antes de tomar la vía revolucionaria, la Alianza Liberal se había pronunciado por una modificación profunda de la política brasileña, basada en la eliminación de las clientelas y la imposición de la pureza electoral, y ello le había permitido ganar el apoyo no sólo de la oposición surgida en São Paulo contra el todopoderoso Partido Republicano Paulista, sino el más difuso de esa opinión pública urbana que ya Rui Barbosa había logrado movilizar en sus desafíos a las soluciones presidenciales impuestas por el consenso de los partidos oligárquicos. Su programa político era, pues, de ampliación de la base social del estado sobre líneas análogas a las del experimento argentino interrumpido precisamente en 1930, pero una vez instalado Vargas en el gobierno con pode-

res dictatoriales, se mostró muy poco urgido de llevarlo adelante, y se ha señalado ya que las condiciones brasileñas no parecían propicias para ello: mientras la politización avanzaba en las ciudades, la vasta mayoría de la población de este país aún abrumadoramente rural seguía encerrada en los lazos de deferencia social y dependencia económica que habían dado vigor a las clientelas políticas dominantes, y no se veía por qué las reformas electorales postuladas habían de debilitarlas.

Por añadidura, en las filas revolucionarias no todos coincidían en reconocer prioridad a ese objetivo; entre los dirigentes civiles del movimiento y aun más entre los militares (esos oficiales de segunda fila que habían simpatizado con el movimiento *tenentista*, a quienes la victoria de la Revolución liberal estaba ubicando en la cima de la jerarquía del ejército) muchos juzgaban más urgente impulsar transformaciones políticas y sociales que eliminaran en ambos niveles las incoherencias y heterogeneidades características del viejo orden; si políticamente algunos de ellos no dejaban de estar impresionados por el ejemplo fascista, en lo social no vacilaban en proponer reformas audaces, aunque no siempre precisas, y proclamaban la necesidad de ir cada vez que fuera necesario contra los intereses de los sectores tradicionalmente dominantes; su convicción de que un retorno apresurado al marco de la república representativa sólo vendría a reconstruir las fortalezas del particularismo brasileño y a poner obstáculos en el camino de esas reformas no era de ningún modo infundada.

Bajo la dictadura suprema de Vargas surgió así un régimen formalmente muy poco definido, y caracterizado por un reformismo que variaba en intensidad de acuerdo con la orientación de la figura civil o militar que lo representaba en cada región. Era una solución claramente insuficiente, que vino a hacer crisis en São Paulo, cuando el agente local de la revolución de 1930 sumó a un autoritarismo caprichoso, que le enejenó el apoyo de las fuerzas políticas pro-revolucionarias (allí más hondamente identificadas con la democratización en el

marco constitucional que había sido bandera del movimiento de 1930), tendencias a la reforma social que por su parte le enajenaron el de los grupos que habían dominado la política paulista bajo el antiguo régimen. En 1932 una guerra civil de tres meses, cerrada con una laboriosa y costosa victoria del ejército federal sobre la milicia estadual, persuadió a Vargas de la urgencia de terminar con la provisionalidad convocando finalmente a elecciones para la Asamblea Constituyente.

Así, Brasil recibió en 1934 su segunda constitución republicana, que concedía el voto a las mujeres, pero no a los analfabetos, y creaba un sector de representación corporativa en la cámara de diputados; ni una ni otra innovación cambiaba nada esencial a los datos básicos de la vida política brasileña, y el mero retorno al régimen representativo, como tantos habían temido, venía a devolver su inmenso peso al Brasil rural y las fuerzas que lo dominaban.

En ese marco tan poco renovado la aspiración a alcanzar una mayor integración nacional a través de transformaciones sociales e ideológico-culturales, a la vez que políticas, vino a abrirse en un abanico de alternativas en las que se reflejaba ya también la ideologización creciente de los conflictos políticos e internacionales a nivel mundial. El comunismo, hasta entonces muy poco vital, encontró a la vez un recluta de excepción y un jefe en Luis Carlos Prestes, uno de los más populares *tenentes* de la década anterior. Ahora iba a intentar con el beneplácito de la Tercera Internacional aplicar en Brasil una modificada táctica de Frente Popular, organizando una alianza de fuerzas de izquierda para lanzarlas a la insurrección. Ésta fue fácilmente suprimida y sangrientamente reprimida en 1935; desde entonces Brasil vivió en estado de excepción. Con un marco constitucional que conservaba vigencia sólo nominal, adquirió nuevo vigor el integralismo, movimiento lanzado por un inquieto político e intelectual paulista, Plinio Salgado, que, si bien propugnaba la adopción del Portugal de Oliveira Salazar como modelo político, lo hacía a través de una agitación de masas calcada en organización y estilo del modelo fascista, que

alcanzó de inmediato un eco muy vasto en las clases medias urbanas. La coalición de fuerzas políticas viejas y nuevas que apoyaban a la administración de Vargas había comenzado también ella a ser víctima de la misma polarización, y no sólo parecía inevitable que esas fuerzas se presentasen divididas a la renovación presidencial de 1938, sino también muy probable que la victoria correspondiese al candidato de las más cercanas a la izquierda, a quien el ejército veía con desconfianza.

Vargas afrontó esa difícil encrucijada mediante el golpe de estado de noviembre de 1937, que introdujo el *Estado Novo,* encuadrado en una constitución fuertemente centralista y autoritaria que, según anunció, sería oportunamente presentada a la aprobación plebiscitaria del electorado. Esa oportunidad no iba a llegar nunca, y en los siete años siguientes Vargas gobernó como dictador y fuera de todo marco constitucional. Luego de superar una tentativa de golpe de estado integralista impuso un forzado silencio a las fuerzas políticas, entre las cuales las más combativas habían sido ya eficazmente reprimidas antes del cambio institucional, e introdujo por primera vez en América latina el estilo de propaganda y adoctrinación de masas inventado por el fascismo en el poder, que parecía tanto más incongruente porque por otra parte estaba lejos de las intenciones del veterano político perturbar una situación que juzgaba adecuadamente dominada dando alas a la movilización de masas.

Más que un intento de crear un estado fascista, el *Estado Novo* fue entonces el de organizar por fin en Brasil un estado central capaz de desempeñar las funciones que de él se esperaban a esa altura del siglo XX; no es sorprendente entonces que mientras los ideólogos y juristas encargados de proveerle de justificaciones ideológicas eran en su abrumadora mayoría de orientación derechista, en el cuerpo de funcionarios técnicos por primera vez reclutados con criterios entre los que contaba el de competencia, y encargados del ejercicio de esas nuevas funciones, no escasearan los simpatizantes de las corrientes innovadoras de izquierda.

Si Vargas pudo navegar con éxito los rápidos de un curso político cada vez más revuelto, fue en parte porque la economía brasileña se recuperó con relativa facilidad, y era opinión dominante entre las clases propietarias que ello se debía en buena medida a su gestión gubernativa. De ella apreciaban sobre todo el éxito con que buscaba modos de contrarrestar la clausura de mercados para las exportaciones brasileñas; aquí como en todas partes el apoyo a la industrialización, que adquirió ímpetu desde mediados de la década, aparecía más bien impuesto por las circunstancias que fruto de una deliberada decisión política.

Esa política económica se acompañaba de una política social reflejada por una parte en el avance de la legislación, laboral, y por otra en la creación por iniciativa del estado de sindicatos cuya estructura legal se aproximaba a la establecida en la Italia fascista. Pero la sindicalización que había comenzado en rigor antes de la implantación del *Estado Novo*, era por el momento más bien un aspecto del esfuerzo del Estado por encuadrar más sólidamente a la sociedad brasileña que un proyecto deliberado de organizar una vigorosa fuerza sociopolítica en apoyo al régimen; a su vez la legislación laboral, que comenzó a introducirse ya a partir de 1930, no crea motivos serios de discordia con las fuerzas empresarias, ya que sólo iban a aplicarse de modo parcial y aproximativo, y en más de un caso no se oponía a las conveniencias inmediatas de éstas (así la fijación de una jornada máxima de trabajo se introdujo en un momento en que la depresión del consumo interno estaba obligando al gobierno a fijar cupos máximos de producción para las fábricas textiles, que mediante la reducción de la jornada y la correlativa del salario lograban librarse de parte de su personal superfluo).

El ya evocado alineamiento del Brasil en el campo de las Naciones Unidas le permitió afrontar la prueba de la guerra en condiciones excepcionalmente favorables para su economía; no sólo la industrialización recibió estímulo mucho mayor que en cualquier país hispanoamericano, sino la importancia que

los Estados Unidos asignaban al apoyo brasileño hizo que se allanaran a subsidiar la creación de una industria siderúrgica del Estado en Volta Redonda, pese a su hostilidad de principio hacia ese tipo de empresas. La guerra hizo también inactual al *Estado Novo;* adaptándose a los nuevos tiempos, Vargas anunció la restauración, apenas cerrado el conflicto, del régimen representativo, y todo parecía indicar que se preparaba a continuar la carrera política que había comenzado en 1905 bajo ese nuevo signo democrático. Desde 1942 el Ministerio de Trabajo aceleró el ritmo de organización de nuevos sindicatos, y puso un celo nuevo en el apoyo a sus reivindicaciones y al fiscalizar el cumplimiento de la legislación obrera; todo parecía indicar también que Vargas se disponía a incorporarlos al heterogéneo conjunto de aliados y seguidores políticos con cuyo apoyo confiaba contar en la etapa que estaba por abrirse. Aunque a través de un proceso muy distinto del argentino, también en Brasil la necesidad de adaptarse al previsible clima político de la postguerra mediante el retorno a la república representativa era universalmente reconocida; del mismo modo que en Argentina quedaba por decidir quiénes habían de ser los principales beneficiarios de ese retorno.

Si en Brasil la adaptación a un contexto sociopolítico constantemente cambiante se dio a través de cambios drásticos en la estructura del Estado y de la política, en **México** ella se iba a dar en ambas esferas bajo el signo de una continuidad institucional en la que se reflejaba ya la solidez de la obra de unificación emprendida por Calles. Éste retuvo su condición de árbitro de la vida política mexicana a través de varias breves e incoloras presidencias durante las cuales se acentuó bajo el impacto de la depresión económica un giro a la derecha que el mismo Calles patrocinó abiertamente. La insatisfacción creciente ante los resultados económicos de esa reorientación persuadió sin embargo al Jefe Máximo (que en 1933, retornado a un vocabulario que todos creían olvidado, proclamaba que el futuro de la revolución seguía siendo socialista) de la

conveniencia de abrir paso a una gestión dominada por la izquierda del partido, prohijando la candidatura presidencial del general Lázaro Cárdenas, veterano revolucionario michoacano cuyo alineamiento con ésta no era un secreto, y en cuya lealtad personal confiaba.

Cárdenas, candidato sin rivales serios, recorrió todo el territorio mexicano en una afiebrada campaña electoral que reflejaba su intención de ser algo más que un testaferro del Jefe Máximo, y una vez elegido comenzó cautamente a definir una línea propia, en cuyo apoyo comenzó por convocar, junto con la izquierda, a caudillos regionales que se consideraban poco favorecidos por el arbitraje de Calles, a la vez que preparaba discretamente un armisticio con la Iglesia. Al mismo tiempo se preocupó por extender el influjo de esa izquierda, prohijando un nuevo esfuerzo de sindicalización, que tuvo por protagonista a Vicente Lombardo Toledano y fructificó en la organización de una nueva central, la CTM, de mucho más amplio séquito que su predecesora la CROM, y que si dependía tanto como ésta del apoyo del Estado, ponía una militancia nueva en el planteo de sus reivindicaciones.

Esta iniciativa provocó la condena abierta de Calles, a la que Cárdenas reaccionó forzándolo en 1935 a marcharse al extranjero; el Maximato había terminado de morir y los avances de la segunda oleada revolucionaria se aceleraron aún más desde entonces. En parte para cumplir también este aspecto la promesa de la revolución, en parte para poner freno al ya iniciado englobamiento de los trabajadores rurales en el sistema sindical liderado por Lombardo Toledano, Cárdenas lanzó una reforma agraria que en cuatro años iba a afectar a cerca de veinte millones de hectáreas; como resultado de ella la hacienda dejó de ser un elemento significativo en la vida social y económica del México central y meridional; en su lugar pasaron a predominar los ejidos explotados comunitariamente.

La reforma agraria, al afectar también a propietarios extranjeros, introdujo un motivo de tirantez en las relaciones de México con las grandes potencias; el conflicto petrolero las

iba a llevar a un punto crítico. Éste surgió de un conflicto laboral que, ante el apoyo oficial a las reivindicaciones obreras, las empresas buscaron afrontar suspendiendo sus actividades. A ello siguió la requisa y luego nacionalización de los pozos petroleros, que provocó la ruptura de relaciones con Gran Bretaña y el más temible boicot de las compañías afectadas, que cerraba a México el acceso a sus mercados habituales. Alemania y Japón los ofrecieron alternativos, y Cárdenas utilizó la oleada de solidaridad nacional provocada por el conflicto para hacer del gobierno revolucionario el de todos los mexicanos; por primera vez en décadas, la ceremonia oficial de nacionalización del petróleo fue anunciada por el repique de las campanas del Sagrario...

El impacto negativo del conflicto en la economía mexicana iba a ser utilizado para justificar la clausura de la etapa de activismo reformista, que se estaba haciendo por otra parte impostergable. La reforma agraria había resultado mucho menos disruptiva de la economía agrícola de lo que sus adversarios (y aun algunos de sus partidarios) habían temido; aun así se reflejaba en una mejora en las condiciones de vida de los campesinos que, aunque efímera, comenzó por limitar y hacer más costoso el flujo de alimentos esenciales que el campo volcaba en la ciudad. Por otra parte esa reforma había hecho del Estado –a través del Banco Ejidal– la fuente de los créditos e inversiones necesarios para mantener y expandir la producción rural; de esas dos maneras alimentaba una subida de precios e imponía una expansión monetaria que encontraban estímulos aún más poderosos en los avances salariales derivados de la sindicalización creciente de los trabajadores, y en el uso del crédito del Estado en favor del sector empresario, que sostenía una expansión industrial muy rápida. La consecuencia fue que México conoció ya a fines de la década el problema de la inflación; si el sector empresario se beneficiaba con ella, y el de campesinos reformados y obreros sindicalizados estaba aproximamente abrigado contra sus estragos, los sectores medios urbanos y rurales, y los populares no organizados, los sufrían en pleno.

La reforma socioeconómica se revelaba entonces un obstáculo contra esa unificación nacional a la que Cárdenas había aspirado, y también conspiraba contra ella la radicalización ideológica que la había acompañado. Hasta qué punto era eso cierto pudo advertirse cuando la candidatura opositora del general Juan Andreu Almazán, un muy poco prestigioso revolucionario de segunda fila, que daba voz a la protesta contra las demasiadas novedades que la revolución seguía introduciendo en la vida mexicana, alcanzó de inmediato popularidad de multitudes, mientras en el campo el sinarquismo, movimiento de raíz católica integralista que unía a la identificación con la causa de Franco la admiración por el ejemplo de Gandhi, alcanzaba eco aún más inquietante mediante una prédica que agitaba motivos milenaristas. Cárdenas debió admitir que su ambición de hacer de un radicalizado credo revolucionario la fe común de los mexicanos no se había realizado, y que un candidato a la sucesión presidencial identificado con ese credo no podría volcar en su favor ni una neta mayoría del electorado ni el sólido apoyo militar que haría posible una transición sin sorpresas. Prohijó entonces la candidatura del general Manuel Ávila Camacho, su ministro de Guerra, cuya desteñida personalidad lo hacía aceptable a los sectores militares y empresarios cuya definición Cárdenas había tenido razones para temer. Esa candidatura tan poco atractiva fue de inmediato adoptada por el partido oficial, recientemente reorganizado como Partido de la Revolución mexicana, e integrado por el sector sindical, que agrupaba a la CTM, centrales sindicales menores y sindicatos independientes, el campesino, dominado por la poco vital Confederación Nacional Campesina, el militar, en que encontraba su lugar el cuerpo de oficiales, y por último el popular, que a falta de otras adhesiones en las clases medias encuadraba sobre todo a los empleados del gobierno.

Tanto para Cárdenas como para la izquierda, que en ese momento dominaba aún el partido oficial, esa candidatura significaba la continuación de la pausa a los avances del refor-

mismo que de hecho se había impuesto ya a partir de la nacionalización petrolera; no adivinaban que a través de ella estaban entregando para siempre a otras manos la orientación del proceso político-social mexicano. Ésa fue sin embargo la consecuencia del reemplazo de Cárdenas por Ávila Camacho; mientras la escasez creada por la guerra borraba los avances en el nivel de vida popular de la década anterior, la devoción de los dirigentes de izquierda por la unidad antifascista, que se traducía ahora en el apoyo a los gobiernos que -como el de México- se alineaban con las Naciones Unidas, y en la renuncia a acciones que pudieran poner obstáculos a una economía puesta al servicio de la victoria, los disuadió de cualquier intento de presionar sobre el Estado para que buscase alivio a ese deterioro; quizá también los incitaba a la prudencia el limitado espíritu militante de esas organizaciones mismas, cuyo rápido crecimiento bajo la protección oficial las había preparado muy mal para actuar con independencia, y peor aún para una oposición activa frente a las decisiones del poder político.

En medio de la penuria causada por la guerra pudo medirse mejor una consecuencia quizá inesperada de la reforma agraria; puesto que el papel central en la producción de alimentos básicos para consumo interno lo tenían ahora los campesinos ejidatarios, grupo económicamente muy débil, y sólo organizado a través de asociaciones creadas a inspiración del Estado y controladas por éste, no fue difícil a ese Estado arrojar sobre sus hombros buena parte de la carga de la expansión urbana e industrial, al forzarlo a satisfacer con mínima inversión externa las acrecidas necesidades de alimentos que ella creaba, a precios que mantenía rígidamente controlados para contener la inflación, y que desde luego no dejaban margen que permitiese a los productores acumular provechos e invertir lo acumulado; ese mecanismo improvisado para afrontar la emergencia creada por la guerra iba a sobrevivir a ella para seguir sosteniendo la que un agudo observador de izquierda iba a llamar acumulación primitiva permanente, en la que no sin

razón creía descubrir uno de los rasgos básicos del orden económico-social mexicano a partir de la segunda postguerra.

Así, mientras en algunos aspectos la rectificación de rumbos introducida en 1940 vuelve sobre las innovaciones del cardenismo, no por eso deja de construir sobre ellas: con métodos nuevos, continúa favoreciendo el crecimiento y diversificación económicos que Cárdenas había promovido, y si preside la liquidación de los avances en el bienestar de los sectores populares, que se reflejaba en la caída del salario real y el fin de la breve bonanza campesina que siguió a la reforma agraria, cuenta para imponerla con mínima dificultad con las organizaciones en que esos sectores habían sido estructurados por la movilización desde lo alto de tiempos cardenistas; como comenzaba a hacerse evidente, precisamente gracias a esas movilizaciones la segunda revolución desencadenada por Cárdenas había dejado en herencia a sus herederos escasamente leales la capacidad de imponer drásticos reajustes en la distribución del ingreso sin amenazar una estabilidad política que en otras comarcas latinoamericanas iba a buscarse en vano asegurar por el camino de la desmovilización social. Precisamente debido a la excepcional robustez que ya había adquirido el orden político mexicano, el clima favorable a los avances de la democratización tuvo en México un impacto muy modesto; como ya había venido ocurriendo a partir de la Revolución, serían sobre todo las transformaciones y continuidades en el proceso que ésta había desencadenado, y que desde entonces no dejaron de afectar hasta los mínimos aspectos de la vida nacional, las que seguirían gobernando un rumbo y ritmo de avance para los cuales se buscaría en vano paralelos en el resto de América latina.

Los ejemplos nacionales ya evocados son suficientes para que la constatación de la excepcionalidad mexicana no nos lleve a postular frente a ella una experiencia latinoamericana, marcada en todas partes por los mismos rasgos básicos, de la que México diverge. La multiplicación de esos ejemplos ayudará

aun mejor a esquivar ese error; así en **Centroamérica** y el Caribe, donde la crisis del sector exportador no podía estimular (salvo en mínima medida en Guatemala) la expansión industrial, una penuria que no encuentra compensaciones ni atenuantes se refleja en la amenaza de una agudización del conflicto social que, si sólo se hace actual en **El Salvador**, a través de la rebelión campesina a la que pone fin la matanza de 1932, no sólo en El Salvador favorece el deslizamiento de las soluciones políticas oligárquicas a las dictatoriales.

Sin duda el proceso salvadoreño tiene una nitidez que falta en otras partes; a fines de 1931 el coronel Maximiliano Hernández Martínez desaloja a un presidente reformista cuya victoria había sido el resultado de una agitación popular que la república oligárquica no había sabido combatir eficazmente; ya en 1932 la matanza ofrece una indicación precisa de lo que significa su presencia en el poder (en el que se mantendrá hasta 1944, sin tener que repetir esa sangrienta hazaña inicial en análoga escala; de hecho sin encontrar oposición perceptible hasta 1942); nada semejante se encontrará en **Honduras**, donde la laberíntica historia de la república oligárquica se ve simplificada cuando Tiburcio Carias Andino, jefe del partido nacional heredero del conservador, y presidente en 1932, decide permanecer en el poder como dictador y se mantiene en él hasta 1948; aun en **Guatemala** el proceso que en los primeros años de la década de 1930 consolida la dictadura del general Jorge Ubico no hace sino devolver a la política guatemalteca a su cauce más habitual, del que ha sido apartada en 1920 cuando el fin de la larga tiranía de Rafael Estrada Cabrera dio paso a una década de gobierno oligárquico. Al mismo tiempo es innegable que la dictadura de Ubico se afirma en un clima más sensibilizado que en el pasado a las potencialidades disruptivas del conflicto social, que amenaza adquirir dimensiones nuevas en la medida en que la sociedad guatemalteca comienza a tornarse más compleja, debido al avance de la ladinización y al crecimiento urbano, que da una gravitación nueva a sus clases populares y sobre todo medias. Frente a esa

amenaza la dictadura ofrece adecuados instrumentos represivos, pero también la posibilidad de manipular las tensiones creadas por esa complejidad creciente, que Ubico explota con considerable habilidad.

En **Costa Rica** ni una estructura social menos abruptamente desigual que en el resto de Centroamérica ni las altas tasas de alfabetización impiden que hacia 1930 la república oligárquica mantenga toda su pureza, pese a que en años recientes el surgimiento de un partido de corte populista y otro identificado con los intereses que dominan la economía cafetalera (ambos por otra parte claramente minoritarios) parecen anunciar el fin del liderazgo indisputado de los patricios esclarecidos. Aunque esas primeras organizaciones disidentes se revelan efímeras, el impacto de la crisis y el eco aquí más directo de la ideologización del conflicto político en ultramar dan lugar a tentativas protagonizadas por nuevos dirigentes de la clase política tradicional, que buscan redefinir los objetivos políticos de ésta. Si en 1936 el nuevo Partido Nacional Republicano parecía buscar inspiración en las nuevas derechas europeas, la iba finalmente a encontrar en un reformismo social que a partir de 1940 puso las bases del *welfare state* y contó con el apoyo del minoritario Partido Comunista, cuya base se encontraba sobre todo en la costa atlántica.

Mientras en Costa Rica la secuencia de depresión y rehabilitación de la economía exportadora se refleja primero en una pausa en el proceso de ampliación de la base social de la vida política y luego en su decidida aceleración, en un clima de relativa concordia, nada parecido se hallará en el resto de América Central; aquí la lenta rehabilitación de la economía exportadora agrava los conflictos potenciales en cuanto ofrece nuevo estímulo a la secular ofensiva de las haciendas contra la tierra y la fuerza de trabajo de los campesinos; ésta, que en Honduras aparece atenuada por la abundancia de tierras baldías, se hace sentir con mayor intensidad en Guatemala y sobre todo en El Salvador. No es sorprendente entonces que si mientras en Costa Rica no fue preciso reajuste alguno para

adaptar su vida política al marco de la segunda postguerra, la inminencia de ésta bastó para provocar la caída de Ubico y Hernández Martínez, en ambos casos por combinación de protestas que logran movilizar masivamente a la población urbana y retiro del apoyo militar, y aun en Honduras, de más letárgica vida política, ella pone en movimiento el proceso que rematará en 1948 con el traspaso del poder por Carias a un presidente surgido de las filas de su partido, que pone fin a su larga dictadura.

Nicaragua sufre también ella el impacto de la crisis económica y sus secuelas, pero su curso histórico está aún más decisivamente dominado por los avatares de la ocupación norteamericana y su herencia. Desde 1928 los Estados Unidos buscaron poner fin a aquélla de modo que no afectase la posición dominante que habían adquirido en Nicaragua; ese proyecto vino a frustrarse en parte debido a la negativa a deponer la resistencia de las fuerzas de Augusto César Sandino, jefe guerrillero que con bandera liberal estaba introduciendo en la vida política nicaragüense temas que evocaban los popularizados por la Revolución Mexicana. Esa resistencia no había cejado aún en 1933, cuando la ocupación fue finalmente abandonada, tras de la elección supervisada por el ocupante de un candidato liberal, frente al cual Sandino iba por fin a deponerla.

Pero, si el gobierno que surgía no quería ser el heredero de la intervención, ésta había dejado otro tan inequívoco como poderoso: la Guardia Nacional, organizada como fuerza auxiliar nativa al servicio de ella; el asesinato a traición de Sandino, organizado en 1934 por el jefe de esa fuerza, Anastasio Somoza, eliminó el último obstáculo a la consolidación de su poder, y desde entonces hasta su muerte Somoza iba a gobernar a Nicaragua, ya fuese directamente o por persona interpuesta. Nunca popular entre sus compatriotas, cuidó de conservar el apoyo de los Estados Unidos gracias a su constante docilidad a las orientaciones de Washington y devoción por los intereses económicos norteamericanos (que, pese a los contratiempos traídos por la depresión, intensificaron un

avance antes trabado por la larga inseguridad interna), y buscó ampliar sus bases locales asociándose con la elite liberal, a la que era ajeno por su origen, pero con la cual se enlazó por matrimonio y pronto por la participación común en empresas económicas a las que el favor del hombre fuerte aseguraba contra cualquier contratiempo.

Gracias a ello Somoza podía respetar aproximadamente las formas constitucionales (tarea facilitada porque elecciones sistemáticamente amañadas lo aseguraban contra la conquista de cargos electivos por quienes no mostrasen suficiente respeto por las conveniencias políticas o los intereses de un grupo gobernante que era a la vez, y cada vez más, un grupo de negocios) y a la vez presentar a un régimen que tenía muy escaso arraigo en el país como la expresión de una de las dos corrientes políticas dominantes en él. Se comprende que un régimen así definido haya desarrollado un interés sincero, ya que no desinteresado, por el avance de la economía, pero en este aspecto sus frutos sólo iban a poder medirse plenamente en la postguerra; hasta llegar a ella se habían reflejado en una rehabilitación nada espectacular de la economía cafetalera, facilitada en parte por una política de obras públicas que aquí se concentró en la construcción vial.

También en la **República Dominicana**, donde la ocupación norteamericana había cesado ya en 1924 y la Guardia Nacional por ella organizada había pasado desde entonces a ser ejército nacional, el jefe de éste, Rafael Leónidas Trujillo, tras de sumar al poder militar el político mediante el golpe de estado de 1930, organizó un régimen que extremaba rasgos presentes de modo más atenuado en el de Somoza. La República Dominicana no contaba con una tradición política que, como la nicaragüense, se estructurase en torno de las facciones históricas y sus luchas; en su pasado se habían sucedido etapas de desorganización y conflicto y otras de afirmación del poder personal de un caudillo; el más exitoso de éstos, Ulises Heureux, había tratado entre 1882 y su asesinato en 1899 de erigir un Estado a la vez despótico y moderno; era un proyecto de-

masiado costoso para la exangüe economía dominicana, y dejó como legado la abrumadora deuda externa que iba a abrir el camino a la intervención.

Trujillo retomó un proyecto análogo, con más fortuna y en condiciones más favorables. Bajo su égida el país se incorporó tardíamente al ciclo antillano del azúcar, al que fue introducido por grandes empresas productoras norteamericanas y por otras controladas por el propio Trujillo. Éste y su familia conquistaron rápidamente el dominio de la economía dominicana, más compartido con intereses norteamericanos que en Nicaragua (que tenía menos que ofrecer a éstos), pero más decididamente invasor de las áreas antes controladas por las clases propietarias locales, que sobrevivieron sin duda, pero debieron aceptar integrarse en el nuevo orden económico en términos aun más favorables a su todopoderoso socio y rival que sus pares nicaragüenses.

Del mismo modo que sobre la economía, el poder de Trujillo se afirmó en la vida política. Si en Nicaragua la dictadura personal se había disimulado en parte bajo una bandera partidaria tradicional, en la República Dominicana era exhibida orgullosamente como rasgo definidor de un régimen en que tanto el Estado como el partido oficial eran emanaciones de la personalidad del jefe de ambos. El desenfrenado culto de la personalidad (que se reflejó en el nuevo nombre de la capital, rebautizada Ciudad Trujillo, y de la segunda ciudad del país, agraciada con el de la madre de éste) era la base única de un proyecto de ambiciones totalitarias no apoyado por otra parte en ninguna ideología, y bajo cuya égida la República Dominicana se esforzó por atraer a algunos de los fugitivos del racismo alemán y luego de la represión de Franco, que encontraban entonces tan difícil hallar refugio en otras tierras.

Bajo esa égida se dio también la transformación vertiginosa de una economía y una sociedad marcadas desde tiempos coloniales por el estancamiento, y golpeadas desde hacía más de un siglo por una inestabilidad casi permanente; el Estado ponía lo suyo para ella mediante la construcción de una red vial

y la ampliación de sus actividades en el campo de instrucción y sanidad, que creaba por otra parte un nuevo instrumento para el dominio de la sociedad dominicana por el aparato político-militar creado y dominado por Trujillo. Gracias a los avances de la economía, la Dominicana volvió a hacerse atractiva a los campesinos de la vecina Haití, que sufrían de una crónica escasez de tierras agravada por el impacto allí puramente negativo de la crisis; cuando la presencia haitiana en los distritos del noroeste pareció amenazar el equilibrio étnico, el problema fue resuelto por Trujillo en un episodio que revelaba muy bien cuáles eran los resortes últimos de un poder que habitualmente prefería ejercerse de modo menos brutal: su solución fue en efecto una matanza que en 1937 eliminó a varios miles de esos inmigrantes excesivamente numerosos.

La linealidad del proceso dominicano no la vamos a encontrar en **Cuba**, donde la dictadura de Machado, herida de muerte por el fin de la abundancia de crédito externo que la había sostenido mientras el futuro se hacía cada vez más incierto para la economía azucarera, sólo terminó de morir en 1933; fue la combinación de una huelga general, prohijada por las clases propietarias tanto como por las organizaciones de trabajadores, y la presión de Washington, la que finalmente persuadió a Machado que su hora había pasado.

El poder fue ocupado por un gobierno colegiado presidido por el doctor Ramón Grau San Martín, catedrático que había sobresalido en la resistencia a la dictadura y en quien los estudiantes de la universidad de La Habana, que formaron el grueso de las fuerzas de choque de la oposición a Machado, veían corporizada la conciencia moral y política de la nación. Ese gobierno logró afirmarse gracias al apoyo del movimiento de suboficiales dirigidos por el sargento Batista, que habían arrebatado el control del ejército a los antiguos oficiales. Las elites dirigentes tradicionales veían por su parte con alarma el surgimiento de un régimen revolucionario que denunciaba el vínculo desigual con los Estados Unidos y anunciaba reformas sociales ra-

dicales; Sumner Welles, delegado personal del presidente Roosevelt, se opuso con éxito a que fuese reconocido por Washington, a la vez que esgrimía contra él la amenaza de la clausura del mercado norteamericano para el azúcar de Cuba; cuando los nuevos dueños del ejército advirtieron que la hostilidad metropolitana contra el régimen revolucionario era irrevocable, reemplazaron a sus aliados civiles por otros más dóciles, que reclutaron en la clase política tradicional. A partir de entonces Batista se constituyó, con el beneplácito de la potencia dominante, en poder detrás del trono, pero arrastraba a la vez una culpa inicial que ya no podría borrar: la de haber asesinado, con la complicidad de la metrópoli, una revolución que por un momento pareció encarnar esa esperanza de redención a la vez política y moral siempre tan vigorosa en la conciencia nacional cubana.

Tras de una primera etapa represiva, durante la cual contó con el total acuerdo de sus aliados de los partidos tradicionales, Batista buscó crearse una base propia mediante programas de acción social a cargo del ejército, concentrados en áreas rurales, que anticipaban y aun excedían las ambiciones de los de acción cívica que se hicieron frecuentes en el continente tres décadas más tarde.

A partir de 1937, sin abandonar del todo ese proyecto, pero advirtiendo que su costo político era más alto y sus réditos menos cuantiosos de lo que había esperado, buscó apoyos adicionales favoreciendo los esfuerzos del partido comunista por extender la sindicalización de los trabajadores, tanto en el puerto y otros sectores urbanos como en el del azúcar, y se orientó hacia una posición que, cobijándose en el ejemplo de Roosevelt, iba a definir como «algo a la izquierda del centro», reflejada por ejemplo en su abierta simpatía por la causa republicana durante la guerra civil española; esa reorientación culminó con la convocatoria a una asamblea constituyente controlada por el Partido Revolucionario Auténtico, cuyo jefe era Grau San Martín, y que en la constitución de 1940 fijó como objetivos la democracia política y la reforma social, con total bene-

plácito de Batista. Si hasta ahora éste se había limitado a menejar los hilos de la política cubana, creyó por fin llegada la hora de legitimar su posición en ella, como primer presidente elegido en el marco de la nueva constitución, con el activo apoyo comunista y el de los ya casi fantasmagóricos partidos tradicionales. En 1944, bajo fuerte presión norteamericana, toleró la victoria electoral que hizo de Ramón Grau San Martín, que nunca había depuesto su actitud opositora, su sucesor presidencial; como lo revela ese resultado electoral, si a lo largo de una década un instinto todavía infalible le había permitido navegar sin daño las agitadas aguas de la política cubana, no había logrado desarmar los recelos de la mayoría de sus compatriotas.

Lo que le permitió sobrevivir tan largamente a ellos no fue tan sólo ese aguzado instinto político, sino la posibilidad de utilizar para su ventaja la nueva política azucarera de los Estados Unidos. Ella sustituía la protección tarifaria, que había forzado a Cuba a reducir constantemente los precios, por un sistema de cuotas que abría el acceso a ese mercado a un volumen de azúcar fijado mediante negociaciones periódicas; esa solución, a la vez que aseguraba el futuro del sector azucarero en Cuba, lo condenaba al estancamiento, ya que no podía esperar ni alzas en el precio ni ampliación de la demanda. A partir de ahora la inversión norteamericana se desinteresó de un rubro tan poco prometedor, y aceleró el traspaso de la tierra de caña a intereses locales, ya comenzado en la década anterior (aun en cuanto a las centrales azucareras una tendencia análoga comenzó pronto a insinuarse). Ante la creciente indiferencia de ese influyente actor en el drama azucarero, el Estado pudo arrogarse el papel de árbitro en la distribución de los provechos de un sector que, aunque estancado, seguía dominando la economía cubana, y lo hizo atendiendo sobre todo a los efectos políticos de sus decisiones; mientras al abrir paso a la sindicalización promovida por organizadores comunistas mejoró la posición de los trabajadores de la caña y más aún de las usinas azucareras, buscó también proteger los intereses de

los colonos, grupo que incluía a todos los productores de caña para venta a las centrales, desde algunos dueños de vastos latifundios hasta la vasta masa de ínfimos arrendatarios; en cuanto a los industriales del azúcar, se limitó a evitar que esos reajustes barrieran por completo sus ya reducidos provechos.

En el sector urbano la posibilidad de sacar créditos políticos de decisiones económicas era más limitada; para conservar el acceso al mercado norteamericano para su azúcar, Cuba -se recordará- debió mantener abierto el suyo a las importaciones norteamericanas de bienes de consumo, y la alternativa ofrecida por el turismo y otros servicios menos confesables sólo iba a ser desarrollada en pleno luego de la segunda guerra. Mientras el *boom* azucarero inducido por ésta devolvía una efímera prosperidad a las zonas productoras, se agravaba la situación de los consumidores urbanos, cada vez peor atendidos por una economía metropolitana orientada hacia la producción de guerra. La ausencia de una auténtica prosperidad urbana, inevitable en esas circunstancias, permite quizá entender mejor por qué el virtuosismo de Batista en el manejo político del proceso económico-social no iba a ser finalmente capaz de atraerle un séquito electoral suficiente para sobrevivir con éxito en el clima político de la postguerra.

Éste iba a poner también a prueba las situaciones dominantes en otros países que hasta entonces habían seguido un curso igualmente atípico. En **Venezuela**, que pudo capear la crisis económica gracias a una ininterrumpida bonanza petrolera, el primer anuncio del fin de la estabilidad impuesta por la dictadura de Gómez fue la muerte de éste en 1935. Si para entonces las resistencias localistas y regionalistas, y las de los caudillos menores que habían buscado apoyarse en ellas, habían sido eliminadas para siempre, había a la vez comenzado a surgir una disidencia nueva, que tuvo su primera expresión en la protesta estudiantil de 1929; los herederos del desaparecido dictador buscaron in-

troducir los reajustes necesarios para canalizar estos fermentos renovadores.

Así, si bien las elecciones seguían estando sistemáticamente falseadas por el fraude y la manipulación de sus resultados, durante la administración del general López Contreras y más aun en la de su sucesor, el general Medina Angarita, los venezolanos vieron gradualmente restituida su libertad de expresión, y mientras el comunismo, antes salvajemente reprimido, pudo lanzar una exitosa campaña de sindicalización en un clima de entendimiento primero implícito y luego declarado con el régimen, aun otra oposición más temida por éste, la del Partido Democrático Nacional constituido por disidentes del comunismo y luego rebautizado Acción Democrática de Venezuela, pudo organizarse legalmente.

Cuando se hizo evidente que las jerarquías militares se disponían a imponer a López Contreras, contrario a la aceleración impresa por Medina Angarita al proceso de apertura, como sucesor de éste, la transición gradual que amenazaba así interrumpirse abrió paso a una salida violenta; en octubre de 1945 un exitoso golpe organizado por oficiales jóvenes entregó el poder a una junta cívico-militar presidida por Rómulo Betancourt, jefe de Acción Democrática; de él esperaban sus favorecedores militares que pusiese su experiencia y talentos políticos al servicio de los objetivos de ese nuevo sector del cuerpo de oficiales, interesado sobre todo en desplazar a los veteranos llegados a comienzos del siglo de los estados andinos en pos de Castro y Gómez, y controlar de cerca la modernización de la vida venezolana que juzgaban ya impostergable. Era un cálculo errado, y por el contrario iba a ser en Venezuela donde se intentaría llevar más lejos el proyecto de democratización política y movilización social tan característico de ese momento latinoamericano.

El rumbo de otros dos países que tenían por otra parte muy poco en común iba a ser afectado decisivamente por la guerra en que se trabaron. En 1932 el gobierno de Bolivia decidió transfor-



mar los choques que desde 1928 se habían tornado crónicos en la frontera con Paraguay en una guerra formal, en la que esperaba obtener una fácil victoria, cuyo botín debía ser el Chaco Paraguayo, que le daría acceso al sistema de navegación fluvial del Plata. Esa esperanza iba a ser cruelmente decepcionada; la contraofensiva paraguaya, tras de retomar los fuertes fronterizos tomados por sorpresa en el ataque boliviano, marchó de victoria en victoria hasta alcanzar en 1935 los contrafuertes andinos, frente a los cuales se detuvo; las negociaciones de paz comenzaron bien pronto, pero iban a ser prolongadas y arduas.

La inesperada victoria en una guerra que no había buscado contribuyó menos a consolidar al régimen liberal que gobernaba **Paraguay** que a aumentar la gravitación en la vida nacional de los jefes militares bajo cuya dirección había sido alcanzada. Cuando se hizo evidente que la paz no iba a dar a Paraguay todo el territorio conquistado por sus armas, una revolución liderada por oficiales de segunda fila puso en el poder al coronel Rafael Franco, pronto rodeado de figuras impacientes por acelerar el ritmo de avance socio-económico, que recogían su inspiración de fuentes que iban desde la Alemania hitleriana hasta la Rusia soviética. Ese anuncio de cambios radicales provocó esperanzadas expectativas, pero la revolución de febrero vino a tropezar con un escollo inesperado al revelarse tan incapaz de obtener un tratado de paz que cosechase todos los frutos de la victoria como el régimen que había derribado; en agosto de 1939 el ejército que había instalado en el poder le ponía fin, y abría paso a la restauración liberal, consumada en 1939 al llegar a la presidencia el general Estigarribia, popularísimo artífice de la victoria; ya para entonces Paraguay se había allanado a términos de paz muy cercanos a los que habían provocado la caída de dos regímenes.

Pero esa restauración innovaba más de lo que restauraba, y no principalmente porque la constitución de 1940 recogiese los motivos sociales de la revolución febrerista e instituyese además un consejo de estado de corte corporativo; más im-

portante era que ella ofrecía marco institucional ya no al predominio de una oligarquía civil, sino al del ejército. Cuando en 1941 murió Estigarribia en un accidente aéreo, su sucesor, el general Higinio Morínigo, poco deseoso de compartir el poder con los liberales, los reemplazó como aliados con sus rivales colorados, acorralados desde hacía décadas en una incómoda oposición y por lo tanto de ambiciones mucho más modestas; de hecho éstos vinieron a ofrecer el personal auxiliar para su dictadura personal, apoyada sobre todo en el consentimiento del ejército, pero no parecía probable que esa solución aún mal consolidada sobreviviese sin daño en el clima poco favorable de la postguerra.

No fue sólo la distancia entre la victoria y la derrota la que hizo que el proceso desencadenado por la guerra fuese en **Bolivia** más removedor que en Paraguay. Cuando el presidente Salamanca decidió lanzar a su país al conflicto, esperaba encontrar en él un diversivo para una situación que aparecía de otro modo irremisiblemente bloqueada. Es que la crisis de 1929 reveló bruscamente las consecuencias del gradual deterioro de Bolivia en el mercado del estaño, en que se mantenía ya sólo como productora marginal. Cuando la depresión redujo demanda y precios, los productores menores se vieron arruinados y los mayores (en particular Patiño, que dominaba también las plantas purificadoras ultramarinas y las nuevas fuentes asiáticas del mineral) buscaron sobrevivir reduciendo el peso de los salarios y otras transferencias al Estado y la economía boliviana; ésta había perdido así su tan insuficiente centro dinámico, y el orden oligárquico que había sido su correlato político su razón de ser.

El desastre militar tornó más dramática la toma de conciencia de esa situación, al revelar descarnadamente las insuficiencias de las elites civiles y militares bolivianas; la lección fue ávidamente asimilada tanto por los jóvenes de las descontentas clases medias, que sirvieron como oficiales en el ejército ampliado para la guerra, como por no pocos de los inte-

grantes del ejército regular. Así, cuando en 1936 un golpe completó la absorción del poder político por el militar, él se dio bajo el signo de lo que dio en llamar «socialismo militar», y bajo su égida comenzó una etapa de febril discusión de reformas socioeconómicas bajo inspiraciones que, como en el Paraguay, recorrían toda la discordante gama de innovaciones ideológicas que la convulsionada Europa de ese momento podía ofrecer, y cuya consecuencia más tangible fue la nacionalización de los pozos petroleros. Esa medida fue ofrecida por el general Toro (un versátil veterano de la política boliviana más tradicional, que resurgió como jefe del régimen revolucionario), como prenda de la seriedad de sus propósitos, pero, aunque contribuyó a la popularidad del gobierno militar, no evitó su derrocamiento por sus camaradas, quienes lo reemplazaron por el coronel Busch, representante más auténtico de la generación militar madurada en la guerra.

En 1938 Busch convocó una constituyente en que las fuerzas tradicionales obtuvieron mínima representación y entre las nuevas vinieron a predominar las de izquierda; la asamblea redactó una constitución más convencional de lo que el lenguaje preferido en sus debates hubiese autorizado a esperar; ella recogía los temas sociales considerados de rigor por las del siglo XX, pero se guardaba de innovar en los que tocaban más de cerca la realidad boliviana. Ya para entonces Busch se había desencantado de la experiencia que capitaneaba; en continua oscilación entre la adhesión al reformismo revolucionario (reflejada en la promulgación de una ley de trabajo), la promoción de una purificación de la vida boliviana, y el retorno al viejo orden con el apoyo de las maltrechas fuerzas políticas tradicionales, suspendió la vigencia de la constitución, rompió sucesivamente con la izquierda y con la derecha y concluyó suicidándose en 1939.

A su suicidio siguió una reorientación militar favorable a las fuerzas tradicionales, consagrada en el marco de la constitución de 1938 (que mantenía a los analfabetos apartados de las listas electorales, creando así una base electoral restringi-

da a los muy minoritarios niveles altos y medios del sector hispanizado) por la elección del general Peñaranda con el apoyo de una coalición de esas fuerzas.

Pero si hasta este punto el proceso boliviano parece avanzar sobre líneas paralelas al paraguayo, esa apariencia es engañosa; la intensidad de la crisis económica y la pérdida de legitimidad infligida a la elite dirigente civil y militar por la derrota en una guerra que ella había buscado y querido, quitan solidez a esa solución restauradora. Y por otra parte dentro de la sociedad boliviana hay no sólo descontento, sino una disidencia cada vez más desafiante frente al orden establecido, que se expresaba políticamente en el avance del partido comunista, que encontraba expresión electoral en un Frente de Izquierda y cuya base en las ciudades excedía la de los sindicatos sometidos a su influencia, como se reveló cuando su candidato obtuvo cerca del 20 por 100 de los votos en la elección que dio la victoria a Peñaranda, y en el del trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR), influyente en la cuenca del estaño; por su parte el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), creado en 1942 por la fusión de varias corrientes menores, unía eclécticamente inspiraciones cercanas a las del aprismo con otras más ortodoxamente marxistas y todavía con algunas del hitlerismo alemán; aunque gracias al prestigio profesional y literario y al talento periodístico de sus dirigentes gozaba en las clases medias de simpatías muy vastas aunque difusas, no había reclutado a un séquito militante comparable al del comunismo.

La coyuntura de guerra fue dura con Bolivia, y la oposición acusó al régimen restaurado de agravarla con su renuncia a imponer precios de monopolio al estaño del que Bolivia se había trasformado en única proveedora de las Naciones Unidas, como consecuencia de las victorias japonesas en Asia. Pronto iba a poder acusarla de imponer a sangre y fuego la explotación de los trabajadores de las minas que era consecuencia de esa política de precios bajos; en 1942 la respuesta del régimen a la huelga del estaño fue la memorable masacre de Catavi...

En 1943 ese régimen sucumbía a un nuevo golpe militar, que llevó al poder al mayor Gualberto Villarroel, quien llamó a dirigentes del MNR a participar en su gabinete y favoreció los avances del POR en las cuencas mineras; el comunismo, ahora rebautizado Partido de Izquierda Revolucionaria, que se había manifestado dispuesto a ingresar en el gabinete e interceder en favor del nuevo régimen ante el gobierno de Washington, que lo sospechaba de germanofilia, vio rechazada su colaboración por un veto militar que los dirigentes del MNR no pudieron remover.

La gestión del régimen militar iba a ser muy poco exitosa. Sospechoso en Washington, debía ofrecer como prenda de su buena fe democrática el mantenimiento de la misma política de precios que había presentado como antinacional y antipopular; ello imponía a sus iniciativas límites financieros todavía estrechados por las normas rígidamente antiinflacionarias adoptadas por el jefe del MNR, Víctor Paz Estenssoro, como ministro de Hacienda. La revolución sólo podía satisfacer sus promesas de redención social mediante innovaciones esencialmente simbólicas; hasta qué punto ellas eran insuficientes se reveló cuando en las elecciones para una asamblea constituyente, convocadas una vez más bajo la ley electoral heredada del régimen oligárquico, el comunista PIR obtuvo un apoyo mucho más amplio de lo esperado. A ello reaccionó el gobierno de Villarroel (que había eliminado del gabinete, a indicación de Washington, a los ministros del MNR) con el asesinato de algunos de los dirigentes que se habían revelado excesivamente populares, y la persecución de sus secuaces. Esos métodos hicieron muy poco por devolver al régimen la popularidad que la creciente penuria y el agravamiento de la inflación seguía socavando; pero ello no impidió que reincidiera en ellos, esta vez contra las fuerzas oligárquicas, mediante la ejecución en masa de algunos de sus dirigentes más connotados. Ello provocó la reconciliación entre esas fuerzas y la izquierda comunista, con la cual –pese al común apoyo a la causa de las Naciones Unidas– aquéllas habían permanecido

duramente enfrentadas hasta la instauración del nuevo régimen militar, y una agitación conjunta que en julio de 1946 culminó en una huelga y un vasto tumulto en La Paz, en cuyo curso Villarroel fue asesinado por la muchedumbre. La experiencia dejaba a las fuerzas renovadoras amargamente divididas; mientras el MNR y la dirigencia minera, que bajo la jefatura de Juan Lechín se había constituido ya de hecho en ala izquierda de aquél, aunque sin abandonar aun formalmente su identificación con el trostskismo, se preparaban a afrontar el destino de los vencidos, el comunismo esperaba cosechar los frutos de su victoria y transformase en expresión hegemónica de las fuerzas renovadoras bolivianas.

Así, en toda Latinoamérica los regímenes en el poder, las oposiciones que los combatían, las fuerzas nacientes que desde los márgenes acechaban su oportunidad, coincidían en la convicción de que la segunda postguerra abría una etapa radicalmente nueva, en que serían también nuevas las reglas del juego político y nuevo el contexto en que las naciones latinoamericanas deberían seguir buscando un lugar para sus economías en un orden mundial que no era seguro que hubiese dejado atrás la etapa de arrasadoras turbulencias abierta en 1929, pero no podría sino ser decisivamente influido por el retorno de la paz.

2. *En busca de un lugar en el mundo de postguerra (1945-1960)*

Pronto iba a advertirse que, si era cierto que un orden nuevo comenzaba a emerger de las ruinas dejadas por la crisis de la guerra, los rasgos de ese orden no eran necesariamente los previstos desde que comenzó a vislumbrarse el desenlace de esa larga tormenta. Así ocurrió ante todo en cuanto a la economía mundial, que luego de una reconstrucción más breve y menos trabajosa de lo que se había temido, iba a alcanzar en veinticinco años cimas que en 1945 hubiesen parecido totalmente impensables.

Pero ya durante los años difíciles que precedieron a ese avasallador avance de la economía de los países centrales ésta presentó rasgos que, aunque retrospectivamente tienen muy poco de sorprendente, no habían sido previstos por quienes en 1945 disputaban desde la cumbre del poder político o económico de las naciones latinoamericanas acerca del rumbo que cada una de ellas debía tomar ante la nueva coyuntura abierto con el retorno de la paz. Todos ellos coincidían explícita o implícitamente en creer que el giro favorable que en líneas generales la guerra había impreso a las economías latinoamericanas iba a mantenerse y consolidarse en la postguerra; los persuadía de ello el espectáculo de un viejo mundo reabierto al tráfico internacional y necesitado de todo lo que Latinoamérica podía aportar, desde alimentos hasta materiales para la reconstrucción y materias primas para la industria; el recuerdo de la anterior postguerra los convencía además de que, por exitosa que fuese esa reconstrucción, ella no sería capaz de imprimir a las economías industriales el dinamismo suficiente para absorber la mayor parte de su propia producción para el consumo, y que por lo tanto –como había ocurrido hasta 1929– la necesidad de encontrar desemboque para ella en la periferia ayudaría a mantener el ritmo de las exportaciones de ésta una vez cerrada la etapa de reconstrucción.

Dada esa compartida confianza en el futuro, las disidencias se daban sobre todo en torno al mejor modo de utilizar sus oportunidades, pero lo que las tornaba explosivas era que cada uno de esos modos tenía por corolario una diferente distribución de los provechos derivados de ellas. Aunque las variaciones eran desde luego muchas, las alternativas fundamentales que venían a oponerse en esos debates eran dos: la primera y más obvia la continuación del proceso industrializador favorecido por la crisis y todavía más por la guerra. Se ha visto ya que las naciones grandes y medias, y aun algunas de las menores de Latinoamérica llegaban a la hora de la paz con un sector industrial a la vez vertiginosamente expandido y muy frágil, ya que esa expansión se había dado bajo la protección del aisla-

miento de guerra, que le permitió prosperar con un nivel tecnológico muy bajo. Ahora se daba una oportunidad de corregir esas fallas y seguir avanzando sobre bases más sólidas; para ello se contaba con los saldos acumulados gracias al superávit comercial de tiempo de guerra, y, según se esperaba, con la prosperidad futura del sector exportador, asegurada por la acrecida demanda de una Europa en reconstrucción.

Esta solución requería que los fondos creados por el sector primario-exportador fuesen transferidos al industrial, y era éste precisamente el punto en torno al cual iba a estallar la discordia. Porque contra esa solución cabía alegar que la innovación traída por la guerra, y que todos esperaban se mantendría en la postguerra, no era sino el retorno de Latinoamérica al lugar en el orden económico mundial que había sido el suyo hasta 1914 y quizá hasta 1929; la industrialización había sido una solución de emergencia impuesta por las perturbaciones introducidas en el comercio mundial por la crisis y el aislamiento de guerra; vuelta la normalidad recuperaban toda su fuerza las ventajas comparativas que en Latinoamérica favorecían al sector primario; un argumento suplementario alegaba también que, si las predicciones universalmente compartidas que anticipaban una prosperidad prolongada del sector exportador se revelaban erradas, podía confiarse plenamente en que los intereses que lo controlaban se orientarían espontáneamente a la actividad industrial, que les aseguraría en ese caso mejores lucros.

De este modo el sorprendente consenso que durante la crisis había acompañado a innovaciones tan radicales como el avance dramático del Estado en el gobierno de la economía, y la industrialización que se desarrolló bajo su égida, es reemplazado por un disenso profundo, y este cambio no afecta tan sólo al debate técnico o ideológico en torno al manejo de la economía, sino también al proceso político-social: en efecto, a la vez que una distribución de lucros, lo que está en juego es el perfil futuro de las sociedades latinoamericanas y la distribución dentro de ellas del poder político.

Y los adversarios que se oponen en esa confrontación son ambos poderosos; si la primera alternativa tiene el apoyo de todos cuantos deben directa o indirectamente su lugar en la economía a la industrialización, un grupo sin duda ya predominante en todas las áreas económicamente más avanzadas y por eso mismo políticamente más influyentes, la segunda –a más de contar en cada nación con el apoyo de sectores sin duda menos numerosos, pero más acostumbrados a ser escuchados– se presenta además como corolario de los principios favorables a la restauración de la unidad del sistema mercantil y financiero mundial mediante la liberalización de los principios que los rigen, que –impulsada con energía por los Estados Unidos, cuya hegemonía económica, completada por la guerra, viene a institucionalizar, y aceptada, aunque con menos entusiasmo, por una Europa que no puede prescindir del apoyo económico norteamericano– se transforma en la nueva ortodoxia de esos influyentes interlocutores económicos de América latina.

La presencia de una solución alternativa que goza de apoyos internos y externos nada desdeñables influye no sólo en el contexto político en que siguen avanzando los proyectos industrializadores, sino también en las modalidades socioeconómicas de éstos. Puesto que lo que le permite prevalecer sobre la solución rival es el apoyo con que cuenta en franjas de la sociedad que van mucho más allá del grupo empresario industrial, el proyecto industrializador sólo es viable en el marco de un conjunto más amplio de soluciones político-sociales necesarias para retener ese apoyo más generalizado. Así, la industrialización debe avanzar manteniendo el entendimiento con la clase obrera industrial (lo que requiere moderar la explotación de la fuerza de trabajo, frente tradicional de acumulación e inversión en etapas de industrialización incipiente) pero también con las clases populares urbanas en cuanto consumidoras, que hace a su vez necesaria la protección de sus ingresos reales y la ampliación de sus fuentes de trabajo más allá de lo que el crecimiento industrial puede asegurar por sí solo;

estos objetivos se cubrirán en parte por la iniciativa del Estado, que no se limitará por cierto a atenderlos, sino extenderá sus actividades a campos muy variados de previsión y servicio social con vistas a mantener la lealtad de las mayorías electorales, ella misma imprescindible para asegurar la continuidad del proyecto industrializador.

Éste nace así con una carga abrumadora de precondiciones necesarias para asegurar su viabilidad política, de la que desde luego depende su supervivencia. No es sorprendente entonces que la lucha cotidiana por esa supervivencia haya exigido un esfuerzo demasiado absorbente para que fuese posible conceder atención prioritaria a la actualización tecnológica que, como todos habían convenido en 1945, era la única que podía asegurarla a largo plazo.

Ya el primer contacto con las realidades de la postguerra había revelado, por otra parte, que esa actualización excedía las posibilidades inmediatas de las naciones latinoamericanas. No se trataba tan sólo de que, para atenuar la ineficiencia del sector industrial, no bastaba modernizar su tecnología, y se hacían también urgentes vastas inversiones de infraestructura, desde caminos hasta fuentes de energía, mientras no podían postergarse tampoco indefinidamente las demandadas por las insuficiencias acumuladas en otros sectores, desde la vivienda a las comunicaciones. Más grave era que ese programa, mucho más amplio y oneroso de lo que se había gustado imaginar, debía ser afrontado por una Latinoamérica que se descubría en posición menos holgada de lo que había creído en 1945.

Sin duda las necesidades de la reconstrucción europea incidían positivamente en la demanda de los países industriales, pero también afectaban de modo menos positivo a su oferta; mientras la ya clara tendencia al alza de precios de los productos industriales invitaba a invertir rápidamente las reservas acumuladas durante la guerra, buena parte de los bienes que Latinoamérica aspiraba a importar eran canalizados prioritariamente hacia Europa. Se hizo así preciso destinar parte con-

siderable de los fondos derivados de exportaciones viejas y nuevas a nacionalizar empresas y repatriar la deuda pública, y una parte igualmente considerable del resto a importaciones sólo aceptadas porque los países exportadores (todavía esencialmente limitados a Gran Bretaña y los Estados Unidos) no podían o no querían proveer las que en Latinoamérica eran consideradas más urgentes.

Sin que mediara entonces una decisión explícita, las naciones latinoamericanas fueron paulatinamente renunciando a encarar prioritariamente la modernización económica que había sido su primer objetivo para la postguerra, y se fijaron en cambio el sólo aparentemente más modesto de asegurar la supervivencia de una industria incurablemente primitiva, mediante transferencias de recursos entre sectores impuestas a través de la manipulación monetaria.

Al mantener alto el valor de la moneda nacional en divisas extranjeras, a la vez que se disminuían los ingresos de los exportadores, se aseguraban importaciones baratas; el control mantenido sobre éstas aseguraba que ellas no vendrían a competir con la industria nacional, sino por el contrario a proporcionarle los insumos que necesitaba. Pero esta solución, que no deja de tener algo en común con la practicada en México, en cuanto arroja una parte desproporcionada del costo del proceso de urbanización e industrialización sobre el sector primario, es menos fácil de implantar porque los terratenientes nacionales, empresas mineras internacionales y compañías de transportes y comercio a los que golpea no comparten la resignada pasividad de los ejidatarios mexicanos; si sólo ocasionalmente logran dar expresión políticamente eficaz a su protesta (pero no deja de ser sugestivo por ejemplo que la dictadura militar que en 1948 reemplaza en el poder en Perú a un gobierno popularmente elegido incluye entre sus primeras decisiones una devaluación drástica de la moneda peruana), responden con un estancamiento y aun baja de la producción que, sumados al fin más rápido de lo esperado del *boom* de exportaciones de postguerra y de su breve

resurrección en la estela de la crisis coreana, ya a mediados de la década de 1950 conducen al agotamiento de esta solución económica, y amenazan la supervivencia de las soluciones políticas que se han identificado con ella.

Este agotamiento se reconoce en dos signos alarmantes. Uno es una inflación que tiende a acelerarse, en la medida en que se busca en ella, a la vez que los recursos fiscales que la manipulación del comercio provee cada vez menos, un modo de posponer o disimular los reajustes que el funcionamiento cada vez más defectuoso de ese esquema impone; el otro es un desequilibrio creciente de la balanza comercial, debido sobre todo a la languidez de las exportaciones; uno y otro síntoma tienden a reforzarse mutuamente, en cuanto la solución al segundo problema es –por odioso que resulte admitirlo– la devaluación, y la inflación viene a corregir las consecuencias negativas de ésta sobre los asalariados y consumidores, pero a la vez corroe las positivas, hasta tal punto que hace pronto necesaria una nueva devaluación...

Se comprende que el temple con el cual la opinión latinoamericana contempla el avance económico-social del subcontinente haya pasado ya antes de llegar a este punto de la esperanza a la inquietud. Esa evolución se vio a la vez reflejada y sostenida por la de una figura y un grupo que se habían fijado por tarea crear una conciencia colectiva de los problemas económicos que afrontaba Latinoamérica, mediante un análisis persuasivo de los mecanismos que los perpetuaban, y a la vez hacerse voceros de esa nueva conciencia en el foro mundial; se trata desde luego de Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América latina por él organizada en el marco de las Naciones Unidas.

Este economista argentino que aseguraba que, como gerente del Banco Central creado en su país en 1935, había hecho política keynesiana sin saberlo, proclamaba ahora que las soluciones keynesianas, adecuadas para salvar del marasmo a economías maduras, eran irrevelantes para una Latinoamérica cuya tarea era alcanzar esa madurez, y afrontaba para ello

dificultades crecientes. Sólo desentrañando la causa de éstas sería posible superarlas, y Prebisch las busca examinando las consecuencias de la posición periférica que Latinoamérica ocupa en una economía mundial dominada por un centro industrial cada vez más poderoso, que ve reflejadas en la baja secular de sus términos de intercambio. No es sólo que en ese centro la fuerza de trabajo puede imponer un alto nivel de salarios que se refleja en el de los precios de los productos industriales, mientras en la periferia una mano de obra acrecida por la explosión demográfica debe conformarse con salarios ínfimos; por añadidura el dominio del centro industrial sobre los mecanismos que gobiernan el transporte y las finanzas internacionales amplía las consecuencias de esas desventajas y hace más difícil cualquier esfuerzo por atenuarlas.

La solución no ha de hallarse en un ataque frontal contra esa relación desigual, demasiado arraigada para ser vulnerable a esa táctica, sino en escapar a ella mediante una industrialización más intensa, que al avanzar en un frente más amplio de lo que hasta entonces había ocurrido, cree una economía nacional no sólo acrecida en volumen y complejidad sino dotada de una madurez comparable a las de los países centrales. ¿Cómo conseguirlo? He aquí un problema que Prebisch plantea pero no resuelve, y aunque aun en ausencia de esa respuesta su visión de la encrucijada en que se encuentra el subcontinente logra dominar sin esfuerzo una etapa decisiva en la redefinición de la problemática latinoamericana, no es sorprendente que esa ausencia facilite una utilización política de su análisis que respeta muy poco de su sentido originario.

En efecto, cuando las fuerzas políticas que se han afirmado junto con el proceso de industrialización, u otras que aspiran a heredarlas, declaran la necesidad de un nuevo avance que no se limite a ampliar el abanico de actividades de la economía nacional, sino la eleve a una mayor madurez, esa revindicación que usa el lenguaje de Prebisch se ofrece como justificativo a un nuevo avance sobre las líneas que éste proclamaba insuficientes. Sin duda la expansión de las industrias básicas,

comenzando con la siderurgia abordada por México desde antiguo, por Brasil durante la guerra y por Argentina en la inmediata postguerra, se continúa y en algunos casos se acelera, pero sus avances no tienen aún nada de espectacular, y en el núcleo de la propuesta que se llamará desarrollista se encuentra en cambio el ensanchamiento del sector industrial que produce bienes de consumo duraderos, y en particular de la industria del automóvil, mediante la instalación de ramas locales de empresas productoras norteamericanas y europeas (todavía no japonesas). Aunque la nueva industria cubre también otros rubros (que incluyen algunos bienes de capital, como tractores y material ferroviario, pero sobre todo se orientan a satisfacer las nuevas demandas que el modelo de la sociedad de consumo ha suscitado, por ejemplo en cuanto a aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar), parece adecuado examinar las modalidades de su implantación a través del sector automotor que predominaba en ella, en el cual se perfilan con particular claridad las modalidades específicas de esta nueva etapa de industrialización.

Como promesa de una salida rápida para una encrucijada difícil, la solución que el desarrollismo hizo suya tenía mucho en su favor: al aliviar el peso que la industrialización había arrojado sobre un sector primario ya clamorosamente incapaz de seguir soportándolo, daba nuevo aliento a una expansión industrial que parecía haber perdido sus resortes dinámicos; a la vez comenzaba a atenuar carencias que, desatendidas por lo menos desde 1939, se agravaban constantemente, y que eran cada vez más cruelmente percibidas como tales gracias al contraste cada vez más extremo con la impetuosa expansión del consumo en los países centrales.

Todo eso lo lograba mediante una apertura parcial de la economía nacional a la inversión extranjera. Ésta había tenido hasta ese punto papel limitado en la industrialización latinoamericana posterior a la crisis; ello fue así primero debido a las crisis misma, que había disminuido la disponibilidad de capitales metropolitanos para inversión, y luego como conse-

cuencia de la guerra. En la postguerra esa situación sólo vino a corregirse paulatinamente, y ya para entonces las dificultades de balanza de pagos de las economías latinoamericanas, y las que ellas creaban en cuanto a la remisión de ganancias de las empresas extranjeras establecidas allí, hacían de la mayor parte de Latinoamérica un campo poco atractivo para nuevas inversiones. Si pese a ello fue posible a las naciones mayores (no sólo México, que mantenía una excepcional salud monetaria, sino Brasil y Argentina) y luego a algunas medianas, como Chile y Perú, atraer a las empresas cuyo ingreso iba a abrir una nueva etapa en la industrialización latinoamericana, fue porque desde el punto de vista de esas empresas las inversiones requeridas para ello eran menos cuantiosas de lo que parecían a los países que las recibían.

Esas inversiones eran sobre todo de maquinarias que en la mayor parte de los casos habían sido ya abundantemente utilizadas en el país de origen, y cuyo reemplazo era inminente, ya sea para recortar costos de producción, ya para ofrecer un producto final dotado del atractivo de la novedad, a la cual la naciente sociedad de consumo rendía un culto cada vez más exigente; las inversiones adicionales que iban haciéndose necesarias eran a menudo cubiertas mediante el recurso al capital y al crédito locales (incluido en este último el de los compradores, captado a través de ingeniosos esquemas de venta anticipada). Todas esas ventajas, y la aún más importante que derivaba de vender a precios hasta tal punto más altos que los corrientes en el centro industrializado que aun con mayores costos era posible obtener ganancias muy considerables, no eran sino otras tantas consecuencias de que, al abrir su filial en un país latinoamericano, la firma había ganado acceso a un mercado cerrado, en el cual podía dictar sus propios términos.

Una apertura a la inversión extranjera así concebida no anuncia necesariamente la apertura generalizada de la economía, puesto que su éxito depende del mantenimiento de un estricto control de las importaciones. Pero en otro aspecto sí parece requerir alguna liberalización: la empresa inversora

aspira a disponer libremente de sus ganancias, y ello supone la posibilidad de transferirlas a divisas fuertes, mientras los países receptores, que sufren agudos desequilibrios en su balanza de pagos, prefieren mantener un estricto control de divisas demasiado escasas, y gustarían de orientarlas a otros fines que juzgan más urgentes. El conflicto de intereses será sin embargo habitualmente resuelto mediante una transacción que autoriza a las empresas a repatriar un porcentaje contractualmente establecido de sus ganancias, en el marco del sistema de control del cambio extranjero que ha venido erigiéndose a partir de la crisis.

Se halla así el punto de convergencia que hizo posible insertar en economías que amenazaban estancarse un nuevo sector que se esperaba dotado de dinamismo suficiente para devolverlas su antiguo vigor. Esa novedad suponía mucho más que una ampliación del sector industrial; traía consigo una diferenciación dentro de éste, cuya consecuencia era que el impacto social de la nueva oleada industrializadora se iba a revelar en muchos aspectos diferente del de la etapa previa.

Ello ocurre así en cuanto a su capacidad de crear empleo, que resultaba ahora mucho más limitada; las nuevas industrias se insertan en ramas en que la productividad del trabajo es más alta que en las ya establecidas; su presencia ensancha las filas de la clase obrera más calificada y mejor pagada, pero contribuye mucho menos significativamente a ampliar la demanda total de mano de obra industrial. Si esa nueva industria hace sentir su peso positivo sólo en los niveles más altos del mundo del trabajo, su producción se vuelca a su vez preferiblemente sobre los sectores más altos de la sociedad en su conjunto. La industria textil, la química o la farmacéutica, dominantes en la primera oleada industrializadora, habían comenzado por concentrarse en productos de bajos requerimientos de calidad o cuya producción no demandaba demasiado costosa tecnología; su prosperidad dependía del acceso a un público que se aproximaba a identificarse con la sociedad entera, y se concentraba en sus sectores más populares; aun la

primera etapa de la industria eléctrica no se alejaba demasiado de esa pauta originaria; y todavía a comienzos de la década de 1950 el ingreso de Argentina en la era del automóvil fue precedido por la introducción del *moto-scooter*, orientado todavía a un mercado masivo, ya que se proponía ofrecer a las grandes masas urbanas una alternativa a un sistema de transporte público cercano en ese momento al colapso.

Pronto la situación iba a revertirse; puesto que la nueva industria producía a precios notablemente más altos que en los países del centro y debía satisfacer la demanda de una población de ingresos más bajos y más desigualmente distribuidos que en esos países, ella encontraba necesariamente su mercado en la cumbre y ya no en la vasta base de la sociedad nacional. En consecuencia, mientras la industria tradicional tiene razones no sólo políticas sino económicas para aceptar encuadrarse en un esquema industrializador que mantenía constante atención a los intereses de los trabajadores y asalariados, esas razones económicas han perdido vigencia para la nueva industria. Pero es difícil medir la incidencia concreta de esa novedad en el curso del proceso político y social latinoamericano, sobre todo porque mientras la nueva industria, que se desinteresa de la salud del mercado de consumo ofrecido por los sectores populares, paga salarios satisfactorios, la tradicional, que depende más de ese mercado pero no recupera su pasada prosperidad, descubre que está cada vez menos en condiciones de hacerlo.

Pero esa reorientación de la demanda hacia los sectores más altos tiene otra consecuencia mucho más directamente tangible: ella crea mercados mucho más estrechos para industrias cuya tecnología les fija un volumen mínimo de producción por debajo del cual sencillamente no son ya viables. La consecuencia es que serán menos las naciones que ingresarán en esa nueva etapa; sólo Brasil y menos sólidamente México serán capaces de afirmarse en ella para avanzar aún más allá en el camino de la madurez económica; en cambio Argentina encontrará difícil mantenerse en ese nuevo nivel de industria-

lización e imposible superarlo, y en Chile y Perú la tentativa de alcanzarlo no será más que un incidente sin consecuencias significativas para la economía en su conjunto.

Si no es riesgoso profetizar que las consecuencias de largo plazo de esta novedad están destinadas a torcer decisivamente el rumbo de la historia latinoamericana, ellas sólo paulatinamente comienzan a revelarse en toda su amplitud; más pronto se hicieron sentir en cambio las de otras modalidades de este nuevo estilo de industrialización. La más decisiva de todas es que ésta no avanza sustituyendo importaciones, que para los rubros en que se concentra han sido interrumpidas ya hace décadas; en consecuencia su implantación no corrige el desequilibrio externo, sino tiende a acentuarlo. Sin duda, tal como alegan los defensores de la solución desarrollista, ésta abre el camino para etapas más avanzadas de diversificación económica en las cuales se espera que ese desequilibrio sea finalmente corregido, pero ese camino se anuncia largo, y mientras se termina de recorrerlo el recurso a la inversión y el crédito externo se hace imprescindible para evitar una nueva caída en el estancamiento.

El acceso al crédito se está haciendo cada vez menos difícil, a medida que crece la abundancia de capitales en los países del centro, pero para recurrir a él es preciso imponer una nueva inflexión en la política económica, que elimina paulatinamente el control del mercado de cambios como medio por excelencia de gobernar las conexiones comerciales externas; mientras éste se mantiene, en efecto, el control de prestamistas e inversores sobre sus capitales, intereses y ganancias sigue siendo vulnerable a las decisiones del gobierno del país recipiendario.

Sin duda esta innovación no impide continuar reservando el mercado interno para la industria nacional, ya que para ello permanece disponible el instrumento tradicional ofrecido por la tarifa de impuestos a la importación. Pero aunque así ocurra, esa modificación de la solución económica introducida para asegurar el amenazado predominio del alineamiento

político-social consolidado en la inmediata postguerra abre el camino para una transformación más profunda y general, que completará la ya comenzada ruina de la fortuna política de ese alineamiento.

Ya antes de que ello ocurra se hace evidente que ni aun un éxito más completo del experimento desarrollista hubiese bastado para devolver a las soluciones políticas que esperaban rejuvenecerse a través de él la capacidad de movilizar el apoyo homogéneo de vastas mayorías populares. La incorporación de nuevos grupos a la vida política, que estaba excediendo los límites de la que en la inmediata postguerra había asegurado a los movimientos que ahora esperaban su salvación del desarrollismo un séquito mayoritario, viene a sumarse al impacto político de la inflación, que –como habíamos visto ya ocurrir precozmente en México como consecuencia de las reformas de Cárdenas– tiene impacto muy desigual sobre los diferentes grupos aunados en el séquito de esos movimientos, y tiende a fragmentarlo; ambos procesos han llegado quizá demasiado lejos para que el descubrimiento de una fórmula económica de reemplazo fuese suficiente para contrarrestar sus consecuencias.

Por detrás de todo esto se adivina la gravitación de otra novedad aún más inquietante: el cambio social parece estar adquiriendo en Latinoamérica un dinamismo nuevo, alimentado en buena medida por el crecimiento cada vez más rápido de la población. Éste había comenzado en rigor en la década de 1920, y ya en la siguiente se hicieron sentir de modo limitado algunas de las consecuencias que en la segunda postguerra iban a revelarse a la vez más universales y más graves: así la presión sobre la tierra, que alcanzó ya un punto crítico en El Salvador o Colombia, con consecuencias clamorosas, aun en otras zonas que aparecían más tranquilas era ya detectada por observadores penetrantes como un factor de inminente desestabilización.

La incidencia más aguda que ese factor adquiere a medida que se avanza en la segunda postguerra sugiere que la socie-

dad urbana e industrial no podrá seguir siendo el único teatro en que chocan y se acuerdan los protagonistas que de veras cuentan en la vida política latinoamericana, y que no será posible eliminar por mucho tiempo de la agenda política el tema del estatuto de la tierra. Esto se hace tanto menos fácil porque, mientras crece la tensión social en el campo, las insuficiencias socioeconómicas del sector rural reciben atención nueva también por otro motivo: quienes se identifican con la solución industrializadora están aprendiendo a presentar a esas insuficiencias (antes que las del proceso industrializador mismo) como la razón por la cual la economía parece haber quedado encerrada en un callejón sin salida: las causas últimas del estancamiento que se refleja en la pérdida de velocidad del proceso industrializador residen en el atraso tecnológico y económico de la agricultura, que la condena a muy baja productividad, y que –junto con el bajo nivel de vida rural que es consecuencia de la persistencia de un orden social arcaico– extrema la estrechez del mercado interno, en la que se descubre un freno poderoso a cualquier nuevo avance de la industrialización. La reforma agraria reaparece así como tema urgente en la agenda latinoamericana, y mientras ya a comienzos de la década de 1950 tanto la revolución guatemalteca como la boliviana la ponen en el centro de su programa de cambio, hacia fines de ella ha ganado también un lugar en los de reforma económica bajo signo no revolucionario.

El crecimiento demográfico, sumado a la rigidez del orden rural, se traduce por añadidura en la velocidad nueva con que avanza la urbanización. A una década de distancia, se hace ya evidente que los rasgos que en 1945 había parecido consecuencia efímera de las modalidades que en el cambio económico había adquirido durante la guerra ofrecían sólo un anticipo muy modesto de los que iban a dominar con fuerza creciente la experiencia urbana a partir de esa fecha. Su gravitación creciente planteaba problemas que ni aun una industrialización más acelerada sería capaz por sí sola de dar respuesta, y que estaban ya redefiniendo los objetivos políticos

de las masas urbanas: en ciudades que siguen creciendo sobre todo a través de sus cinturones de poblaciones de emergencia, la composición de los sectores populares se altera progresivamente y es ya menos fácil mantenerlos solidariamente encuadrados en un alineamiento político que los interprete a todos.

Si desde el comienzo el proyecto industrializador, para mantener un apoyo popular del que no podía prescindir, había debido adaptarse a exigencias de esa base de apoyo que venían a hacer menos fácil su éxito, ahora iba a encontrar rivales que intentarían disputarle la lealtad de ésta proponiéndole desde la derecha y la izquierda prioridades alternativas, que respondían quizá mejor a las necesidades inmediatas de una población demasiado numerosa para encontrar ocupación en la industria, pero capaz de un modo u otro de integrarse en la economía urbana, y que sentía duramente el peso de las carencias (vivienda, agua, sanidad, electricidad) que eran consecuencia de esa urbanización salvaje.

De este modo una problemática social que no ha permanecido por cierto ignorada hasta entonces, pero cuya solución se había esperado de la conquista de la plena madurez económica, que haría finalmente posibles niveles de vida comparables a los de los países centrales, pasa decididamente a primer plano y comienza a redefinir los términos en que se plantea el conflicto político-social. Esa redefinición es por otra parte favorecida por la del contexto mundial en que avanza la experiencia latinoamericana en esta segunda postguerra, en la cual la efímera concordia entre los vencedores deja muy pronto paso a la guerra fría.

Lo que define sobre todo este contexto es la transformación de la potencia dominante en el hemisferio en la primera potencia mundial, que es consecuencia de la enorme concentración en ella del poder económico y militar. La guerra fría, al organizar las relaciones internacionales en un sistema bipolar en el cual la potencia antagonista de los Estados Unidos, debilitada en sus recursos económicos y humanos por la guerra, no puede constituirse en auténtica rival de aquéllos, viene a

consolidar ese dato básico del nuevo orden planetario que es la hegemonía norteamericana, a la que se allanan no sólo los antiguos poderes rivales doblegados por la derrota, sino aun los partícipes de una victoria que los ha arruinado hasta el punto de no poder pensar siquiera en prescindir del auxilio estadounidense. Por otra parte la guerra fría -es sabido- era algo más que un conflicto entre grandes potencias, en cuanto la URSS, rival de los Estados Unidos, se identificaba con el nuevo orden económico y social impuesto allí por vía revolucionaria, y la expansión de la hegemonía territorial de esa heredera socialista del imperio ruso sobre Europa centro-oriental se tradujo bien pronto en la implantación de ese modelo a través de procesos políticos en que la ausencia de un espontáneo impulso revolucionario era suplida por el influjo de la potencia vencedora. La tradicional vocación expansiva rusa se tornaba más temible desde que aparecía acompañada de la voluntad de imponer cambios sociopolíticos que sectores no sólo muy influyentes, sino -como pronto se hizo evidente- claramente mayoritarios en Europa Occidental contemplaban con horror. De este modo, todavía la dimensión ideológica de la guerra fría facilitó la reorganización de los países centrales en un sistema dominado política y militarmente por los Estados Unidos, que pronto buscó expandirse hasta cubrir todas las áreas del planeta que habían escapado a la hegemonía soviética, a través de un sistema de pactos regionales apoyados todos ellos en el poderío estadounidense.

Ya antes de que madurase ese proceso, como se recordará, los Estados Unidos habían intentado en la conferencia panamericana celebrada en México en 1945 utilizar el desenlace favorable de la guerra para completar la transformación de la Unión Panamericana en un auténtico organismo regional -la Organización de Estados Americanos- encargado de dirigir la resistencia a cualquier agresión regional perpetrada en el área; Argentina, que en la década anterior había encontrado modo de frustrar proyectos menos ambiciosos, estaba demasiado ansiosa de salir de la marginación a que había conducido

su actitud durante el conflicto, para oponerse a ese avance decisivo de un panamericanismo al que seguía viendo sin simpatía. En 1947, en los albores de la guerra fría, la conferencia de Río de Janeiro debía crear los mecanismos a través de los cuales la nueva organización podría atender a sus cometidos, y en primer término el de organizar la repulsa de cualquier agresión extracontinental a una muy vasta «región americana» que incluía territorios de estados que no eran miembros de la organización. Pero el tratado iba en rigor más allá: la acción colectiva por él prevista podría ponerse en movimiento sin que mediase agresión militar, ante cualquier hecho o situación que amenazase la paz americana; estas descripciones deliberadamente imprecisas estaban destinadas a cubrir todas las posibles incidencias de ese conflicto polifacético que era la guerra fría, en la cual la guerra convencional estaba lejos de tener el papel central.

Todos esos aspectos profundamente innovadores del proyecto norteamericano iban a ser aprobados por la conferencia de Río; las discusiones, en las cuales la Argentina peronista volvió a las tácticas perfeccionadas con refinado virtuosismo por la conservadora y la radical, versaron sobre cuestiones que se gustaba de definir como de procedimiento; entre ellas –Argentina sugería– el reemplazo de la mayoría por la unanimidad para aprobar cualquiera de las iniciativas previstas en el texto. Finalmente se convino exigir una mayoría de dos tercios, y considerar obligatorias para los países miembros sólo las decisiones que no requerían el uso de fuerza militar.

Por entonces, pese a las alarmas suscitadas por la guerra fría en los Estados Unidos, muy pocos creían que la oportunidad de poner en movimiento el mecanismo interamericano ante una amenaza externa, así fuese ella tan laxamente definida, pudiese ser inminente. Ya para 1947 los avances realizados por los partidos comunistas latinoamericanos desde la depresión, y acelerados a partir de 1941 en el contexto de la alianza norteamericano-soviética, estaban siendo eficazmente contrarrestados, y su eliminación parecía sólo cuestión de tiem-

po. Pero si Latinoamérica parecía no dar motivos de alarma, otros hechos sugerían que, fuera de los países centrales, el signo sociopolítico bajo el cual avanzaba la hegemonía norteamericana era una menos segura carta de triunfo que en éstos; en 1949 la victoria comunista en la guerra civil de China, y la consiguiente instauración de la República Popular vino a sumar sus efectos a los de la pérdida del monopolio atómico de Occidente para cambiar el temple con que el conflicto mundial era contemplado desde Washington; esos Estados Unidos que en pocos años y casi sin advertirlo habían conquistado la hegemonía mundial comenzaban a verse a sí mismos como una fortaleza asediada.

Como tal iban a reaccionar frente a la amenaza que de pronto descubrieron en Guatemala; en 1954 llevaron a la conferencia de Caracas la denuncia de que la evolución política de ese país amenazaba quebrar la unanimidad de las Américas en el apoyo al mundo libre, y obtuvieron aprobación para una Declaración de Caracas, que establecía que la actividad comunista era una intervención en los asuntos internos americanos, y la instalación de un régimen comunista en cualquier Estado americano introducía una amenaza, la respuesta a la cual sería una reunión consultiva para adoptar las medidas del caso. La resolución, aprobada con el único voto negativo de Guatemala, y las abstenciones de México y Argentina, importaba un aval (entusiasta en algunos casos, resignado en otros) de los criterios que ahora guiaban la política continental de los Estados Unidos, pero no llegaba a comprometer ninguna colaboración activa en ella por parte de las naciones latinoamericanas. Esas reticencias provenían en parte de que éstas no siempre compartían los temores que a la potencia hegemónica inspiraba la amenaza comunista, que vistos de fuera sugerían la presencia de una incipiente manía persecutoria; y por añadidura no faltaban quienes se preguntaban si esta última no era exagerada para mejor servir de instrumento para la hegemonía continental de los Estados Unidos; y no dejaban de hallar sugestivo que –antes de descubrir la amenaza sovié-

tica– éstos habían justificado las intervenciones con que habían consolidado esa hegemonía en Centroamérica invocando sucesivamente la necesidad de desbaratar los designios de Lord Palmerston, Porfirio Díaz y el general Obregón.

Sea de ello lo que fuere, a falta de una acción militar concertada de la Organización de Estados Americanos y dado que una intervención unilateral de los Estados Unidos parecía irrogar un precio político demasiado alto, el problema creado en Guatemala fue resuelto mediante una expedición dirigida por oficiales del ejército guatemalteco opuestos al gobierno de ese país y organizada en territorio hondureño con apoyo apenas secreto de Washington. Esa victoria excesivamente fácil, que sugería que la alarma había sido también excesiva, no sólo alcanzaba el objetivo inmediato de disipar el peligro guatemalteco, fuese éste real o sólo imaginario; ofrecía también una advertencia más general acerca de los peligros que afrontaba cualquier país latinoamericano que no aceptase plenamente y sin reservas la hegemonía norteamericana. Esa advertencia aparecía tanto más oportuna en un momento en que las bases económicas de ésta comenzaban paulatinamente a debilitarse gracias a la rehabilitación económica cada vez más exitosa del resto del centro industrial, y a la aparición en el Viejo Mundo de un grupo cada vez más numeroso de naciones que se negaban a alinearse en ninguno de los bloques rivales consolidados en la guerra fría. A la vez, el episodio guatemalteco, que insinuaba un retorno de los Estados Unidos a prácticas que la política de buena vecindad había prometido desterrar para siempre, vino a dar nueva vida a los sentimientos hostiles que esas prácticas habían inspirado en muy vastos sectores de opinión latinoamericanos; la *Fábula del tiburón y las sardinas*, en la cual un ex-presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, presentaba al episodio guatemalteco como el más reciente de una larga historia de agresión y rapacidad norteamericana, fue hallada persuasiva por una muchedumbre de lectores que estaban lejos de reclutarse exclusivamente entre los simpatizantes de la URSS.

En 1959, cuando se abrió la siguiente crisis en el sistema panamericano, mucho de lo que aparecía en germen en 1954 había tenido tiempo de fructificar; aun antes de entrar en esa década de prosperidad inaudita que iba a ser la de 1960, Europa había concluido triunfalmente su reconstrucción, y desde 1958 había encontrado en Charles de Gaulle una figura capaz de imponer la trasformación de la alianza atlántica en algo diferente de la consagración institucional de la tutela norteamericana; por su parte, la visita oficial del presidente Eisenhower a la India, que bajo la guía de Nehru había dado apoyo decisivo al movimiento de los no-alineados, importaba la renuncia solemne a la noción de que los participantes en ese movimiento, en cuanto se negaban a abandonar su neutralidad en una lucha que era la del bien contra el mal, no podían aspirar a la amistad de los Estados Unidos.

No menos alarmante era que el mundo socialista, aunque había atravesado tormentas muy serias luego de la muerte de Stalin, y sufrido en su prestigio como consecuencia de la represión militar soviética del movimiento húngaro, parecía capaz de sobrevivir a la desaparición del déspota que lo había gobernado con mano férrea, sin que en la transición sufriese el ritmo de un crecimiento económico hasta ese momento más rápido aun que en Europa Occidental, y, bajo la dirección de Jrúschov, cuyo optimismo –reflejado en la promesa del reino de la abundancia que seguiría a la inminente transición del socialismo al comunismo en la URSS– se preparaba, abandonando la cautela de la etapa anterior, a utilizar con imaginación y audacia las posibilidades que abría a la acción internacional de la URSS la erosión del sistema bipolar surgido en la inmediata postguerra.

En particular la URSS hallaba prometedora la culminación final del proceso de descolonización, y no sólo allí donde, como en Vietnam, ésta era impuesta por una rebelión de los pueblos coloniales bajo liderazgo comunista; a su juicio el agotamiento final de la hegemonía europea sobre Asia y África abría también oportunidades menos dramáticas de expandir

la presencia y el influjo soviéticos; por su parte los Estados Unidos estaban admitiendo ya que para manejarse en ese contexto nuevo les era preciso desarrollar estrategias más versátiles que las de la guerra fría, y aun llevarlas adelante independientemente y si se hacía necesario en contra de sus aliados en ella; en 1956 la intervención anglo-franco-israelí en Egipto, provocada por la nacionalización del canal de Suez por Nasser, tuvo por respuesta un público veto norteamericano ante el cual los responsables de la iniciativa juzgaron prudente inclinarse.

Pero mientras en las zonas que el desenlace de la segunda guerra mundial no había colocado firmemente bajo control directo de ninguno de los dos antagonistas de la guerra fría, los Estados Unidos se mostraban dispuestos a llevarla adelante con reglas nuevas y más flexibles, ello no hacía sino aumentar el celo con que se proponían enfrentar cualquier tentativa de redefinir los términos de su relación desigual con Latinoamérica. De este modo se ponían las bases para el encuentro y desencuentro entre la potencia hegemónica y la Revolución Cubana, que –para usar la feliz expresión de Richard Morse– puso fin a la *pax monroviana* en el momento en que ésta parecía mejor consolidada que nunca.

El desenlace socialista de la revolución cubana vino a reestructurar para siempre el campo de fuerzas que gravitaba sobre las relaciones entre el norte y el sur del continente, en cuanto hacía real y tangible una alternativa hasta entonces presente sólo en un horizonte casi mítico, como objeto del temor o la esperanza de los antagonistas en el conflictivo proceso político-social latinoamericano. Ella abría así una etapa nueva en éste, y lo hacía de modo tanto más convincente por cuanto también los datos de la realidad económica interna e internacional que en la entrada en la postguerra parecían destinados a seguir gravitando indefinidamente en el futuro, y a partir de los cuales se habían definido opciones socioeconómicas apoyadas por vastos movimientos políticos, parecían estar perdiendo su fijeza originaria, y las opciones tomadas

frente a ellos mucho de su originaria eficacia. Los primeros quince años de la segunda postguerra se presentan así para Latinoamérica como una etapa mas fácilmente acotable que otras, aunque como siempre los rasgos que la constituyen como tal, y que gravitan por igual sobre la trayectoria de las naciones latinoamericanas, se combinan en cada una de ellas con otros de alcance menos universal para imprimirles líneas de avance socioeconómico y también político que están lejos de mantenerse constantemente paralelas.

El punto de partida de esta etapa está dominado por las expectativas económicas y políticas creadas por el ingreso en la postguerra; las primeras afectan sobre todo a los países que han sido tocados por los avances de la industrialización; las segundas inciden sobre todos por igual, en cuanto la victoria de las Naciones Unidas parece haber privado para siempre de legitimidad política a esas corrientes de derecha hostiles al régimen de democracia liberal que por un momento parecieron capaces de proporcionar sustento ideológico a la práctica de gobierno de las dictaduras vernáculas, y la presencia de la URSS en la coalición victoriosa, que no se espera le dé gravitación en el Nuevo Mundo, no refuerza la muy desmedrada alternativa revolucionaria a ese régimen, sino la exigencia de que integre entre sus objetivos los de reforma social a los que en el pasado sólo ha concedido atención limitada y episódica.

Esa exigencia de retorno a la tradición liberal-constitucional lleva en más de uno de los países latinoamericanos grandes y pequeños a un desplazamiento en algunos casos negociado, en otros impuesto frente a resistencias poco obstinadas, de regímenes cuya naturaleza autoritaria u oligárquica los torna incompatibles con las pautas impuestas por el clima político dominante. Pero da lugar también, en dos de los países mayores, Brasil y Argentina, a una respuesta de los que han dominado la escena hasta la víspera en un marco declaradamente autoritario, que les permitirá seguir dominándola en el del restaurado orden constitucional gracias a la reestructuración

del paisaje político que logran llevar adelante con éxito. Nacen así los dos ejemplos más puros de lo que luego los estudiosos de la política latinoamericana llamarán popularismo, los únicos quizá en los cuales ese elusivo movimiento es algo más que una criatura de la imaginación de observadores retrospectivos dispuestos a imponer una artificial regularidad de líneas a un proceso excesivamente heterogéneo y confuso.

En **Brasil** –se ha visto ya– Vargas se disponía a inaugurar una nueva etapa en su carrera bajo el signo de la restaurada democracia; y con vistas a ello a partir de 1942 imprimió nuevo ritmo a la sindicalización suscitada desde el Ministerio de Trabajo y mayor vigor a la acción de éste en apoyo de las reivindicaciones obreras; desde comienzos de 1945 ese sector acrecido por la industrialización de guerra vino a poner barrera a los avances del sentimiento antivarguista en la sociedad urbana, que de claramente dominante parecía estar haciéndose unánime; su voz discordante se dejó oír a través del movimiento *queremista*, que proclamaba su apoyo a la permanencia de Vargas al frente del gobierno en la etapa que iba a abrirse, y encontró pronto apoyo en las filas del comunismo, ya reconciliado con su antiguo perseguidor bajo el signo de la unidad en torno a la causa de las Naciones Unidas, y que ahora parecía haber llegado a un entendimiento con él, en el marco del cual se preparaba para rehacer y ampliar su base política luego de su ya inminente salida de la clandestinidad.

La posibilidad de que Vargas utilizase la futura transición política con tanto éxito como las que se habían sucedido desde 1930 no sólo exasperó la oposición de las otras víctimas políticas del Estado Novo; despertó en el ejército (que esperaba que el ascenso a la presidencia del mariscal Eurico Gaspar Dutra, sostenido por las fracciones oligárquicas que se habían en su momento mimetizado al Estado Novo, le asegurase en el nuevo marco político el mismo influjo decisivo que había mantenido desde 1930) alarma bastante para decidirlo a derrocar a Vargas y encomendar interinamente el poder ejecu-

tivo al presidente de la Suprema Corte, como garantía de imparcialidad política y electoral.

Los resultados del golpe, que contó con la aprobación del embajador norteamericano, iban a satisfacer plenamente a sus organizadores militares: el mariscal Dutra, que casi duplicaba los votos del brigadier Gomes, abanderado de los adversarios del *Estado Novo*, y triplicaba los del candidato independiente sostenido por los comunistas, iba a ser el primer presidente de la nueva etapa republicana, gracias al apoyo del Partido Social Demócrata, etiqueta nueva para las corrientes tradicionales que habían seguido la trayectoria de Vargas, y el Partido Laborista, que canalizaba la nueva base obrera y popular de éste.

Al mismo tiempo que volvía a ser gobernado por un mandatario elegido, Brasil se daba su cuarta constitución republicana, la de 1946; bajo su égida, como era inevitable, el congreso volvía a estar dominado por los representantes del Brasil rural todavía mayoritario, pero la limitación del sufragio a los alfabetos, sumada a la implantación de la elección directa de presidente y vicepresidente, aseguraba un peso decisivo en cuanto a esta última a la más politizada y menos conservadora opinión urbana, y venía a crear la base institucional para tensiones entre poderes que gravitarían cada vez más en el curso de la política brasileña.

En ella Vargas retenía un lugar central, como jefe del Partido Laborista, aliado del mayoritario socialdemócrata, y senador por su nativo estado de Rio Grande do Sul. La opaca gestión del gobierno Dutra, y la orientación cada vez más conservadora que vino a adquirir bajo el influjo creciente de las fuerzas políticas tradicionales, y también del ingreso de Brasil en la guerra fría iban a permitir al ex-presidente marcar distancias que vinieron a justificar el lanzamiento de su candidatura para la renovación presidencial de 1950 bajo etiqueta laborista, y con apoyo del Partido Comunista, declarado ilegal en 1948 luego de que algunos comicios parciales lo mostraron en avance (Vargas, por su parte, había proclamado en-

tonces su indignada oposición contra esa iniciativa antidemocrática). La campaña varguista que suscitó vastas expectativas de redención social en las masas brasileñas, culminó en una muy holgada victoria, debida sobre todo a macizas defecciones en las filas socialdemócratas.

La nueva gestión presidencial de Vargas iba a ser difícil; su victoria había sido facilitada por el malestar social que era consecuencia del agotamiento de la primera etapa de industrialización, continuada en la postguerra gracias al uso sistemático de la sobrevaluación de la moneda para poner al servicio del objetivo industrializador recursos derivados de las exportaciones; cuando se hizo evidente que su gobierno no sabía afrontar mejor que el de Dutra esa situación nueva y difícil, cobró nuevos ímpetus la oposición conservadora dominante en el congreso, alentada ahora por el difuso descontento de sectores urbanos cada vez más amplios ante el agravamiento de la inflación, que en 1954 aseguró un impacto inusitado a la campaña en que Carlos Lacerda, inquieto político y periodista ahora constituido en vocero de la oposición de derecha, denunciaba la corrupción que Vargas, que nunca había exigido de sus aliados políticos la rígida probidad financiera que se imponía a sí mismo, toleraba ahora en su círculo íntimo.

El acorralado presidente hizo de su suicidio el más eficaz de los gestos espectaculares que puntuaron las cuatro décadas de su carrera pública: en un breve testamento político presentaba como responsables de su muerte a los enemigos nacionales y extranjeros del bienestar popular y de la auténtica independencia nacional, a los cuales –según aseguraba con corta memoria– había combatido toda su vida, y a cuya venganza se entregaba como víctima voluntaria, esperando ahorrar así al pueblo brasileño la que esas fuerzas oscuras le tenían destinada. Al día siguiente el Brasil urbano se conmovía en innúmeros tumultos; el sacrificio de su jefe y fundador salvaba a la coalición populista (en que el influjo de la acelerada urbanización e industrialización, sumado al del mismo Vargas, había acre-

cido el del laborismo) de una ruina que en la víspera parecía inminente, y le iba a dar la oportunidad de emprender una nueva navegación bajo el signo del desarrollismo.

La posibilidad de esa victoria póstuma alarmó a sus adversarios, entre los cuales se contaba su sucesor constitucional, el vicepresidente Cafe, que buscó impedir desde el poder una sucesión presidencial favorable a los herederos del varguismo. Su derrocamiento por el ejército, que no contó con el apoyo unánime de las fuerzas armadas, abrió el camino para la victoria electoral, en 1955 de Juscelino Kubitschek, que en su muy tradicional estado de Minas Gerais hacía papel de figura renovadora, pero cuyo énfasis en el desarrollo económico venía a imponer sordina al que en la última etapa de la carrera de Vargas las fuerzas que lo apoyaban habían puesto en las reivindicaciones sociales y nacionalistas.

Ello no impidió a Kubitschek retener el apoyo del laborismo, que proseguía sus avances en el electorado y el congreso (acelerados todavía más porque su creciente influjo nacional hacía que en más de un estado se cobijaran bajo su bandera facciones locales irreprochablemente rurales y oligárquicas). Al proponer al desarrollismo como solución a los problemas económicos brasileños, el nuevo presidente lo declaraba capaz no sólo de sacar a la economía nacional del estancamiento, sino de imprimirle un ritmo de avance desconocido en el pasado, que –según rezaba su fórmula favorita– lo haría avanzar medio siglo en sólo cinco años. Por otra parte ese gran salto adelante en la industrialización tenía su complemento en otro proyecto igualmente grandioso: el traslado de la capital a un desierto rincón de la meseta central, prólogo a la incorporación plena a la vida brasileña del vasto y despoblado interior.

No es sorprendente que en 1960 esas promesas desmesuradas no se hubiesen cumplido del todo; más lo era que se estuviese tan cerca de ello: si Brasilia no era aun más que un esqueleto de ciudad, que poco podía influir aun en el proceso de puesta de valor del territorio, la economía nacional había crecido a ritmos que contaban entre los más veloces del planeta.

Pero si el esfuerzo por acelerar el desarrollo económico había en efecto evitado el peligro del estancamiento, había también extremado los desequilibrios de la economía brasileña.

Éstos se habían agravado también porque el café del Brasil, que pese a algunos altibajos había venido beneficiándose desde el fin de la guerra con la expansión del consumo en los países centrales, afrontaba una competencia cada vez más dura de los productores del Viejo Mundo; desaparecía así más tarde en Brasil que en otras partes, la prosperidad exportadora de la temprana postguerra, y ello no auguraba una fácil salida de las apreturas económicas reflejadas en una inflación más impetuosa y en una aguda crisis del sector externo.

En la renovación presidencial de 1960 el temprano agotamiento de la solución desarrollista, que, si bien dejaba un legado indeleble en la estructura de la economía nacional, parecía incapaz de seguir impulsando su avance, y por añadidura estaba cumpliendo muy mal su promesa de rehacer la cohesión de la base social del populismo, creó una oportunidad magistralmente utilizada por un colorido político paulista, Jánio Quadros, para conquistar la presidencia agitando temas que recogían en parte los usados en vano por la oposición antivarguista desde 1945. Era una victoria hasta tal punto personal que fue acompañada de la de João Goulart, candidato a vicepresidente en la fórmula rival de la encabezada por Quadros, y por décadas principal ejecutor de la política laboral de Vargas; aun así reveló la pérdida de la sólida hegemonía populista que había dado hasta entonces firmeza al orden político brasileño, y por eso mismo, pese a que el errático desempeño del nuevo presidente la privó de consecuencias duraderas, introdujo a la política brasileña en un nuevo curso que, como el emprendido en 1930 y ahora clausurado, se internaba en aguas nunca antes navegadas, y previsiblemente tormentosas.

En las tres décadas que se cerraban, la economía, la sociedad y la política brasileñas habían sufrido una transformación gigantesca, pero aún incompleta. Ello era evidente ya para los

observadores contemporáneos, más interesados en las novedades introducidas en el curso de ese proceso que en lo que él todavía no había tocado; entre ellas, por ejemplo, los intrigaban las modalidades de las sindicalización brasileña, que -como la de la Italia fascista- se había organizado abiertamente desde el Estado, pero al revés de ésta no había sido impuesta violentamente a una masa obrera de larga experiencia organizativa, sino le ofreció la primera experiencia en ese campo, y pudo así crear un movimiento obrero en el cual sus representados reconocían un servidor eficaz de sus intereses precisamente porque sabía poner al servicio de éstos su vínculo originario con el Estado.

Esta actitud, que aparece tan singular si se la contempla desde la perspectiva de la historia del movimiento sindical a escala mundial, lo es mucho menos cuando se la ubica en el contexto de la experiencia política de los sectores populares urbanos en Brasil. Y restrospectivamente se hace aun más evidente que en los grandes núcleos urbanos del Brasil centromeridional, en los que el cambio socioeconómico se hace sentir con particular intensidad; no sólo las pautas de la vida colectiva están menos alejadas de las tradicionales en Brasil de lo que gusta de imaginarse, sino que aun allí el peso numérico de sectores que como el obrero-industrial aparecen como la creación de esos cambios es aun más limitado porque el crecimiento demográfico cada vez más acelerado impulsa una urbanización cuyo ritmo excede aún el muy rápido del avance industrializador. La consecuencia es que las etiquetas políticas no son lo que parecen; ni el laborismo es abrumadoramente obrero, ni la presencia obrera la imprime los rasgos habitualmente presentes en los partidos que en otras partes llevan ese nombre (aun más significativamente, el laborismo tiene muy escaso peso político en el estado más industrializado, São Paulo, dominado por Adhemar de Barros, un político local de zigzagueante carrera y reputación equívoca, que adapta magistralmente al nuevo contexto social las tradiciones clientelísticas de la política brasileña).

A la vez, el laborismo que no puede penetrar en la fortaleza paulista encuentra su desquite tanto en Rio Grande do Sul, donde recluta sus dirigentes en las filas de una clase hacendada de la que provenía Vargas (cuyo nombre era allí la mejor prenda de triunfo) y proviene también Goulart, y todavía -se ha indicado ya- terciando con provecho en las rivalidades de clientelas y clanes del Brasil arcaico, que deben cobijarse bajo el signo de los nuevos partidos nacionales.

Así, aunque el Brasil de 1960 ha avanzado ya demasiado en su gigantesca metamorfosis para que le sea aún posible volver sobre ella, los cambios ya madurados están lejos de haber hecho avanzar la transferencia de influjo político al sector cuyo desarrollo impulsa, hasta el extremo que muchos creen ya alcanzado para entonces; de hecho ella ha progresado menos de lo que sugiere tanto la aproximativa paridad que ha terminado por establecerse entre los partidos integrados en la alianza socialdemócrata-laborista cuanto el peso decisivo del vuelco de la opinión urbana en la victoria de Quadros, y las difíciles opciones de la etapa que se abre deberán ser afrontadas por un Brasil políticamente menos renovado de lo que muchos brasileños imaginan.

Las diferencias que corren entre Brasil y **Argentina** se reflejarán también en las de sus experiencias populistas. En este país más urbanizado e industrializado, marcado históricamente por una crónica escasez de población sólo corregida mediante un aluvión inmigratorio proporcionalmente mucho más cuantioso que el recibido por Brasil, y que desde temprano en el siglo XX adquiere un perfil demográfico de país modernizado, la población viene creciendo con una lentitud que no deja de provocar alarma (aun disipada la breve prosperidad peronista, las insuficiencias de ese crecimiento volverán a corregirse gracias a la inmigración, ahora originada en los países vecinos); ya en las primeras etapas del proceso industrializador, las fuentes obvias de mano de obra derivadas de la migración a las ciudades (alimentada sobre todo por el éxodo de la po-

blación ocupada en la agricultura pampeana, hasta que en la postguerra el originado en las provincias periféricas pasa a primer plano) se anuncian menos inagotables que la que proporciona el Brasil rural.

Esos datos básicos, y su consecuencia, que es la hegemonía política del sector urbano, y dentro de él de una clase trabajadora que ya antes de transformarse en principal sostén y beneficiaria de la gestión peronista conoce niveles de salarios históricamente comparables a los de Europa continental, gravitan fuertemente sobre esta gestión misma, y sin duda contribuyen a que su irrupción triunfal en la vida argentina marque una ruptura en el equilibrio social y político incomparablemente más nítida que la gradual transición vivida en Brasil bajo signo varguista. A la intensidad de esa ruptura contribuye también decisivamente el estilo confrontacional que Juan Domingo Perón imprime a su acción política y a la del movimiento que llevará su nombre.

En la segunda mitad de 1945 se hace evidente que el vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión del régimen militar no podrá reclutar para su candidatura presidencial el apoyo de fracciones significativas de las fuerzas políticas tradicionales, y el régimen mismo aparece cada vez más asediado por una marea opositora que desborda a esas fuerzas mismas y expresa sobre todo la impaciencia de sectores medios a los que tanto las clientelas plebeyas del radicalismo como la restauración oligárquica y fraudulenta y el abortado ensayo autoritario-clerical habían marginado, y que ven en la victoria mundial de la democracia una oportunidad para el desquite; a medida que Perón, a falta de otros apoyos, extrema su identificación con el mundo del trabajo, las organizaciones empresarias y terratenientes se unen con creciente vehemencia a esa acción opositora. Cuando parecen haber logrado la eliminación de Perón del panorama político, el grupo militar que por unos días logra imponerla no puede evitar que una movilización organizada sobre todo por veteranos dirigentes sindicales imponga su liberación. El 17 de oc-

tubre Perón puede lanzar su candidatura presidencial desde la casa del gobierno, frente a la muchedumbre que lo ha rescatado; como siempre ha creído, el desenlace de la crisis argentina será una elección general, y para ella está mejor preparado que sus enemigos.

Sin duda, las organizaciones políticas que lo apoyan no son muy temibles; algunas fracciones disidentes de los partidos tradicionales se suman en ellas a un partido nuevo, el Laborista, organizado por dirigentes sindicales. Pero cuenta en cambio con una popularidad personal ya más profundamente arraigada de lo que su origen tan reciente haría suponer; si todavía un año antes, en los primeros actos en apoyo del secretario de Trabajo, eran los dirigentes sindicales los que aportaban el público, la multitud fervorosa que hizo del 17 de octubre el Día de la Lealtad Peronista reconocía ya en la que la ligaba directamente al Líder el elemento decisivo de su definición política.

Esa lealtad aseguraba a la candidatura de Perón el apoyo casi unánime de las clases obreras y populares urbanas, pero no bastaba para ganarle el de la mayoría del electorado, que fue preciso obtener acudiendo a una multitud de auxilios muy diversos, en cuyo reclutamiento reveló Perón una comprensión de los mecanismos de la política electoral argentina cuya instintiva e infalible justeza era sólo comparable a la de Yrigoyen. En particular no fueron pocos los caudillos locales de obediencia conservadora, que, conscientes de que la hora de su partido había pasado, pusieron lo que quedaba de sus máquinas, que sólo podían sobrevivir a la sombra del Estado, al servicio del nuevo alineamiento; estos y otros reclutas adventicios se limitaban a abrir canales de acceso a votantes que nunca los habían reconocido como los destinatarios últimos de su lealtad política, y ahora la transferían al jefe del naciente movimiento. Estos éxitos hicieron posible la ajustada victoria obtenida por Perón, en las elecciones de febrero de 1946, contra una coalición que, aunque encabezada por ese partido popular que era el radicalismo e integrada por otros a su izquier-

da, incluido el comunista, encontraba sus apoyos más sólidos en las clases medias y altas.

Esa victoria dio al peronismo el control del Ejecutivo y el casi total del Congreso; su fundador la iba a utilizar para acrecentar el papel del Estado en la economía (la nacionalización del Banco Central y la creación de una corporación pública a cargo del comercio externo acentuaban esa tendencia, introducida por la restauración conservadora, a la vez que modificaban sus objetivos) y asegurar una gradual conquista de todos los resortes del poder y la opinión (depuración de la Universidad y la Justicia, monopolio de hecho de la radiodifusión y casi monopolio de la prensa diaria, supresión del periodismo opositor): esa inflexión autoritaria iba a ser institucionalizada por la reforma constitucional de 1949, que hizo posible la reelección presidencial.

La organización del movimiento peronista fue encarada por su jefe con análogos objetivos. Para 1947 las últimas veleidades autónomas de la dirigencia sindical fueron aplastadas, y todas las fuerzas peronistas unificadas en un partido al que su estatuto colocaba bajo la autoridad suprema de Perón. Esa metamorfosis fue facilitada por la ampliación de la base del movimiento, que se expandía sobre todo en zonas geográficas y sociales antes escasamente politizadas; no sólo el número de obreros sindicalizados, que en 1945 no había sido mucho más alto que en 1940, había ya más que duplicado, y por lo tanto la mayor parte de los afiliados sindicales no contaba ya con experiencias de militancia previas a su incorporación a un movimiento definido a partir de la lealtad personal a su jefe; por añadidura –y gracias sobre todo al esfuerzo tesonero de la esposa del presidente, Eva Perón, que tomó a su cargo, a más de la vigilancia de la disciplina política en el movimiento obrero, la organización de nuevos sectores, desde las mujeres, para las cuales gestionó el voto y creó una rama separada del partido oficial, hasta los «humildes», a los que se orientó sobre todo su Fundación de Ayuda Social– el peronismo pasó a contar con mayorías electorales amplia-

das, en las cuales la contribución del voto sindical era ya menos decisiva que en 1946.

Pese a ese centralismo y autoritarismo crecientes, el poder de Perón encontraba todavía límites y condicionamientos importantes. En primer lugar su legitimidad requería ser revalidada periódicamente por el veredicto del electorado; como sabía bien, el ejército, aunque controlado por oficiales adictos, y dispuesto a tolerar el control de los medios de opinión y el uso de la intimidación política, no hubiese aceptado volver al papel de sostén de gobiernos nacidos de elecciones fraudulentas. Y esa necesidad de victorias electorales convincentes hacía que el control político de los sindicatos no diese al régimen peronista mayor libertad para orientar su política económica y social, tomando distancia de las aspiraciones del sector obrero y popular que en 1945 le había dado apoyo decisivo.

Esta situación tenía consecuencias enojosas: debido a su identificación con una clase obrera menos sumisa que nunca, un régimen que sacrificó permanentemente a los intereses del sector industrial los de la economía rural no contó nunca con el apoyo sincero de los patronos industriales. Pero las económicas eran aún más serias: el peronismo se había consolidado a partir de 1946 satisfaciendo las expectativas de trabajadores y consumidores urbanos a costa del sector rural, pero, para que esa política ofreciese una solución duradera, no sólo hubiese sido necesario que la relación de precios internacionales de la más temprana postguerra se hubiese mantenido indefinidamente, sino que la producción rural se expandiese para satisfacer la acrecida demanda de una población urbana ahora más próspera sin afectar los saldos exportables, y ello sin usar como estímulo la mejora de los precios internos.

Ninguna de estas condiciones iba a cumplirse; no sólo los precios internacionales no iban a mantenerse, sino la agricultura argentina comenzaba ya a sufrir las consecuencias de un retraso tecnológico agravado por los avances de la norteamericana, imitada pronto por otros centros productores, y todavía por el uso que Washington hacía del subsidio y el crédito

para asegurar nuevos mercados a su producción creciente. Ello hacía más compresible la pasividad oficial frente a un estancamiento productivo que, aunque alarmante en cuanto al futuro, por el momento se adecuaba a la dificultad creciente de instalar excedentes en el mercado mundial.

Pero ese futuro se hacía cada vez más inminente, como lo revelaron las presiones cada vez más insoportables contra la paridad internacional del peso, la inflación en avance, la pérdida de velocidad del crecimiento industrial y el fin de la etapa de dramático avance en el nivel de vida popular. En 1951 Perón comenzó cautelosamente una reorientación económico-social cuyos peligros políticos advertía muy bien; la muerte de Eva Perón iba a ser vista por muchos como el momento definitorio de un cambio de ruta con el cual coincidió accidentalmente. Lo que se buscaba ahora era extremar la centralización y el autoritarismo para permitir al régimen ubicarse por encima de las clases y ejercer una dominación menos condicionada por la alianza privilegiada con las obreras y populares.

Necesitaba hacerlo para implantar una nueva política económica, que anticipaba las líneas básicas de la desarrollista, aunque, a la vez que buscaba como ésta canalizar la inversión extranjera hacia el sector industrial, subrayaba aun más decididamente la necesidad de abrirle acceso legal a la explotación del petróleo, y aliviar así el peso negativo que su importación arrojaba sobre la balanza de comercio. Esa iniciativa, de parte de un régimen que contaba entre sus hazañas la conquista de la independencia económica, creó una oportunidad que la acorralada oposición utilizó hábilmente; a la vez la aspiración de Perón a completar la reestructuración política iniciada en 1946 sobre líneas cada vez más cercanas a las del totalitarismo de la entreguerra lo llevó a lanzar una campaña anticlerical que socavó la lealtad nunca totalmente segura de las fuerzas armadas; en septiembre de 1955, un alzamiento apoyado por una pequeña minoría del cuerpo de oficiales pero sólo resistido con decisión por una minoría aun más reducida de éste fue suficiente para provocar el derrocamiento del régimen.

Y arrojó a Perón a un largo exilio, durante el cual, desde Panamá, Venezuela, la República Dominicana y finalmente Madrid, iba a seguir gravitando en la vida política argentina; si las depuraciones del cuerpo de oficiales consiguientes a su caída le aseguraron la unánime hostilidad de las fuerzas armadas, retuvo en cambio la lealtad inquebrantable de aproximamente un tercio del electorado, y el influjo derivado de la identificación que con él mantenía el movimiento sindical. Por encima de todo eso, lo que le iba a permitir ejercer durante dieciocho años de exilio un inusitado liderazgo político a distancia fue la persistencia de los dilemas que habían comenzado por provocar la ruina de su régimen, y luego harían imposible la consolidación de los que sucesivamente lo reemplazaron en el poder.

El gobierno militar surgido de su derrota fue presidido primero por el general Eduardo Lonardi, reemplazado ya en noviembre de 1955 por el general Pedro Eugenio Aramburu, como consecuencia de la alarma del cuerpo de oficiales ante las tentativas de captación de las organizaciones sindicales peronistas por las corrientes de derecha católica volcadas en la oposición durante la reciente campana anticlerical, con las que juzgaban identificado a Lonardi. El general Aramburu, que favorecía en cambio la eliminación total del influjo alcanzado por el peronismo en la vida argentina, estaba tan convencido como su predecesor de la necesidad de una salida electoral a relativamente corto plazo, en la que era ya impensable acudir al recurso del fraude, pero confiaba en socavar rápidamente el influjo peronista mediante reformas electorales (como la representación proporcional) y la proscripción del partido y la depuración de la dirigencia obrera; en 1957 se hizo evidente que ambos recursos habían fracasado; los peronistas habían avanzado ya mucho en la reconquista del control sobre los sindicatos, y en las elecciones para una asamblea constituyente (que iba a disolverse sin cumplir sus propósitos reformadores) la consigna de votar en blanco lanzada por Perón fue seguida por más de un cuarto de los electores; frente a

un radicalismo ya dividido, ese resultado hacía de él el árbitro de la inminente elección presidencial.

Es lo que comprendió el doctor Arturo Frondizi, jefe de una de las dos fracciones radicales organizadas en partidos separados en vísperas de las elecciones de la constituyente, que había comenzado por agitar motivos ideológicos de izquierda, con un éxito electoral que se iba a revelar sensiblemente menor que el de sus rivales tradicionales. Al descubrirlo renunció a ser, como había esperado, el heredero del peronismo para aceptar ser sólo su aliado circunstancial a través de un acuerdo en que Perón, a cambio de garantías para el futuro político y sindical de su movimiento, le concedió su apoyo electoral. Admitiendo que el proletariado se negaba a reconocerlo como su jefe, Frondizi aspiraba ahora a representar políticamente a los patronos industriales, o -para usar el lenguaje por él preferido- a la burguesía nacional, cuya hegemonía era condición del éxito de la alianza de clases contra los sectores terratenientes y mercantiles identificados con el modelo agro-exportador, que el peronismo no había sido capaz de llevar al triunfo.

Esta formulación tenía, a falta quizá de otros, el mérito de centrarse en el que era ya en ese momento el problema central: la función dinámica del sector exportador aparecía agotada, pero no había otros capaces de sustituirlo en ella. Era ya el problema que Perón había comenzado a encarar desde 1950, mediante una discreta restitución al sector rural de parte de los excedentes que producía, y desde 1954 con la apertura a la inversión extranjera. Era de nuevo el problema que debió encarar el gobierno militar, que introdujo una devaluación drástica del peso, destinada a revitalizar al sector rural, y dio comienzo a un plan de inversiones publicas en energía e industrias básicas (construcción de gasoductos y de una planta siderúrgica), pero no logró esquivar una aceleración de la inflación que facilitó el retorno a la escena del peronismo sindical. Y era todavía el problema que Frondizi estaba decidido a atacar sobre las líneas ya anticipadas por el último Perón, y

con una decisión que había faltado tanto a éste como al interinato militar.

Tras de un aumento general de salarios que en unos meses se tradujo en una agudización extrema de la inflación, una devaluación más drástica que todas las anteriores fue seguida de un enérgico esfuerzo de recluta de capitales norteamericanos para el petróleo y la industria, cuyo éxito contrarrestó en cierta medida el impacto negativo que la nueva paridad monetaria tuvo sobre el ingreso urbano. Pero el avance del resto de la economía no corregía el desequilibrio de las exportaciones, y la agricultura, de la que se esperaba la solución, respondía mal al incentivo de la devaluación, en parte porque los mercados externos se mostraban menos receptivos que nunca.

El éxito mediocre de su plan económico creó a Frondizi problemas políticos menos agudos que la brusquedad de la transición con que había pasado, de vocero de la izquierda antiimperialista en las filas del antiperonismo, a aliado de Perón y apóstol de un conservadurismo remozado por el injerto de motivos industrialistas; ella hizo que fuese visto con unánime desconfianza por aliados y enemigos, y en particular por los dirigentes militares, resueltos a defender su control del ejército tanto contra las manipulaciones de un presidente demasiado hábil como contra la resurrección del influjo peronista, que declaraban de antemano intolerable. La definición socialista de la revolución cubana devolvió relevancia a la etapa izquierdista en el pasado de Frondizi, que ahora algunos encontraban aun más alarmante que la desenvoltura con que la había dejado atrás; desde entonces su frágil autoridad sólo iba a sobrevivir en lucha cotidiana contra un asedio en regla.

Así, en Argentina como en Brasil, parecían apagarse los últimos ecos del avance populista que en uno y otro país había sido promovido desde la cúspide del Estado por quienes desesperaban de otro modo de mantenerse en ella en el clima nuevo de la postguerra, y que se había revelado con todo más duradero que las experiencias de signo menos inequívoca-

mente democrático que en Perú, Venezuela y Guatemala surgieron bajo el estímulo de ese clima.

En **Perú** él se reflejó en la victoria lograda por la coalición democrática que, hecha posible por la aquiescencia de las fuerzas hostiles al APRA tanto en el campo político como en el militar, iba a ser usada por ésta para rehacer y ampliar las organizaciones sindicales adictas en Lima y en las plantaciones de la costa norteña, mediante el recurso frecuente a ese gran instrumento de reclutamiento que es la huelga. La consiguiente intensificación del conflicto social no iba a ser, con todo, la causa principal de la creciente hostilidad que la experiencia en curso encontró en los sectores de intereses que, si habían considerado inevitable el retorno del aprismo a la arena política, no por eso dejaban de verlo con profundo recelo.

Las tensiones que llevaron a la crisis precoz de esa experiencia de democratización surgieron en cambio en el campo político. Frente a un resultado electoral que, reflejando la base mayoritaria conquistada por el aprismo, le concedió el predominio en el Congreso, sus adversarios conservaban intactas sus fortalezas tradicionales en la fuerza militar y en la cúpula de la estructura socioeconómica del Perú, y desde ellas no cesarían de hostigar a la fuerza política dominante, para lo cual contaban también con el control casi completo de los medios de difusión. Se creó así bien pronto una *impasse* política ante la cual el movimiento mayoritario se creía con derecho a contar con el arbitraje favorable del presidente Bustamante y Rivero. Pero éste hallaba ofensiva la insistencia con que los apristas le recordaban que si era presidente lo debía al apoyo de su partido, y estaba dispuesto a mantener su independencia frente a él. La frustración de los apristas, que descubrían que su victoria electoral no los había salvado de la marginación, volvió a expresarse en atentados personales y finalmente, en 1948, en una tentativa insurreccional con significativo apoyo en la marina de guerra pero muy escaso en el ejército, que fue sofocada tras de cruenta lucha en El Callao. El presidente respondió de-

volviendo al APRA a la ilegalidad, pero –tras de perder con ello el último contacto con la fuente popular de su investidura– rehusó a modificar su política económica en sentido favorable al sector exportador; en octubre de ese año era derrocado por un golpe militar que instaló en la presidencia al general Manuel Odría.

La persecución del aprismo alcanzó ahora intensidad mayor que nunca en el pasado, y el régimen militar no temió afrontar un conflicto con Colombia al negarse a reconocer derecho de asilo en favor de Haya de la Torre, refugiado en su embajada, que durante años iba a permanecer sitiado en ella. El régimen reencontraba la base política de los de la década anterior; la derecha peruana, desesperando de su futuro en la arena electoral, reactualizaba su alianza con el ejército; frente a una economía mundial en alza podía por otra parte retornar más plenamente que en los años de la depresión a las soluciones de los años dorados de la república oligárquica, a comienzos del siglo; en una etapa en que casi todas las naciones grandes y medianas de América latina mantenían celosamente los controles sobre el sector externo, Perú volvía a una apertura desconocida en casi todas partes desde 1929; las consecuencias estaban lejos de ser negativas, y hasta 1955, por el contrario, la economía nacional se mantuvo en ascenso.

A la vez los nuevos gobernantes no dejaban de advertir que el Perú de mediados de siglo no era ya el de la primera preguerra, y que la base ofrecida por la alianza oligárquico-militar no era ya suficiente para implantar ninguna solución política sólida; el presidente y su esposa parecieron dispuestos a utilizar las lecciones del peronismo, otorgando el voto a las mujeres, entre las cuales la señora María Delgado de Odría esperaba reclutar nuevos apoyos para su marido, y cultivando asiduamente el favor político de las poblaciones marginales que el crecimiento de Lima estaba expandiendo rápidamente.

Estas iniciativas eran recibidas sin favor por los aliados oligárquicos del régimen, que veían en ellas el comienzo de la búsqueda de una alianza política de recambio por parte de los

militares. Cuando el último eco de la prosperidad exportadora de postguerra y su prolongación debida al conflicto coreano vino a apagarse, esos sectores políticos juzgaron deseable poner fin a la gestión militar. Era el momento que el aprismo había esperado pacientemente; desde su refugio limeño y luego desde el exilio, Haya de la Torre impuso a su partido una línea más moderada no sólo en cuanto a ideología y programa, sino en táctica y estilo. Mientras ofrecía apoyo a Estados Unidos en la guerra fría con un fervor que no era ni insincero ni improvisado (la rivalidad entre comunistas y apristas tenía en efecto raíces ya legendarias), en el marco nacional, convencido como estaba de la futilidad de cualquier insurrección y de la firmeza del veto militar contra el acceso del APRA al gobierno, se pronunció por la *convivencia*, es decir, por una alianza con las expresiones políticas de la oligarquía en la que el aprismo había visto siempre a su inconciliable enemiga, que le permitiría abrir finalmente una brecha en el cerco hostil que desde su fundación lo había marginado.

Las elecciones de 1956 dieron la presidencia al candidato favorecido por el aprismo, que era el veterano Manuel Prado. Pero su mayoría estaba lejos de ser abrumadora; el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que había sólo tenido fugaz participación política como candidato independiente en las filas apristas, lo seguía de cerca, sin contar con el apoyo de ninguna organización partidaria digna de ese nombre. Ese resultado comenzaba a revelar el costo que la inflexión moderada tendría para el APRA, que había perdido su mayoría en Lima y se veía reducida a su solidísima fortaleza norteña, y sugería que las tácticas y estilo adoptados por Haya de la Torre podían ser emulados con más éxito por rivales que no cargaban con un pasado en que habían sido el terror de todos los que tenían algo que perder. Belaúnde no sólo encontró apoyos en Lima, donde atrajo a los sectores ansiosos de cambio perdidos por el APRA, y en su nativa Arequipa; también los reclutó en la sierra del sur, siempre refractaria a la prédica aprista, donde los gamonales oteaban el horizonte en busca de nuevas alianzas

que les permitiesen sobrevivir políticamente en un país cuyos cambios percibían muy bien.

La gestión de Prado iba a mantener a la economía peruana en el rumbo fijado por Odría; mientras el *boom* de la harina de pescado rehacía la prosperidad del sector exportador, el aprismo parecía haber encontrado un nuevo papel como representante eficaz de los intereses de sus clientelas regionales y sindicales en un marco socioeconómico que ya no aspiraba a cambiar globalmente. Mientras la legalidad lo favorecía, su preocupación por evitar problemas demasiado duros a un régimen del que era parte lo incitaba a ejercer a veces un influjo moderador de la militancia laboral que comenzó a provocar grietas en su dominio del mundo del trabajo, casi siempre en beneficio de sus tradicionales rivales comunistas.

No convendría exagerar la significación de esos episodios; las fortalezas políticas del aprismo estaban aun sustancialmente intactas, y si el movimiento parecía haber perdido la capacidad de crecer, su influjo parecía por lo menos firmemente estabilizado. Aun así, eran muchos en las filas apristas, y más aun en las de sus organizaciones juveniles, los que juzgaban que el aprismo había renunciado a su vocación revolucionaria sin ganar por ello nada que justificase sacrificio tan exorbitante; una disidencia minoritaria pero beligerante hizo ahora su aparición, y la aspiración a ofrecer justificaciones teóricas rigurosas para sus zigzagueos tácticos, que el aprismo había retenido de sus remotas raíces leninistas, al hacer de esos debates un remedo de disputa teológica en torno a los últimos desarrollos del pensamiento de Haya de la Torre, vino a hacer más cruelmente evidente que lo que estaba en entredicho era la investidura de éste. He aquí una situación que anunciaba ya las dificultades que plantearía al aprismo, y en consecuencia a la solución política basada en la convivencia, la etapa abierta por la revolución cubana.

Mientras en Perú la democratización de postguerra fue hecha posible por el avance de fuerzas opositoras de base popular,

consentido pero no apoyado desde las alturas del poder, en Venezuela y Guatemala iba a sostenerse en la alianza entre quienes debían consolidar el control recientemente adquirido del aparato estatal y fuerzas político-sociales hasta la víspera marginadas o reprimidas. En **Venezuela** la oportunidad abierta a Acción Democrática cuando su jefe Rómulo Betancourt fue puesto al frente de la Junta de Gobierno por los oficiales de rango medio protagonistas del golpe militar de octubre de 1945 iba a ser utilizada para llevar adelante no sólo una vertiginosa ampliación de las funciones asistenciales del Estado, y una reforma de la legislación laboral y de previsión muy favorable a los asalariados, sino también una arrolladora expansión del partido y los sindicatos y organizaciones campesinas a él adictos, que se reflejó en aplastantes triunfos electorales. En 1947 cuando una abrumadora mayoría eligió presidente al mayor hombre de letras de Venezuela, Rómulo Gallegos, y a un congreso totalmente dominado por su partido, parecía anunciarse la instalación de un régimen muy distinto del que sus aliados militares habían esperado ver surgir. Con el beneplácito de los otros partidos, que se temían también condenados a perpetua marginalidad, éstos derrocaron en 1948 a Gallegos. La iniciativa fue por otra parte recibida favorablemente por el interés petrolero y por Washington, que bajo el estímulo de la guerra fría estaba abandonando la preferencia por los gobiernos elegidos y constitucionales, que había alcanzado su máxima intensidad alrededor de 1945.

A esta primera etapa, en la cual -bajo la presidencia del jefe militar del movimiento de 1945, Delgado Chalbaud- el objetivo parece ser una solución electoral acordada con los partidos rivales de Acción Democrática, que despoje a ésta del lugar central que ha conquistado en la política venezolana, sigue luego de la muerte de éste (ocurrida en circunstancias poco claras), la tentativa de crear un poder de base militar, que se espera legitimar por vía electoral, en beneficio de su sucesor en el poder, el coronel Pérez Jiménez. Pero éste no obtiene el apoyo de los partidos rivales de Acción Democrática, ya arro-

jada a la ilegalidad junto con el comunismo, y en 1952 sólo llega a la presidencia constitucional gracias a la abierta falsificación de los resultados electorales; para mantenerse en ella debe implantar un dictadura cada vez más estricta, mientras una ola de prosperidad deja atrás todo lo antes conocido en un país que gracias a la bonanza petrolera no ha dejado un instante de acrecerla en los años de la depresión mundial.

Mientras el gobierno gasta febrilmente en la transformación de Caracas en una gran capital mundial, el crecimiento espontáneo de ésta se refleja en la expansión de sus suburbios elegantes, pero también de otros que albergan a una extendida clase media y en la orla de nuevos barrios de barracas que alojan a los protagonistas de un éxodo rural cada vez más vertiginoso. Es que, tanto en la agricultura como en otras actividades, el nuevo régimen militar abandona los esfuerzos por mantener y acentuar la diversificación económica, y prefiere bogar sobre la cresta de una coyuntura más favorable que nunca, ganando adhesiones múltiples entre empresarios extranjeros y locales llamados a participar en las oportunidades que ella ofrece, y restando ímpetu a la oposición casi unánime del resto de la sociedad venezolana.

En la adversidad y el exilio, Betancourt revisaba en sentido aun más moderado su programa político; si siempre había sabido que en un país que ocupa en el mundo el lugar de Venezuela era factible la democratización política, menos fácil pero en rigor viable la reforma social, pero totalmente imposible un cambio revolucionario que lo liberara de la hegemonía a la vez política y económica de los Estados Unidos, ahora –en una evolución paralela a la Haya de la Torre– estaba dispuesto a admitir que los condicionamientos eran aun más rígidos de lo que había creído en 1945; no sólo el ejército no era un aliado sólido de las fuerzas renovadoras, sino su reconciliación con un poder de base democrática no podría darse nunca por definitiva. Para afrontar el riesgo que ello suponía era preciso que la rivalidad entre las fuerzas políticas no se extremase hasta el punto de incitarlas a apartarse de la solidari-

dad en defensa del sistema electoral; ello vedaba a Acción Democrática la reconquista de la abrumadora hegemonía que el electorado venezolano le había asegurado luego de 1945.

Por años pareció que la extremada prudencia de esa nueva línea no iba a encontrar su premio; mientras Betancourt, sospechado en Washington de comunismo, esquivaba a duras penas la expulsión de su refugio portorriqueño, la dictadura de Pérez Jiménez aparecía lo bastante consolidada para servir de huésped al aerópago panamericano que en 1954 descubrió en la acción comunista un peligro para la democracia continental. Pero la solidez del régimen dictatorial dependía de la euforia petrolera; y cuando Pérez Jiménez decidió hacer de la renovación presidencial de 1958 la ocasión para una nueva victoria electoral obtenida del mismo modo que las suyas anteriores, esa euforia había disminuido ya considerablemente. La ascendente producción de petróleo en el mundo árabe afectaba negativamente tanto los precios como las posibilidades de expansión de la venezolana; el mineral de hierro, del que Venezuela se estaba convirtiendo en uno de los grandes productores mundiales, daba beneficios fiscales reducidos debido a la excesiva generosidad de los términos con que su explotación había sido concedida a empresas norteamericanas, y el proyecto de reconquistar la holgura financiera a través de un monopolio estatal de la industria petroquímica fue recibido con hostilidad por los intereses petroleros que hasta entonces habían dado firme apoyo a la dictadura.

En medio de prosperidad y popularidad declinantes, y tras de un fracasado golpe aeronáutico, tres semanas de motines populares persuadieron a las fuerzas armadas de la conveniencia de entregar al dictador a su destino. En enero de 1958 una junta militar tomó el poder y convocó a elecciones; en ellas Betancourt fue elegido presidente gracias al apoyo del voto rural, mientras en Caracas el primer puesto correspondía al almirante Wolfgang Larrazábal, presidente de esa junta, que agregaba a su popularidad de vencedor de la dictadura el apoyo del comunismo y el atractivo de una campaña electo-

ral que instrumentaba con la discreción necesaria motivos antinorteamericanos, presentando a Betancourt como el candidato de recambio preferido por Washington luego de la caída del dictador que tan bien le había servido.

Así la nueva prudencia de Acción Democrática se contó entre las causas del deterioro electoral que la obligaría luego a perseverar en ella; la alianza con fuerzas políticas más conservadoras, ofrecida primero a éstas y a los sectores de intereses como garantía contra las consecuencias políticas y sociales del abrumador predominio electoral del partido de Betancourt, se hace necesaria porque ese predominio es cosa del pasado, y pronto también porque la acentuación de la línea moderada provoca en sus filas escisiones y defecciones significativas. Se entiende por qué, cuando la revolución cubana comience a otear el horizonte continental en busca de áreas donde extender su influencia, creerá haber encontrado en Venezuela una particularmente prometedora.

En **Guatemala**, un proceso comenzado bajo análogos auspicios va a tomar un curso muy diferente. Como en Venezuela, el punto de partida es, pocos meses después de la caída de Ubico, un alzamiento exitoso de oficiales jóvenes, que elimina a la cúspide militar y convoca a elecciones; en ellas es elegido presidente Juan José Arévalo, que en su largo exilio argentino había ganado prestigio académico e intelectual y anunció la intención de promover reformas políticas y sociales significativas. Más importantes que las introducidas por vía legislativa fueron las que provinieron de la acción de organizadores de trabajadores y campesinos que por primera vez pudieron actuar libremente en Guatemala, que se reflejaron en un aumento dramático de los salarios reales y una incidencia más efectiva de la legislación laboral, por otra parte muy ampliada. Ese esfuerzo de organización, en el que tuvo papel importante el comunismo guatemalteco, que pese a la sostenida persecución dictatorial contaba con los cuadros necesarios para ello, estuvo muy lejos de ofrecer al nuevo régimen una base popu-

lar de amplitud y coherencia comparable a la de Acción Democrática en la Venezuela de 1945-48; su sostén principal seguía estando en el sector adicto del cuerpo de oficiales.

Al llegar el momento de elegir sucesor para Arévalo se perfilaron dos candidatos militares, pero uno de ellos, el mayor Arana, murió en circunstancias que sus adictos juzgaron sospechosas. Las sospechas se dirigían desde luego contra su rival, el coronel Jacobo Arbenz, que de ese modo tan poco auspicioso alcanzó la presidencia en 1950. Con una base militar cuyas fisuras conocía demasiado bien, Arbenz procuró intensificar el esfuerzo de movilización y organización popular, extendiéndolo a áreas rurales antes no afectadas, con lo que –si abrió el camino para una progresiva expansión y consolidación de su base popular– aumentó peligrosamente la intensidad y la amplitud de la oposición a su gobierno.

Esa nueva tendencia tuvo su expresión más típica en la intensificación de la reforma agraria iniciada ya por su predecesor; sin duda la ley de 1952 adoptaba principios más moderados que la reforma agraria mexicana, en cuanto afectaba sólo a tierras incultas, pero esas tierras incluían las de los mayores propietarios, en particular de la United Fruit Company, que controlaba la economía de las tierras bajas del Atlántico y se sentía también amenazada por el proyecto de construcción de un puerto oceánico y una carretera al Atlántico, que la hubiera despojado del control total del acceso al tráfico internacional, que le aseguraban el ferrocarril y los puertos de que era propietaria.

John Foster Dulles, secretario de Estado del presidente Eisenhower, que parecía sentir como propios los contratiempos que afrontaba la compañía frutera, decidió bien pronto poner fin a una experiencia que hallaba tan peligrosa para los intereses de ésta como para los de los Estados Unidos. En cuanto a esto último el afianzamiento de una presencia comunista sin duda minoritaria en un rincón de América Central era quizá menos alarmante que la actitud de un gobierno que, al frente de una nación tan pequeña y débil como Guatemala, rehusaba

a movilizarse para la cruzada anticomunista emprendida desde Washington; Dulles no se equivocaba sin duda al concluir que tolerarlo infligiría grave daño a la solidez del sistema panamericano. Como se ha visto ya, una vez tomada la decisión, no le fue difícil llevarla a la práctica.

La caída sin lucha del gobierno Arbenz fue seguida de la destrucción de las organizaciones obreras y campesinas destinadas a crear finalmente una base sólida para la revolución guatemalteca, y las ahora formadas bajo distinta inspiración nunca iban a adquirir peso comparable a aquéllas. El primer beneficiario de ese vacío político algo artificial fue el coronel Carlos Castillo Armas, jefe de la pequeña fuerza disidente ahora victoriosa, que iba a ocupar el poder hasta su asesinato, en 1957; desde él no fue capaz de crear una base política para el grupo de oficiales que luego de apoyar a la revolución de octubre de 1944 se opusieron a su creciente ímpetu reformista; en 1958 fue elegido para reemplazarlo el general Miguel Ydígoras Fuentes, cuya identificación con el orden político y militar anterior a 1944 lo hacía menos odioso a la opinión que los herederos de la restauración de 1954, ahora rodeados de unánime impopularidad; su encumbramiento parecía cerrar por fin el interregno abierto en 1944. Muy poco había en el panorama del país que invitase a imaginar para el futuro algo mucho peor que la combinación muy tradicional de oligarquía y dictadura, que -salvo durante ese interregno- había gobernado a Guatemala hasta donde alcanzaba memoria de hombre, sin ahorrar represiones brutales, pero sin necesidad de hacer de la masacre su favorito instrumento de gobierno. Unos años más e iba a hacerse evidente que, en la etapa de confrontaciones más agudas que se estaba abriendo, sólo ese recurso podría salvar el orden que la iniciativa de los Estados Unidos había restaurado en 1954 en Guatemala.

La oleada democratizadora que, estimulada primero por la esperada victoria de las Naciones Unidas, iba a adquirir aun mayor ímpetu en la inmediata postguerra, alcanzó en el resto de

Latinoamérica resultados aún más efímeros o superficiales. En **Ecuador**, se ha visto ya, ésta se había traducido ya en 1944 en un retorno de Velasco Ibarra al poder, esta vez bajo los auspicios de un frente de liberales disidentes, socialistas y comunistas; una vez en él se apresuró una vez más a romper con todos ellos para evolucionar rápidamente hacia la dictadura; era la oportunidad que esperaba el ejército para librarse de él; bajo égida militar fue elegido presidente Galo Plaza, miembro de una de las dinastías político-económicas que capitaneaban el liberalismo costeño; bajo su gobierno el litoral iba a completar su transformación en gran productor de bananas, que -comercializadas por la United Fruit Company, de la que el presidente había sido alto funcionario- eran producidas por finqueros medianos cuyo surgimiento estaba cambiando el paisaje social litoraleño.

Pero ni esa prosperidad bananera -que iba a ser breve- ni su impacto social pudieron impedir el retorno de Velasco Ibarra, victorioso en la elección presidencial de 1952 gracias al apoyo de un nuevo caudillo de Guayaquil, Guevara Moreno, que supo hacerse vocero de las masas urbanas cada vez menos identificadas con el liberalismo. Una vez más a la victoria de Velasco siguió la ruptura con sus apoyos políticos; el ya anciano caudillo, que en su destierro argentino se había puesto en la escuela del peronismo, retornó de modo más sistemático a su vieja receta, que combinaba autoritarismo, ruptura con izquierdas y derechas, antitradicionalismo verbal y conservadurismo esencial, pero esta vez pudo por lo menos alcanzar, entre crisis y tormentas, el término de su mandato, gracias al apoyo casi abierto del partido conservador, que esperaba y logró heredar el poder, pero no evitar en 1960 un nuevo triunfo del hombre que aseguraba verazmente que para ser elegido presidente de Ecuador sólo necesitaba acceso a un balcón desde el cual arengar a sus compatriotas.

Esa historia agitada y revuelta esconde otra menos obvia. Tanto en la costa como en la sierra, los antiguos lazos sociales comienzan a ser erosionados por transformaciones económicas, creando en la primera una sociedad demasiado di-

versa y compleja para permanecer bajo la tutela de la oligarquía liberal, y en la segunda -gracias sobre todo a la expansión de los mercados urbanos, y en primer lugar el de Quito- una transformación de la agricultura sin duda aún limitada a ciertas áreas, que sorprendentemente los campesinos indios son capaces de utilizar a veces mejor que una clase señorial cuyo siniestro poder había sido denunciado con muy buenas razones por la literatura indigenista floreciente en Ecuador. Es el vacío político y social creado por una transición que está destruyendo silenciosamente mucho del viejo orden, pero no parece aún estar erigiendo otro en su lugar, el que los ecuatorianos esperan ver llenado por ese irrisorio redentor que es Velasco Ibarra, y su historia tragicómica es a la vez la de un siempre contrastado comienzo de democratización de la vida ecuatoriana.

En **Paraguay** el resurgimiento de una exigencia antidictatorial, estimulado por la victoria mundial de las democracias, pudo en cambio ser aplastado. En 1945 el general Higinio Morínigo, que había gobernado como dictador desde 1941 con el apoyo del partido colorado, creyó oportuno inclinarse a los nuevos vientos y dirigir la democratización del régimen al frente de una alianza de colorados y febreristas, adictos estos últimos al coronel Franco y su fracasada revolución renovadora de 1937, que en el camino habían aligerado su acervo ideológico de motivos fascistas.

El ensayo de liberalización duró pocos meses, pero en 1947 la dictadura debió afrontar una revolución apoyada por liberales, febreristas y comunistas, que encontró eco militar muy amplio y sólo pudo ser sofocada gracias al apoyo del gobierno peronista de Argentina. El desenlace incluyó una convocatoria a elecciones generales destinada a transferir el poder a Natalicio González, jefe e ideólogo del coloradismo, que unía a la devoción por la tradición militar y autoritaria de Paraguay anterior a la derrota de 1870 la simpatía por ciertos motivos ideológicos agitados por el aprismo. Desde el gobierno, Gon-

zález buscó reemplazar la dictadura militar con la de su partido, creando organizaciones coloradas paralelas a la policía y el ejército. Ante desarrollos tan alarmantes, éste decidió que la hora de la liberalización había llegado, y promovió el reemplazo de González por Federico Chaves, jefe del ala moderada de su partido, que -aunque mostró mayor respeto que González por el influjo militar- lejos de introducir la apertura política que muchos esperaban, buscó perpetuar el predominio alcanzado por su partido mediante una versión más decididamente paternalista de la política social introducida por el peronismo en Argentina.

El ejército reconoció también en ella una amenaza a su hegemonía, y en 1954 el general Stroessner derrocó y reemplazó a Chaves; desde entonces gobierna Paraguay un régimen esencialmente militar, que ha hecho del partido colorado un agente sin autonomía real, y reprime con dureza cualquier manifestación políticamente independiente. Durante el largo gobierno de Stroessner, el país se aproxima al modelo centroamericano: preocupado por la expansión económica, a la que favorece mediante la expansión de la red de comunicaciones, el régimen ignora sistemáticamente la problemática social que pareció vislumbrarse en Paraguay a partir de la década de 1930. Hasta 1960 sus esfuerzos en favor del desarrollo económico alcanzaron resultados casi imperceptibles: los cuatrocientos mil emigrantes que para esas fechas habían abandonado un país entonces de menos de dos millones, instalándose en Brasil y en Argentina, si no eran necesariamente -como quieren los adversarios del régimen- refugiados políticos, eran en cambio fugitivos del estancamiento económico y la cerrazón social en que su patria parecía encerrada sin esperanza de evasión.

Al avance de intensidad sin duda muy desigual de esa oleada democratizadora traída por el fin de la segunda guerra se opone una excepción sólo aparentemente paradójica: es la de **Uruguay**, que durante la guerra ha realizado ya su restaura-

ción democrática, cerrando el leve paréntesis dictatorial abierto en 1933, y lo ha hecho bajo el signo de una adhesión militante y obsesiva a la causa de las Naciones Unidas, que había suscitado esperanzas tan imprecisas como extendidas sobre las bienaventuranzas que iba a traer a ese pequeño país la victoria democrática.

La decepción era desde luego inevitable: no sólo las novedades que se esperaba habían de trasformar radicalmente la vida cotidiana de los uruguayos no se estaban produciendo, sino la inflación comenzada durante la guerra no cejó una vez terminada ésta. Era la oportunidad que esperaba Luis Alberto de Herrera, veterano jefe de la fracción mayoritaria del partido blanco, que se había marginado ruidosamente de la unión sagrada consolidada en el apoyo a la democratización interna y a la causa de las Naciones Unidas; su campana electoral de 1946, en la que remozó su temática con motivos tomados del peronismo argentino, aunque no le dio la victoria (pese a ser Herrera el candidato más votado, gracias a la Ley de Lemas, el coloradismo, que se había presentado unido, pudo imponer a su no menos veterano rival batllista, Tomás Berreta), abrió el camino para una reunificación bajo su jefatura del partido blanco, dividido desde 1931, que volvía a hacer de éste un rival electoral del coloradismo gobernante.

El retorno del batllismo al poder que le había arrebatado el golpe de estado de 1933 tenía entonces muy poco de triunfal, y el vicepresidente Luis Batlle Berres, sobrino del fundador de esa fracción mayoritaria dentro del coloradismo, advertía muy bien la necesidad de darle nuevo vigor adaptando sus orientaciones a la coyuntura de postguerra. Aunque pronto llevado a la presidencia por la muerte de Berreta, poco pudo hacer para impulsar esa renovación que juzgaba necesaria, ya que enfrentaba una poderosa oposición interna, y la del diario fundado por el gran caudillo y controlado por los hijos de éste, que, proclamándose únicos intérpretes legítimos de la ortodoxia batllista, la reorientaban por su parte en sentido cada vez más conservador. El ascenso de Batlle Berres, prime-

ro lento y gradual, se vio favorecido cuando la crisis coreana atrajo a ese oasis de estabilidad política y social que era entonces Uruguay capitales fugitivos suficientes para imprimir un ritmo vertiginoso a la vida económica; la variante que Batlle Berres propugnaba, que sin romper con las orientaciones populares del batllismo busca hacer de él el representante político de una nueva clase industrial a la que favorecería mediante un proteccionismo justificado con motivos ideológicos nacionalistas (variante sobre la que gravita, de modo más discreto pero más decisivo que en el herrerismo, el modelo peronista), pareció de pronto la más adecuada para esa inesperada coyuntura que vivía Uruguay.

En el marco del ejecutivo colegiado, introducido en 1952 por una nueva reforma constitucional, Batlle Berres alcanzó auténtico control del gobierno sólo en 1954, pero ya entonces la afiebrada prosperidad había comenzado a desvanecerse, dejando como legado no sólo un impresionante conjunto de rascacielos de lujo en la capital, sino nuevas y exigentes pautas de consumo para las masas urbanas. En el sector rural, mientras la gran ganadería exportadora usaba eficazmente el contrabando al Brasil para defenderse de una política de precios inspirada también ella en la peronista, la de granja, tradicionalmente protegida por el batllismo, y la pequeña ganadería para el mercado interno, que recibían el pleno impacto de esa política, iban a ser movilizadas por Benito Nardone, un comentarista radiotelefónico que hablaba en nombre del «hombre olvidado», y que tras de un paso fugaz por el comunismo y el coloradismo se transformó en jefe de un movimiento ruralista al que en 1958 volcó en favor del partido blanco.

Surgió así una alianza política -del interior blanco, de los departamentos granjeros, algunos de ellos tradicionalmente colorados, del difuso descontento de Montevideo- que ese año llevó al poder al partido que lo había perdido en 1865. Era para Herrera una victoria casi póstuma, de la que sólo conocería los primeros y ya amargos frutos. La coalición triunfante

no intentó seriamente destruir, como había prometido, la burocracia parásita, y buscó (aunque en vano) aliviar la crisis de la industria que había condenado por artificial. Aunque ello no podía serle reprochado (un país en el cual la mayoría de la población vivía de esas actividades condenadas no hubiese sin duda tolerado la aplicación literal del programa que había votado), tampoco bastó desde luego para devolver a Uruguay la prosperidad perdida; el desencanto sería pronto tan intenso como la euforia suscitada por el triunfo blanco.

Ese desencanto adquiere pronto una dimensión específicamente política; visto desde lejos, Uruguay era el país que había sabido restaurar y conservar el orden democrático en una Latinoamérica convulsionada; de cerca ese milagro revelaba sus causas demasiado terrenales: el anquilosamiento de clientelas electorales consolidadas por pactos de distribución de los cargos públicos (el 40 por 100 pertenece de derecho a la oposición) explica, a la vez que la estabilidad institucional, el crecimiento desmesurado de la burocracia.

El creciente estancamiento socioeconómico viene así a hacer visible para todos el de un orden político incapaz de ofrecerle respuestas eficaces; y ello debilita a los ojos de sus gobernados la legitimidad de un régimen sin embargo dotado hasta el exceso de todos los rasgos visibles de la representatividad (la vida política es totalmente libre, multitudinaria y activísima, y el porcentaje de votantes que son a la vez candidatos en las listas de alguna de las cada vez más numerosas fracciones de los partidos tradicionales es sin duda el más alto del planeta).

En América Central esa misma oleada democratizadora de la que brotó la revolución guatemalteca, cuyo derrocamiento iba a marcar quizá el punto extremo de su reflujo, iba a tener un impacto tan desigual como en el resto de Latinoamérica. En **Nicaragua** no alcanzó siquiera a turbar la solidez del dominio de Somoza (ni aun el asesinato de éste en 1956 iba a poner fin al predominio de esa empresa dinástica y política a la vez, de la que la elección de 1957 hizo titular a su hijo Luis),

mientras el grupo gobernante acrecía sus provechos promoviendo una modernización económica centrada sobre todo en la agricultura de exportación, que agregó a los rubros ya tradicionales (café, productos de la ganadería y bananas) el algodón y otros. Mientras en Honduras y El Salvador la transición a regímenes más oligárquicos que dictatoriales iba a mantenerse, en Costa Rica la guerra fría, en cuyos escollos naufragó la revolución guatemalteca, favoreció en cambio el éxito de otra a la que las circunstancias llevaron a definirse frente al conflicto mundial de modo muy distinto.

Desde 1940 –se ha visto ya– un gobierno de base oligárquica había introducido a **Costa Rica** en el camino de la reforma social, pero sus iniciativas, que aportaron beneficios ciertos a los asalariados y la clase media dependiente, ofrecían en cambio muy poco a los restantes sectores medios, y en particular a esa ancha franja de labradores independientes que hacía la peculiaridad de Costa Rica en el marco centroamericano. A la oposición conservadora, que –identificada con los sectores económicamente dominantes– había adquirido fuerza a partir de 1943, vino a sumarse en 1946 la de un nuevo partido, de orientación socialdemócrata, fundado por un finquero de pasado conservador, José Figueres, que buscó hacerse intérprete de esos grupos hasta entonces dejados de lado por el régimen reformador. Cuando en 1948 el presidente Teodoro Picado buscó imponer como sucesor a su predecesor José Calderón Guardia, una coalición del partido de Figueres y de la Unión Nacional conservadora conquistó la mayoría para el jefe de ésta, Otilio Ulate. El congreso desconoció ese resultado, y a ello siguió una guerra civil, en que las milicias costeñas, organizadas por los comunistas, se transformaron en el más sólido apoyo militar del régimen, jaqueado por las reclutadas en el Valle Central por Figueres y finalmente victoriosas.

Por año y medio Costa Rica fue gobernada por una junta presidida por éste, que disolvió el ejército, nacionalizó la banca, introdujo un plan de fomento agrícola y desarrollo energético, costeado con un impuesto al capital, y arrojó al comunis-

mo a la ilegalidad. Ese anticomunismo militante se reveló providencial cuando Somoza, a cuya protección se habían acogido los dirigentes derrocados, amenazó intervenir para restaurarlos: a él se debió el veto de Washington, que salvó a una revolución más ambiciosa e impaciente que la guatemalteca.

Pero las elecciones para una asamblea constituyente, en abril de 1949, constituyeron un revés para las fuerzas de Figueres y un triunfo aplastante para las conservadoras, y a fines de ese año Ulate era elegido presidente por mayoría igualmente abrumadora. Su gestión presidencial, caracterizada por una draconiana austeridad en los gastos, complementada con medidas tan impopulares como la subida de los impuestos a las exportaciones, inspiró un descontento generalizado, que facilitó el resurgimiento del comunismo sindical, reprimido con extrema dureza, y abrió el camino para el desquite de Figueres, cuyo Partido de Liberación Nacional obtuvo en 1952 una victoria igualmente abrumadora.

Desde el gobierno, Figueres iba a implementar su programa originario, aumentando el impuesto a la renta, introduciendo el proteccionismo industrial y retornando a la política de fomento agrícola. Mientras incluía entre los beneficiarios de este acriollado *welfare state* a los pequeños empresarios urbanos y rurales, ampliaba el sistema provisional, asistencial y sanitario ya puesto en obra desde antes de 1948, y le incorporaba los hospitales y escuelas creados en la costa por la United Fruit, iniciando así la incorporación más plena a la vida nacional de un sector antes marginal por su origen y su ubicación geográfica.

Liberación Nacional se constituyó así en uno de los polos de un sistema político en cuyo marco ha venido alternándose en el gobierno con su rival conservador. Pero es sin duda algo más que eso; mientras sus periódicas derrotas electorales reflejan el mal humor del electorado durante momentos difíciles de la economía, o su insatisfacción ante una gestión administrativa particularmente infortunada, ellas no abren brechas en el consenso que apoya el modelo socioeconómico

con el cual el partido de Figueres se identifica, y que sus adversarios, que conocen los límites del mandato que han recibido, se guardan muy bien de revisar. Su deuda el *welfare state* creado por la revolución costarricense, como el uruguayo con el cual tiene no poco en común, es sobre todo una solución para tiempos prósperos, pero el contexto económico en que le tocó desenvolverse, aunque conoció altibajos, atenuados en parte en sus efectos porque el alineamiento de Costa Rica en el conflicto internacional le aseguró acceso privilegiado a fondos de fomento norteamericanos, no le hizo en esta etapa afrontar adversidades lo bastante intensas para ponerlo en crisis.

Otra revolución más radical que la costarricense también pudo consolidarse gracias a las oportunidades creadas por la guerra fría. Era la boliviana, que introdujo una quiebra del equilibrio político, social y étnico sin duda aún más honda que la dejada en herencia por la mexicana. De 1946, se recordará, fue el trágico derrumbe del régimen militar nacionalista, rodeado entonces de tan intensa impopularidad que pocos creían que las corrientes políticas que se habían identificado con él, y en primer término el MNR, tuviesen nada que esperar del futuro.

Ese derrumbe dejaba el campo libre para los partidos tradicionales, a los cuales la consiguiente depuración del cuerpo de oficiales devolvió su antiguo influjo sobre el ejército, y el comunista, que había contribuido decisivamente a organizar la protesta popular que preparó el derrocamiento de Villarroel, y esperaba canalizar en su favor el fermento revolucionario tan vivaz en **Bolivia** desde 1936. No iba a ser así, sin embargo; el frente electoral que lo unió con el Partido Liberal, quintaesencialmente oligárquico, fue derrotado por una coalición de las fuerzas que habían sido rivales del liberalismo durante el antiguo régimen; ni esa derrota, ni el entusiasmo con que los vencedores se alinearon en la guerra fría, lo iban a disuadir de identificarse ante las clases populares con una restauración oligárquica que prefería llamar democrática, y en cuyo home-

naje requería que esas clases renunciasen a acciones reivindicatorias capaces de amenazar la frágil estabilidad del régimen.

Mientras tanto la coyuntura de postguerra se revelaba desfavorable a la economía boliviana; el monopolio del estaño creado por las victorias japonesas se había desvanecido irrevocablemente, y ese núcleo dinámico del sector exportador volvió a su anterior atonía, con las consecuencias esperables para la economía y sobre todo para los ingresos del Estado, que debió recurrir más que nunca a la emisión. El creciente desencanto se reflejó en un acelerado resurgimiento de las fuerzas políticas derrotadas en 1946; el MNR, que no creía ya posible volver al poder en los furgones de un nuevo golpe militar, y se estaba despojando de las orientaciones filofascistas tan influyentes en él en el pasado, transformaba aun más su fisonomía gracias a la incorporación de la base sindical y obrera organizada bajo signo trotskista, que ahora, bajo la jefatura del dirigente minero Juan Lechín, pasaba en su mayoría a constituir una nueva ala izquierda del movimiento.

Víctor Paz Estenssoro, candidato presidencial del MNR así reestructurado, fue en la elección de 1951 el más votado por el electorado de elite creado por la legislación aún vigente, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Ese resultado –que permitía adivinar el descontento más abrumador de los sectores tanto más numerosos a quienes la ley privaba de representación– bastó para poner en crisis al régimen; un golpe de estado promovido por las autoridades constitucionales que eran formalmente sus víctimas colocó en el poder al general Ballivián, pero suscitó bien pronto una sublevación, que compensó su mínimo apoyo militar con el muy eficaz de las improvisadas milicias mineras y el de un alzamiento popular que en unos días arrebató al ejército el control de la capital.

Esa victoria sobre el ejército regular cerraba la larga agonía del régimen oligárquico; desde abril de 1952 la revolución estaba en el poder. Ella no sólo colocó en la presidencia a Paz Estenssoro, y al conceder el sufragio a los analfabetos cambió para siempre la base formal del poder político en Bolivia; la

lucha que le dio el triunfo había ya transformado al ejército en una sombra de sí mismo y creado en las milicias mineras un heredero de su poderío militar, cuyo nuevo ascendiente halló inmediato reconocimiento a través de la nacionalización del estaño. Puesto que, pese a algunas veleidades en contrario, los antiguos propietarios iban a ser abundantemente indemnizados, y que, al conservar las plantas refinadoras que previsoramente habían instalado fuera del país, podían dictar los términos con que adquirirían el producto de sus antiguas minas, la nacionalización podía hacer muy poco por aliviar la situación económica o financiera de Bolivia. Pero no era por eso menos ineludible: entre los derechos que su victoria otorgó a los mineros figuraba el de asegurarse por fin condiciones de trabajo menos insoportables, y ello condenaba a empresas ya escasamente prósperas a producir indefinidamente a pérdida; muy comprensiblemente, sólo el Estado podía tomar a su cargo una explotación así concebida.

Pero, más que el peso financiero de una iniciativa tomada en homenaje al poder minero, Paz Estenssoro y sus camaradas del viejo tronco del MNR temían los efectos más generales que ese poder nuevo podía tener en una etapa de redefinición radical del orden político y social boliviano; de inmediato buscaron limitarlos promoviendo a otros poderes rivales. El más obvio era el del ejército, pero su renacimiento sólo podía ser lento; la reforma agraria fue en cambio el instrumento que permitió improvisar un foco alternativo de poder a la vez político y militar capaz de poner dique inmediato a la expansión del minero.

La militancia campesina sólo había cobrado fuerza en algunos distritos afectados por el avance de la agricultura de mercado; salvo en esas zonas (Cochabamba, la cuenca del Titicaca), en que existía ya una nueva dirigencia campesina probada en la lucha, en casi todas partes la reforma reemplazó el influjo social de los hacendados por el de notables surgidos de las comunidades mismas bajo el signo político del MNR; así en los sindicatos campesinos resurgió un estilo de lideraz-

go que hundía sus raíces en el pasado colonial, ejercido a menudo en el marco de rivalidades entre comunidades cuyas raíces eran igualmente pluricentenarias. Aunque ni aun su abrumadora superioridad numérica llegó a hacer de las milicias campesinas rivales serias de las mineras, la incorporación de esa vasta masa sólo superficialmente movilizada al sistema político boliviano introdujo en él un elemento estabilizador que el nuevo régimen supo apreciar en lo que valía.

Lo apreciaba también porque otorgó al MNR una base electoral numéricamente mayoritaria, que le permitió afrontar la pérdida del apoyo de las masas urbanas que en 1952 habían contribuido decisivamente a llevarlo al poder. Sin duda algunas de las innovaciones del régimen revolucionario terminarían por ofrecer ventajas a la población urbana; así, la reforma agraria, al acelerar la expansión de la economía de mercado en la Bolivia campesina, y el plan de construcción vial que a más de facilitar esa expansión estaba incorporando a la economía nacional a las tierras bajas del Oriente, no tocadas por la reforma, terminarían por crear una agricultura más capaz de satisfacer la demanda de los mercados urbanos que en el pasado. Pero en lo inmediato la reforma agraria interfería en un sistema de aprovisionamiento en que las haciendas habían tenido parte importante, y sus consecuencias negativas en el de las ciudades provocaban resentimientos tanto más vivos porque el régimen se veía obligado en cambio a proteger mejor contra ellas a los ahora poderosos mineros.

Si la revolución boliviana sobrevivió a esa erosión de sus apoyos urbanos, que terminó por hacer de Falange Socialista Boliviana (movimiento semifascista que por extinción de los partidos oligárquicos canalizaba la oposición de derecha) la expresión electoral mayoritaria en las ciudades, no fue tan sólo porque había ganado en el campo apoyos suficientes para compensar esas defecciones, sino porque los Estados Unidos juzgaron importante asegurar esa supervivencia mediante fondos que atenuaban el desequilibrio de la balanza comercial; de este modo, a un costo modesto, podían exhibir

el ejemplo de una revolución más radical en sus innovaciones sociales (y aun en las formulaciones programáticas de algunos de sus mayores dirigentes) que todas las que la predecieron en Latinoamérica, que avanzaba y se consolidaba bajo la mirada benévola de la administración Eisenhower.

Ésta iba a fatigarse bien pronto, sin embargo, de su papel de mecenas de la revolución social; más que cualquier audacia ideológica era la irreductible heterodoxia del manejo financiero boliviano la que provocó esa fatiga. Ya hacia 1955 se decidió a usar el influjo que le daba su generosidad para exigir el retorno a una gestión más cuidadosa; cuando en 1956 Hernán Siles Suazo reemplazó en la presidencia a Paz Estenssoro, tomó a su cargo imponer esa inflexión en el rumbo revolucionario, pero, aunque realizó progresos reales en el camino de la estabilización económica, no logró atenuar los problemas que debía afrontar la población urbana ni tampoco introducir cambios decisivos en la explotación del estaño, luego de que los primeros intentos en ese sentido chocaron en la resistencia irremovible de los sindicatos mineros.

Vino así a confirmarse que, precisamente porque la revolución había alterado para siempre las bases mismas del desequilibrio sociopolítico boliviano, ella fijaba a las iniciativas de sus dirigentes límites que éstos podían hacer muy poco por ensanchar. En 1960 Paz Estenssoro reemplazaba en la presidencia a Siles Suazo, de cuya gestión se había distanciado; su compañero de fórmula era Juan Lechín, el dirigente de los mineros y de la izquierda del movimiento, y esa nueva transición, abierta cuando la revolución cubana estaba comenzando a cambiar el contexto en que la boliviana había debido morigerarse para sobrevivir, parecía anunciar que ésta se disponía a buscar nuevo impulso a través de un retorno a las fuentes. No iba a ser así, sin embargo; en el nuevo contexto como en el anterior, el problema que se esconde detrás de casi todos los que surgen en el camino de la revolución boliviana seguirá siendo el de crear un orden económico a la vez viable y adecuado al marco sociopolítico tan vigorosamente implantado por la victoria revolucio-

naria de 1952; en la etapa que se avecina la solución para ese problema seguirá sin hallarse, y el bloqueado proceso revolucionario se instalará permanentemente en la crisis.

Una crisis aun más honda iba a hacer de esta etapa de temprana postguerra la más sombría en la historia de **Colombia**. En sus comienzos no parecía particularmente amenazadora: sin duda el presidente Ospina Pérez, triunfante en 1946 gracias a la división liberal, estaba abandonando su esperada moderación para rehacer la hegemonía conservadora en zonas en que ésta había sido erosionada por un cuarto de siglo de gobierno liberal, y no vacilaba en usar para ello recursos que incitaban a los hostigados liberales a hablar de terror blanco. Ya para entonces el control de las fuerzas conservadoras había pasado de manos del presidente a las del jefe del sector más intransigente de ese partido, Laureano Gómez, decidido a poner los recursos del gobierno tras de su candidatura presidencial, que esperaba ver triunfante en 1950 tras de un proceso electoral que no juzgaba posible ni acaso deseable que transitase exclusivamente por carriles pacíficos.

El deterioro del clima político era tan avanzado que los liberales no osaban ya usar otro instrumento de protesta que el silencio; contaban ahora para ello con un jefe, Jorge Eliécer Gaitán, capaz de conducir a las gigantescas muchedumbres antes movilizadas por su oratoria ardiente en inmensas marchas silenciosas por las calles de la capital. En esas vísperas de guerra civil, y mientras sesionaba en Bogotá una conferencia de la Organización de Estados Americanos que estaba ya introduciendo en Colombia los nuevos desgarramientos de la guerra fría, el asesinato de Gaitán ofreció el punto de partida para el más devastador tumulto urbano de la historia hispanoamericana. El «Bogotazo» hizo vacilar por un instante al gobierno de Ospina, que buscó apaciguar a la oposición (por otra parte más intimidada que vigorizada por una explosión de cólera popular que, aunque suscitada por el asesinato de su caudillo, había escapado por completo a su control), inclu-

yéndola en el gabinete. Una vez pasada la emergencia volvió a otorgar su apoyo a la ofensiva conservadora en el campo, y ello empujó de nuevo al liberalismo a la oposición. Con ello se completó la implantación de la violencia, que pronto iba a dominar en amplias regiones de Colombia. Esa violencia, aunque era en parte respuesta indirecta a los avances de la movilización de nuevos sectores sociales, que, promovida por el liberalismo en el gobierno, se estaba revelando ya incompatible con el predominio oligárquico que caracterizaba a ambos partidos, y se alimentaba por otra parte en las tensiones sociales acumuladas en el campo colombiano en el último cuarto de siglo, iba a traducir la reacción frente a esas situaciones nuevas al lenguaje más tradicional del conflicto faccioso.

Así, si es innegable que las vastas migraciones suscitadas por el ciclo de matanzas, que no iba a amainar hasta que sus víctimas se contaran por centenas de miles, facilitaron la concentración de las explotaciones y la propiedad rural (y con ellas el avance de cultivos subtropicales que desde comienzos del siglo habían sido dejados atrás por el del café), esos efectos sólo iban a aflorar más tardíamente, y en lo inmediato la violencia se presentaba, sobre todo desde que Laureano Gómez tomó la presidencia en 1950, como el instrumento por excelencia para una reestructuración de la vida colombiana sobre pautas análogas a las vigentes en la España de Franco, aplicadas aquí con mayor intransigencia. Así, mientras el liberalismo, el comunismo y los sindicatos a ellos adictos eran sometidos a persecución sistemática (y estos últimos obligados a afrontar en situación tan desventajosa la concurrencia de los de obediencia católica, ahora integrados en una organización nacional que gozaba del patrocinio gubernativo), Gómez no vaciló en desafiar a la opinión pública norteamericana extendiéndola también a las misiones protestantes y su todavía exigua grey de conversos...

Hacia 1953 se hizo evidente que la violencia amenazaba instalarse en permanencia; en las zonas en que los liberales habían logrado sobrevivir a la ofensiva conservadora, y en al-

gunas de refugio, estaba arraigando la guerrilla liberal; el ejército, que había sido testigo en parte cómplice de la violencia y temía que su perpetuación terminaría por arrastrarlo a un papel más activo, se resolvió a poner fin a la tentativa restauradora de Gómez, e instaló en su lugar al general Gustavo Rojas Pinilla, identificado con las corrientes moderadas del partido conservador, cuyo ascenso al poder fue celebrado también con comprensible entusiasmo por los liberales. Pero bien pronto se hizo evidente que las ambiciones de Rojas Pinilla no se limitaban a facilitar el retorno al orden político tradicional; no sólo buscó una base política más personal en el antiguo séquito de Gaitán, sino se lanzó a extenderla ignorando las tradicionales lealtades facciosas, y utilizando -de acuerdo con la lección del peronismo- los clivajes sociales que se perfilaban cada vez más nítidamente en las ciudades colombianas. Aunque no lo logró del todo (y en un país menos urbanizado que Argentina aun un éxito más pleno hubiera tenido consecuencias limitadas) avanzó lo suficiente en ese proyecto para alarmar a los partidos tradicionales, que en 1954 habían asentido a su transformación en presidente constitucional, pero no estaban ya dispuestos a guardar la misma actitud frente a su nueva postulación en la elección de 1958.

Cuando se hizo claro que Rojas Pinilla no renunciaba a ese proyecto y que, fuerte de unos apoyos algo problemáticos, reaccionaba con impaciencia y brutalidad crecientes ante la oposición que hallaba en el camino, el doctor Alberto Lleras Camargo, jefe del liberalismo, emprendió una peregrinación al balneario español donde transcurría su destierro el doctor Laureano Gómez, y llegó con él a un acuerdo por el cual los dos partidos históricos convenían en restaurar más sólidamente la democracia, comprometiéndose por una etapa de dieciséis años a turnarse en la presidencia y dividir por mitades los cuerpos colegiados. La concertación del Pacto Nacional tuvo efectos inmediatos; la Iglesia se sumó a la lucha contra el régimen de Rojas Pinilla, y a ello siguió una huelga general, cuyo triunfo quedó asegurado desde que vino a apo-

yarla un universal *lock-out*, seguida del exilio del presidente y candidato, decidido por sus camaradas, y el alineamiento del ejército detrás del pacto de los partidos.

Pese a una victoria quizá demasiado fácil, el Pacto Nacional debía afrontar una situación muy poco prometedora. Estaba tocando a su fin la bonanza cafetera que había atenuado las consecuencias de la violencia, y por otra parte, aunque ésta había dejado de ser el elemento central de la vida colombiana, su herencia residual sobrevivía en amplias regiones como un rasgo permanente, contra el cual el nuevo régimen no esperaba poder hacer más que el de Rojas Pinilla. Mientras eso ocurría en la Colombia rural, en las ciudades el pacto de los dos partidos ahora devueltos más plenamente a sus dirigencias tradicionales parecía dejar al margen a sectores que –sólo representados en ellos en el pasado a través de una izquierda liberal que en la última década había perdido toda gravitación– no habían cesado de crecer, gracias a la transformación de los mayores centros en refugios contra la violencia, y a la industrialización que siguió contando con apoyo gubernativo. A la vez, mientras el Pacto Nacional aseguraba a los partidos contra el retorno de conflictos que se habían revelado insoportables, al imponerles una tregua a la vez política y militar amenazaba debilitar los mecanismos que habían permitido a esas organizaciones de liderazgo irreprochablemente oligárquico conservar por más de un siglo la lealtad de las masas colombianas.

En **Chile** la transición política inaugurada por el triunfo del Frente Popular, aunque como la colombiana pareció en esta primera etapa de postguerra haber perdido el rumbo, no vino a exceder un marco institucional que parecía haber recobrado su proverbial firmeza. En este país más programáticamente abierto que ningún otro al ejemplo europeo, la victoria de las Naciones Unidas hallaría eco local en la resurrección del Frente Popular (de hecho quebrado desde el comienzo mismo de la guerra), no sólo a través de la concertación de una alianza elec-

toral de radicales y comunistas, sino del retorno a posiciones programáticas que resucitaban el impulso reformista y la agitación de masas de 1938. Ellos hicieron del jefe de la izquierda radical, Gabriel González Videla, el más votado de los candidatos en la elección presidencial de 1946; la seguía Cruz Coke, candidato del conservadurismo que, adaptándose también a la agenda política emergente en la temprana postguerra, se abría más que en el pasado a perspectivas socialcristianas.

Puesto que González Videla no había alcanzado la mayoría absoluta de sufragios, vino a hacerlo presidente el voto de un congreso en que la alianza vencedora no tenía mayoría, y cuyo apoyo seguiría necesitando. Para retenerlo, el presidente decidió ampliar la alianza victoriosa incluyendo en su gabinete, a más de miembros de su partido y el comunista, a representantes del Partido Liberal, ya en ese momento el más ortodoxamente conservador del espectro político; ello parecía hacerle imposible adoptar una política coherente, pero de hecho se tradujo en el perfilamiento gradual de una muy conservadora, que obligó al Partido Comunista primero a retirar su colaboración ministerial y luego su apoyo parlamentario a González Videla; mientras los sindicatos que recibían su inspiración de ese partido adoptaban una línea cada vez mas militante, las elecciones municipales de 1947 reflejaban un dramático avance del electorado comunista.

González Videla decidió entonces llevar su reorientación política hasta sus últimas consecuencias, lo que le permitiría no sólo resolver su problema más inmediato, sino alinear firmemente a Chile en la guerra fría, y conservar así las simpatías que en Washington habían encontrado las sucesivas administraciones de Frente Popular; tras de reprimir (con el auxilio de la fracción mayoritaria del dividido socialismo) la huelga general con que vino a desafiarlo el comunismo, puso a éste fuera de la ley, despojó a sus militantes de sus derechos electorales y sindicales, y confinó a no pocos en campos de internamiento; de todo ello iba a alcanzar repercusión mundial la fuga del país de Pablo Neruda, gran poeta y senador comunista.

Así se extinguió el Frente Popular, mientras la transformación del radicalismo en el núcleo de un nuevo alineamiento conservador comenzaba por hacer de éste el primer partido chileno. Una vez pasada la emergencia creada por la confrontación con el comunismo y los sindicatos se hizo evidente que el bloque gobernante, que debía atender mejor al interés terrateniente, era incapaz de ofrecer la misma atención que en el pasado al de las clientelas políticas del radicalismo y la izquierda, tanto en las clases populares como en las medias, desprotegidas frente a las consecuencias de la coyuntura económica de postguerra, que no se presentaba demasiado prometedora para Chile, y obligaba a usar cada vez más sistemáticamente la inflación para atenuar los conflictos entre los distintos intereses económicos y sectores sociales.

No fue entonces sorprendente ver a los sectores medios y populares engrosar el séquito de una figura cuyos atractivos comenzaban también a ser descubiertos desde otros cuadrantes de la sociedad chilena; era la del veterano Carlos Ibáñez, ahora profeta, bajo el signo de la escoba, de una renovación radical puesta al servicio de objetivos socioeconómicos que incluían el fin de la inflación, la reforma agraria, la modernización rural y la aceleración del avance industrial. Aunque este adversario de la entera clase política (dentro de la cual sólo contaba con el apoyo de un sector socialista) fue el candidato más votado en 1952, no alcanzó tampoco él mayoría absoluta, pero el congreso se apresuró a elevarlo a la presidencia.

Su gestión iba a ser muy poco afortunada; si al comienzo de ella mantuvo su tono desafiante y aun pareció prohijar un retorno al activismo militar que un cuarto de siglo antes le había permitido hacer de los partidos instrumentos dóciles a su voluntad, esas imprudencias iniciales sólo iban a acrecer las prevenciones de una clase política de cuya tolerancia pronto iba a necesitar. Porque, mientras la situación de la economía chilena era tan crítica como él había afirmado, bien pronto se hizo evidente que la solución que había prometido para todos sus problemas era sencillamente inhallable; un nuevo agrava-

miento del desequilibrio externo obligaba pronto a Ibáñez a aplicar las recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, cuyo aval necesitaba para obtener los fondos que permitirían afrontar la emergencia. La austeridad así impuesta provocó reacciones populares de inesperada violencia, que persuadieron al ya anciano caudillo de la necesidad de apaciguar la tensión promoviendo el retorno gradual del comunismo a la legalidad, mientras la reunificación del socialismo bajo el liderazgo de Salvador Allende, que se había mantenido leal a la alianza comunista durante una larga travesía del desierto (cuyo momento más sombrío se había alcanzado en 1952, cuando su candidatura presidencial fue aplastada bajo el alud ibañista), reflejaba la coincidencia de todas las fracciones socialistas en favor de esa alianza, de la que esperaban que diera por fin a la izquierda una gravitación que reflejara mejor que en el pasado su ascendiente electoral.

Las elecciones de 1958 marcaron un momento decisivo en la transición política abierta veinte años antes por el triunfo del Frente Popular. Allende, como campeón de la izquierda, era uno de los dos mayores rivales de la contienda presidencial, pero era algo más que eso, en cuanto la alianza de izquierda por él liderada iba a ofrecer a partir de entonces, y hasta la abolición del sistema democrático en 1973, el único polo permanente en un espectro político en que la frontera que separaba a esa izquierda del resto de las corrientes partidarias era universalmente reconocida como la que realmente contaba. Esa radical novedad era consecuencia de que Chile -aunque más identificado que nunca con su tradición democrática-representativa- estaba cada vez más tentado de ensayar soluciones audaces para romper un estancamiento socioeconómico ya insoportable.

La súbita transformación de la izquierda en el único protagonista necesario del drama político chileno encerraba para ella quizá más riesgos que promesas, en cuanto la ubicaba en posición irreductiblemente antagónica con las fracciones política y socialmente dominantes mucho antes de que sus avan-

ces le permitiesen afrontar esa batalla con esperanzas de victoria. Es lo que el comunismo advertía muy bien, y por ello se obstinaba en oponer la noción de frente popular a la de frente de trabajadores preferida por el socialismo que si se atenía a esta última era en parte porque quería redefinirse sin ambigüedades como un partido proletario en su base y revolucionario en sus aspiraciones, pero sobre todo porque prefería limitar las alternativas abiertas a la temible versatilidad táctica del partido comunista. Paradójicamente, eran las reglas del juego de coaliciones electorales consustanciando con la tradición política chilena las que forzaban a la nueva alianza de izquierda a colocarse en ruptura con esa tradición; no por ello esa ruptura era menos real, y la única fórmula que, al asegurar la unidad de la izquierda, le devolvía la posibilidad de una victoria electoral hacía a la vez casi imposible para esa izquierda cosechar en paz los frutos de su victoria.

En ese frente más amplio al que aspiraba el comunismo, el papel de vocero del reformismo de clase media no correspondía ya a un radicalismo en inocultable declinación, sino a un nuevo partido, el Demócrata Cristiano, creado en 1957 al incorporarse a Falange Nacional (una formación socialcristiana que databa de la década de 1930) el ala izquierda del partido conservador; ya en las elecciones presidenciales de 1958 esa formación tan reciente ganaba al tercer lugar para su candidato Eduardo Frei, relegando al cuarto puesto al Partido Radical, y se constituía así, en espera de cosas mayores, en la expresión política dominante de esas clases medias. Sus progresos, aun más súbitos que los de la izquierda, marcaban un nuevo avance en la disolución del sistema partidario heredado; también ofrecía una paradójica consecuencia de ella el triunfo de un candidato presidencial –Jorge Alessandri– que, aunque apoyado por los de derecha tradicional, lo debió sobre todo al apoyo que su prédica personal le granjeó en un electorado de clase media que había comenzado a desesperar del Frente Popular antes de su crisis final, y se preocupaba ya más de defenderse de los estragos que la inflación estaba haciendo en su ni-

vel de vida que de mejorarlo gracias a la acción tutelar del Estado.

Alessandri había predicado el retorno a la ortodoxia financiera y la apertura de la economía chilena al comercio mundial, mediante los cuales esperaba poner freno a la inflación y superar el estancamiento de la economía; en cuanto a lo primero alcanzó, aunque a muy alto costo, un éxito menos incompleto de lo que sus adversarios habían creído posible; en cuanto a lo segundo iba a fracasar por entero; su triunfo no había bastado para persuadir a los inversores extranjeros -con los que había contado para revitalizar al sector exportador- a reorientarse hacia un país de economía estancada y curso político imprevisible; bien pronto se hizo indudable que su victoria no ofrecía la solución final de los dilemas que habían venido a colocarse en el centro del conflicto político chileno, y era tan sólo una peripecia más en un proceso cuyo desenlace estaba aún lejano.

Mientras en Colombia el curso político se hundía en la tragedia, y en Chile continuaba avanzando entre opciones sociopolíticas meticulosamente explicitadas por partidos que se identificaban con ellas, en **México** su rumbo de avance seguía fijado por una elite gobernante que desde 1940, sin dejar de proclamar su lealtad a los objetivos sociales de la revolución, los había sacrificado sistemáticamente a la aceleración del avance económico; durante el gobierno de Ávila Camacho, la izquierda política y sindical, que había acatado disciplinadamente la pausa a las reformas sociales (que había creído sólo temporaria) y la sucesión presidencial decidida por Cárdenas, se vio marginada de toda posición de poder cuando Vicente Lombardo Toledano, única figura de envergadura nacional que sobrevivía de ella en el elenco dirigente, debió inclinarse ante la decisión que le arrebató la jefatura de la central sindical en beneficio de su segundo, Fidel Velázquez, cuya moderación y ductilidad le permitirían conservarla hasta hoy.

La elección del sucesor de Ávila Camacho pudo así darse en un marco político cuya solidez se reflejaba en la ausencia de

desafíos al heredero designado por el presidente saliente tras de arcanas consultas con quienes ocupaban las cumbres del poder en el partido y el Estado, y en la madurez ya alcanzada por el ritual de instalación del nuevo monarca sexenal, en que la campaña electoral hacía las veces de *joyeuse entrée* del heredero del trono.

Era éste Miguel Alemán, que a diferencia de sus predecesores no provenía del ejército, y pertenecía a una generación que no había participado en las luchas de la revolución. Bajo su égida México entraba por fin de lleno en la etapa postrevolucionaria; esa transición política era consagrada por el cambio de nombre del partido que Cárdenas había bautizado de la Revolución Mexicana, y que en la reorganización decidida por Alemán recibía el de Revolucionario Institucional, pero se reflejaba también en la supresión de su rama militar; la nueva normalidad postrevolucionaria exigía hacer del que había sido brazo armado de la revolución un ejército del Estado, que –respetuoso del orden institucional– debía servir todavía de instrumento eficaz de una política gubernativa a la que ya no aspiraba a orientar, y de cuyas filas no saldrían ya los encargados de fijarla desde la presidencia de la república.

Con la generación que entraba en el goce del poder junto con el nuevo presidente, la memoria nostálgica de la epopeya revolucionaria dejaba paso a la épica futurista del desarrollo económico. Para hacerlo más rápido iba a canalizarse el apoyo financiero del Estado al sector privado, de modo predominante pero no exclusivo a través de Nacional Financiera, una corporación de fomento que, creada bajo Cárdenas, ahora ve enormemente acrecidos sus recursos, pero también se iba a intensificar el proteccionismo industrial, a favorecer el ingreso disimulado pero igualmente sistemático de la inversión industrial extranjera, deseosa de captar un mercado de otro modo inalcanzable, y a expandir dramáticamente los gastos en obras publicas, en particular caminos, que a más de favorecer la consolidación del mercado interno removían obstáculos al avance del turismo, que –junto con las remesas de emi-

grantes a Estados Unidos– aliviaba para México los desequilibrios del sector externo que habían frenado y todavía iban a frenar tantas expansiones económicas en otras partes de Latinoamérica.

Como se advierte, aunque la economía mexicana introducía soluciones también ensayadas en el resto de Latinoamérica, lo hacía combinándolas de un modo que le era peculiar; detrás de esa peculiaridad se ha descubierto ya el factor diferencial constituido por la intimidad necesariamente mayor entre la economía mexicana y la estadounidense, pero al lado de éste cuenta otro sin duda aun más decisivo, a saber, la excepcional libertad de acción de que goza un régimen heredero de una revolución que ha destruido el poder terrateniente y ha encuadrado a las fuerzas populares en organizaciones que, habiéndoles facilitado en el pasado la conquista de sus objetivos, conservan vigor bastante para impedirles presionar eficazmente en pos de nuevas conquistas; es ella sobre todo la que hace que en México la política económica sea decidida desde la cumbre del poder político con mayor independencia de las sugestiones o reacciones de la sociedad, mucho más eficazmente controladas allí que en el resto de América latina.

Por otra parte, en esa sociedad más resignada a aceptar los límites que imponen a sus aspiraciones las políticas socioeconómicas adoptadas por quienes pueden hacerlo, resultaba más fácil a éstos limitar también el influjo político de la fuerza armada, que en el resto de Latinoamérica se estaba transformando, en un marco de acrecida tensión sociopolítica, en un grupo de presión aun más temible que en el pasado. Con ello se acrecienta aún más la libertad con que la elite gobernante mexicana puede decidir su política económica y financiera: del mismo modo que los sectores populares, el ejército se beneficia muy poco con los progresos de la economía, y su parte en la distribución de los ingresos del Estado está llegando a ser de lejos la más baja entre las de las naciones grandes y medianas de Latinoamérica.

El balance de la gestión de Alemán era en verdad impresionante: mientras el avance industrial figuraba entre los más rápidos del planeta, sorprendentemente el de la agricultura lo dejaba atrás; el crecimiento de la población rural (que encontraba parcial desemboque en una urbanización acelerada) no había excedido aun los límites más allá de los cuales deja de traducirse en el de la producción y del excedente agrícolas. Sin duda el cuadro incluía puntos oscuros: el fomento estatal de la economía era financiado en buena medida con una inflación cuya tasa figuraba entre las más altas en Latinoamérica, y la desazón que ella despertaba en zonas muy amplias de la sociedad urbana extremaba en ella la impopularidad de un gobierno que patrocinaba casi abiertamente los avances de la corrupción. Ésta volvía ahora a ser, como en esa otra época de consolidación del orden revolucionario que había sido la década de 1920, el instrumento por excelencia de integración de la elite política con las que había encontrado en la cumbre de la sociedad mexicana; gracias a los provechos de la industrialización y la urbanización terminaba ahora de tomar forma una nueva elite a la vez política y de negocios destinada a tener peso creciente en la vida mexicana.

En 1952 Adolfo Ruiz Cortines sucedía a Alemán; aportaba al régimen una reputación de probidad casi anacrónica, y desde el gobierno no sólo se esforzó por eliminar los ribetes más escandalosos del estilo administrativo de su predecesor, sino innovó profundamente en la política financiera de éste. México entraba así en una etapa que se esperaba iba a extenderse hasta donde alcanzaba el horizonte futuro, definida como de desarrollo estabilizador, en fórmula que recogía muy bien la ambición de abrazar simultáneamente objetivos aparentemente incompatibles ya reflejada en el nuevo nombre del partido oficial. Con ella México venía de nuevo a aplicar una solución probada en el resto de Latinoamérica, y de nuevo lo hacía con una diferencia: mientras la nueva etapa fue inaugurada de modo escasamente original por una devaluación drástica, destinada a favorecer a la vez a las exportaciones, al

turismo y al sector industrial, esta medida, que en otras partes agotaba rápidamente sus efectos, y debía ser constantemente reiterada, fijó por veinte años el valor internacional del peso mexicano, lo que desde luego favoreció la continuación de la inversión extranjera y permitió la del avance económico, a un ritmo sin duda más lento pero aun muy satisfactorio.

En 1958 la elección de Adolfo López Mateos pareció anunciar una nueva inflexión de la política y la economía mexicanas, que luego de casi dos décadas de sistemática negligencia parecía volver a interesarse por los objetivos de justicia social siempre inscritos en las banderas revolucionarias. Así creyeron entenderlo organizadoras sindicales cercanos al Partido Comunista. pero la huelga ferroviaria con que se prometían inaugurar con beneplácito del Estado una nueva etapa de acción sindical espontánea provocó una represión extremadamente brutal, cuyos efectos fueron perpetuados por las severísimas sentencias que la justicia impuso a los responsables de la iniciativa. Con ello quedó suficientemente claro que –si bien la elite gobernante advertía la necesidad de introducir reajustes en su política laboral– no estaba dispuesta a tolerar que las presiones de los afectados por ella dictaran el ritmo y la cuantía de las concesiones que se disponía a hacerles.

La inflexión en la política obrera resultó a la postre menos significativa que la de la política agraria, que iba a seguir líneas aún más ambiguas. López Mateos dio nuevo impulso a la reforma, pero tras las cifras que reflejan transferencias de tierras sólo superadas durante el sexenio de Cárdenas se ocultan dos procesos de características muy distintas. Por una parte, en el México central la creciente presión campesina sobre la tierra era aliviada gracias a la entrega de la aún no afectada, que ampliaba las filas de un campesinado cuyo papel seguía siendo producir los alimentos básicos para la creciente población no agrícola, a precios que no le permitían exceder en mucho el nivel de subsistencia; gracias a esa iniciativa México podrá mantener por una década más su autosuficiencia en esos rubros, en medio de un aumento de población cada vez más vertiginoso.

En el norte del país el avance de la reforma es en cambio un aspecto decididamente menor de una transformación de gigantesca envergadura: es la puesta bajo cultivo, gracias a vastísimos planes de irrigación, de tierras antes desérticas donde se expande una agricultura altamente tecnificada y capitalizada; pronto en rincones del norte mexicano surgen réplicas de las empresas de *agribusiness* del sudoeste norteamericano; una agricultura de exportación cada vez más diversificada arraiga en ellos junto con la que produce para un mercado interno en que pesa cada vez más la demanda de clases altas y medias urbanas en rápida expansión, que no aceptan ya limitarse a la dieta tradicional; aunque esa agricultura capitalista halló a menudo modo de utilizar el marco proporcionado por la reforma agraria, en las ocasiones aun más numerosas en que la inventiva jurídica debía confesarse impotente para lograrlo, los obstáculos legales eran obviados por las distracciones de los encargados de llevar esa reforma al norte mexicano.

De este modo México, si no había creado la sociedad más igualitaria que la revolución había prometido, y por el contrario mantenía después de décadas de gestión revolucionaria desigualdades más marcadas que otros países latinoamericanos gobernados por regímenes abiertamente conservadores, podía exhibir avances económicos excepcionales en Latinoamérica y el mundo, que aparecían tanto más admirables porque contaba sólo con recursos limitados y de difícil explotación, y debía absorber por añadidura las consecuencias de un avance demográfico que estaba ya superando la velocidad más allá de la cual dejaba de ser un factor positivo de crecimiento. Más importante que todo ello era que gracias a ese avance económico, y aun sin creer en la seriedad del compromiso igualitario del régimen, la mayor parte de los mexicanos podían advertir que en el orden surgido de la revolución su lote estaba mejorando; aunque esa mejora era modesta, era también continua, y tan excepcional en la experiencia histórica mexicana que bastaba para dar por fin al régimen revolu-

cionario la legitimidad a los ojos de sus gobernados que tan largamente había venido buscando.

Mientras en Latinoamérica continental el agotamiento de las alternativas abiertas al fin de la segunda guerra parecía anunciar un desenlace sin duda decepcionante pero no necesariamente dramático, en las **Antillas** que habían sido españolas y ahora estaban sometidas al dominio o la abrumadora hegemonía de los Estados Unidos, ese desenlace incluiría una revolución que desde Cuba iba a cambiar radicalmente los datos básicos de la historia latinoamericana.

Iba a ser ésta la culminación de un curso histórico sin paralelo no sólo en Hispanoamérica continental, sino aun en el resto del Caribe español, que por cierto no iba a mostrarse más receptivo que el continente al ejemplo de la isla revolucionaria. Mientras en la República Dominicana la postguerra no había traído consigo otra novedad que la consolidación del régimen de Trujillo, junto con la de la plantación azucarera, en Puerto Rico en cambio las hondas transformaciones introducidas bajo el dominio norteamericano comenzaban a afectar decisivamente todos los aspectos de la vida en la isla.

La anexión de **Puerto Rico** a los Estados Unidos había sido seguida -se recordará- de un intento de asimilación a través de la escuela, pronto fracasado y paulatinamente abandonado, pero también de progresos sanitarios que contribuyeron a un aumento de población cada vez más rápido, y de la conquista reglada de las tierras fértiles por intereses azucareros norteamericanos, que erigen rápidamente una nueva economía casi tan cercana al monocultivo como lo había sido la de las West Indies durante el florecimiento de la plantación.

Pese a todo ello, hasta la segunda postguerra esos cambios apenas habían repercutido en la vida pública de la isla, en la cual la actividad cultural, ideológica y política continuaba monopolizada por una exigua minoría urbana, cuya adhesión era disputada por corrientes autonomistas a las partidarias de una incorporación total a la nueva metrópoli, mientras los

adictos a la independencia no veían abierto otro camino que una insurrección por el momento imposible. El ingreso de la política de masas en Puerto Rico fue en buena medida el resultado de la acción tenaz de un hijo del patriciado autonomista, Luis Muñoz Marín, cuya trayectoria ideológica se desenvolvió en un contexto ya más norteamericano que hispánico; muy influido por la experiencia del *New Deal*, simultáneamente con no pocos de los juveniles colaboradores de éste iba a dejar pronto atrás su originaria opción socialista en favor de un reformismo resignado a encerrarse en los límites impuestos por el orden vigente.

El Partido Popular Democrático por él fundado puso en primer plano temas que una clase política obsesionada por el lazo colonial había ignorado; con un programa de reforma social y progreso económico se lanzó a una exitosa recluta de adhesiones populares y campesinas. En 1947 triunfó en las primeras elecciones de gobernador (hasta entonces el cargo había sido de designación presidencial); como tal obtuvo de la metrópoli la reorganización de la isla como un Estado Libre Asociado, dotado de autonomía administrativa y educativa.

La experiencia así inaugurada, a la vez que protegió mejor a la peculiaridad hispánica de Puerto Rico de los ataques directos que antes había debido sufrir, estrechó enormemente el vínculo económico con la metrópoli. El programa de desarrollo del gobierno autónomo se apoyaba en efecto en el fomento de la inversión metropolitana, a la que ofrecía el incentivo de una fuerza de trabajo demasiado abundante para extremar sus pretensiones, y protegida por otra parte por una legislación social que seguía sólo a prudente distancia los avances introducidos en el continente. Y cuando se hizo evidente que la diversificación económica así inducida, pese a su éxito considerable, no era capaz por sí sola de dar ocupación a una población que crecía de modo cada vez más vertiginoso, tanto el uso de subsidios federales a los grupos desfavorecidos como el avance de la emigración al continente vinieron a ha-

cer más completa la dependencia económica de la isla respecto de su metrópoli política.

Esas limitaciones iban a hacerse sentir de modo cada vez más doloroso con el transcurso del tiempo; en lo inmediato el éxito económico portorriqueno aparecía tan impresionante como el mexicano, y al ser acompañado de un avance del bienestar popular más significativo que en México, vino a asegurar al caudillo y al partido que guiaban esa transformación un apoyo mayoritario cuya firmeza parecía inquebrantable; a diferencia de este heredero del antiguo autonomismo, el anexionismo hallaba aun difícil extender su influjo más allá de su antigua clientela oligárquica, y el partido independentista, aunque reclutaba amplias simpatías en las elites intelectuales, no alcanzaba a morder en las clientelas rústicas y plebeyas que seguían al partido de Muñoz Marín, mientras el nacionalismo, que se mantenía fiel a la táctica insurreccional, hallaba por su parte difícil aplicarla de modo eficaz.

Aun ante la opinión latinoamericana, nunca reconciliada con la inclusión de la isla en el botín ganado por los Estados Unidos en 1898, ese éxito rodeaba a la experiencia portorriqueña de un prestigio menos afectado de lo que podía esperarse por la gravitación que sobre ella conservaba un vínculo cuyas diferencias con el colonial esa opinión estaba lejos de hallar tan evidentes como Muñoz Marín. En una etapa en que la hegemonía norteamericana se afirmaba en casi toda Latinoamérica con vigor sin precedentes, y en Centroamérica y el Caribe se desplegaba como un casi desembozado dominio, lo que tenía de particularmente problemático el marco institucional que él adoptaba en Puerto Rico parecía menos decisivo que el hecho de que –al parecer en parte gracias a ese marco mismo– allí podía desenvolverse sin tropiezos ni alarmas una experiencia de reforma social en un marco de democracia representativa que compartía la inspiración y los objetivos de esos partidos populares que en el continente hallaban tan crueles obstáculos en su camino. Sólo la Revolución cubana, al devolver al nacionalismo antiimperialista al centro mismo

de la problemática política latinoamericana, vino a privar al experimento político y socioeconómico del Estado Libre Asociado de todo valor ejemplar.

Esa revolución, se ha adelantado ya, iba a constituir –a la vez que una honda ruptura en el curso histórico latinoamericano– el desenlace para un proceso histórico específicamente cubano, centrado –más quizá que en ninguna otra comarca latinoamericana– en la lucha por la independencia, en un marco de ideas que pasó sin solución de continuidad del patriotismo emancipador de fines del siglo XIX, que ofrecía eco tardío del que había dominado el continente a comienzos de esa centuria, a un antiimperialismo que, madurado en la experiencia cubana misma, se expresaba ideológicamente de modos muy varios.

He aquí un haz de convicciones y sentimientos a la vez muy poderosos y políticamente ineficaces; desde 1902 la **Cuba** que se dice independiente está sometida a la tutela política de los Estados Unidos, y la situación no cambia cuando en 1933 sus huellas son borradas de la constitución cubana por la derogación de la llamada Enmienda Platt. En 1944 la nación va a conocer por primera vez gobiernos elegidos por mayorías no forzadas o falsificadas, pero tampoco esta novedad elimina ese dato de base, que torna necesariamente vacía la victoria que lleva a la presidencia a Ramón Grau San Martín, el revolucionario cuyo derrocamiento los Estados Unidos habían buscado y finalmente conseguido en 1933. Jefe ahora del Partido Revolucionario Auténtico, le abría acceso al poder una libertad electoral que (como no era secreto) Batista sólo se había resignado a asegurar ante los imperiosos consejos del embajador norteamericano.

Desde la presidencia, Grau San Martín consolidó el predominio electoral de su partido mediante un uso sistemático de la corrupción, en la que pronto descubrió también ventajas más personales; en medio de una prosperidad azucarera que continuaba en la temprana postguerra, y mientras se atenua-

ban los problemas creados durante el conflicto mundial a los consumidores urbanos, el universal desprestigio que pronto vino a rodear a esa antigua vestal del fuego revolucionario no impidió que su ministro de Trabajo, Carlos Prío Socarrás, surgiese como su sucesor en 1948, en elecciones razonablemente libres de fraude y violencia.

Con Prío Cuba entraba de lleno en la guerra fría; los sindicatos adictos al partido oficial, que gracias a su acción ministerial habían hecho retroceder el influjo de los organizadores comunistas, gozaron ahora de todo el apoyo necesario para eliminar la influencia (a veces no sólo la influencia) de éstos. Pero esos avances son más que contrarrestados por los del descontento que sigue al fin de la prosperidad de postguerra; la baja del precio del azúcar devuelve todo su peso negativo al estancamiento de ese sector, que no ha dejado de dominar la economía; éste encuentra sin duda paliativo en la expansión ahora vertiginosa del turismo y sus menos respetables actividades conexas, pero ella no hace sino acentuar el rechazo que inspira un orden de cosas en que la corrupción parece invadirlo todo, y que es ahora incapaz de distribuir sus provechos con la misma generosidad que antes del fin de la holgura financiera.

Esa reacción a la vez patriótica y moralizante, que tocaba una fibra siempre sensible de la conciencia nacional, encontró una vocero eficacísimo en Eduardo Chibás, que como candidato del nuevo partido ortodoxo comenzaba a perfilarse como seguro vencedor en la elección presidencial de 1952; aunque su suicidio dejó un vacío ya imposible de llenar, el menos colorido candidato con que lo reemplazaron los ortodoxos parecía destinado a vencer a un oficialismo hundido en el desprestigio y privado de los recursos a los que había debido en el pasado sus mejores triunfos. Quien notoriamente no sería electo era el tercer candidato en la contienda: Batista, luego de una breve etapa en que se lo vio militar en el Movimiento de la Paz y otros igualmente cercanos a sus antiguos aliados comunistas, se había ya alineado sin equívocos en la

guerra fría, esperando ganar con ello tolerancia norteamericana para una intervención militar que corrigiese las consecuencias de la invencible frialdad que le seguía mostrando la opinión cubana. En 1952 esa intervención le entregó el poder, que debió ejercer de modo mucho más represivo que en el pasado, ya que hallaba frente a sí no sólo a la máquina política, desprestigiada pero aun poderosa, del Partido Auténtico, sino sobre todo a la poderosa corriente de opinión que los ortodoxos habían sabido movilizar, y encontraba en esa dictadura sin programa, obligada para sobrevivir a comprar complicidades en la clase política y tolerar la corrupción e ineptitud de la dirigencia militar, a un blanco adecuadísimo contra el cual extremar su militancia.

Fue precisamente un joven abogado incluido como candidato en las listas parlamentarias de la ortodoxia, Fidel Castro, quien el 26 de julio de 1953 capitaneó el asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, que en la mente de sus promotores debía marcar el comienzo de una insurrección generalizada; mientras el fracaso de la empresa vino por el momento a restar atractivos a la salida insurreccional, la ciega brutalidad de la represión aumentó la soledad del gobierno. En 1954 Batista es elegido presidente en comicios en los que es candidato único; a ello sigue una breve tentativa de distensión que permite a Castro trocar la cárcel por el destierro mexicano. En México organiza una diminuta expedición que en 1956 logra implantar un minúsculo foco guerrillero en la Sierra Maestra, y desde allí a la vez estimula y canaliza los avances de la oposición urbana, que muestra audacia creciente, pese a una represión cada vez más salvaje. El clima se torna así pronto más sombrío que durante la agonía del régimen de Machado; la presencia guerrillera en la sierra no puede seguir siendo ignorada; día tras día se hace presente al país a través de la voz de la radio rebelde, y finalmente la hace noticia mundial su aparición en la primera plana del *New York Times*. Pero si las expediciones militares no logran reducirla, sus esfuerzos por acelerar la descomposición del régimen mediante acciones de masa en las

ciudades alcanzan eco limitado; la huelga general proclamada por Castro fracasa cuando ni los sindicatos antes auténticos, que se han apresurado a acercarse luego del golpe a Batista, ni el comunismo, que rechaza la táctica insurreccional, le conceden apoyo.

Pero la guerrilla comienza ya a incursionar en el llano, y –como en tantas otras ocasiones en la historia de Cuba– los incendios de cañaverales sugieren que el gobierno de orden que quiere ser el de Batista es cada vez menos capaz de mantener el orden. Washington saca sus conclusiones, e impone un embargo de armas que, si no afecta la situación militar del régimen, cuya superioridad de armamentos sigue siendo abrumadora, revela que también la potencia dominante lo considera ya desahuciado. En agosto de 1958 comienza la ofensiva final del ejército rebelde, que enfrenta a un adversario ya totalmente desmoralizado; el primero de enero de 1959 los barbudos guerrilleros entran en triunfo en una capital en delirio: en ellos la opinión reconoce sobre todo a los continuadores y vengadores de esa revolución que busca a la vez la redención moral y la realización nacional de Cuba, y que ha sido ahogada ya una vez, en 1933, por las fuerzas siniestras que desde fuera y desde dentro han dominado siempre a la isla.

Iba a ser el motivo patriótico el que aseguraría la continuidad que a pesar de todo iba a mantenerse entre aquella revolución moral y política y esa otra revolución social que, luego de una década de febriles exploraciones, iba alcanzar su perfil definitivo sobre las líneas del modelo soviético. Aunque la aceptación sin reticencias de ese modelo iba a ser tardía, mucho antes de ella el proceso cubano había quemado etapas para definirse como una revolución social y antiimperialista dispuesta a buscar apoyo contra la hostilidad implacable de la antigua potencia dominante en la máxima rival de ésta. En el marco de esa vertiginosa metamorfosis Fidel Castro, que ha emergido en el día de la victoria como jefe del más importante de los focos insurreccionales y cuya primacía en el movimiento triunfante, aunque no se refleja aún en ninguna explícita

estructura de autoridad y mando, lo transforma a los ojos de los alborozados espectadores de la victoria revolucionaria en la corporización misma de ésta, se transforma en el Jefe Máximo de un régimen cuyo autoritarismo -precisamente porque se conserva por largo tiempo reacio a cualquier institucionalización precisa- conduce a una extrema concentración del poder en la solitaria cima que él ocupa.

Ya para sus contemporáneos esa precoz metamorfosis de la revolución cubana planteó un enigma que hasta hoy sigue vigente; lo que la torna enigmática no es por cierto la salida autoritaria, que sólo se aparta de la norma latinoamericana en cuanto vuelca en fórmulas nuevas una tendencia que no podría ser más vernácula, sino desde luego su rápido y lineal desemboque en una revolución social que tan pocos signos parecían anunciar en la Cuba de mediados del siglo XX.

A casi tres décadas de la victoria revolucionaria es posible definir con mayor precisión los términos de ese enigma; son ya muy pocos los que caracterizan al movimiento cubano como una protesta de la clase media, y no muchos creen aún que la facilidad con que una transformación tan radical se impuso a la sociedad cubana se debía a que el carácter dependiente de ésta privaba a su estructura de clases de los perfiles definidos que en otras más maduras hace del conflicto entre esas clases un elemento central, aun de transformaciones sociales de objetivos más modestos que la que afectaría a Cuba.

Pero esta definición menos inexacta de los términos del enigma no hace más fácil develarlo. Porque, cualquiera que sea la razón para ello, sigue siendo cierto que un movimiento que, aunque no se defina como socialista, prometía reformas socioeconómicas profundas, estuvo lejos de ganar adhesiones sólo entre los sectores a los que esas reformas debían beneficiar, y que a lo largo del avance de este movimiento que terminó por conmover a la entera sociedad cubana hubo hasta el fin, como ha subrayado un estudioso argentino, dos clases silenciosas; ellas fueron la clase obrera urbana y rural y el sector de las propietarias que dominaba el negocio azucarero, preci-

samente las que hubieran debido hallarse en el centro de un proceso revolucionario que hubiese encontrado su motor en las contradicciones de la sociedad.

La revolución que triunfa en el Año Nuevo de 1959, que no es por entonces una revolución social, es en cambio la siempre renaciente revolución cubana, que sigue aspirando a una rehabilitación a la vez moral y nacional, y está esta vez resuelta a no dejarse extraviar en el camino; es esa decisión la que, mientras termina por ponerla en el rumbo del socialismo, conserva para la inesperada opción socialista un apoyo que está sin duda ya muy alejado de la unanimidad que celebró la victoria revolucionaria, pero es con todo suficiente para mantener a Cuba en el cauce abierto por esa victoria, frente a obstáculos que llegan a ser abrumadores. Durante la batalla de Inglaterra, George Orwell creyó descubrir una inesperada vía británica al socialismo, y la resumió en la fórmula *My country, right or left;* ya en 1942 debió admitir que esa vía nunca iba a ser recorrida; el espectro de la derrota se había disipado demasiado pronto para decidir al patriotismo inglés a dar esa respuesta desesperada. Desde 1959 la Cuba revolucionaria debió en cambio luchar cada día por su supervivencia, y la fórmula inventada por Orwell para una revolución que nunca fue explica mejor que ninguna otra el secreto de esa supervivencia.

Ésta debió también no poco a los talentos políticos de su Jefe Máximo, que –resuelto a esquivar el destino de Grau San Martín, quien, tras de personificar en 1933 la misma esperanza cubana ahora encarnada en él, terminó como uno de los integrantes menos apreciados de un elenco político muy poco admirable– tampoco ambicionaba el papel de profeta desarmado de una revolución destinada a enriquecer el ya demasiado nutrido acervo de gloriosos lutos de la historia nacional. Puesto que estaba resuelto a conducir a la Cuba revolucionaria por el camino más difícil de todos, llevándola a un desafío abierto a la todopoderosa potencia hegemónica, Castro se concedía de antemano todas las facilidades que su sentido de

la oportunidad pudiese sugerirle; su percepción de los imperativos que su situación en el mundo imponía a una Cuba que quería ser de veras revolucionaria los expresó en una fórmula sabiamente ambigua, que proclamaba que en Cuba sólo se puede ser revolucionario si se es comunista; el sentido de esa fórmula se hace quizá más claro si se recuerda que para Cuba la opción soviética llegó antes que la opción socialista.

A lo largo de 1959, en efecto, la reforma social se detuvo mucho antes de tornarse revolucionaria. Una primera reforma agraria adoptaba principios mucho más moderados que la mexicana o la boliviana; a ella se agregaba una reforma urbana que rebajaba y congelaba alquileres, sobre líneas semejantes a las adoptadas en el continente por gobiernos de muy variadas orientaciones político-ideológicas; la economía era dirigida por un equipo de jóvenes especialistas que habían hecho su aprendizaje en organismos internacionales, y estaban ansiosos por aplicar soluciones que muchos economistas latinoamericanos juzgaban entonces de sentido común, poniendo a Cuba en el camino de una industrialización ya iniciada en el continente, y favoreciéndola mediante una expansión económica centrada en la del mercado interno, que debía encontrar su primer motor, también de modo escasamente original, en la inversión y el crédito del Estado.

Sin duda esas iniciativas, en cuanto reflejaban de todos modos la voluntad del Estado cubano de fijar el rumbo futuro de la economía, constituían un desafío muy serio a una potencia hegemónica cuyo representante en la isla había encontrado ya alarmante en 1940 la creación de un sistema monetario separado del norteamericano. Pero el mismo desafío se perfilaba mucho más nítidamente en las iniciativas políticas que en los programas sociales de la revolución, que (gracias a su moderación misma) estaban por otra parte ganando a ésta tan amplio apoyo en la opinión cubana que Fidel Castro pudo utilizar la identificación privilegiada que con ellos mantenía como arma decisiva para asegurar su avance hacia un poder no limitado por ninguna barrera institucional, en cuanto le era posi-

ble presentar verazmente a la institucionalización que muchos reclamaban como el modo más seguro de frustrar el impulso revolucionario antes de que éste introdujera en la sociedad cubana las transformaciones que ella no estaba ya dispuesta a ver frustrarse nuevamente.

Así, mientras la acción discreta de su hermano Raúl (el único de los miembros del grupo dirigente revolucionario que había mantenido relaciones estrechas y amistosas con el comunismo cubano), de Ernesto Guevara, el joven médico argentino que, luego de descubrir su vocación revolucionaria durante la agonía del gobierno de Arbenz en Guatemala, se perfiló como uno de los más eficaces jefes militares de la Revolución cubana, y de Camilo Cienfuegos, que sobresalió en las filas de ésta gracias a su instintivo arte de combatiente, aseguraba a Fidel Castro completo control del aparato militar, éste por su parte se lanzaba a conquistar en abierta batalla las escasas posiciones formalmente dotadas de autoridad decisiva en el apenas esbozado Estado revolucionario. En febrero de 1959 reemplazaba ya como primer ministro al moderado Miró Cardona, en julio su renuncia, seguida de una gigantesca movilización de masas, provocaba la del aún más moderado presidente Urrutia, reemplazado por el doctor Osvaldo Dorticós, prestigioso hombre de leyes que entendió mucho mejor la significación que el cargo presidencial tenía en la nueva Cuba, e iba a permanecer en él hasta 1976.

Era sobre todo el conflicto externo el que ritmaba el avance de Cuba hacia una revolución cada vez más radical. Inmediatamente después del triunfo revolucionario, la instalación de tribunales de excepción para juzgar a criminales de guerra creó las primeras dudas en el sector de opinión que, en los Estados Unidos como en Latinoamérica, creía reconocer en la victoria de la Revolución cubana un nuevo triunfo de tendencias que ya habían cosechado otros en Costa Rica, Venezuela y aun Puerto Rico. Y ya antes de que se definiera con nitidez la diferencia de objetivos finales entre esas corrientes y la cubana se hizo evidente que ésta no compartía la resignación con que

aquéllas acataban los límites fijados a sus iniciativas por el orden político y económico que pesaba en ese momento con más fuerza que nunca sobre Latinoamérica. Cuando aun no había renunciado a mantener a la Cuba revolucionaria en el sistema panamericano, Fidel Castro exigía de él una reforma radical de sus supuestos políticos, y otra aun más nítidamente revolucionaria del nexo económico entre Latinoamérica y la potencia hegemónica, que debía tomar a su cargo la financiación de las transformaciones necesarias para cerrar el abismo entre el desarrollo estadounidense y el atraso latinoamericano.

La iniciativa fue recibida con comprensible frialdad en los Estados Unidos, y no hizo nada por disminuir el recelo con que el gobierno de Eisenhower asistía al desplegarse de un proceso revolucionario que ya estaba llegando más lejos de lo que nadie había creído posible, y no parecía dispuesto a detener sus avances. La cada vez más decidida hostilidad de Washington tuvo ocasión de manifestarse en sus reacciones frente a los perjuicios, todavía poco cuantiosos, que las reformas económicas estaban infligiendo a intereses privados norteamericanos; bien pronto comenzaría a esgrimirse abiertamente la amenaza de supresión de la cuota azucarera, que tan eficaz había resultado en 1933. Pero intervino aquí un hecho nuevo: en febrero de 1960 Anastas Mikoyan, visitante oficial en La Habana, ofrecía en nombre del gobierno soviético un mercado alternativo para el azúcar cubano; con ese compromiso al que pronto iban a seguir otros, la URSS tomaba bajo su protección a una revolución que ya no creía posible asegurar por otro camino su supervivencia, y desde entonces nada volvería ya a ser lo mismo ni en Cuba ni en Latinoamérica.

Capítulo 7
Una encrucijada decisiva y su herencia: Latinoamérica desde 1960

1. La década de las decisiones (1960-1970)

Como ya se ha subrayado, sobraban razones para que la década que iba a abrirse en 1960 se anunciase como una de decisiones radicales para América latina. Las dos más importantes se han señalado también: ese hecho nuevo e imprevisible que era el giro socialista de la Revolución cubana vino a incidir en un subcontinente que descubría agotada la línea de avance tomada a tientas durante la depresión y la segunda guerra, y más deliberadamente mantenida en la postguerra, y comenzaba a adivinar que se estaba aproximando a otra de las difíciles encrucijadas que habían puntuado su breve historia. No iban a ser ésas sin embargo las únicas razones por las cuales tantos estaban dispuestos a profetizar en 1960 que se aproximaba una etapa en que no podrían ya postponerse las opciones que decidirían el destino futuro de América latina. Junto con ellas hacía sentir sus consecuencias el vigor inesperado del crecimiento económico, tanto en lo que comenzaba a llamarse el primer mundo como en el bloque socialista, que –a la vez que inspiraba un activismo nuevo en las potencias que desde uno y otro gravitaban sobre el subcontinente– acentuaba en éste la desazón al descubrir que en medio de esa ola expansiva cada vez

más impetuosa su propio ritmo de avance estaba lejos de acelerarse.

No por eso iba a cesar del todo la búsqueda de nuevas estrategias orientadas a prolongar hacia el futuro un avance que aparecía agotado en sus posibilidades; la superación del marco nacional parecía ofrecer un camino, y de 1960 data la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y la del Mercado Común Centroamericano. Pero, mientras el segundo alcanzó un impacto considerable antes de ver frenados sus progresos, la primera (que abarcaba a todos los países mayores y casi todos los restantes del subcontinente) luego de un temprano acuerdo sobre una primera lista de artículos desgravados, que esquivaba cuidadosamente afectar el monopolio interno de ninguno de los sectores productivos importantes en cada uno de los países miembros, fracasaría en todos los intentos de ampliarlas; a la vez se hacía cada vez más claro que luego del agotamiento del desarrollismo las uniones económicas estaban destinadas a ser instrumentadas por esos participantes cada vez más influyentes en las economías latinoamericanas que eran las empresas multinacionales, a las que venían a facilitar sus complicadas estrategias de organización y distribución de mercados; el bloque bolivarino, que comprendía a más de los países herederos de la Gran Colombia a los andinos, y que, surgido más tardíamente, buscó limitar el influjo de esos nuevos protagonistas de la vida económica, tampoco logró ir en cuanto a ello demasiado lejos.

Pero cabe dudar de que durante la década abierta en 1960 el problema más serio que debían afrontar las economías latinoamericanas fuese el avance tan denunciado de las multinacionales; salvo en México, donde ese avance había comenzado ya desde principios de la década anterior, y constituía en verdad uno de los aspectos básicos del «desarrollo estabilizador», el problema era cabalmente el opuesto: por razones que sólo en parte se vinculaban con la prudencia que inspiraban a los inversores los anuncios de inminente crisis sociopolítica pregonados desde todos los tejados, ese avance era demasiado lento

y parcial para incorporar más sólidamente (y así fuese al costo muy alto que los adversarios de esas empresas no se fatigaban de denunciar) a Latinoamérica en ese orden capitalista en vertiginoso ascenso.

Aunque el descubrimiento de que Latinoamérica hallaba difícil alcanzar el ritmo cada vez más acelerado de esa ola expansiva no era del todo nuevo, sólo luego del fracaso del desarrollismo vino a colocarse en el centro de la problemática latinoamericana; a lo largo de la década que se abría iba a parecer cada vez más claro a muchos que sería imposible superar la amenaza de estancamiento sin quebrar el marco del sistema político y económico internacional en que hasta entonces había debido desenvolverse Latinoamérica.

Esa convicción vino a dar popularidad a las distintas versiones de la llamada teoría de la dependencia, que partían de un diagnóstico no demasiado alejado del de Prebisch y, aunque no se privaban de reprochar al economista argentino que no lo hubiese acompañado de una precisa propuesta de soluciones económicas para los males registrados en ese diagnóstico, también se abstenían de adelantarla. Es que, a los ojos de los teóricos de la dependencia, lo que impedía a Latinoamérica superar el subdesarrollo era su integración subordinada en el orden capitalista mundial, y –aunque no todos los proponentes de esa teoría veían en la revolución socialista la única vía hacia adelante– todos coincidían en que era preciso introducir en ese orden modificaciones más hondas que los retoques hasta entonces invocados como necesarios por las corrientes reformistas latinoamericanas; a sus ojos, si los problemas eran económicos, su solución sólo podía ser política.

De este modo la reacción latinoamericana frente al estancamiento en que amenazaba hundirse el subcontinente venía a reforzar las que la Revolución cubana estaban suscitando entre quienes desde fuera aspiraban a orientar el rumbo de éste. En lo que tocaba a éstos últimos, el vigor que la ola de prosperidad había infundido a las economías y sociedades desde las cuales se disponían a orientar ese curso los animaba a hacer

pesar con mayor firmeza que nunca su influjo sobre el desorientado subcontinente; cuando en Washington o en Moscú se afirmaba con tanta seguridad que éste estaba entrando en una etapa decisiva, se quería decir entre otras cosas que quienes formulaban esa profecía se juzgaban capaces de hacer lo necesario para que así ocurriese.

El activismo menos cauteloso que así irrumpía en la política latinoamericana de los Estados Unidos tanto como en la de la Unión Soviética reflejaba por otra parte el que ahora avanzaba en todas partes, bajo el estímulo de un clima político, social y económico que parecía estar expandiendo cada día los límites de lo posible. Mientras aun la Iglesia católica, que –para usar la expresión desolada de uno de sus hijos– por más de un siglo se había resignado a no vivir para no morir, en el Concilio Vaticano II se decidía por fin a afrontar, así fuese con ánimo trepidante, los dilemas que durante esa larga etapa había juzgado prudente soslayar, los poderes terrenos se disponían a plasmar el futuro con una audacia menos atemperada por la prudencia. Así ocurría en los Estados Unidos, donde el presidente Johnson anunciaba la construcción de la *Great Society,* que utilizaría la creciente prosperidad para eliminar la penuria para todos los norteamericanos, y también en la URSS, donde Jruschov proclamaba próximo el momento de comenzar la transición al comunismo, basada también ella en el enorme avance de las fuerzas productivas durante la etapa que estaba llegando a su consumación.

Pero esa confianza nueva que ahora dominaba a los agentes externos que de veras contaban en Latinoamérica (los Estados Unidos, que habían dejado atrás a sus tradicionales rivales europeos, y esa presencia advenediza que era la URSS) iba más allá de estimular su activismo; también orientaba a éste hacia objetivos no sólo más ambiciosos sino parcialmente distintos que en el pasado. Así ocurría desde luego en cuanto a la URSS, no sólo porque su decisión de patrocinar el desafío cubano a la potencia hegemónica contrastaba con la cautela que había caracterizado anteriormente sus movimientos en el tablero

latinoamericano, sino porque a la redefinición más ambiciosa de sus objetivos político-diplomáticos en ese remoto teatro venía a sumarse la aquiescencia otorgada al rumbo inequívocamente socialista tomado por la revolución cubana, que reflejaba la convicción de que el nuevo dinamismo adquirido por el proceso socioeconómico a escala planetaria estaba haciendo obsoletas las lecciones de prudencia deducidas por la Tercera Internacional del desastroso desenlace de las revoluciones que en la entreguerra había buscado patrocinar desde Hungría y Alemania hasta China.

Desde el mismo modo en cuanto a los Estados Unidos. Sin duda su disposición a gravitar más decisivamente en Latinoamérica quedaba suficientemente explicada por el desafío cubano, y el patrocinio soviético que aseguró a éste la supervivencia, pero ellos no justificaban por sí solos el rumbo que la administración Kennedy quiso dar a esa política más activa. Ésta –aseguraba el joven presidente, que en su campaña había acusado a su predecesor Eisenhower de haberse limitado a responder de modo cada vez más rutinario a los sucesivos desafíos soviéticos, terminando por entregar totalmente la iniciativa a la potencia rival– no podía tener como objetivo central el demasiado limitado de restaurar la hegemonía norteamericana sobre Cuba y sí en cambio el de promover y orientar una transformación de las estructuras sociopolíticas latinoamericanas que las hiciese invulnerables a la tentación revolucionaria que había ganado a la Gran Antilla.

El teatro principal del combate contra la amenaza revolucionaria se trasladaba así al continente, y a él estaban orientadas las innovaciones propuestas por la administración de Kennedy, que se inspiraban por una parte en una implícita teoría general sobre las precondiciones necesarias de procesos revolucionarios, y por otra en las lecciones ofrecidas por los procesos de cambio socioeconómico desencadenados en Asia y África a partir de la segunda guerra mundial, que, puesto que habían tomado en algunos casos vías revolucionarias y en otros no, parecían ofrecer enseñanzas útiles sobre cómo

esquivar las primeras y alcanzar transitando las segundas transformaciones menos incompletas que las que hasta entonces había conocido Latinoamérica.

La teoría general había sido imperiosamente esbozada en un afortunado folleto del profesor W. W. Rostow, asesor del nuevo presidente; su «manifiesto no comunista» titulado *Las etapas del desarrollo económico* hacía del desarrollo autosostenido alcanzado por las sociedades industriales maduras algo más que la meta a la cual se encaminaban todas las restantes: él era en verdad el punto de llegada de todo el proceso histórico, y de superación de las contradicciones que habían tornado a veces tan tormentoso el avance hacia esa cima final. La moraleja latinoamericana de esa visión de la historia universal era que el riesgo de revolución cesaría cuando el subcontinente alcanzara por fin ese desarrollo autosostenido, y que era por lo tanto urgente impulsarlo en ese sentido, pero también que durante la acelerada transición que ello imponía el peligro revolucionario sería más agudo que nunca.

Las experiencias acumuladas desde Argelia hasta el Lejano Oriente agregaban precisión a esas sugerencias demasiado generales. Así por ejemplo, la eficacia con que la reforma agraria introducida en Japón, Corea del Sur y Formosa había contribuido a atenuar tensiones sociales y a remover obstáculos al crecimiento económico incitaba a afrontar con mayor audacia que en el pasado las tareas de ingeniería social requeridas para alcanzar los mismos objetivos en Latinoamérica; a la vez los múltiples ejemplos de resistencia al desafío revolucionario –exitosa en algunos casos, como en Malasia y las Filipinas, infortunada en otros, como en China y Vietnam del Norte– sugerían como tarea aún más urgente la de crear sólidos encuadramientos políticos y sociales para las masas de cuyo arbitraje dependía en último término el desenlace del conflicto con las fuerzas revolucionarias.

Expresión de esta nueva política latinoamericana fue la Alianza para el Progreso, cuyas propuestas (que retomaban otras de origen latinoamericano, a partir de la Operación Pa-

namericana lanzada por el presidente brasileño Kubitschek y la aún más grandiosa propuesta por Fidel Castro) ponían en primer plano los aspectos de esa nueva linea que podían resultar más gratos a la opinión latinoamericana. Ella propugnaba a la vez el recurso a la reforma agraria, cada vez que –como ocurría en casi toda Latinoamérica– éste se revelaba necesario para romper el estancamiento rural, y una industrialización más rápida y menos limitada que en el pasado; esos objetivos debían lograrse mediante la transferencia de veinte mil millones de dólares a lo largo de diez años, la mitad de los cuales provendría del tesoro de los Estados Unidos y el resto de inversiones productivas privadas, y que debía ser complementada por inversiones de igual monto y de origen latinoamericano, aquí a cargo sobre todo del Estado; el objetivo era asegurar una tasa de crecimiento del producto bruto *per capita* del orden del 2,5 por 100 anual.

Ello requería además la expansión de las funciones y los recursos del Estado, que figuraba también entre los objetivos declarados de la Alianza; ésta preveía en efecto una reforma impositiva que aumentase y redistribuyese la carga fiscal, complementada por un sistema de percepción más eficaz, y capaz por lo tanto de hacer pagar su parte a los más ricos. Pero la creación de una base financiera más robusta para el Estado no tenía tan sólo por objetivo facilitar el desarrollo económico y contribuir a una transformación de la sociedad en sentido más igualitario; servía a la vez a ese otro objetivo menos insistentemente pregonado de la nueva política latinoamericana de los Estados Unidos que era la consolidación acelerada de estructuras políticas y sociales capaces de encuadrar sólidamente a las masas; si los nuevos dirigentes de Washington advertían muy bien que un estado capaz de hacerse presente de modo decisivo en todas las esferas de la vida colectiva no era suficiente para asegurar ese encuadramiento, no se equivocaban al considerar que su ausencia lo hacía extremadamente difícil.

Para esa tarea de encuadramiento y canalización de las masas latinoamericanas el gobierno de Kennedy confiaba en las

corrientes de reforma moderada cuya fidelidad a la posición norteamericana en la guerra fría no había vacilado ni aun ante la sistemática ingratitud del de Eisenhower, y esa confianza se traducía en la preferencia por las soluciones políticas encuadradas en el marco de la democracia representativa, frente a las dictatoriales, que sin duda era exhibida con particular insistencia en función de la nunca extinguida polémica anticubana, pero que se apoyaba sobre todo en la convicción de que los partidos de masas, tanto en un marco de democracia competitiva como en uno de monopolio político de hecho si no de derecho, podían cumplir mejor esa función de control que el autoritarismo de base militar.

Al mismo tiempo los Estados Unidos no renunciaban a poner a los ejércitos latinoamericanos al servicio de ese ambicioso programa de transformación con propósitos de conservación. Una parte considerable de los fondos dirigidos a Latinoamérica se orientaron hacia esos ejércitos, que a la vez eran incitados a tomar a su cargo, a través de los llamados programas de acción cívica, funciones de desarrollo económico-social que los introdujesen en el horizonte de experiencias cotidianas de las masas rurales, y las incitaran a volverse hacia ellos en busca de orientación en momentos de crisis, supliendo así la insuficiente implantación de otras ramas del Estado y la de los partidos en esos rincones inhóspitos en cualquiera de los cuales podía realizarse la amenazante promesa cubana de hacer de la cordillera de los Andes una Sierra Maestra a escala continental.

Aunque la Alianza para el Progreso había marginado a los organismos panamericanos, Washington no había renunciado aun a utilizarlos en otros contextos. Pero las reticencias cada vez mayores que las propuestas norteamericanas encontraban en el seno de la OEA, que culminaron en 1965, cuando el proyecto de creación de una fuerza militar panamericana de carácter permanente no reunió los votos de los dos tercios de los países miembros que requería para ser aprobado en la conferencia de Río de Janeiro, impulsarían cada vez más a

Washington a prescindir de ese instrumento antes central a su política latinoamericana.

También por este motivo la preferencia por los acuerdos bilaterales, insinuada ya en la estructuración de la Alianza, vino a acentuarse cada vez más. En ese marco bilateral los contactos, no sólo de Estado a Estado, sino entre específicas ramas de la administración y aun entre organizaciones extraestatales, van a multiplicarse y tornarse más íntimos. Así, mientras la reestructuración de las fuerzas armadas latinoamericanas, sostenida por fondos norteamericanos, cuenta con el asesoramiento de las de los Estados Unidos, las organizaciones sindicales norteamericanas, políticamente más cercanas a la administración de Kennedy que a su predecesora, amplían también ellas sus funciones de asesoramiento de sindicatos latinoamericanos dispuestos a recibirlo, y canalizan hacia éstos fondos de promoción social incluidos a menudo en el presupuesto de la Alianza, cuyos beneficios se espera que les atraigan el favor de sectores más amplios de la clase obrera, ganados así indirectamente a la opción pronorteamericana. Del mismo modo, fondos de ese origen servirán para consolidar la clientela de políticos dispuestos a alinearse en sentido favorable a la política latinoamericana de los Estados Unidos; así Carlos Lacerda, el vocero periodístico de la derecha brasileña, transformado en gobernador de Guanabara (el estado creado en el territorio de la antigua capital, Rio de Janeiro), puede consolidar su base popular gracias a un programa de viviendas sostenido por el aporte norteamericano, y en el Perú el gobierno de la convivencia aprista-oligárquica cuenta con fondos del mismo origen para desarrollar un programa análogo en Lima.

Todo ello tiene por resultado la implantación de una presencia norteamericana más compleja y diferenciada, y por eso mismo más capaz de gravitar eficazmente en una Latinoamérica que está entrando tumultuosamente en la era de masas. Esa presencia debe servir –se ha indicado ya– a un doble propósito de transformación y conservación, o –para decirlo con

una fórmula que se hará pronto más popular en Latinoamérica que en los Estados Unidos– de seguridad y desarrollo. Esas dos fórmulas ignoran por igual que en los momentos críticos, que no han de faltar en esos años de honda y confusa transformación política, no iba a ser siempre fácil hallar un camino que satisfaciese por igual ambas aspiraciones; como era esperable, cada vez que una emergencia imponía optar entre ellas, la preferencia iba a lo más urgente, y en cada uno de esos momentos decisivos venía a confirmarse que la conservación (o si se prefiere la seguridad) tenía prioridad sobre el objetivo de largo plazo que era el desarrollo económico y más aún sobre el de transformación sociopolítica, que en cada una de esas crisis se revelaba con creciente claridad como un arma de doble filo.

Luego del asesinato de Kennedy, y bajo la égida de su sucesor Lyndon Johnson, la primacía del objetivo de conservación y seguridad quedó consagrada por el abandono de la opción política en favor de la democracia representativa: en América latina, aseguraba el secretario de Asuntos Latinoamericanos, Thomas Mann, los Estados Unidos volvían, como en el pasado, a ser simplemente amigos de sus amigos, sin imponerles fastidiosas exigencias de decoro institucional. Pero ya antes de esa reorientación programática de la política norteamericana, la administración de Kennedy había debido resignarse a encarar más de una de las crisis latinoamericanas olvidando su preferencia por la democracia representativa. Así ocurrió por ejemplo en Perú, cuando Haya de la Torre, para entonces el más fiel aliado de la política norteamericana en su país y Latinoamérica, obtuvo en las elecciones de 1962, en que se postuló como candidato oficialista a la sucesión del presidente Prado, una victoria tan estrecha y tan discutible que el golpe militar que le cerró el acceso al poder fue recibido con beneplácito por la mayor parte de la opinión pública; esa peripecia parecía mostrar que el favor norteamericano no era suficiente para asegurar la fortuna electoral de los partidos de masas dispuestos a servir su política, y el gobierno de Washington –lue-

go de expresar su mal humor ante el espíritu demasiado independiente de la fuerza armada peruana a través del retiro temporario de su representante en Lima– terminó por inclinarse ante el hecho consumado.

A partir de 1963 los titubeos y perplejidades quedaban atrás; en 1964 el golpe militar que derrocó al presidente brasileño Goulart fue organizado en íntimo contacto con la representación norteamericana en ese país, que por su parte se comprometió a otorgarle apoyo militar activo, si un éxito inmediato no lo hacía innecesario; en la República Dominicana al año siguiente una revolución militar contra los oficiales que en 1963 habían derrocado al presidente constitucional Juan Bosch, que logró hacerse fuerte en la capital, fue interpretada por Washington como una tentativa de crear otra cabeza de puente antillana para la revolución socialista, y provocó una intervención militar unilateral, transformada luego en mediación armada sostenida por una fuerza nominalmente panamericana colocada bajo el comando de un general brasileño; la elección de un nuevo gobierno constitucional que pudo así imponerse como alternativa a la restauración del derrocado en 1963 fue, mucho más plenamente que el éxito del golpe militar brasileño, resultado de una decisión de Washington, que se resolvió en la ocasión a desplegar a la luz del día su abrumadora superioridad militar.

Los críticos que invocando este episodio denunciaban la nueva política de los Estados Unidos como un mero retorno a los usos que precedieron la introducción de la política de Buena Vecindad perdían de vista quizá lo esencial de la nueva situación. Sin duda, la Revolución cubana, al devolver al primer plano del debate político latinoamericano el tema del imperialismo, vivificaba eficazmente en la opinión pública sentimientos que habían venido adormeciéndose desde 1933, y que ni la prédica de inspiración soviética ni el retorno del intervencionismo norteamericano que había comenzado ya a insinuarse bajo el estímulo de la guerra fría habían logrado hasta entonces movilizar.

Pero a los efectos de este remozamiento del antiimperialismo latinoamericano venían a contraponerse los del realineamiento que suscitaba en la opinión latinoamericana la aparición de la alternativa socialista en la más inmediata agenda política del subcontinente, que era también ella consecuencia de la Revolución cubana, y que favorecía la creación de una solidaridad nueva entre los Estados Unidos y todos los que en Latinoamérica rechazaban alarmados esa alternativa. Gracias a ello el nuevo intervencionismo norteamericano estuvo lejos de evocar en el área afectada una oposición tan unánime como a comienzos del siglo; no sólo era recibido con abierto beneplácito por fuerzas conservadoras algunas de las cuales le habían sido tradicionalmente hostiles, sino -salvo en algunos episodios que se iban a revelar atípicos, como precisamente el dominicano- no iba a necesitar volcarse en nuevas acciones militares, ya que hallaría instrumentos suficientemente eficaces en esos aliados que la común hostilidad al socialismo había venido a depararle.

Entre éstos, los ejércitos latinoamericanos tenían un papel cada vez más central desde la perspectiva norteamericana: la consolidación del aparato estatal, que estaba ya entre los objetivos de la Alianza para el Progreso, tendía a revolverse cada vez más en la de las fuerzas armadas, que recibían una parte creciente de los fondos públicos norteamericanos destinados a Latinoamérica, y en parte gracias a ello gravitaban con peso creciente en la vida de la región. Pero ese vínculo cada vez más íntimo iba más allá de agregar solidez y eficacia al poderío estrictamente militar de esos ejércitos (aunque ya en este aspecto su contribución, decisiva para el uruguayo, que había llegado a tener existencia sólo nominal como fuerza de combate, o el boliviano que había sobrevivido a duras penas a la derrota sufrida a manos de los combatientes urbanos y mineros de la victoriosa revolución de 1952, se reveló más que considerable en la mayor parte de los países pequeños y aun en los mayores estuvo lejos de ser insignificante).

Más importante era, sin embargo, que esos nuevos lazos crearan una halagadora intimidad con el cuerpo de oficiales

del más poderoso ejército del planeta, en términos que sus pares del sur del Río Bravo se lisonjeaban en creer igualitarios, y que ella sirviese de vehículo para la difusión de una propuesta acerca de las tareas futuras de los ejércitos latinoamericanos que iba a encontrar aceptación efusiva en éstos. Sin duda desde fines del siglo XIX más de uno de esos ejércitos había reivindicado un papel central en el proceso de modernización y consolidación de la sociedad dirigido por el Estado, por ejemplo utilizando el enrolamiento universal para expandir el alfabetismo hacia capas de población que ese otro instrumento de transformación social que era la escuela no había logrado alcanzar, pero contribuciones como ésa se integraban mal con su específica función militar, y en cuanto a ésta la profesionalización orientada por instructores ultramarinos, que los estaba haciendo idóneos para trazar según las reglas del arte planes de guerras fronterizas que (era cada vez más evidente) nunca iban a desencadenarse, no resolvía el problema de la función del ejército en un país modernizado de modo halagador para el orgullo colectivo del cuerpo de oficiales, que se resistía mal a la tentación de volcar sus frustradas energías en la política interna.

Ahora la doctrina de la seguridad nacional, versión militarizada de la seguridad y desarrollo, hacía del ejército el protagonista de la vida nacional, al ponerlo al frente de una empresa que unificaba la guerra convencional y la política convencional y a la vez las elevaba a un plano más alto, al poner a ambas al servicio de una heroica militancia en el conflicto mundial, del que esa doctrina ofrecía una imagen decididamente apocalíptica, y cuya presencia decisiva proclamaba descubrir detrás de los tan numerosos y a primera vista tan heterogéneos que desgarraban a Latinoamérica.

Sin duda, en la determinación de los contenidos específicos de esa doctrina no sólo influía decisivamente la circunstancia latinoamericana, sino también el ejemplo de otros ejércitos en que los latinoamericanos habían buscado modelos en el pasado, y en particular del francés, que a lo largo de su infructuosa

resistencia a los movimientos nacionales de Indochina y Argelia había elaborado rebuscadas justificaciones ideológicas para su acción y luego para su derrota, a la vez que una compleja casuística destinada a darle orientación moral frente a las nuevas tareas que ese inédito tipo de lucha le imponía.

Ese ejemplo no sólo aparecía más relevante porque hundía sus raíces en una tradición que los latinoamericanos sentían espontáneamente más afín que la norteamericana (en el marco de la cual por ejemplo el asesoramiento eclesiástico era decisivo para disipar escrúpulos frente al uso del terror y la tortura, lo que hubiera sido impensable en el ejército de los Estados Unidos), pero también porque esa tradición aparecía corroída por dudas acerca de su propia validez, ausentes en el Norte pero cada vez más vivaces también en América latina, que se reflejaban por ejemplo en la fascinación apenas disimulada por el modelo alternativo que ofrecía el enemigo, que en Francia contribuyó a hacer de Mao el Clausewitz de la guerra contrarrevolucionaria, y en Latinoamérica iba a tener consecuencias igualmente desconcertantes. A la vez esa fascinación era la contracara de un horror al adversario sólo compartido con la misma intensidad en los Estados Unidos por una relativamente estrecha franja excéntrica de la opinión pública; mientras en Francia ese horror tan intenso daba expresión a la rencorosa amargura de comunidades que se sabían condenadas por el avance inexorable de la descolonización, esa amargura encontraba eco puntual en la de todos los que en América latina temían verse aplastados por una ola revolucionaria que, aunque preferían no confesarlo, estaban cerca de creer irrefrenable.

Pero si en los contenidos concretos de la doctrina de seguridad nacional, y más aun en el complejo de pasiones y sentimientos que encontraban expresión en ella, el ejemplo que venía del norte pesaba menos de lo esperable, la nueva intimidad entre las fuerzas armadas latinoamericanas y las de la potencia hegemónica fue con todo decisiva para acelerar la transición entre una concepción de las tareas militares que había

guiado durante décadas a los ejércitos latinoamericanos y otra que, a la vez que le fijaba funciones nuevas y más vastas, les imponía modos de conducta que en el pasado hubiesen parecido incompatibles con la dignidad del oficial; así, si no puede afirmarse más allá de toda duda que los cursos de perfeccionamiento ofrecidos por distintas agencias de inteligencia norteamericanas hayan incluido clases teórico-prácticas en el arte de la tortura, tal como alegaban frecuentemente sus críticos (los defensores de esos cursos sostenían, como es sabido, que uno de sus objetivos era ofrecer alternativas al uso indiscriminado de la tortura, y en todo caso la conclusión de que el empleo de ésta era en Latinoamérica una innovación importada del norte era desde luego insostenible), la transformación en legítimo tema de discusión de lo que había sido hasta entonces un secreto nunca confesado era suficiente para facilitar la inclusión de la tortura y otros modos de ejercicio del terror contra poblaciones civiles entre las tareas exigibles de los integrantes del cuerpo de oficiales, aunque las justificaciones ideológicas y morales para semejantes actividades se buscasen en fuentes menos exóticas que las norteamericanas.

Otra consecuencia decisiva iba a tener esta reestructuración de los ejércitos latinoamericanos bajo auspicios norteamericanos: ésta profundizaba la transformación de cada uno de esos ejércitos en un organismo cada vez más consciente de su identidad y sus intereses corporativos, tanto en el plano interno como en el internacional. En lo que se refiere a éste los integrantes de cada uno de esos ejércitos parecían encontrar ahora interlocutores más cercanos en sus camaradas de los demás que en los integrantes de otras ramas del Estado del que teóricamente cada uno de esos ejércitos seguía siendo una dependencia. La rapidez del cambio se percibe muy bien cuando se considera que ya en 1964 el general Onganía, comandante en jefe del ejército argentino, iba a hallar perfectamente adecuado anunciar a su país y al mundo la actitud de ese ejército frente a las autoridades constitucionales (que estaba lejos por cierto de ser de obediencia ciega) en un discurso

pronunciado en West Point ante la quinta conferencia de ejércitos americanos.

En el marco nacional la consolidación de una conciencia corporativa en el cuerpo de oficiales sumaba sus efectos a los de la burocratización de la institución para transformar radicalmente el modo de inserción de las fuerzas armadas en la vida política. Mientras en el pasado éstas habían ingresado en ella como séquito y sostén de un dirigente surgido de sus propias filas, que gracias al apoyo complementario de corrientes políticas o fuerzas socioeconómicas reclutadas desde el poder o en el camino hacia él conservaba un notable poder de iniciativa, ahora ese ingreso iba a ser a menudo también él una empresa corporativa, cuyo titular era tan sólo un agente escasamente autónomo, y siempre revocable, de la institución que lo colocaba al frente de ella.

Pero esa transformación del carácter mismo de la intervención militar sólo en parte se explica por la que estaba sufriendo la institución militar misma; ésta refleja además la del temple de aquellos sectores latinoamericanos que ven aproximarse la etapa de decisiones abierta por la Revolución cubana con más alarma que esperanza. Es en efecto la conciencia de la gravedad de la coyuntura la que fortifica la decisión de mantener al titular militar de la gestión política bajo constante vigilancia corporativa; pero sus efectos van por otra parte mucho más allá, en cuanto ella dicta los términos mismos en que esa gestión será encarada.

Sin duda esa conciencia encuentra eco –tal como se ha recordado una y otra vez– en las vastas capas sociales que se sienten también amenazadas por la inminente ofensiva revolucionaria, y que son quizá aún más sensibles que la dirigencia militar a las amenazas más insidiosas que derivan del agotamiento de desarrollismo. No se sigue de ello, sin embargo, que el temple sombrío con que la institución militar contemplaba el futuro dominara con igual fuerza a los grupos sociales amenazados por la ola revolucionaria. La aprensión con que éstos veían acercarse el momento decisivo de la vasta crisis so-

ciopolítica en curso no les impedía entregarse -junto con los que debían transformarse en sus mortales adversarios en esa crisis inminente- a las sugestiones del optimismo sistemático con que el mundo desarrollado contemplaba el futuro; la misma década que se presenta en el plano político como de durísimas opciones está marcada por una apertura confiada y sorprendentemente poco polémica a innovaciones de estilo y sustancia en la vida colectiva, que -aunque corroen las bases morales del orden vigente en el momento mismo en que éste debe prepararse a afrontar un desafío mortal- son adoptadas con el mismo entusiasmo por los privilegiados por ese orden como por los que, sobre todo en las clases medias y medias bajas, se movilizan en su contra.

Para estos últimos tales innovaciones (que, como ha subrayado en una página elocuente el chileno Antonio Skármeta, ya proviniesen de progresos en las comunicaciones, desde el *moto-scooter* hasta el avión y el teléfono de larga distancia, o en la biología, tal la píldora anticonceptiva, tenían por consecuencia la apertura súbita de nuevas áreas de libertad para trayectorias vitales encerradas hasta entonces en carriles asfixiantemente estrechos) eran un anticipo de la revolución destinada a coronar todos esos avances; y ello hacía que la expectativa revolucionaria inspirase en ellos a menudo un ánimo menos militante que anticipadamente celebratorio. Más sorprendente era que los sectores amenazados por esa revolución tan anunciada compartiesen en tantos aspectos el espíritu festivamente iconoclasta de los celebrantes de su futura ruina; todavía en 1973 el sociólogo francés Alain Touraine iba a descubrir durante la agonía de la vía chilena al socialismo, y en el asediado reducto de la clases privilegiadas que era por entonces el Barrio Alto de Santiago, la supervivencia del hedonismo liberador de la década anterior, cuyos rituales seguían celebrándose en locales presididos por los iconos de la contractura...

Ese optimismo surgido de una circunstancia que no era la latinoamericana no hubiera con todo podido afirmarse si el

agotamiento de las soluciones de las que Latinoamérica había vivido desde 1945 se hubiese traducido en algo peor que una tendencia al estancamiento o al desarrollo irregular y errático. En este punto es de temer que el recuerdo colectivo exagere los rasgos negativos de una etapa que vino a decepcionar tanto las esperanzas de rápida mejora económica como las de cambios sociales radicales, pero que, en términos de realidades más bien que de expectativas, estuvo marcada por un ritmo de crecimiento sin duda desigual, pero aun así casi siempre considerable. Ello hizo posible que el descontento derivado de la distancia creciente entre los avances de la economía y del bienestar en los países centrales y en la periferia latinoamericana se conjugase con una confianza en el futuro que, aunque no se lo admitiese, derivaba de los cambios exaltantes que a pesar de todo se estaban dando en las pautas de vida de sectores muy amplios de la sociedad latinoamericana, para hacer que la crisis resolutiva por todos anunciada fuese esperada por quienes la favorecían con una impaciencia no refrenada por ningún profético anticipo de la dureza de los tiempos que se avecinaban, pero también que su inminencia no bastase para acendrar la militancia de los sectores privilegiados por el orden establecido.

Esta circunstancia no era la única que vino a fortificar la tendencia del ejército a verse a sí mismo como el solitario centinela de un frente de combate que ya nadie defendía en una sociedad atacada al parecer de frivolidad irredimible (y le inspiró una suerte de global hostilidad contra ésta que iba a encontrar desahogo en las salvajes oleadas represivas desencadenadas a partir del final de la década); la reforzaba todavía la modificación del clima vigente en la Iglesia católica, que a los ojos de muchos defensores del orden establecido la hacía aparecer cometiendo defección en la hora decisiva; por más de una década la llamada Teología de la Liberación, de séquito sin duda minoritario en el clero y los fieles, pudo ser vista como la punta extrema de una reorientación que, de modo más atenuado, encontraba en cambio eco en sectores muy

amplios de las iglesias hispanoamericanas. Esa reorientación respondía a estímulos muy variados y en parte contradictorios, que se tornaron súbitamente más eficaces en el clima creado por el Concilio Vaticano II, pero si en un primer momento la renovación litúrgica, la actualización de los contenidos científicos e ideológicos y de los métodos pedagógicos en las instituciones católicas de enseñanza, la ampliación del papel de la comunidad de fieles en la vida eclesiástica, y la que iba a llamarse opción prioritaria por los pobres se presentaban como otras tantas dimensiones en la renovación global de un catolicismo latinoamericano hasta entonces aun menos agitado por cualquier veleidad innovadora que los de otras áreas, paulatinamente esta última se constituyó en punto de partida de una opción revolucionaria que durante más de una década no iba a ser explícitamente excluida de entre las alternativas legítimamente abiertas a la acción del cristiano en el mundo.

Esa apertura a una alternativa programáticamente revolucionaria, nueva en una institución que tradicionalmente había sido la más celosa y alarmada defensora del orden establecido, vino a sumarse a muchos otros signos del desfallecimiento de la voluntad de conservarlo frente a un desafío revolucionario que por su parte no se presentaba mucho más coherente, para hacer de la supuesta década de decisiones una de avances zigzagueantes y contradictorios por un camino que iba de la euforia colectiva inicialmente compartida aun por tantos que se sabían víctimas designadas de cualquier avance revolucionario, a los trágicos derrumbes que iban a marcar el decenio siguiente.

Éstos sólo iban a darse por otra parte cuando ya habían comenzado a multiplicarse los signos del agotamiento de esa gran ola ascendente que por décadas había arrastrado por igual al mundo desarrollado y al socialista; el más dramático de esos signos fue desde luego el ofrecido por las enigmáticas tormentas de 1968, que estallaron desde Praga hasta París, México, y aun no pocos centros universitarios de los Estados Unidos. Aunque todas ellas surgían de contextos muy diver-

sos y agitaban reivindicaciones tan variadas como esos contextos mismos, no por eso dejaban de reflejar por igual la impaciencia ante la sospechosa demora en el desencadenamiento de las transformaciones radicales anunciadas con fe tan firme a comienzos de la década. A la luz de esos relámpagos que cruzaban un cielo hasta entonces monótonamente sereno pareció columbrarse por un instante la extrema fragilidad de sistemas político-sociales que habían parecido hasta la víspera solidísimos.

Porque parecían anunciar el fin de la larga consolidación política del mundo desarrollado, los movimientos de 1968, junto con la Revolución Cultural china, ese misterioso estallido en el cual las fuerzas contestatarias querían leer también un presagio favorable, vinieron por un momento a revitalizar en toda América latina las esperanzas revolucionarias; retrospectivamente se advierte que anunciaban por el contrario el comienzo de su curva descendente, y ello no sólo porque todos los sistemas cuestionados se mostraron capaces de sobrevivir al tumultuoso desafío de 1968. Paradójicamente, el hecho de que en ninguna parte el orden establecido lograse superarlos sin sufrir en su legitimidad tampoco iba a fortificar a los enemigos del orden vigente en Latinoamérica, cuya legitimidad ya desde antes de esa fecha había aparecido excepcionalmente dudosa y endeble; la enseñanza que en cuanto a esto aportaba 1968 era al parecer que sobrevivir sin el resguardo de esa legitimidad era menos imposible de lo que se había creído. En cambio la mengua de legitimidad también sufrida por el sistema rival del que subtendía el orden establecido en Latinoamérica suponía una pérdida absoluta para las tendencias revolucionarias en el subcontiente; aunque éstas estaban lejos de identificarse con el «socialismo real» tal como se practicaba en la Europa del Este, su llamamiento perdía necesariamente mucho de su fuerza persuasiva desde el momento en que, mientras se iban revelando ilusorias las soluciones alternativas que por un instante habían parecido surgir frente a ese «socialismo real», se tornaba radicalmente imposible recono-

cer en éste el esbozo, así fuese insoportablemente tosco, de un sistema económico-social cuya superioridad sobre el capitalista había parecido hasta la víspera reflejarse aun en ese retrato tan poco favorecido que de él ofrecía el bloque soviético.

El fin de ese largo verano que para la economía mundial fue la segunda postguerra iba a ser menos puntual y dramático que las tormentas que quebraron el esperanzado clima surgido en el punto más alto de esa larga bonanza; aun así la transición de la economía mundial a una etapa distinta estuvo marcada por algunos hitos significativos. Uno de ellos fue la inconvertibilidad del dólar en oro, decidida por el presidente Nixon en agosto de 1971, que vino a destruir el orden monetario mundial establecido en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods precisamente sobre la base del oro y un dólar ligado a aquél por una paridad fija, en el que todos reconocían uno de los pilares que habían sostenido al orden económico de la segunda postguerra. La iniciativa de Nixon buscaba adaptarse a la pérdida del predominio abrumador que la economía norteamericana había conquistado al abrirse la postguerra, y transferir en lo que fuese posible las consecuencias negativas de esa pérdida a esos rivales europeos cuya expansión estaba transformando el equilibrio de fuerzas económicas en el mundo desarrollado. Dos años después, la primera crisis del petróleo vino por añadidura a poner en entredicho la relación entre ese mundo desarrollado y su periferia, tal como se había consolidado desde el fin de la guerra. Como es bien sabido, la crisis se desencadenó cuando los países árabes, que en 1967 habían introducido el bloqueo petrolero como arma indirecta contra Israel, sin consecuencias de bulto en cuanto al precio del mineral, lo introdujeron de nuevo en noviembre de 1973, y descubrieron de inmediato que, si la eficacia política de ese instrumento seguía siendo dudosa, su impacto sobre el precio mundial del petróleo estaba superando las más ambiciosas expectativas de los países exportadores.

Lo que creyeron descubrir fue en suma que uno de los supuestos de la relación necesariamente perdedora de la perife-

ria productora de materias primas y el centro industrial parecía haber perdido su imperio; el deterioro secular de los términos de intercambio de esa periferia, que había sido uno de los grandes temas de Prebisch tanto como de las llamadas teorías de la dependencia, no aparece ya como una fatalidad ilevantable; luego de décadas de desbridada expansión económica en el centro industrial, la demanda siempre creciente de recursos primarios que no son al cabo infinitos comenzaba a ofrecer un arma inesperada a esa periferia cuyo papel principal era proveerlos.

He aquí dos novedades que autorizaban a concluir que se estaba viviendo ya en un nuevo clima económico, aunque no eran suficientes para definirlo; éstas introducían un corte tan nítido como el de 1960; y uno y otro corte vienen a acotar, desde el punto de vista del marco económico global, esa anunciada década de decisiones, que se cierra no porque las que en 1960 parecían inminentes hayan sido en efecto afrontadas, sino porque se ha desvanecido la coyuntura mundial que hacía parecer a la vez urgente y posible afrontarlas.

No significa esto que al abrirse la década de 1970 Latinoamérica se encuentre todavía, en su economía o en su vida sociopolítica, en el mismo punto que diez años antes, pero sí que las transformaciones acumuladas en esos años llenos de cosas no podían ser vistas como otros tantos aspectos de una transición orientada hacia una meta definida; aparecían cada vez más, en cambio, como momentos de una marcha azarosa, cuyo rumbo permanecía hasta el fin imprevisible. De nuevo, el marco para seguir esa marcha, o más bien esas marchas paralelas y ocasionalmente entrelazadas, es el nacional.

En esta etapa hay una excepción para ello, que es desde luego Cuba, cuya revolución sigue siendo, gracias a sus vastas repercusiones, un hecho que excede resueltamente el marco nacional. Se ha visto cómo el gobierno de Kennedy lo advirtió así, y buscó centrar su respuesta al desafío revolucionario en el continente antes que en la isla. Pero si lo prefería así no era tan sólo porque reconocía en aquél un teatro más adecuado a

la vastedad de sus ambiciones, sino sobre todo porque mantenía serias dudas sobre la posibilidad de resolver por la aniquilación del adversario el contencioso abierto por la instauración del régimen socialista en Cuba. Aunque esas dudas no le impidieron llevar a término el proyecto de invasión de la isla por desterrados apoyados, entrenados y armados por los Estados Unidos, que el de Eisenhower había dejado ya muy adelantado, limitaron el apoyo que brindó a la iniciativa. Ello vino a hacer aún más inevitable su fracaso; en abril de 1961 los exiliados así apoyados alcanzaron a establecer una cabecera de puente en Playa Girón, pero ello no provocó el irrefrenable alzamiento que habían esperado, sino una impresionante movilización política y militar de los vastos apoyos con que seguía contando la revolución; ya antes de que esa movilización tuviese tiempo de incidir en el desenlace, los incursores habían sido derrotados en los combates que llamaron de Bahía de Cochinos.

El fracaso del ataque militar contra Cuba, costoso para el prestigio de los Estados Unidos en Latinoamérica y para el de la bisoña administración de Kennedy tanto en su país como entre los aliados de éste, eliminó por el momento la posibilidad de una nueva tentativa armada, pero no impidió a Washington desquitarse en enero del año siguiente en el terreno diplomático, imponiendo en la reunión de la OEA convocada en el balneario uruguayo de Punta del Este la separación de Cuba del organismo y la creación de un Comité Consultivo de Seguridad, en el que algunos veían el anticipo de un organismo regional de carácter militar destinado a afrontar a la Revolución cubana y sus eventuales ecos continentales. Aunque ninguno de los países mayores de Latinoamérica daba apoyo a la expulsión de Cuba, ésta alcanzó laboriosamente la necesaria mayoría de dos tercios; la distancia entre la reacción del areópago latinoamericano frente al nuevo desafío y la que había opuesto ocho años a la tímida disidencia guatemalteca revelaba hasta qué punto la Revolución cubana había puesto en crisis, si no la hegemonía estadounidense sobre Latinoaméri-

ca, sí por lo menos los mecanismos políticos e institucionales que ésta había sabido instrumentar en el pasado.

En octubre de ese mismo 1962, el gobierno de Washington denunciaba que la URSS estaba instalando bases para cohetes nucleares en territorio de su aliada antillana, y proclamaba un bloqueo marítimo de ésta, destinado a impedir el ingreso de nuevas armas ofensivas de origen soviético, y a cesar sólo cuando la URSS se comprometiese a desmantelar esas bases. La aceptación por Jruschov de lo que aparecía como un humillante ultimátum, recibida con apenas disimulada ira en La Habana, tuvo el paradójico efecto de consolidar aún más el régimen revolucionario, en cuanto Washington había debido ofrecer en contrapartida al retiro de los cohetes el compromiso de no patrocinar una nueva invasión contra la isla, y aunque iba a proseguir todavía por años organizando incursiones de disidentes y otras acciones hostiles en territorio cubano, que contribuían a agravar una situación económica de suyo difícil, el ataque frontal a Cuba dejó de figurar entre las alternativas realmente disponibles para su política.

Aun así, la implacable hostilidad norteamericana seguía incidiendo de modo fuertemente negativo sobre la isla revolucionaria; tanto el bloqueo económico, que por casi una década conservó eficacia bastante para disminuir al mínimo los contactos entre la economía cubana y la del entero mundo capitalista, como la cuarentena diplomática, que en esa misma etapa aisló a Cuba del resto de Latinoamérica (la única excepción era México, pero su negativa a sumarse a la política de los Estados Unidos frente a Cuba reflejaba, más bien que el deseo de ofrecer alivio eficaz al cerco sufrido por ésta, el puntilloso cuidado con que la cancillería mexicana defiende su derecho a desarrollar una política exterior independiente de la de su vecino del Norte) seguían limitando duramente las opciones abiertas a la dirigencia revolucionaria, y alcanzaban efectos no menos duros en la experiencia cotidiana de cada cubano.

Sin duda, ese forzado aislamiento no impedía a la Cuba revolucionaria gravitar en el continente; para ello le bastaba con

sobrevivir, ya que su negativa a borrarse del horizonte ante los estallidos de majestuosa cólera de la potencia hegemónica no podía a la larga dejar de afectar la disciplina panamericana, y a más corto plazo, al mostrar que lo que todos habían largamente creído imposible era con todo posible, daba nuevo aliento a las tendencias contestatarias y revolucionarias.

Es comprensible con todo que la nueva Cuba haya querido actuar también de modo menos indirecto en el teatro continental al cual la administración de Kennedy estaba decidida a vedarle el acceso, y si sólo ocasionalmente iba a llegar a la intervención directa (cuyo impacto estaba de todos modos limitado por la modestia de los recursos que La Habana podía reunir para tales empresas) no se privaba de unir la prédica al ejemplo para ofrecer a Latinoamérica un modelo de marcha al socialismo que se presentaba –a ratos en sordina, a ratos en tono abiertamente desafiante– como rival del que los partidos comunistas del continente habían venido proponiendo desde 1935, fundado este último en una táctica de alianzas y una estrategia gradualista, que relegaba la entrada en la etapa decisiva de esa marcha a un futuro indeterminado. De este modo, a la espera de desencadenar la ambicionada revolución continental, Cuba lograba por lo menos introducir en Latinoamérica esa otra que un joven admirador reclutado por la revolución cubana en los medios intelectuales parisienses, Régis Debray, llamó en fórmula feliz «revolución en la revolución». El foquismo (que creía descubrir el secreto del éxito de la Revolución cubana en su enquistamiento inicial en un foco militar periférico desde el cual por acción y por presencia aceleró la disgregación del orden vigente) fue la fórmula a través de la cual esa revolución se ofreció como modelo para la continental, pero ya antes de que alcanzara difusión el afortunado folleto de Debray se vieron surgir focos en más de una nación latinoamericana.

Esos focos contaban con el auspicio de la isla revolucionaria, y sus organizadores, convertidos a la nueva estrategia por el ejemplo de Cuba, se habían a menudo adiestrado en ella en

el arte de la guerra insurreccional. Pero sólo excepcionalmente ese auspicio iba a incluir aportes significativos de armas y otros recursos, y ello no sólo por la modestia de los que La Habana podía distraer con ese objetivo, y las dificultades para hacerlos llegar a los remotos focos de la futura revolución continental (que hizo que tanta parte de esos recursos se volcase sobre la comparativamente accesible Venezuela) sino porque la expansión al continente afloraba entre los objetivos de la Revolución cubana sólo como respuesta ocasional a vicisitudes específicamente cubanas más que latinoamericanas (tanto en 1962-63 como en 1967-68 el acento puesto en la revolución continental reflejó sobre todo la impaciencia de esa revolución frente a las limitaciones que imponía al proyecto de construcción del socialismo la estrechez del marco insular, y a las que le fijaba la deferencia debida a la Unión Soviética).

Sin duda el influjo cubano se hizo sentir todavía de otros modos sobre el continente: la isla rebelde, aislada políticamente de éste, estaba obsesivamente presente en él a través de la imaginación colectiva, y la imagen fuertemente estilizada que ésta acogía gravitó decisivamente en la renovación cultural e ideológica tan intensa en esos años; a lo largo de ellos el gobierno revolucionario utilizó con admirable habilidad las oportunidades que ello le abría, y mientras los premios literarios que ofrecía desde La Habana Casa de las Américas se convertían en el primer equivalente latinoamericano del premio Goncourt o el Pulitzer, los pósters de la revolución, que ofrecían puntual contrapunto a las innovaciones neoyorquinas de la era del *Pop-art*, se constituían en muy apreciado elemento decorativo en los ámbitos en que se celebraban los rituales del deshielo cultural en curso.

También en este aspecto, sin embargo, la proyección latinoamericana de la revolución estaba menos vinculada a los objetivos centrales de ésta de lo que se quería creer en el continente; cuando en 1970-71 la política cultural que en este aspecto había asegurado a **Cuba** un lugar en esa Latinoamérica de la

que sus enemigos se habían jurado marginarla fue ruidosamente abandonada, ello se debió de nuevo a razones vinculadas más con el curso general del proceso cubano que con su específica dimensión latinoamericana.

Ese proceso iba a avanzar cada vez más decididamente por el rumbo que había ya tomado en el primer año de gestión revolucionaria. Mientras ya en octubre de 1959 la prisión y juicio de Hubert Matos eliminó al último jefe militar opuesto a la nueva línea, en enero de 1960 los sindicalistas que se resistían a su orientación socialista y ahora claramente prosoviética se vieron marginados de la dirección del movimiento obrero, y reemplazados en ella en parte por veteranos organizadores del Partido Socialista Popular; en junio del año siguiente éste se incorporaba a la organización política que debía reunir en su seno a todas las corrientes revolucionarias, y pronto la mayor experiencia organizativa de sus veteranos les aseguró un influjo decisivo sobre un movimiento que por otra parte había adoptado en mayo una abierta definición socialista y en noviembre, en la huella de su jefe, proclamaría su fe marxista-leninista.

Pero a comienzos del año siguiente Castro convocaba a los cubanos al combate contra el sectarismo, que en el lenguaje de su flamante fe política achacaba a los viejos comunistas, a los que acusaba por añadidura de estar erigiendo sus propias fortalezas burocráticas en el Estado y la organización política unificada; la campana antisectaria, que tuvo éxito inmediato, puso en claro que en la nueva Cuba los resortes del poder debían seguir en manos de los veteranos de la Sierra Maestra, y tanto más firmemente cuanto más íntimamente debiera aliarse a la Unión Soviética (en 1968 la ofensiva contra la llamada micro-facción de irreductibles viejos comunistas iba a acompañar al abandono de las últimas reticencias cubanas frente al «socialismo real» y al liderazgo soviético en el campo socialista).

Si a pesar de todo la colaboración de los viejos comunistas seguía siendo bienvenida, ello se debía a que la radicalización creciente de la revolución estaba provocando como respuesta

un éxodo de las clases altas y medias hacia los Estados Unidos que, si raleaba las filas de la oposición interna, privaba por otra parte a un régimen que estaba tomando a su cargo sectores crecientes de la gestión económica de auxiliares dotados de la competencia necesaria para manejarla con mínima eficacia; en este contexto se comprende mejor la bienvenida dispensada al aporte del partido comunista, que a más de sus organizadores y militantes populares contaba con un séquito minoritario pero no insignificante en las clases medias.

La campaña contra el sectarismo permitió además desviar hacia los cuadros que el viejo partido había ofrecido a la revolución parte del descontento que hacia 1962 comenzaba a aflorar aun en las clases populares frente al inesperado curso adverso tomado por la economía cubana a partir de 1961. Desde entonces, y durante el resto de la década, la revolución iba a consumirse en la búsqueda de una fórmula original para el socialismo cubano, que se esperaba diese solución exitosa a los intrincados problemas afrontados por la economía isleña.

La penuria de 1962 no podía sin duda ser achacada exclusivamente a esos cuadros, por irritante que fuese a veces su suficiencia, no siempre apoyada en una competencia indiscutible. A más de las dificultades creadas por la ruptura del vínculo con los Estados Unidos, en torno al cual la economía cubana había sido estructurada por casi un siglo, y que ahora dejaba paso a una guerra económica sin cuartel por parte de la antigua potencia dominante, y todavía las causadas por la vertiginosa integración en otro bloque económico organizado sobre criterios totalmente distintos, pesaba la herencia de las efímeras políticas económicas introducidas por la Cuba revolucionaria durante su brevísima transición al socialismo.

Éstas, se recordará, se habían orientado hacia la diversificación económica con acento en la industria y apoyo en la expansión del mercado interno, asegurada esta última por la ampliación y redistribución del ingreso impulsada por el Estado; lejos de aparecer extravagante, esta solución era parte

del sentido común compartido por las nuevas promociones de economistas latinoamericanos. La enorme concentración del poder político creada por la revolución hizo posible a Cuba llegar más lejos que ninguna otra nación latinoamericana en la aplicación de esas políticas, que comenzaron por crear una universal prosperidad pero en un año agotaron las reservas de divisas y en dos desembocaron en una crisis muy grave de la producción azucarera, cuyas demandas habían sido sistemáticamente postpuestas a las de la industria, que en condiciones de bloqueo resultaba cada vez más difícil hacer arraigar en la isla.

La primera respuesta a las dificultades económicas fue una aún más exasperada radicalización del proceso revolucionario; mientras en 1961 se completaba la demolición de las fortalezas sociales de las clases privilegiadas con la supresión de clubes privados al estilo norteamericano, y la de las escuelas privadas, regenteadas en su mayor parte por congregaciones católicas, otras innovaciones más básicas revelaban que la Revolución cubana se había decidido a ser plenamente una revolución social. La implantación gradual de la segunda reforma agraria sólo respetó la propiedad de los campesinos parcelarios, un sector muy poco significativo en Cuba, y aun la producción de éstos fue incorporada al sistema de distribución a cargo del Estado; el resto, que incluía casi todas las explotaciones agrícolas que de veras contaban, era reorganizado en granjas del pueblo, modeladas sobre los *sovjozes* soviéticos; en la ciudad a la nacionalización de todo el sector industrial iba a seguir la apenas más paulatina del comercio al menudeo.

Esos avances, que iban más lejos y más rápido que los de la Europa del Este en la segunda postguerra, debían en parte su urgencia a la de las amenazas externas e internas que pesaban sobre la revolución, que hacían que cada sector no controlado por ésta fuese visto como un peligro potencial, pero la hostilidad a cualquier residuo de una economía de mercado se apoyaba además en un rechazo moral sin duda ya presente en la tradición marxista, pero sentido con particular intensidad

por quienes al volcarse en el leninismo no habían abandonado su apasionada lealtad al moralismo cívico que era el núcleo vivo de la tradición revolucionaria vernácula. Desde su perspectiva, la adversidad económica no tenía consecuencias puramente negativas; así, aun el racionamiento introducido en 1962 podía ser celebrado por algunos como un avance de la igualdad, pero también como un nuevo campo abierto al ejercicio de la virtud republicana...

En un marco socioeconómico así redefinido, la prioridad reconocida a la industria iba a ser revisada; el énfasis comenzó por trasladarse a rubros del sector primario poco explotados o afectados por muy baja productividad en la vieja Cuba; desde la pesca, la avicultura y la minería del níquel hasta la ganadería bovina y algunos rubros agrícolas menores se vieron así beneficiados, pero a partir de 1963 iba a admitirse que, cualquiera que fuese la línea fijada para el futuro desarrollo de la economía cubana, los recursos necesarios para impulsarlo debían provenir del viejo sector dominante, el azucarero, cuya onda crisis productiva era reconocida como la consecuencia quizá más grave de los errores acumulados en la primera etapa de la gestión revolucionaria. Ya en 1963 Fidel Castro anunció que la rehabilitación de la economía azucarera debía culminar en 1970 –el año del esfuerzo decisivo– con una zafra de diez millones de toneladas, que casi duplicaría los más altos niveles históricos de la producción cubana.

Pero el deterioro era demasiado intenso para no requerir alivios más inmediatos, y la experiencia probaba que, tanto como los errores cometidos en la fijación de objetivos generales para la economía, influía en ese deterioro un mal manejo de ésta a todos los niveles, debido sin duda en parte a la acumulación de responsabilidades en manos poco expertas que era consecuencia de la inmensa remezón social causada por la revolución, pero también a las incongruencias de un sistema de administración de la economía que no era en rigor un sistema, sino una acumulación desordenada de improvisaciones *ad hoc*. Ello trajo a primer plano los dilemas básicos de la im-

plantación del socialismo, que iban a dar tema a mediados de la década a un debate decisivo.

En él, Ernesto Guevara, el médico argentino que en la etapa insurreccional se reveló brillante jefe guerrillero y luego de la victoria tomó a su cargo con menos fortuna el manejo del sector bancario e industrial, se identificó apasionadamente con la alternativa que proponía quemar etapas e implantar un socialismo duro y puro, eliminando tanto los residuos de la economía de mercado como el uso de incentivos económicos para estimular la productividad de la fuerza de trabajo; Carlos Rafael Rodríguez, el único dirigente del viejo partido comunista que se había unido a la revolución antes de su victoria, proponía en cambio una marcha más cauta y gradual, invocando tanto la necesidad de no ampliar el censo de enemigos de un régimen ya no escaso de adversarios, como la imposibilidad de reclutar un personal calificado suficientemente numeroso para administrar con mínima eficacia el sistema de decisión económica centralizada que la solución preconizada por Guevara requería.

Ese debate sólo iba a ser resuelto en favor de los llamados incentivos morales por el arbitraje de Castro cuando el principal partidario de éstos se había alejado ya de Cuba. Pero, tal como la entendía Castro, la alternativa primero propuesta por Guevara dejaba de nuevo amplio espacio a la improvisación desde lo alto; el manejo de la economía siguió marcado por una siempre recomenzada revisión de prioridades que, a medida que se agravaban las urgencias, adquiría ritmo más vertiginoso; al servicio de esas prioridades se movilizaban micro-brigadas de administradores y trabajadores excepcionalmente eficaces, distraídos con ese propósito de los sectores en que normalmente actuaban, pero se movilizaba sobre todo el ubicuo Jefe Máximo, que quería estar en la primera fila de ese cotidiano combate con la rebelde economía cubana.

Los resultados no fueron halagüeños, y por otra parte, mientras esa batalla incesante y confusa daba a los conductores de la economía la ocasión de revivir los exaltantes insomnios de su juventud en la bohemia revolucionaria habanera,

para los trabajadores que debían ofrecer a cada paso nuevos esfuerzos decisivos la experiencia era considerablemente más monótona y frustrante; en un clima de escasez creciente de bienes materiales y con su fe en la sabiduría de la conducción económica que los requería socavada por la acumulación de fracasos, no se dejaban ya movilizar fácilmente por incentivos morales; los esfuerzos por aumentar la productividad fueron perdiendo intensidad hasta hacerse imperceptibles, y pronto fue preciso recurrir a una disciplina más estricta para frenar la propagación casi epidémica del ausentismo. Para algunos observadores nada hostiles, Cuba se aproximaba a implantar un despotismo militar como recurso desesperado para mantener en la actividad y la obediencia a los trabajadores, pero si en efecto las sugerencias en favor de soluciones de esa laya no escaseaban, las tentativas de implementarlas no llegaron demasiado lejos y se revelaron también ellas ineficaces.

Aunque esos problemas eran dolorosamente advertidos, se esperaba con todo que no alcanzasen a frustrar el éxito del supremo esfuerzo planeado para 1970; de este modo Cuba aceptaba someter la validez del modelo alternativo de economía y sociedad socialista en cuyo surgimiento quería creer con fe obstinada a la prueba de fuego de la zafra gigante. Ésta marcó el paroxismo del estilo de gestión económica favorecido por Castro; toda Cuba se transformó en una micro-brigada, mientras un gigantesco gráfico registraba en la Plaza de la Revolución los avances de la gran cosecha. Finalmente debió admitirse que, si ésta había sido de lejos la mayor en la historia de Cuba, había quedado corta en más de un millón de toneladas.

El fracaso de la zafra fue reconocido implícitamente como un veredicto que imponía renunciar sin reservas al camino alternativo al socialismo que Cuba se había prometido inaugurar; desde ahora la URSS y el bloque del Este se transforman en el modelo económico e institucional que Cuba se resigna a aplicar disciplinadamente. El resultado es no sólo una mayor eficacia de la gestión económica, sino, paradójicamente, un clima de convivencia social menos tenso y enrarecido que en

la etapa de invención del socialismo que la dirigencia revolucionaria había hallado tan estimulante.

Si luego de diez años de gestión tan decepcionante la revolución no debió enfrentar desafíos peores que el del desánimo de sus apoyos populares fue porque pese a esas decepciones la mayoría de los cubanos que permanecían en Cuba seguían hallando motivos para sentirse identificados con ella. No sólo le agradecían que hubiese cancelado triunfalmente la humillación nacional que había pesado duramente sobre la conciencia colectiva desde que la isla alcanzó una independencia que no era independencia, no sólo tampoco que -cualesquiera que fuesen las debilidades demasiado humanas de algunos de sus dirigentes secundarios- hubiese cancelado también la corrupción que había sido rasgo definitorio de la vida pública cubana hasta 1959. La revolución había dado por añadidura beneficios más tangibles, reflejados en los avances impresionantes de la salud pública, y -en esta etapa, y sobre todo en el campo- en la vivienda; su imposición de un orden social más igualitario había hecho seguir a las primeras campañas alfabetizadoras de la creación de un sistema educativo que abría posiciones de elite a los hijos de las clases populares y aun marginales, que adquirió aun mayor envergadura porque la emigración en masa de las clases medias abría claros que era urgente llenar; todo ello estaba creando en verdad una nueva sociedad que no podía ya imaginarse avanzando sobre los cauces del pasado, aunque no siempre se sentía cómoda en los que en frenética sucesión le proponía la dirigencia revolucionaria, y que en 1970 iba a recibir con alivio el fin de la etapa en que la imaginación había estado en efecto en el poder.

Ese fin iba a ser recibido con menos favor por el brillante séquito intelectual que la Revolución cubana había sabido reclutar en el país y en el extranjero. Ya antes de ese giro decisivo habían surgido tensiones cada vez que desde el poder se buscó imponer una más estricta disciplina en el estilo de vida o en las actividades creadoras de la *intelligentsia* cubana; ésta no podía dejar de advertir que, aunque esas tentativas eran habi-

tualmente interrumpidas antes que la sangre llegase al río, no dejaban de tener efectos que, acumulados a lo largo de un decenio, habían creado un clima que no podía ya compararse con ventaja con el de la Europa del Este. En cuanto a los simpatizantes extranjeros, el gobierno de La Habana tuvo pronto motivos para lamentar haberlos convocado a seguir de cerca la gestión del socialismo cubano; las descripciones que iban a trazar de ella incitarían a un exasperado Fidel a denunciar a más de uno de esos simpatizantes excesivamente críticos como agente de la CIA, pero esa acusación extravagante sólo serviría para avivar las dudas que sus poco halagadores retratos de la Cuba revolucionaria estaban ya sembrando entre los admiradores ultramarinos de ésta.

En 1971 el llamado caso Padilla, protagonizado por el poeta premiado por Casa de las Américas en 1968 por un libro que desde el título *(Fuera de juego)* proclamaba su toma de distancia con el régimen revolucionario, y que ahora, luego de su detención por la policía política, ofrecía una autocrítica en que se pintaba con los más negros colores, vino a consumar la ruptura entre la revolución y la mayor parte de los admiradores que habían ganado en la *intelligentsia* europea y latinoamericana. Esa ruptura no parece haber pesado demasiado a los dirigentes revolucionarios; alineados éstos sin reservas tras de la URSS desde que en 1968 Castro proclamó justificada la intervención militar en Checoslovaquia, en cuanto a Latinoamérica se esforzaban por encontrar otros canales con el continente, reconciliándose con cuantos gobiernos estaban dispuestos a abandonar el cerco diplomático; muy compresiblemente esos nuevos interlocutores, le importaban más que los que había antes encontrado entre los corifeos de las nueva narrativa latinoamericana.

Esa normalización de relaciones, deseable para Cuba en cuanto aliviaba el cerco impuesto por los Estados Unidos, era también tentadora para los gobiernos continentales, en cuanto desdibujaba el perfil de la Revolución cubana como polo alternativo al orden vigente, y la privaba así de parte de la efica-

cia con que se había venido estimulando la polarización política en una Latinoamérica en difícil transición.

Los signos de que la alternativa cubana había alcanzado una eficacia polarizadora considerable se acumulan en efecto a lo largo de la década. Así se advierte ya en el **Brasil**, cuya exploración cada vez más febril de nuevas alternativas políticas va a conocer un desenlace cuya brutal nitidez innova sobre un estilo político entre cuyos rasgos definitorios cuenta la preferencia por las soluciones transaccionales y el horror por los conflictos demasiado bien perfilados. Allí la victoria de Janio Quadros, en las elecciones presidenciales de 1960, había marcado -se recordará- el primer contraste electoral de la coalición populista surgida en 1945; elegido bajo el signo de la escoba, Quadros había sabido dar popularidad a motivos antes agitados con menos éxito por una oposición liberal de orientación social cada vez más conservadora. Con ésta compartía la condena tanto moral como política del aparato sindical que gravitaba cada vez más en la coalición populista, a la vez que el repudio del intervencionismo económico al que acusaba de ser el principal responsable de la inflación ya crónica en Brasil; pero a esos motivos agregaba otros tomados en préstamo del populismo, y en primer término la reivindicación del derecho del Brasil a desarrollar una política exterior independiente. Al parecer el nuevo presidente confiaba en que este programa, satisfactorio para las clases conservadoras brasileñas, sería hallado aceptable por los Estados Unidos, ya que su ortodoxia económico-social equilibraba la módica audacia de esa reivindicación de independencia diplomática. Se equivocaba; pronto iba a descubrir en Kennedy a un interlocutor menos obsesionado que su predecesor por la ortodoxia económica y cada vez más interesado en cambio en restaurar la disciplina paramericana luego del golpe que había infligido a ésta a Revolución cubana.

Pero lo que llevó a la presidencia de Quadros a su catastrófico desenlace fue, más que el recelo de Washington, la des-

confianza creciente que el personalísimo estilo del nuevo mandatario estaba despertando entre los mismos sectores con cuyo apoyo había alcanzado la victoria. Él está en la raíz de la crisis desencadenada en agosto de 1961, cuando Quadros decidió condecorar a Ernesto Guevara, de paso por Brasil. El previsible coro de protestas de la opinión conservadora tuvo por respuesta la dimisión presidencial, ofrecida como un sacrificio a las fuerzas oscuras que de otro modo -aseguraba el dimitente- se preparaban a devastar el país. Para algunos ese documento que glosaba libremente el último mensaje de Vargas procuraba movilizar a las huestes populistas en apoyo del jaqueado presidente; si ése era el propósito, iba a fracasar de inmediato: en el Congreso el oficialismo y la oposición coincidieron en aceptar la dimisión de Quadros, pese a que venía a abrir una peligrosa crisis de sucesión.

João Goulart, elegido vicepresidente junto con Quadros, había integrado la fórmula rival de la encabezada por éste; identificado con todo lo que el liberalismo conservador había hallado de inaceptable en el laborismo de inspiración varguista, a partir de la Revolución cubana había acentuado sus devaneos con la izquierda, hasta tal punto que la renuncia de Quadros lo sorprendió en el curso de una visita a la China Popular, por entonces vista por todos los sectores hostiles al comunismo con un horror mucho más intenso que la propia Unión Soviética.

Por unos días pareció que el ejército se disponía a cerrar a Goulart el acceso a la presidencia; finalmente una fórmula de compromiso adoptada ante la negativa del sector llamado legalista a apoyar la iniciativa eliminó ese veto, pero impuso como condición para ello la adopción de una reforma constitucional (votada con sincero entusiasmo por el Congreso) que, al introducir un régimen parlamentario, reducía drásticamente las atribuciones presidenciales. Goulart aceptó sólo provisionalmente ese temperamento, y de inmediato se consagró a preparar el plebiscito que en enero de 1963 le devolvería la plenitud de facultades; sólo luego de su victoria se deci-

dió por fin a afrontar la situación económica que en los dos años largos desde la asunción de Quadros había pasado de difícil a crítica, en parte porque la entera clase política, absorbida en las complejas maniobras de una confusa lucha interna, la había dejado avanzar a la deriva.

Para ello convocó a un brillante equipo de colaboradores, entre los cuales se contaba uno de los más escuchados economistas madurados en la CEPAL, Celso Furtado, cuyo programa buscaba integrar el esfuerzo de estabilización impuesto por una inflación cercana a descontrolarse con objetivos de largo plazo que incluían la modernización económica y la reforma agraria, sobre las líneas preconizadas por la CEPAL y luego recogidas por la Alianza para el Progreso.

Ese programa iba a ser gradualmente abandonado ante la resistencia de los sindicatos, que constituían la más sólida base política del presidente. En medio de inflación y tensiones crecientes, éste se consagró a ampliar esa base, buscando incorporar a ella a sectores populares hasta entonces no movilizados políticamente, al precio de extender estas tensiones a zonas hasta entonces relativamente poco afectadas por ellas. Éste era el propósito de la propuesta concesión del derecho de sufragio a la tropa y el de organización sindical a los suboficiales del ejército; esta última iniciativa era encontrada particularmente alarmante por los oficiales, y contribuyó decisivamente a debilitar el apego al orden constitucional del sector llamado legalista, que en 1961 había asegurado el acceso de Goulart a la presidencia contra la oposición de buena parte de sus camaradas de armas.

Complementaria de esa iniciativa era la que proponía conceder el voto a los analfabetos, previa legalización de la sindicalización campesina y adopción de un programa de reforma agraria; el resultado político que se esperaba alcanzar así era el desmantelamiento de las fortalezas erigidas por las fuerzas políticas tradicionales de base rural en los gobiernos estaduales y en el congreso federal; pero ese objetivo era necesariamente remoto, y la introducción de esos temas en la agenda

política presidencial tuvo como consecuencia inmediata enconar la oposición de esas fuerzas, que se sentían amenazadas en su existencia misma.

Las alarmas creadas por esa audaz tentativa de transformación de las bases sociales del poder político en Brasil pronto se extendieron más allá de las elites políticas directamente amenazadas por ella, en parte porque esa tentativa era presentada, sin duda sinceramente, como un aspecto de una transformación social no menos revolucionaria, que -se aseguraba- era urgente que el Estado encarara, anticipándose a los tormentas apocalípticas que de lo contrario desencadenaría la impaciencia creciente de las masas excluidas de los beneficios del orden vigente. Así, Celso Furtado justificaba su opción por la reforma agraria invocando la situación prerrevolucionaria que vivía Brasil; era ella la que hacía necesario sacrificar la preeminencia de la clase terrateniente para impedir que la revolución brasileña encontrase su Yenán en el *sertão* nordestino...

Sin duda no era imposible descubrir en la *deferential society* del Brasil arcaico algunos resquebrajamientos que parecían confirmar ese diagnóstico y pronóstico, pero no era claro para todos que ellos proviniesen (como afirmaba Furtado junto con tantos otros) del espontáneo despertar de las masas rurales, y no más bien de la febril actividad de quienes rivalizaban en el propósito de suscitar y guiar sus futuras movilizaciones. Así las Ligas Camponesas (Campesinas), que pronto alcanzaron celebridad mundial, habían sido organizadas por un talentoso abogado de Recife, Francisco Julião, con el beneplácito de la Iglesia y para ofrecer alternativa a las patrocinadas por el Partido Comunista, que en la década de 1930 había logrado reunir un séquito (sin duda más urbano que rural) en la región.

Pronto las fuerzas conservadoras hallaron ocasión de preguntarse hasta qué punto esas iniciativas destinadas a ofrecer alternativa a la revolución las favorecían; seguras de su capacidad de controlar por métodos probados cualquier veleidad de indisciplina de las masas rurales, iban a encontrar cada vez

más motivos para rehusarse a diferenciar entre quienes osaban invadir su coto político proclamando propósitos revolucionarios y quienes proponían alternativas a la revolución. Así ocurrió ya cuando Francisco Julião declaró ver en la Revolución cubana el modelo para el Brasil futuro, sin perder por ello las simpatías eclesiásticas, e iba a ocurrir cada vez más frecuentemente a medida que se pasaba del debate doctrinario al conflicto político; al arreciar éste, aun el presidente Goulart, formado en la escuela de las luchas de clanes y partidos riograndenses y la no más revolucionaria del ambiguo populismo varguista, pasó a convocar a las masas que se proponía arrojar en pacífica ofensiva contra la mayoría conservadora del Congreso recurriendo a acentos más adecuados al Lenin de una inminente revolución brasileña...

Mientras se definían con nitidez creciente las líneas del conflicto interno a la elite militar y política, la gestión económica de Goulart, totalmente orientada a facilitar la movilización de las masas urbanas y rurales con cuyo apoyo se proponía zanjarlo, se traducía en un agravamiento progresivo de la inflación, que venía a profundizar aun más las fisuras en la antigua coalición populista, reflejadas ya en 1960 en la victoria electoral de Quadros; en las ciudades las clases medias se identificaban cada vez más activamente con la oposición, y a comienzos de 1964 iban a ofrecer séquito multitudinario a las marchas de madres cristianas que, encabezadas por veteranos mariscales, declaraban su oposición irreconciliable al comunismo que, según denunciaban, era propósito del presidente instaurar en Brasil.

El 31 de marzo de 1964 una intervención militar iba a eliminar radicalmente ese supuesto peligro; invocada abiertamente por los gobernadores de los mayores estados del Brasil modernizado, contaba con el beneplácito apenas menos público de la embajada de los Estados Unidos, que había seguido de cerca el avance de la conspiración, y con el del Congreso, que, ante la fuga de Goulart, quien –como tantos otros caudillos riograndenses antes que él– se apresuró a buscar refugio en el

Uruguay, declaró vacante la presidencia y la encomendó interinamente al presidente de la cámara de diputados. Ese desenlace encontró una recepción más entusiasta de lo que sus promotores habían osado esperar; no sólo las clases medias se unían con fervor sincero al cortejo de los vencedores; una estudiosa norteamericana de las *favelas* de Río, Janice Pearlman, que hasta la víspera había compartido la noción que reconocía en ellas a uno de los focos potenciales de la revolución brasileña, descubrió el primero de abril que sus *favelados se* lanzaban sobre el centro de la antigua capital no para iniciar ninguna desesperada resistencia sino para unirse también ellos a las celebraciones...

Lo que éstas festejaban no era exactamente la abolición del régimen constitucional por un golpe militar; la tradición política brasileña admitía, tanto a nivel federal como estadual, intervenciones violentas de la fuerza armada que de algún modo lograban integrarse en un proceso aproximadamente constitucional, y pudo parecer en abril de 1964 que el episodio que culminó en la destitución de Goulart, impuesta en estrecha alianza por el sector mayoritario de la clase política y de la clase militar, se ubicaba aun en esa línea tan tradicional.

La depuración del Congreso, que eliminó a los parlamentarios más comprometidos con el expresidente, expresaba todavía la coincidencia de la antigua oposición parlamentaria y la militar, pero el hecho de que esa depuración encontrase su base legal en atribuciones extraconstitucionales conferidas al presidente por un acta institucional promulgada por el comando militar revolucionario anticipaba que esa coincidencia no iba a cimentar una alianza entre iguales; ello quedó confirmado por la elección que el congreso hizo del mariscal Castelo Branco, jefe del movimiento militar del 31 de marzo, para completar el período presidencial iniciado por Quadros en 1961.

El nuevo régimen iba a afrontar la lucha contra la inflación a partir de compromisos políticos con los distintos sectores de la sociedad brasileña que eran cabalmente opuestos a los

del presidente derrocado. Esos compromisos se reflejaron en la firmeza con que Roberto Campos, a quien confió la dirección de su política económica, buscó frenar el avance inflacionario mediante un control de salarios que vino a disminuir su nivel real, y una dura recesión de la economía, que se tradujo en avances de la desocupación urbana. Si algo tenía en común la nueva política económica con la anterior era que tampoco ella tenía por el momento nada que ofrecer a las clases medias. Los resultados de corto plazo fueron decepcionantes, y ello se reflejó en una vertiginosa pérdida de popularidad del régimen, confirmada por la derrota sufrida en las mayores ciudades por los candidatos oficialistas en las elecciones municipales y estaduales de 1965.

Ese contraste impulsó al nuevo régimen a apartarse aún más decididamente de la tradición constitucional. Una segunda acta institucional, que autorizaba a funcionar a sólo dos partidos políticos, uno oficialista –que se organizaría bajo la etiqueta de Alianza Renovadora Nacional y la sigla ARENA– y otro –el Movimiento Democrático Brasileño, o MDB– destinado a dar hogar común a aquellos opositores que no habían sido privados de sus derechos electorales, e instituía además la elección indirecta de presidente y vicepresidente, fue seguida de una tercera que eliminaba la elección popular de gobernadores y alcaldes de las capitales estaduales.

Hasta ahora, con todo, el apartamiento de la tradición constitucional era menos marcado que bajo el Estado Novo, y la represión, aunque incluyó prisiones, torturas y muertes inexplicadas, no superaba en ferocidad a la que Brasil había conocido a partir de 1935, e imponía menos trabas a la vida ideológica y cultural que el varguismo en su etapa autoritaria; ese régimen cada vez más abiertamente dominado por el ejército no parecía exceder aún los márgenes dentro de los cuales se había desarrollado hasta entonces la experiencia política brasileña.

A la vez, el nuevo régimen presentaba dos rasgos que no se ajustaban del todo a la tradición madurada a través de esa ex-

periencia. Uno –que ofrecía eco local a una transformación ya evocada en el marco latinoamericano– era la nueva modalidad de la influencia militar en el gobierno, que no era ya la de un indiscutido caudillo político del cuerpo de oficiales, sino era ejercida corporativamente por éste, modalidad que iba pronto a encontrar reflejo institucional en el peculiar sistema de sucesión presidencial adoptado en Brasil. El otro rasgo novedoso reflejaba más bien el acrecentamiento de las tensiones que era en buena medida consecuencia del impacto de la Revolución cubana, y era la tendencia del régimen a responder a los desafíos que le llegaban de sus gobernados radicalizando sus posiciones originarias, que –se ha indicado ya– innovaba profundamente sobre el estilo tradicional de la política brasileña. Esas innovaciones encontraban razonada justificación en los escritos del general Golbery de Couto e Silva, teórico de la doctrina de seguridad nacional a cuya mente fértil iba a deberse más de una de las soluciones institucionales que el régimen iba a seguir improvisando para remover obstáculos en su camino.

El perfilamiento de un régimen más innovador de lo que se había esperado en 1964 iba a acelerarse gracias a la crisis de 1968. El presidente Castelo Branco había obtenido que su mandato presidencial, que constitucionalmente debía cesar en 1966, fuese prolongado por un año, a la espera del demorado retorno de la prosperidad que se esperaba ofreciese finalmente premio a la austeridad impuesta por Roberto Campos. Esa prosperidad comenzó en efecto a despuntar en 1967, y el sucesor del primer presidente militar iba a ser elegido en un clima ya más optimista. Lo fue por el arbitraje del cónclave de jefes de regiones militares, que lo escogieron de una lista de candidatos preparada por los generales en actividad, y sometieron su nombre al congreso, que se apresuró a darle investidura constitucional. El general así agraciado, Arthur de Costa e Silva, aunque estaba lejos de ser un populista, irradiaba una bonhomía aplebeyada muy distinta de la fría austeridad que había distinguido a Castelo Branco, y parecía por ello perso-

nificar una tónica más dispuesta a la apertura política y económica, que la nueva coyuntura estaba sugiriendo al régimen militar.

Mientras gracias a Delfim Neto, reemplazante de Roberto Campos, la economía brasileña era invitada desde el gobierno a dejarse llevar con confianza por la nueva onda expansiva, la tolerancia con que eran recibidas las manifestaciones cada vez más abiertas de oposición política abrió el camino a una agitación que a lo largo de 1968 iba a crecer impetuosamente en las mayores ciudades de Brasil. Apoyada por todos los caudillos que habían ganado ascendiente en la etapa clausurada en 1964, desde Goulart y Kubitschek hasta Quadros y Lacerda, la protesta tuvo por punta de lanza el movimiento estudiantil universitario. Estimulado por ese despertar político, el congreso abandonó súbitamente su docilidad para negarse a las expulsiones de sus miembros más estridentemente opositores, que le había solicitado el presidente.

La crisis así planteada iba a superarse mediante un nuevo endurecimiento, que impuso niveles de represión desconocidos hasta entonces en Brasil. El acta institucional número cinco autorizó al presidente a disolver el congreso, y a distribuir con mano pródiga las privaciones de derechos electorales y civiles, extendiendo la depuración de la esfera política y sindical a la universitaria, cultural y profesional, cuyas agitaciones acababan de revelarse peligrosas. Al año siguiente la crisis de salud de Costa e Silva permitió su reemplazo por el general Garrastazu Medici, ferviente partidario de esa política duramente represiva; parecía así completarse la transición que había creado a tientas un nuevo régimen sobre las ruinas de la Segunda República.

Esta creación, que aparecía tan novedosa como sólida, iba a ser presentada por estudiosos de la política como ejemplo paradigmático del estado burocrático-autoritario que a su juicio estaba madurando en Latinoamérica en respuesta a las necesidades de la nueva etapa de industrialización, que el populismo y el desarrollismo habían sido incapaces de satisfacer.

La nueva configuración política aparecía caracterizada no sólo por el ya recordado predominio del ejército como institución, y no ya de un caudillo surgido de sus filas, sino más aún por la construcción bajo égida militar de un aparato estatal organizado con criterios de eficacia tecnológica y administrativa, que aseguraba a expertos dotados de adecuada formación profesional, en campos que iban desde la economía hasta la física aplicada y la agronomía, un papel sin duda subordinado, pero una esfera de competencia mucho más vasta que en la etapa anterior. Ese Estado era expresión política del entendimiento entre la elite militar, la empresaria nacional y las firmas trasnacionales que deben tener papel principal en esa nueva etapa industrializadora; mientras cultivaba un controlado pluralismo en el manejo de las relaciones entre esos elementos a los que reconocía ciudadanía política, marginaba de la esfera de las decisiones a las clases subordinadas, mediante sus despolitización ideológica y su fragmentación y desarticulación, aseguradas por una vigilancia celosa de cualquier esfuerzo organizativo que aspirase a ir más allá de la elite económico-social; se advierte muy bien cómo tanto en sus relaciones con esa elite como con las masas el estado burocrático-autoritario tenía muy poco en común con el estado fascista, que había sido a la vez totalitario y movilizador.

En Brasil esa diferencia (mayor que la que había corrido entre el estado fascista y el Estado Novo) se veía reflejada en la nueva orientación del control del gobierno sobre los sindicatos, que buscaba desmovilizarlos y ya no movilizarlos en apoyo de la política dominante, pero también en la persecución sistemática de cualquier forma asociativa que amenazara abrir un espacio para la organización política, así fuese controlada, de los grupos subordinados, y en el fomento de aquéllas capaces de volcar las energías de esos grupos hacia objetivos menos temibles, desde el fútbol hasta los carnavales, que se acompañaba desde luego de una vigilancia alerta frente a cualquier deslizamiento de éstas hacia actividades menos inocentes.

Lo que tiene en común ese estado burocrático-autoritario con el estado fascista es en cambio la brutalidad sistemática de sus respuestas a cualquier desafío opositor, y aun a la presencia de núcleos que cree capaces de originarlo; la represión practicada en Brasil a partir de 1968 fue por lo menos tan sistemática como la que conoció la Italia fascista hasta 1943, y excedió sin duda la crueldad de ésta. Por un tiempo la única respuesta que ella iba a encontrar fue un brote de violenta resistencia urbana inspirado por Carlos Marighela, dirigente comunista que la propuso como alternativa a la táctica pacífica preferida por su partido. Luego de algunos exitosos golpes de mano, el brote pudo ser sofocado y en el proceso el salvajismo de la acción represiva vino todavía a acentuarse; por unos años Brasil iba a aparecer ante la opinión mundial como el más escandaloso ejemplo latinoamericano de desprecio por los derechos humanos.

No era sólo el éxito alcanzado por esa inhumana represión el que permitía augurar un largo futuro para el régimen madurado en Brasil a través de las tormentas de la década que se estaba cerrando. La recuperación que se insinuaba tardíamente en 1967 dio paso dos años más tarde al que iba a llamarse milagro brasileño; frente a una Hispanoamérica que, salvo excepciones excesivamente localizadas, parecía incapaz de escapar sino fugazmente del estancamiento, Brasil no sólo crecía ahora a tasas que contaban entre las más altas del mundo, sino comenzaba a crear una estructura industrial madura y compleja; si ese crecimiento arrastraba y acentuaba las desigualdades económicas y sociales que lo habían caracterizado ya en el pasado, parecía asegurar únicamente para Brasil en Latinoamérica un lugar entre los gigantes económicos del Tercer Mundo, que como la India han logrado construir en un marco arcaico un sector de economía moderna capaz de situarse en la vanguardia del avance económico y tecnológico mundial; es convicción muy arraigada entre los estudiosos de ciencia política que éxitos como éste que se anunciaba en Brasil favorecen la consolida-

ción duradera de los regímenes bajo cuya égida han sido alcanzados.

Ese éxito distanciaba cada vez más Brasil de esa **Argentina** que todavía en 1960, con una población mucho más exigua y estancada que la brasileña, había podido sostener la comparación con su vecino y rival en lo que respecta a las dimensiones de su economía y el avance de su industrialización, y que en la década abierta en ese año iba a intentar en vano mantenerse en liza aplicando el nuevo modelo político y socioeconómico brasileño. Pero si en 1960 ambos países afrontaban una situación crítica, ésta venía para Argentina de mucho más atrás: la bonanza exportadora de postguerra, que en Brasil había sobrevivido con altibajos hasta 1959, había cesado allí diez años antes. No era ésa la única razón por la cual el programa desarrollista del presidente Frondizi fue instaurado bajo auspicios aún menos favorables que el lanzado años antes por Kubitschek; como se recordará, el contexto político argentino era aún menos fácil que el brasileño, y se ha indicado ya hasta qué punto el lastre de las ambigüedades y contradicciones en que Frondizi había debido incurrir para abrirse camino al poder vino a agravarse decisivamente desde que la Revolución cubana tomó un camino que la opinión conservadora argentina contemplaba con un horror que no parecía compartir el antiguo jefe de la izquierda radical, que desde la presidencia se esforzaba por aplicar soluciones económicas conservadoras.

Jaqueado por la desconfianza militar y la del peronismo, a cuyos votos debía su victoria electoral, Frondizi, tras de colocar al frente de las tres fuerzas armadas a oficiales dispuestos a respetar la restaurada legalidad constitucional, los sustituyó ante los primeros amagos de oposición de sus subordinados; la lección que dedujo de esos episodios el cuerpo de oficiales fue que apoyar esa legalidad era suicida y socavarla, aun sin éxito, era por el contrario el mejor camino para prosperar en la carrera. Bien pronto iba a imponerse entre ellos la llamada modalidad deliberante; las fuerzas armadas, cada vez más autónomas fren-

te al Estado del que teóricamente eran agentes subordinadas, se acercaban a practicar una curiosa democracia directa, en que jefes de guarnición y comandantes en jefe se enorgullecían en proclamarse agentes de la voluntad de las bases.

Para el presidente la única esperanza de salir de esa apretura, agravada por la impaciencia creciente del peronismo, residía en el éxito del programa desarrollista, pero, según se ha indicado ya, éste fue más limitado y sobre todo más efímero de lo que Frondizi había esperado, y vino por otra parte a reforzar el movimiento sindical, que ya durante la penuria anterior había debido ser reprimido mediante la aplicación del Plan de Conmoción Interior (Conintes), favorito instrumento de gobierno del caído peronismo, utilizado ahora para legalizar el uso del ejército en la represión de huelgas violentas, y otras que no lo eran tanto.

Pese a la dureza de esos episodios represivos, no sólo el poder sindical había sobrevivido tan intacto a esos nuevos desafíos como a los del gobierno militar establecido en 1955, sino seguía siendo capaz de frustrar los esfuerzos de racionalización del vasto sector de empresas del Estado, en que la batalla principal se iba a dar esta vez en las ferroviarias, cuya creciente ineficacia se debía tanto el arcaísmo del material en uso como al exceso de personal. Pese a esas frustraciones y las más graves que provenían del continuado estancamiento de las exportaciones agrícolas, aun después de una devaluación que les había sido favorable, el presidente se afanaba por prolongar por medios cada vez más artificiosos la coyuntura expansiva, confiando en que ella le permitiría crearse una base electoral propia y aumentar así su independencia tanto frente al peronismo como frente al ejército; varias elecciones locales escalonadas a lo largo de 1961, en que listas identificadas con el peronismo habían sido autorizadas a presentarse, reflejaron avances impresionantes de la fracción radical llamada intransigente que el presidente capitaneaba.

Éste había creído reconocer otro presagio favorable en la instalación en Washington del gobierno Kennedy, que espe-

raba más abierto a las inquietudes latinoamericanas que su predecesor; alarmado por la hondura de la crisis cubana, que estaba empujando a la nueva administración a una intransigencia aún mayor que la de Eisenhower para mediar en ella gestionó una entrevista con Ernesto Guevara, de paso por Buenos Aires en visita familiar, que no pudo mantener secreta. Sólo sobrevivió a la violenta reacción militar accediendo a romper relaciones con Cuba, para declarar de inmediato que pese a ese revés temporario no renunciaba a reivindicar el derecho de Argentina a desarrollar una política exterior independiente, y proclamar en tono desafiante que el contencioso que por esa razón lo oponía al ejército iba a ser resuelto junto con el que lo dividía del peronismo y los sindicatos por el veredicto del sufragio universal, en las elecciones de renovación parlamentaria y de gobiernos provinciales de comienzos de 1962.

Ese veredicto le iba a ser desfavorable; pese a los avances del partido de gobierno (en perjuicio del resto de los no peronistas) el peronismo, al recibir el apoyo de un tercio del electorado, volvía a revelarse la primera fuerza política del país. Las fuerzas armadas sacaron rápidamente las conclusiones que a su juicio se imponían: tras de expulsar a Frondizi, instalaron en la casa de gobierno al presidente *pro tempore* del Senado y disolvieron el Congreso; todo ello no implicaba, según proclamaban, apartarse de las más rígidas normas de prescidencia política y acatamiento a las normas constitucionales.

El interinato semiconstitucional de José María Guido estuvo marcado por conflictos internos al ejército, dirimidos por dos veces en breves choques armados, y se desenvolvió en medio de una recesión económica agravada por la aplicación literal de lo que ahora se llamaba liberalismo económico, que condujo al paro forzoso de un tercio de la fuerza de trabajo, mientras una nueva devaluación concentraba la escasa prosperidad en el campo. Finalmente el panorama político se aclaró: las fuerzas armadas, alarmadas por el peligro de disgregación interna que su excesiva politización había creado, resolvieron

dejar el destino del país en manos del electorado, no sin antes decidir entre qué alternativas le sería permitido escoger; si al principio parecían dispuestas a autorizar una participación subordinada y condicionada del peronismo en una coalición lo bastante amplia para diluir su amenaza, cuando advirtieron que en esa coalición tendría papel significativo el frondizismo multiplicaron las condiciones hasta forzar al movimiento mayoritario a la abstención. En estas condiciones tan peculiares la fracción tradicional del radicalismo obtuvo una inesperada victoria, que llevó a la presidencia al doctor Arturo Illia, político cordobés de prestigio sólo local, mientras el voto peronista se dispersaba.

La base política del nuevo gobierno no podía ser más débil. Votado por sólo un cuarto del electorado, contaba con la antipatía del sector dominante en las fuerzas armadas, que recordaba muy bien los estrechos lazos de algunos dirigentes del partido ahora gobernante con sus rivales de la fracción militar más rabiosamente antiperonista. Pero estos últimos, ya muy debilitados y cada vez más hostiles a la democracia representativa, no ofrecían una alternativa militar posible o deseable para el nuevo gobierno, que tomaba totalmente en serio su compromiso de gobernar sin acudir a la represión, y asegurar plenas libertades electorales.

La única compensación para todos esos flancos débiles era el fin de la larga crisis del sector exportador: en 1963, quince años después del fin de la breve bonanza de postguerra, y a ocho de la introducción de una política favorable al sector agrícola, las exportaciones volvían a crecer, y la tendencia ascendente iba a mantenerse, aunque con altibajos, a partir de entonces. Ello, y la hondura misma de la recesión deliberadamente intensificada por las políticas aplicadas durante el interinato de Guido, aseguró una expansión cuyo vigor superaba cuanto el país había conocido a partir de 1950, y que iba a prolongarse hasta mediados de 1965; aun luego de su agotamiento, la situación económica estuvo muy lejos de alcanzar los tonos sombríos de las etapas que habían separado las breves

expansiones de la etapa anterior. Sin duda las causas principales de ese éxito eran ajenas al gobierno de Illia, pero éste tuvo el mérito de permitirles desplegar sus efectos mientras se esforzaba por asegurar a la economía nacional un ritmo menos agitado, introduciendo en su manejo un gradualismo que contrastaba con los bruscos cambios de orientación tan frecuentes en el pasado. Así, una política monetaria de devaluación lenta y gradual (que se anticipaba al *crawling peg* luego celebrado como uno de los secretos del milagro brasileño) eliminaba las redistribuciones bruscas y masivas entre campo y ciudad y entre sectores sociales, y la apertura a la inversión extranjera como fuente de industrialización acelerada, aunque sobrevivió al impacto negativo de la anulación de las concesiones petroleras otorgadas por Frondizi que contó entre las primeras decisiones del nuevo gobierno, no se acompañó ya de la recluta frenética de esos capitales que había caracterizado también a la gestión de Frondizi.

Esa gestión económica se pareció entonces muy poco a las caricaturesca imagen que de ella proponía la prensa opositora, que en tonos cada vez más hirientes denunciaba su total inoperancia. Pero esa imagen, que expresaba la insatisfacción de todos los sectores de intereses frente a una política que se negaba a establecer alianza privilegiada con ninguno de ellos, confirmaba que, cualesquiera fuesen sus otros méritos, esa política económica no iba a asegurar al gobierno los sólidos apoyos socioeconómicos que hubieran quizá podido compensar las insuficiencias de su base electoral.

La oposición periodística no expresaba tan sólo la insatisfacción de ciertos sectores de intereses, sino aun más directamente la de las fuerzas armadas (que, era un secreto compartido por multitudes, financiaban a algunos de los semanarios más activos en la campaña opositora) frente a un gobierno que no había tendido puentes con el sector que las dominaba, y cuyo compromiso de retorno a la plena libertad electoral amenazaba abrir el camino a la restauración del peronismo en el poder.

La reconquista del poder no parecía en efecto fuera del alcance de un peronismo ya muy avanzado en la reconstrucción de sus bases políticas, ahora más concentradas en los sindicatos, cuya estructura institucional había resistido mejor que la del partido los golpes de la represión, y que -gracias a su control de los servicios hospitalarios y turísticos sostenidos con el aporte obligatorio de los trabajadores- contaban con fondos más cuantiosos que todas las fuerzas políticas argentinas. Tras de sobrevivir triunfalmente a más de una dura persecución, los sindicatos aparecían a los ojos de sus dirigentes como una fuerza indesarraigable de la vida político-social argentina; esos dirigentes estaban convencidos por añadidura de que la fracción militar que había ganado claro predominio durante el interinato de Guido estaba ya plenamente dispuesta a aceptarla como tal.

Frente a una posible restauración peronista, juzgaban con razón que el ejército, dispuesto a aceptar la presencia sindical, lo estaba mucho menos a permitir el retorno triunfal del ex-presidente al que había expulsado de sus filas; no esperaban por otra parte retener en el marco de esa restauración la gravitación política y aun la libertad de acción ganadas con tanto esfuerzo a partir de 1955. Esa reacción reticente tuvo expresión sólo aparentemente paradójica en la llamada Operación Retorno, una campaña de agitación auspiciada por el más poderoso de los caudillos sindicales, el metalúrgico Augusto Vandor para forzar a Perón a intentarlo.

Éste no pudo finalmente eludir un intento que sabía prematuro, y partió en azaroso vuelo a Buenos Aires, interrumpido en Río de Janeiro por decisión del gobierno militar brasileño que a solicitud del de Illia lo obligó a retornar a Madrid. A juicio de Vandor, ese desenlace (que había venido a probar que el retorno era imposible) lo desligaba de los compromisos derivados de su lealtad personal al jefe desterrado, y le permitía por fin integrarse sin reservas del orden post-peronista, que sólo esperaba esa decisión del movimiento derrocado en 1955 para acogerlo con los brazos abiertos.

La casi abierta división del peronismo no impidió a éste seguir ganando terreno en la opinión pública; si en 1962 había obtenido un tercio de los sufragios populares, en la elección de renovación parlamentaria de comienzos de 1965 las listas peronistas en conjunto recibían cerca del 40 por 100 de los votos (la organización partidaria heredera de la disuelta en 1955, controlada por Vandor y sus aliados, superaba por sí sola el 30 por 100). Esas cifras parecían reflejar tanto el fortalecimiento de la presencia peronista como la decadencia del influjo personal de Perón, y reconfortado por ellas Vandor pasó a idear y dirigir el Plan de Lucha, adoptado bajo su influjo por la Confederación General del Trabajo, que convocaba a la clase obrera a acciones que iban desde huelgas hasta ocupaciones pacíficas de fábricas en defensa de objetivos que esquivaban cuidadosamente todo sesgo clasista, y por el contrario se hacían eco de las demandas de activación económica agitadas por los sectores empresarios. El gobierno enfrentó el Plan de Lucha con una sobriedad que despojó a la emergencia de ribetes dramáticos; a la marea de huelgas y ocupaciones siguió el inevitable reflujo, pero el episodio no dejó por ello de influir en el panorama político; a través de él el sindicalismo había venido a incorporarse a las grandes maniobras previas al derrocamiento del gobierno Illia, ya decidido por la cúpula militar.

El entendimiento militar-sindical en favor de un nuevo golpe creaba una momentánea coincidencia de intereses entre el gran desterrado y el gobierno Illia. Mientras Vandor perfilaba cada vez más su disidencia y extendía su influjo más allá del movimiento sindical, Perón se decidió a jugar el todo por el todo enviando a su tercera esposa a rehacer en su nombre la cohesión del sector peronista que le seguía fiel, y el gobierno hizo lo necesario para que la presencia y acción de la enviada alcanzase la máxima repercusión.

La querella entre Perón y sus grandes vasallos rebeldes iba a ser dirimida por el sufragio universal en las elecciones provinciales de Mendoza, a comienzos de 1966. El oscuro candidato a gobernador prohijado por María Estela (Isabel) Martínez de

Perón y sobre todo por su marido (cuya toma de posición era difundida mediante breves alocuciones al electorado mendocino, a través de las cuales tras de diez años de ausencia su voz y su efigie reaparecían en las pantallas de televisión de su país) obtuvo una convincente victoria sobre el candidato oficial del movimiento peronista y los sindicatos, una influyente figura local que era además uno de los más brillantes representantes de esa tendencia en el congreso nacional.

No era ése el resultado que había esperado el gobierno, que había contado con que Perón desgajaría una fracción importante pero minoritaria de su antiguo partido, mientras la mayoritaria, en ruptura ya inevitable con el fundador del movimiento, completaría su asimilación al orden post-peronista, y al dar a éste una sólida base electoral le haría posible encuadrarse establemente en el marco de la democracia constitucional.

El resultado electoral de Mendoza repercutió de inmediato en las filas del peronismo disidente, tanto en el partido como en los sindicatos; la hégira de dirigentes de ambos hacia las tiendas hasta ese momento pasablemente solitarias de Isabel Martínez amenazó pronto hacerse incontenible, y todo parecía anunciar para las elecciones al congreso nacional y de gobernaciones provinciales, que debían celebrarse en marzo de 1967, una sólida victoria electoral de un peronismo unificado en torno a su jefe histórico.

Esa posibilidad, que era casi una seguridad, terminaba de desahuciar al gobierno de Illia a los ojos de la cúpula militar, mientras crecía al entusiasmo golpista de la cúpula sindical, que, temerosa de verse entregada a la venganza de un victorioso Perón, se apoyaba en las perspectivas institucionales propuestas por los publicistas al servicio de la dirigencia militar, que proclamaban haber descubierto en el ejército, la Iglesia, las organizaciones empresarias y las sindicales a los «factores reales de poder», a la vez sostenes y condicionantes de los titulares formales de éste, para concluir que el golpe que la libraría de esa venganza no afectaría el lugar ya ganado por el movimiento sindical en la vida nacional.

Así las cosas, no es sorprendente que el que en junio de 1966 desplazó del poder al presidente Illia haya contado con un amplio consenso favorable; al prestar juramento el general Juan Carlos Onganía, designado presidente por los comandantes en jefe de las tres armas, la elite del poder lo rodeó unánimemente para celebrarlo; junto con generales y prelados, dirigentes empresarios y numerosas damas que celebraban el retorno a la sede del gobierno de un público más selecto que el séquito del gobierno Illia, podía verse a un radiante Augusto Vandor; por añadidura, con la comprensible excepción del partido derrocado, los no peronistas recibían con beneplácito a veces abierto la instalación de las fuerzas armadas en el gobierno, y desde su destierro Perón les auguraba el mejor de los éxitos.

Ese contorno tan apacible no dejó de afectar la visión que el nuevo régimen tenía de su cometido y de los medios para alcanzarlo. La vigilancia ideológica y política que el general Onganía había fijado como tarea principalísima de las fuerzas armadas en su ya recordado discurso de West Point suponía un contexto muy distinto; aunque el nuevo régimen procuró no descuidarla, ella parecía bastante irrelevante a la circunstancia en la que éste debía desenvolverse.

Mientras el partido comunista, disuelto junto con todos los otros, no era víctima de una represión especialmente intensa, el gobierno militar concentraba sus ataques contra las amenazas más insidiosas derivadas de la acelerada modernización de ideas y estilo de vida que había vivido Argentina desde 1955. La primera víctima fue la universidad, considerada un foco de subversión ideológica y de corrupción moral; a un mes de la asunción del poder, la intervención que privaba a las nacionales de su autonomía provocó el primer conflicto serio que debió afrontar el gobierno de Onganía. Luego de ese percance inicial, la campaña depuradora iba a extenderse a la vida cultural y artística de Buenos Aires, que durante esos años de creciente incertidumbre había adquirido una intensidad nueva, bajo el signo de una frivolidad cada vez más mili-

tante; gracias a los esfuerzos del gobierno Onganía tuvo comienzo el proceso que terminaría por hacer cada vez más difícil a una ciudad acostumbrada a vivir el ritmo del mundo seguir a distancia los avances de otras capitales latinoamericanas que había acostumbrado menospreciar como irremediablemente provincianas. La fascinada atención con que la opinión pública seguía esos episodios espectaculares se debía en parte a la escasa virulencia de los conflictos más directamente vinculados con la problemática sociopolítica de la hora, que el gobierno de la llamada Revolución argentina hallaba más fácil ignorar que sus predecesores.

Aunque advertía que esos conflictos permanecían sin resolverse, el régimen militar estaba persuadido de que la vía para lograrlo no era encararlos de frente, sino inducir en la economía cambios lo bastante intensos para tornarlos irrelevantes. Tras de unos meses de titubeos, a fines de 1966 la designación del doctor Adalbert Krieger Vasena en el ministerio inauguró un esfuerzo de reestructuración gradual y progresiva de la economía, la sociedad y la política argentinas. El plan económico que pasó a aplicarse se apartaba en aspectos sustanciales de los que ya desde antes de 1955 habían buscado afrontar la crisis del sector agrario-exportador. Superada finalmente ésta, la severa devaluación incluida en el plan de Krieger Vasena no favorecía ya al sector rural, sino al Estado, a través de retenciones sobre los ingresos de los exportadores que comenzaban por absorber el entero impacto de la devaluación en el precio interno de las exportaciones, y estaban destinadas a disminuir sólo muy lentamente. Con ello se aseguraban no sólo recursos fiscales que hacían menos necesario recurrir a la inflación, sino un respiro en la presión que ésta ejercía sobre el sector externo y que hasta entonces había impuesto devaluaciones periódicas, reemplazadas ahora con ventaja por la eliminación gradual de las retenciones. Esa ingeniosa solución no podía asegurar la estabilidad cambiaría sino mientras quedasen retenciones que eliminar; sin embargo el doctor Krieger Vasena presentó la devaluación de 1966

como la última que iba a conocer la Argentina, y dio especial solemnidad a esa promesa al combinarla con una conversión monetaria que creaba una nueva unidad cuya equivalencia con el dólar era muy cercana a la del peso al abrirse el proceso inflacionario.

Esa apuesta sobre el futuro se apoyaba en la esperanza de que la estabilidad monetaria asegurada por la reforma, sumada a la social y política que el régimen militar estaba imponiendo sin afrontar desafíos de importancia, iba atraer una corriente de inversiones capaz de estabilizar la moneda de modo menos efímero. Esperaba todavía algo más: que esas inversiones corrigiesen el retraso creciente que afectaba al aparato productivo, tanto agrícola como industrial, a la vez que a los transportes y comunicaciones.

En 1967 y 1968 el plan tuvo resultados notablemente auspiciosos; sin duda no faltaban motivos para dudar de su viabilidad a largo plazo, ya que las inversiones extranjeras estaban siendo atraídas por tasas de interés cercanas a las de la etapa de inflación dejada atrás, que en un contexto de estabilidad cambiaria se tornaban exorbitantes. Pero ese largo plazo no iba a llegar; a comienzos de 1969 una sucesión de tumultos urbanos culminó en el que en marzo conmovió a Córdoba, y que, iniciado por los trabajadores de la industria del automóvil, ganó primero el apoyo de los estudiantes universitarios y luego el de una parte muy amplia de la población urbana.

El «cordobazo» reveló súbitamente la presencia de las tensiones por un momento adormecidas. El régimen militar no había satisfecho las esperanzas del sector sindical; frente a los dirigentes que se habían ofrecido como sus aliados promovió a otros dispuestos a aceptar una posición más subordinada, y osó imponer medidas de racionalización económica que los sindicatos habían combatido antes con más éxito. Si al comienzo sólo un sector minoritario del movimiento sindical se colocó en oposición abierta, el cordobazo marcaba entre otras cosas el ingreso en ésta de la dominante franja media del gremialismo argentino.

Ya antes de que se produjese, Augusto Vandor había comenzado a explorar alternativas políticas a esa Revolución Argentina que tanto lo había decepcionado. La solución a la que ahora se inclinaba era un retorno negociado al sistema electoral, apoyado en un acuerdo de fuerzas políticas y sociales que se cobijarían bajo el prestigio a la vez político y militar del general Aramburu; unos meses después del «cordobazo» el asesinato de Vandor no alcanzó a poner fin a ese proyecto, tan alarmante para Onganía como para Perón.

Ese asesinato comenzaba a la vez un avance en el uso político de la violencia, recibido casi sin resistencia por la opinión pública gracias en parte a la turbulencia política creciente que era herencia del cordobazo. Éste debilitó el ascendiente de Onganía sobre sus camaradas que lo habían instalado en la presidencia; en junio debió resignarse a aceptar la dimisión de Krieger Vasena, y aunque su sucesor buscó mantener las grandes líneas del proyecto económico de 1966, no contaba ya con la fuerza política necesaria para ello.

El gobierno de Onganía iba a agonizar todavía por un año; fueron el secuestro y muerte del general Aramburu los que finalmente le asestaron su demorado golpe de gracia. Esta vez los responsables decían su nombre, pero éste decía muy poco a la opinión pública; eran los Montoneros, una organización revolucionaria peronista que introducía así en Argentina tácticas de lucha inspiradas en una lectura muy libre de la lección de Cuba. Esa segunda muerte venía a frustrar definitivamente el proyecto político promovido por Vandor, y de nuevo tanto Perón como el ya moribundo gobierno de Onganía aparecían como sus beneficiarios. Las sospechas que ello inspiró sellaron el destino de ese gobierno; el general Lanusse, uno de sus grandes promotores, encabezó la reacción que le puso fin, pero no logró aún que sus camaradas diesen por fracasada la Revolución Argentina y tomasen a su cargo el proyecto que había sido de Vandor y Aramburu; mientras crecía la tensión y la desorientación política y se descubrían cada día nuevos usos para la violencia, al abrirse la nueva dé-

cada Argentina parecía tan alejada de descubrir un rumbo como diez años antes...

Pero no sólo en Argentina, que hallaba tan difícil dejar atrás la era del populismo, los problemas dejados en herencia a la nueva década se presentaban aún más intrincados que los que en 1960 había parecido imprudente continuar eludiendo. **Uruguay** seguía por su parte viviendo la interminable agonía del estado de bienestar creado bajo la inspiración de Batlle; se ha visto ya que la victoria electoral de sus adversarios no fue seguida de un ataque demasiado vigoroso; las tentativas de redistribución en favor de los sectores primarios-exportadores, y las violentas reacciones que despertaban en el movimiento sindical, punta de lanza de la mayoritaria población urbana, sólo vinieron a provocar una aceleración de la inflación, sobre todo porque a medida que se aproximaban las elecciones de 1962 el gobierno blanco se compenetraba de la necesidad de no arrojar a ese sector mayoritario a una oposición unánime. Gracias a esa prudencia obtuvo una victoria nada decisiva, que en 1963 le permitió presidir el derrumbe de buena parte del aparato bancario heredado de la efímera prosperidad de la década anterior, mientras el peso uruguayo parecía entrar en caída libre. Sólo la urgente apelación al crédito internacional la detuvo, mientras se cortaban todas las importaciones porque no había con qué pagarlas. Los aumentos de salarios eran ahora contrarrestados de antemano por la inflación, y el gobierno colegiado dominado por los blancos se vio finalmente obligado a afrontar con la represión demandas que no estaba en sus manos satisfacer, haciendo así inevitable su derrota electoral en 1966.

En esa ocasión el electorado aprobó también una nueva constitución, que suprimía el Consejo de Gobierno (ejecutivo colegiado) y –al transferir al presidente las funciones de patronazgo, antes divididas entre sus miembros, que actuaban como apoderados de sus respectivas fracciones partidarias– hacía posible rehacer la unidad de los partidos tradicionales,

divididos en clientelas incapaces de apoyar cualquier acción de gobierno que fuera más allá de la distribución de los despojos del Estado. Pero en lugar del inspirador de la reforma, Jorge Batlle, quien había heredado el liderazgo de la fracción ahora mayoritaria del coloradismo organizada por su padre Luis Batlle Berres, fue elegido presidente el general Gestido, candidato de una coalición de fracciones coloradas menores y menos dispuesto a usar los ampliados poderes que la constitución ponía en sus manos. Gestido, cuya esencial honradez de intenciones le había ganado auténtica popularidad, se encontró bien pronto prisionero tanto de las fracciones que dominaban el Congreso como de un situación económica que no dejaba espacio para mejorar la situación de las masas populares urbanas. A su muerte lo sucedió el vicepresidente Pacheco Areco, continuador de una tradición colorada más antigua que la del batllismo: la de un autoritarismo a la vez aplebeyado e identificado con la base militar del poder político.

Lo que devolvía actualidad a esa tradición largamente olvidada era el desafío desde la izquierda, que apoyándose en la protesta ya crónica del sindicalismo (cada vez más firmemente controlado por el Partido Comunista) contra una situación económica adversa, y la del movimiento estudiantil contra una política exterior que seguía disciplinadamente la orientación fijada desde Washington, se volcaba por una parte en un frente electoral integrado por comunistas, socialistas, democristianos y pequeñas fracciones desgajadas de los partidos tradicionales, en el que éstos temían descubrir un rival serio, y por otra en un movimiento clandestino, el de los tupamaros, dirigido por militantes políticos y sindicales de pasado socialista, que reprochaban al frente tanto su preferencia por la vía electoral como la moderación de sus formulaciones programáticas.

La popularidad que los tupamaros ganaron en su primera etapa, a través de acciones tan espectaculares como incruentas, era una nueva prueba de la desafección que rodeaba al orden vigente en Uruguay, donde la restauración democrática

de 1942 no había logrado revivir la fe colectiva que había animado al Uruguay de Batlle, y la más reciente adversidad económica acompañada de sostenida inflación había terminado por privar de toda sustancia el estado de bienestar. Pero si esa desafección fue capaz de inspirar una receptividad nueva para propuestas revolucionarias, ésta reconocía una inspiración ambigua; eran muchos lo que se sentían atraídos por la promesa de la revolución porque esperaban de ella la restauración de ese Uruguay de modesta prosperidad y atenuada desigualdad socioeconómica en que en la memoria colectiva se estaba transformando el país anterior a 1929 y 1933. Esa amable nostalgia preparaba muy mal a la cada vez más ancha franja desafecta, tanto para percibir la seriedad del desafío que su disidencia venía a introducir como para afrontar la dureza de las respuestas que iban a oponérsele durante las confrontaciones decisivas que también en Uruguay habían sido pospuestas pero no resueltas en la supuesta década de decisiones.

En **Bolivia** esa década será de progresiva degradación del régimen instaurado por la revolución de 1952. Ella se abre, se recordará con el retorno a la presidencia de Paz Estenssoro, quien –con el apoyo del dirigente minero Lechín, que lo acompaña como vicepresidente– parece destinado a rectificar la línea de austeridad económica y desmovilización político-social favorecida por Siles Suazo. No será así, sin embargo; tanto la situación económica –que deja muy poco espacio para rectificaciones a la austeridad impuesta por ella misma más que por las personales preferencias de Siles– cuanto la tensión creciente que lo separa de su vicepresidente, en quien descubre un heredero cada vez menos paciente, empuja a Paz Estenssoro a posiciones que exasperan las que había reprochado a su predecesor. Su propuesta reforma de la constitución, destinada a hacer posible la reelección presidencial inmediata, y su declarada intención de ser el primero en hacer uso de ella, llevan esa tensión a su punto crítico. Lechín encabeza una nueva escisión del MNR, y Paz busca compensar el

progresivo estrechamiento de su base política intensificando vínculos con el ejército, cuya reconstrucción se ha preocupado por acelerar desde su retorno a la presidencia; en 1964 lo acompañará como candidato a vicepresidente el general de aviación René Barrientos, y la fórmula presidencial así integrada triunfará en elecciones en que todas las oposiciones se habrán negado a participar.

Esa victoria vacía augura lo peor para la nueva gestión presidencial del veterano jefe del MNR; las denuncias de conspiraciones seguidas de exilios de jefes opositores y los disturbios estudiantiles y choques con los mineros se suceden frenéticamente, hasta que en noviembre de 1964 un golpe militar encabezado por Barrientos, y triunfante cuando el general en jefe del ejército, Adolfo Obando, depone su oposición a él, envía a Paz al exilio, mientras los jefes de las escisiones de derecha e izquierda retornan de él. Pero el apoyo de estos últimos dura poco, y en medio del retorno de las tensiones, en abril de 1965 Barrientos proclama su intención de retirar su candidatura presidencial en las elecciones convocadas para septiembre, que son por lo tanto canceladas, mientras Lechín es enviado a un nuevo y poco grato destierro en Paraguay y se crea una presidencia compartida por Obando y Barrientos. Las ambiciones de éste han sido sólo pospuestas; en julio de 1966 es elegido presidente y permanecerá en el mando hasta su muerte, en un accidente de helicóptero, en 1969.

El gobierno de Barrientos se definiría heredero y continuador de la revolución de 1952; de hecho continuaba sobre todo la involución de ésta, que había comenzado años antes de 1964. El régimen revolucionario, tras de perder bien pronto su base urbana, decisiva para el éxito de la insurrección de 1952, a partir de 1956 se vio corroído por el conflicto en torno al manejo de la minería del estaño; mientras los politizados y militarizados mineros de la cuenca de Oruro rehusaban a aceptar modificaciones tecnológicas y organizativas que hubiesen tornado menos onerosa la explotación de las minas nacionalizadas, pero hubieran también puesto en peligro las

modestas conquistas laborales aseguradas en 1952, todos los gobiernos fueron empujados por la penuria a desafiar ese veto; desde entonces el sindicato minero, el más poderoso dentro de la organización sindical boliviana, se constituyó en el núcleo de la resistencia al giro moderado de la revolución, con eficacia suficiente para frustrar los sucesivos planes oficiales de racionalización del rubro estañífero; ni las maniobras políticas que Siles y Paz acompañaron de tímidos intentos represivos, ni la ocupación militar de la cuenca minera, seguida de una represión mucho más brutal, que iban a imponer Obando y sobre todo Barrientos, alcanzaron efectos duraderos contra la obstinada resistencia de los trabajadores.

Al mismo tiempo el sector minero perdía gradualmente gravitación tanto en el campo político-militar como en el económico. En el militar la rehabilitación del ejército, acelerada durante la década de 1960, hizo que la milicia que en 1952 había surgido como la más poderosa fuerza militar en Bolivia fuese incapaz de proteger su propia base territorial de la ofensiva del ejército nacional, que la ocupó cuantas veces quiso. Económicamente, mientras Bolivia no podía devolver vigor a su economía exportadora mientras continuase produciendo a pérdida su más importante rubro de exportación, el crecimiento y diversificación del resto de la economía, que esa crónica crisis del sector externo no alcanzó a detener, tenía por consecuencia el peso decreciente que el estaño retenía en ella.

Políticamente la pérdida del apoyo minero, como antes la defección de las masas urbanas, no impedía a los herederos militares de la revolución retener un apoyo electoral mayoritario; la compleja alianza social que había sostenido a la revolución de 1952 dejaba paso, como sostén del nuevo Estado, a la alianza militar-campesina, pero en 1966 ésta aseguraba aún a Barrientos un 60 por 100 del voto popular: al año siguiente la tentativa guerrillera de Ernesto Guevara iba a demostrar que su eficacia no se limitaba al campo electoral. En el fracaso de esa tentativa, en efecto, influyó, más aún que la frialdad con que fue recibida por buena parte de la izquierda boliviana, y

en especial por el Partido Comunista, la incapacidad de ganar apoyos en un campesinado que aun en la zona remota elegida por el Che para sede de su foco insurreccional estaba demasiado integrado en una bien consolidada red de lealtades sociopolíticas para asumir otras nuevas. Esa falta de adhesiones facilitó la acción de un ejército adiestrado por sus mentores norteamericanos para afrontar el desafío guerrillero (muy sugestivamente, el cuerpo especial que iba a cobrar en el Che a su víctima más ilustre llevaba el nombre de *rangers).*

Pero el poder militar, legitimado electoralmente por el apoyo campesino (disponible en rigor para cualquier gobierno dispuesto a respetar el poderío local de las elites campesinas a las que la reforma agraria habían emancipado de la tutela de los hacendados) contaba con otros de mucho menor peso electoral pero no por eso menos decisivos: la misma reforma agraria y el plan de construcciones viales habían hecho mucho por aumentar el peso de la economía de mercado y favorecido el surgimiento de nuevas capas mercantiles en ciudad y campo; por añadidura la red caminera estaba incorporando a la economía nacional a las tierras bajas no afectadas por la reforma, y dando cabida en ellas a agricultores y ganaderos capitalistas, cuya gravitación se reflejaba en el perfilamiento de una fuerte peculiaridad a la vez regional y política en la cada vez más influyente área pionera que reconocía por centro a Santa Cruz de la Sierra, hasta hacía pocos años soñolienta reliquia de la primera colonización española en la entrada a las llanuras del Oriente. Y en las mayores ciudades, comenzado por La Paz, la protección legislativa y más aún la asegurada por la escasez crónica de divisas para importaciones había favorecido la consolidación de un modesto empresariado industrial, cuya presencia ampliaba aún más el proceso de crecimiento y diversificación de las clases propietarias que era parte de la herencia de 1952.

Aun en esa sociedad más articulada y compleja las lecciones del liberalismo conservador –que comenzaban a ganar adhesiones en países latinoamericanos dotados de clases pro-

pietarias más maduras que las bolivianas- no podían ser aceptadas en su literalidad, pero en ella los llamados a «profundizar la revolución» no eran tampoco capaces de ganar eco mayoritario; mientras todos advertían que el proceso abierto en 1952 no podía seguir avanzando por el rumbo tomado entonces, el acuerdo no se alcanzaba en torno a ningún rumbo alternativo, y la hegemonía militar, que se había propuesto imponer ese rumbo nuevo a los sectores recalcitrantes, vino a reducirse a cubrir el interinato de poder creado por la imposibilidad de afrontar los dilemas de la hora; no es sorprendente que su gestión fuese tan incapaz de imponer soluciones políticas estables como la de los caudillos civiles de la revolución de 1952, y que Bolivia se internase en la nueva década regida por un gobierno militar que sobreviviría (no por mucho tiempo) cultivando sistemáticamente la ambigüedad; el general Obando, en efecto, tras de apartar del poder ya en 1969 al vicepresidente civil de Barrientos, combinó las prácticas heredadas de éste con una apertura hacia la oposición política y social, a la que ofreció como prenda de su lealtad revolucionaria la restauración del monopolio de la explotación petrolera en manos el Estado, derogado por Barrientos en beneficio de empresas norteamericanas.

Ecuador iba a mostrarse aún más firmemente instalado en la crisis política crónica; sin duda la polarización creciente que dio su tono a la década no dejó de influir sobre esa crisis, pero -pese a los esfuerzos de la diplomacia norteamericana, más activa en el pequeño país andino que nunca en el pasado- no alcanzó a redefinir los términos del conflicto político. En 1960 comenzaba su quinta gestión presidencial José María Velasco Ibarra, triunfante a la cabeza de una coalición de fuerzas entre las que predominaban las de izquierda. Su gestión siguió el curso habitual: una vez en el gobierno se apresuró a romper con sus aliados electorales, representados en la fórmula triunfante por el vicepresidente Arosemena; su tentativa de desembarazarse de éste abrió una etapa confusa, clarificada en 1961

por una intervención militar favorable al vicepresidente; al parecer la desconfianza de la fuerza armada por el veterano caudillo pesaba más, aun al abrirse la etapa dominada por la sombra de la Revolución cubana, que la despertada por la orientación izquierdista de Arosemena. Ésta iba a pasar a primer plano, sin embargo, una vez que Velasco fue consignado de nuevo a su tradicional destierro argentino; la resistencia de su reemplazante a incorporarse con la celeridad y entusiasmo necesarios a la cruzada anticubana no sólo ofreció una plataforma común para la agitación opositora, y aseguró a ésta los recursos prodigados entonces por los Estados Unidos a quienes apoyaban su política continental, sino contribuyó a desencadenar un nuevo golpe militar que en 1963 instaló en el poder a una junta, decidida a destruir las bases políticas de la izquierda, con vistas a lo cual clausuró las universidades cuyo estudiantado venía protagonizando las agitaciones pro-cubanas.

En 1966 una semana de tumultos y manifestaciones populares decidió al poder militar a reemplazar a la junta por un gobierno interino encargado de devolver al país a la normalidad constitucional: una asamblea constituyente convocada en ese mismo año no prohibió, como lo habían deseado los militares, la reelección presidencial, y con ello hizo posible, y por lo tanto inevitable, un nuevo triunfo de Velasco Ibarra. Presidente en 1968, una vez más el anciano caudillo se esforzó con éxito por hacer de sus aliados electorales sus más enconados enemigos. Como era habitual, la agitación creció incontroladamente, pero al revés de lo que era habitual, las fuerzas armadas, lejos de utilizar la ocasión para librarse del veleidoso primer mandatario, se manifestaron dispuestas a apoyar su asunción de poderes dictatoriales, Y esa inesperada reconciliación que venía a cerrar cuatro décadas de enconado antagonismo ofrecía testimonio indirecto, pero irrefutable, de la transformación que las nuevas polarizaciones habían introducido en la política ecuatoriana; era la gravitación de una amenaza revolucionaria que las fuerzas armadas tomaban quizá más en serio de lo que las circunstancias justificaban la

que las decidía a poner la defensa del orden establecido en manos de un jefe político que no hallaban menos objetable que en el pasado, pero que aparecía como el único capaz de aportar a esa defensa la audacia y la popularidad personal necesarias para llevarla adelante con éxito.

En **América Central** el impacto de la nueva polarización se iba a hacer sentir de modo muy desigual. En **Guatemala**, donde había surgido precozmente en la etapa anterior, la lección de Cuba iba a encontrar eco inmediato, interrumpiendo la cautelosa apertura promovida por el presidente Ydígoras, que se había traducido ya en victorias electorales de los herederos políticos del régimen derrocado en 1954. Mientras Ydígoras ofrecía el territorio guatemalteco como base para las operaciones militares apenas clandestinas contra Cuba, una fracasada rebelión en su propio ejército dejó en herencia movimientos guerrilleros capitaneados por oficiales de éste, que invocaban el ejemplo cubano. Y, pese al surgimiento de un terrorismo de derecha, que se ofrecía en respuesta, más bien que al desafío guerrillero, al de la creciente movilización política urbana, ésta arreciaba cada vez más.

En 1963 el ejército se desembarazó de Ydígoras y acentuó la represión oficial y oficiosa, con un éxito que le permitiría en 1966 retener los resortes del poder luego de entregar la presidencia al candidato triunfante en las elecciones como abanderado del partido heredero de la experiencia presidida por Arévalo y Arbenz; la penosa gestión presidencial de Méndez Montenegro (que había renunciado de antemano a desafiar al poder militar y al de las fuerzas conservadoras), acompañada de una vigorosa expansión del terrorismo de derecha frente al cual se proclamaba impotente, restó vitalidad al despertar de la opinión urbana, e hizo posible al ejército imponer en la elección de 1970 un veto a las corrientes de izquierda que aseguró la victoria del coronel Arana y la maduración de un estilo represivo con el que Guatemala se anticipaba al resto de Latinoamérica, y que se apoyaba en el uso indiscriminado del

terror, desde luego contra la oposición urbana, pero también -y de modo aún más salvaje- contra los sectores indios y campesinos en que comenzaba a encontrar apoyo la guerrilla.

En el resto de América Central el clima político no tenía aún mucho en común con el de esa Guatemala precozmente encerrada en los laberintos de la guerra fría. Sólo en Nicaragua surgió un foco guerrillero en la serranía del norte, al que muy pocos auguraban futuro promisorio. En **El Salvador** el golpe militar de 1960 instala en el poder a un gobierno que se proclama reformista, pero al año siguiente otro golpe lo devuelve a partidos oligárquicos que llevan a la presidencia a oficiales del ejército hostiles al cambio político-social; en 1964 la elección de José Napoleón Duarte como alcalde de la capital provocó una rápida ampliación y consolidación de la base política del partido Demócrata Cristiano por él fundado, pero durante esta década esa nueva presencia no se tradujo aún en un desafío a la hegemonía política oligárquica. En **Honduras** la victoria liberal de 1957 había llevado a la presidencia al reformista Villena Morales; en 1963 un golpe militar lo derribó e inauguró una etapa de gestión directa desprovista de pronunciadas aristas represivas y abierta a algunos motivos reformistas (entre ellos un programa de reforma agraria).

En **Nicaragua**, en 1967 la muerte de Luis Somoza, que había administrado con innegable habilidad el patrimonio político y económico heredado, transfirió la totalidad del poder a su hermano Anastasio (Tachito), ya comandante de la Guardia Nacional, que iba a suplir sus más limitados talentos políticos recurriendo a la manera fuerte; como pronto iba a revelarse, en el nuevo heredero del poder la rapacidad, en verdad rasgo dinástico, aparecía también menos refrenada por la prudencia; pero aunque la módica popularidad del régimen estaba siendo socavada por las insuficiencias de su nuevo titular, ese deterioro no parecía anunciar ninguna crisis inminente. Costa Rica seguía por su parte ofreciendo su poco imitado ejemplo de práctica democrática; el consenso favorable al equilibrio político-social instaurado por la revolución de

1948 y la insatisfacción ante su incipiente agotamiento se tradujeron en esta década en una perfecta estabilidad institucional acompañada en cada renovación presidencial por el indefectible reemplazo del partido en control por su rival.

No sólo la ausencia de dramáticos cambios de rumbo relegó al proceso político a un segundo plano en la Centroamérica de la década de 1960; también contribuyó a ello el dinamismo nuevo del proceso socioeconómico, que encontró un instrumento eficaz en el Mercado Común Centroamericano, establecido precisamente en 1960. La constitución del mercado común favoreció sobre todo la expansión industrial, que vino a concentrarse en Guatemala y El Salvador; al margen de su influjo se aceleró también la expansión agrícola, que ya para 1960 se reflejaba en un abanico productivo en que el algodón y otras cosechas disminuían el antes abrumador predominio del café y el banano. El impacto de esa expansión, apoyada sobre todo, como en el pasado, en la de las exportaciones, no fue puramente positivo; en El Salvador la concentración de la propiedad que era su concomitante vino a sumar sus efectos a los de un cada vez más acelerado crecimiento de la población para multiplicar más de tres veces la proporción de campesinos sin acceso alguno a tierras, que alcanzaba al 12 por 100 en 1960. En Nicaragua, con una población mucho menos densa, se hace sentir el mismo fenómeno y por otra parte la expansión de la agricultura exportadora se acompaña de una baja de la producción agrícola para el consumo interno.

De este modo el nuevo dinamismo de la economía intensifica tensiones que vienen de lejos, y cuyo agravamiento va a favorecer la agudización del conflicto político durante la etapa siguiente. A la espera de ello, esas tensiones se reflejan ya, por una parte, en la pérdida de velocidad del proceso de integración regional, al hacerse evidente que son las naciones capaces de ponerla al servicio de su propia expansión industrial las que monopolizan sus ventajas, y por otra en un episodio que contribuyó en mucho a empantanar al Mercado Común Centroamericano, y que –si pudo parecer incongruente a ob-

servadores remotos– visto más de cerca se hacía dolorosamente transparente: la llamada guerra del fútbol, que en 1969 opuso a Honduras y El Salvador.

Ocasionada en los disturbios que originó en las capitales de ambas naciones la victoria salvadoreña en la disputa preliminar para la Copa del Mundo, la hostilidad reflejada en esos tumultos y luego en la guerra tenía su origen primero en la penetración de inmigrantes de la sobrepoblada república salvadoreña en territorio de Honduras, y las reacciones cada vez más intensas que ella despertaba en el país huésped. Ya a comienzos de la década una ley hondureña limitaba la proporción de extranjeros que las empresas podían legalmente incorporar a su personal, pero esa medida tuvo un impacto mucho más limitado que la que en 1968 cerró a los salvadoreños el acceso a la propiedad de la tierra. Inspirada en el deseo de no entorpecer una reforma agraria que no debía afectar a las tierras ya apropiadas privadamente, la medida buscaba reservar para ese fin a las públicas, que estaban ya siendo explotadas por cada vez más numerosos ocupantes sin título salvadoreños. Si la guerra –concluida en un par de semanas gracias a los buenos oficios de la OEA– no dejó un vencedor, aseguró la victoria del punto de vista hondureño en lo que estaba en el fondo en disputa. Las consecuencias indirectas iban a ser muy graves para El Salvador; la válvula de escape que –frente a las tensiones crecientes causadas por la concentración de la propiedad rural en medio de un vertiginoso crecimiento de población– había venido ofreciendo la emigración quedaba bruscamente cerrada, y ello sin duda influyó en la exasperación de los conflictos políticos que iba a dejar su marca trágica en la etapa siguiente.

Panamá estaba entrando más precozmente que la vecina América Central en una etapa de crisis y confrontación. Gobernada desde su fundación por una estrecha oligarquía política y más totalmente incorporada a la economía norteamericana que cualquiera de sus vecinas del norte (a través del canal, pero también de las plantaciones bananeras), hasta

1952 ni el grupo dirigente ni su política fielmente pro-norteamericana habían encontrado oposición más eficaz que la de un hijo pródigo del primero, Arnulfo Arias. Este eficaz agitador, acusado no sin motivo de simpatizar en su momento con la Alemania hitleriana, supo movilizar los reflejos nacionalistas, más que contra la hegemonía norteamericana, contra la presencia de los inmigrantes negros de las West Indies, importados para construir el canal y constituidos luego junto con sus descendientes en un elemento permanente de la sociedad panameña, pero ni su perenne popularidad ni el eco que encontraban las denuncias con que acusaba a sus adversarios de despojarlo mediante el fraude de los frutos de varias victorias electorales eran suficientes para poner en crisis al orden político panameño.

En 1952 éste sufrió una transformación esencial cuando el coronel jefe de la Guardia Nacional, José Antonio Remón, que había ya venido perfilándose como el poder detrás del trono, decidió ocupar la presidencia. Desde entonces el influjo plebeyo de esa fuerza armada vino a desplazar a la hegemonía patricia; aunque los sucesores militares de Remón preferían de nuevo instalar a figuras civiles en la silla presidencial, ese desplazamiento del centro del poder ya no iba a ser corregido. Bajo ese liderazgo esencialmente militar, Panamá iba a intentar redefinir el estatuto del canal, y el de la zona territorial sobre la cual los Estados Unidos habían adquirido a perpetuidad los derechos inherentes a la soberanía, por el tratado de 1903.

Ese tratado (retocado por concesiones menores de los Estados Unidos en 1955) comenzó a parecer menos definitivo a partir de la nacionalización de la compañía del canal de Suez, implementada por Egipto al año siguiente; la negativa norteamericana a reconocer ninguna analogía entre la situación jurídica de los dos canales interoceánicos no logró calmar las impaciencias de la opinión panameña. Las manifestaciones de celo pronorteamericano y antipanameño de la trasplantada población de la zona del canal, temerosa de pagar los costos de cualquier acuerdo futuro, provocaron en 1964 distur-

bios antinorteamericanos de intensidad sin precedentes, y contribuyeron sin duda a dar a Arnulfo Arias una victoria casi póstuma en las elecciones presidenciales de 1968. Su permanencia en el poder iba a ser brevísima; la Guardia Nacional lo reemplazó por una junta encabezada por el brigadier Omar Torrijos, quien advirtió mejor que sus predecesores militares la necesidad de ganar una base en la opinión pública, y puso al servicio de ese objetivo inesperados talentos políticos, orientados a movilizar y encuadrar a sectores de la sociedad panameña mal integrados hasta entonces en la vida ciudadana. Sumando el apoyo de la fuerza militar el de esa incipiente movilización de masas, Torrijos se juzgó lo bastante fuerte para encarar las negociaciones -que sabía extremadamente difíciles- destinadas a lograr la eliminación gradual y negociada de las limitaciones a la soberanía panameña derivadas del control norteamericano del canal y su zona.

El deseo de los Estados Unidos de evitar la ruptura (temía perder temporariamente como consecuencia de ella el seguro control del canal, y poner en peligro los recursos militares acumulados en la zona), junto con la convicción de que para esquivarla se harían necesarias algunas concesiones al cada vez más vivaz sentimiento nacional panameño, hicieron que en las fintas previas a la negociación los grandes temas de la guerra fría fuesen utilizados con excepcional parsimonia, pese al eclecticismo político-ideológico que gustaba de exhibir Torrijos.

Las grandes alternativas de la guerra fría ofrecían en cambio el canon interpretativo que los Estados Unidos iban a utilizar frente a la tumultuosa evolución política en la **República Dominicana** en la década que siguió al asesinato de Trujillo. Se recordará que en 1962 fue elegido presidente Juan Bosch, el más prestigioso de los intelectuales adversarios de la dictadura, para ser derrocado meses más tarde por el ejército, que lo acusaba de connivencias con el comunismo. Se recordará también que un segundo golpe militar destinado a restaurar a Bosch se vio frustrado de su triunfo, debido a la intervención

militar norteamericana, de nuevo justificada invocando una inminente toma del poder por el comunismo, y que una fuerza panamericana pronto sustituyó a la instalada por la intervención unilateral de los Estados Unidos.

Bajo su égida, una laboriosa negociación llevó a nuevas elecciones, en las cuales Joaquín Balaguer, que había acompañado al Benefactor desde la vicepresidencia, y como su sucesor había eliminado el influjo de la familia Trujillo de la vida pública dominicana, obtuvo en 1966 una victoria no abrumadora pero sí inequívoca sobre Bosch, y parecía desde entonces encaminarse a una presidencia vitalicia de contornos sin duda menos opresivos que la de su mentor político; contaba para ello con las divisiones crecientes del partido opositor, que agrupaba tanto a sectores de las clases conservadoras que habían mantenido su independencia frente al régimen de Trujillo cuanto al séquito más directo de Bosch, cada vez más atraído este último por el ejemplo cubano, pero estaba dispuesto a reforzar los efectos de la división y debilidad opositora mediante un uso prudente de la intimidación y manipulación electorales.

En **Venezuela** los dilemas planteados por la Revolución cubana parecen gravitar de modo menos extrínseco sobre las visicitudes políticas de la década. Al abrirse ésta -se recordará-, gobierna Rómulo Betancourt gracias a una victoria electoral nada abrumadora, y al frente de una coalición que bien pronto queda reducida a la alianza de Acción Democrática y el COPEI socialcristiano. La restauración democrática, guiada por un Betancourt que ha renunciado de antemano al ímpetu reformador que lo había caracterizado en 1945-47, hace de la identificación con la democracia representativa la nota definitoria de su política tanto interna como internacional; mientras se niega a reconocer a los gobiernos latinoamericanos no surgidos de elecciones, extrema la polémica contra la experiencia cubana, en la que se desahoga el implacable *odium theologicum* de Betancourt

hacia Fidel Castro (en el que por un momento había creído reconocer un discípulo político), abundantemente retribuido por otra parte por su destinatario.

Aunque la política de reformas no es totalmente abandonada (en particular va a retomarse la reforma agraria) y el resurgimiento de los sindicatos en ciudad y campo se traduce en ventajas tangibles para los sectores populares organizados, ese nuevo curso decepciona a muchos de los militantes más jóvenes, y ello se refleja en sucesivos desgajamientos que Acción Democrática va a sufrir en 1962 y más gravemente en 1967. Desde 1961, por añadidura, un grupo disidente más reducido ha formado el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, identificado con la salida insurreccional, a la cual ha terminado por arrastrar al Partido Comunista venezolano, que renunciaba así a su sólida vocación legalista. Desde 1963 la violencia clandestina no desaparece de Caracas; a más de un séquito universitario que la preconiza infatigablemente, pero la practica con parsimonia, ha logrado reclutar apoyos más activos en los barrios de emergencia. Tanto el movimiento insurreccional como el gobierno, que lo reprime con dureza creciente, ven en el primero una extensión venezolana de la experiencia cubana, y ambos coinciden en hacer de la elección presidencial de 1964 la decisiva prueba de fuerza: la guerrilla promete y se promete hacerla imposible; cuando el 90 por 100 de los votantes concurre a los comicios su prestigio sufre un golpe decisivo.

En esos comicios triunfa Luis Leoni, fidelísimo secuaz de Betancourt, pero su candidatura sólo recibe el apoyo de un tercio de los votantes; el socialcristianismo, que se descubre ahora rival serio de Acción Democrática, se retira de la coalición y hace con ello más penosa la gestión del nuevo presidente, que debe dedicar sus mejores esfuerzos a mantener el orden contra una amenaza insurreccional que, habiendo descubierto los límites de la guerrilla urbana, comienza a buscar una base alternativa en el campo. A lo largo de los años de Leoni se hace evidente que la rígida orientación impuesta por

Betancourt a su partido se está tornando cada vez menos relevante a la circunstancia latinoamericana y venezolana; mientras en Latinoamérica la decisión de no reconocer a gobiernos de fuerza está arrinconando a Caracas en un creciente aislamiento diplomático, en Venezuela misma la intransigencia gubernativa cierra toda alternativa a la violencia a un movimiento clandestino que sabe ya que no podrá alcanzar la victoria a través de ella.

Cuando en 1968 al socialcristiano Rafael Caldera gana la presidencia, gracias en parte a una nueva y más grave escisión en las filas de Acción Democrática, el abandono de la línea impuesta por Betancourt es recibido con alivio aun dentro de su partido; bien pronto Venezuela reestablece lazos internacionales a diestro y siniestro, con las cada vez más numerosas dictaduras militares del continente pero también con la URSS, y la reanudación de contactos amistosos con Cuba no espera a la restauración de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En lo interno negocia el retorno a la legalidad del Partido Comunista, y aun antes que se acojan a ella las formaciones políticas de la izquierda revolucionaria, el nuevo clima político enfría su ardor combativo; su séquito urbano, desencantado por ese anticlímax, transfiere su veleidosa lealtad a la figura rotunda del ex-dictador Pérez Jiménez, quien con su apoyo triunfa en 1970 en una elección senatorial de inmediato anulada por la Suprema Corte de Justicia. Aleccionados por esa inesperada resurrección política, los dos mayores partidos rivales se deciden a extender sus redes clientelísticas a las poblaciones marginales, y en poco tiempo logran incorporarlas sólidamente al orden político cuya consolidación ha avanzado decisivamente durante la década.

A lo largo de ella la democracia electoral restaurada (o más bien instaurada) en 1958 ha hecho algo más que sobrevivir y consolidarse; bajo su égida avanza una transformación económico-social que sigue líneas algo diversas de las propuestas en 1945, ya que debe satisfacer, a la vez que a las bases populares de los partidos de masas, a un sector empresario en que

tienen lugar importante las filiales de empresas multinacionales (así en los ubicuos *supermarkets* del gran Caracas), que crean la estructura comercial de esa Venezuela que se está transformado vertiginosamente en el más acabado ejemplo latinoamericano de sociedad de consumo, a la vez que a otros sectores empresariales más vernáculos que se lanzan con entusiasmo a la sustitución de importaciones, favorecida por la protección sistemática que le otorga el Estado.

Sectores populares y empresarios son así beneficiarios de una prosperidad que se apoya en la constante expansión de las exportaciones petroleras y mineras (Venezuela se está transformando en un gran exportador de mineral de hierro), y puede canalizarse hacia ellos porque el Estado venezolano se transforma en negociador cada vez más duro frente a las compañías petroleras (mientras se fija como objetivo final la nacionalización del petróleo, hasta tanto se lo alcanza impone un aumento progresivo de las regalías) y se reserva la explotación directa de otros recursos minerales; esa política, que encuentra en Venezuela menos resistencia que en otras partes porque aquí el Estado logra hacer llegar sus beneficios a todos los sectores sociales políticamente influyentes, tiene el ministro Pérez Alfonso a la vez a un sólido defensor teórico y un ejecutor admirablemente eficaz.

Ese éxito venezolano era muy poco apreciado por la opinión latinoamericana, atraída por entonces hacia alternativas más dramáticas; ello era quizá injusto, pero a la vez comprensible, si no debido a las limitaciones de ese éxito, que –aunque muy reales– esa opinión tendía magnificar, a que él se apoyaba en una avasalladora prosperidad exportadora mantenida a través de décadas, que no encontraba paralelo en ninguna de las otras naciones latinoamericanas, y por lo tanto no podía ofrecer modelo ni inspiración para éstas.

Mientras la excepcionalidad venezolana, que al comienzo de la década parecía amenazada, al fin de ella se afirma con un nuevo vigor, la de **México** comienza a dar progresivos signos

de agotamiento. Ellos afloran ante todo en la esfera política, luego de una primera tentativa de apertura detenida (como las que van a seguirle) apenas se insinúa un remoto peligro de que ella socave el monopolio del poder en manos del partido gobernante. Inaugurada gracias a una reforma constitucional prohijada por el presidente López Mateos, que asignaba un número fijo de bancas en la Cámara de Diputados a los partidos de oposición que sobrepasaran un umbral electoral por otra parte muy bajo, a partir de 1963 tocaría a su sucesor Gustavo Díaz Ordaz afrontar las etapas siguientes de un proceso que no parecía dispuesto a detenerse en ese punto.

Ante la resistencia pasiva pero irremovible del aparato oficial, el nuevo presidente debió renunciar (sus críticos aseguraban que sin demasiado pesar) a la anunciada democratización interna del partido oficial; poco después se revelaría dentro de qué límites debía encerrarse el nuevo pluralismo político al ser anulados las elecciones municipales que el PAN (opositor de derecha) había tenido la insolencia de ganar en la franja fronteriza norte. Esas peripecias parecían condenar el país a un insoportable estancamiento político, impuesto por una elite gobernante que advertía muy bien la necesidad de superarlo, pero en la hora de la verdad prefería no afrontar los riesgos que crearía a sus privilegios no sólo políticos la reorientación que proclamaba necesaria.

La impaciencia cada vez más universal frente a la hegemonía de los herederos de una revolución vieja ya de más de medio siglo se reflejó en el movimiento de protesta estudiantil de 1968, que movilizó a estudiantes universitarios y secundarios de la ciudad de México, y despertó vasto eco en la opinión urbana; la tornaba aún más impresionante el hecho de que eran los hijos de esas clases medias profesionales surgidas bajo la égida del régimen revolucionario, e integradas en él, quienes ocupaban la vanguardia del movimiento. La ubicación privilegiada de los disidentes en la sociedad mexicana no iba a atenuar esta vez la violencia de la reacción oficial: México se aprestaba a hospedar a los Juegos Olímpicos y el presidente

Díaz Ordaz no quería ofrecer a la curiosidad del mundo el espectáculo de un poder que capitulaba frente a la violenta protesta de la calle; prefirió brindarle en cambio el más sangriento de una matanza de adolescentes, que tuvo por teatro la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Esa respuesta brutal terminó con el desorden callejero, pero agravó catastróficamente el rechazo que buena parte de las elites integradas en el orden revolucionario habían ya venido mostrando hacia un aparato político cada vez más anquilosado.

La crisis que se abría para México era algo más que una respuesta al estilo político del régimen gobernante: ella reflejaba a su modo una incipiente toma de conciencia de que la larga etapa de «desarrollo estabilizador» estaba tocando a su fin, y de que la transición que iba necesariamente a abrirse imponía opciones que la cada vez menos imaginativa elite política parecía particularmente mal preparada para afrontar. Pero, mientras casi todos los impacientes coincidían en que la nueva etapa requería, a más de un nuevo estilo político, una nueva orientación socioeconómica, estaban lejos de concordar en cuanto a la dirección que debía tomar esta última.

Esta circunstancia hacía que la crisis se presentase menos amenazante para la continuidad política mexicana, en cuanto dejaba un considerable espacio de maniobra para la dirigencia revolucionaria. Ésta tenía abiertas frente a sí dos alternativas básicas, en cuanto -si hallaba inaceptable allanarse a las exigencias que le llegaban de las nuevas elites crecidas bajo su ala- podía responder a ellas retornando a los objetivos movilizadores e igualitarios sacrificados a partir de 1940 en busca de un desarrollo económico acelerado.

Las exigencias reflejadas en la oleada de protesta eran sin duda múltiples y no siempre precisas: a la de renovación de personal y estilo en la dirigencia política se sumaba la de una práctica pluralista que no se limitase a las grandes opciones ideológicas, sino que se extendiese a los concretos dilemas que afronta México; y la de implantación de un más auténtico estado de derecho que barriese por fin con la arbitrariedad del

poder –de cuyas consecuencias no están exentos en México ni aun quienes integran las capas privilegiadas viejas y nuevas– que tenía por corolario un uso también menos arbitrario del poder del Estado en la esfera económica, que en México, donde los avances de ese poder no se habían venido dando en conflicto con los intereses del sector privado, sino en medio de una creciente compenetración con éste (que encontraba en la corrupción uno de sus instrumentos más eficaces), no necesitaban siempre invocar los principios del liberalismo económico que pronto iba a ponerse en boga para demandar una quiebra radical en las bases mismas del todopoder a la vez político y económico de la elite que se llamaba revolucionaria; se advierte cómo, aun sin que todos los participantes en el movimiento de protesta lo advirtiesen, la exigencia de un cambio de estilo desembocaba en la de un cambio de régimen .

Esa aspiración que afloraba a través de tan multiformes exigencias encontraba, también casi siempre sin advertirlo, su inspiración ideológica última, no tanto en el utopismo revolucionario que por entonces afloraba un poco en todas partes, y que encontraba su eco en el de las consignas coreadas en las calles de la capital, cuanto en un liberalismo político muy tradicional, y universalmente tenido por inactual, pero de cuyos principios esas existencias eran en verdad corolarios. Correspondió al ya venerable Daniel Cosío Villegas, último sobreviviente de los que Enrique Krauze, en expresión feliz, llamó «caudillos culturales» de la Revolución mexicana, revelar a sus compatriotas el sentido más profundo de su protesta. Ya veinte años antes Cosío había denunciado que la resolución estaba perdiendo el rumbo, pero entonces había deplorado sobre todo el abandono de su vocación de reforma social; ahora le reclamaba en cambio una adecuación real al marco formal de la constitución que ella misma exhibía como uno de sus legados más valiosos; en suma, la metamorfosis del régimen revolucionario en una auténtica democracia liberal.

Frente a esas aspiraciones que no podían satisfacerse sin desmantelar las fortalezas que la elite revolucionaria había

erigido para sí misma en la cima del orden político y socioeconómico mexicano, la respuesta que iba a dar el sucesor de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, iba a incluir sin duda una promesa de atenderlas, pero la completaría y en cierta medida la desvirtuaría al subsumirla en la de reencontrar las bases populares de la revolución. Muy poco en el pasado del candidato parecía por otra parte prepararlo para dirigir el reencuentro entre la dirigencia política y una sociedad mexicana cada vez más reticente frente a ella; como secretario de Gobernación, el nuevo mandatario había tenido responsabilidad más directa aún que Díaz Ordaz en la sombría jornada de Tlatelolco.

El modo elegido por Echeverría para afrontar esa dificultad vino a introducir una nueva y duradera modalidad en las transiciones presidenciales mexicanas, que reflejaba la capacidad de adaptación a tiempos menos fáciles de una elite política acaso menos anquilosada de lo que había parecido en la tormenta de 1968. No sólo el heredero de Díaz Ordaz se transformó en el más vociferante de sus críticos, sino denunció en las lacras que habían manchado su gestión presidencial el resultado desdichado de las que la revolución había venido arrastrando a lo largo de décadas, y que seguían marcando a la clase política en el poder. Esa denuncia desembocaba en el compromiso de emprender una total purificación del legado revolucionario, con vistas a la cual invitaba a encolumnarse bajo su guía tanto a aquellos hijos de la elite cuyo descontento había encontrado expresión clamorosa en Tlatelolco, cuanto a las clases obreras y populares y al campesinado, que habían aceptado por décadas su sistemática postergación a otros sectores de intereses, y que debían ahora recusar el liderazgo de sus supuestos representantes, a los que acusaba de haberlos traicionado durante esa larga etapa.

Bajo la égida del nuevo presidente, la vida pública mexicana entró así en una etapa de agitación permanente, pero las innovaciones políticas que se vieron emerger a lo largo de ella se revelaron aun más efímeras que las prohijadas por los dos anteriores mandatarios; así la transformación del más impor-

tante cotidiano de la capital en un órgano de veras independiente, inaugurada en medio de ruidosas expresiones de aprobación presidencial, iba a revertirse apenas esa independencia comenzó a extenderse a áreas temáticas en las cuales a juicio del presidente la discreción seguía siendo necesaria... Del mismo modo, las denuncias contra los «dirigentes charros» que habían socavado la combatividad del sindicalismo mexicano perdieron intensidad apenas se hizo claro que esos dirigentes se proponían revalidar sus títulos de militantes en conflictos cuidadosamene escogidos para crear dificultades al presidente que tan imprudentemente los desafiaba.

Pero si el nuevo clima de opinión no se tradujo en ninguna significativa transformación política, la administración de Echeverría la iba a introducir en cambio en el manejo de la economía. Lo que lo hacía necesario no era tanto el malestar revelado en 1968, cuanto el agotamiento ya inocultable de la etapa de «desarrollo estabilizador»; para fines de la década el ritmo de crecimiento industrial comenzó a decrecer; el de la agricultura se le había anticipado, y la etapa en que México, ese país al borde de las hambrunas periódicas desde la etapa colonial, alcanzó la autosuficiencia de alimentos mientras más que triplicaba su población (lo que constituía quizá la mayor -y menos frecuentemente reconocida- hazaña del orden revolucionario) vino a cerrarse, al parecer para siempre, en 1970.

A partir de ahora, y a falta de una nueva fórmula tan eficaz como lo había sido la de desarrollo estabilizador, el orden mexicano iba a orientarse frente a las opciones socioeconómicas que le quedaban abiertas atendiendo sobre todo a la promesa política que en cada una de ellas descubría; se advierte cómo, aunque las tormentas de 1968 no constituyeron para el régimen heredero de la Revolución mexicana el anuncio de inminente mortalidad que algunos leyeron en ellas, lo privaron para siempre de la confianza en su indefinida perdurabilidad que había madurado en las décadas previas. Debido a ello, un poder cuyos rasgos político-institucionales seguían siendo

muy distintos de los predominantes en el resto de Latinoamérica comenzó a encarar sus decisiones socioeconómicas con criterios que recuerdan los favorecidos en otros países latinoamericanos por regímenes mucho menos bien arraigados, y confrontados con sociedades dotadas de mejor probada capacidad de respuesta que la mexicana.

En los procesos políticos nacionales hasta aquí seguidos no se ha advertido ninguna huella significativa del modelo propuesto por los Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso; aun en Venezuela, cuyas líneas de avance eran en verdad cercanas a las propuestas en ese modelo, se descubre más bien la nueva modalidad adquirida por uno de origen más vernáculo. Ese modelo se iba a revelar en cambio más relevante a la trayectoria seguida durante la década de decisiones por Perú, Colombia y sobre todo Chile.

En **Perú** la dirigencia aprista iba a responder al desafío de la disidencia identificada con la alternativa insurreccional acentuado su ya tradicional alineamiento pro-norteamericano y militantemente anticomunista; la incitaba a ello además la perspectiva de ver finalmente premiada su larga paciencia en las elecciones de 1962, en que Víctor Raúl Haya de la Torre se preparaba a postularse con el apoyo de los socios conservadores de la Convivencia (entre ellos Pedro Beltrán, en 1948 uno de los más enconados adversarios periodísticos del APRA, que desde el gabinete de Prado orientaba la economía bajo el signo de un militante -y desafiante- liberalismo económico).

Perú se acercaba así a una vuelta decisiva de su historia electoral sostenido por una nueva ola de prosperidad exportadora, apoyada esta vez en la explotación de la harina de pescado, que agregaba vitalidad a la economía costeña, brevemente favorecida también por la asignación al Perú de una parte de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, cuando ésta le fue cancelada a la isla rebelde. Esa prosperidad aceleraba una migración interna que por otra parte se alimentaba en la crisis de la economía agrícola y pastoral en

buena parte de la Sierra. Pero no eran las zonas en retroceso económico, sino sobre todo las más dinámicas en el interior serrano, las que se estaban constituyendo en teatro de conflictos sociales cada vez más intensos.

Las elecciones de 1962 revelaron a un electorado dividido entre el APRA, que ganó el apoyo de un tercio del electorado, Acción Popular, bajo cuyo signo político Belaúnde obtuvo el de un número apenas menor, y la Unión Nacional Odriísta, que aseguró a su candidato epónimo un muy honorable tercer lugar, con más de un cuarto de los sufragios; a falta de mayoría absoluta, la elección iba a ser resuelta en el congreso, y Haya de la Torre, decidido a cerrar el paso a quien había surgido como su único rival temible, se declaraba dispuesto a renunciar a su candidatura y dar el apoyo de los legisladores apristas a la del general Odría.

El ejército se interpuso con un golpe que tenía por propósito anular las elecciones, invocando fraudes favorables al aprismo, y convocar rápidamente a otras. En 1963 éstas iban a dar una victoria convincente a Belaúnde, a cuya candidatura se plegaron ahora tanto el Partido Demócrata Cristiano como casi todos los movimientos ubicados a la izquierda del APRA. Su programa -que recogía muy deliberadamente ecos del lenguaje preferido por la Alianza Para el Progreso- incluía una promesa de integración física de la sierra y la montaña y la de llevar adelante la reforma agraria; anticipándose a ésta, los movimientos campesinos arreciaron en la Sierra y los disidentes del APRA trataron de apoyarse en ellos para lanzarse a la insurrección que habían venido predicando. El gobierno se decidió a afrontar la protesta serrana mediante una durísima represión, para la cual le fue preciso recurrir al ejército regular.

Mientras tanto, el programa reformista del presidente era eficazmente bloqueado en el Congreso, controlado por la oposición conservadora y aprista; en particular la ley de reforma agraria iba a sufrir brutales mutilaciones durante su penoso trámite parlamentario. El deterioro de la coyuntura económica (en que tuvo responsabilidad significativa la temporaria

desaparición de las costas peruanas de la veleidosa anchoveta, sobre la cual se había edificado el *boom* pesquero) vino a hacer aún más ingrato a Belaúnde el ejercicio del poder. Con una economía en menguante que imponía las usuales devaluaciones seguidas de brotes de inflación, y se reflejaba en una erosión vertiginosa de su popularidad, buscó dinamizar el sector petrolero mediante un acuerdo con la compañía concesionaria norteamericana con la cual el Estado peruano mantenía un litigio que se arrastraba por décadas; ese acuerdo y sus modalidades escandalosas ofrecieron tema para las agitaciones precursoras del golpe militar que en octubre de 1968 lo envió al exilio.

Ese golpe estaba de nuevo inspirado en parte en la hostilidad militar al APRA, cuya victoria en las elecciones presidenciales de 1969 parecía ya inevitable pero ahora el objetivo antiaprista gravitaba menos que otros más ambiciosos. El ejército, que había vivido de cerca el malestar social de la Sierra, sin dejar de reconocer en la movilización creciente de las masas rurales una amenaza de subversión total del orden vigente, creía descubrir a la vez en ella una oportunidad para reemplazar con su propio influjo el de otros agentes que ya habían tomado parcialmente a su cargo el encuadramiento de los sectores populares e indígenas. Para lograrlo estaba dispuesto a promover, a la vez que la movilización y organización de las masas antes pasivas, una radical reorganización de las que en la costa habían sido ya movilizadas bajo los auspicios del APRA.

El medio para lograr lo uno y lo otro era la reforma agraria, que en su dimensión política se ofrecía como un corolario de la doctrina de seguridad y desarrollo. Pero el propósito de la reforma no era exclusivamente político; formaba parte a la vez de un proyecto tan ambicioso como impreciso de transformación profunda de la economía y la sociedad peruana, que debía lograr la diversificación y maduración de la primera y la integración más completa de la segunda. Para que lo uno y lo otro fuera posible era necesaria una redefinición del lazo

externo, y en este aspecto el gobierno militar iba a reivindicar una mayor autonomía a la vez diplomática y económica para Perú: la nacionalización del petróleo, que figuró entre sus primeras medidas y pudo entonces parecer un recurso político para consolidar la legitimidad de un régimen que había justificado su instauración invocando el discutible arreglo petrolero negociado por el gobierno de Belaúnde, iba pronto a revelarse el primer episodio de una redefinición de los objetivos del Estado en un país dependiente que no dejaba de traer reminiscencias de la que el primer aprismo había postulado bajo el rótulo de Estado antiimperialista.

El régimen que así se perfilaba fue recibido con universal desconcierto por la opinión peruana y latinoamericana. Por una parte aplicaba más consecuentemente que ningún otro los postulados de la doctrina de Seguridad y Desarrollo; por otra, aunque no estaba dispuesto a tolerar el desafío a su monopolio legal de la violencia que era la guerrilla, y reservaba para la institución militar la dirección y el control del proceso político-social, se rehusaba a encuadrar su proyecto en el marco de la resurgente guerra fría. En cuanto a ideologías, su apertura simpática a las más intransigentemente revolucionarias, que recordaba la de los dirigentes mexicanos de la década de 1920, hizo posible a más de un teórico de la guerra popular retornar a la escena pública desde los cuadros burocráticos de los nuevos organismos estatales de promoción social; en el marco internacional su defensa celosa de la soberanía peruana iba a tener por corolario la restauración de lazos diplomáticos y comerciales con la URSS y una aún más definitoria reconciliación con Cuba, celebrada con ruidoso entusiasmo por Fidel Castro, que –para desazón de buena parte de las izquierdas peruanas– se apresuró a proclamar el carácter profundamente revolucionario del régimen militar.

Mientras el fin de la década encontraba a Perú avanzando con rumbo desconocido bajo la égida militar, en **Colombia** las novedades por ella aportadas no alcanzaron a sacudir el es-

tancamiento político que era consecuencia duradera del Pacto Nacional. Bajo la dirección poco firme del segundo presidente elegido por el acuerdo de los partidos, el conservador Guillermo León Valencia, la popularidad de ese experimento disminuyó aun más; su sucesor, el liberal Carlos Lleras Restrepo, elegido en 1966 por menos de la mitad del electorado (la mayoría prefirió esta vez la abstención), se consagró de inmediato a revertir esa peligrosa tendencia, identificando a su administración con aspiraciones que, como la de reforma agraria, juzgaba capaces de despertar a una mayor militancia a las masas populares, cuya constante expresión sabía imprescindible para asegurar el éxito de esa reforma, cuya implementación debía correr a cargo de organismos técnicos sustraídos al control de las dirigencias locales y regionales de los partidos, que (como el presidente sospechaba con razón) estaban lejos de compartir su convicción reformista.

La reforma agraria logró en efecto movilizar a sectores campesinos, pero –en una Colombia en que el éxodo a las ciudades se había transformado en un instrumento mucho más eficaz que en el pasado para atenuar las tensiones sociales en el campo, y con una agricultura menos dominada por el café y su marco campesino que en la década de 1930– las movilizaciones fueron menos amplias de lo que sin duda Lleras Restrepo había anticipado. Por añadidura, puesto que la reforma misma se había fijado de antemano límites muy estrechos, buena parte de las que en efecto se dieron se orientaron a exigir su ampliación antes que a apoyarla y consolidarla en sus objetivos originarios. En el resto de la sociedad colombiana el nuevo acento puesto en el desarrollo económico había creado expectativas destinadas a verse decepcionadas; todo ello iba a reflejarse en las elecciones de 1970, en que el candidato conservador, Misael Pastrana Borrero, cuya frialdad frente a la línea reformista de su predecesor era conocida, obtuvo una estrechísima victoria contra el general Rojas Pinilla, quien –al hacerse eco del creciente descontento de las masas urbanas– acumuló impresionantes mayorías en los centros mayores. La

fracasada tentativa de romper el inmovilismo que era el precio de la pacificación política aportada por el Frente Nacional no había sido en suma sino un paréntesis, cerrado el cual el deterioro del orden sociopolítico retomó un avance lento pero inexorable.

En contraste con el enigmático curso peruano y el inmovilismo colombiano, el proceso en **Chile** retiene su tradicional capacidad de encarnar las alternativas políticas que afronta Latinoamérica con precisión y claridad mayores que ningún otro. Desde 1958 la alternativa socialista, para poner dique a la cual la Alianza para el Progreso se ha propuesto movilizar las energías sociopolíticas latinoamericanas, va a ser ofrecida al electorado chileno en cada ocasión electoral, y en la de 1964, en la cual se disputa la sucesión del presidente Jorge Alessandri, la confrontación entre esa alternativa y la prohijada por la Alianza avanzará sobre líneas que han adquirido la nitidez de un ejemplo de manual. Alessandri, se recordará, había obtenido en 1958 leve ventaja sobre el candidato del frente de izquierda (FRAP), Salvador Allende, mientras dos formaciones centristas, la recién constituida Democracia Cristiana y el veterano Radicalismo, conquistaban, respectivamente, el tercero y cuarto lugar. Con una base ampliada gracias a la alianza radical, el presidente buscó romper el estancamiento de la economía chilena mediante una apertura que no podía ir muy lejos sin herir los intereses de vastos sectores de las clases propietarias rurales y urbanas, y que no logró atraer las esperadas inversiones extranjeras. Nada sorprendentemente, tras de una primera etapa expansiva hecha posible en parte por la contracción económica derivada de la forzada austeridad de los años previos, pero en parte también por la generosidad de los organismos de crédito influidos por los Estados Unidos, decididos a premiar a ese firme aliado de su política, la segunda etapa de su presidencia estuvo marcada por un retorno ya ineludible a la austeridad y el estancamiento.

Ello restaba posibilidades electorales a la coalición del radicalismo y los partidos de derecha, que se declaraba heredera y continuadora de la experiencia en curso. Pero no es sólo la adversidad económica la que la perjudica; en 1963 la victoria del candidato senatorial socialista en Curicó, en el sólido centro-sur rural y conservador, parece revelar que el control del voto campesino por los partidos identificados con las clases terratenientes, que ha sido una de las bases del equilibrio sociopolítico chileno, está desvaneciéndose rápidamente. La reacción es inmediata: los partidos de derecha retiran su apoyo a Julio Durán, candidato radical que se postula como continuador de Alessandri, y lo transfieren a Eduardo Frei, abanderado de la Democracia Cristiana, a quien juzgan más capaz de cerrar el camino al socialismo.

Aun para los abanderados políticos y sociales de la derecha, ello suponía algo más que un mero cambio de estrategia electoral. Para que la nueva surtiese efecto, era preciso que los organizadores sindicales demócrata-cristianos reemplazasen a los terratenientes en la orientación política de las masas rurales; esos terratenientes que durante décadas habían defendido celosamente su hegemonía sociopolítica en el campo debían entonces anticiparse a su derrumbe ya inevitable en la esperanza de poder transferir su herencia al menos alarmante de los aspirantes a ella, y esto requería no sólo cesar en la resistencia a la sindicalización rural, sino aun resignarse a alguna modalidad de reforma agraria (lo que se veía facilitado porque, en homenaje a las directivas de la Alianza, Alessandri había debido ya otorgarle su adhesión de principio).

Si aun para la derecha la opción democristiana significaba todo eso, sus beneficiarios esperaban de ella mucho más; el eslogan que proclamaba su propósito de introducir en Chile una revolución en libertad, que conjugaba hábilmente las excitantes promesas de cambio del frente socialista con las garantías de tranquilidad del conservador, era a la vez una honrada declaración de sus intenciones. Para hacerlas tolerables al voto conservador, la Democracia Cristiana debía pintar el

dilema planteado al electorado chileno en los tonos del anticomunismo más tosco y primario; la campaña electoral de Frei, que (gracias a la generosidad de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y de los partidos hermanos de Europa occidental contó con recursos antes desconocidos en Chile) cavó una fosa de hostilidad entre su partido y los de izquierda, con los que en el pasado había estado lejos de mantener relaciones siempre hostiles, pero le aseguró la mayoría absoluta del electorado; sin duda la polarización había favorecido también a la izquierda, en cuanto le había asegurado el porcentaje de votantes más alto que jamás iba a alcanzar en elecciones presidenciales, pero ello no le impidió sufrir una derrota mucho más convincente que la de 1958.

La derecha vio con alarma la victoria democristiana, a la que había contribuido decisivamente, pero que no había esperado tan amplia, y buscó contrarrestarla practicando la obstrucción parlamentaria en acuerdo con la izquierda. Pero las elecciones de renovación del Congreso, en las cuales el Partido Nacional, refugio de las raleadas huestes de los dos tradicionales, atrajo apenas a un décimo del electorado, restaron eficacia a esa táctica; aunque no habían alcanzado a dar a Frei una mayoría parlamentaria propia, aseguraban a la revolución en libertad una recepción parlamentaria menos hostil que la afrontada en su tiempo por los programas de reforma del Frente Popular.

Esa revolución designaba a la vez un programa de cambio socioeconómico y uno de reestructuración de la vida política, al que buscaba consolidar a través de aquél. El primero incluía una reforma agraria destinada a crear una nueva clase de agricultores independientes, sin duda minoritarios en el conjunto de la población campesina, pero capaces de reemplazar, con el apoyo de los organismos técnicos del Estado y las organizaciones políticas y sindicales alineadas con la Democracia Cristiana, la hegemonía terrateniente con la suya propia; esa reforma aspiraba por otra parte a eliminar la rémora que para la economía chilena significaba una agricultura de productivi-

dad escandalosamente baja. Una reforma paralela buscaba atacar la causa de otro estancamiento: el de la minería del cobre, transformada progresivamente a partir de la depresión en fuente de ingresos para el Estado y otros sectores de la economía, pero por eso mismo privada de las inversiones requeridas para expandir su producción, que las compañías concesionarias preferían orientar a otras cuencas cupríferas rivales, en cuya explotación también participaban. La solución preferida por la democracia cristiana fue la llamada chilenización del cobre: el Estado se transformaba en socio de las compañías, mediante aportes de capital que éstas se comprometían a invertir en la modernización y expansión de la actividad minera; la operación, presentada como alternativa a la nacionalización preconizada por la izquierda, sería financiada gracias a los créditos y subsidios que el Chile democristiano contaba con recibir de los Estados Unidos.

Ambas reformas buscaban eliminar los factores principales del estancamiento chileno, para beneficio de una clase empresaria que en ese clima económico renovado renunciaría a su preferencia por un proteccionismo más orientado a defender su parte de un mercado estancado que a hacerle posible avanzar en uno que finalmente comenzaría a crecer. A su base en las clases medias y su presencia minoritaria en las obreras y populares urbanas, la democracia cristiana buscaba así sumar las que esperaba que el éxito de su programa le aseguraría en el mundo rural y empresario. Todo ello no bastaba sin embargo para transformarla en partido sólidamente mayoritario; para lograrlo convocó además en su apoyo a las últimas oleadas traídas a las ciudades por el éxodo rural, todavía marginadas de las vivaces confrontaciones político-sociales que dominaban la vida urbana.

Los avances realizados en la implementación de ese ambicioso programa fueron en verdad notables, pero no suficientes para completar la metamorfosis a la vez socioeconómica y política postulada por el partido de Frei. La reforma agraria, finalmente aprobada por el congreso, no podía provocar a

corto plazo una mejora dramática en el desempeño del sector agrícola; la chilenización del cobre creaba tan sólo el marco legal para negociaciones que tardarían en traducirse en innovaciones concretas en el manejo de la explotación minera; ya hacia 1967 se hacía evidente que la tan innovadora experiencia democristiana chocaba, como todas las anteriores, con los límites impuestos a la expansión económica por obstáculos estructurales que no había alcanzado a remover tan completamente como había esperado.

La firmeza de los límites fijados por la estructura económica devolvió fuerza a los originados en la estructura política, que por un momento había parecido hacerse más maleables. Ni la reforma agraria ni la atención preferente a los llamados marginales urbanos transformaban a éstos o a las masas campesinas en las fieles clientelas que la democracia cristiana había contado con reclutar en ambos grupos. En el campo el problema no era tanto que sólo hubiese dado tierras a un tercio de las cien mil familias que se había propuesto beneficiar, sino que aun de haberse completado hubiera excluido a la mayor parte de los campesinos sin tierras, cuyo descontento iba a ser utilizado por los partidos de izquierda, a los que el derrumbe de la hegemonía terrateniente había abierto la posibilidad de extender sus organizaciones al sector rural. Del mismo modo en cuanto a los llamados marginales urbanos; la tentativa de encuadramiento llevada adelante por organizaciones católicas con el beneplácito de la administración democristiana sufría a veces a causa del paternalismo excesivamente tradicional de los voluntarios (y voluntarias) movilizados para ella, y siempre por la modestia de los recursos con que el Estado hallaba posible sostenerla. Tanto en la ciudad como en el campo, entonces, los nuevos sectores sociales eran disputados a la democracia cristiana por la izquierda, y dentro de ésta, más bien que por el comunismo, demasiado ligado a su base sindical, por la izquierda socialista y sus prolongaciones guevaristas, cuya alarmante popularidad era puesta por la opinión de derecha en la cuenta del imprudente esfuerzo democristiano por

movilizar y encuadrar a sectores tradicionalmente pasivos de la sociedad chilena. Esa reacción encontraba eco considerable entre las clases medias, cuyos intereses, tradicionalmente protegidos tanto por las coaliciones de izquierda como por las de derecha, habían sido menos bien tutelados en cambio por una Democracia Cristiana que prefirió cultivar la adhesión de otros sectores sociales hasta entonces más esquivos a su prédica.

En la universidad otro intento democristiano de usar en su provecho los fermentos renovadores que agitaban a la sociedad chilena tuvo resultados igualmente alarmantes. La victoria democristiana no había quebrado la hegemonía ideológica y cultural de los herederos del liberalismo chileno; en ese país a la vez tan avanzado y tan tradicional, la masonería conservaba una influencia que en otras tierras hispanoamericanas había perdido hacía tiempo (tanto el general Ibáñez como Jorge Alessandri y Salvador Allende se contaban entre sus adherentes), y su influencia no era menos vigorosa en las universidades estatales (lo era más aún en alguna privada). Un partido que, como el democristiano, se prohibía a sí mismo ceder a la tentación del clericalismo, nada deseaba menos que reabrir contra esa hegemonía liberal las batallas ideológicas de un siglo antes. Pero resistía menos bien a la tentación de utilizar contra ella el descontento estudiantil, que agitaba banderas muy distantes de las de esos combates añejos; contribuyó así a desencadenar una tormenta más violenta de lo que había esperado, y ello de nuevo lo vino a colocar bajo una luz equívoca ante la opinión conservadora y moderada.

Todo esto preparaba muy mal a la democracia cristiana para la prueba de la elecciones presidenciales de 1970. Su tentativa de transformarse en partido de todo el pueblo, en un Chile renovado bajo su guía, aguzaba la hostilidad de todas las restantes formaciones políticas; el éxito sólo incompleto que había alcanzado en ese intento se traducía en una división profunda en sus filas, entre los que se proponían llevar a término, contra viento y marea, una revolución en libertad que redefinían en términos cada vez más cercanos a los que la iz-

quierda usaba para describir su propio proyecto, y los que (como el presidente Frei) buscaban presentar de nuevo a la democracia cristiana como la mejor barrera contra el socialismo. Los primeros lograron imponer la candidatura del jefe del ala izquierda del partido, Radomiro Tomic, cuyo lenguaje estrepitosamente revolucionario buscaba acortar la distancia que había creado con las izquierdas su reciente gestión como embajador en Washington; aunque fue desdeñosamente rechazado por éstas, nada estaba más lejos de sus intenciones que constituirse en primer abanderado de la resistencia al avance socialista.

Y se entiende por qué: ahora la amenaza de la izquierda parecía mucho menos urgente que en 1964; hasta tal punto se la creía disipada que el Partido Nacional pudo asegurar la necesaria mayoría para la candidatura de Salvador Allende a la presidencia del senado, sin renunciar por ello a ofrecerse como la alternativa sólidamente conservadora a la irresponsable demagogia de la que acusaba al gobierno de Frei. La gestión de éste estaba en el origen del desconcierto que reinaba en el campo izquierdista; aunque éste no se fatigaba de denunciar sus limitaciones, Frei había venido a completar la implementación del programa reformista bajo cuyo signo las izquierdas habían ganado espacio cada vez más ancho en el espectro político chileno; consecuencia de ello era que el socialismo se estaba transformando por primera vez en una alternativa inmediatamente relevante, y ello agudizaba las perplejidades y divisiones en las filas de una izquierda que no podía dejar de identificarse con esa alternativa, pero muchos de cuyos integrantes (comenzando por los comunistas) dudaban de que tanto la opinión pública como la realidad social chilena estuviesen maduras para emprender la transición al socialismo. Esa divergencia de perspectivas acentuaba la rivalidad tradicional entre los partidos llamados hermanos: en el socialista pesaba cada vez más un ala izquierda fieramente hostil al comunista, y cada vez más inclinada a usar el lenguaje insurreccional entonces en boga, que no se resignaba a levan-

tar de nuevo la candidatura ya tres veces derrotada de Allende, en quien veían además a su más serio rival interno; el comunismo se sentía por su parte menos atraído por el frente de partidos obreros favorecido por los socialistas que por una alianza más amplia en torno a un candidato de la izquierda democristiana que no podía ser Tomic, y mientras tanto proclamaba la candidatura simbólica de Pablo Neruda. Aun el tardío acuerdo de las izquierdas, que volvían a levantar *faute de mieux* la candidatura de Allende, pareció la respuesta poco entusiasta a una situación que se había hecho de rutina, antes que el prólogo a una tentativa seria de conquista del Poder Ejecutivo.

Sólo en las febriles últimas semanas de una campaña que había tenido muy apagado comienzo pudo anticiparse la victoria de la coalición de izquierda, que iba a ser apoyada esta vez por una porción más reducida del electorado que en 1964; con algo más del 36 por 100 de los votos, el margen de Allende sobre el ex presidente Jorge Alessandri, candidato de la derecha que había sobrepasado el 34 por 100 de los sufragios, era en verdad exiguo, pero suficiente para darle oportunidad de introducir a su país en la que se dio en llamar la vía chilena al socialismo, que prometía llevar adelante la transición a éste sin abandonar el cauce constitucional. He aquí un paradójico punto de llegada para una década cuyos dilemas se habían definido bajo el estímulo de un modelo revolucionario profundamente distinto; el desafío simbolizado en la figura dramática del Che dejaba paso al que encontraba inesperada personificación en la mucho más convencional de un veterano de todos los vericuetos de la política chilena. Pero el mismo Salvador Allende, que en una carrera larga ya de más de un tercio de siglo había adquirido legendaria reputación como habilísimo parlamentario, iba pronto a revelar hasta qué punto se había identificado con el proyecto socialista que el destino le había fijado por deber llevar adelante en medio de obstáculos cuya abrumadora gravedad advertía plenamente; los tres años durante los cuales le tocó guiar a Chile en esa áspera navegación iban a marcar (y no sólo para su

país) la etapa resolutiva de la crisis que la década de decisiones no había alcanzado a decidir.

2) Los tiempos que corren

En 1970, mientras no se han agotado los impulsos reformistas (y en sus modalidades extremas revolucionarios) surgidos diez años antes, el orden mundial que tras de un cuarto de siglo de inigualado avance todos tenían ya por definitivamente consolidado comenzó a sufrir transformaciones radicales, que pronto incidirían decisivamente sobre las que iba a vivir el subcontinente; conviene entonces que las examinemos aquí brevemente antes de volvernos hacia estas últimas.

En la economía, el fin de la larga etapa ascendente marcada por la abrumadora hegemonía de los Estados Unidos en el mundo desarrollado, y la de éste sobre el resto del planeta, tuvo –se recordará– como signos anunciadores la eliminación de la paridad fija del dólar y el oro, decidida por Nixon en 1971 para paliar las consecuencias del incipiente deterioro de aquélla, y la primera crisis del petróleo, que pareció sacudir las bases de ésta.

Se abría así la transición hacia una etapa marcada por una sucesión de cambios súbitos y espectaculares en el clima económico, cuyo impacto iba a ser en más de un caso aun más intenso en Latinoamérica que en el centro de la economía mundial; por debajo de ellos comenzaban a adivinarse transformaciones más lentas y graduales, que hallaron eco más tardío y atenuado en el subcontinente.

Aunque en 1973 la primera crisis del petróleo fue una novedad inesperada, los signos que la anticipaban se habían venido acumulando por años: las economías desarrolladas se habían venido expandiendo más rápidamente que los recursos necesarios para sostenerles; ello se tradujo en un alza gradual de precios de alimentos y materias primas. Retrospectivamente no parece sorprendente que, cuando el petróleo se

sumó a esa tendencia ya general, la corrección haya sido particularmente dramática: aunque su consumo había venido creciendo frenéticamente, una expansión productiva en este caso aún más intensa había mantenido largamente su precio a un nivel estable.

La subida brutal del precio del petróleo, a diferencia de las más moderadas que se habían dado ya para otros rubros, introdujo a la economía mundial en una etapa de crecimiento mucho más lento e irregular. Aun ese desempeño poco satisfactorio tenía un precio que los gobiernos estaban dispuestos a pagar: a saber, la aceleración de la inflación, preferida al agravamiento de la desocupación, que la opinión, en Europa más aún que en Estados Unidos, había llegado a considerar un flagelo tan anacrónico como el cólera o la peste.

Ese nuevo clima económico era una consecuencia paradójica para el Tercer Mundo: el nacimiento de la OPEP, que parecía por fin realizar los anhelos de Prebisch, comenzando a corregir las asimetrías en su relación con el mundo desarrollado, no se presentaba para ellos como una bendición sin mezcla, en cuanto la recesión que terminó por provocar se tradujo en una caída de la demanda de alimentos y materias primas, que repercutió negativamente en los volúmenes y precios de más de uno de sus restantes rubros de exportación.

A la vez, la primera crisis del petróleo transfirió de los países consumidores a los productores masas monetarias demasiado ingentes para que pudiesen siempre incorporarse a las economías de éstos sin provocar distorsiones gravísimas. Quedaba, pues, un saldo que debía buscar otros desemboques; el resultado fue una excepcional abundancia de capitales disponibles a tasas de interés insólitamente bajas, que en algunos momentos de acelerada inflación en los países centrales llegaron a hacerse negativas.

Esta circunstancia, sumada al estancamiento económico de los países del centro, hizo más fácil tanto a los del Tercer Mundo como a los del bloque socialista atraer hacia ellos corrientes de capitales antes más esquivas. Esos capitales se canalizaron

a través de créditos a corto y a lo sumo mediano plazo; los inversores aceptaban términos muy poco atractivos para ellos debido a lo desfavorable de la coyuntura; y los créditos a corto plazo les permitirían beneficiarse rápidamente con cualquier cambio en ella.

La primera crisis petrolera tuvo todavía consecuencias más allá de la esfera económica en cuanto, al afectar menos a los Estados Unidos (que aún producían la mayor parte del petróleo que consumían) que a Europa y Japón, vino a hacer más lento el deterioro de su posición dominante en la economía (y no sólo en ella). A partir de la primera crisis del petróleo, en efecto, Europa occidental se transformó en la menos dinámica de las grandes áreas del mundo desarrollado; aunque la expansión japonesa estuvo lejos de sufrir una detención análoga, su ininterrumpido avance no parecía aún por sí solo constituir una amenaza para esa hegemonía.

Había otra razón para que ésta sobreviviera: el gigantismo económico de los Estados Unidos les hacía posible manipular la paridad del dólar y el oro sin amenazar el papel del primero como moneda internacional; así utilizaron la liberación del precio del oro para imponer una devaluación del dólar, favorable para la balanza de comercio norteamericana, que se había venido desequilibrando en los años previos a la crisis.

En el mundo desarrollado la pérdida de velocidad de la economía nunca iba a corregirse del todo, y la tendencia al estancamiento se insinuaba también en el socialista; la economía planificaba autoritariamente desde la cúspide, que –tras sostener la gran expansión de la soviética a partir de 1930– había alcanzado resultados nada desdeñables tanto allí como en la Europa del este en la segunda postguerra, se mostraba menos eficaz en el manejo de una estructura económica que los anteriores avances habían tornado más compleja. Los sectores gobernantes, aunque advertían esa novedad inquietante, vacilaban en introducir retoques en un sistema económico en cuyo marco habían consolidado su preeminencia sobre el Estado y la sociedad. Mientras en la URSS, donde el estanca-

miento económico no creaba problemas de disciplina política, luego de algunos intentos reformistas que no iban a llegar lejos, la respuesta fue un reforzado inmovilismo, en el resto de la Europa socialista, regímenes que se sabían más frágiles buscaban atenuar las consecuencias negativas de la nueva coyuntura recurriendo cada vez que la situación lo permitía al crédito del mundo capitalista.

Esas soluciones tan poco satisfactorias iban a resultar con todo más duraderas que la adoptada en el oeste, que buscaba mitigar el estancamiento apelando a una inflación cuidadosamente controlada. Hacia el fin de la década esa inflación amenazaba quebrar las frágiles barreras erigidas contra su avance; ya en 1978 el gobierno norteamericano se decidió a adoptar los remedios clásicos, imponiendo una subida drástica de las tasas de interés, que se esperaba estabilizaría la economía disminuyendo el ingreso y el empleo; inesperadamente esas nuevas tasas no lograron frenar un avance económico más vigoroso de lo que se había supuesto, y se tradujeron en cambio en una nueva aceleración de la inflación.

La segunda crisis del petróleo vino a dar a ésta nuevo y temible impulso, y obligó a hacer de la lucha sin cuartel contra ella la tarea principal de todos los gobiernos del mundo desarrollado. Mientras administraciones conservadoras como la de Reagan en Washington y la de Mrs. Thatcher en Londres la instrumentaban para un ataque frontal al llamado Estado-providencia, consolidado durante la larga prosperidad de postguerra, aun otros gobiernos de inspiración muy distinta, como los socialistas de Francia y España, descubrieron que la coyuntura les imponía orientarse así fuese parcialmente hacia soluciones análogas.

Junto con las bajas tasas de interés quedaba relegada al pasado la posición ventajosa de la que habían gozado los deudores; el cambio se tornó aún más brusco debido a la recesión provocada por la nueva política, que hizo que la nueva alza en el precio del petróleo (y por lo tanto la plétora de recursos acumulados por los países productores) fuese más breve de lo

esperado. Una circunstancia adicional vino a hacer aún más difícil la situación de los países que se habían acostumbrado a depender del crédito externo; los Estados Unidos estaban ahora recurriendo masivamente a él, y atrayendo una parte creciente del que aún quedaba disponible.

Como se ve, de nuevo en esta etapa los Estados Unidos pudieron transferir al resto del mundo buena parte de las consecuencias de las crecientes insuficiencias en su propia economía. Pero al eludir así los reajustes que hubiesen sido capaces de corregirlas las agravaban cada vez más rápidamente.

La política de la administración Reagan vino en efecto a acelerar el retroceso del antes abrumador predominio norteamericano en el sector industrial, en una etapa en que la frontera entre las economías desarrolladas y las que no lo son comenzaba a aparecer cada vez menos nítida; mientras entre los competidores ya reconocidos de los Estados Unidos el estancamiento europeo era cada vez mejor compensado por el inagotable dinamismo de la economía japonesa, otras del Lejano Oriente crecían aún con mayor ímpetu. Éste era sólo un aspecto de la que dio en llamarse industrialización periférica; si el avance industrial no alcanzó a transformar tan completamente a ninguno de los mayores países de Asia meridional o América latina como a Corea del Sur, Formosa, Hong-Kong o Singapur, no por eso dejaban éstos de convertirse para ciertos rubros (no tan sólo por cierto los que se benefician más con la baratura comparativa del salario) en competidores de los desarrollados; así ocurría por ejemplo en América latina con el acero de Brasil o Venezuela...

La nueva fluidez del marco económico mundial, que no alcanzaba a aliviar los problemas económicos latinoamericanos, contrastaba con una rigidez mayor en el marco político-internacional en que debía desenvolverse Latinoamérica. El lugar central que ocupaban en él los Estados Unidos no les sería ya seriamente disputado; la URSS, poco deseosa de buscar en el subcontinente oportunidades análogas a la que le había brindado la Revolución cubana, prefería extender sus contac-

tos diplomáticos y mercantiles con cuantas naciones se mostrasen dispuestas a ello, sin aspirar en ninguna de ellas a constituirse en rival seria del influjo estadounidense. Aunque no faltaron quienes en Latinoamérica esperaban que un acrecido influjo económico o político de Europa occidental equilibrase el abrumador de los Estados Unidos, en el terreno de la economía esa ilusión no sobrevivió a la primera crisis del petróleo; en lo político ya antes de que se agotara la expansión de la socialdemocracia europea, se había hecho evidente que su ambición de ganar influjo en Latinoamérica no llegaba a inducirla a ofrecerse como alternativa a los Estados Unidos, si el precio era provocar un serio conflicto con la nación que, pese a todas las tensiones, seguía siendo la más importante aliada política, protectora militar y asociada económica de Europa occidental.

En la etapa que se abre se va a atenuar también la divergencia que por un momento se insinuó entre las perspectivas latinoamericanas de los Estados Unidos y las de la Iglesia católica. Ello se debe a la nueva actitud de la más altas instancias eclesiásticas frente al impulso innovador que había comenzado a animar a sectores considerables del clero y de los fieles en Latinoamérica. Las resistencias a su avance se hicieron cada vez más decididas, y encontraron eco cada vez más receptivo en el Vaticano; si el pontificado de Pablo VI había estado dominado por la búsqueda de un punto de equilibrio entre innovación y continuidad, su sucesor Juan Pablo II busca sin equívocos restaurar la estructura autoritaria de la Iglesia y redefinir sus cometidos mundanos en términos más cercanos a los tradicionales. Esa cambiada inspiración de lo alto –que alcanzó localmente impacto muy variable– se ha constituido en obstáculo muy eficaz contra el protagonismo político que algunos de los teólogos de la Liberación ambicionaban para los movimientos a los que ofrecían a la vez inspiración y justificación.

Tanto las corrientes ideológicas que por un momento se habían ofrecido como alternativas para una América latina

prisionera de la polarización heredada de la guerra fría, como los influjos externos que aquéllas esperaban movilizar a su servicio fueron así perdiendo gravitación en la nueva década; en la hora de la verdad todos esos influjos pesaban mucho menos que el de la potencia hegemónica, pese a que ésta se mostraba menos dispuesta a ejercerlo abiertamente que en la década anterior.

Cuando, ya a mediados de ésta, la prioridad fugazmente reconocida a América latina en 1960 fue abandonada, ello no trajo consigo una redefinición en los medios y objetivos de la política norteamericana en el subcontinente. Sólo en 1969 el nuevo presidente Nixon iba a proponerla: a su juicio los Estados Unidos debían dejar de reivindicar su papel protagónico en el resto del continente con el énfasis dramático que en ello había puesto Kennedy, para adoptar un *low profile* que les permitiría pasar tan desapercibidos como fuese posible. Pero no por ello dejarían de hacer sentir su peso de modo tan decidido como en el pasado cada vez que las circunstancias lo hiciesen aconsejable, tal como pudo comprobarse tanto en el inicio como en el trágico fin de la experiencia socialista en Chile.

El presidente demócrata Carter, victorioso gracias a la revulsión más moral que política frente a los abusos de poder del gobierno de Nixon, buscó reflejar en su política exterior el temple de opinión que lo había llevado a la Casa Blanca, sin renunciar por ello a las metas tradicionales de esa política. La inclusión de la defensa de los derechos humanos entre sus objetivos básicos, que venía a satisfacer ese propósito, ofrecía además un nuevo instrumento de legitimación a la presencia dominante de los Estados Unidos en el tablero internacional, análogo al que la lucha contra la trata africana había aportado a la consolidación de la hegemonía atlántica de Gran Bretaña.

En Latinoamérica la conversión de los Estados Unidos a la causa de los derechos humanos tuvo efectos positivos (Carter es quizá el único presidente de ese país del que puede decirse que gracias a que él era presidente algunos latinoamericanos están hoy vivos, y es también el único, que -como se vio en

1984 en Buenos Aires- puede caminar en visita privada por las calles de una capital latinoamericana entre los saludos llanos y cordiales de un público que lo recuerda con afecto). Pero no alcanzó los éxitos espectaculares que hubiesen persuadido a la opinión de que, más allá de sus objetivos morales, esa política era un instrumento eficaz de consolidación del poderío norteamericano; en 1981, cuando el derrotado Carter fue reemplazado por Ronald Reagan, todos lo regímenes latinoamericanos que habían sufrido la condena de Washington por su inhumano desempeño se mantenían en el poder, y ello pudo ser presentado por su rival triunfante como una prueba adicional de la decadencia del poderío internacional norteamericano.

Ya antes, la inflexión introducida por Carter en la política exterior había comenzado a afrontar serios problemas. Como se ha indicado, éste no había renunciado en homenaje a su nuevo objetivo a otros más tradicionales, y una y otra vez iba a verse a Washington poner sordina a la reivindicación de los derechos humanos porque la violación de éstos corría por cuenta de aliados a cuyo apoyo juzgaba imprudente renunciar.

Por añadidura, una vez disipada la revulsión moral contra la *Realpolitik* de Nixon, se hizo sentir por fin plenamente la reacción del herido orgullo nacional frente al fin catastrófico de la intervención norteamericana en Vietnam; su recuerdo sería utilizado por los sectores más conservadores contra la política de Carter, a la que atribuían inspiración análoga a las agitaciones que habían hecho inevitable la retirada de Vietnam y la consiguiente derrota.

La batalla por la ratificación senatorial del tratado con Panamá, que eliminaba las limitaciones a la soberanía de ese país sobre su territorio y preveía una transferencia gradual del control sobre el canal, reveló cuánto se había avanzado ya en esa dirección; ahora la prédica de las fracciones más conservadoras del partido republicano encontraba eco inesperadamente amplio en la opinión; precisamente la disputa sobre el tratado panameño iba a dar al futuro presidente Reagan oportunidad de desplegar por primera vez plenamente en la escena

nacional sus dotes de agitador político, que tantos éxitos le habían deparado ya en California.

Esa oposición cada vez más extendida y militante colocó al gobierno de Carter a la defensiva. Las consecuencias se hicieron evidentes en su reacción frente a la guerra civil en Nicaragua, que iba a alcanzar su desenlace durante la última etapa de su gestión. El presidente demócrata ofreció al moribundo régimen de Somoza apoyo más prolongado que veinte años antes el de Eisenhower a Batista, y sólo se resignó a la plena victoria de la insurrección sandinista cuando ésta se había ya hecho inevitable, en parte porque Washington se había abstenido de promover, cuando ello hubiera sido aún posible, soluciones alternativas que -aunque más favorables al interés de Washington- hubiesen sido juzgadas igualmente inaceptables por la movilizada derecha.

La victoria de Reagan trajo consigo la adopción de los puntos de vista sostenidos de antiguo por la derecha republicana, y apoyados con aún mayor vehemencia por no pocos catecúmenos reclutados en las filas demócratas. En América latina la proclamada adopción de tácticas menos polémicas para promover los derechos humanos ocultaba mal el abandono de la prioridad que había sido reconocida a éstos por Carter. Pasaba en cambio a primer plano la lucha anticomunista y antisubversiva, y las nuevas dictaduras militares que habían sido blanco principal de las críticas de la administración anterior se transformaban por lo tanto en aliadas particularmente íntimas; la señora Jeane Kirkpatrick, que como representante ante las Naciones Unidas se constituiría en el más autorizado vocero de esa nueva línea, iba a justificar esa alianza al oponer al totalitarismo comunista el tanto más benévolo autoritarismo de regímenes como el del Shah en Irán y el de Somoza en Nicaragua, que el gobierno de Carter no había sabido apoyar con suficiente energía en la hora decisiva; era ése un error que el de Reagan no se proponía reiterar frente a los que en el cono sur de Sudamérica habían llevado a nuevos extremos el desprecio por los derechos humanos de sus gobernados.

La prioridad asignada a la lucha anticomunista tenía otra consecuencia no menos significativa: más que América latina en su conjunto, atraían la atención de la nueva administración las reducidas zonas del subcontinente atravesadas por conflictos que invitaban a aplicar las soluciones de fuerza ahora favorecidas desde Washington. Esto explica la prioridad absoluta concedida a las crisis de América Central, que vino a torcer hacia rumbos extravagantes la relación con otras secciones latinoamericanas. El ejemplo sin duda más extremo fue el de Argentina, cuyo gobierno militar se mostró dispuesto a patrocinar en America Central acciones de guerra que, debido a la oposición del Congreso, los Estados Unidos no podían abordar directamente; los gobernantes argentinos creyeron entender que a cambio de ese servicio Washington adoptaría una benévola neutralidad frente al ataque militar que se proponían desencadenar contra Gran Bretaña en las disputadas Islas Malvinas.

Esa disparatada aventura militar ofreció en 1982 la prueba final de que, a más de la sistemática inhumanidad que a los ojos de la opinión tornaba escandalosa la alianza con las nuevas dictaduras militares, había otras razones que hacían a esa alianza menos valiosa de lo que había esperado la señora Kirkpatrick: la criminosa brutalidad de esos regímenes era reflejo de una tosquedad intelectual (y no sólo moral) que hacía imposible ponerlos al servicio de una línea política que, aunque también extrema, no renunciaba todavía en esa etapa a conservar alguna racionalidad en la selección de medios y la definición de objetivos.

El descubrimiento hizo menos penosa a los orientadores de la política norteamericana la necesidad de adaptarse al clima político que el fin de la holgura financiera estaba introduciendo en Latinoamérica, donde había sonado la hora de la redemocratización. Tuvieron ahora el buen tino de declararse entusiasmados ante esa imprevista peripecia, que pasaron a invocar como prueba de que las tácticas más discretas que habían introducido en la lucha por los derechos humanos eran más eficaces que las preferidas por Carter.

En esta coyuntura nueva, la prioridad reconocida a la lucha anticomunista seguía reflejándose en una obsesiva concentración en los conflictos centroamericanos, y una indiferencia muy marcada por otros desarrollos que a no muy largo plazo se presentaban quizá más amenazantes para la gravitación de los Estados Unidos en el subcontinente. Así la administración de Reagan iba a asistir pasivamente tanto el arraigo en Perú de una guerrilla revolucionaria de envergadura mucho más amplia que las que en la década del 60 habían provocado tan extremas alarmas, como a la consolidación de un consenso mayoritario de los gobiernos latinoamericanos que se opone a su política centroamericana, y lo fuerza a eludir cualquier discusión de ella en la antes tan dócil Organización de Estados Americanos.

Sería erróneo, sin embargo, asignar la responsabilidad exclusiva por el curso que ha tomado la política latinoamericana de los Estados Unidos al influjo ideológico de la más extrema derecha de ese país. Junto con él pesa la preocupación por *dar al herido orgullo nacional satisfacciones simbólicas que le* permitan olvidar la ausencia de otras más sustanciales. La búsqueda de ese objetivo dominó en 1983 la expedición de Granada; si para el observador extranjero el entusiasmo casi delirante que la primera potencia militar del planeta ponía en la celebración de su victoria sobre el inerme miniestado antillano podía parecer desconcertante, ese admirable conocedor de sus compatriotas que es el presidente Reagan no se había equivocado al anticipar esa reacción por parte de éstos (son sin duda razones análogas las que hicieron tan difícil al presidente satisfacerse en Nicaragua con soluciones que, aunque sustancialmente satisfactorias para los Estados Unidos, no se presentarían con los rasgos exteriores de una victoria contra el enemigo).

La influencia que sobre la política latinoamericana de los Estados Unidos tienen sus cada vez más enmarañados problemas nacionales se hace aún más evidente en otros temas de menor carga ideológica, que están pasando también a primer

plano. Uno es el de la inmigración indocumentada a los Estados Unidos, central en las relaciones con México. Otro, de repercusiones menos localizadas, es el del tráfico de drogas, que ha afectado de mil maneras las relaciones con países tan diversos como México, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia o Paraguay. Uno y otro son sobre todo reflejo de la compleja crisis que atraviesa la sociedad norteamericana, que Washington prefiere afrontar sobre todo a través de sus repercusiones externas, en táctica análoga a lo que lo ha incitado a transferir el resto del mundo -hasta ahora con éxito- buena parte de las consecuencias negativas de su manejo económico.

Y también aquí con éxito, si no en resolver problemas que comienzan a parecer tan intratables cuando se los encara a través de su dimensión latinoamericana como cuando se lo hace en el marco de los Estados Unidos, sí por lo menos en imponer sus puntos de vista a sus menos poderosos vecinos Así, México no osa ir más allá de expresar preocupación por las consecuencias que un cierre exitoso de la frontera a la inmigración indocumentada podría tener en medio de una crisis que disminuye cada vez más su capacidad de ofrecer empleo a sus nuevas generaciones, y ha renunciado a discutir las derogaciones muy graves al principio que asigna a cada Estado el monopolio en la administración de justicia en su territorio, impuestas en la esperanza de hacer menos ineficaz el combate contra el tráfico de drogas (aunque las autoridades mexicanas no siempre apoyan ese combate con el máximo celo que de ellas esperan las de su gran vecino, ello se debe quizá menos a cualquier reflejo de patriotismo ofendido que a la influencia inconfesada de quienes controlan la economía ilegal). Del mismo modo, la extensión de esa lucha a los países andinos, aunque no ha alcanzado hasta ahora éxitos convincentes, ha permitido una reaparición de la presencia militar de los Estados Unidos en alguno de esos países, y de nuevo sin afrontar resistencias notables.

Esto último no se debe a una consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos en Latinoamérica (que está lejos de

parecer indudable), ni a la necesidad -mucho más real- que países abrumados por la deuda externa tienen de contar con la buena voluntad de Washington para la eterna renegociación de ésta con sus acreedores. Todo eso no explica que, al margen de la actitud de los gobiernos, la opinión latinoamericana reaccione hoy con una tibieza que refleja la pérdida de ascendiente de los motivos nacionalistas-antiimperialistas capaces de movilizar hasta hace muy poco la reacción militante de vastos sectores de ella. Es éste un signo relativamente menor de una mutación en el horizonte político-ideológico latinoamericano, que ha venido a quitar relevancia a tantas alternativas que hasta hace poco tantos hallaban singularmente exaltantes.

Esa mutación debe sin duda mucho a la paulatina toma de conciencia de los cambios que están introduciendo tanto al mundo desarrollado como al socialista en una nueva etapa: así, la noción, tan influyente en la década de 1960, de que los males de América latina son los del capitalismo dependiente, y que para librarse de ellos es necesario y suficiente abandonar la órbita del capitalismo por la socialista, sobrevive mal al espectáculo que han venido ofreciendo en las últimas dos décadas, por una parte, Corea del Sur o Formosa, y por otra Polonia o Rumania. Pero, por considerable que sea el impacto de esos cambios, que avanzan a escala planetaria, no hay duda que sobre esa clausura del horizonte ideológico latinoamericano gravita aun más poderosamente la derrota decisiva de los movimientos populares que en Latinoamérica se movilizaron en pos de esas alternativas, y ello hace de esa derrota el necesario punto de partido para esta reseña de los tiempos actuales.

En ninguna parte iba ella a alcanzar contornos tan nítidos como en **Chile**, donde ofreció el desenlace catastrófico para la transición al socialismo hecha posible en 1970 cuando Salvador Allende, candidato presidencial de la izquierda, obtuvo la más alta votación aunque no la mayoría absoluta. El Congre-

so, en que la coalición victoriosa se hallaba en minoría, lo ungió presidente tras de recibir garantías de que se mantendría dentro de los carriles constitucionales, y de que sólo introduciría reformas estructurales (entre ellas las nacionalizaciones previstas en su programa de gobierno) por vía legislativa.

Aunque en el umbral de una transformación social revolucionaria, Chile se mantenía así apegado a la tradición institucional de la que tanto se enorgullecía, pero otros hechos sugerían que ella no era invulnerable; sectores de derecha, decididos a impedir la asunción de la presidencia por Allende, decidieron secuestrar al general René Schneider, comandante en jefe del ejército, en quien veían al principal obstáculo para sus planes, y achacar el hecho a la extrema izquierda: como Schneider se resistiera, los complotados no hallaron otra solución que asesinarlo. Aunque el crimen consolidó por el momento la vocación legalista del ejército, no dejaba de anticipar la intensidad y la índole de las resistencias que pronto iban a acumularse en la llamada vía chilena al socialismo.

Su primera etapa iba a ser con todo inesperadamente fácil. La nacionalización de la gran minería de cobre recibió apoyo casi unánime en el parlamento, y aunque éste rehusó a ampliar la ley de reforma agraria, la reforma misma ganó nuevo vigor, sin provocar tensiones inmediatamente alarmantes. Esa placidez del clima sociopolítico era sobre todo fruto de la bonanza económica. El gobierno de Unidad Popular reactivó la demanda mediante una masiva redistribución de ingresos, y, una vez superado un brevísimo pánico de las clases propietarias, el ritmo de negocios se aceleró y la industria comenzó a producir a plena capacidad; gracias a ello la inflación perdió velocidad respecto de la del último año de Frei. Esa bonanza se reflejó en los resultados de las elecciones municipales de abril de 1971, en que la izquierda superó la marca del 50 por 100 de votantes.

Se trataba con todo de una coyuntura necesariamente efímera. No sólo la expansión, como siempre, creaba sus propios frenos en cuanto acentuaba el desequilibrio en la balanza

comercial, en un proceso agravado esta vez por la caída del precio internacional del cobre. A ello se agregaban otras razones vinculadas con la opción socialista de la Unidad Popular: si la prosperidad industrial, lejos de reflejarse en inversiones en el sector, se traducía en una fuga de las ganancias al exterior, la razón era la poca inclinación de los industriales a invertir en empresas que, según se les había anunciado abundantemente, sólo permanecerían en sus manos hasta que Chile consumase su ya comenzada transición al socialismo.

A ello se vinieron a agregar las consecuencias de la reubicación internacional que era un aspecto de la opción socialista, y que atrajo sobre Chile la hostilidad implacable del gobierno de los Estados Unidos, primero reflejada en la desmesurada reacción frente a la nacionalización del cobre, y pronto en un bloqueo comercial y financiero que aislaba a Chile del más importante interlocutor externo de su economía; aunque los Estados Unidos no lograron movilizar a las naciones europeas en esa campaña, nada incitaba tampoco a éstas a llenar el vacío abierto por la acción concertada del Estado y las empresas norteamericanas. Los auxilios llegaron en cambio del bloque socialista, y fueron muy considerables, y -sin corregir los problemas de la economía productiva- atenuaron por más de un año sus consecuencias, supliendo en parte los alimentos y artículos de consumo que aquélla era cada vez menos capaz de proveer. Pero ya hacia comienzos de 1973 el bloque socialista comenzaba a mostrar signos de fatiga ante un compromiso que amenazaba perpetuarse indefinidamente.

Las crecientes dificultades económicas hicieron resurgir las tensiones sociopolíticas. Frente al desabastecimiento creciente, los sectores identificados con la izquierda organizaron controles populares del comercio al menudeo, mientras los multiplicados conflictos en fábricas se resolvían colocando a éstas bajo la administración del Estado, que usaba atribuciones legales introducidas en la década de 1930 pero muy poco usadas desde entonces. Se dio así un avance no planeado hacia el socialismo, que exacerbaba aún más la tensión social:

mientras el apoyo minoritario que la izquierda había encontrado en las clases medias se derrumbaba vertiginosamente, la hostilidad ahora unánime de esas clases hacia el gobierno de Unidad Popular se tornaba cada vez más enconada, obligando a la Democracia Cristiana a abandonar primero toda reticencia y luego toda mesura en su actitud opositora, sin lograr con todo detener la erosión de su base política en favor de esa otra alternativa aún más rabiosamente opositora ofrecida por el Partido Nacional.

En el campo, mientras la reforma agraria y las ocupaciones espontáneas consolidaban la presencia política de la izquierda, el impacto económico de esos cambios se revelaba todavía más disruptivo. El gobierno de Allende, que había prometido abrir acceso a la tierra a masas rurales demasiado nutridas para poder ser beneficiadas con lotes familiares, sólo pudo hacerlo reorganizando a las cooperativas instituidas por el de Frei como explotaciones colectivas a cargo de trabajadores asalariados que contaban además, como los antiguos inquilinos, con mínimos lotes para cultivos de autoconsumo; la producción de esas explotaciones debía ser canalizada por el Estado, y distribuida a precios oficiales por las organizaciones populares. Pero los campesinos-asalariados resistían mal al atractivo de los precios pagados por el mercado negro, surtido también por la producción de las unidades no afectadas por la nueva ola de reforma.

A medida que la inflación tornaba menos viable el sistema de precios oficiales, un mecanismo de comercialización paralelo dominado por camioneros independientes entraba a abarcar rubros cada vez más numerosos, y ya no sólo entre los productos del campo. En la primavera de 1972, en vísperas de una cosecha agrícola que sabía deficiente, el gobierno de Allende, que afrontaba cada vez más numerosas huelgas de clase media y aun de algunos sectores populares, se decidió a nacionalizar el transporte automotor; la respuesta fue una huelga de camioneros, que transformó a éstos en la punta de la lanza de una oposición cada vez más militante. El gobierno

fue incapaz de quebrarla: mientras el ejército rehusaba a ser usado con ese fin, los subsidios que el Tesoro norteamericano prodigaba a los huelguistas los ponían al abrigo de cualquier presión económica.

Se llegaba así a la crisis de octubre, que consumó la metamorfosis de un conflicto político entre cuyos participantes las transacciones y los acuerdos eran aun posibles en un descarnado conflicto de clases, en cuyo marco, mientras la coalición de izquierda por primera vez sumaba a la lealtad de una sólida mayoría de las asalariadas la prácticamente unánime de las campesinas y marginales, sus adversarios por su parte ganaban la ahora igualmente unánime y cada vez más militante de las clases intermedias.

El punto de partida de esas transformaciones lo ofrecía la movilización de masas que la coalición gobernante no alcanzaba a orientar ni canalizar, en parte porque los partidos que la integraban no se acordaban sobre el rumbo que debía tomar el experimento chileno. El comunista juzgaba imprudente empujarlo hasta los umbrales del socialismo y aspiraba aún a ampliar la alianza hacia la derecha; desde que esa esperanza (y la de poner algún orden en la economía) se revelaron inalcanzables, incluso evitando poner obstáculos graves a la marcha del gobierno, se consagró a atender las reivindicaciones inmediatas de sus bases, que, a medida que crecían las dificultades, vacilaban en su lealtad partidaria, tanto en beneficio de la derecha como de la extrema izquierda. Ésta, que incluía al MIR (un movimiento guevarista que había renunciado sólo provisionalmente a la lucha armada) y a la izquierda socialista, buscaba hacer de los cordones populares (organizaciones de base territorial surgidas durante la crisis de octubre en los distritos populares y marginales cuyo favor estaba ganando) rivales serios de las estructuras partidarias y sindicales de obediencia comunista.

A juicio de la extrema izquierda, la crisis de octubre de 1972 había introducido a Chile en una etapa prerrevolucionaria, que debía culminar en una violenta batalla final contra las fuerzas hostiles al socialismo. El presidente Allende, decidi-

do como el resto de la coalición izquierdista a evitar esa batalla, resolvió la crisis mediante la incorporación al gabinete de ministros militares, cuya presencia fortalecía la autoridad suprema del Estado, y entregaba la resolución del conflicto que dividía a la sociedad chilena al electorado, que debía pronunciarse en las elecciones de renovación parlamentaria de marzo de 1973. Su veredicto fue menos desfavorable a la experiencia socialista de lo que sus enemigos (y aun muchos de sus partidarios) habían esperado; las izquierdas no conservaban sin duda la mayoría absoluta fugazmente alcanzada en 1971, pero, con 43 por 100 de los votos, superaban holgadamente el porcentaje que en 1970 había dado la victoria a Allende.

Ello no resolvía el conflicto, y –mientras el presidente buscaba una salida primero a través de un entendimiento con la democracia cristiana, y luego mediante un plebiscito en torno a la reforma constitucional incluida en el programa originario de Unidad Popular, cuyo previsible resultado negativo (lo anunciaba de antemano) provocaría su propia dimisión– la agitación opositora (que a más de usar el juicio político para mantener una constante inestabilidad ministerial, y arrojar a la huelga a los gremios profesionales y de nuevo a los camioneros, acudía abiertamente al terrorismo, instrumento favorito de una cada vez más agresiva extrema derecha) arreció cada vez más. En agosto la presión de sus pares obligó al general Prats, identificado con la posición legalista, a renunciar tanto el comando en jefe del ejército como a su puesto en el gabinete. Lo reemplazó el general Augusto Pinochet, que dos semanas después iba a encabezar el golpe militar que puso fin al ensayo socialista.

El 11 de septiembre el asalto a la casa de gobierno, donde Allende se había encerrado a afrontar la muerte, puso fin no sólo a ese ensayo sino a una continuidad institucional en cuyo homenaje el presidente sacrificaba su vida, convencido de que quien había recibido en custodia la legítima autoridad del Estado no debía sobrevivir a su destrucción violenta. A ello si-

guió una represión de violencia sobrecogedora: las fábricas, las barriadas marginales, los estadios transformados en cárceles al aire libre eran teatro de ejecuciones numerosas, mientras en el campo otras matanzas borraban las huellas de las recientes movilizaciones.

La salvaje violencia de la represión inicial sorprendió a la opinión extranjera, que esperaba otra cosa de Chile; su prolongación por una dictadura militar que la proclamaba uno de sus objetivos permanentes y se rehusaba a reconocer un papel para las fuerzas políticas sorprendió también a muchos chilenos, que habían esperado un rápido retorno al orden constitucional. Había con todo razones muy fuertes, a más de la ambición personal del general Pinochet y la corporativa del ejército, aguzada esta última por el avance de los regímenes militares en el resto de Latinoamérica, que militaban contra ese retorno. Aunque el conflicto político zanjado por la intervención militar no había desbordado los canales constitucionales, lo que había estado en juego con él, desde la perspectiva de las clases altas y medias, era su supervivencia misma: a través de la desbordada insolencia plebeya tanto como de las dificultades para surtir su mesa creían haber conocido un anticipo de la catástrofe irreparable que hubiera significado para ellas un desenlace desfavorable; y pasaría mucho tiempo antes que la nostalgia de un estilo de gobierno menos brutal pesara más sobre ellas que la decisión de no colocar nunca más su posición en la sociedad chilena a merced del juego electoral.

La gravedad de la crisis social vivida por Chile permite también entender mejor algunas de las notas distintivas del régimen militar que aún lo gobierna. Aún más enérgicamente que otros organizados sobre pautas burocrático-autoritarias, ese régimen se esfuerza por prevenir cualquier organización y movilización popular, pero se diferencia de ellos en cuanto siguió contando por una década con una suerte de movilización subterránea de todos los sectores que se sintieron amenazados por los populares, que se hacía sentir en momentos decisivos con una eficacia que no se dio ni en Brasil (donde la

revolución social sólo había sido inminente en la acalorada fantasía primero de la izquierda y luego de la derecha) ni en la Argentina (donde los peligros para el orden vigente habían provenido de un estado de ánimo colectivo que habían encontrado eco relativamente limitado en las clases populares). Esa diferencia tiene por consecuencia otra no menos importante: el general Pinochet no es, como los efímeros titulares del poder en los regímenes militares brasileños o argentinos, el gerente ocasional de una empresa política corporativamente controlada por las fuerzas armadas; es un dirigente político por derecho propio, que no debe su predominio sobre sus pares tan sólo a la astucia un poco tosca con que viene manipulando al cuerpo de oficiales, sino a la identificación privilegiada que con él mantienen cuantos en Chile guardan aún rencorosa memoria de la etapa de gobierno de Unidad Popular; es ésta quizá la razón principal por la cual ha sido precisamente en Chile donde la toma del poder por las fuerzas armadas ha hallado expresión en una dictadura personal de vocación vitalicia.

Otra peculiaridad del régimen chileno, que ofrece un contraste aún más extremo con ese paradigma del orden burocrático-autoritario que es el brasileño, le es en cambio común con los restantes del Cono Sur: es la renuncia al objetivo de desarrollo económico, entendido como creación de una economía estructurada en torno a un sector industrial avanzado. Sería erróneo achacar esa renuncia tan sólo a la preocupación por limitar a la gravitación de las fuerzas sociales cuyo ascenso subtiende el largo proceso sociopolítico que culminó en Chile en la etapa de Unidad Popular. Hay también en efecto razones económicas que la hacen aparecer menos absurda en Chile (o Uruguay, o aun Argentina) que en Brasil. Ellas tienen que ver con los cambios en las pautas de industrialización, que fijan dimensiones mínimas cada vez más amplias a las naciones que aspiren a la madura estructura industrial cuya construcción, de acuerdo con el criterio dominante en décadas anteriores, es el objetivo del desarrollo.

Esa redefinición radical de los objetivos económicos de largo plazo comenzó por pesar menos en las decisiones del nuevo régimen que el impacto de la crisis sociopolítica dejada atrás, y el de su desenlace contrarrevolucionario. En 1973 lo más urgente era disminuir el ritmo de la inflación, y la derrota sufrida por los sectores populares permitía utilizar para ello una recesión severísima, que intensificaba todavía más la redistribución del ingreso en favor de los sectores privilegiados, y en contra tanto de las clases populares como de las medias, a las cuales el recuerdo de los pasados peligros debía dar fuerzas para soportar la penuria que iba a ser su lote en los primeros años de la gestión militar. A la vez, la privatización del vasto sector nacionalizado introducía cambios en la elite económica, que beneficiaban a grupos de intereses muy cercanos al nuevo poder y aun -según creencia muy compartida- a algunos de los discípulos de Milton Friedman que dirigían esta curiosa liberalización económica hecha posible por el terror político.

Sólo una vez superada esa etapa crítica iba a revelar el proyecto económico en curso la vastedad de sus ambiciones. Sólo en Chile se iba a intentar de veras «achicar el Estado» (o más bien su gravitación en la economía) pero ello no contribuyó tan rápidamente como algunos esperaban a «agrandar la nación», o -en términos más prosaicos- a revitalizar la economía productiva y las exportaciones aumentando la capacidad del sector privado. Tanto en cuanto a aquélla (donde se juzgaba que el problema provenía de la industria) como en el sector exportador (donde se lo hallaba en la minería, sometida a oscilaciones en el volumen de la demanda y en los precios sobre las cuales Chile apenas podía influir) la solución se esperaba de la agricultura. En cuanto a ésta no iban a ser atacados directamente los efectos de la primera reforma agraria, que había creado decenas de miles de unidades productivas familiares, en la esperanza de que el libre juego de las fuerzas de mercado viniese a modificarlos; en los hechos las transformaciones iban a provenir sobre todo del acceso privilegiado al

crédito del que gozaban los mayores propietarios e inversionistas, que dio lugar a una reconcentración de la propiedad fundiaria. Pero ella no restauró el antiguo orden económico en el campo; en cambio, mientras el sordo terror reinante aceleraba aún más la fuga hacia las ciudades de vastas masas de campesinos sin tierras, se daban las condiciones sociales que harían por fin posible el florecimiento de una agricultura capitalista. El costo social fue sin duda enorme: la economía urbana no tenía lugar para esos fugitivos de la tierra, y la desocupación vino a acentuarse, mientras el peso de los habitantes de las *callampas* en los mayores centros urbanos, comenzando por el Gran Santiago, crecía rápidamente. Con todo, en el sector agrario, a diferencia de otros, esa utilización despiadada de la victoria de los sectores privilegiados se traducía en un real avance de la economía productiva, que permitió en efecto reducir progresivamente la parte de la minería en las exportaciones chilenas.

Ese renacimiento del sector exportador nunca apareció más amenazado que en la breve etapa en que el Chile de Pinochet conoció una afiebrada prosperidad, fruto de la bonanza financiera de los años que separaban las dos crisis del petróleo. El golpe militar coincidió con la primera, y la liberalización económica que él impuso hizo de Chile un desemboque atractivo para los fondos acumulados por los países exportadores de petróleo. El flujo de créditos, al mantener una alta paridad para la moneda chilena, estimuló una enorme expansión del consumo de bienes importados, que tras de aplastar la competencia de la maltrecha industria nacional siguió creciendo para satisfacer una demanda que parecía hacerse insaciable. Esa paridad provocaba también un estancamiento en las exportaciones, a las que hacía cada vez menos competitivas, pero las consecuencias negativas sobre la balanza de comercio eran paliadas también en la de pagos por el alud de créditos baratos. A fines de la década había cambiado la fisonomía de Santiago; en los suburbios semirrústicos del este había surgido una vasta y opulenta ciudad para los ricos (y una

clase media que se endeudaba alegremente); los flagelos de la *affluent society* comenzaban a golpear esa capital antes austera y quieta, ahora cruzada de una red de autopistas destinada a quedar inconclusa, que no por eso dejaba de verse regularmente obstruida en las horas de pico.

Sería tentador denunciar en ese episodio insensato una consecuencia de la fe algo supersticiosa que los directores de la economía chilena depositaban en las leyes del mercado, pero es innegable que -como Albert Hirschman ha venido a recordarnos muy oportunamente- en esos años de fiebre financiera incluso quienes respondían a inspiraciones teóricas e ideológicas muy diferentes actuaron de modo sustancialmente idéntico, y se hace difícil no concluir junto con él que la abundancia de crédito crea tentaciones para las cuales ninguna orientación doctrinaria ofrece antídoto suficientemente seguro. Pero la de quienes la gobernaban dio a la experiencia chilena un matiz diferencial, en cuanto la orientación de ese crédito hacia el consumo, que no era en Chile como en otras partes un resultado no previsto ni deseado, llegó allí más lejos que en ninguna otra parte: las consecuencias fueron un crecimiento desmesurado de la deuda externa privada (la renta *per capita* de los habitantes del Gran Santiago se medía en 1983 en miles de dólares), una avasalladora expansión del sector de construcción, comercio y servicios, y el estancamiento del resto de la economía urbana.

La catástrofe que se buscó postergar renovando la deuda vencida a tasas de interés que ahora la hacían crecer aún más rápidamente se desencadenó de todos modos en 1981, porque los prestamistas se negaron a seguir acompañando esas operaciones esencialmente contables, destinadas a evitar una abierta bancarrota, de otras que allegasen nuevos fondos a la sedienta economía importadora.

El fin de la prosperidad se hizo sentir de modo devastador; la desaparición del crédito externo empujó a los mayores bancos al borde de la bancarrota, de la que los salvó la incautación por el gobierno. Si proseguía indefinidamente ese salvataje, el

de Pinochet corría riesgo de tomar a su cargo un sector tan amplio de la economía como el que reprochaba a la izquierda haber estatizado; se limitó por lo tanto a sostener los sectores y empresas clave, y dejar que una ola de quiebras hiciera estragos en el resto.

En ese nuevo contexto iba a madurar la primera crisis política seria afrontada por el régimen de Pinochet, que en 1983 pareció hacerlo vacilar en sus cimientos. Para entonces, y a lo largo de una década, había venido atenuando, tan lenta y parcialmente como le era posible, los rasgos más extremos de su estilo represivo, dando así lugar a un resurgimiento igualmente gradual de la vida política, cada vez más marcado por los avances del sentimiento opositor.

La instalación del gobierno militar había sido recibida con aplauso por todos los adversarios de la izquierda, que esperaban por entonces heredar el poder a corto plazo. Cuando se hizo evidente que ello no iba a ocurrir la Democracia Cristiana pasó a la oposición, con los esperables matices que seguían diferenciando al centro, la izquierda y la derecha del partido. La Iglesia católica, bajo la firme guía del arzobispo de Santiago, había comenzado ya a reaccionar activamente frente a las atrocidades de la represión, a través de la Vicaría de la Solidaridad. En el exterior las denuncias de un muy vasto exilio, nutrido primero por la izquierda pero ampliado muy pronto por las expulsiones con que el gobierno respondía al avance de la oposición hacia el centro del espectro político, encontraron amplio eco en la opinión pública europea y norteamericana: fue esa emigración chilena la que primero colocó el tema de los derechos humanos en el centro de la agenda política latinoamericana.

El régimen militar reaccionó muy característicamente: buscó extender el terror al extranjero con el atentado del que en Buenos Aires fue víctima el general Prats, o todavía el que en 1976 costó la del ex diplomático Orlando Letelier, perpetrado este último en Washington por agentes de la policía política chilena. Aunque las expresiones de repudio se hicieron frecuentes en boca de políticos europeos, y durante el gobierno

de Carter las relaciones con Washington se tornaron frías, el daño que ello infligía al régimen de Santiago era mínimo, ya que como deudor preferido no necesitaba avales políticos para seguir obteniendo los créditos que lo sostenían junto con la economía chilena.

El régimen llegó a buscar ventajas políticas de ese cada vez más universal repudio de la opinión internacional: en 1978 un plebiscito invitaba a los chilenos a optar entre el apoyo al general Pinochet y la dignidad nacional y el voto por una innominada alternativa simbolizada por una bandera negra. El resultado altamente satisfactorio de esa auscultación de opinión incitó a reiterarla en 1980; de este modo sería aprobada una nueva constitución desembozadamente autoritaria, que mantenía al general Pinochet en la presidencia hasta 1989, ocasión en la cual un candidato sería propuesto por las fuerzas armadas al voto plebiscitario de los chilenos, que en caso de rechazarlo gozarían de un año adicional de gobierno del vencedor de 1973.

Así institucionalizado, pero con una base política ya muy reducida y resquebrajada, llegaba el régimen militar al fin de la prosperidad. Aun los jefes de las otras armas manifestaban abiertamente su oposición a la perpetuación de Pinochet en el poder, y éste era incapaz de encontrarles reemplazantes más complacientes. En 1982 y 1983 la oposición popular se hizo sentir con intensidad creciente, y la orientación moderada del socialismo, que optaba ahora por una alianza con la Democracia Cristiana, hacía posible una alternativa política menos amenazante para los intereses corporativos de las fuerzas armadas. El general Pinochet reaccionó con su habitual astucia un poco gruesa pero no por eso menos eficaz: en 1983 la tolerancia política de hecho se extendió súbitamente a la extrema izquierda, y ello permitió descubrir que el comunismo, tradicionalmente dispuesto a ofrecer los mayores sacrificios políticos para lograr la institucionalización democrática, no sólo se resistía esta vez a permanecer en segundo plano para calmar las inquietudes militares, sino –abandonando posiciones

muy arraigadas– renegaba de su hostilidad de principio contra la lucha armada.

Algo más se revelaba al caer el doble velo de la represión y la artificialísima prosperidad: en esos diez años, mientras la vieja base obrera y sindical del comunismo y de la izquierda se habían estrechado considerablemente, las poblaciones callampas habían pasado a albergar a bastante más de la mitad de los habitantes del Gran Santiago, y en ellas ese comunismo ahora menos contemporizador parecía encontrar una nueva y más ancha base política. Ello venía a sembrar en la oposición una incertidumbre que le impidió utilizar plenamente las oportunidades creadas por su arrollador avance: aunque en las primeras jornadas el ruido de cacerolas vacías, que había sido la charanga de la guerra de las clases privilegiadas contra Allende y volvía a resonar en el Barrio Alto, y encontraba, en las poblaciones un eco arrollador, y las manifestaciones que a partir de entonces y por más de un año invadieron la calle una vez cada mes, a ofrecer su tendal de víctimas, también fueron capaces de movilizar a todos los sectores sociales, resultaba menos fácil a una oposición que cubre hoy a todo el espectro político alcanzar la necesaria coincidencia de objetivos en torno a las modalidades de la transición a la democracia.

Pero no es sólo la falta de acuerdo en torno a un plan político alternativo la que ha transformado a la oposición en espectadora desconcertada de un drama político cuyos hilos aún retiene en sus manos el duradero dictador, que imperturbablemente se apresta a celebrar el plebiscito en el cual, de acuerdo con la constitución de 1980, será sometido al electorado el nombre del nuevo presidente propuesto por las fuerzas armadas. Las dificultades que esa oposición afronta son las de una sociedad que, aunque abrumadoramente opuesta al actual orden político, sigue en otros aspectos esenciales trágicamente dividida. Tras década y media de ser gobernado contra sus sectores populares, Chile se sabe tan escindido sobre sus fronteras de clase como en 1973; aunque la conciencia de esa división no basta ya para devolver popularidad a la dic-

tadura personal, es suficiente para restar a una parte de la oposición la obsesiva impaciencia de terminar con ella que se necesitaría sin duda para derribarla.

La trayectoria chilena es así a la vez paradigmática (en cuanto allí los conflictos sociales subyacentes al drama político de las décadas recientes se exhiben con una nitidez y transparencia sin igual) y atípica en cuanto, quizá por esa misma razón, sólo en Chile no se ha producido hasta hoy el reflujo de la ola de despotismo militar que no logró retener bajo su control al resto de ese Cono Sur en el que se había afirmado con perfiles más nítidos y vigorosos que en ninguna otra parte.

El camino hacia la dictadura militar había sido por otra parte distinto en cada una de las otras dos naciones que lo integraban. En **Uruguay** la transferencia del poder a los blancos en 1958, y su retorno a los colorados en 1966, habían reflejado el descontento provocado por el estancamiento económico, que bloqueaba cualquier perspectiva de avance social, pero a la vez la resistencia a buscar soluciones a él fuera de los cauces tradicionales, pese al deterioro creciente del orden sociopolítico, que los partidos históricos, fragmentados en clientelas que canalizaban los beneficios cada vez más ilusorios del *welfare state*, eran ya incapaces de frenar.

El presidente colorado Pacheco Areco buscaba devolver vigor al orden político uruguayo mediante un retorno a la tradición a la vez aplebeyada, militarista y represiva por largo tiempo adormecida en la memoria colectiva de su partido. La agudización de los conflictos que promovió con ese objeto favorecía también tanto a la izquierda insurreccional, cuya expresión era el diminuto movimiento tupamaro, como a la político-electoral, que con vistas a las elecciones de 1971 se había organizado en un Frente Amplio que postulaba la candidatura del general Líber Seregni, de bien conocidas simpatías coloradas: la crisis largamente madurada parecía así acercarse a su punto resolutivo.

En 1970 los tupamaros agregaron a las acciones aparatosas e incruentas, con las que habían ganado vastas aunque vagas

simpatías, tomas temporarias de poblaciones y secuestros que eran su respuesta al uso creciente de la tortura por las fuerzas de represión. El de Dan Mitrione, un asesor norteamericano de la policía uruguaya a quien se atribuía responsabilidad en ello, y que iba a ser muerto por sus captores, permitió al presidente dar a su crónico conflicto con los sindicatos y el estudiantado universitario el diapasón de una lucha épica contra las fuerzas de la subversión.

Se llegó así a los comicios de 1971, en los cuales el electorado debía pronunciarse sobre una reforma constitucional que haría posible la reelección de Pacheco Areco, quien por otra parte postulaba como su sucesor, en caso de ser rechazada aquélla, a Juan M. Bordaberry, un hacendado de reciente pasado blanco y escaso peso político. La reforma fue rechazada, y la izquierda recibió el apoyo de un quinto del electorado, casi todo él concentrado en la capital; Bordaberry alcanzó, en parte gracias a ello, una ajustadísima victoria (manchada por añadidura por alegaciones de fraude en los cómputos) contra el de la fracción ahora mayoritaria del partido blanco, Wilson Ferreira Aldunate, cuyo pasado irreprochablemente conservador no le había impedido constituirse en crítico enérgico del deslizamiento del régimen uruguayo en una dirección cada vez más autoritaria y represiva.

El resultado electoral estaba lejos de dar firme respaldo al nuevo presidente, que lo buscó cada vez más abiertamente en el ejército. Cuando en 1973 la acción militar liquidó la amenaza tupamara con una fulmínea eficacia que hizo sospechar a muchos que sus anteriores fracasos no habían sido del todo indeliberados, de inmediato arreció la presión de la entera clase política por devolver al ejército a su posición tradicionalmente marginal; la respuesta fue un ultimátum militar que impuso al presidente la disolución del congreso, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional dominado por las fuerzas armadas y la adopción de un programa de gobierno establecido por éstas.

Tras dos semanas de huelgas y disturbios en Montevideo, Uruguay pasó así a ser gobernado por un régimen esencial-

mente militar, que barrió con toda expresión ideológica o cultural independiente, reprimió eficazmente cualquier acción sindical y política, y usó sistemáticamente el encarcelamiento, acompañado a menudo de torturas atroces, como medio de disciplinamiento de sus gobernados (al final de su gestión un quinto de los varones uruguayos adultos había pasado por la prisión). Una nota original de ese estilo represivo era un legalismo sin duda un tanto surrealista en sus modalidades, y una moderación en el empleo de las desapariciones seguidas de muerte que contrastaba con los usos dominantes en Chile y más aún en la otra orilla del Plata (precisamente las más escandalosas, que iban a costar la vida de eminentes exiliados políticos de ambos partidos tradicionales, tendrían por teatro a Buenos Aires).

La eliminación violenta de toda protesta popular permitió esta vez llevar adelante la rectificación de la política económica intentada en vano desde 1958, con resultados sin embargo escasamente brillantes; la prosperidad aportada por el crédito fácil fue en Uruguay más pálida y breve que en Chile. La baja catastrófica del nivel de vida, que golpeaba a una sociedad ya víctima de un largo estancamiento, encontró su respuesta más dinámica en la emigración de las generaciones jóvenes; mientras largas colas se formaban frente a la sección consular de la embajada norteamericana, los emigrantes a Australia llegaron a fletar enteros transatlánticos... No es sorprendente que esa sociedad tan debilitada fuese incapaz de ofrecer respuestas vigorosas a un régimen que estaba destruyendo todo lo que había dado sustancia al orgullo nacional de los uruguayos. Pero en ningún sector encontraba el régimen militar los apoyos que el de Pinochet halló en Chile (aun la clase terrateniente, que había creído llegada su hora, descubría que la sobrevaluación monetaria socavaba sus márgenes de ganancia).

El fin de esa anémica prosperidad dio urgencia al problema de la transición hacia un régimen en ruptura menos violenta con las tradiciones políticas uruguayas, que desde el comienzo había preocupado más a los responsables de esa experien-

cia que a sus colegas chilenos o argentinos (ya en 1976, cuando Bordaberry propuso la adopción permanente de un régimen autoritario que prescindía de los partidos, los militares lo apartaron de la presidencia, en la que colocaron sucesivamente a dos sobrevivientes del elenco del doctor Terra, que aspiraban a asegurar un lugar en el nuevo orden a los partidos tradicionales).

Era ésa la solución adoptada por un texto constitucional que transformaba en poder cogobernante a las fuerzas armadas, y que debía ser sometido en noviembre de 1980 al veredicto del electorado. El gobierno no tenía duda de que él sería aprobado; no sólo las fuerzas políticas disidentes u opositoras habían sido reducidas a la impotencia, sino aun los enemigos de la situación terminarían sin duda por otorgar su resignada aprobación, ya que los gobernantes habían hecho claro que un rechazo provocaría la prolongación indefinida del régimen de excepción. Pero el voto negativo alcanzó la mayoría, y ello (como sin duda los votantes habían previsto muy justamente) precipitó al régimen en una crisis mortal. Ganaron ahora preponderancia en las fuerzas armadas las tendencias favorables a una apertura política menos restringida; en septiembre de 1971 ocupaba la presidencia el general Gregorio Álvarez, que ya en octubre devolvió existencia legal a los sindicatos; en noviembre de 1982 las elecciones para designación de nuevas autoridades de los partidos reconocidos (los dos tradicionales y uno de derecha católica) se transformaron en un nuevo plebiscito sobre la experiencia autoritaria, de nuevo perdedora. El partido blanco superaba al colorado, y dentro de él la fracción leal a Ferreira Aldunate, que se había transformado desde el exilio en el más conspicuo adversario de la dictadura, era fuertemente mayoritaria; también en el partido colorado las facciones menos comprometidas con el régimen llevaban la delantera.

Ante ese resultado, el poder militar aceptó acordar con la oposición nuevos términos para la transición; ciertas funciones políticas, más restringidas que las reservadas a las fuerzas armadas por el rechazado proyecto constitucional, permane-

cerían en manos de éstas sólo durante el primer año de gobierno constitucional, y, aunque todos los movimientos políticos y sindicales eran devueltos a la legalidad, seguirían pesando prohibiciones contra dirigentes que habían sufrido condena judicial o abandonado el país mientras se hallaban sometidos a proceso (las dos víctimas más conspicuas de estas exclusiones eran el general Seregni, candidato del Frente Amplio en 1971, y el doctor Ferreira Aldunate, jefe de la fracción blanca mayoritaria). Tanto el partido colorado como el Frente Amplio aceptaron esos términos, no así el partido blanco, que se movilizó en favor de Ferreira Aldunate, esperando imponer una democratización sin negociaciones a través del dramático retorno ilegal de éste a Uruguay.

Ello no iba a lograrse: los otros alineamientos políticos, sin duda poco deseosos de devolver a la arena política a su más temible rival a través de un episodio que lo consagraría como la figura clave de la transición a la democracia, prefirieron atenerse a los términos del acuerdo previo. Ante el fracaso de su ataque frontal, los blancos se resignaron a reemplazar a Ferreira Aldunate con otro candidato (el Frente Amplio por su parte ya había renunciado a postular a Seregni). Ello facilitó la victoria en las elecciones de noviembre de 1984 del candidato colorado Julio María Sanguinetti, identificado con las posiciones más decididamente opositoras dentro de su partido, pero considerado con todo menos conflictivo que sus rivales por las fuerzas armadas.

Los resultados electorales, que repetían casi exactamente los de 1971, inauguraron una restauración más completa de lo que nadie hubiera creído posible del marco institucional que en vísperas de la dictadura todos habían tenido por insalvablemente agotado. En parte facilitaba esa restauración el recuerdo de las calamidades que siguieron a la toma del poder por los militares, desde la universal opresión política e ideológica hasta la penuria que su gestión había dejado en herencia. En una consecuencia sólo aparentemente paradójica, la memoria de ese pasado aún quemante hizo más fácil tolerar las

concesiones que el poder civil seguía ofreciendo a las fuerzas armadas (entre ellas una amnistía a los culpables de atrocidades), ya que éstas parecían el precio necesario de su aquiescencia a la democratización.

Quizá aún más favorable a esa restauración era el debilitamiento de las fuerzas sociales cuya militancia en el anquilosado aparato institucional había sido tan poco capaz de afrontar antes de 1973. Este es en parte consecuencia de las penurias sufridas en la etapa militar, apenas aliviadas en Uruguay por una prosperidad más limitada y efímera que en Chile o Argentina, pero refleja también un proceso más prolongado de involución demográfica, agravado por la emigración. El resultado (feliz para el poder político) de esa persistente anemia de la sociedad es que en Uruguay ha sido posible adoptar una firme política económica que asegura un crecimiento lento pero sostenido y disminuye gradualmente la tasa inflacionaria, que en otras sociedades más dinámicas hubiese sin duda sucumbido bien pronto a la impaciencia de actores sociales más vigorosos. Este contexto excepcional hace posible también una resurrección de fidelidad casi arqueológica no sólo al marco institucional sino al estilo de vida y los supuestos ideológicos heredados de un pasado más feliz, que ofrece testimonio de la siempre viva nostalgia de los uruguayos por ese modesto milagro que fue en su convulsionada historia la ya remota era batllista.

El camino que llevó a Uruguay a la dictadura militar y de ella a la restauración democrática fue mucho más rectilíneo que el que paralelamente iba a emprender **Argentina**. Todavía en 1970 el fracaso del régimen militar instalado en 1966 no era allí universalmente tenido por irreversible, y el general Levingston, reemplazante de Onganía, buscó devolverle vigor dándole la orientación nacionalista que habían propugnado los opositores a la política de su predecesor.

Esa reorientación económica fue seguida del retorno de la inflación, con su habitual cortejo de devaluaciones, que ali-

viaron la situación del sector exportador, pero no contribuyeron a crear entre las clases populares un clima favorable para este ensayo de populismo militar y autoritario. El apoyo militar a Levingston, desde el comienzo reticente, le iba a ser retirado en 1971, cuando un nuevo tumulto popular en Córdoba terminó de persuadir a sus colegas de que era peligroso prolongar mucho más la aventura abierta en 1966; el general Lanusse, que había venido sosteniendo ese punto de vista, fue puesto al frente del gobierno para presidir la transición al régimen representativo.

Contaba para ello con un prestigio entre sus camaradas que, luego el fracaso de sus aliados de 1966, lo estaba transformando en indiscutido caudillo militar, pero la tarea que había tomado a su cargo no se anunciaba fácil. Aunque postulaba un acuerdo con el peronismo, el proyecto de transición favorecido por Lanusse aspiraba a excluir a su jefe del Gran Acuerdo Nacional que debía poner fin a las discordias argentinas, y no podía ya contar para ello con el apoyo de los veteranos del antiperonismo, convencidos ahora de que sin la participación personal de Perón cualquier solución política sería efímera, e igualmente persuadidos luego de 1966 de que los mayores peligros para el futuro de las instituciones republicanas no provenían del desterrado de Madrid, sino de las fuerzas armadas.

En favor de su línea negociadora, el presidente invocaba el inquietante crecimiento de los movimientos clandestinos, consecuencia a su juicio de la clausura de los canales legales de acción política decidida en 1966. Entre esos movimientos los de orientación peronista (Montoneros, Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas Revolucionarias) que crecían más rápidamente que el Ejército Revolucionario del Pueblo, de obediencia trostkysta, sin renunciar al atentado como instrumento de lucha contra corrientes más tradicionales del peronismo (en particular la dirigencia sindical del centro y derecha) multiplicaban ahora secuestros que iban a permitirles reunir un nada desdeñable fondo de guerra. Pese a que, por designio o torpeza, esas acciones tenían a veces desenlaces luctuosos, ellas no pro-

vocaban una repulsa muy viva ni aun entre las clases conservadoras; la serenidad muy poco profética con que la opinión pública recibió la incorporación del asesinato a los instrumentos normales de lucha política aparece retrospectivamente como uno de los rasgos más sorprendentes de esta etapa argentina.

Al proponer una salida política que debía incluir al peronismo pero excluir a Perón, y desde luego a la franja guerrillera del movimiento, Lanusse venía a favorecer la coincidencia entre éstos. Perón rehusó a renunciar espontáneamente a cualquier retorno al poder, pero también a condenar a las organizaciones clandestinas, renunciando antes de la victoria a un instrumento de lucha que el jefe adversario presentaba como el que debía decidir al ejército a tomar el camino de las negociaciones.

Por el contrario, a la vez que ofrecía una afectuosa bienvenida en el movimiento peronista a las organizaciones guerrilleras, se lanzaba a un *aggiornamento* ideológico que lo acercaba a las posiciones de la juventud radicalizada que, ganada por el ejemplo de la lucha guerrillera, estaba irrumpiendo en el peronismo, y se negaba a alarmarse ante el «trasvasamiento generacional» que ésta propugnaba para imprimir una orientación más decididamente revolucionaria al movimiento que llevaba su nombre.

Dada la indulgencia con que la opinión recibía las innovaciones tácticas e ideológicas de las organizaciones clandestinas, el apoyo que Perón les brindaba no le impidió consolidar su acercamiento con las otras fuerzas políticas, que tenía en su base la coincidencia de radicales y peronistas en apoyo de la restauración constitucional, ya alcanzada cuando el gobierno de Onganía había parecido consolidarse. En noviembre de 1972 un primer retorno triunfal a Argentina lo iba a mostrar presidiendo con admirable bonhomía multitudinarios banquetes políticos que convocaban a los que habían sido sus más enconados adversarios. Sin quebrar su entendimiento con el radicalismo, organizó una coalición que no lo incluía, e integraba en cambio en torno al peronismo a partidos menores de

centro, derecha tradicional e izquierda moderada, y tomó a su cargo la selección de los candidatos peronistas incluidos en sus listas electorales.

Para la presidencia escogió al doctor Cámpora, un veterano parlamentario de la primera etapa peronista caracterizado por una legendaria docilidad. Los sindicatos eran los grandes perdedores en las listas de candidatos para el Congreso nacional y cargos provinciales; la preocupación de Perón por limitar su peso en el movimiento explica en parte la generosidad con que abrió acceso a posiciones a la izquierda y sus prolongaciones insurreccionales; la Juventud Peronista, expresión política del movimiento montonero, recibía (lo mismo que el sector sindical) un quinto de los cargos legislativos, y figuras cercanas a esa izquierda eran postuladas para ocupar importantes gobernaciones provinciales (comenzando por la de Buenos Aires).

Perón retornó a España a esperar confiadamente los resultados de la jornada electoral de marzo, para las cuales el gobierno militar, reformando de hecho la constitución, había introducido la elección presidencial directa con *ballotage,* destinada a hacer más difícil el triunfo de la coalición peronista, que no creía pudiese alcanzar mayoría absoluta. Pero el doctor Cámpora estuvo tan cerca de conseguirla que los demás partidos renunciaron a disputar su triunfo en una segunda elección; por añadidura el Frente Justicialista se aseguraba cómodas mayorías en ambas cámaras del congreso.

Aunque ese triunfo no reflejaba ningún avance sustancial de la base electoral peronista sobre la de las elecciones parlamentarias de 1965, lo que había cambiado radicalmente desde entonces era la actitud del resto del espectro político hacia el movimiento peronista, que no sólo le permitió aliarse con movimientos menores cuyos votos la llevaron muy cerca de la mayoría absoluta, sino –lo que era aún más importante– aseguró que los derrotados de la jornada reconocerían sin reticencias la plena legitimidad del gobierno ungido en ella, que ni aun sus victorias mucho más abrumadoras habían asegurado al primer peronismo.

Ese cambio favorable era contrarrestado por otros que lo eran mucho menos. Las ambiciones contrastantes del movimiento sindical y de la nueva izquierda identificada con los movimientos clandestinos debían crear dificultades muy serias. Perón, que lo advertía muy bien, concedió gravitación creciente a un grupo sin base política propia, en el que quizá por ello mismo esperaba apoyarse para controlar al movimiento en una etapa que preveía muy difícil. El jefe de este grupo era el señor José López Rega, un ex policía que en la corte del exilio había reunido las funciones de secretario privado con las de astrólogo y ayuda de cámara, y que con el apoyo de la tercera esposa de Perón iba a ocupar el Ministerio de Bienestar Social en el gabinete del doctor Cámpora.

El ascenso de López Rega preocupaba menos a la opinión que la ya desatada lucha por el poder entre la nueva izquierda y el resto del movimiento peronista, reflejada en la incesante movilización por aquélla de vastas masas de jóvenes y adolescentes encuadradas en las filas de la Juventud Peronista. Pero en el accionar de la izquierda esas acciones tumultuosas aparecían menos eficaces que las simpatías de que gozaba tanto en varios gobiernos provinciales como en el entorno inmediato del doctor Cámpora; contaba sobre todo con ellas para consumar el trasvasamiento generacional que Perón había reconocido necesario.

Esa ambición suscitaba ahora en sectores cada vez más amplios la alarma que no habían inspirado hasta entonces el extremismo táctico e ideológico de la izquierda. Ésta, que parecía no advertirlo aún, decidió hacer del retorno definitivo de Perón a Argentina la ocasión para consagrar su posición central en el nuevo régimen peronista. Para ello se proponía adueñarse de la plataforma desde la cual el retornante debía hablar al país, y rodearlo como su nuevo séquito apostólico ante un público que se contaría por millones; si esperaba encontrar alguna resistencia de los sectores tradicionales del peronismo, sus anteriores experiencias no la incitaban a anticipar ninguna demasiado temible.

Se llegó así a la jornada del 20 de junio de 1973, en que –ante la más vasta multitud jamás congregada en la historia argentina– las tensiones que anidaban en el movimiento restaurado se desencadenaron en una batalla campal en torno al aeropuerto, mientras el avión que traía al desterrado y su comitiva debía ser desviado. La izquierda fue en ella clamorosamente derrotada por grupos de derecha peronista con raíces en el aparato de seguridad de la etapa anterior a 1955, auxiliados por las bandas improvisadas por el señor López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, ya más eficaces que los elementos de acción al servicio de la dirigencia sindical.

Perón, que no hizo misterio de su identificación con los vencedores de Ezeiza, denunciaba ahora a los vencidos como un cuerpo extraño infiltrado en el movimiento para desviarlo a objetivos que nunca habían sido los suyos; la negativa de la izquierda a ver en esos ataques otra cosa que un reflejo del influjo alcanzado por López Rega sobre su venerado líder no impidió que ellos terminasen de aislarla tanto en el peronismo como frente al resto de las fuerzas políticas y sociales, y sus ocasionales recaídas en la violencia agravaban aun más ese aislamiento. Bajo el signo de la lucha contra los infiltrados comenzó una metódica depuración cuya primera víctima fue Cámpora, quien se apresuró a dimitir; el yerno del señor López Rega y presidente de la Cámara de Diputados, que lo reemplazó interinamente, la extendió al congreso y las administraciones provinciales, y ella proseguiría aún más impetuosamente luego de la elección triunfal de la fórmula Perón-Perón, que en octubre de 1973 reunía los sufragios de dos tercios del electorado, pese a que la decisión del general de hacerse acompañar en ella por su esposa había despertado muy escaso entusiasmo tanto dentro como fuera del peronismo.

Para entonces había comenzado a actuar un terrorismo de derecha que la opinión vinculaba al ministro López Rega, mientras la izquierda, cada vez más acorralada, retornaba también ella de modo sistemático a los atentados personales; a ello iba a seguir la ruptura clamorosa entre ésta y Perón, en

el marco de la manifestación del primero de mayo de 1974, que los simpatizantes de la guerrilla y la Juventud Peronista abandonaron entre los insultos del jefe del movimiento. Para entonces el desafío de la izquierda había perdido buena parte de su eficacia, pero los métodos usados para contenerlo habían provocado ya una degradación gravísima del clima político. No era con todo ese problema (que no parecía advertir como tal) sino el que le planteaba su base sindical el más grave que debía afrontar la restauración peronista.

Lo iba a poner en primer plano el agotamiento de la expansión económica inducida en 1973 por la masiva redistribución de ingresos decidida por el gobierno peronista. Ésta se había acompañado de una expansión productiva que dio momentánea eficacia al rígido control de precios y salarios establecido de acuerdo con la consigna de «inflación cero» lanzada por Perón. Mientras la agricultura de exportación, favorecida por una buena coyuntura internacional, proseguía un avance que disipaba la amenaza inmediata de una crisis del sector externo, la emisión monetaria, que en algo más de un año duplicó el circulante, obligó a reiterados reajustes de precios y salarios, insuficientes estos últimos para mantener los niveles reales de mayo de 1973. Unas semanas después de su ruptura con la izquierda, un Perón ahora más entristecido que colérico debió rogar a una multitud obrera que moderase sus impaciencias; de lo contrario abandonaría la presidencia, y junto con ella la conducción de un esfuerzo de reconstrucción en la concordia que debería confesar fracasado. Era, aunque él no lo sabía, la melancólica despedida de un moribundo. Su muerte, el 1 de julio de 1974, provocó un instintivo retorno a la concordia, reflejado en el crédito de benevolencia abierto a su viuda que lo reemplazó en la presidencia.

Desde ella, María Estela Martínez de Perón iba a imponer las soluciones de la derecha peronista. Las acciones terroristas contra la izquierda (y no sólo por cierto la guerrillera) culminaron en una campaña de exterminio, a la que los movimientos insurreccionales respondieron retornando a la acción

clandestina, que incluyó ahora, a más de secuestros con rescates millonarios, asesinatos de industriales insensibles a las demandas laborales. Finalmente la guerrilla peronista, ahora unificada en el movimiento montonero, adoptó la táctica lanzada primero por el Ejército Revolucionario del Pueblo (trotskysta), en una campaña de atentados indiscriminados contra oficiales de las fuerzas armadas que debía incitarlas a derrocar el gobierno de la señora Perón.

La violencia creciente debilitó las resistencias de la opinión pública a un nuevo golpe, al que empujaba también el agravamiento de la situación económica. La rectificación de la política económica se tornaba cada vez más urgente, y en junio de 1975 el señor Celestino Rodrigo ocupó la cartera de Economía por consejo del señor López Rega, y con un plan estabilizador que apelaba a la vez a la recesión y la caída del salario real. La oposición de los sindicatos fue tajante, y el gobierno, que no había temido aislarse de todas las fuerzas políticas excepto la derecha peronista, se descubrió incapaz de doblegarla; el golpe decisivo provino de las fuerzas armadas, que se negaron a colaborar en la represión de la protesta obrera.

A partir de entonces el gobierno se transformó en prisionero de los sindicatos, cuyo veto hizo imposible cualquier medida contra una inflación ya incontenible, que a comienzos de 1976 bordearía el 1000 por 100. Era intención de las fuerzas armadas (que en noviembre de 1975 habían sido puestas a cargo de la represión de los movimientos guerrilleros, que las bandas de la derecha peronista y los sindicatos, interesadas sobre todo en la eliminación de sus adversarios políticos, no habían logrado completar) permitir que esa penosísima agonía se prolongase hasta que la resignación a un nuevo golpe se tornase universal; en marzo de 1976, juzgando que ese objetivo se había logrado, tomaban el poder para dirigir desde él un proceso de reorganización nacional para el cual no fijaban límite temporal alguno.

Esta vez, más claramente aún que en 1966, eran las fuerzas armadas como institución las que tomaban el poder; su ges-

tión no iba a ser facilitada por ello, ya que las divisiones entre armas y tendencias iban a trabar constantemente su marcha, y restar eficacia al sumario aparato institucional a través del cual iban a ejercer el poder. Éste tenía a su frente a la Junta de comandantes de las tres armas, que designaba al presidente (en 1976 el general Jorge Rafael Videla, que logró primero retener la comandancia en jefe del ejército, y luego y más dificultosamente transferirla a su aliado el general Viola) y legislaba con la colaboración de una Comisión de Asesoramiento de nueve miembros, paritariamente distribuidos entre las mismas armas, que debían expedirse por unanimidad. Esos rasgos, que sumaban a los inconvenientes de la autocracia los del parlamentarismo más extremo, se acompañaban en los niveles intermedios de los avances de una suerte de anarquía feudal.

Éstos iban a ser particularmente rápidos en la etapa inicial, en el marco de la despiadada campaña destinada a terminar, más aun que los movimientos clandestinos (esa tarea, según los nuevos gobernantes sabían muy bien, estaba ya muy avanzada), con la alarmante simpatía que por ellos había aflorado en tantos sectores impensados. Para lograrlo se creía necesario distribuir castigos inolvidables, en un indiscriminado exterminio de activistas y simpatizantes que golpeaba con particular dureza a las generaciones jóvenes. No sólo esa represión, que, puesto que se quería descentralizada, quedaba a cargo de ejecutores locales dotados de muy amplia autonomía, ofrecía terreno fértil para deslizamientos neofeudales: los favoreció además la falta de unanimidad en la cúspide, que aseguraba que siempre habría en ella protectores para los responsables de los peores excesos en el salvajismo represivo. No es extraño tampoco que esos deslizamientos se hicieran pronto sentir en otras áreas de gobierno, ni que se orientaran a veces a satisfacer las aspiraciones económicas, y no sólo los objetivos político-ideológicos, de esos administradores incontrolados de poderes deliberadamente indefinidos.

La ausencia de cohesión en la corporación gobernante se reflejó también en una política económico-social afectada por

graves contradicciones. El doctor José Alfredo Martínez de Hoz, llevado al Ministerio de Economía por el general Videla, era partidario decidido del liberalismo económico, pero su libertad de acción aparecía trabada en aspectos esenciales. Así, las fuerzas armadas, que a partir de la primera administración peronista habían venido transformando a no pocas empresas del Estado en feudos cerrados, frustraron eficazmente la privatización de éstas, favorecida por el ministro; temerosas de las consecuencias de un descontento social demasiado generalizado declararon por añadidura intolerable cualquier alza persistente de la desocupación provocada por la apertura rápida de la economía.

Tanto ésta como la reorganización profunda de las empresas del Estado quedaban pues descartadas; el instrumento principal que quedaba disponible para la transformación que Martínez de Hoz proclamaba urgente era el monetario. Luego de dos años de inmitigada austeridad, que gracias al continuo avance de la agricultura exportadora permitieron equilibrar la balanza de comercio, la holgura financiera comenzó a ser utilizada para mantener una alta paridad para el peso, que a juicio del ministro daría el golpe de gracia a las industrias antieconómicas. Mientras las menos concentradas languidecían (las productoras de bienes de capital y de consumo duraderos seguían protegidas por altísimos impuestos de importación en esos rubros) y se expandía frenéticamente el aparato mercantil y financiero, al que se reorientaban no pocos empresarios y trabajadores industriales (alejando así el espectro de la desocupación, a lo que contribuía también la acrecida emigración de profesionales y trabajadores calificados) las exportaciones agrícolas sufrían las consecuencias de la sobrevaluación de la moneda nacional, y la balanza de comercio entraba en déficit crónico, equilibrado en la de pagos gracias al constante ingreso de nuevos créditos externos.

Esa bonanza de base tan frágil fue con todo suficiente para ganar al régimen militar la resignada aceptación de sus gobernados, que la agradecían también que luego de dos años lar-

gos de matanzas el clima de terror comenzara a aliviarse; fue ese clima colectivo el que hizo posible el uso político del campeonato mundial de fútbol celebrado en Argentina en 1978, en cuya última jornada triunfal el general Videla fue cordialmente recibido por la multitud.

Pese a ello, las divisiones en la cúpula persistían, y en 1980 no iba a ser fácil a Videla, cuyo mandato cesaba, asegurar la sucesión para el general Viola, partidario como él de una cautelosa apertura política. Ya para entonces, por otra parte, el régimen comenzaba a afrontar las consecuencias de las atrocidades que habían marcado su etapa de consolidación; en 1979 una misión de la Organización de Estados Americanos visitaba Argentina y preparaba un informe devastador sobre los derechos humanos en el país. En 1981 el brusco agravamiento de la situación económica, originado en el fin del crédito externo y reflejado en una crisis gravísima del sistema bancario nacional, fue seguido de un retorno a la inestabilidad política; en noviembre Viola era reemplazado por el general Galtieri, partidario de un retorno a las líneas originarias del experimento militar.

Su encumbramiento había sido apoyado por la marina de guerra, a la que el nuevo mandatario había prometido invadir las islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. Tornaba aún más atractiva la empresa el creciente descontento causado por la adversidad económica, que hubiera sido ya imprudente combatir por el terror, y que la recuperación triunfal de las islas prometía trocar en apoyo unánime al régimen militar. No era la primera vez que la tentación de la aventura externa se había hecho sentir: a fines de 1978 Argentina estuvo muy cerca de buscar en la guerra la solución a su largo litigio de límites con Chile; sólo una pública oferta de mediación pontificia, acompañada de una amenaza de dimisión del general Videla, pudo entonces evitarla.

Contra lo que habían esperado sus promotores, ni la toma de las islas, recibida con una explosión de entusiasmo popular aún más intensa de lo que éstos habían anticipado, era

aceptada por Londres como un hecho consumado, ni los Estados Unidos favorecían a Argentina en el conflicto. Mientras la intransigencia del gobierno militar condenaba al fracaso a negociaciones que hubieran marcado el fin del dominio británico sobre las islas, la flota británica avanzaba sin prisa pero sin pausa hacia el disputado archipiélago, que iba a reconquistar pese a una resistencia que sólo alcanzó eficacia en lo que tocaba a la fuerza aérea. La capitulación de la guarnición argentina en las islas provocó la caída del general Galtieri, que en vano había buscado en el Este los apoyos que los Estados Unidos le habían negado (mientras Fidel Castro organizaba para su canciller una recepción triunfal en La Habana, la URSS se abstenía de ofrecer auxilios más tangibles a la causa argentina).

Convicto de criminal incompetencia, el régimen no pudo ya negociar los términos de la salida electoral que necesitaba con urgencia. La catástrofe militar, unida a una crisis económica cada vez más grave, dispuso finalmente a la opinión argentina a prestar oídos al clamor de los sobrevivientes de las recientes matanzas, que habían horrorizado al resto del mundo: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se encontraron súbitamente rodeadas de una devoción poco menos que universal, mientras se hacía igualmente universal la convicción de que la crisis argentina había alcanzado tales extremos que, más que un retorno de rutina al orden constitucional, se requería un nuevo comienzo político, en ruptura total no sólo con el régimen establecido en 1976, sino con el largo medio siglo abierto en 1930, que aparecía ahora como un lento pero inexorable avance hacia el abismo.

Así lo advirtió con admirable lucidez el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, al ofrecerse como alternativa al pacto sindical-militar, que según denunciaba unía contra él a las fuerzas que, en concordia o discordia, habían dominado la vida argentina desde 1945. Frente a un peronismo que creía que le bastaba presentarse al comicio para levantarse con el poder, iba a alcanzar una victoria más

holgada que la que en marzo de 1973 había devuelto a ese peronismo el gobierno.

Pero el nuevo presidente parecía entender que ese nuevo comienzo no requería un redimensionamiento de las fuerzas sociales e institucionales que habían dominado en el anterior medio siglo, sino sólo su adaptación al marco de la democracia pluralista; como pronto iba a advertirse, esas fuerzas (desde los sindicatos que un proyecto presidencial intentaba reorganizar sobre esas líneas, hasta las fuerzas armadas, que el presidente esperaba habrían de depurarse espontáneamente de los mayores responsables de las atrocidades pasadas) se rehusaban a encarar esa adaptación.

Mientras el informe de la Comisión presidencial sobre la desaparición de personas, y luego el juicio a los comandantes en jefe de la etapa militar procuraban despejar el siniestro legado de ésta, el gobierno quedó enzarzado en un conflicto crónico con los sindicatos, que no había logrado reformar por vía legislativa. Abrumado por la deuda externa legada por el régimen anterior (particularmente alta en Argentina debido al desorbitado programa de rearme), su esfuerzo por aumentar y luego mantener el nivel de los salarios reales, que no desarmó la hostilidad sindical, para mediados de 1985 estaba llevando a la inflación a niveles cercanos a los de la última etapa de gobierno de Isabel Perón.

La respuesta fue la adopción del Plan Austral, que renunciaba a la emisión sin respaldo, y encontró un eco favorable inesperadamente unánime y fervoroso. Pero su éxito a largo plazo hubiese requerido una reforma del sector estatal, y en particular de las empresas públicas, cuyos déficits habían crecido durante la gestión militar; los esfuerzos fueron en este aspecto esporádicos y poco eficaces. Mientras en las elecciones parciales que siguieron a la introducción del Plan Austral el partido ahora oficial conservaba su mayoría, dos años después la falta de un decidido rumbo socioeconómico y el retorno de la inflación otorgaban una igualmente ajustada al peronismo.

La reestructuración de las fuerzas políticas anunciada por la victoria radical de 1983 no se ha consumado, pero ello no parece amenazar por el momento la estabilidad del régimen constitucional, pese a que las fuerzas armadas no se reconcilian con la desautorización de su gestión pasada (un par de golpes fracasados parecen confirmarlo). Mientras tanto la sociedad argentina no cesa de transformarse sobre líneas que necesariamente restan fuerza a los grandes antagonistas de la etapa pasada; así, al impedir los sindicatos la reestructuración del sector público, entre cuyos trabajadores encuentran ahora sus apoyos más sólidos, aceleran el deterioro no sólo de las empresas sino también de los servicios públicos; las fortalezas que defienden con éxito son así inexorablemente corroídas por ese mismo éxito.

Mientras en Argentina, como en el resto del Cono Sur, la gestión del despotismo militar implantado en la década pasada se cierra con un balance socioeconómico tan negativo como el político, la más larga trayectoria del autoritarismo militar brasileño sugiere uno más balanceado. En **Brasil** ese mismo año de 1969 que consagró el triunfo de la versión más dura de ese autoritarismo consumó a la vez la transición entre lo que había sido tan sólo una recuperación económica cíclica luego de la recesión de mediados de la década, y lo que había de llamarse milagro brasileño.

La victoria de la línea dura, que pareció hacerse irreversible al ocupar la presidencia del general Garastazu Medici, proveniente de los servicios de inteligencia, no logró eliminar del todo el influjo en las altas jerarquías militares de la corriente identificada con la memoria de Castelo Branco, que prefería a una dictadura militar permanente la instalación de un régimen semi-representativo, controlado por una alianza de la cúpula militar y los sectores políticos más conservadores.

Sin duda un primer fracaso de ese proyecto había sido ya la causa de la crisis de 1968, provocada por la incapacidad de la derecha política para ganar elecciones aun con el apoyo del

régimen revolucionario. Pero no por ello la fracción militar ahora postergada había renunciado a aplicar de nuevo su proyecto en un momento más propicio, y –lo que era aún más notable– la victoriosa no osaba tampoco desautorizarlo: por el contrario, el general Garastazu Medici decía aspirar a transmitir el poder a autoridades plenamente constitucionales al cesar en su mandato en 1974. Y aun más significativo era que el congreso federal, disuelto por un acorralado Costa e Silva luego de la crisis de 1968, hubiese sido convocado de nuevo en 1970 bajo los auspicios de la línea dura; ese gesto confirmaba que aun la más extrema facción militar se mostraba más respetuosa de la tradición institucional brasileña que Getulio Vargas en su etapa semifascista.

¿Por qué? Sin duda influía en ello el nuevo clima mundial: aunque bajo el estímulo de la guerra fría los Estados Unidos habían promovido regímenes dictatoriales en tres continentes, la solución dictatorial nunca había recuperado la respetabilidad ideológica de que había gozado en la entreguerra; contra ella militaba además el menosprecio de los oficiales brasileños por el caudillismo político de base militar en que ven una manifestación típica del primitivismo hispanoamericano. Había por añadidura otras razones que hacían desaconsejable descorrer el último velo constitucional que ocultaba la esencia despótica del régimen brasileño: un despotismo desembozado, al consagrar el predominio faccioso de la fracción extrema del cuerpo de oficiales, amenazaría la estructura jerárquica de las fuerzas armadas, y arriesgaría provocar la reacción de todos los que se identificaban con ese marco jerárquico, comenzando desde luego por los que ocupaban en él el nivel más alto.

Esa satisfacción simbólica ofrecida al sector moderado no impidió la acelerada consolidación de un estado policíaco, en el que el aparato represivo, mal controlado por quienes ocupaban la cumbre del poder, estaba adquiriendo los recursos necesarios para transformarse en rival de éstos. Aunque ello plantearía problemas en el futuro, no los creó al gobierno de

Garrastazu Medici, del todo identificado con las orientaciones de la línea dura que controlaba ese aparato; mientras tanto las depuraciones que habían eliminado a los opositores más intransigentes, y la prudencia que inspiraba en los demás el clima de terror evitaron que la reanudación de la vida política desembocase en una crisis como las que habían frustrado las de 1965 y 1968.

Gracias a nuevas manipulaciones del sistema electoral, pero sobre todo al uso descarado de la intimidación de votantes y candidatos, las elecciones de renovación del congreso aseguraron en 1972 una sólida mayoría para el partido oficialista, y la casi nula libertad de iniciativas dejada a los parlamentarios privó de consecuencias inmediatas a la victoria de la oposición en los mayores centros urbanos.

A la vez la prosperidad cada vez más arrolladora restaba intensidad y por lo tanto eficacia al sentimiento opositor. Sin duda ella se repartía muy desigualmente, pero las víctimas principales de la política redistributiva del régimen militar no habían gravitado significativamente en la vida política brasileña ni aun en el marco menos restrictivo vigente hasta 1964; los grupos que entonces habían ofrecido su base política al centro y la izquierda (desde los sectores progresistas de las clases medias, que junto con el resto de ellas estaban ahora descubriendo los deliciosos tormentos de la civilización del consumo, hasta la *intelligentsia* que pese al oscurantismo ideológico del régimen veía ahora abrírsele nuevas posibilidades ocupacionales con niveles de ingresos impensables en el pasado, y los trabajadores de las industrias de punta, cuyos salarios subían más rápidamente de lo que disponían las prudentes pautas gubernativas) entraban a contar entre los beneficiarios menores del milagro brasileño; si ello no los inducía en ver con más favor al régimen militar, les daba más paciencia para soportarlo.

Las modalidades del milagro atenuaban también las tensiones entre sus mayores beneficiarios. La caracterización del régimen brasileño como «fascismo colonial», desde el comienzo

problemática, describía muy mal los rasgos básicos del que se estaba perfilando en el marco de la prosperidad. Sus protagonistas no son tan sólo, como quería esa caracterización demasiado sumaria, las empresas multinacionales conquistadoras de la economía nacional, y un Estado-gendarme que, opresivo en la esfera política, no aspira a participar en el control de la económica; si es verdad que aquéllas se expanden más rápidamente que la economía en su conjunto, por su parte el nuevo estado autoritario y represor sigue siendo, aún más que antes de 1964, un Estado empresario; por añadidura, pese a las lamentaciones de quienes se proclaman representantes de esa clase, los mayores empresarios brasileños encuentran también su lugar en la cumbre.

Un celebrado teórico de la dependencia latinoamericana, Fernando Henrique Cardoso, prefería ahora hablar, antes que de desarrollo dependiente, de desarrollo asociado; y en efecto, mientras la onda expansiva se mantuvo a un ritmo cercano al 10 por 100 anual, las tensiones entre los sectores dominantes del nuevo orden socieconómico brasileño, y entre éste y sus interlocutores externos, quedaban amortiguados por ese común impulso hacia adelante. La aproximativa concordia que reinaba en la cima, y el amortiguamiento de las tensiones que afectaban al resto de la sociedad brasileña eran algo más que el resultado coyuntural de una represión exitosa y una ola de prosperidad sin precedentes; por eso una vez calmada aquélla y disipada ésta no volverían a aflorar ya los mismos conflictos y los mismos antagonistas que habían dominado la escena antes de 1964.

La expansión que a fines de la década haría de la economía brasileña la octava entre las capitalistas estaba entonces introduciendo cambios tan vertiginosos como irrevocables en la estructura de la nación. La acelerada expansión industrial, que avanzaba de la producción de artículos de consumo duradero a la de bienes de capital y de insumos industriales, y se orientaba cada vez más a la exportación, a la que ofrecía una amplia gama de productos, desde los de cuero hasta arma-

mentos de alta tecnología, estaba consolidando al sur de São Pablo un vasto conglomerado urbano que iba a enmarcar -más completamente que nunca en el pasado- la experiencia de vida de los trabajadores, y completar así (más rápidamente de lo que en 1964 parecía posible) la transformación de la masa de migrantes de cercano origen rural que habían dado base tanto al populismo de Goulart como al paternalismo de Adhemar de Barros en una madura clase obrera industrial, en un proceso comparable a los que en el siglo anterior habían tenido por teatro la cuenca del Ruhr o la del Ohio.

En el Brasil centro-meridional la transformación social excedía por otra parte los límites de la ampliada clase obrera, y aun de la sociedad urbana: en parte en tierras que antes fueron de café, granjeros organizados en poderosas cooperativas sostenían la expansión de nuevos rubros de exportación (como la soja, de la que Brasil se ha transformado en el primer país exportador).

Si todo esto es verdad, es también innegable que, aun en ese centro-sur lanzado a una transformación acelerada, los efectos sumados de las desigualdades sociales que seguían agravándose, aunque menos dramáticamente de lo que afirmaban los críticos del régimen militar, y de un crecimiento demográfico cada vez más impetuoso, se reflejaban en contrastes de prosperidad y miseria imposibles de ignorar aun en las capitales del milagro. El crecimiento poblacional no se reflejaba tan sólo en el éxodo hacia las ciudades, que tenía entre otras consecuencias una suerte de urbanización de la pobreza: aceleraba también el avance de la franja agrícola pionera que cubre toda la historia brasileña. La actitud del régimen ante él era ambigua: por una parte celebraba que viniese a descomprimir a esa zona de alta tensiones sociales que es siempre el nordeste; por otra procuraba para esas migraciones específicamente obreras un lugar central entre las de las clases subordinadas, las de éstas vinieron a entrelazarse en el Brasil central y penetrado con más variable fortuna y mucho más costosos apoyos del Estado en la Amazonia.

La compatibilización de ambos avances parecía aún posible; la brutal marginación de las poblaciones indígenas era todavía capaz de abrir lugar para todos en el vasto interior, y por lo tanto la desorganizada penetración de mínimos agricultores pioneros podía seguir sirviendo, como en el pasado, de vanguardia para la conquista reglada del territorio por otros protagonistas más poderosos de la expansión agrícola.

He aquí un cuadro que aparece por fin realizar las esperanzas de que se había nutrido la proverbial ufanía brasileña. Pero, aunque esa gran ola expansiva estaba creando un Brasil nuevo, su economía seguiría tan vulnerable como en el pasado a los cambios de la coyuntura mundial. Aunque las exportaciones crecen de modo impresionante, gracias a una diversificación que atenúa el predominio del café en las agrícolas, y lleva a más del 50 por 100 la parte de las industriales, ese avance se acompaña del aún más impetuoso de las importaciones de bienes de capital y de insumos industriales, que –financiadas ya sea por la inversión extranjera, ya por el crédito externo– gravan negativamente sobre la balanza de pagos, hasta tal punto que una inflexión en los precios internacionales del café puede tener consecuencias tan temibles como cuando éste dominaba sin rivales la economía brasileña.

Los peligros de la vulnerabilidad externa se van a hacer sentir más pronto de lo esperado: la primera crisis del petróleo golpeaba con dureza a una economía que ha utilizado al máximo las oportunidades ofrecidas por la baratura de ese combustible, expandiendo su red de carreteras y su parque automotor y prefiriendo a la explotación más inmediatamente rendidoras. Ya en 1974 el general Ernesto Geisel, que sucede a Garastazu Medici, debe afrontar las consecuencias, que no pocos temen (o esperan) fatales para el experimento político que le toca ahora timonear. Pero éstas son aliviadas por la abundancia de crédito a bajas tasas de interés creada por la súbita alza del lucro petrolero; la deuda externa crece sin duda de modo alarmante, pero gracias a ello la economía crece también en 1974-78 a un ritmo más lento que en los años cen-

trales del milagro, pero todavía a un muy respetable 7 por 100 anual, y sin que se acelere considerablemente la inflación. Esos resultados aparecen aún más notables cuando se los compara con los de los países del Cono Sur (o también México o Venezuela); a diferencia de lo que ocurre en todos ellos, el endeudamiento será utilizado en Brasil para continuar la expansión del aparato productivo.

Ese impacto inesperadamente atenuado no podría ser entonces el factor decisivo en la resurrección del conflicto político. Ésta se produjo cuando el presidente Geisel se decidió por fin abordar la tan postergada apertura. La línea dura militar, que en 1974 no había podido impedir su elección (fruto de las manipulaciones de los acorralados sobrevivientes del castelismo desde su reducto del Ministerio de Guerra), iba a multiplicar los obstáculos en el camino del nuevo presidente, utilizando para ello el dominio que retenía del aparato de inteligencia y represión.

Por su parte el resurgente castelismo no logró tampoco ahora superar los obstáculos que en 1965 y 1968 se habían interpuesto ya en su camino; en noviembre de 1974 las elecciones de renovación legislativa colocaron al MDB opositor muy cerca de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados; el partido oficialista se mostraba de nuevo incapaz de constituirse en heredero político de la experiencia autoritaria. Ese resultado, que confirmaba las previsiones de la línea dura, exasperó la oposición de ésta, provocando un retorno a los peores usos represivos por parte de los organismos de inteligencia, que culminó con la muerte bajo tortura de un conocido periodista de São Paulo, Wladimir Herzog.

Esas tácticas eran ya incapaces de asegurar los resultados esperados: la agitación provocada por el caso Herzog transformó al cardenal Arns, arzobispo de São Paulo, en la figura central en la oposición de la Iglesia al régimen autoritario, en reemplazo del obispo de Olinda y Recife, Dom Helder Camara, marcado desde su lejana juventud por una inquieta vocación política y en etapas más recientes por un creciente radi-

calismo social; el relevo de esa figura irremediablemente marginal por quien era la encarnación misma del nuevo *establishment* eclesiástico era uno de los signos más claros de la vertiginosa ampliación del frente opositor.

Esa ampliación a la vez modificaba sutilmente el sentido de la acción opositora. Sin duda, el *establishment* rehusaba ahora a solidarizarse con la condena contra las tendencias más radicales, invocada por el régimen para justificar la brutalidad de la represión, pero estaba lejos de abrirles con ello un más amplio campo de influencia, y por el contrario las mediatizaba irremediablemente. Así, el ampliado consenso opositor que se afirmaba en el campo católico, aunque no repudiaba la llamada «opción privilegiada por los pobres» que definiría a la izquierda católica, reivindicaba en primer término el derecho de los brasileños a ver sus libertades y sus vidas mejor respetadas por quienes los gobernaban. La unificación de la opinión católica en torno a exigencias esencialmente políticas avanzaba paralelamente con mutaciones análogas de la opinión secular, y como éstas respondía en parte al agotamiento a escala mundial de las esperanzas revolucionarias por un momento reverdecidas en la década de 1960, pero reflejaba también la dificultad de seguir creyendo que las libertades formales aseguradas por la democracia burguesa eran vacías apariencias, luego de haber descubierto que podían ser literalmente un asunto de vida o muerte.

Con esos redefinidos objetivos el frente opositor iba a expandirse aún más de lo que se había creído posible, hasta transformar en centros de resistencia cada vez más militante contra la arbitrariedad represiva del régimen a los colegios de abogados, que habían sido y seguían siendo fortalezas del conservadurismo más tradicional. Y desde que la economía entró en una etapa más difícil, las tensiones entre los empresarios nacionales, el Estado y las empresas multinacionales comenzaron a provocar en los primeros una inesperada nostalgia por un orden político más abierto; cuando el crecimiento de la deuda externa se estaba tornando alarmante, una em-

presa tan costosa y poco prometedora como la colonización de la Amazonia comenzaba a parecer prueba suficiente de los peligros del activismo económico de un estado excesivamente autónomo frente a la sociedad, y aun ante otras menos extravagantes (como las obras hidroeléctricas y ferroviarias destinadas a disminuir la dependencia brasileña del petróleo importado), esos empresarios hubieran preferido discutirlas desde una posición menos débil que la que les reconocía el Estado autoritario. Frente a él y a las multinacionales, económicamente más poderosas pero impopulares, el retorno a un orden político menos restrictivo podía darles ventajas que (comenzaban a pensar) compensarían las consecuencias negativas de un retorno a la libertad sindical...

La reorientación de las elites brasileñas se reflejó bien pronto en la de la prensa, movilizada también ella al servicio de la exigencia liberal-constitucional, bajo cuyo signo esas elites se estaban reunificando, que ahora incluía un reconocimiento del derecho de las clases subordinadas a sostener reivindicaciones sociales y no sólo políticas, que muy pocos dentro de esas elites habían estado dispuestos a otorgar sin reticencias antes de 1964. Ese reconocimiento se tornaba más fácil porque nada parecía anticipar un retorno a los choques sociales que tanto habían pesado en la crisis de aquel año fatídico. Durante la larga etapa en que la represión había hecho imposible a los sindicatos conservar para las reivindicaciones específicamente obreras un lugar central entre las de las clases subordinadas, las de éstas vinieron a entrelazarse con otras muy variadas, desde las esgrimidas por los movimientos ecológicos hasta las de vecindarios no necesariamente humildes que denuncian las insuficiencias de una urbanización demasiado rápida, y aun los de núcleos todavía más vastos que se presentan como víctimas de la inflación (aun el régimen aprenderá a utilizar esa novedad, que beneficia sobre todo a sus adversarios, cuando promueva la ley de divorcio, reivindicada por el movimiento feminista, pero combatida por la Iglesia, castigando así el activismo político de los prelados brasileños).

Reivindicaciones tan variadas se apoyan en una red organizativa a menudo informal pero casi nunca ilegal, que en el campo católico se canaliza a través de las Comunidades Eclesiales de Base, creadas ya antes de 1964 para paliar las consecuencias de la escasez de sacerdotes, pero que ya entonces habían asumido en algunos casos funciones de concientización ideológica, y tuvieron papel importante en el despertar de la sociedad civil que se dio un vez superada la etapa más dura de despotismo militar.

Ese despertar iba a alcanzar finalmente al movimiento obrero: en 1978, en el triángulo de suburbios industriales de São Paulo, una huelga metalúrgica marcaba al espectacular punto partida de un «nuevo sindicalismo», afincado en las industrias más dinámicas, que desdeñaba la alianza con el Estado en favor de confrontaciones y negociaciones directas; en unas semanas el jefe del movimiento, Luis Inácio da Silva, *Lula* para sus seguidores y pronto para todo el Brasil, alcanzó celebridad internacional. La nueva militancia obrera provocaba reacciones que revelaban cuánto había cambiado desde 1964; mientras la oposición de elite, y en particular los sectores cercanos a la Iglesia la apoyaba con entusiasmo, la marxista la recibía sin cordialidad (tanto los sindicalistas cercanos al Partido Comunista brasileño como los inclinados al maoísta Partido Comunista del Brasil preferían la táctica sindical que se había perfilado a partir de 1930).

Mientras el despertar de la sociedad civil se extendía hasta los últimos rincones de Brasil, el presidente Geisel seguía aspirando a consumar la apertura sin comprometer las innovaciones introducidas por la experiencia autoritaria. Para ello iba a retocar una vez más el aparato institucional: puesto que el partido oficialista había perdido la mayoría de dos tercios en el congreso y ya que la oposición alcanzaba la mayoría en varios estados claves, se establecería la elección indirecta de gobernadores y de una parte del senado...

A la vez que reforzaba los mecanismos institucionales contra la ofensiva opositora, Geisel socavaba las posiciones de la

línea dura, y ello le permitió en 1979 entregar el mando al general Euclides Figueiredo, a quien había escogido para sucesor. Esos avances tan lentos y ambiguos hacia un orden político más abierto no bastaron para ganar a Brasil el favor de la administración de Carter, que como sus predecesoras lo hallaba en otros aspectos demasiado independiente (así, no aprobaba que al derrumbarse el imperio africano de Portugal, Brasil estableciese cordiales relaciones con los gobiernos marxistas de los estados sucesores, ni tampoco que persistiese en una política nuclear que se apartaba de las pautas promovidas por Washington). Pero esa frialdad no iba a incidir en la evolución política interna: la oposición hallaba grato que el régimen autoritario practicase una política exterior independiente, que había sido siempre la suya, y aunque no se proponía esquivar el tema de las violaciones a los derechos humanos, lo hallaba demasiado explosivo para hacerse eco en cuanto a él de los planteos de la diplomacia norteamericana.

Como sus predecesores, Figueiredo aseguraba que su más hondo anhelo era consumar la institucionalización del régimen, y era ya indudable que sólo una reorientación política mucho más drástica que la de 1968 podría cerrar el camino a ese desenlace tan anunciado. El gabinete del nuevo presidente se identificaba con ese objetivo, impulsado por otra parte por el general Golbery do Couto y Silva, restituido a su papel de consejero áulico por Geisel y aun más influyente sobre su sucesor. Desmanteladas las bases de la línea dura en la cúpula militar, su última batalla la iba a librar desde los servicios de inteligencia, que en 1980 y 1981 lanzaron una campaña de terrorismo anónimo. Mientras tanto el ingenioso Golbery buscaba influir en los resultados electorales, ya no consolidando a la impopular ARENA (que iba a buscar mejor suerte bajo la nueva sigla PDS), sino eliminando las normas que, al obligar a la oposición a agolparse en el MDB, le habían impuesto el marco unitario que había hecho posible su desquite triunfal. Aunque la mayor parte del centro-izquierda permanecería en el MDB (ahora rebautizado Partido Movimiento Democráti-

co Brasileño, o PMDB), la creación del Partido de los Trabajadores por el nuevo sindicalismo y la del Partido Democrático Laborista por algunos sobrevivientes del séquito de Goulart, capitaneados por Lionel Brizola, ahora convertido a la más circunspecta socialdemocracia, dispersaban suficientes votos opositores para devolver esperanzas al jaqueado oficialismo.

Pero los problemas de la apertura no eran los más urgentes que debía afrontar el gobierno de Figueiredo. En 1979 el alza de las tasas de interés puso fin a la larga expansión de la economía brasileña. El nuevo ministro de Economía, Mario Simonsen, no ocultó que el milagro había terminado, y que eran necesarios remedios recesivos para evitar la crisis del sector externo y frenar una inflación cada vez más impetuosa. Nadie estaba aún dispuesto a aceptar ese mensaje, y su reemplazo por Delfim Neto fue recibido con universal alivio. El padre del milagro brasileño aseguraba que era posible seguir expandiendo la economía con argumentos más vagos y eclécticos que en el pasado, pero más que ellos era su contagioso optimismo el que le ganó por un momento el favor del público.

Por un momento tan sólo; mientras el retorno de la inflación se reflejaba en una agudización de los conflictos laborales, la violencia extrema de la recesión, reflejo negativo del vigor nuevo de la economía nacional, persuadió al ministro de la necesidad de abandonar toda prudencia en busca de la reactivación que debía mejorar el humor de los votantes para la prueba electoral de 1982. Los nuevos créditos y la renegociación de los anteriores a nuevas tasas de interés aceleraron el crecimiento de la deuda externa, pero lograron a la vez que en 1982 la economía volviese a crecer, aunque a una tasa muy baja.

La prueba electoral de noviembre de ese año era aún más decisiva porque el gobierno había postergado a esa fecha, que era la de renovación del Congreso, las municipales y estaduales que sabía que en lo más duro de la recesión le serían desfavorables, y para hacer aceptable a la oposición esa postergación, había restaurado la elección directa de gobernadores y

alcaldes. Pese a la reactivación de la economía, la oposición obtuvo clara mayoría de sufragios; gracias a las reformas de Golbery, ello no bastó para dar el dominio del Congreso al PMDB. Que ese resultado (que entregó a partidos opositores el gobierno de casi todos los mayores estados y ciudades, e incluyó el retorno triunfal de Lionel Brizola como gobernador de Río de Janeiro) fuese considerado favorable por el gobierno revelaba hasta qué punto éste había reducido sus ambiciones: se satisfacía con que el partido oficialista retuviese el control del colegio electoral que elegiría al nuevo presidente, e impusiese a un candidato reclutado en sus propias filas (y no ya un integrante de la cúpula militar seleccionado por sus pares).

Luego de las elecciones el esfuerzo por aliviar la recesión fue abandonado; era ya imposible encontrar nuevos créditos en un mercado de capitales próximo al pánico, y la cesación de pagos de la deuda era un peligro inminente. La penuria dio nueva fuerza al sentimiento opositor, pero vino a disminuir la intensidad de las confrontaciones entre éste y el gobierno, y a restringirlas al campo político. Ese resultado paradójico era consecuencia de inminente apertura: mientras el gobierno mantuviese su avance hacia ella, la oposición, que ansiaba verla consumada, no arriesgaría comprometerla promoviendo las agitaciones que eran consecuencia del derrumbe económico.

La acción opositora se iba a canalizar en cambio en la campaña por elecciones presidenciales directas, pronto transformada en un multitudinario festival político presidido esta vez por todas las elites brasileñas (ahora a los prelados, abogados ilustres y empresarios se agregaban aun los ídolos populares creados por las telenovelas de la cadena *O Globo* y los héroes del deporte, instrumentos unos y otros hasta la víspera de la despolitización de las masas promovida al servicio del régimen por la televisión, que el milagro había transformado en una presencia ubicua en la vida de los brasileños). La campaña estuvo muy cerca de obtener para la reforma los dos tercios de votos parlamentarios que habían vuelto a ser requeridos para reformar el texto constitucional, y las defecciones en el

oficialismo anticipaban lo peor para el candidato presidencial que surgiese de sus desmoralizadas filas. Éste iba a ser el discutido empresario paulista Paulo Maluf, y su candidatura provocó una escisión en el seno del PDS encabezada por el senador José Sarney; el Partido del Frente Liberal así creado vino a aliarse con el opositor PMDB, cuyo candidato presidencial, Tancredo Neves, un veterano político de Minas Gerais, se estaba transformando súbitamente en el foco de las más exaltadas esperanzas de las masas brasileñas.

El 15 de enero de 1985 la fórmula integrada por Neves y Sarney era elegida por una abrumadora mayoría en el colegio electoral; el 15 de marzo el presidente electo estaba demasiado grave para recibir las insignias del poder, el 27 de abril moría tras de una agonía seguida con angustia apasionada por la opinión brasileña. Lo reemplazaba José Sarney, hasta un año antes aliado político del régimen militar; su actuación como tal, aunque no lo había privado de la estima de sus colegas de la antigua oposición, lo colocaba bajo una luz ambigua ante la opinión.

Ahora le tocaba presidir un difícil experimento político. Sin duda, en 1984 la economía había vuelto a expandirse, gracias en parte a renegociaciones de la deuda externa que seguían acrecentándola, y la balanza de comercio aparecía menos desequilibrada, pero la inflación no cesaba de agravarse. La difícil economía y los problemas dejados pendientes por la normalización política iban a dominar la vida de la que ya se llamaba Nueva República tan completamente como antes la última etapa del gobierno militar, pero en la transición de aquél a ésta la unidad que la sociedad civil había forjado para asegurarla se quebró, permitiendo que volviesen a aflorar los conflictos que siguen dividiéndola.

Fue lo que el presidente Sarney iba a descubrir cuando, haciendo honor al programa de la coalición victoriosa, lanzó un proyecto de reforma agraria destinado a dar a las marginadas masas rurales del nordeste y a los *squatters* de la franja pionera la base legal que les permitiría ofrecer una contribución más

significativa a la economía nacional. La respuesta a la iniciativa fue un activismo terrateniente que combina el terrorismo a nivel local con una eficaz agitación en la escena nacional; él ha logrado introducir en la nueva constitución normas que harán muy difícil la reforma por vía legislativa, pese al apoyo brindado a ella por el partido mayoritario y por la Iglesia, que se identifica hoy enérgicamente con los campesinos sin tierras.

Mientras ello ocurre en las áreas marginales, en el corazón mismo del nuevo Brasil algunas de las exigencias que había esgrimido la oposición al autoritarismo militar parecen estar perdiendo atractivo. Así lo sugiere la derrota que en la elección de alcalde de São Paulo sufrió el senador Fernando Henrique Cardoso, brillante sociólogo que se había revelado también político habilísimo, a manos del veterano Jánio Quadros; lo que dio el triunfo al antiguo admirador de Ernesto Guevara fue menos el anticomunismo un poco tosco de su propaganda que su disposición a hacerse eco de la nostalgia de la brutalidad policial provocada por los avances de la criminalidad suscitados por la creciente penuria.

Este renacer de las tensiones sociales no supone un retorno liso y llano a las polarizaciones que precedieron al golpe de 1964. No es sólo que los dirigentes que entonces buscaron capitalizarlas –o sus herederos– se esmeran en cambio en esquivarlas; la sociedad brasileña, más compleja y contradictoria que entonces, se presta menos a escindirse sobre líneas tan simples. Ni los avances de la derecha nostálgica del orden, ni los de una izquierda que se guarda muy bien de debilitarlo (y que se ha resignado de buen grado a que no sean revisadas las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los gobernantes de la etapa militar) parecen amenazar el orden político que laboriosamente está naciendo.

El panorama económico se presenta más sombrío. Mientras las perpetuas renegociaciones de la deuda externa no impiden que ésta siga restando posibilidades dinámicas a la economía, la inflación, vieja compañera de esas dificultades económicas, se aceleraba todavía debido a la indexación introducida por el go-

bierno militar. En febrero de 1986, cuando era ya inminente la pérdida de control del proceso inflacionario, el Plan Cruzado (como meses antes el Austral en Argentina) buscó estabilizar la situación atacando tanto la fuente monetaria de la inflación (el financiamiento del gasto público por la emisión) como su mecanismo multiplicador (la indexación). Los resultados comenzaron por ser muy positivos, pero pronto la inflación ahora inconfesada condujo a una sobrevaluación del cruzado, que afectó cada vez más negativamente la balanza de comercio. El gobierno Sarney buscó paliar la situación con retoques menores, postponiendo cualquier reajuste más ambicioso hasta después de las elecciones de renovación del congreso, y de gobernadores de la mayor parte de los estados, que en noviembre de 1986 iban a otorgar una victoria abrumadora al PMDB.

Entre tanto la situación económica se había agravado peligrosamente: en febrero de 1987 Brasil suspendía el servicio de sus deuda externa, en medio de una profunda recesión que por primera vez parece socavar la confianza en el futuro que hasta ahora, en medio de brutales altibajos económicos y durísimas experiencias políticas, había sido un elemento constitutivo de la conciencia nacional brasileña, y había venido creando un contraste cada vez más vivo entre un temple colectivo dominado por una ufanía reconocida como rasgo nacional, y el tanto más melancólico que dominaba en Hispanoamérica.

Gracias en parte a ese contraste, la trayectoria económica de **México**, igualmente rica en contratiempos, no inspira las súbitas transiciones de la tensión a la euforia, y de ésta al más sombrío pesimismo que hemos hallado en Brasil. Pero hay razones más específicamente mexicanas para ello. No se trata tan sólo de que mientras a través de un avance desgarrado y contradictorio Brasil logró transformaciones que han hecho de él uno de los gigantes de este fin de siglo, la etapa no ha dejado en México un saldo comparable. Aún más influye quizá la conciencia –muy viva entre las elites mexicanas– de la fragilidad creciente del orden sociopolítico heredero de la Revo-

lución, que ni aun en los momentos de mayor euforia les permitía abandonarse confiadamente a ella, y sin duda contribuye a que la catastrófica situación actual haya sido recibida allí con menos sorpresa.

El presidente Echeverría, que había buscado contrarrestar esa fragilidad apropiándose de los temas enarbolados por la protesta, descubrió bien pronto los límites de esa táctica (en cuanto la opinión no podía satisfacerse indefinidamente con ataques que no se traducían en ninguna acción eficaz contra las «fuerzas oscuras» tan violentamente condenadas), y buscó entonces complementarla con otras dirigidas a sectores específicos de la sociedad mexicana.

Las convulsiones de 1968 habían revelado una alarmante desafección de las clases profesionales e intelectuales; para apaciguarlas iba a improvisarse un vasto y costoso aparato científico y universitario que vino a colmar las aspiraciones profesionales de aquéllas. En un contexto ideológico muy distinto del brasileño (ya que Echeverría decía compartir las audacias ideológicas de los beneficiarios de su generosidad) esa solución traía a la memoria la adoptada por los militares que allí gobernaban con mano férrea.

Para redefinir su relación con las masas urbanas y rurales, Echeverría comenzó por inspirarse en la instintiva sabiduría de la elite revolucionaria, e intentó un retorno a las fuentes cardenistas. Bien pronto, sin embargo, descubrió que una solución que había sido adecuada para los problemas del México de 1935 no lo era para los planteados por una coyuntura que obliga a recurrir más que nunca a la inversión extranjera para asegurar la continuación del avance industrializador, y al crédito extranjero (que en México había tenido hasta entonces papel limitado) en busca de los recursos que el Estado necesita para atenuar el impacto social de desequilibrios económicos cada vez más graves (así las insuficiencias de la agricultura campesina obligaban a importar una parte cada vez más alta de los alimentos básicos, que debía venderse a pérdida para paliar el deterioro del salario real).

Cuando el presidente se resolvió a admitir que así estaban las cosas, su gestión había ya hecho más tensa su relación con las clases propietarias mexicanas y los indispensables inversores del extranjero; la necesidad en que se encontraba de extremar la audacia de su lenguaje en la medida misma que debía renunciar a ella en sus acciones iba a mantener vivas las alarmas de unas y otros; y, mientras los aparatosos gestos con que el presidente reafirmaba el derecho de México a una política exterior independiente era tan mal vistos por los círculos bienpensantes de la capital mexicana como por Washington, los insistentes anuncios del retorno a una versión más intransigente del credo revolucionario estaban lejos de favorecer nuevas inversiones de largo plazo.

A la vez, los reajustes menores a los que el presidente se había visto reducido sólo lograban hacer más lenta la crisis final del desarrollo estabilizador, que cubría de modo cada vez más amenazador el horizonte. El desequilibrio creciente en el sector externo amenazaba la estabilidad en la tasa de cambio entre el peso mexicano y el dólar, mantenida durante la entera etapa de desarrollo estabilizador; dada la intimidad entre la economía mexicana y la de su gigantesco vecino, la renuncia a esa estabilidad debía alcanzar consecuencias devastadoras. El flujo de créditos permitía por el momento mantenerla, pero también provocaba una sobrevaluación cada vez más extrema, que agravaba la inflación y el desequilibrio externo.

Al lado de este problema, otro se hacía sentir cada vez más: el crecimiento de la población estaba creando más campesinos sin tierras que cuando Cárdenas se decidió a completar la reforma agraria. El surgimiento a comienzos de la década de 1970 de guerrillas de base rural en el estado de Guerrero, pese a que con la colaboración del ejército fueron eliminadas con brutal eficacia, intensificó el temor de la elite gobernante ante las potencialidades desestabilizadoras de ese creciente sector desheredado, y en los últimos meses de su mandato Echeverría iba a identificarse apasionadamente con sus reivindicaciones.

En el Norte, donde las grandes obras de irrigación habían creado en las dos décadas anteriores inmensos oasis de agricultura capitalista, los campesinos comenzaron a ocupar con apoyo presidencial algunos de los más ricos de Sonora. Para entonces la ya inocultable crisis del desarrollo estabilizador había forzado una devaluación del peso en un 60 por 100, seguida de una ingente fuga de capitales que obligó a introducir otra por un 40 por 100 adicional. En este contexto tan poco auspicioso la resurrección del agrarismo cardenista logró tan sólo acentuar el desconcierto y la alarma, mientras los rumores de inminente golpe militar que invadían periódicamente la capital parecían anunciar el fin de la mediatización política del ejército, que había sido un elemento esencial en la institucionalización del régimen revolucionario.

Pero, contra lo que esos rumores anticipaban, la crisis socioeconómica no afectó la estabilidad política. Echeverría no fue reemplazado por ninguna junta militar, sino por el licenciado José López Portillo, candidato oficiaista a la presidencia, que en el gabinete de su predecesor había estado a cargo de la cartera económica. La participación electoral en los comicios presidenciales había sido insólitamente baja, pero si ello reflejaba la atonía del partido gobernante, se debía también a la ausencia del acicate que hubiera representado la presencia opositora en la contienda.

Como la anterior transición presidencial, la que entronizó a López Portillo adquirió el tono de un cambio de régimen. Echeverría era señalado por sus herederos a la execración universal, y la demagogia y corrupción que se le achacaban presentadas como las responsables principales de la gravísima situación. El nuevo presidente rectificaba de inmediato la línea de su predecesor, retirando el apoyo a las agitaciones campesinas y buscando una reconciliación con el sector privado y con las fuentes extranjeras de créditos e inversiones. Reducidos drásticamente los recursos del Estado, los necesarios para superar la crisis económica sólo podían provenir de esos sectores, a los que el presidente prodigaba, junto con cortesías cada

vez más profusas, promesas solemnes de que sus intereses serían debidamente tutelados desde el poder político, y de que se les reconocería mayor libertad de iniciativa frente a éste.

Mientras, bajo la tutela de los herederos de la revolución, México se preparaba a entrar en una transición entre largueza populista y disciplina y austeridad conservadoras análoga a las que en América del Sur se acompañan habitualmente de dramáticos cambios en el liderazgo político, una divina sorpresa vino a salvar a la elite política de la mediatización a las clases propietarias a la que ya parecía resignada. La primera crisis del petróleo, al subir dramáticamente su precio, vino a hacer económicamente utilizables las reservas encerradas en el subsuelo mexicano, que las activas exploraciones llevadas adelante durante la gestión de Echeverría habían demostrado mucho más amplias de lo que se imaginaba. Mientras el petróleo comenzaba a borrar el desequilibrio externo, la posesión de esa riqueza devolvía a México su crédito, en un momento de excepcional holgura en los mercados financieros.

La oportunidad –aseguraba el elenco gobernante– sería usada para afrontar de una vez los problemas básicos de la estructura socioeconómica mexicana, entre ellos las consecuencias de la baja productividad de la agricultura campesina que provee los alimentos básicos para las masas mexicanas, que a partir de 1970 estaba obligando a importar una fracción creciente de éstos. Una reforma del ejido, que le permitiría asociarse con inversiones privados con fines de modernización tecnológica, debía favorecer la rehabilitación de esa agricultura, pero la innovación –cuya audacia ideológico-política era indiscutible– alcanzó muy limitada eficacia: mientras el Estado no renunciase a controlar los precios de los productos de la agricultura campesina, escasearían los inversores dispuestos a insertarse en un sector cuyas posibilidades de lucro eran sistemáticamente sacrificadas. A la vez, abandonar el control de esos precios significaría renunciar a uno de los mayores factores de estabilidad en la economía mexicana. Como se ve, si no hacer nada tenía temibles consecuencias de largo plazo, hacer

algo tenía otras también alarmantes y mucho más inmediatas, y mientras tanto la bonanza petrolera y financiera permitía expandir las importaciones, haciendo más fácil dejar para el futuro cualquier decisión frente a ese duro dilema. La misma bonanza iba a restar urgencia a ese otro dilema que Echeverría había osado afrontar *in extremis*, en cuanto la expansión económica, que en una década iba a transformar a la capital mexicana en la mayor ciudad del mundo, hizo del éxodo rural un instrumento más eficaz para aliviar las presiones en el campo.

No sólo en el campo la bonanza sirvió –contra todas las buenas intenciones originarias– para hacer soportables los desequilibrios, más bien que para corregirlos. Frente al sector privado, el retorno a un estilo más sobrio, que ocasionalmente retomaba los subtonos desafiantes tradicionales entre los herederos de la revolución, no provocó ningún retorno a pasadas tensiones: la elite burocrática y la empresaria se estaban transformando en dirigentes de dos empresas paralelas de captación de los frutos de la bonanza, que a menudo se interpretaban (así ocurría por ejemplo en PEMEX, el monopolio petrolero del Estado, cuyos lucrativos contratos de servicios favorecían tanto a la elite sindical como a empresarios nacionales y extranjeros, estos últimos casi todos de la vecina y petrolera Texas). Porque la magnitud del botín por repartir restaba estímulos para cualquier conflicto, ni aun la expansión ahora frenética del sector estatal logró despertar reacciones demasiado vivaces en el privado.

En un contexto de muy aliviadas tensiones socioeconómicas, el sucesor de Echeverría podía encarar sin urgencias la reforma política inscrita desde 1968 en la agenda del régimen mexicano. A la democratización interna del partido gobernante, López Portillo prefirió una alternativa menos audaz: la apertura de un campo más ancho a los partidos opositores, no mediante competencias electorales más auténticas sino por la asignación a esos partidos de una representación parlamentaria más considerable, una vez que superasen un muy modesto umbral mínimo de sufragios. Esa reforma, destinada a aliviar

la quietud ya cercana al marasmo que estaba caracterizando a la vía política mexicana sin socavar la abrumadora hegemonía del PRI, fue largamente discutida con las fuerzas de izquierda, cuyas divisiones internas parecían próximas a atenuarse al repudiar el Partido Comunista el legado del stalinismo.

Mientras tanto la izquierda como el oficialismo compartían la noción de que aquélla ofrecía la más seria alternativa a éste, los resultados electorales revelaron que el Partido de Acción Nacional, que no renegaba de sus orígenes católicos ni de sus vínculos fundacionales con los sectores más independientes (y también más cerradamente conservadores) del empresariado mexicano, parecía más capaz de crear un foco opositor (en las elecciones presidenciales de 1982 no sólo se vio reconocido el 14 por 100 de los sufragios frente a un 6 por 100 del Partido Socialista Unificado que agrupaba ahora a casi todas las izquierdas, sino excedió como mucho esa marca en el Distrito Federal, donde el voto es excepcionalmente libre).

El avance del PAN era favorecido por el agotamiento de la euforia económico-financiera, que ya en sus últimas etapas había venido agudizando de modo insoportable los desequilibrios cuyas consecuencias había buscado paliar. Pese a la dramática expansión de las exportaciones petroleras, la balanza de comercio se desequilibraba cada vez más. La abundancia del crédito externo, que impedía que ese desequilibrio se tradujese en una crisis, al proteger la paridad del peso pese a la inflación interna, provocaba una sobrevaluación que estimulaba las importaciones y frenaba las exportaciones. En 1981 la combinación del alza en las tasas de interés y la baja del precio mundial del petróleo tuvo consecuencias devastadoras para una economía ya erosionada por la pasada bonanza: en febrero de 1982, cuando López Portillo devaluaba de nuevo el peso en un 60 por 100, la fuga de capitales nacionales y extranjeros no pudo ya ser frenada, y abrió para la moneda mexicana una etapa de devaluaciones en cascada. En junio, bajo auspicios tan poco brillantes, Miguel de la Madrid, un técnico en la Harvard Business Scholl que había servido en el gabinete de

López Portillo antes de ser escogido por éste como su sucesor, reunía una mayoría que fuera de México hubiese sido considerada abrumadora, confirmando una vez más la solidez del orden político que la revolución había legado al país.

Pero esta vez la devaluación no había bastado para despejar la escena para el nuevo presidente. México había acumulado una enorme deuda pública y privada, esta ultima canalizada a través de bancos también privados que, desaparecida la estabilidad cambiaria, no podían ya atender sus obligaciones con el extranjero. La solución que proponían era la incorporación de sus deudas a la pública, que el Estado tampoco podía atender y se disponía a renegociar. El presidente prefirió a ese temperamento la nacionalización de esas empresas en bancarrota, que le permitió hacer de la que seguía siendo en lo esencial una nacionalización de deudas privadas la ocasión de un simbólico retorno a las fuentes del nacionalismo económico mexicano. Pese al gesto desafiante, las consecuencias menos amables que la medida hubiera podido tener para el sector privado fueron obviadas al decidirse que ella no afectaría a las empresas no financieras de propiedad de los bancos nacionalizados...

Ese golpe de escena no podía ocultar la seriedad de la crisis que afectaba a la economía mexicana, y que la abrumadora gravitación de la deuda externa amenazaba tornar permanente. De la Madrid iba a hacer del pago de ésta su primer objetivo; esperaba obtener con ello términos de renegociación más favorables que los gobiernos que, como el de su predecesor, preferían colocar el contencioso creado por ella bajo el signo de un conflicto político-ideológico entre el Tercer Mundo y el mundo desarrollado. No lo iba a lograr: pronto iba a descubrir que, independientemente de que los deudores prefiriesen la confrontación o la cooperación más solícita, sus acreedores estaban dispuestos a otorgar tan sólo las facilidades indispensables para no forzarlos a repudiar la deuda, y en ningún caso a ofrecer el respiro necesario para cualquier reactivación de sus economías nacionales.

Pese a que nada autorizaba a esperar el fin próximo del marasmo económico, y a que era ya obvio que salir de él requeriría de las masas mexicanas esfuerzos y penurias mayores que los del anterior medio siglo, De la Madrid iba a atenerse escrupulosamente a la política socioeconómica trazada al asumir la presidencia. La disminución progresiva de los subsidios a los consumos populares contribuyó a agravar una persistente inflación, acompañada de devaluaciones que han multiplicado cien veces el valor que el dólar tenía en los años de López Portillo; mientras los salarios reales no se han recuperado del deterioro que siguió al fin de la bonanza, la desocupación y subocupación, ambas ya muy elevadas durante aquélla, no cesan de agravarse.

Al abrirse 1987 esa situación comenzaba a aliviarse; las exportaciones crecían gracias sobre todo a la expansión muy rápida de las industrias establecidas sobre la frontera con Estados Unidos por empresas trasnacionales que toman a su cargo la elaboración (a menudo tan sólo el montaje) de material importado, y deben su éxito al diferencial de salarios hoy existente entre México y aun las áreas en proceso de industrialización en el Lejano Oriente.

Esa recuperación demasiado lenta y dolorosa no deja de incidir en el panorama político mexicano. La fe en el liderazgo de los herederos de la revolución ha sido muy sacudida; y la atonía con que respondieron al terremoto que en 1985 devastó a la capital acrecentó aún más el escepticismo de los gobernados frente a sus dirigentes. Pero todo ello no parece empujar a la crisis final del régimen, que una vez más buscó salvarse tomando distancia frente a los que hasta la víspera habían estado en su cumbre.

Sin duda el repudio de la pasada administración es más profundo y universal que el que había rodeado póstumamente a las de Díaz Ordaz o Echeverría; la penuria aguza la indignación moral frente a la corrupción que acompañó a la pasada bonanza. De la Madrid supo hacerse vocero de esos sentimientos, pero –aunque algunos de los más impopulares corifeos de

la pasada danza de los billones han sido objeto de acciones judiciales– la depuración no ha afectado a los más poderosos núcleos político-económicos beneficiados con ella: así ocurrió por ejemplo con el sindicato petrolero.

El nuevo presidente acudió también a otro recurso ya tradicional para aliviar tensiones: la promesa de una apertura política más real que la tolerada hasta entonces. Sobre esa tendencia aperturista vino a incidir de modo inesperado el apoyo cada vez más abierto del gobierno norteamericano al Partido de Acción Nacional, que se perfilaba como el más capaz de ofrecer alternativa al gobernante. Esta actitud, inspirada en buena medida por la irritación que en Washington despertaba la frialdad de México ante la cruzada antinicaragüense lanzada por el presidente Reagan, vino a incidir de modo menos positivo de lo que esperaban sus promotores en las fortunas de un partido que, a más de beneficiarse con el generalizado descontento popular, avanzaba ya rápidamente en el extremo norte, teatro de una rehabilitación económica que debía muy poco a la acción del Estado, y no creaba entonces las oportunidades para el encuadramiento de la sociedad desde el poder que el PRI había sabido utilizar en el pasado para erigir su omnipresente máquina política.

La erosión en el ascendiente del poder central sobre el norte no es el único rasgo que en el México de hoy sugiere ominosos paralelos con el ocaso del porfiriano. Como el tardío porfirismo, la revolución institucional tiene hoy a su frente a hombres que merecen, quizá aún más plenamente que los de entonces, el apodo de «científicos». En la carrera de De la Madrid la actividad propiamente política ocupó lugar secundario, y lo mismo ocurre con la de su sucesor ya preconizado, Carlos Salinas de Gortari. Los peligros de este deslizamiento parecen evidentes a quienes advierten muy bien que el secreto de la fortaleza del régimen es esencialmente político, y temen dejar su destino en manos de quienes no han aprendido las destrezas necesarias en ese campo. Esos recelos se expresaron con inusual franqueza en las etapas iniciales del proceso pre-

electoral y una vez preconizado éste dieron fuerza a la disidencia de la llamada tendencia democrática, que había propuesto la selección del candidato por el voto de las bases partidarias, y bajo la inspiración de uno de los políticos más influyentes dentro del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, levantaba ahora la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que la mayor parte de los partidos de izquierda terminó por apoyar.

Aunque todo ello anticipa un futuro cada vez más difícil para el actual orden político mexicano, pocos están dispuestos a darlo por próximo al ocaso, luego de haberlo visto sobrevivir en las últimas décadas a pruebas cada vez más duras. Sería sin duda absurdo buscar el secreto de esa robustez en la devoción por los objetivos revolucionarios de justicia e igualdad de un régimen, algunos de cuyos titulares recientes han reunido desde el poder fortunas que cuentan entre las mayores del planeta, y cuya elite política tuvo participación decisiva en la fuga de capitales cuyas dolorosas consecuencias siguen abrumando a las masas mexicanas. Pero sigue siendo cierto que esa elite, que debe su preeminencia a la tormenta popular que arrasó con la paz porfiriana, mantiene una atención constantemente alerta por los movimientos de humor de las masas a las que gobierna, y -quizá gracias a ello- ha sido hasta ahora capaz de sortear las acechanzas que la coyuntura plantea a los gobernantes mexicanos como a los del resto de América latina.

La **Cuba** socialista no iba a verse tampoco libre de ellas, pese a su integración en una órbita distinta, y allí también el régimen revolucionario ha logrado sobrevivir a una etapa que, abierta con la inmensa decepción que significó en 1970 el fracaso de la Zafra de los Diez Millones, iba a acumular todavía otras nuevas en su curso.

Aquel fracaso convenció a los gobernantes cubanos de la urgencia de institucionalizar y regularizar su gestión política y económica; en uno y otro aspecto, renunciando a ofrecer un modelo alternativo de socialismo, lo buscaban en la Unión Soviética, fuente desde 1960 de los recursos económicos y mi-

litares que habían asegurado la supervivencia del régimen revolucionario. En 1975 la Cuba socialista tuvo finalmente una constitución que colocaba su vida política, económica, social y cultural bajo la guía del Partido Comunista; la orientación económica, menos voluble que en la primera década revolucionaria, se había modificado además para abrir un espacio a los estímulos económicos, sacrificando la igualdad salarial.

Bajo esos auspicios la economía cubana volvía a crecer. Era como siempre un economía dominada por el azúcar, cuyos niveles de producción, pese al fracaso de la gran cosecha, seguían superando de lejos los prerrevolucionarios, y en la cual la mecanización y mejora tecnológica estaba finalmente logrando una subida sostenida de la productividad tanto de la tierra como de la fuerza de trabajo, pero ese éxito mismo acentuaba su dependencia de un producto cuyo futuro en los mercados del mundo se anunciaba cada vez más sombrío.

La primera parte de la década de 1970, en que se dio esa normalización económica sustancialmente exitosa, estuvo marcada además por una política latinoamericana más circunspecta que en el pasado: el entusiasmo con que recibió la victoria electoral de la izquierda chilena no distrajo a Castro de su esfuerzo por reinsertarse en el circuito diplomático latinoamericano, redefiniendo sus relaciones con el subcontinente en términos menos ideológicos. En la segunda mitad de la década, mientras el avance de la economía se tornaba más lento, la revolución etíope y la disolución del imperio africano de Portugal abrieron un nuevo campo para Cuba, que iba a proporcionar ayuda técnica y militar a los nuevos regímenes. Esa presencia ultramarina, motivo de patriótica ufanía para no pocos cubanos, ofrece un campo de actividad quizá necesario para el vasto aparato militar, que no podría considerarse superfluo dada la tensión permanente con los Estados Unidos. Otras iniciativas, como las «ayudas fraternales» no siempre gratuitas que desde Argelia hasta Mozambique tienen por protagonistas a maestros, médicos y técnicos cubanos, vienen entre otras cosas a ampliar el desemboque para las nuevas

promociones profesionales con que, en un esfuerzo que a esta altura comienza a parecer quizá demasiado exitoso, la revolución ha venido a colmar los claros creados por la emigracion.

Hacia fines de la década el régimen se sentía lo bastante seguro para buscar, si no una reconciliación, por lo menos una convivencia menos hostil con la vasta colonia que esa migración había creado en los Estados Unidos, cuyos integrantes eran ahora invitados a visitar como turistas su patria perdida. Si muy pocos emigrados depusieron su hostilidad, fueron muchos los que visitaron la isla, para exhibir en ella los frutos de su reciente prosperidad; su presencia vino a aguzar las dudas acerca del gigantesco experimento revolucionario que, aunque había promovido progresos sociales muy significativos, parecía haber agotado su dinamismo tras de asegurar tan sólo la satisfacción de las necesidades sociales más básicas.

Cuando un incidente provocó el retiro de la guardia policial de la embajada peruana en La Habana, más de diez mil personas se agolparon en pocas horas en la sede diplomática. Fidel Castro se declaró dispuesto a facilitar la partida de esos y otros indeseables, y abrió la playa de Mariel a los barcos que los exiliados de Miami quisiesen enviar para recogerlos; más de cien mil habían ya dejado la isla cuando el gobierno norteamericano decidió cerrar sus puertos a esa pacífica invasión (Castro, que había contribuido a esa decisión facilitando la partida de no pocos huéspedes de las cárceles y manicomios cubanos, podía proclamar con verdad que eran los Estados Unidos los responsables de una situación que de nuevo obligaba a los enemigos del régimen a permanecer en Cuba contra su deseo).

Pero entre los emigrantes voluntarios eran demasiado numerosos los integrantes de las nuevas elites que la revolución se enorgullecía de haber formado para que fuese posible ignorar lo que el episodio revelaba como síntoma de una desazón que no afectaba sin duda tan sólo a ellos. El régimen gobernante pareció entenderlo así, y se esforzó por atenuar las causas de descontento: a diferencia de lo ocurrido en crisis anteriores, juzgó esta vez inoportuno intensificar la vigilancia

ideológica, cuyo celo intemperante era en parte responsable por la multiplicación de las defecciones que habían venido raleando de figuras prestigiosas a la *intelligentsia* revolucionaria, y buscó complacer a más vastos sectores de población legalizando un mercado paralelo de alimentos y productos agrícolas comparable al conocido en la Unión Soviética, que hasta entonces el purismo moral característico de la tradición revolucionaria cubana había rechazado.

Mientras tanto, la coyuntura que afronta la economía cubana se ha tornado firmemente desfavorable. La depresión de los precios del azúcar amenaza hacerse permanente, y Cuba, que se había también dejado tentar por la pasada plétora de crédito fácil, se halla abrumada por una deuda con el mundo capitalista a la que no puede atender; su dependencia del comercio y el crédito del bloque socialista ha venido a acentuarse aún más, y la impaciencia soviética ante una situación que se arrastra ya por décadas ha comenzado a reflejarse en críticas cada vez menos veladas a los dirigentes de la economía cubana.

Se entiende por qué La Habana prefiere esquivar las oportunidades de confrontación que el gobierno de Reagan le ha venido ofreciendo a cada paso, y resiste a la tentación de participar más activamente en la crisis revolucionaria centroamericana. Sin duda el contexto mundial, que parece avanzar hacia una distensión que teme que no haya de beneficiar a Cuba, y el ingreso de la Unión Soviética en una etapa de cambios quizá turbulentos, inspiran en parte esa prudencia, pero la alimenta sobre todo la sobriedad exenta de ilusiones con que los dirigentes de una revolución vieja ya de más de un cuarto de siglo contemplan sus perspectivas de futuro.

Esa sobriedad ofrece un eco atenuado de la pérdida del entusiasmo con que sectores muy amplios de la opinión mundial siguieron sus primeras etapas. El desencanto -justificado quizá si se compara el desempeño de un régimen que aparece satisfecho con administrar la economía nacional esquivando la catástrofe y distribuir equitativamente un bienestar ubicado pocas líneas más arriba de la penuria, con las exorbitantes

promesas iniciales de la revolución en cuyo nombre gobierna– no debiera sin embargo inspirar un veredicto globalmente negativo acerca de ésta.

Para persuadirse de ello basta ubicar a la Cuba de hoy en el contexto antillano que es el suyo: la distancia que ya en 1959 la separaba de Jamaica, Haití o la República Dominicana ha crecido considerablemente desde entonces, y en comparación con la situación en que esas otras comarcas caribes se encuentran hoy hundidas, la de Cuba puede parecer hoy envidiable.

Entre las tierras que fueron españolas, la **República Dominicana** comenzó por buscar compensación para el estancamiento de sus exportaciones (dominadas por las de azúcar) mediante la expansión del turismo y sobre todo de la deuda externa; en 1981 iba a sufrir con intensidad devastadora las consecuencias del cambio en el clima financiero mundial. Para entonces el presidente Balaguer había debido abandonar el poder; en 1978 el gobierno de Carter manifestó inequívocamente su decisión de no tolerar la perpetuación en él del veterano mandatario, que con apoyo militar se preparaba a desconocer el veredicto electoral que había dado la victoria al candidato opositor Antonio Guzmán.

Tocó a éste administrar el derrumbe de la economía dominicana, en medio de tormentosas devaluaciones y tumultos urbanos más intensos que cuantos iba a conocer el continente al ser invadido por la penuria. Mientras la emigración clandestina a los Estados Unidos se ofrecía como último recurso para una población que sigue creciendo vertiginosamente, el descontento universal hizo posible el desquite electoral de un Balaguer ciego y octogenario, que debe afrontar con instrumentos no más eficaces que su derrotado rival una coyuntura que deja poco lugar a la esperanza.

Aunque por razones distintas, tampoco **Puerto Rico** ha sido capaz de recuperar el rumbo seguro que por un momento había parecido abrírsele. Tras de la transformación agraria favo-

recida por el gobierno y el partido de Muñoz Marín, que había terminado con el monocultivo azucarero sin crear alternativas viables para él, la expansión industrial que vino a ocupar el primer plano tuvo también resultados decepcionantes: apoyada en la integración de Puerto Rico en la economía metropolitana, a la que ofrecía una mano de obra más abundante y barata que la continental, y nunca tan vigorosa como se había esperado, iba a resistir mal la concurrencia de las áreas de nueva industrialización, que en la isla alcanzó efectos aun más devastadores que en el continente.

Puesto que los servicios (entre ellos en primer lugar el turismo) ofrecen a una población en constante aumento una salida cada vez más limitada por la concurrencia de las restantes Antillas, adquieren un papel cada vez más importante en la economía isleña la emigración a la metrópoli y los subsidios del gobierno norteamericano a desocupados y grupos de bajos ingresos. El vínculo colonial adquiere así peso cada vez más decisivo, pero ello no lo hace menos problemático. Sobre todo desde que el gobierno de Reagan buscó limitar el costo de los programas sociales de los que depende la población isleña, la insatisfacción frente a las modalidades que ha venido a tomar la relación con los Estados Unidos no ha cesado de intensificarse. Ello no ha favorecido sin embargo al movimiento independentista, tanto en su versión político-electoral, que ha venido a confluir con una opción socialista inspirada en el ejemplo cubano, como en la orientada a la acción violenta, reprimida con métodos escasamente admirables pero indudablemente eficaces. La transformación de la isla en un estado norteamericano ofrece otra alternativa a las indefiniciones de la situación actual, que promete aumentar la gravitación de Puerto Rico en las instancias metropolitanas que –como se hace cada vez más evidente– influyen en la situación de la isla con mayor peso que las autoridades del Estado Libre Asociado.

Aunque el Partido Nuevo Progresista, que propugna la transformación en estado norteamericano, ha logrado vencer en más de una elección general al Popular Democrático, su

éxito parece deberse menos al atractivo de la solución institucional que favorece que a la tendencia a la alternación de partidos en el poder, que ha comenzado a hacerse frecuente también en Latinoamérica continental, como reacción ante una realidad tenazmente insatisfactoria. Pero si el marco institucional permanece incambiado, la incorporación cada vez más íntima de la isla al orden institucional y económico metropolitano prosigue sin pausa, acelerada todavía por la presencia de una vasta población puertorriqueña establecida en el continente. Para esta última, aun el nacionalismo que había ofrecido barrera a la asimilación cumple menos bien ese papel, en cuanto se transforma en la ideología de un grupo étnico que al igual de otros reivindica a través de él su derecho no a un curso histórico propio, sino a una integración menos subordinada en la sociedad multiétnica que pugna por madurar en los Estados Unidos de hoy.

En medio de dificultades crecientes, Puerto Rico, como México y Cuba, ha logrado a pesar de todo mantener una estabilidad institucional no perturbada por ninguna tormenta decisiva. **Venezuela** la ha mantenido también, pero cabe preguntarse si ese éxito se debe tan sólo a la solidez de la democracia restaurada en 1958, y no también a la relativa benignidad del impacto que la crisis de la deuda externa ha tenido allí, pese a que el contraste con la alocada prosperidad de los años que la precedieron hace que sea vivida como una experiencia excepcionalmente dura.

Ya antes de la primera crisis del petróleo, Venezuela había venido avanzando hacia la nacionalización del sector minero-exportador, a la vez que asumía papel protagónico en la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que pronto iba a intentar para ese rubro la corrección de las asimetrías denunciadas en la relación entre el centro y la periferia bajo inspiración de Prebisch. Iba a ser esa corrección, impuesta en 1973, la que inauguraría una etapa de bonanza febril, a la cual el estilo político y administrativo del

presidente Carlos Andrés Pérez, elegido ese año, se adecuaba admirablemente. Su victoria sobre el candidato de COPEI fue también la de Rómulo Betancourt; en el ocaso de su carrera, el fundador de Acción Democrática se lanzó a la campaña con un brío tan juvenil como el del candidato al que presentaba a los venezolanos como «el hijo que nunca tuvo». La gestión de Pérez iba pronto a decepcionarlo, no sólo porque acentuaba la ya iniciada reconciliación con Cuba, frente a la cual Betancourt se mantenía irreconciliable, sino por el abandono con que se dejaba arrastrar por la tumultuosa ola de prosperidad, reflejado no sólo en el avance de la actividad económica del Estado en todos los frentes (que incluyó desde la nacionalización de las empresas petroleras y petroquímicas y de la minería de hierro hasta el impulso dado a la construcción del gigantesco centro siderúrgico de Ciudad Guayana) sino también en el favor otorgado a emprendimientos igualmente ambiciosos en el sector privado, en un clima de improvisación poco ordenada que alimentaba muy generales sospechas de corrupción.

El pesimismo de muchos veteranos de la política venezolana (entre ellos Betancourt) acerca de la calidad política y administrativa de la promoción de dirigentes que había encontrado su figura más representativa en el dinámico mandatario no hacía huella en un país que vivía una febril prosperidad. Ésta tenía otra consecuencia quizá más peligrosa que la alegada crisis moral de las elites gobernantes: estaba elevando vertiginosamente el costo de la adhesión de los venezolanos al orden político vigente. No se trataba tan sólo de que los partidos adoptasen pautas de funcionamiento cada vez más rumbosas y por lo tanto costosas (aunque el gasto de las campañas presidenciales organizadas por empresas publicitarias norteamericanas estaba lejos de ser insignificante) ni de que el sistema de pequeños y grandes favores que mantenía la cohesión de sus clientelas debiese adecuarse a las aspiraciones que esa opulencia inspiraba en ellas; era la entera sociedad venezolana la que parecía esperar de sus dirigentes políticos que asegurasen la perpetua-

ción indefinida de una coyuntura que mientras estaba haciendo posible para vastas masas el reemplazo del ron vernáculo por el whisky importado de Escocia, aseguraba la ampliación constante del aparato burocrático y técnico del Estado que alberga a tanta parte de la clase media, y ofrecía a las clases propietarias tasas de ganancia empresaria que requerían mantener subsidiados a sectores enteros de la economía.

Todo ello explica que mientras otros grandes exportadores de petróleo preferían buscar en el extranjero una salida para buena parte de las ganancias que la bonanza les estaba deparando, Venezuela se lanzase junto con México a ampliar su deuda externa. La prosperidad así asegurada no iba a impedir que Acción Democrática, debilitada por las tensiones entre el presidente Pérez y los veteranos del partido, debiese entregar la presidencia en 1970 a Luis Herrera Campins, candidato del COPEI democristiano, a quien tocaría bien pronto afrontar las primeras consecuencias del fin de esa etapa excepcional.

He aquí como, del mismo modo que en Costa Rica o Puerto Rico, también en Venezuela la aceptación de un marco institucional que es ya el único conocido por más de la mitad de la población se suma a la decepción frente a los resultados obtenidos bajo su égida para asegurar, a la vez que una total regularidad en el funcionamiento de las instituciones, el reemplazo frecuente del partido gobernante por su rival: así en 1984 iba a suceder a Herrera Campins el candidato de Acción Democrática, Jaime Lusinchi. Todo parece anticipar que 1989 no será la oportunidad para el desquite de COPEI, pero si ello ocurre se deberá menos al arraigo del partido rival que a la resurrección finalmente consumada de Carlos Andrés Pérez, el corifeo de la danza de los millones, que trae hoy a sus compatriotas el recuerdo de una etapa de prosperidad incomparable, antes que el de los aspectos menos universalmente admirados de su gestión como administrador de ella.

Aun esa resurrección desconcertante da a su modo testimonio de la solidez de las raíces que la frágil democracia res-

taurada en 1958 ha logrado implantar en Venezuela. Aunque las relaciones entre el poder político y el poder militar constituyen uno de los más protegidos *arcana imperii* del actual orden venezolano, lo que de ellas salta de todos modos a la vista es la ausencia a lo largo de décadas de toda confrontación perceptible; y en cuanto al desafío de la guerrilla revolucionaria, su reabsorción en el actual orden venezolano se refleja aun más nítidamente en la incorporación sin reservas a él de tantos de sus antiguos dirigentes, hoy presentes en posiciones legislativas y en la vida pública del país.

Otro ejemplo sin duda menos admirable de estabilidad lo sigue ofreciendo **Paraguay**, donde el general Stroessner, luego de más de un tercio de siglo en el poder, ha pasado a contarse entre los más duraderos dictadores latinoamericanos. Su régimen, que desde su instalación en 1954 viene apoyándose a la vez en el cuerpo de oficiales y en el partido colorado, se ha beneficiado sin duda con el mayor dinamismo que adquirió la economía paraguaya al abrirse al empuje de la expansión brasileña. En particular la gigantesca represa de Itaipú, en el linde con Brasil, tras de ofrecer ocupación temporaria a no pocos trabajadores paraguayos, dejó como legado permanente las regalías que Brasil paga por la parte de electricidad que en esa obra nominalmente binacional corresponde a Paraguay, y que éste revende a su vecino. Pero más aún que a los efectos de la represa, y los de la extensión hacia tierra paraguaya del avance de la frontera agrícola y pastoril brasileña, esa activación de una economía antes letárgica se debe a las funciones que Paraguay ha venido a asumir como una suerte de ilegal puerta trasera tanto para Brasil como para Argentina: el régimen, que al reservar a la dirigencia política y militar que lo apoya lo mejor de los lucros del contrabando, se asegura a la vez de su lealtad, sólo se resignó a eliminar de los rubros del comercio ilegal el tráfico de drogas cuando se hizo evidente que la protección demasiado ostensible que venía otorgándoles era ya juzgada intolerable por Washington.

Esa clásica dictadura latinoamericana no ha logrado cerrar del todo Paraguay al fermento político e ideológico activo en el subcontinente, que se refleja por ejemplo en un incipiente movimiento campesino patrocinado desde las filas del clero; pero esas novedades no han inspirado desafíos más serios que los de los tradicionales partidos opositores y el proscrito y perseguido comunismo; a todos ellos responde el régimen con una represión que, aunque menos brutal y sistemática que la de épocas anteriores (de la que son reliquias algunos de los más antiguos prisioneros políticos del continente), no ha perdido su antigua eficacia.

He aquí no sólo experiencias cuya fuerte originalidad aleja de cualquier pauta común latinoamericana, como la mexicana, la cubana, la portorriqueña o la venezolana, sino también las frágiles democracias restauradas en Brasil y en el Cono Sur y por su parte las dictaduras nuevas y viejas que han logrado sobrevivir al primer impacto de la crisis de esta década, desde la chilena hasta la paraguaya, no han visto hasta hoy quebrado su marco institucional por la penuria en que viene viviendo Latinoamérica desde que ella se desencadenó. Si ello no autoriza a sacar conclusión ninguna acerca del futuro, proporciona con todo un desmentido suficientemente convincente a la noción (universalmente aceptada en la década del sesenta) que postulaba una correlación lineal entre crisis socioeconómicas y crisis institucionales.

Hay dos zonas latinoamericanas de las que esa inesperada estabilidad conoce excepciones: los países andinos y la América Central. En aquéllos la inestabilidad tiene modalidades e intensidad diferentes entre un país y otro, y en uno de ellos no se han hecho sentir con la misma eficacia que en los restantes: sin duda la reciente historia política de **Ecuador** no ha sido escasa en dramáticos golpes de escena que incluyeron más de una transformación del orden institucional, pero su incidencia no parece haberse agravado en comparación con épocas precedentes.

En 1972 el presidente Velasco Ibarra era derrocado por un golpe militar: pese a la tolerancia nueva que frente al temperamental caudillo había comenzado a mostrar el ejército, el prestigio que estaba adquiriendo el régimen instalado por los militares peruanos decidió a sus colegas ecuatorianos a tomar también a su cargo la gestión directa del poder, con un programa de reformas radicales calcado del aplicado ya en el país vecino. No iban a avanzar demasiado en esa dirección: habían esperado financiar ese programa con los ingresos del petróleo, explotado por empresas multinacionales en la Amazonia ecuatoriana, y la primera crisis petrolera parecía prometerlos cuantiosos. El gobierno militar procuró asegurarse la mayor parte de ellos, fijando volúmenes de producción y precios mínimos para la exportación más altos que los acordados en la OPEP. Las compañías decidieron hacer un ejemplo de ese antagonista que desdeñaba aliarse con los restantes productores, y cuyas ambiciones excedían las de éstos, y el petróleo ecuatoriano quedó marginado de los mercados mundiales.

Ello provocó una rectificación de la política petrolera, y bien pronto el entibiamiento del ardor reformista del régimen militar; en una transición facilitada por la progresiva pérdida del brillo del ejemplo peruano, el régimen pasó a promover una modernización agrícola en la que muy pocos grupos campesinos pudieron participar con éxito, y una expansión urbana apoyada en la más modesta del sector industrial. Perdida la confianza en su capacidad de guiar al país en la construcción de una sociedad mejor integrada y un orden político más estable, las fuerzas armadas perdieron también la voluntad de resistir la presión popular (en verdad no demasiado intensa) en favor del retorno al régimen constitucional.

Disipado finalmente el influjo de Velasco Ibarra, el ejército temía ahora el de Assad Buccaram, próspero comerciante árabe bajo cuyo liderazgo el populismo de la Concentración de Fuerzas Populares ganaba terreno más allá de su feudo electoral guayaquileño. Como la convocatoria electoral de 1978 lo excluía como candidato, lo reemplazó en ese papel su

sobrino Jaime Roldós, que bien pronto se perfiló como un agitador y dirigente de masas aún más eficaz. Su victoria, asegurada al ganar primero la mayoría relativa y luego la absoluta en los dos turnos electorales fijados por la ley (en julio de 1978 y abril de 1979), era la de un programa de reforma radical en lo interno (con aceleración de la agraria, e inversiones para el desarrollo rural de la costa y la selva) y de distancia frente a la línea estrictamente pro-norteamericana hasta entonces dominante.

Su acción de gobierno se vio trabada por la oposición de Buccaram, que se lanzó a la obstrucción parlamentaria buscando reconquistar su liderazgo político. Superado no sin esfuerzo ese obstáculo, en 1981 la muerte de Roldós en un accidente de helicóptero transfirió el poder al vicepresidente Osvaldo Hurtado, prestigioso sociólogo y militante democristiano, que no contaba con la base política necesaria para llevar adelante las reformas prometidas, que el impacto de la crisis de la deuda sobre un país que en la etapa militar había acumulado una de cinco mil millones de dólares hacía de todos modos imposibles de implementar.

La austeridad que Hurtado se vio obligado a adoptar facilitó en 1984 la estrecha victoria del candidato conservador León Febres Cordero, que proponía confiar al libre juego de las leyes del mercado la rehabilitación de la economía ecuatoriana. Sólo a fines de 1985 pudo el nuevo presidente reunir una ajustadísima mayoría parlamentaria dispuesta a apoyar su programa, en medio de choques frontales con los sectores mayoritarios perjudicados por él, que encontrarían la oportunidad para el desquite en las elecciones parlamentarias de junio de 1986, en las cuales la coalición conservadora sufrió una abrumadora derrota. Los esfuerzos del gobierno por alinear a las fuerzas armadas sobre su política sólo lograron que también sus relaciones con éstas se tornaran cada vez más tormentosas, hasta llegar al secuestro del presidente por un sector militar que contaba con amplias simpatías en el congreso; Febres Cordero sólo recuperó su libertad a cambio de exorbi-

tantes promesas que (aunque retiradas apenas liberado de su cautiverio) causaron daño irreparable a su imagen de gobernante celoso de su autoridad.

Mientras tanto la crisis de la deuda se tornaba cada vez más severa: las estancadas exportaciones petroleras, en todo caso incapaces de aliviarla, debieron ser suspendidas cuando el terremoto de 1987 cortó el oleoducto de la Amazonia a la costa, agravando así aún más la sombría situación económica. No es sorprendente entonces que en 1988 el candidato que ofrecía continuar la gestión de Febres Cordero desde la presidencia no haya figurado entre los dos más votados en el primer turno electoral, y que la batalla final por la sucesión deba librarse entre la oposición populista y la de una izquierda muy escasamente revolucionaria. Acaso lo más notable en ese curso tormentoso sea con todo que no haya venido a quebrar un marco institucional con el cual ni las tradiciones políticas vernáculas ni las inclinaciones profundas tanto de la elite militar como de la dirigencia política se identifican demasiado estrechamente.

Esa relativa estabilidad institucional se vincula sin duda con la menor intensidad y amplitud que han alcanzado en Ecuador (en comparación con el resto de las tierras andinas) las transformaciones socioeconómicas que subtienden las crisis políticas en curso, pero también con la menor gravitación que ha alcanzado allí la economía de la droga, que, al marginar en los restantes países andinos a sectores cada vez más significativos de la economía y la sociedad nacionales del área de autoridad de la ley, inflige a la del Estado una disminución que la torna menos capaz de afrontar los desafíos inspirados por una crisis sociopolítica cada vez más aguda.

Ambos factores de inestabilidad se hacen sentir en efecto tanto en Perú como en Bolivia y Colombia, pero con intensidad diferente en cada caso: mientras en Colombia el primero es claramente predominante, es en Perú donde el segundo se revela cada vez más claramente decisivo, y en Bolivia ambos aparecen absorbidos y como rutinizados en una crisis que no

se sabe si debe seguir llamándose así, hasta tal punto ha venido a constituirse en condición permanente de la vida nacional.

En **Colombia** iban a sucederse los vanos esfuerzos por devolver vigor a la vida política, sumida en el marasmo por la prolongada vigencia del Pacto Nacional. En 1974 Alfonso López Michelsen, el hijo del fundador de la Segunda República, que había capitaneado una disidencia liberal de izquierda, fue exitosamente propuesto al electorado por el partido liberal para suceder al opaco Pastrana Borrero, pero desde la presidencia no iba a encarar ningún esfuerzo innovador; en 1978, caducada la cláusula de alternancia de los partidos en la presidencia incluida en el Pacto Nacional, Gabriel Turbay, candidato que los sectores más tradicionales del liberalismo lograron imponer no sin lucha a los seguidores del reformismo de Lleras Restrepo, obtuvo una ajustadísima victoria sobre el candidato conservador Belisario Betancur, para presidir una etapa en que el pulso político colombiano alcanzó un diapasón aún más bajo; la impopularidad que iba a cosechar en el ejercicio del poder aseguró en 1982 la victoria a su rival derrotado en 1978.

Más que un triunfo del partido conservador, era ésta una consagración personal de Betancur, que en una persuasiva campaña se había comprometido a superar el inmovilismo político, promover el retorno al marco legal de los movimientos que seguían practicando la lucha armada, y atender a los problemas derivados de la acelerada urbanización y a los cada vez más agudos conflictos agrarios. Pese a que puso al servicio de ese programa una vastísima popularidad personal, no logró avanzar demasiado en su realización. Ni su partido, ni la fracción liberal que lo había acompañado en la elección dieron apoyo eficaz a sus propuestas económico-sociales, que incluían un plan de construcción de viviendas populares que por un momento suscitó vastas esperanzas. Las negociaciones con los movimientos clandestinos tuvieron éxito sólo parcial; lo que era más grave, esos movimientos estaban dejando de ser los responsables principales del avance de la violencia.

Sus tentativas de incidir sobre los conflictos agrarios fueron contrarrestados con éxito por las bandas organizadas para apoyar a los propietarios en su resistencia contra las reformas legales y la protesta campesina: en el Cauca medio, la amenaza de esas bandas era suficiente para disuadir al presidente y los miembros de su gabinete de visitar esa vasta zona en que la autoridad del Estado se hacía sentir de modo cada vez menos eficaz. Esa situación no reflejaba tan sólo la intensidad creciente de los conflictos sociales suscitados por la sostenida expansión de la agricultura tropical en grandes explotaciones: era a la vez uno de los síntomas de un colapso más general de la autoridad de un Estado que en Colombia se había consolidado más tarde y de modo más incompleto que en otras comarcas latinoamericanas. Junto con el impacto del conflicto social y de los movimientos armados refractarios a la pacificación, influía cada vez más en ese colapso el avance de la economía ilegal de la droga, que en Colombia había adquirido precozmente peso mayor que en el resto de Hispanoamérica.

Durante años los avances de esa economía, que tenían por teatro zonas claramente acotadas del territorio, apenas habían interferido con la vida administrativa y política de un Estado que por su parte se abstenía también de interferir agresivamente en ellos. Pero el crecimiento del tráfico ilegal (que estaba haciendo de los estupefacientes el primer rubro de las exportaciones colombianas) estaba otorgando a los señores de la droga un lugar en la vida nacional cada vez más espectable, y contradictorio con la marginalidad a la que hubiera debido relegarlos el carácter ilegal de sus actividades; pronto algunas figuras a las que la opinión identificaba íntimamente con el tráfico lograban, derrochando recursos insólitamente vastos, desplegar meteóricas carreras políticas...

Esas incongruencias se acentuaron durante la presidencia de Gabriel Turbay; ya para entonces muchos admitían la urgencia de superar esa contradicción, ya fuese legalizando el tráfico (solución que se sabía inaceptable a los Estados Uni-

dos), ya combatiéndolo de modo sistemático. La adopción del segundo camino (cada vez más urgida por los Estados Unidos, que aspiraba a cegar las fuentes ultramarinas del tráfico) provocó, como respuesta del sector ilegal, un inaudito despliegue de violencia, que vino a reavivar la surgida del conflicto social o de los movimientos clandestinos, que parecía estar por entonces perdiendo intensidad. Pronto se hizo difícil asignar una fuente única a cada uno de los actos violentos que se sucedían con frecuencia e intensidad crecientes: así, ya durante la presidencia de Betancur la captura de la Suprema Corte de Justicia por guerrilleros del movimiento M-19, que tuvo por respuesta la toma del edificio por el ejército, en una operación que costó la vida no solo de los atacantes sino de la mayor parte de los ministros del alto tribunal, fue sugestivamente acompañada de un incendio que destruyó la vasta documentación acumulada en un juicio contra el tráfico ilícito que había venido avanzando laboriosamente hasta entonces.

El episodio restó ímpetu a la política de pacificación a la que Betancur no quería renunciar, y que conservaría con todo eficacia suficiente para limitar (si no suprimir) las violaciones de derechos humanos que habían venido caracterizando a la represión de los movimientos guerrilleros. Este logro, y otros alcanzados por Betancur, no fueron suficientes para consolidar el alineamiento de fuerzas políticas dispuestas a salir del inmovilismo que era parte de la herencia del Pacto Nacional. Terminado su mandato, ni el candidato de su partido ni el del victorioso liberalismo tradicional se postulaban como sus continuadores, y el liberal disidente que reivindicaba en cambio su herencia atrajo sólo a una reducida minoría de electores.

La victoria del liberal Virgilio Barco parecía presagiar el retorno a la rutina política tan bien encarnada antes por Turbay; ello no iba a ser del todo así, no sólo porque el nuevo presidente se apresuró a proclamarse continuador de la política de su predecesor inmediato, que (aunque claramente agotada) hubiese sido peligroso repudiar sin contar con alternativas para ella, sino porque la situación se había deteriorado dema-

siado para que cualquier retorno a la rutina fuese posible. Mientras los Estados Unidos exigían con urgencia creciente un combate más enérgico contra el tráfico ilícito, el tan dudosamente eficaz que el gobierno colombiano era capaz de sostener provocaba en respuesta asesinatos cada vez más numerosos de magistrados y funcionarios, y finalmente de un integrante del gabinete nacional. A la vez, el uso de la violencia se extendía cada vez más lejos de las áreas críticas de la vida colombiana; aun periodistas poco discretos en sus informaciones y comentarios eran invitados a dejar el país si querían salvar la vida, y aunque las invitaciones eran anónimas ello no las hacía menos dignas de ser tomadas en serio...

Colombia ha venido así a quedar capturada en la espiral de una violencia cuya creciente intensidad no podría explicarse por la del conflicto político o de las tensiones sociales. En lo que toca a estas últimas, gracias en buena medida al vigor de las exportaciones ilegales, las crisis del sector externo y sus secuelas (inflación aguda e intensificación de los conflictos sociales en torno a la distribución del ingreso) han sido en Colombia comparativamente leves; por añadidura los efectos combinados del ingreso de las divisas de la droga y de la cautela de los responsables de las finanzas nacionales durante los años de loca abundancia de crédito hacen que la gravitación de la deuda sea también ella excepcionalmente leve. Todo eso ha facilitado el crecimiento de la economía, en un contexto social que tanto en el campo como en las ciudades en vertiginoso crecimiento es muy duro para los sectores populares, pero no más que en países que se hallan muy lejos del retorno a un estado de naturaleza muy hobbesiano que en Colombia ha dejado ya de ser un peligro remoto.

Si en Colombia es sobre todo la gravitación de la economía ilegal la que dota a las tensiones que atraviesan el resto de la sociedad de efectos devastadores, en **Perú** la razón principal de violencia creciente son sin duda esas tensiones mismas. Ese país está hoy atravesando un proceso necesariamente contra-

dictorio y doloroso de unificación social y cultural, en que el éxodo rural y el crecimiento urbano están provocando por fin la íntima confrontación entre la nación india de la sierra central y meridional, y la criolla, africana y mestiza heredera de la colonización hispana en la costa. Esa transición de suyo difícil lo es aún más porque encuentra hoy un estímulo más poderoso en la crisis profunda de la sociedad rural serrana que en la atracción ejercida por un polo urbano e industrial que desde hace más de una década ha perdido mucho de su vigor.

Pero hay otro factor que hace aún más difícil esa transición: es la ambigua herencia de la audaz reestructuración social y política intentada por el gobierno de la fuerza armada instalado en 1968. Entre sus instrumentos básicos, la reforma agraria, comenzada en la costa, transformó a las plantaciones azucareras y algodoneras en explotaciones cooperativas; el propósito –más político que social– era destruir la base sindical del APRA en su sólido norte. En esto la reforma alcanzó éxito muy limitado: aunque los dirigentes políticos y sindicales apristas tenían cerrado por ley el acceso al gobierno de las cooperativas, la abrumadora presencia del partido en la zona le aseguró gravitación decisiva sobre ellas. Si el impacto social de la reforma fue considerable (los antiguos peones, ahora cooperativistas, mejoraron muy considerablemente su nivel de ingresos), él no alcanzó al resto de una población rural que seguía encontrando empleo sólo ocasional en las antiguas haciendas; su impacto económico fue menos significativo, ya que la estructura productiva de las fincas afectadas varió mucho menos de lo que podía haberse supuesto.

En la sierra la reforma agraria planteaba problemas más difíciles, en parte porque allí eran más variadas las formas de propiedad y tenencia que ambicionaba reemplazar: mientras afectó sólo marginal y tardíamente a las comunidades y menos aún a las pequeñas propiedades parcelarias, se concentró en cambio en las grandes y medianas haciendas, que buscó reorganizar en las llamadas SAIS (sociedades agrícolas de interés social). Más que el impacto de esa reforma se hizo sentir sin

embargo el de las nuevas empresas estatales de comercialización de los productos serranos (tanto los agrícolas como la lana). Por añadidura, a diferencia de lo que ocurría con las reformadas plantaciones costeñas, faltaron aquí inversiones públicas destinadas a mejorar el rendimiento de la agricultura serrana. El resultado fue el estancamiento productivo y un acceso menos fluido a los mercados tradicionales, que tuvo por consecuencia una aceleración de la emigración rural y un aumento progresivo de las tensiones sociales, a las que la desaparición de los terratenientes, foco tradicional de la hostilidad del resto de la sociedad campesina, tornaba a la vez más difusas.

Las diferencias entre la reforma agraria costeña y serrana reflejaban otro rasgo más general del reformismo militar: su proyecto, que se cobijaba bajo el recuerdo de Tupac Amaru, símbolo de la rebelión india y serrana, marginaba de hecho a la sierra indígena de sus esfuerzos redistributivos, y aun fuera de ella su impacto sobre la población de más bajos ingresos era insignificante, cuando no negativo.

El que iba a alcanzar en las zonas más modernizadas fue con todo muy considerable. Aquí la expansión vertiginosa del sector estatal tenía efectos más matizados que los casi exclusivamente negativos alcanzados en la sierra. Ella se extendía ahora desde sectores productivos donde debía suplir la ausencia del sector privado (como el siderúrgico, que iba a ampliar muy considerablemente) a otros en que por el contrario se sustituía a empresas privadas (extranjeras en el caso del petróleo, nacionales en el de la pesca); en sus avances el Estado se orientaba tanto hacia industrias extractivas con cuyos lucros se proponía ampliar sus propios recursos, como a otras productoras de insumos ofrecidos a precios subvencionados a las empresas en su mayoría nacionales que producían para el consumo interno. Aquí el Estado debió avanzar más lejos de lo previsto para llenar los vacíos dejados por la retracción de las empresas extranjeras, más completa de lo que los responsables de la gestión militar habían esperado al expulsarlas de áreas cuidadosamente circunscriptas de la economía nacional.

La reordenación de la economía se completaba con una inmediata mejora de los salarios en la industria, y debía culminar con la transformación de las empresas privadas de ese sector en organizaciones comunitarias sobre las cuales los trabajadores debían adquirir paulatinamente control mayoritario; pero el proyecto, que de hecho venía a imponerles una suerte de ahorro forzoso, fue tan fríamente recibido por éstos como por los empresarios, y bien pronto abandonado.

Los primeros años de gobierno militar fueron de reactivación económica e inflación en descenso, y ello hubiera sin duda hecho más fácil a los gobernantes organizar los apoyos que sus iniciativas reformistas les estaban brindando en la sociedad peruana. En 1971 la creación de SINAMOS (sigla del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social), confiada por el gobierno militar a antiguos dirigentes de la izquierda política y guerrillera, ansiosos de dotar al régimen de una base de masas, fue un primer paso en esa dirección, pero no iba a ser seguido de otros. Lo iba a impedir tanto la heterogeneidad ideológica del cuerpo de oficiales como la preocupación de éste por conservar el control corporativo del proceso en marcha, que militaban ambos contra una solución destinada a hacer del presidente Velasco Alvarado un caudillo cuyo séquito político personal le concedería considerable autonomía frente a sus camaradas.

Sin duda, la falta de movilización popular contribuyó tanto como la temporaria bonanza económica a hacer posible que la más audaz experiencia reformista conocida por Perú no suscitase reacciones negativas más intensas que el zumbón despego de las clases medias y altas por los nuevos dirigentes, y que innovaciones tan urticantes como la supresión de la autonomía universitaria, la incautación de los mayores diarios limeños (entre ellos *El Comercio* y *La Prensa*, tradicionales voceros de distintos matices del pensamiento oligárquico) y la disolución de la Sociedad Nacional Agraria, fortaleza de la clase terrateniente, provocaran reacciones tan tenues que el régimen pudo superarlas sin abandonar la extrema mesura en

el uso de la represión que lo había caracterizado desde el comienzo.

Pero el estilo adoptado por el reformismo militar, tan cercano al del reformismo borbónico, comenzó a desplegar sus consecuencias negativas a partir de 1973, cuando su gestión entró en una zona de dificultades crecientes, resultado no sólo de decisiones que se revelaron infortunadas (así, la nacionalización de la industria pesquera fue seguida de una explotación demasiado intensa, que allegó recursos adicionales al fisco, pero estuvo muy cerca de exterminar a la anchoveta; por su parte el costo elevadísimo del oleoducto de la Amazonia a la costa no pudo ser amortizado tan rápidamente como se había esperado, ya que las reservas petroleras peruanas eran mucho más exiguas de lo previsto) pero sobre todo a las consecuencias de un estilo empresario marcado por la inexperiencia, y de una corrupción que comenzaba a hacerse presente aún en niveles muy altos del nuevo equipo gobernante.

La adversidad económica suscitó una movilización cada vez más amplia y agresiva de los sectores urbanos y mineros, bajo el signo de un izquierdismo que el gobierno había comenzado por favorecer en la esperanza de que socavase las fortalezas políticas y sindicales apristas, y que ahora (bajo inspiración trotskysta o maoísta) daba vida a una oposición más dinámica que la del aprismo, al cual el deseo de salvar la existencia legal que por primera vez le había sido reconocida por un gobierno militar incitaba a la prudencia, y el comunismo, que –satisfecho de haber ampliado su base sindical con el favor militar– se mostraba también poco dispuesto a nuevas aventuras. Ante ese malestar creciente, el régimen militar debía optar entre un autoritarismo ahora desembozadamente represivo y una liquidación ordenada de la aventura emprendida en 1968: en 1975 el reemplazo al frente del gobierno del general Velasco Alvarado, identificado con un activismo reformista ya clamorosamente agotado, por el general Morales Bermúdez, implicaba ya una opción por la segunda alternativa.

Y también una rectificación de la línea económica: Perú, que había acumulado (en parte debido a un desenfrenado programa armamentista) una pesada deuda externa, se veía forzado a escuchar respetuosamente los consejos del Fondo Monetario Internacional, en la esperanza de ganar acceso al crédito y la inversión extranjeros. La política se orientó también hacia cauces más convencionales: una asamblea constituyente fue convocada para 1978, y en ella, mientras el aprismo mantenía su caudal histórico, sobrepasando levemente el tercio del electorado, los partidos de izquierda en su conjunto alcanzaban inesperadamente esa marca, mientras el Popular Cristiano, nueva versión de la derecha capitaneada por Luis Bedoya, un dinámico ex alcalde de Lima cuya popularidad no se limitaba a las clases altas, alcanzaba un cuarto de los votos. Para entonces los herederos del fracasado experimento militar se habían ya resignado a ver a Haya de la Torre ocupar la presidencia de la asamblea constituyente.

Pero la transformación del APRA en el más importante de los interlocutores del ejército en retirada iba a influir (aun más que la muerte de Haya de la Torre) en la derrota que sufrió en las elecciones presidenciales de 1980. La rotunda victoria que en ellas alcanzó Fernando Belaúnde premiaba la negativa de su partido a participar en la asamblea constituyente, que le permitió ahora presentarse no sólo como la víctima del despojo militar de 1968, sino como la única formación política que nunca había transado con un régimen ahora abrumadoramente impopular.

El nuevo Congreso reflejaba mejor el impacto del experimento militar en el equilibrio partidario; reducido el APRA a su fortaleza norteña, en Lima tanto la derecha como la Izquierda Unida (a la que se habían incorporado los comunistas, y que pronto iba a encontrar en un independiente, Alfonso Barrantes, a un caudillo urbano de vasto séquito personal) habían sobrevivido, aunque maltrechas, el alud belaundista, mientras en la sierra centromeridional la victoria de Acción Popular era la de esos gamonales que nadie había esperado

ver resurgir incólumes de la remezón social desencadenada por el reformismo militar.

Esos resultados daban al presidente una cómoda mayoría en la cámara de diputados y lo aseguraban contra la hostilidad del senado. Su gestión iba a ser sin embargo tormentosa: las dificultades del sector externo arreciaron, y el peso de la deuda se tornó cada vez más abrumador: hasta donde llegaba la mirada, el horizonte futuro de la economía peruana se anunciaba monótamente desolado. Bajo la guía del primer ministro Ulloa, la solución iba a buscarse en un ortodoxo liberalismo económico; aunque se iba a lograr una leve mejora (entre otras razones, porque las exportaciones del sector ilegal se expandían cada vez más rápidamente) el costo social fue muy alto, y las confrontaciones con el aguerrido movimiento sindical se tornaron crónicas. En 1982 Ulloa se retiraba del gobierno, cuya gestión perdió con ello firmeza, sin lograr satisfacer mejor las demandas de los sectores populares. Las elecciones parciales de 1983, que reflejaron el derrumbe de Acción Popular y los avances del APRA y sobre todo en Lima de Izquierda Unida, marcaron el inicio de la larga batalla que por la sucesión presidencial iban a librar estas dos últimas formaciones políticas.

Mientras ni el avance de la izquierda vieja y la nueva, ni la agudización del conflicto social movían a las fuerzas armadas a amenazar el orden institucional, otra amenaza de origen muy distinto comenzaba a cubrir el horizonte. Era la de una de las fracciones maoístas desgajadas del partido comunista, cuyo nombre incorporaba la consigna de Avanzar por el Sendero Luminoso de Mariátegui: a medida que se transformaba en movimiento guerrillero, ese nombre sería abreviado en el Sendero Luminoso y finalmente Sendero, con los cuales comenzó a adquirir celebridad desde que logró establecer en Ayacucho un foco insurgente que iba a resistir con éxito a reiteradas tentativas de desarraigarlo.

Entre los cuadros senderistas abundaban los estudiantes de la universidad local (un exprofesor de ella era el misterioso

ideólogo y –se afirmaba– jefe supremo del movimiento). Pero éstos se parecían muy poco a los que dos décadas antes habían buscado en vano insertarse desde fuera en el mundo serrano: entre las transformaciones que acompañaron el experimento militar contaba la ampliación multitudinaria de la masa estudiantil, reclutada ahora en niveles sociales decididamente más populares que esa empobrecida aristocracia provinciana y esa pequeña burguesía limeña cuyos hijos habían dominado el grupo fundador del APRA. Los de Ayacucho no necesitaban entonces echar raíces en un mundo campesino y fuertemente indígena que era por origen el suyo; aun así es sorprendente la rapidez con que su desafío violento al orden establecido logró insertarse en el complejo juego de conflictos sociopolíticos de un rincón andino en confusa transición.

Sin duda facilitaba esa inserción la circunstancia de que el experimento militar, al eliminar del horizonte social a los terratenientes, había vuelto a hacer del Estado, cuya presencia tomaba formas cada vez más complejas y variadas, el representante por excelencia de un orden que, a través de modalidades cambiantes, perpetúa la subordinación de la etnia conquistada. Esa situación, más cercana a la de la era colonial que a la de la república oligárquica, aceleró la apertura de las masas campesinas hacia la lucha que Sendero libra contra todos los representantes de la presencia estatal, consumada cuando la guerrilla se reveló capaz de sobrevivir a las primeras campañas que buscaron extirparla.

Aunque algunos rasgos del actual contexto serrano puedan traer a la memoria el de tiempos coloniales, el Perú de hoy es desde luego muy distinto del de la colonia. En la Lima en que se agolpan más de seis millones de habitantes (un tercio de la población del país), traídos por sucesivas oleadas serranas en las cuales son numerosos los fugitivos de la pobreza (ahora de la violencia) de Ayacucho, Sendero Luminoso comenzó pronto a echar también raíces; ya para 1982 su capacidad de acción sorpresiva y su dominio de las barriadas se reflejaban en episodios que estaban haciéndose rutinarios, en los cuales, cor-

tada la corriente eléctrica, los limenos podían ver recortarse en los cerros poblados por los migrantes la silueta roja de la hoz y el martillo, trazada con innumerables antorchas por los adictos al movimiento.

Al terminar en 1985 el período presidencial de Belaúnde, Ayacucho se había transformado ya para el ejército en tierra enemiga, en que la violencia y las represalias de Sendero respondían a las de una represión indiscriminada y feroz; Lima por su parte había comenzado a vivir bajo el toque de queda. Ello no restó vivacidad a la vida política y al conflicto social; mientras el gobierno y el ejército se abstenían cuidadosamente de englobar a la izquierda política y sindical en su campaña antisubversiva, esa izquierda mantenía por su parte frente a la guerrilla una cautela inspirada no sólo en el deseo de no arriesgar la legalidad que así le era reconocida, sino también en su recelo frente a un movimiento de alarmante metodología y aún más alarmante indefinición programática.

La elección presidencial, transformada en un duelo entre el APRA y la izquierda, aseguró a la primera una victoria sin precedentes, que dio la presidencia a Alan García. El joven candidato, favorito primero de la derecha aprista, se había apartado ya de ésta para retomar los temas antiimperialistas tan importantes en la prehistoria del partido, de los que ofrecía como corolarios el apoyo a la Nicaragua sandinista y la desafiante promesa de limitar el pago del servicio anual de la deuda externa a un 10 por 100 del ingreso generado por las exportaciones peruanas.

Se aseguró con ello la benevolencia de la izquierda, mientras el abandono de la austeridad practicada por Belaúnde, que se reflejó en un aumento de los salarios reales y una rápida expansión de la producción y el consumo, con inflación en baja, lo rodeó de una popularidad sin precedentes. Ni aun cuando, fracasadas las negociaciones con los jefes guerrilleros, una masacre de los encarcelados en una cárcel de Lima, que a juicio de los represores militares debía decapitar el movimiento, pero sólo logró enconarlo, hizo menos fácil creer

que el presidente estaba tan apegado a la defensa de los derechos humanos como gustaba proclamarlo, se enfrió el entusiasmo popular que lo rodeaba.

Éste iba a sufrir más al cesar la ola expansiva, que una vez más detuvo su avance al alcanzarse la utilización plena de la capacidad productiva mantenida ociosa durante la previa austeridad. La izquierda, demasiado cercana esta vez al gobierno, hallaba difícil explotar políticamente la nueva situación, que García buscó afrontar con un proyecto de nacionalización de la banca; la reacción considerablemente escéptica que él suscitó dio oportunidad para el ingreso en escena de una nueva derecha populista que propone a la libertad de empresa como instrumento de redención política y económica para las masas peruanas, y ha encontrado en el novelista Mario Vargas Llosa a un vocero elocuente. Mientras tanto nuevos focos senderistas emergen desde el centro-norte serrano (donde su presencia confluye con la de los señores de la droga para socavar el control del Estado) hasta el linde con Bolivia, y otro movimiento clandestino, amparado en el nombre de Tupac Amaru y más dispuesto a combinar la acción violenta con otras tácticas políticas, disputa a Sendero el predominio en Lima. Perú se interna así en una crisis cada vez más generalizada y profunda, que, aunque sorprendentemente no ha logrado hasta ahora un régimen político-institucional tradicionalmente frágil, ha cambiado los datos mismos de la vida cotidiana de la mayoría de los peruanos, hoy marcada por penuria e inseguridad crecientes.

Siempre abrumada por el legado de su inconclusa revolución de 1952, **Bolivia** sufre una situación en parte comparable. Muerto en 1969 el general Barrientos, su tentativa de reorientar la política boliviana en sentido conservador y pro-norteamericano, apoyándose para ello en una alianza militar-campesina, iba a ser gradualmente abandonada por su sucesor y antiguo rival el general Ovando, que parecía aspirar a reconstruir el frente triunfante en 1952, reincorporando a la alianza

a los mineros, cuyas organizaciones devolvió a la legalidad, y a los sectores radicales urbanos. No lo logró, y al sector más radical de las fuerzas armadas le impuso como sucesor al general Juan José Torres, que prohijó un resurgimiento de la agitación política a través de la convocatoria de una Asamblea del Pueblo, en que movimientos partidarios y sindicales de izquierda discutían las más extremas propuestas de cambio. La alarma se extendió entonces en las filas del ejército, que nunca había dado apoyo unánime a Torres.

En 1971 un golpe militar lo expulsaba del poder; lo reemplazó el coronel Augusto Banzer, jefe del movimiento insurreccional, que iba a gobernar hasta 1978, como titular de la más prolongada dictadura militar del siglo XX boliviano. La solidez de su régimen se debió menos a la intensidad de una represión que no vacilaba en acudir a métodos brutales que a la bonanza petrolera y crediticia de la década, que ofreció alivio temporario a la economía. Aunque ni la expansión de la producción petrolera ni la exitosa apertura al crédito externo provocaron una ampliación perdurable del aparato productivo, al reactivar la economía urbana ampliaron el mercado de la agricultura nacional, y crearon nuevas oportunidades de trabajo que tornaron menos conflictivo el gradual desmantelamiento de la siempre deficitaria minería del estaño, que iba a avanzar considerablemente en esta etapa.

El alivio económico restó algo de su militancia a un sentimiento opositor que seguía siendo claramente mayoritario, como pudo advertirse en 1978, cuando Banzer decidió darse por sucesor en la presidencia al general Pereda Asbún. El fraude que aseguró la victoria electoral de éste fue tan escandaloso que Pereda Asbún decidió tomar el poder sólo interinamente, y con el compromiso de organizar elecciones honradas para 1980. La oposición largamente reprimida se tornó a partir de entonces irrefrenable, y el ejército prefirió encomendar esa tarea al general David Padilla, a la vez que adelantaba la fecha comicial a julio de 1979.

Las elecciones volvieron a reflejar la quiebra ya irremediable del antiguo frente revolucionario. Las dos fracciones más numerosas del MNR se habían constituido en núcleos de coaliciones electorales rivales; mientras la más moderada tenía a su frente a Víctor Paz Estenssoro, la más izquierdista levantaba la candidatura del ex presidente Hernán Siles Suazo; ninguno de los rivales obtuvo mayoría absoluta, y sus fuerzas estaban demasiado equilibradas en el congreso para que éste pudiera elegir entre ambos, tal como lo prescribía la constitución. La *impasse* dio oportunidad a un golpe militar, resistido con éxito por la fiera oposición de mineros y poblaciones urbanas y rurales. El restaurado Congreso, desesperando de resolver el dilema, encomendó interinamente el poder ejecutivo a su presidente, Lidia Gueiler, veterana de la insurrección paceña de 1952 que convocó en junio de 1980 a nuevas elecciones, en las cuales la coalición de izquierda obtuvo una ajustada victoria para Siles Suazo.

La respuesta fue un nuevo golpe militar, que colocó en el gobierno al general García Meza. Con el asesoramiento de agentes del gobierno militar argentino, el nuevo dictador lanzó una represión de brutalidad sin precedentes en la historia reciente de Bolivia, pero sólo por breve tiempo logró contener las resistencias que acababan de frustrar dos previas intentonas militares.

El sentimiento opositor crecía ahora junto con la penuria que, agotadas ya la bonanza petrolera y la crediticia, estaba reemplazando a la pálida prosperidad de la década anterior. En esa trágica coyuntura, un solo sector de la economía aceleraba aun más su ya firme ritmo de avance: era desde luego el ilegal, que contó con el desembozado apoyo de García Meza; al caracterizar a su régimen como narcofascista sus adversarios estaban lejos de incurrir en una calumnia.

En agosto de 1981, ante la imposibilidad de quebrar las movilizaciones opositoras, García Meza dejaba paso a un interinato militar, que se resignó finalmente a convocar al Congreso disuelto por el golpe de 1980. De este modo llegaba a la

presidencia Siles Suazo, quien, tras de consolidar su posición mediante la depuración del cuerpo de oficiales, pasó a encarar los angustiosos problemas de la economía, debilitada tanto por el fin de bonanza como por los dos años de constantes turbulencias que habían socavado el predominio militar.

La recesión heredada no daba signos de amainar, y aunque la inflación ganaba ímpetu, los mismos sectores políticos y sociales que habían llevado a Siles a la presidencia iban a oponerse con éxito a las medidas que éste buscó introducir para ponerle freno. Dos años después de asumir el poder, con una inflación ya cercana al 1000 por 100 y habiendo abandonado totalmente el servicio de la deuda externa, el presidente debía confesarse incapaz de dominar tanto el proceso político como el económico; mientras la coalición que lo había llevado al poder comenzaba a disgregarse, se resolvió a llamar a elecciones anticipadas, en las cuales, con una participación electoral más baja de lo habitual, el ex presidente Banzer, a quien la penuria de los tiempos que siguieron a su caída estaba por primera vez dotando de popularidad, sobrepasó por estrecho margen a Víctor Paz Estenssoro, elegido sin embargo presidente por el congreso con los votos combinados de sus adictos y de las distintas formaciones de izquierda.

El gobierno de Siles Suazo se había revelado también impotente frente a los avances de la droga; sus esfuerzos por desarraigar al único sector vigoroso de la economía exportadora mostraron que éste no necesitaba del auxilio de la derecha para sobrevivir: en su favor militaban no sólo las complicidades con que contaba en el aparato administrativo y militar, sino también la fiereza con que los campesinos de las áreas productoras defendieron sus medios de subsistencia, que en un contexto político democratizado se hacía menos fácil ignorar. Urgido por la presión creciente de los Estados Unidos, Paz Estenssoro iba a intentar un combate más enérgico, y llegaría a autorizar la presencia de fuerzas norteamericanas en la zona de producción de la droga. Aunque el muy publicitado *raid* contra los laboratorios clandestinos de cocaína que esas fuerzas protagoni-

zaron fue muy poco exitoso, y la izquierda denunció como atentatoria de la soberanía nacional a una presencia militar extranjera que no contaba con autorización legislativa, la opinión reaccionó de modo menos vehemente de lo que hubiese podido esperarse; en ello influía, quizá más que el cambio de clima político-ideológico señalado más arriba, la urgencia que la crisis socioeconómica conserva en Bolivia, que hace difícil otorgar atención plena a temas desvinculados de ella.

Esa crisis es en efecto ya la protagonista permanente de la vida boliviana. Para afrontarla Paz Estenssoro, luego de un período de inacción en el cual la inflación alcanzó niveles que la hicieron por fin universalmente insoportable aún en un país largamente acostumbrado a ella, lanzó un programa muy cercano al de la derecha boliviana. Éste tuvo razonable éxito en sus aspectos monetarios, ya que la contención del gasto público y el continuado ingreso de los dólares del tráfico se reflejaron en una aproximativa estabilización del nuevo circulante. Pero la baja del gasto se apoyaba en la de los salarios de los empleados estatales a niveles a la larga insostenibles; los intentos de reestructurar el gasto público recortando los subsidios a la minería del estaño tropezaron una vez más con la resistencia indomeñable de los trabajadores de las minas; en septiembre de 1986 el gobierno se inclinaba ante ella, al aceptar la mediación en el conflicto de la Iglesia católica, que se había pronunciado ya contra su política minera.

La crisis que domina permanentemente el horizonte boliviano es desde luego la misma que azota a casi toda Latinoamérica, pero es también la de una revolución que ha creado un equilibrio demasiado estable entre los heterogéneos herederos de su triunfo. Las alternativas de las últimas décadas de historia boliviana (invasiones militares de la cuenca minera, bloqueos campesinos dirigidos a veces contra el todopoder minero, a veces contra el de regímenes dominados por el ejército, alzamientos urbanos contra estos últimos) sólo introducen nuevos puntos de inflexión en un ciclo que el país parece condenado a recorrer indefinidamente. Pero en esa Bolivia

que parece encerrada en un laberinto sin salida continúan a pesar de todo avanzando las transformaciones desencadenadas a partir de la revolución de 1952: la ampliación de los lazos mercantiles entre ciudad y campaña se suma a las innovaciones políticas y sociales que aquélla introdujo para perfilar un esbozo de nación boliviana en el territorio en que habían convivido por siglos dos naciones diferentes. A ese proceso necesariamente conflictivo, que en Perú parece avanzar a tientas, la revolución, aunque no fue capaz de fijarle un rumbo y una meta, logró por lo menos ofrecerle un cauce. Quizá por eso mismo, mientras en Perú, como por otra parte en Argentina o Uruguay, el reflujo de la reciente marea militar-autoritaria es sobre todo consecuencia del fracaso de los regímenes que ella elevó al poder, en Bolivia es ante todo fruto de las reiteradas victorias de una movilización social y política que (aunque insanablemente dividida contra sí misma) ha adquirido un vigor y una seguridad de sí que hubiese sido difícil profetizar en la Bolivia del antiguo régimen.

La intensidad que ha alcanzado el conflicto sociopolítico en los países andinos, favorecida por el efecto disgregador que sobre sus estructuras estatales y administrativas ha tenido el avance de la economía ilegal, se nutre sobre todo de la incidencia excepcional alcanzada por transformaciones socioeconómicas por otra parte muy rápidas, y del carácter incipiente de las estructuras nacionales o estatales. En América Central, junto con otras transformaciones socioeconómicas apenas menos intensas, incide otro factor aún más poderoso para orientar hacia la confrontación violenta a conflictos que acaso hubiesen podido tomar rumbos menos devastadores: es la participación cada vez más activa en esos conflictos de los Estados Unidos, que a partir de 1981 parecen haber descubierto en el istmo un teatro de elección para su reactivado conflicto en el bloque socialista.

Por grandes que sean las responsabilidades de la potencia dominante por la desoladora situación de **América Central**, los

orígenes de ésta se hallan sin embargo en la región misma, atravesada de conflictos muy profundos y ramificados. En su prehistoria inmediata gravita la coyuntura económica difícil que a fines de la década de 1960 reemplazó a la larga prosperidad de postguerra. Pero también se hace sentir la diversificación económica que ya antes había venido acentuando las desigualdades sociales en el campo, con consecuencias negativas que se hacían sentir más desde que la nueva coyuntura aceleró el agotamiento del avance industrializador y restó dinamismo a la economía urbana, haciendo menos atractiva la migración a las ciudades.

Son éstas algunas de las claves de los conflictos armados que se arrastran desde hace largos años en Guatemala y El Salvador. Pero junto con ese rasgo común, y esencialmente negativo, los que afrontan ambos países presentan diferencias profundas. El de **Guatemala** tiene una prehistoria más extensa; ya para 1970 la presencia insurreccional, a la vez indesarraigable e incapaz de avances decisivos, parecía tan permanente como los regímenes militares surgidos de elecciones amañadas, que seguían manteniendo la ferocidad de sus tácticas represivas.

Tras esa historia monótonamente cruel se adivina el impacto de los rápidos avances de la productividad agrícola, que estaba devolviendo viabilidad económica a las comunidades indígenas (que desde comienzos de siglo habían sobrevivido ofreciendo mano de obra temporaria a la agricultura de hacienda). Esa innovación no sólo era perturbadora para la gran agricultura: hacía más tentador el asalto final al patrimonio territorial del campesinado indígena, que un siglo de predominio liberal no había logrado liquidar. El combate contra la guerrilla rural vino a asociarse así con la expropiación de los campesinos, en beneficio sobre todo de nuevos propietarios surgidos del cuerpo de oficiales; ello iba a ofrecer nuevo acicate a la llamada lucha antisubversiva, a la que tornaba a la vez aun más feroz. Esa tragedia rural se acompañaba con una represión indiscriminada de la protesta urbana por medio de asesinatos oficiosos que buscaban sus víctimas en la oposi-

ción política, sindical y estudiantil, pero también en grupos profesionales e intelectuales tenidos por poco seguros ideológicamente.

El golpe militar de 1982 introdujo un hecho nuevo, y no sólo porque llevaba al gobierno a un ferviente converso al protestantismo evangélico. El coronel Ríos Montt hizo cesar el terrorismo oficioso dirigido contra la oposición urbana para concentrar la represión en las zonas rurales disputadas por la guerrilla, donde logró revertir los avances de ésta, mientras la brutalidad creciente del conflicto y las represalias agravaban el éxodo de las zonas afectadas, una parte del cual se volcó en el sur de México. Esos éxitos no impidieron que Ríos Montt fuese derrocado en 1983; la derecha política, que se resignaba mal a renunciar al terror urbano, y las jerarquías militares que, acostumbradas a obtener ventajas muy tangibles de su dominio del Estado, descubrían con indignada sorpresa que el nuevo gobernante tomaba en serio sus promesas de moralización administrativa, se acordaron para reemplazarlo con el general Mejía Víctores, que volvió de inmediato a cauces más tradicionales.

En 1985 el viento redemocratizador que soplaba en Latinoamérica alcanzó a Guatemala; por primera vez desde 1966, iba a ser tolerada la victoria electoral de un candidato que no era expresión del sector dominante de las fuerzas armadas. Era éste el demócrata cristiano Vinicio Cerezo, que parece advertir muy bien los límites que a su libertad de acción impone el influjo del ejército; gracias a ello ha podido alcanzarse una no siempre plácida coexistencia entre el poder permanente de éste y el institucionalmente soberano encabezado por el jefe del ejecutivo. Ella no ha devuelto al país ni aun a una aproximativa normalidad; particularmente en el campo la violencia represiva sigue reinando, y la corriente de retorno de refugiados, que en un momento pareció insinuarse, se ha detenido en consecuencia. En las ciudades y en particular en la capital la nueva situación está haciendo con todo posible un cauteloso resurgir de las corrientes de centro e izquierda, cuya destruc-

ción había sido objetivo del terrorismo. Ésta es recibida con escándalo por la derecha política, que no cesa de incitar a sus aliados militares a poner fin al ensayo de restauración constitucional.

En **El Salvador**, en cambio, la crisis, aunque ya anunciada por la matanza de 1932, sólo brotaría a la superficie a comienzos de la década de 1970. En 1972 la victoria del jefe de la democracia cristiana, José Napoleón Duarte, en las elecciones presidenciales, es desconocida por la alianza oligárquico-militar en el poder, y las protestas de la víctima de ese despojo tienen por respuesta su prisión, tortura y finalmente exilio. El régimen que de ese modo sobrevivió al desafío electoral iba a afrontar pronto el de la guerrilla, al que respondió con una represión que, como en Guatemala, iba a ser más brutal que eficaz. La derecha política y sus aliados militares utilizaron aquí también la emergencia para detener el avance de la oposición política y sindical de base urbana un uso sistemático de terrorismo.

Así el país parecía encaminarse a la guerra civil; en 1979 un golpe militar buscó evitarla instalando a una junta que se proclamaba dispuesta a emprender drásticas reformas y favorecer la pacificación. Ello enconó tanto a la derecha (que en El Salvador sigue siendo -de modo mucho más directo que en Guatemala- la expresión política de una reducida elite económica de base terrateniente) como a sus aliados en las fuerzas armadas, que habían retenido posiciones tanto en la junta como en el gabinete ministerial; ambos acentuaron el terrorismo urbano y la brutalidad en la lucha antiguerrillera; ello provocó en la junta de gobierno la crisis que habían previsto, y que se resolvió en favor de los sectores más conservadores. Éstos reconstituyeron la junta dándole por presidente a José Napoleón Duarte, en garantía de apoyo al programa reformista y democratizador del movimiento de 1979, que no hubieran podido repudiar sin poner en peligro la ayuda que venía dispensándoles el gobierno de Carter.

Duarte no renunció a llevar adelante la reforma agraria decretada en la etapa anterior, y se ganó con ello la hostilidad

implacable de la elite económica. Pero la reforma no iba a arraigar fácilmente en el terreno: más que las decisiones de la Junta estaban gravitando sobre la vida salvadoreña el recrudecimiento del terrorismo oficioso, arma de la derecha contra la prometida democratización, y el de la brutalidad militar en la represión de la guerrilla, que estaba transformando el tercio oriental del breve territorio nacional en zona de guerra de donde las poblaciones huían en masa. Entre las víctimas, que se contaron ahora por millares, figurarían no pocos dirigentes de la oposición política y sindical, y también el arzobispo de San Salvador, que venía denunciando infatigablemente las masacres en curso, y cayó asesinado mientras oficiaba misa en su catedral.

El terrorismo logró así liquidar a la oposición política y paralizar todo esfuerzo reformista; aunque sus excesos no dejaron de causar escándalo, sobre todo cuando cobraron víctimas norteamericanas (que iban a incluir desde monjas cuyo celo en auxilio de los pobres era juzgado excesivo por la opinión conservadora local, hasta asesores destacados por el movimiento sindical norteamericano ante organizaciones campesinas salvadoreñas) no pusieron en peligro la ayuda norteamericana a un régimen que en la hipótesis más caritativa era testigo tolerante de esos atentados. Lo impedía la amenaza de la guerrilla, a la que pasaron a apoyar los más entre los dirigentes de izquierda que habían logrado sobrevivir a las matanzas. Así expulsada de hecho la izquierda de la arena política, en 1982 las elecciones para una asamblea constituyente dieron la victoria a los partidos de derecha; la presidencia de esa asamblea iba a ser ocupada por Roberto D'Aubuisson, un exmilitar de origen irreprochablemente oligárquico a quien tanto la opinión local como el embajador norteamericano vinculaban con el asesinato del arzobispo Romero.

Para entonces la administración de Reagan, que había sucedido a la de Carter, comenzaba a revisar su inclinación inicial a favorecer a la derecha política, con cuyo anticomunismo apocalíptico seguía simpatizando, pero cuyo aventurerismo co-

menzaba a encontrar alarmante. No por eso dejaba de ver en el exterminio de la guerrilla la única solución aceptable para el conflicto, y en el ejército salvadoreño el instrumento destinado a alcanzarla. Los subsidios norteamericanos -que llegaron a sumar varios miles de millones de dólares- se orientaron en consecuencia cada vez más a sostener el esfuerzo militar contra la guerrilla, continuado con la brutalidad ya habitual y sólo relativo éxito: si logró mantener confinada la presencia insurgente al tercio oriental del territorio, no pudo ni desalojarla de él ni impedir que la acción insurgente se hiciera sentir frecuentemente en el resto del país a través de clausura temporarias de rutas troncales e interrupciones en la provisión de electricidad.

Las elecciones presidenciales de 1984 significaron el desquite de Duarte, y persuadieron a la jerarquía militar de la necesidad de tomar alguna distancia respecto de la derecha; el terrorismo oficioso que ésta había cultivado con el beneplácito del ejército y la colaboración activa de algunos de sus oficiales amainó en intensidad, haciendo posible una paulatina resurrección de la vida política, que se reflejó en la frecuencia creciente de protestas de la opinión urbana ante la escasa atención que a sus problemas cada vez más agudos dispensa el presidente Duarte. Ya antes de que las propuestas pacificadoras del presidente Arias, de Costa Rica, lo invitasen a ello, el de El Salvador tomó el camino de la negociación con la guerrilla; aunque éste no se anuncia promisorio (entre otras cosas porque ambos negociadores saben demasiado bien que el ejército rehúsa de antemano las concesiones que cualquier pacificación requeriría) ha contribuido a devolver un lugar a la oposición de izquierda en un proceso político del que había sido brutalmente marginada.

Pero la falta de una resolución pacífica para el conflicto, que los votantes de Duarte habían esperado ver facilitada por su victoria, y el agravamiento de las condiciones económicas como consecuencia no sólo de una coyuntura externa desfavorable, sino también de la incertidumbre creada en el campo por una reforma agraria que ni se consuma ni se abroga, y to-

davía de la perpetuación la guerra civil, produjeron una erosión en la base electoral del presidente y su partido, que en las elecciones parlamentarias y municipales de 1988 se combinó con las ventajas que el apoyo militar otorgó a la derecha en las áreas rurales para dar a ésta una victoria que la fortifica en su hostilidad a cualquier reforma y a cualquier solución negociada al conflicto. Quedaba así consagrado el fracaso de la política favorecida por los Estados Unidos, que había buscado combinar el fortalecimiento de un ejército que sigue siendo el mismo que fue protagonista del antiguo orden salvadoreño, con la consolidación de una vida política democrática que, por restringida que se la imagine en su impacto, somete a ese antiguo orden a una amenaza que ese ejército difícilmente podría tolerar.

En la prehistoria de la revolución nicaragüense que iba a triunfar en 1979 -se ha indicado más arriba- gravita también la transformación agraria de la segunda potsguerra, que estaba expandiendo a costa de la agricultura campesina la producción de algodón y ganado vacuno, pero en **Nicaragua**, a diferencia de lo que ocurrió en Guatemala y El Salvador, sus consecuencias vinieron a sumarse a las de las tensiones que provocaba dentro de la elite socioeconómica la invasión de sus filas por el séquito del somocismo, que se tornó a la vez más avasalladora y más conflictiva bajo el liderazgo de un nuevo jefe de dinastía que no sabía equilibrar la codicia con la prudencia.

El predominio cada vez más exclusivo que el clan dominante y sus más estrechos aliados estaban ganando sobre los sectores más dinámicos de la economía transformaba las mal acalladas reticencias de la elite tradicional en un sentimiento opositor mucho más firme, que sabía inútil intentar expresarse en la arena electoral y no osaba aun hacerlo en otras menos pacíficas. Ese sentimiento se hizo aun más intenso y universal luego del devastador terremoto de Managua, que en 1972 provocó una ola de solidaridad internacional frustrada en sus objetivos por el uso descaradamente corrupto dado a la ayuda así

obtenida. Somoza reaccionó a esa oposición creciente con su brutalidad habitual: en enero de 1978 el asesinato oficioso de Pedro Joaquín Chamorro, director de *La Prensa*, el tradicional órgano conservador que había mantenido siempre sus distancias frente al régimen, enconó aun más la hostilidad que lo rodeaba.

Los movimientos insurreccionales supieron utilizar la oportunidad que así se les brindaba: unificados desde 1961 en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que incluía no sólo a varias organizaciones de inspiración marxista-leninista, sino a otra que, liderada por Edén Pastora, combinaba su audacia táctica con posiciones ideológicas más moderadas, eran ya, a los ojos de la elite económico-social, los únicos capaces de poner fin a un régimen que ésta encontraba insoportable. A veinte años de distancia del triunfo de la Revolución cubana, un proceso que presentaba sorprendentes analogías con el que la había llevado al triunfo llegaba así a buen término en el continente.

Algunas de esas analogías iban a mantenerse en la etapa siguiente: como en Cuba, la victoria revolucionaria fue seguida de una radicalización que provocó el alejamiento de sus partidarios más moderados, entre otros la viuda de Chamorro y Edén Pastora. Pero las diferencias eran por lo menos tan significativas como las analogías, y desfavorables a la nueva experiencia revolucionaria. La victoria de ésta había requerido una prolongada y sangrienta guerra civil, que dejó en herencia, junto con devastaciones muy serias, fuerzas armadas proporcionalmente mucho más numerosas que el diminuto ejército rebelde cubano de 1959. Por añadidura, Nicaragua no es una isla, y sus fronteras con Honduras y Costa Rica siguen siendo difícilmente controlables; la presencia más allá de ellas de todos los derrotados y disidentes (desde los sobrevivientes de la Guardia Nacional somocista hasta los secuaces de Pastora y los refugiados que iría creando la agudización de los conflictos sociales y étnicos), hace que en Nicaragua siga pesando más que en Cuba la amenaza militar contrarrevolucionaria.

Lo que quizá era aun más importante, la sociedad nicaragüense es muy distinta de la cubana prerrevolucionaria. No sólo la presencia campesina es en ella mucho más fuerte; la sociedad urbana presenta un perfil social más indiferenciado, en que aun en los sectores de bajos ingresos abundan los ínfimos empresarios independientes; por todas esas razones Nicaragua estaba peor preparada que Cuba para recibir una estructura socialista.

Por otra parte la dirigencia sandinista no aspiraba a imponerla; con prudencia aplaudida desde La Habana, se declaraba en favor de una economía mixta, muchos de cuyos sectores claves, controlados por el clan Somoza y sus allegados, estaban ya pasando a manos del estado revolucionario como consecuencia de la confiscación de su patrimonio. Pronto se descubría que, salvo en cuanto a la gran agricultura de exportación, la gravitación de ese grupo era mucho más limitada de lo imaginado; las empresas ahora nacionalizadas se habían beneficiado más por la privilegiada posición política de sus propietarios que por ninguna superioridad organizativa o tecnológica; y aun en el sector agrícola, por otra parte, la decisión de mantener la unidad organizativa y la orientación exportadora de las grandes fincas que habían sido del clan dominante iba contra las aspiraciones de una clase campesina ansiosa de ganar acceso a esas tierras de calidad excepcional; a esa decisión iban a sumarse otras que, inspiradas en el deseo de no enajenarse la buena voluntad no sólo de los campesinos con tierras, sino aun de los finqueros medianos, paralizaron iniciativas que hubieran podido reforzar la adhesión de los grupos rurales mayoritarios cuyo acceso a la tierra era insuficiente o nulo.

Todas esas dificultades, frente a las cuales la dirección colegiada del sandinismo hallaba difícil acordarse (sólo recientemente Daniel Ortega Saavedra –elegido presidente de Nicaragua en las elecciones de noviembre de 1984, en las que el frente sandinista, con el 67 por 100 de los votos, alcanzó una convincente victoria– se aseguró una posición dominante dentro de ella, e impuso un rumbo más definido al régimen

revolucionario) eran a la vez agravadas y parcialmente enmascaradas por la oblicua guerra que desde 1981 los Estados Unidos libran contra Nicaragua.

Los agentes principales de esa lucha son ésos que el presidente Reagan celebra como *freedom fighters, y* que en Centroamérica amigos y adversarios llaman la contra. Encuadrados militarmente por los dirigentes de la Guardia Nacional somocista, los contrarrevolucionarios han visto alternativamente ampliadas y raleadas sus filas según el ritmo de las tensiones internas en Nicaragua y el volumen de los auxilios que el presidente norteamericano logra arrancar de un reticente Congreso. Aunque en siete años no han sido capaces de lanzar un desafío militar serio, sus tácticas terroristas, que les han ganado deplorable reputación dentro y fuera de Nicaragua, han conseguido agravar aun más la penuria, cuyo impacto sobre la popularidad del régimen amenaza a la larga hacerse considerable.

Aunque a ese costo muy alto, la amenaza externa logró devolver su foco a una revolución que, triunfante en un momento de reflujo mundial de las esperanzas que habían dado su ímpetu a la cubana, y enfrentada con un panorama más complejo de lo que había esperado, parecía perder toda seguridad de rumbo. Frente a la cada vez más agresiva hostilidad norteamericana, pronto se hizo claro que ni México ni los gobiernos europeos de izquierda moderada, que habían manifestado vivas simpatías por la Nicaragua sandinista, querían (o quizá podían) ofrecer los auxilios necesarios para afrontarla. Ello llevó al régimen de Managua a estrechar aun más sus vínculos con Cuba y la URSS, mientras acentuaba sus aristas represivas, hasta clausurar *La Prensa* luego de que el vocero opositor aceptó una subvención del gobierno norteamericano (que para entonces había emprendido el minado apenas clandestino de puertos nicaragüenses), y no buscó esquivar una ruptura abierta con la jerarquía eclesiástica, que compartía la hostilidad vaticana a la presencia de varios brillantes pero poco sumisos miembros del clero en la alta dirigencia sandinista.

Pronto iba a descubrir sin embargo qué estrechos eran los límites de la solidaridad cubana y soviética. Las reticencias de esos dos países que el sector extremo del sandinismo había tomado como modelos, y con cuyo apoyo activo había esperado contar para radicalizar el curso de la Revolución nicaragüense, condenaban de hecho su proyecto de utilizar para ello la amenaza externa. La voluntad negociadora frente a todas las oposiciones, que el sector más moderado iba a imponer, con la aprobación de La Habana y el apoyo aún más caluroso de Moscú, iba por su parte a cosechar éxitos más rápidos de lo esperado, gracias en buena medida a la torpeza con que Washington había venido manejando su política centroamericana.

Ya antes de su reorientación moderada, la dirección sandinista había apoyado unánimemente la propuesta mediación del llamado grupo de Contadora, integrado por México, Colombia, Venezuela y Panamá; sin duda hizo más fácil lograr esa unanimidad la seguridad de que el gobierno de Reagan estaba dispuesto a frustrar esa y cualquier otra solución negociada. Pero cuando el presidente Arias de Costa Rica propuso un preciso plan de paz, y la alarma creciente que la internacionalización de la crisis de Nicaragua despierta entre las naciones vecinas logró el milagro de ganar para él la aprobación unánime de sus presidentes (aun los de El Salvador y Honduras, cuya supervivencia depende de los subsidios otorgados por los Estados Unidos en el marco de su política intervencionista), ya el presidente Ortega contaba con la autoridad necesaria para sumarse sin reticencias a ese consenso, y -como iba pronto a verse- llegar más lejos en la aplicación del plan de Arias que los de Guatemala y El Salvador, comprometidos como Nicaragua a negociar la paz con sus propios movimientos insurgentes.

Esa voluntad negociadora, avalada por gestos espectaculares como la reapertura de *La Prensa,* expresaba sin duda la fatiga frente a una guerra que el gobierno sandinista nunca corrió peligro de perder, pero que difícilmente podría terminar

en la aniquilación de un enemigo que cuenta con bases y recursos más allá de la frontera. Pero la perseverancia con que Managua se ha atenido a la línea negociadora ha sido estimulada también por el cambio en el contexto externo: el desprestigio de la política centroamericana del presidente Reagan, agravado por el escándalo suscitado por las negociaciones clandestinas con Irán, destinadas en parte a recaudar fondos para acciones militares en Nicaragua, decidieron finalmente al Congreso norteamericano a dar una apoyo más entusiasta que el del presidente al plan de pacificación de Arias, haciendo claro a la vez que de la buena voluntad que Managua demostrase en la mesa de negociaciones dependía que se rehusase a votar nuevos fondos para la contra.

Bajo esos insólitos auspicios, no sólo las negociaciones con la contra tuvieron un comienzo promisorio, sino pareció por un momento que la nueva Nicaragua se disponía a redefinir su estilo político dejando más espacio al pluralismo, pese a la falta de entusiasmo que en ello ponían algunos dirigentes sandinistas, temerosos de ver embotado en la distensión el vigor de un movimiento templado en la lucha militar y política. No es la resistencia de éstos, sino el impacto que esa distensión ha tenido sobre las oposiciones el que pronto hizo parecer menos seguro que esa redefinición llegase a término.

En efecto, bien pronto se hizo evidente que esas oposiciones eran menos capaces que el sandinismo de adaptarse sin daño a la distensión. Apenas las negociaciones surgieron en el horizonte, los partidos opositores (cuyas protestas de independencia frente al movimiento armado pocos habían creído hasta entonces sinceras) coincidieron con ese gobierno en que éste debía negociar con ellos y no con los jefes de la insurrección militar las modalidades de la apertura política.

La fisura que así vino a revelarse en el frente opositor era menos grave para él que la reubicación provocada por la nueva coyuntura en la Iglesia, cuyo jefe, el arzobispo Obando y Bravo, había dado desafiante apoyo a la oposición interna, con el apoyo militante del pontífice, que –exasperado ante la

insubordinación de los eclesiásticos que, desobedeciendo sus órdenes más expresas, seguían integrando el gabinete de Managua y ofrecían apoyo no siempre discreto al sector del clero que, de nuevo contrariando las instrucciones de sus superiores, organizaba a sus fieles en apoyo al régimen revolucionario– no sólo distinguió el arzobispo con un capelo cardenalicio, sino utilizó su visita a Nicaragua para reiterar críticas muy duras contra el régimen sandinista, esa vez de cara a multitudes. Ahora el cardenal, aceptando una invitación del gobierno, tomaba a su cargo la mediación entre éste y la insurrección armada, y Juan Pablo II otorgaba su beneplácito a ella; aunque –como por otra parte era esperable– en el ejercicio de su mediación el prelado no se mostró particularmente solícito de los intereses de las autoridades que la solicitaron, su gestión no iba a dejar dudas acerca de la lealtad con que había pasado a apoyar la búsqueda de una solución pacífica. La reorientación del pontífice y el cardenal de Managua, cuya hostilidad al comunismo, sin duda mejor informada que la del presidente Reagan, se acompaña de un vivo recelo por cualquier movimiento revolucionario que amenace desbordar los límites tenidos por lícitos por las tendencias conservadoras dentro de la Iglesia, muestra cuánto terreno ha perdido aun en esa franja de opinión militante la táctica de la lucha armada que el presidente Reagan se resigna mal a ver dejada de lado en Nicaragua.

El progresivo aislamiento de los protagonistas de la insurrección militar resultó menos peligroso para ésta que la división que comenzó a cundir en sus propias filas. Los antiguos dirigentes de la Guardia Nacional somocista que –apoyados en su mayor veteranía pero sobre todo en el favor de los que canalizaban hacia la insurgencia la ayuda norteamericana– dominan las altas jerarquías de ésta, tienen pocos motivos para desear un desenlace exitoso de las negociaciones, ya que no ignoran que sólo como vencedores podrían volver a un país en que su recuerdo es unánimemente aborrecido, y por otra parte no los alarma la posibilidad de seguir sirviendo in-

definidamente como subsidiados soldados de ventura a la política centroamericana de Washington. Pero los combatientes incorporados a sus filas en respuesta a iniciativas del régimen sandinista que no creen imposible ver eliminadas por vía de negociación encuentran a ésta aun más atractiva porque no creen ya posible llevar a fin victorioso la insurrección.

Así la crisis de Nicaragua parece internarse en una zona de ambigüedades, y el desenlace definitivo que ansiaría alcanzar para ella el presidente de Costa Rica no parece entonces inminente. Si el presidente Arias está tan vitalmente interesado en la pacificación es en parte porque teme que si Washington continúa afrontando la crisis centroamericana a través de una intervención cada vez más desembozada, Costa Rica, que a diferencia de sus vecinos del norte, ha logrado hasta ahora esquivar los peores ramalazos de esa crisis, termine devorada por ella.

La situación hasta ahora privilegiada de **Costa Rica** no se debe a que haya mantenido un total apartamiento de esa crisis. Tras de ofrecer algo más que pasiva tolerancia para la utilización de su territorio por la insurgencia sandinista, luego de la victoria de ésta permitió que actuaran también en él insurgentes antisandinistas apoyados por los Estados Unidos. Pero su papel como base para las acciones de la contra, desde el comienzo más modesto que el de Honduras, iba a pasar cada vez más a segundo plano, en parte a causa de las dificultades que el clima político de una democracia pluralista crea para empresas nominalmente clandestinas, y en parte quizá mayor debido al escaso favor con que los protectores norteamericanos de los grupos armados antisandinistas veían a los basados en Costa Rica, el más importante de los cuales tenía a su frente al ex jefe sandinista Edén Pastora, que los agentes norteamericanos juzgaban ideológicamente poco seguro.

Aun así, la gravitación del conflicto nicaragüense llegó a amenazar de modo directo la estabilidad política de Costa Rica, que había sobrevivido sin daño al impacto (también allí durísimo, pero más breve que en otra parte) de la segunda crisis del petróleo y su secuela de la deuda externa. En efecto, la

derecha costarricense buscaba utilizarlo para estimular una peligrosa polarización ideológica, ausente hasta entonces debido al escaso vigor de la izquierda revolucionaria y a la solidez del consenso que seguía apoyando el equilibrio sociopolítico que era herencia de la revolución de 1948. En las elecciones presidenciales de 1986 esa táctica no brindó a la derecha los resultados que esperaba, pero lo ajustado del veredicto electoral que le fue desfavorable contribuye sin duda a explicar la tenacidad con que Arias, tras de triunfar en los comicios, propugnó su plan de pacificación para América Central, cuyo éxito inicial y ecos inesperadamente amplios en la opinión mundial contribuyeron a ganar para él el Premio Nobel de la Paz.

Aunque en **Honduras** la izquierda revolucionaria pesa aún menos que en Costa Rica, la crisis nicaragüense ha repercutido allí en una polarización de más graves consecuencias, ya que ha traído consigo la introducción de los secuestros y asesinatos oficiosos, a cargo –como en El Salvador y Guatemala– de misteriosas organizaciones de extrema derecha que cuentan al parecer con apoyos en el cuerpo de oficiales. No es sólo esta innovación inquietante la que torna a la situación hondureña más peligrosa que la costarricense; más rica en consecuencias es la transformación del breve país del Istmo en base de operaciones norteamericanas tanto para el teatro salvadoreño como para el nicaragüense. El ejército hondureño brinda su apoyo entusiasta a la presencia militar norteamericana, y quienes ejercen el gobierno (Honduras ha vuelto al orden constitucional en 1981, cerrando una etapa de regímenes militares cuyo moderado estilo represivo tanto en lo político como en lo social los había tornado excepcionales en América Central) no osarían por lo tanto obstaculizarla. Se sienten todavía menos inclinados a ello porque no sólo para los oficiales hondureños la presencia norteamericana es fuente de beneficios muy tangibles: aunque no todas las consecuencias de esa presencia son positivas, en la más pobre de las naciones del Istmo el desmantelamiento del aparato militar y de inteli-

gencia armado por los Estados Unidos significaría un golpe muy duro para una economía que no cuenta con alternativas más prometedoras.

La gravitación que ello asegura a los Estados Unidos llegó a reflejarse a mediados de la década en una mediatización cada vez más completa de los titulares del poder civil no sólo frente a una embajada que estaba recuperando el papel proconsular que había sido el suyo en un pasado que se había creído irrevocable, sino frente a una jerarquía militar con la que esa embajada prefería a menudo entenderse directamente. No faltaron entonces quienes responsabilizaban al entendimiento entre esos dos poderes de la aparición en Honduras de los episodios de salvajismo represivo que la baja intensidad de los conflictos locales hacía de otro modo incomprensible. Las reacciones a ese alarmante deslizamiento fueron en extremo limitadas, y por otra parte los rasgos más sombríos que se habían insinuado en esa etapa han venido a atenuarse luego.

Aunque ese estado de cosas no despierta oposiciones demasiado eficaces, existe en Honduras amplia conciencia de los peligros que él encierra para el futuro. Hay otra presencia que ofrece aún más motivos de preocupación que la norteamericana: es la de las macizas formaciones de contras nicaragüenses estacionadas con apoyo norteamericano en áreas hondureñas cercanas a la frontera de Nicaragua, a las que dominan militarmente. Tanto la derrota definitiva de la insurgencia, como la supresión de los subsidios norteamericanos, como una pacificación negociada que dejase a esas formaciones en territorio hondureño amenazan transformarlas en una presencia potencialmente hostil, que los recursos militares con que cuenta Honduras quizá no basten para controlar. Se entiende entonces la ambivalencia del gobierno de Tegucigalpa frente a los planes de pacificación centroamericana, que sería erróneo atribuir exclusivamente a su deseo de no contrariar a sus fuerzas armadas y a los Estados Unidos; se entiende aun mejor que no intente siquiera cumplir el compromiso de desarmar a los contras que alberga en su territorio, que ha

asumido en el marco del plan de paz propuesto por el presidente Arias, pero que desencadenaría un conflicto que tiene demasiados motivos para querer esquivar.

Los problemas que afronta Honduras anticipan algunas de las consecuencias del fracaso ya inocultable de la política centroamericana del gobierno de Reagan, que no ha cosechado los resultados que buscaba en un área particularmente favorable para la reafirmación de la hegemonía norteamericana a través de la intensificación y militarización del conflicto ideológico. Ese revés afecta a algo más que a una línea política: tal como señalaba el presidente Reagan, la eliminación de la disidencia nicaragüense estaba destinada a probar que, pese a la escandalosa excepción que ofrece Cuba, el Caribe y el Istmo siguen siendo, como lo fueron por casi un siglo, el «patio trasero» de los Estados Unidos; que esa disidencia no haya sido debelada corre riesgo de sugerir la conclusión opuesta.

Muy pronto en **Panamá** otro episodio –en el cual el activismo contrarrevolucionario del ejecutivo norteamericano comparte responsabilidades con otras corrientes políticas muy distintas– pareció proponer la misma moraleja. Allí el general Torrijos, que había buscado dar una base popular a la hegemonía política de la Guardia Nacional, una vez aprobado el tratado que transfería a Panamá el control de la Zona del Canal y más gradualmente el del canal mismo, encaró una liberalización de su régimen, seguro de que ese éxito externo sumado a la lealtad de los sectores populares que bajo su égida habían ingresado en la vida política le permitiría conservar su lugar dominante pese al desafío de los partidos opositores, a los cuales esa liberalización abría nuevos canales. Su muerte en un accidente de helicóptero no concluyó con ese proyecto, que el general Manuel Noriega, nuevo jefe de la Guardia Nacional, iba a hacer suyo en una versión casi paródica, pero no por eso menos eficaz.

En lo interno, Noriega trasponía a un estilo más burdo el populismo de su predecesor; en lo exterior mantenía el com-

plicado no alineamiento practicado por éste, que para una nación pequeña, inerme y abierta a todos los vientos se resolvía en un constante acto de equilibrio entre los influjos externos que sobre ella pesaban. En lo interno y en lo externo la desenfrenada codicia del nuevo hombre fuerte hacía que la corrupción (que se había intensificado bajo la égida de la Guardia Nacional, y encontraba por otra parte amplias oportunidades en una economía cada vez mas especializada en servicios mercantiles y financieros difíciles de obtener en países regidos por normas más estrictas) alcanzara dimensiones cada vez más amplias; en particular se le achacaba participar en los beneficios derivados de la privilegiada posición de su país en la ruta de la droga.

Con su beneplácito, Panamá se transformó en efecto en crucial punto de escala para ese tráfico, y en centro de operaciones financieras vinculadas con él. Esa transformación, que tenía muy poco de clandestina, ofreció el tema principal para la oposición política, uno de cuyos voceros más enérgicos, Hugo Spadafora, fue asesinado en 1984, en circunstancias que no todos encontraban tan misteriosas como decía hallarlas el gobierno de Panamá. Desde entonces la agitación opositora, particularmente intensa entre las clases profesionales y sectores empresarios que comenzaban a sufrir por la desleal rivalidad del grupo cercano al general Noriega, no cesaría ya de crecer.

En 1987 Panamá parecía ya ofrecer terreno adecuado para uno de esos procesos democratizadores que el gobierno de Reagan, que primero los había visto con recelo, había aprendido a contemplar con más favor. Una política más activa de los Estados Unidos en la nación del canal ofrecía además algo para todos los sectores políticos norteamericanos: la extrema derecha podía contar con que daría lugar a conflictos que permitirían revisar los plazos fijados por el tratado con Panamá para el traspaso del control sobre el canal; ella y la derecha más moderada se disponían a celebrar la ruina de un régimen no-alineado que había mantenido y seguía manteniendo cordiales relaciones con Cuba; la oposición demócrata recibía

con beneplácito la oportunidad para llamar la atención sobre el papel del general Noriega (que había aceptado también ser incluido en la lista de pagos de la CIA) en la transformación de Panamá en base del tráfico no sólo de drogas sino también de armas para la insurgencia nicaragüense, que permitiría sin duda explorar las vinculaciones menos indirectas que una parte de la opinión sospechaba entre ambos. Y, naturalmente, todos los representantes de zonas urbanas donde la incidencia de la droga pesa casi obsesivamente sobre la vida cotidiana estaban dispuestos a constituirse en corifeos de la cruzada destinada a asegurar la redención moral y política de Panamá.

A diferencia de lo ocurrido en Nicaragua, era la entera clase política norteamericana la que condenaba en solemne coro al hombre fuerte en Panamá y le indicaba sin ambigüedades la necesidad de abandonar espontáneamente el campo. Pero ese veredicto unánime no pareció impresionar más al general Noriega que la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de promoverle juicio criminal como cómplice en la importación de sustancias prohibidas en territorio norteamericano. Ni una huelga general que paralizó la vida comercial de la capital, ni su destitución como jefe de la Guardia Nacional por el presidente Eric Arturo del Valle lo decidieron tampoco a resignar su mando militar; en cambio la Asamblea Nacional, que a sus instancias había ungido presidente a Del Valle se apresuró ahora a destituirlo. El derrocado mandatario, reconocido como la única autoridad legítima por Washington, se acogió a una clandestinidad que esperaba sería seguida en plazo breve por su restauración en el gobierno con apoyo norteamericano.

El apoyo llegó en efecto, pero fue menos decisivo de lo que el presidente panameño había esperado. Washington decretó un bloqueo comercial y financiero cuyos efectos –en un país que usa el dólar norteamericano como su única moneda– fueron pronto gravísimos, pero socavaron sobre todo las bases económicas de las clases mercantiles y financieras que domi-

naban la oposición a Noriega y se estaban transformando en víctimas principales del aliado cuya ayuda habían invocado con ansia.

Ante esa situación desconcertante, los Estados Unidos parecieron admitir por fin que aún en Panamá hay límites para su libertad de acción que sería imprudente no tomar en cuenta. Se resignaron por lo tanto a abordar negociaciones directas con el general Noriega, en la esperanza de persuadirlo a aceptar un alejamiento temporario que no habría ya de eliminar del todo el influjo que ejerce sobre la vida panameña; tras de avanzar en conversaciones sólo nominalmente secretas que constituían ya una dolorosa humillación, ésta vino a completarse cuando las propuestas conciliatorias fueron rechazadas por el hombre fuerte en los términos más hirientes. Aunque tampoco el conflicto de Panamá ha alcanzado su desenlace, parece poco probable que éste logre contrarrestar del todo el daño que este episodio extravagante ha infligido ya al prestigio de los Estados Unidos.

***

Cuando se alcanza como punto de llegada de una exploración de siglo y medio de historia latinoamericana esta incongruente tragicomedia, que parece solicitar una estilización sobre las líneas del realismo mágico, surge la tentación de ver a esa historia en los mismos términos ahistóricos a los que la traspusieron los narradores de esa corriente, maestros en sugerir, bajo la perpetuamente agitada y abigarrada superficie de las cosas, que tan convincentemente evocan, otras presencias todopoderosas y siniestras cuya desesperante inmutabilidad ofrece la clave última de la experiencia latinoamericana.

Esa tentación la fortifica hoy aún más la desazón ante una crisis económico-financiera que lleva ya siete años de golpear al subcontinente con dureza mayor que la depresión de 1929, y no da signos de disiparse en un futuro previsible. Contra ella bastaría invocar sin embargo el testimonio irrecusable de Latinoamérica de hoy, que no es ya, no digamos la de hace un siglo, sino ni aun la de hace una década. Antes que de negar lo evidente, se tratará entonces de explorar aquí brevemente qué líneas de avance pueden a pesar de todo rastrearse por debajo del sucederse vertiginoso y abigarrado de contradictorias vicisitudes que llena el primer plano de la escena latinoamericana, y aun de qué modo esas líneas podrían prolongarse hacia el futuro, a sabiendas de que este ultimo es un ejercicio riesgoso en que tiene mucha parte la conjetura.

Lo que lo hace hoy aún más aventurado es que esta vez el rumbo futuro de los influjos externos que pesan sobre el subcontinente se ha tornado tan difícil de vaticinar como el de los cambios internos a éste. Comenzando por aquéllos, hay uno que se ha subrayado aquí ya más de una vez: es el de la coyuntura económica mundial, que se resiste a salir de la zona de turbulencias en que ingresó a fines de la década de 1960, y viene a hacer más sombrío el futuro latinoamericano; aun si se aliviase milagrosamente el impacto devastador de la deuda externa, las

economías latinoamericanas, que, abandonadas las esperanzas depositadas durante décadas en un desarrollo autosuficiente, deben buscar integrarse cada vez más estrechamente en la economía mundial, hallan aún más difícil encarar la dolorosa adaptación que ello requiere puesto que esa economía se demora en adquirir un perfil razonablemente nítido.

A lo largo de esa transición que se demora en definir su rumbo se han acumulado con todo cambios cuyos efectos alcanzan en más de un aspecto impacto desfavorable en Latinoamérica. Los más alarmantes se vinculan con la marea ascendente del proteccionismo, estimulada por el ritmo lento y sacudido que la expansión económica no logra dejar atrás en Europa y más atenuadamente en los Estados Unidos, y favorecida también por el avance triunfal de economías como la japonesa y surcoreana, que se atienen firmemente a políticas proteccionistas. Sin duda el recuerdo del daño infligido a la economía mundial en la década de 1930 por la clausura económica en que las grandes naciones buscaron alivio al impacto de la depresión militan contra el avance de esas políticas, pero ese recuerdo se torna menos eficaz cuando quienes adoptan medidas proteccionistas no deben temer que ellas provoquen represalias capaces de desencadenar un círculo vicioso de restricciones crecientes; ahora bien, las naciones latinoamericanas, que como consecuencia de la crisis de la deuda han limitado ya sus importaciones a las imprescindibles, no osarían entrar en el camino de las represalias frente a sus acreedores, que no se fatigan de recordarles su obligación de llevar a término –al parecer sin esperanza de reciprocidad– la apertura de sus economías.

Ya que los países latinoamericanos pueden hacer muy poco para influir sobre estos y otros cambios en la economía de los países centrales, sólo les queda esperar que vicisitudes sobre las cuales no tienen control vengan a contrarrestarlos (por ejemplo, llevando el costo de los subsidios que protegen la agricultura en los Estados Unidos y el Mercado Común Europeo a niveles demasiado ruinosos). Pero,

aun si esas esperanzas se realizaran –y nada promete que eso deba ocurrir demasiado pronto– ello sólo traería alivio parcial a sectores limitados de la economía latinoamericana, cuyo futuro nunca se ha presentado tan incierto como en este fin de siglo.

La dimensión política del contexto externo en que avanza hoy Latinoamérica está dominada por las consecuencias del debilitamiento de la hegemonía que los Estados Unidos alcanzaron luego de la segunda guerra mundial, que se refleja en una paulatina redefinición de sus relaciones con los países latinoamericanos sobre pautas cercanas a las ya vigentes para México; mientras la reivindicación por esos países de su derecho a desarrollar una política exterior independiente no provoca las reacciones militantes del pasado, en el ejercicio de ese derecho siguen procurando esquivar choques con la potencia hegemónica en asuntos que ésta considera vitales para sus intereses.

Aunque limitada en sus consecuencias prácticas, la reivindicación de su independencia político-diplomática por parte de una Latinoamérica obligada a mendigar la indulgencia de sus acreedores confirma que los efectos del lento ocaso de la hegemonía norteamericana están llegando a pesar de todo al subcontinente, pero esa novedad en principio positiva está tan llena de riesgos como de promesas. Sin duda los Estados Unidos podrían adaptarse a esa nueva situación sin daño real para sus intereses, ya que la relación de fuerzas económicas es tal que no necesitan para proteger esos intereses mantener el desembozado y abrumador predominio político y militar que la excepcional coyuntura de 1945 vino a consolidar en el hemisferio. ¿Cuánto tiempo hubiera necesitado la nueva Nicaragua para descubrir que sigue estando en el mismo lugar que la vieja, y sacar las conclusiones que se imponen del desinterés creciente del bloque del Este por contrarrestar esa fatalidad geográfica en el plano económico y mas aun en el politico-militar, sl la mortal hostilidad norteamericana no la hubiese despojado de cualquier estímulo para hacerlo?

Pero no es probable que la política latinoamericana de los Estados Unidos haga suya la flexibilidad que el buen sentido sugiere. Sin duda los problemas que la actual transición les propone en Latinoamerica, comparables en cierta medida a los que la descolonización de Africa propuso a las antiguas metrópolis europeas, son más leves que los que éstas supieron resolver casi siempre con éxito. Pero para que los Estados Unidos alcancen uno comparable en Latinoamérica, deben admitir que han venido desempeñando allí un papel que presenta en efecto analogías con el de una potencia colonial. Es una admisión necesariamente dolorosa, en cuanto supone renunciar a una imagen del papel de los Estados Unidos en el mundo que es consustancial con la que los norteamericanos han madurado de su propia experiencia histórica, y en la que se sustenta en buena medida su orgullo nacional. Surgidos de una revolución a cuya inspiración fundacional atribuyen logros políticos y económicos de los que están justificadamente ufanos, y que ofrecen como modelo al mundo, los Estados Unidos, como anteayer la Francia republicana o ayer la URSS socialista, han tenido hasta ahora la fortuna de no verse obligados a optar entre lealtades nacionales y universales, ya que pueden ver el servicio a su interés nacional como un servicio a la humanidad entera. Aceptar como legítima la vocación de América latina a buscar su propio camino impone entonces una revisión tan profunda de esas consoladoras convicciones que sólo urgencias mucho mayores que las de hoy serían capaces de inducirla.

No es seguro, por otra parte, que aun entonces la renuncia a esa misión universal no venga a favorecer una defensa aún más intransigente del papel hegemónico de los Estados Unidos en América latina; esa posibilidad aparece en parte anticipada en el repudio del panamericanismo por el partido republicano, que invoca ahora el interés nacional de los Estados Unidos como única inspiración válida para su política latinoamericana. Para inspirar una política latinoamericana más razonable, esa redefinición debiera acompañarse del reconocimiento de

que la posición ganada por los Estados Unidos en 1945 no podría mantenerse indefinidamente; es sabido que por el contrario a través de su política latinoamericana la actual administración intenta mantener viva la ilusión de que esa posición permanece intacta; y es preciso admitir que Latinoamérica sigue ofreciendo el terreno más adecuado para ello.

La crisis sólo incipiente de la hegemonía norteamericana no es la única razón por la cual en lo más duro de la actual crisis económico-financiera las naciones latinoamericanas se sienten con fuerzas para reivindicar a cara descubierta su independencia diplomática. Junto con ella pesa el crecimiento desequilibrado pero irrefrenable de Latinoamérica misma, que acrece –aunque no siempre para su bien– la gravitación de la región en el mundo. Así se advierte ya al considerar la reacción externa ante la crisis de la deuda latinoamericana: lo que concentra sobre ella la atención universal es la magnitud de esa deuda, que hace que, si todos esos países se vieran simultáneamente acorralados a una abierta insolvencia, pondrían en peligro el sistema financiero mundial.

Pero es sin duda la dimensión demográfica de ese crecimiento la que afecta de modos más variados y complejos tanto la situación que vive el subcontinente como la paulatina modificación de su peso en el equilibrio mundial. Ese impetuoso crecimiento poblacional (que hace por ejemplo que hoy la mayoría de los católicos del planeta se encuentre en Latinoamérica) es justamente percibido desde fuera como el más importante factor de transformación del lugar de Latinoamérica en el mundo; y su ramificado impacto puede rastrearse aun tras de la reciente modificación en los argumentos que la derecha norteamericana gusta esgrimir contra cualquier cambio revolucionario en el resto del continente: una vez más el presidente Reagan revela entender muy bien a sus compatriotas cuando les advierte que la primera consecuencia sería un alud de fugitivos de la miseria latinoamericana y el terror bolchevique, que es preciso evitar a cualquier costo. He aquí

como entre las obsesiones que habitan el subconsciente colectivo norteamericano la amenaza roja parece dejar paso a la de esa humanidad morena y repulsivamente prolífica contra cuya presión creciente la valla de la frontera aparece cada vez más irrisoria.

Esa fantasiosa pesadilla tiene desde luego correlatos en la realidad: en 1900 la población de México equivalía al 18 por 100 y la del Brasil al 24 por 100 de la de los Estados Unidos; ochenta años después ascienden respectivamente al 32 por 100 y al 57 por 100; aun la de Argentina, cuyo crecimiento demográfico se ha aquietado en las últimas décadas, pasó entre 1900 y 1980 del 6 por 100 al 12 por 100 de la estadounidense. Pero la divergencia creciente entre la velocidad del aumento de población en la América anglosajona y la latina es sobre todo un fenómeno de la segunda postguerra; mientras en 1950 el número de los habitantes de una y otra estaban aun muy cercanos (como resultado del mayor dinamismo demográfico que en el siglo XIX había adquirido la América anglosajona, que había corregido la originaria superioridad demográfica latinoamericana), hoy la segunda casi duplica en este aspecto a la primera.

Una expansión tan acelerada (sólo la del África al sur del Sahara supera en las últimas décadas a la latinoamericana) encierra sin duda peligros muy serios para el futuro, pero una vez que sus consecuencias han comenzado a desplegarse a la vista de todos resulta más difícil verlas de modo tan exclusivamente negativo como hace dos décadas, cuando eran poco más que una nube en el horizonte. Ahora se advierte mejor que entonces que el crecimiento poblacional es sólo un aspecto de un complejo proceso de cambio, que incide de modo diferente en distintas áreas latinoamericanas, y acerca del cual es difícil entonces arribar a conclusiones uniformes para todas ellas.

Hay con todo una que es difícil ignorar: a saber, que en Latinoamérica el crecimiento poblacional estuvo hasta ahora lejos de constituir un obstáculo para el económico: para las cuatro décadas que siguen al fin de la segunda guerra mun-

dial la conclusión que parece imponerse es cabalmente la opuesta. En México, que multiplicó su población tres veces y media, el producto bruto nacional a mediados de la década de 1980 alcanza un valor nominal en dólares que es sesenta y tres veces el de cuarenta años antes (el real, una vez descontados los efectos de la pérdida de valor del dólar, reflejaría desde luego un crecimiento varias veces más lento, pero a los efectos comparativos que aquí se buscan esa corrección se hace innecesaria); Brasil, cuya población creció en un 340 por 100, lo multiplicó cincuenta veces: pero Argentina, cuya población menos que duplicó en esta etapa, lo multiplicó sólo dieciséis veces. Aunque de modo menos uniforme, la ventaja se mantiene en cuanto al producto *per capita;* el de México crece dieciséis veces, cerca de diez el brasileño y ocho el argentino. El mismo contraste se da cuando se pasa de los países mayores a otros medianos: entre éstos Colombia y Perú acrecentaron su población casi tres veces y su producto *per cápita* alrededor de dieciocho veces; Cuba y Chile, que duplicarán la primera, multiplicaron su producto doce y cinco veces, respectivamente.

Estas cifras sugieren además que las dimensiones de cada economía nacional han afectado menos el ritmo de crecimiento de su producto bruto; es de suponer sin embargo que ellas han de pesar cada vez más. Hoy Brasil y México, responsables por más del 60 por 100 del producto bruto del subcontinente, han adquirido dimensiones económicas que les aseguran, aun en medio de la crisis más severa, acceso a alternativas vedadas para los restantes países; entre otras cosas sólo para ellos sobrevive la posibilidad de completar la construcción de una economía integrada, que aun un cuarto de siglo antes había sido intentada bajo el signo del desarrollismo no sólo por un rival –Argentina– que iba a quedar en el camino, sino por más de una de las naciones medianas.

Aunque estas cifras y porcentajes sólo alcanzan a sugerir el orden de magnitud de una transformación acerca de cuya índole dicen muy poco, ellas nos anticipan con todo algo en

cuanto a esta última; sugieren, por ejemplo, que un pasado más reciente está borrando las huellas de la etapa de crecimiento hacia fuera que lo precedió: mientras quedan irremisiblemente atrás los países del Cono Sur, que ocupaban la vanguardia de la expansión latinoamericana en el medio siglo anterior a la depresión de 1929, los centros de gravedad de la Latinoamérica que comienza a perfilarse vuelven a ser a menudo los de la etapa colonial; el hecho de que la ciudad de México, al transformarse en la mayor del planeta, haya vuelto a ser como en 1810 la más populosa de Hispanoamérica constituye algo más que un símbolo de esa reversión de tendencia. Pero este retorno a primer plano de algunas de las áreas que lo ocuparon también en tiempos coloniales no autoriza a concluir que lo que vive hoy Latinoamérica es un retorno al pasado: es por el contrario el dinamismo nuevo que han adquirido las transformaciones sociales en las últimas décadas el que devuelve a la escena a actores cuya presencia había sido antes más fácil ignorar.

Muchos aspectos de la gigantesca transformación que Latinoamérica sigue hoy llevando adelante bajo una dura intemperie económica se entienden mejor cuando se los contempla en esa clave. Así, desde Mesomérica hasta las tierras andinas vemos derrumbarse las barreras que separaron a esas dos naciones que en tiempos coloniales se llaman la república de españoles y la de naturales. Con modalidades en cada caso distintas, desde esa última oleada de conquista que en Guatemala recupera toda la salvaje brutalidad de la primera, hasta la pacífica transformación de Lima en metrópoli serrana e indígena, o la presencia permanente del campesinado indio en todas la coaliciones sociopolíticas que se suceden en el poder en la Bolivia postrevolucionaria, el papel central que en las vastas transformaciones en curso está recuperando la etnia conquistada, lejos de devolver a la república de naturales la enjundia ya disminuida de la que la dotó la colonia, viene a consumar su integración en una sociedad nacional que sin duda tendrá muy pocos rasgos en común con la de aquélla.

Más que retornar al pasado, hoy Latinoamérica parece acudir al legado vivo de todos sus pasados para afrontar un presente que no se parece necesariamente más a ellos que al ayer inmediato, y ello se refleja en las más inesperadas alianzas entre arcaísmo e innovación, que han de descubrirse en los más diversos planos de la realidad latinoamericana, desde el ideológico (así, los mineros de los Andes, que reconocen tras de las acechanzas de la montaña las presencias sobrenaturales ya descubiertas por los mitayos de la colonia, mantienen a la vez lealtad a un movimiento sindical informado por las ideas de Trostsky) hasta el sociológico (así también en los Andes, organizaciones campesinas injertan en estructuras prehispánicas redefinidas bajo la égida del poder colonial otras forjadas por las experiencias de lucha social del Viejo Mundo).

Pero es sin duda en las ciudades en vertiginoso crecimiento donde esta articulación cada vez más compleja y ambigua entre presente y pasado latinoamericanos se despliega de modo más pleno. La urbanización no podría ser vista ya sin más, como hace un cuarto de siglo, como un aspecto de un proceso modernizador destinado a acercar a Latinoamérica a las pautas del mundo desarrollado. Las metrópolis que ella está plasmando son, como quiere el sociólogo británico Bryan Roberts, ciudades de campesinos, y no sólo por el origen de buena parte de los migrantes que vienen a poblarlas. Tampoco es lo más significativo que en más de un caso esos migrantes mejoren sus posibilidades económicas agregando a actividades típicamente urbanas otras que vienen de su pasado rústico (aunque no deja de ser sugestivo, por ejemplo, que Bogotá encierre en las barriadas habitadas por esos migrantes varias decenas de miles de cabezas de ganado), sino que aun para integrarse en actividades urbanas el arte de vivir madurado en el contexto rural ofrezca auxilios decisivos: tanto los reflejos políticos sedimentados en un marco autoritario y paternalista como los modos de estructuración social basados en solidaridades familiares o de grupo pequeño conservan su plena relevancia en el marco de esas metrópolis a la vez tan modernas y tan arcaicas.

La penuria actual, bajo cuyo impacto la irrelevancia de la organización económica y social más moderna que parecía hasta hace poco en avasallador avance se está tornando clamorosa, acentúa aun más el peso creciente de ese sector informal que, por ejemplo en el caso de la Lima de hoy, toma a su cargo una parte cada vez más amplia de la economía productiva urbana.

Sería absurdo pretender que ese teatro de creciente miseria que son hoy las mayores ciudades latinoamericanas es ya el crisol en el cual se fragua el perfil definitivo del subcontinente, o que el actual avance de los legados más arcaicos de la experiencia histórica latinoamérica desde las posiciones residuales en que parecían hasta hace poco confinados anuncia un futuro de arcaización creciente. Pero es menos absurdo ver en él la confirmación de que a ese futuro no ha de llegarse por rumbos predeterminados por ciertos esquemas de desarrollo universalmente válidos, y que en él seguirá gravitando, de modo desde luego imposible de profetizar, el legado de una experiencia histórica incongruente y contradictoria, pero de ningún modo estática, que tanto contribuye a definir la incipiente especificidad latinoamericana.

Y ver todavía en él algo más: la confirmación de que esa experiencia está aún en efecto en sus primeras etapas, que el sucederse de súbitos cambios de escena durante las últimas décadas no es el último recodo en el camino hacia la comparativa estabilidad y fijeza de rasgos que es conquista de la madurez. Vistos retrospectivamente, esos golpes de escena, portador cada uno de ellos de una promesa vana de consumación del proceso histórico latinoamericano, nos confirman más bien que Latinoamérica es joven y por lo tanto imprevisible; pero si hoy esa juventud se invoca con menos ufanía que hace un cuarto de siglo es porque ahora sabemos mejor que ella no es una etapa de avance sereno hacia una meta prometida y venturosa, sino un trance doloroso en que el impulso hacia adelante surge de avasalladoras fuerzas interiores, que obligan a seguir marchando sobre una ruta tan enigmática como ellas mismas.

Orientaciones bibliográficas

1. Estudios y publicaciones sobre América Latina en su conjunto

Jaime Vicens Vives (director): *Historia social y económica de España y América,* Barcelona, 1957 y ss.
José Luis Romero: *Latinoamérica, las ciudades y las ideas,* México, 1976.
Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto: *Dependencia y desarrollo en América Latina,* México, 1976.
Marcello Carmagnani: *Formación y crisis de un sistema feudal (América Latina del siglo XVI a nuestros días),* México, 1976.
Richard M. Morse: *El espejo de Próspero.* México, 1982.
Claudio Véliz: *La tradición centralista en América Latina,* Barcelona, 1984.
Nicolás Sánchez Albornoz: *La población de América Latina desde los tiempos precolombinos al año 2000,* Madrid, 1973.
Tulio Halperin Donghi: *Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850,* Madrid, 1985.
John Lynch: *Las revoluciones hispanoamericanas. 1808-1826,* Barcelona, 1976.
David Bushnell y Neill Macaulay: *El nacimiento de los países latinoamericanos,* Madrid, 1989.
Leslie Bethell (director): *The Cambridge History of Latin America,* vols. III y ss., Cambridge, 1985 y ss.
Carlos Marichal: *Historia de la deuda externa de América Latina,* Madrid, 1988.

C.F S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli: *Historia económica de América Latina,* vol. 11, Barcelona, 1979.

Roberto Cortés Conde: *Hispanoamérica: la apertura al comercio mundial. 1850-1930,* Buenos Aires, 1974.

Roberto Cortés Conde y Stanley S. Stein (directores): *Latin America. A Guide to its Economic History, 1830-1930,* Berkeley, 1977.

D.C.M. Platt: *Latin America and British Trade. 1806-1914,* Londres, 1973.

Gordon Connell-Smith: *Los Estados Unidos y América Latina,* México, 1974

Alain Rouquié: *L'état militaire en Amérique Latine,* París, 1982.

Charles Bergquist: *Labor in Latin America, Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia,* Stanford, 1986.

David Collier (ed): *The New Authoritarianism in Latin America,* Princeton, 1979.

2. Estudios y publicaciones sobre países particulares

Argentina

Ricardo Levene (ed.): *Historia de la Nación Argentina,* Buenos Aires, 1936 y ss.

Vicente D. Sierra (ed.): *Historia de la Argentina,* Buenos Aires, 1956 y ss.

Tulio Halperin Donghi (ed.): *Historia Argentina,* Buenos Aires, 1972 y ss.

José Luis Romero: *Las ideas políticas en Argentina:* México, 1946.

Ricardo M. Ortiz: *Historia económica de la Argentina,* Buenos Aires, 1955.

Guido Di Tella y Manuel Zymelman: *Las etapas del desarrollo económico argentino,* Buenos Aires, 1967.

Gino Germani: *Estructura social de la Argentina,* Buenos Aires, 1955.

Bartolomé Mitre: *Historia de Belgrano y de la independencia argentina,* Buenos Aires, 1887.

Emilio Ravignani: *Historia constitucional de la República Argentina,* Buenos Aires, 1926-27.

Juan Álvarez: *Ensayo sobre las guerras civiles argentinas,* Buenos Aires, 1914.

Miron Burgin: *Aspectos económicos del federalismo argentino,* Buenos Aires,1960.

Julio Irazusta: *Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia*, Buenos Aires, 1941 y ss.
Natalio Botana: *El orden conservador: la política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires, 1975.
Roberto Cortés Conde: *Dinero, deuda y crisis, Evolución fiscal y monetaria en la Argentina, 1862-1890*, Buenos Aires, 1989.
Roberto Cortés Conde: *El progreso argentino, 1880-1914*. Buenos Aires, 1979.
Ezequiel Gallo: *La pampa gringa*, Buenos Aires, 1982.
David Rock: *Politics in Argentina, 1890-1930. The Rise and Fall of Radicalism*, Cambridge, 1975.
Juan E. Corradi: *The Fitful Republic. Economy, Society and Politics in Argentina*, Boulder (Colorado), 1985.

Bolivia

Humberto Vázquez Machicado, José de Mesa y Teresa Gisbert: *Manual de Historia de Bolivia*, La Paz, 1958.
Herbert S. Kiein: *Bolivia. The Evolution of a Multi-ethnic Society*, Nueva York, 1982.
Luis Peñaloza: *Historia económica de Bolivia*, La Paz, 1943-54.
William Lofstrom: *The Promise and Problem of Reform: Attempted Social and Economic Change in the First Years of Bolivian Independence*, Ithaca, 1972.
Antonio Mitre: *Los patriarcas de la plata. Estructura socioeconómica de la minería boliviana en el siglo* XIX, Lima, 1981.
Augusto Céspedes: *El dictador suicida. Cuarenta años de historia de Bolivia*, Santiago de Chile, 1956.
Augusto Céspedes: *El presidente colgado*, La Paz, 1971.

Brasil

Sergio Buarque de Hollanda (ed.): *Historia general da civilizaçao brasileira*, São Paulo, 1960 y ss.
Caio Prado, Jr: *Historia económica do Brasil*, São Paulo, 1945.
Celso Furtado: *Formaçao Economica do Brasil*, Río de Janeiro, 1959.
Raimundo Faoro: Os *donos do poder: Formaçao do patronato politico brasileiro*, 2.ª ed., Porto Alegre, 1975.
Carlos Guilherme Mota: *Nordeste 1817: Estructuras e argumentos*, São Paulo, 1972.

Maria Sylvia de Carvalho Franco: *Homens livres na ordem escravocrata*, São Paulo, 1969.
Emilia Viotti da Costa. *The Brazilian Empire. Myths and Histories*, Chicago, 1985.
Robert J. Conrad: *The Destruction of Brazilian Slavery, 1850-1888*, Berkeley, 1972.
Ralph Della Cava: *Miracle at Joaseiro*, Nueva York, 1970.
Boris Fausto: *A revoluçao de 1930: Historiografia e historia*, São Paulo, 1970.
Thomas E. Skidmore: *Politics in Brazil. 1930-1964: an Experiment in Democracy*, Nueva York, 1967.
Thomas E. Skidmore: *The Politics of Military Rule in Brazil. 1964-1985*, Nueva York, 1988.

Colombia

Academia Colombiana de la Historia: *Historia extensa de Colombia*, Bogotá, 1965 y ss.
Luis E. Nieto Arteta: *Economía y cultura en la historia de Colombia*, 2.ª ed., Bogotá, 1962.
Luis Ospina Vázquez: *Industria y protección en Colombia, 1810-1930*, Medellín, 1965.
Indalecio Liévano Aguirre: *Los grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia*, Bogotá, 1962 y ss.
David Bushnell: *The Santander regime in Gran Colombia*, Wilmington, Delaware, 1954.
Frank Safford: *Aspectos del siglo* XIX *en Colombia*, Medellín, 1977.
Catherine Le Grand: *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1830-1936*, Alburquerque, 1986.
Marco Palacios: *Coffee in Colombia 1850-1970: an Economic Social and Political History*, Cambridge, 1980.
Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umana Lima: *La violencia en Colombia*, Bogotá, 1962-64.

Cuba

Ramiro Guerra y Sánchez (dir.): *Historia de la nación cubana*. La Habana, 1952 y ss.
Louis A. Pérez, Jr.: *Cuba Between Reform and Revolution*, Nueva York, 1988.

Hugh Thomas: *Cuba: La lucha por la libertad,* Barcelona, 1973.
Ramiro Guerra y Sánchez: *Azúcar y población en las Antiilas,* La Habana, 1927.
Fernando Ortiz: *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar,* La Habana, 1940.
Manuel Moreno Fraginals: *El ingenio: El complejo económico-social cubano del azúcar,* 2a. ed., La Habana, 1978.
Raúl Cepero Bonilla: *Azúcar y abolición: Apuntes para una historia critica del abolicionismo,* La Habana, 1947.
Jorge I. Domínguez: *Cuba: Order and Revolution,* Cambridge (Mass.), 1978.
K.S. Karol: *Les guerrilleros au pouvoir,* París, 1970.

Chile

Sergio Villalobos, Osvaldo Silva, Fernando Silva, Patricio Estellé: *Historia de Chile,* Santiago, 1974 y ss.
Aníbal Pinto Santa Cruz: *Chile, un caso de desarrollo frustrado,* Santiago, 1959.
Arnold J. Bauer: *Chilean Rural Society from the Spanish Conquest to* 1930, Cambridge, 1975.
Julio Heise González: *Historia de Chile: el periodo parlamentario,* 1861-1925. Santiago, 1974 y ss.
Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel: *Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930,* Madrid, 1982.
Henry W. Kirsch: *Industrial Development in a Traditional Society. The conflict of Entrepreneurship and Modernization in Chile,* Gainesville, 1977.
Barbara Stallings: *Class Conflict and Economic Development in Chile,* 1958-1973, Stanford, 1978.
Ian Roxborough, Philip O'Brien, Jackie Roddick: *Chile: The State and Revolution,* Londres, 1977.
Alain Touraine: *Vida y muerte del Chile popular,* México, 1974.
Manuel Antonio Garretón: *El proceso político chileno,* Santiago, 1983.

Ecuador

Alfredo Pareja Díez Canseco: *Historia del Ecuador,* Quito, 1968.
Andrés Guerrero: *Los oligarcas del cacao,* Quito, 1980.
Osvaldo Hurtado: *El poder político en el Ecuador,* 2.ª ed., Quito, 1977.

México

Lucas Alamán: *Historia de Méjico,* México, 1849 y ss.
Justo Sierra: *Evolución política del pueblo mexicano,* México, 1940.
Daniel Cossío Villegas: *Historia moderna de México,* México, 1955 y ss.
John Tutino: *From Insurrection to Revolution in México. Social Bases of Agrarian Violence. 1750-1940,* Princeton, 1986.
Charles A. Hale: *El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853,* México, 1972.
Charles A. Hale: *The Transformation of Liberalism in Late XIXth Century México,* Princeton, 1989.
Alan Knight: *The Mexican Revolution,* Cambridge, 1988.
Friedrich Katz: *The Secret War in Mexico. Europe, The United States and the Mexican Revolution,* Chicago, 1981.
Héctor Aguilar Camín: *La frontera nómada: Sonora y la Revolución Mexicana,* México, 1977.
Arnaldo Córdova: *La ideologia de la Revolución Mexicana. La formación de nuevo régimen,* México, 1973.
Enrique Krauze: *Caudillos culturales en la Revolución Mexicana,* México, 1976.
Jean Meyer: *La Cristiada,* México, 1973.
Nora Hamilton: *The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary México,* Princeton, 1982.

Paraguay

Efraín Cardozo: *Breve Historia del Paraguay,* Buenos Aires, 1965.
Julio César Chaves: *El Supremo Dictador,* Madrid, 1964.
Justo Pastor Benítez: *Carlos Antonio López,* Buenos Aires, 1949.
Pelham H. Box: *Los origenes de la guerra de la Triple Alianza,* Buenos Aires-Asunción, 1958.

Perú

Jorge Basadre: *Historia de la República del Perú,* Lima, 1946.
José Carlos Mariátegui: *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,* Lima, 1928.
Heraclio Bonilla: *Guano y burguesía en el Perú,* Lima, 1972.
Florencia E. Mallon: *The Defense of Community in Peru's Central Highlands. Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940,* Princeton, 1983.

Rodrigo Montoya: *Capitalismo y no capitalismo en el Perú. Un estudio histórico de su articulación en un eje regional,* Lima, 1980.
Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram: *Peru 1890-1977. Growth and Policy in an Open Economy,* Nueva York, 1968.
Julio Cotler: *Clases, estado y nación en el Perú,* Lima, 1978.
Francois Bourricaud, *Poder y sociedad en el Perú contemporáneo,* Buenos Aires, 1967.
Alain Hertoque y Alain Labrousse: *Le Sentier lumineux du Pérou. Un nouvel intégrisme dans le tiers monde,* París, 1989.

Uruguay

Juan J. Pivel Devoto y A. R. de Pivel Devoto: *Historia de la República Oriental del Uruguay,* Montevideo, 1945.
Julio C. Rodriguez, Lucía Sala de Touron y Nelson de Torre: *Artigas y su revolución agraria, 1811-1820,* México, 1978.
Carlos Real de Azúa: *El patriciado uruguayo,* Montevideo, 1963.
José Pedro Barrán y Benjamín Nahum: *Historia rural del Uruguay moderno,* Montevideo, 1967 y ss.
Milton Vanger: *José Batlle y Ordóñez,* Buenos Aires, 1968.
José Pedro Barrán y Benjamín Nahum: *Batlle, los estancieros y el imperio británico,* Montevideo, 1979 y ss.

Venezuela

John V. Lombardi: *Venezuela. The Search for Order, The Dream of Progress,* Nueva York, 1982.
Laureano Vallenilla Lanz: *Cesarismo democrático. Estudio sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela,* Caracas, 1919.
Mariano Picón Salas *et al. Venezuela independiente, 1810-1960,* Caracas, 1962.
Fundación John Boulton (ed.): *Política y economía en Venezuela, 1810-1976,* Caracas, 1976.
Germán Carrera Damas: *Boves. Aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia,* 3.ª ed., Caracas, 1972.
Mariano Picón Salas: *Los días de Cipriano Castro. Historia venezolona del 1900,* Caracas, 1958.
José Rafael Pocaterra: *Memorias de un venezolano de la decadencia,* Caracas, 1937.
Rómulo Betancourt: *Venezuela, política y petróleo,* México, 1956.

América Central y Antillas (excepto Cuba)

Héctor Pérez Brignoli: *Breve Historia de Centroamérica,* Madrid, 1985.
Ciro F.S. Cardoso y Hectór Pérez Brignoli: *Centroamérica y la economía occidental. 1520-1930,* San José, 1977.
Víctor Bulmer Thomas: *The Political Economy of Central America since 1920,* Cambridge, 1987.
William O. Scroggs: *Filibusteros y financieros: La historia de William Walker y sus asociados,* Managua, 1974.
Thomas Herrick: *Desarrollo económico y político de Guatemala durante el período de Justo Rufino Barrios (1871-1885),* Guatemala, 1974
David Browning: *El Salvador: La tierra y el hombre,* San Salvador, 1975.
Carolyn Hall: *El café y el desarrollo histórico-geográfico de Costa Rica,* San José, 1976.
Dana G. Munro: *Intervention and Dollar Diplomacy in the Caribbean, 1900-1921,* Princeton, 1964.
Dana G. Munro: *The United States and the Caribbean Republics, 1921-1933,* Princeton, 1974.
Neil Macauley: *The Sandino Affair,* Chicago, 1967.
Thomas Anderson: *El Salvador, 1932,* 2.ª ed., San José, 1982.
Richard Adams (ed.): *Crucifixion by Power: Essays on Guatemalan National Structure, 1944-1966,* Austin, 1970.
Gabriel Aguilera Peralta *et al., Dialéctica del terror en Guatemala,* San José, 1981.
Walter La Feber: *Inevitable Revolutions: the United States and Central American,* Nueva York, 1983.
Frank Moya Pons: *Manuel de la historia dominicana,* Santiago de los Caballeros, 1981.
José Trías Monge: *Historia constitucional de Puerto Rico,* Río Piedras, 1980.
Gordon K. Lewis: *Puerto Rico: Freedom and Power in the Caribbean,* Nueva York, 1963.

Índice